INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Hidalgo .....

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Jalisco .....

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de México .....

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Michoacán de Ocampo .....

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Morelos .....

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá .....

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en los municipios que se indican, para presentar proyectos de inclusión social enfocados a la atención del Flujo Extraordinario de Migrantes (FM) en Tijuana y Mexicali, Baja California, así como en Tapachula, Chiapas; dentro del Programa de Coinversión Social .....

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Aviso por el que se informa al público en general el nuevo domicilio del Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales .....

Aviso de Cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a agropecuarios .....

SECRETARIA DE ECONOMIA

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-420-1-ONNCCE-2016 .....

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-509-ONNCCE-2016 .....

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-521-ONNCCE-2016 .....

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-525-ONNCCE-2016 .....

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-526-ONNCCE-2016 .....

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-528-ONNCCE-2016 .....

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la lluvia torrencial ocurrida el 6 de septiembre de 2016 en el Municipio de Angostura del Estado de Sinaloa .....

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Acuerdo por el que se autorizan y se modifican las distancias ortodrómicas, para el efecto de la aplicación de los artículos 289 y 291 de la Ley Federal de Derechos .....

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración de Correos, ubicado en Av. Lázaro Cárdenas s/n, colonia Centro, C.P. 34956, Municipio de Pueblo Nuevo, Estado de Durango, con superficie de 115.53 metros cuadrados .....

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración de Correos, ubicado en Calle 5 de Mayo No. 9, colonia Centro, C.P. 34330, Municipio de Durango, Estado de Durango, con superficie de 400.00 metros cuadrados .....

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración de Correos Motozintla, ubicado en Cuarta Avenida Sur No. 100, colonia Centro, C.P. 30900, Municipio de Motozintla, Estado de Chiapas, con superficie de 234.00 metros cuadrados .....

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración de Correos Tapachula, ubicado en calle Domicilio Conocido No. 32, colonia Centro, C.P. 21920, Municipio de Tapachula, Estado de Chiapas, con superficie de 874.30 metros cuadrados .....

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración Postal de Zihuatanejo Guerrero, ubicado en Av. de los Carteros número interior 6, colonia Centro, C.P. 40887, Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Estado de Guerrero, con superficie de 170.00 metros cuadrados .....

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-98-88 hectáreas de terrenos de agostadero de uso común, del ejido Santa Ana Tlachiahualpa, Municipio de Temascalapa, Edo. de Méx. .....

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 28-21-21 hectáreas de terrenos de temporal de uso común, del ejido Chametla, Municipio de La Paz, B.C.S. .....

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Infraestructura, Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Estado de Guanajuato .....

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Infraestructura, Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Pénjamo, Estado de Guanajuato .....

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Acuerdo Específico A/178/16 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten .....

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS

Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas .....

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Lineamientos para la solución de controversias entre particulares y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de Medios Alternativos .....

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza .....

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Distrito Federal .....

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa .....

COMISION REGULADORA DE ENERGIA

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide los criterios y la metodología para determinar las visitas de verificación o inspección que deberán llevarse a cabo .....

Acuerdo que expide el Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía .....

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica para la conceptualización, diseño y socialización de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 .....

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la Comisión Temporal de Presupuesto 2017 .....

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la hora de inicio y cierre de publicación de los datos, imágenes y bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Estado de Sinaloa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, aprobado mediante Acuerdo INE/CG328/2016 .....

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a cancelaciones de candidaturas a diputadas y diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México .....

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/137/PEF/152/2015, iniciado con motivo de la vista ordenada en la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG381/2015, por hechos probablemente constitutivos de infracción a la norma electoral, consistentes en la presentación de una queja frívola, por parte del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán .....

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/108/PEF/123/2015, iniciado con motivo de la vista ordenada en la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG108/PEF/2015, por hechos probablemente constitutivos de infracción a la norma electoral, consistentes en la presentación de una queja frívola, por parte del representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral .....

TERCERA SECCION
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 50/2016 y sus acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016 .....

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona disposiciones del similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en relación con las atribuciones de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal .....

Acuerdo General 47/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo en el Estado de Chiapas, así como de la oficina de correspondencia común que les presta servicio .....

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana .....

Tasas de interés interbancarias de equilibrio .....

Circular 13/2016, dirigida a las Instituciones de Crédito que ofrezcan cuentas de depósito de dinero en moneda extranjera a personas morales con residencia en territorio nacional, así como a los participantes en el SPID, relativa a las Modificaciones a las Circulares 3/2016 y 4/2016 (Reformas a SPID) .....

AVISOS

Judiciales y generales .....

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION

CONVENIO de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Hidalgo.

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LIC. ALBERTO BEGNÉ GUERRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN TERRITORIAL, ING. JUAN CARLOS MAURICIO GARZA ZUAZUA, Y EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL, DR. EDUARDO VÁZQUEZ ROSSAINZ; Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ; EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MTRO. SALVADOR ELGUERO MOLINA Y EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo la “CONSTITUCIÓN"), establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los Estados y los municipios, que comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva.

II. El artículo 134 de la “CONSTITUCIÓN", dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación y los Estados, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

III. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad pública tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese mismo sentido, dispone que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

IV. El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia indica que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que en cumplimiento a la primera estrategia "Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia", estrategia que demuestra la importancia de llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, incrementando la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias, y que refiere al tercer objetivo "Mejorar las condiciones de seguridad pública", mismo que atiende a dos estrategias:

1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; en atención a la crisis de inseguridad, al crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas, así como en impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección de derechos humanos, contenido en la primera meta nacional "México en Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y alineados al segundo objetivo, el cual cuenta y promueve seis líneas de acción:

2.4.1. Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social,

2.4.2. Impulsar modelos para la negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos comunitario y escolar,

2.4.3. Promover programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana,

2.4.4. Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención social con la sociedad,

2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas y demandas y

2.4.6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas.

Todas ellas con contenidos preventivos para impulsar la reactivación de las comunidades, para la participación y la apropiación del espacio público, para promover la capacitación en modelos de mediación comunitaria, para impulsar cursos de capacitación en las instituciones educativas y en los centros comunitarios, para promover programas de reconciliación entre policía y sociedad que incidan en la seguridad de las comunidades, a través de capacitación, para fomentar procesos de contraloría social en las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia implementadas en las demarcaciones territoriales y para promover en mesas de trabajo, talleres y reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los que tienen derechos las personas, comunidades y pueblos indígenas; de acuerdo al Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018.

V. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo sucesivo, "Ley de Presupuesto"), establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

VI. Que el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (en lo sucesivo, “PEF 2016”), establece que se destinan $2,015'311,756.00 (Dos mil quince millones trescientos once mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del PRONAPRED, los cuales se conferirán a aquellas entidades federativas que cumplan los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA". Asimismo establece que la distribución de los recursos a las entidades federativas, deben considerar, entre otros criterios, los de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.

El citado artículo 9, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA", habrá de suscribir a más tardar el 31 de marzo de 2016, Convenios de Coordinación y Adhesión con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios.

VII. Con fecha 15 de febrero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito" (en lo sucesivo, "ACUERDO"), cuyo objeto es establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales en el marco del PRONAPRED.

DECLARACIONES

I. Declara "LA SECRETARÍA", a través de su representante que:

I.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90 de “la CONSTITUCIÓN”; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB).

I.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII, XII y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; y formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; así como la de

coadyuvar a la prevención del delito, proponer el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales.

I.3. El Lic. Alberto Berné Guerra, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, se encuentra plenamente facultado para representar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los artículos 1, 2, apartado A, fracción V y 6, fracciones IV, VI, IX y XVII del RISEGOB.

I.4. El Ing. Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua, Director General de Coordinación para la Operación Territorial, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 30, fracciones III, IV, V, VI, VIII, X y XII del RISEGOB.

I.5. El Dr. Eduardo Vázquez Rossainz, Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 28, fracciones II, III, IV y VI del RISEGOB.

I.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en la calle Bucareli número 99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.

II. Declara "LA ENTIDAD", a través de su representante que:

II.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de la “CONSTITUCIÓN”, y 1o. de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es una Entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo y popular.

II.2. En términos de los artículos 3o., 61 y 71 fracción XXXVII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 2o. y 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Lic. José Francisco Olvera Ruiz, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II.3. El Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, acredita la personalidad con que comparece con la Constancia de Mayoría de la Elección, mediante la cual se le declara como Gobernador Constitucional del Estado para el periodo comprendido del 1 de abril del año 2011 al 4 de septiembre del año 2016.

II.4. El Mtro. Salvador Elguero Molina, Secretario de Gobierno, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador del Estado de Hidalgo, de fecha 7 de enero del año 2015, y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con los artículos 13, fracción I y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 13 de Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

II.5. El Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite, Secretario de Finanzas y Administración, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador del Estado de Hidalgo, de fecha 13 de marzo del año 2012, y tiene facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con el artículo 13 fracción II y 25, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo.

II.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en Plaza Juárez s/n, Colonia Centro, Código Postal 42000, Palacio de Gobierno en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.

II.7. Que con fecha 19 de febrero de 2016, la Comisión Estatal a la que hace referencia el artículo 8 del "ACUERDO" aprobó los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único, mismos que junto con los polígonos en los que se pretende ejecutar el PRONAPRED, fueron sometidos a consideración de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de "LA SECRETARÍA".

II.8. Que los recursos del subsidio del "PRONAPRED" no serán duplicados con otros programas o acciones locales en la materia.

III. Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes que:

III.1. De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 9 del "PEF 2016" y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD", por conducto de su Secretaría de Finanzas y Administración, de manera ágil y directa, en el marco del PRONAPRED, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos.

Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión no son regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a "LA ENTIDAD" según lo dispuesto en el artículo 4 del "ACUERDO".

TERCERA.- Monto y destino de los recursos.

I. De conformidad con el "PEF 2016" y el "ACUERDO", "LA ENTIDAD" podrá recibir hasta la cantidad de $28,585,682.49 (veintiocho millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos 49/100 M.N.).

II. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, deberán ser acordes con los objetivos y estrategias siguientes, así como las líneas de acción que de ellas se deriven:

OBJETIVO	ESTRATEGIAS
1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias.	**1.1.** Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en proyectos locales de prevención social de la violencia y la delincuencia.
	1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en las OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana.
	1.3. Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la corresponsabilidad en materia de seguridad.
2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria,	**2.1.** Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres.
	2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la población migrante.
	2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia.
	2.6. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a la población interna en el sistema penitenciario.

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.	**3.1.** Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia.
	3.2. Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana.
	3.3. Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía.
4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.	**4.1.** Promover la formación de capacidades técnicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia en los servidores públicos de municipios/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.
	4.2. Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social.

III. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, podrán aplicarse de manera particular por "LA ENTIDAD", atendiendo a la problemática específica que en ella se presenta y conforme a los términos establecidos en el Anexo Único del presente instrumento.

IV. Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en el " PEF 2016", en el "ACUERDO", así como en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único.

V. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2016 por parte de "LA ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

VI. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas de los recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Único, el cual una vez firmado por "LAS PARTES" formará parte integrante del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

CUARTA.- Transferencia de los recursos.

I. La transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, a la disponibilidad de los mismos, la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas que se desprendan del "PEF 2016", del "ACUERDO", así como del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", deberá establecer una cuenta bancaria productiva específica que permita la identificación de los recursos transferidos y de sus respectivos rendimientos financieros, hasta su total aplicación, previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el "ACUERDO":

II.A. Primera Ministración. A efecto de que sea realizada la primera ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá enviar a "LA SECRETARÍA" a partir del 1 de marzo de 2016, lo siguiente:

II.A.1. El acta de instalación de la "Comisión Estatal".

II.A.2. El acta que contenga la aprobación por parte de la "Comisión Estatal" de los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único;

II.A.3. El documento que compruebe la apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los recursos;

II.A.4. La manifestación expresa de administrar los recursos del apoyo en una cuenta bancaria productiva específica;

II.A.5. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.A.6. Registro Federal de Contribuyentes.

II.A.7. La solicitud de alta a beneficiario original, en el formato que para tal efecto se comunique por parte de “LA SECRETARÍA”.

II.A.8. Copia simple del comprobante de domicilio e identificación oficial del responsable del uso y destino de los recursos.

La primera ministración corresponderá al ochenta por ciento del total asignado a "LA ENTIDAD", será entregada a partir del 1 de marzo de 2016, y asciende a la cantidad de $22,868,545.99 (veintidós millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco pesos 99/100 M.N.).

II.B. Segunda Ministración.

A efecto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá solicitar expresamente a "LA SECRETARÍA" su transferencia, misma que deberá ser solicitada del 15 de junio al 15 de julio de 2016, y se encontrará condicionada a:

II.B.1. Que "LA ENTIDAD" acredite haber comprometido, en términos de la legislación federal aplicable, al menos, el cincuenta por ciento de los recursos correspondientes a la primera ministración.

II.B.2. Que "LA ENTIDAD" remita a "LA SECRETARÍA" los estados de cuenta a que refiere la fracción II, el artículo 10 del "ACUERDO".

II.B.3. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.B.4. Los informes trimestrales del avance físico-financiero y el reporte de contrataciones que se hayan realizado a la fecha en que se realice la solicitud de transferencia.

II.B.5. Que "LA ENTIDAD", actualice y entregue, según sea el caso, los documentos a que se refiere la presente cláusula cuyos datos hubiesen cambiado.

Previo cumplimiento de lo convenido en el presente apartado, la segunda ministración será entregada a "LA ENTIDAD", a partir del 15 de junio de 2016, y corresponderá al veinte por ciento del total asignado, por la cantidad de $5,717,136.50 (cinco millones setecientos diecisiete mil ciento treinta y seis pesos 50/100 M.N.).

QUINTA.- Obligaciones y derechos de "LA ENTIDAD".

I. Son obligaciones de "LA ENTIDAD", además de las señaladas en "PEF 2016", el "ACUERDO" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

I.A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 9 del "PEF 2016", la normativa que en materia presupuestaria, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes de gobierno.

I.B. Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal.

I.C. Reportar a "LA SECRETARÍA" de manera trimestral, lo siguiente:

I.C.1. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.

I.C.2. Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten.

I.C.3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente y;

I.C.4. Remitir "LA SECRETARÍA", toda la información relacionada con la materia que le sea solicitada en los términos, plazos y formatos que al efecto se establezca.

SEXTA.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA".

Además de las señaladas en el "ACUERDO" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, "LA SECRETARÍA" tendrá las obligaciones siguientes:

I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, la oportuna gestión para la transferencia de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. Participar en la "Comisión Estatal".

SÉPTIMA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.

I. "LA ENTIDAD" deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del "ACUERDO".

II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las autoridades competentes de la Federación, de las entidades federativas y demarcaciones territoriales, sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación del Programa. Las entidades federativas fomentarán y facilitarán la constitución de Comités de Contraloría Social, así como la capacitación de los ciudadanos que deseen participar en dichos Comités.

III. La evaluación de los proyectos contenidos en el Anexo Único, se llevará a cabo trimestralmente por parte de "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a partir de la información proporcionada por las entidades federativas respecto del avance físico y financiero en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales otorgados, que se reflejan en la Matriz de Indicadores para Resultados.

IV. El subsidio materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá ser sujeto a evaluaciones externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

OCTAVA.- Comprobación.

I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier otro que corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable.

II. "LA ENTIDAD" se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados, en cumplimiento a lo dispuesto en la "Ley de Presupuesto"; su Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo dispuesto en el “PEF 2016” en el marco del PRONAPRED y demás normatividad aplicable.

De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

NOVENA.- Cierre del ejercicio.

I. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a más tardar 15 días naturales después del cierre del ejercicio, la documentación a que se refiere el artículo 15 del "ACUERDO".

II. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, verificará la consistencia de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva. Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los comprobantes de reintegro correspondientes.

III. "LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior.

DÉCIMA.- Terminación y cancelación del subsidio.

I. En caso de que "LA ENTIDAD" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el "ACUERDO", en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión o su Anexo Único, se iniciará el procedimiento previsto en el Artículo 16 del "ACUERDO".

II. Una vez que "LA SECRETARÍA" determine el incumplimiento de "LA ENTIDAD", la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso de que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus rendimientos financieros sin realizar trámite posterior alguno.

DÉCIMA PRIMERA.- Transparencia.

I. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, divulgará proactivamente y conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo dispuesto por los Lineamientos, así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 9 del "PEF 2016".

II. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA", previo al inicio de las actividades contenida en el Anexo Único, los calendarios que contengan el día, la hora y el lugar (domicilio exacto) en el que serán desarrolladas dichas actividades.

III. "LA ENTIDAD" deberá actualizar oportunamente la información relativa al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Anexo Único, en los medios que para tales efectos determine la Subsecretaría.

IV. Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "LA SECRETARÍA", conforme a lo dispuesto en las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, hará públicas las acciones financiadas con los recursos ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la información que "LA ENTIDAD" entregue.

V. Asimismo, "LA ENTIDAD" se obliga a informar a "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y en el caso de estudios e investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b. El monto;

c. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado contrato o convenio, y

d. Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.

DÉCIMA SEGUNDA.- Fiscalización.

En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, "LA ENTIDAD" deberá brindar las facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que considere necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA TERCERA.- Verificación.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, "LA ENTIDAD" se compromete, cuando así lo solicite "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA CUARTA.- Caso fortuito o fuerza mayor.

"LAS PARTES" convienen que no será imputable a "LA SECRETARÍA" ni a "LA ENTIDAD", cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y se encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

DÉCIMA QUINTA.- Relación laboral.

Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte.

"LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo o judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra parte.

DÉCIMA SEXTA.- Títulos.

Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Medidas complementarias.

"LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA OCTAVA.- Difusión.

"LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial, publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción.

I. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Anexo Único, de conformidad con las leyes federales.

II. En caso de que los conflictos que se llegasen a presentar no puedan ser resueltos de mutuo acuerdo, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido en los artículos 105 de la "CONSTITUCIÓN" y 44 de la Ley de Planeación.

VIGÉSIMA.- Vigencia.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2016.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Publicación.

El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD", de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance jurídico del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, lo firman en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, **Alberto Begné Guerra**.- Rúbrica.- El Director General de Coordinación para la Operación Territorial, **Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, **Eduardo Vázquez Rossainz**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, **José Francisco Olvera Ruiz**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, **Salvador Elguero Molina**.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y Administración, **Aunard Agustín de la Rocha Waite**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Jalisco.

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ALBERTO BEGNÉ GUERRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN TERRITORIAL, ING. JUAN CARLOS MAURICIO GARZA ZUAZUA Y EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL, DR. EDUARDO VÁZQUEZ ROSSAINZ; Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ; EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, C. ROBERTO LÓPEZ LARA; EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, C. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DRA. RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "LA CONSTITUCIÓN"), establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los Estados y los municipios, que comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva.

II. El artículo 134 de "LA CONSTITUCIÓN", dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación y los Estados, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

III. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad pública tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese mismo sentido, dispone que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

IV. El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia indica que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que en cumplimiento a la primera estrategia "Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia", estrategia que demuestra la importancia de llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, incrementando la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias, y que refiere al tercer objetivo "Mejorar las condiciones de seguridad pública", mismo que atiende a dos estrategias:

1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; en atención a la crisis de inseguridad, al crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas, así como en impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección de derechos humanos, contenido en la primera meta nacional "México en Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y alineados al segundo objetivo, el cual cuenta y promueve seis líneas de acción:

2.4.1. Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social,

2.4.2. Impulsar modelos para la negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos comunitario y escolar,

2.4.3. Promover programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana,

2.4.4. Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención social con la sociedad,

2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas y demandas y

2.4.6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas.

Todas ellas con contenidos preventivos para impulsar la reactivación de las comunidades, para la participación y la apropiación del espacio público, para promover la capacitación en modelos de mediación comunitaria, para impulsar cursos de capacitación en las instituciones educativas y en los centros comunitarios, para promover programas de reconciliación entre policía y sociedad que incidan en la seguridad de las comunidades, a través de capacitación, para fomentar procesos de contraloría social en las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia implementadas en las demarcaciones territoriales y para promover en mesas de trabajo, talleres y reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los que tienen derechos las personas, comunidades y pueblos indígenas; de acuerdo al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.

V. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

VI. Que el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (en lo sucesivo, “PEF 2016”), establece que se destinan $2,015'311,756.00 (Dos mil quince millones trescientos once mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del PRONAPRED, los cuales se conferirán a aquellas entidades federativas que cumplan los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA". Asimismo establece que la distribución de los recursos a las entidades federativas, deben considerar, entre otros criterios, los de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.

El citado artículo 9, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA", habrá de suscribir a más tardar el 31 de marzo de 2016, Convenios de Coordinación y Adhesión con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios.

VII. Con fecha 15 de febrero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito" (en lo sucesivo, "Acuerdo"), cuyo objeto es establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales en el marco del PRONAPRED.

DECLARACIONES

I. Declara "LA SECRETARÍA", a través de su representante que:

I.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90 de “LA CONSTITUCIÓN”; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB).

I.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII, XII y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; y formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; así como la de coadyuvar a la prevención del delito, proponer el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales.

I.3. El Lic. Alberto Begné Guerra, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, se encuentra plenamente facultado para representar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los artículos 1, 2, apartado A, fracción V y 6, fracciones IV, VI, IX y XVII del RISEGOB.

I.4. El Ing. Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua, Director General de Coordinación para la Operación Territorial, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 30, fracciones III, IV, V, VI, VIII, X y XII del RISEGOB.

I.5. El Dr. Eduardo Vázquez Rossainz, Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 28, fracciones II, III, IV y VI del RISEGOB.

I.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en la calle Bucareli número 99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.

II. Declara "LA ENTIDAD", a través de su representante que:

II.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de “LA CONSTITUCIÓN”, y 1o. y 2o. de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es una Entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo, laico y popular.

II.2. En términos de los artículos 36, 38 y 50 fracciones XVIII y XIX de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1o., 2o. y 4o. fracciones I, II, III y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; el Gobernador del Estado, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II.3. El ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco, acredita la personalidad con que comparece, con la Constancia de Mayoría de Votos, mediante la cual se le declara como Gobernador del Estado para el periodo comprendido del 1 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018.

II.4. El ciudadano Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con los artículos 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 5 fracción II, 6 fracción I, 8, 11 fracción VI, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

II.5. El ciudadano Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con los artículos 5 fracción II, 6 fracción I, 8, 11 fracción VI, 12, fracción II y 14, fracciones XXXVII y XCI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

II.6. La Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con los artículos 22, fracciones I y IX, y 23 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y 8, fracciones XIII y XX del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

II.7. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en calle Pedro Moreno 281, colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

II.8. Que con fecha 18 de febrero de 2016, la Comisión Estatal a la que hace referencia el artículo 8 del "ACUERDO" aprobó los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único, mismos que junto con los polígonos en los que se pretende ejecutar el PRONAPRED, fueron sometidos a consideración de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de "LA SECRETARÍA".

II.9. Que los recursos del subsidio del "PRONAPRED" no serán duplicados con otros programas o acciones locales en la materia.

III. Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes que:

III.1. De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 9 del "PEF 2016" y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD", por conducto de su Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, de manera ágil y directa, en el marco del PRONAPRED, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos.

Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión no son regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a "LA ENTIDAD" según lo dispuesto en el artículo 4 del "Acuerdo".

TERCERA.- Monto y destino de los recursos.

I. De conformidad con el "PEF 2016" y el "Acuerdo", "LA ENTIDAD" podrá recibir hasta la cantidad de $93,646,935.76 (noventa y tres millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.).

II. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, deberán ser acordes con los objetivos y estrategias siguientes, así como las líneas de acción que de ellas se deriven:

OBJETIVO	ESTRATEGIAS
1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias.	**1.1.** Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en proyectos locales de prevención social de la violencia y la delincuencia.
	1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en las OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana.
	1.3. Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la corresponsabilidad en materia de seguridad.
2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.	**2.1.** Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres.
	2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la población migrante.

	2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia.
	2.6. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a la población interna en el sistema penitenciario.
3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.	**3.1.** Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia.
	3.2. Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana.
	3.3. Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía.
4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.	**4.1.** Promover la formación de capacidades técnicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia en los servidores públicos de municipios/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.
	4.2. Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social.

III. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, podrán aplicarse de manera particular por "LA ENTIDAD", atendiendo a la problemática específica que en ella se presenta y conforme a los términos establecidos en el Anexo Único del presente instrumento.

IV. Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en el “PEF 2016”, en el "Acuerdo", así como en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único.

V. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2016 por parte de "LA ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

VI. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas de los recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Único, el cual una vez firmado por "LAS PARTES" formará parte integrante del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

CUARTA.- Transferencia de los recursos.

I. La transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, a la disponibilidad de los mismos, la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas que se desprendan del “PEF 2016”, del "Acuerdo", así como del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", deberá establecer una cuenta bancaria productiva específica que permita la identificación de los recursos transferidos y de sus respectivos rendimientos financieros, hasta su total aplicación, previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el "Acuerdo":

II.A. Primera Ministración. A efecto de que sea realizada la primera ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá enviar a "LA SECRETARÍA" a partir del 1 de marzo de 2016, lo siguiente:

II.A.1. El acta de instalación de la "Comisión Estatal".

II.A.2. El acta que contenga la aprobación por parte de la "Comisión Estatal" de los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único;

II.A.3. El documento que compruebe la apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los recursos;

II.A.4. La manifestación expresa de administrar los recursos del apoyo en una cuenta bancaria productiva específica;

II.A.5. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.A.6. Registro Federal de Contribuyentes.

II.A.7. La solicitud de alta a beneficiario original, en el formato que para tal efecto se comunique por parte de "LA SECRETARÍA".

II.A.8. Copia simple del comprobante de domicilio e identificación oficial del responsable del uso y destino de los recursos.

La primera ministración corresponderá al ochenta por ciento del total asignado a "LA ENTIDAD", será entregada a partir del 1 de marzo de 2016, y asciende a la cantidad de $74,917,548.61 (setenta y cuatro millones novecientos diecisiete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 61/100 M.N.).

II.B. Segunda Ministración.

A efecto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá solicitar expresamente a "LA SECRETARÍA" su transferencia, misma que deberá ser solicitada del 15 de junio al 15 de julio de 2016, y se encontrará condicionada a:

II.B.1. Que "LA ENTIDAD" acredite haber comprometido, en términos de la legislación federal aplicable, al menos, el cincuenta por ciento de los recursos correspondientes a la primera ministración.

II.B.2. Que "LA ENTIDAD" remita a "LA SECRETARÍA" los estados de cuenta a que refiere la fracción II, el artículo décimo del "Acuerdo".

II.B.3. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.B.4. Los informes trimestrales del avance físico-financiero y el reporte de contrataciones que se hayan realizado a la fecha en que se realice la solicitud de transferencia.

II.B.5. Que "LA ENTIDAD", actualice y entregue, según sea el caso, los documentos a que se refiere la presente cláusula cuyos datos hubiesen cambiado.

Previo cumplimiento de lo convenido en el presente apartado, la segunda ministración será entregada a "LA ENTIDAD", a partir del 15 de junio de 2016, y corresponderá al veinte por ciento del total asignado, por la cantidad de $18,729,387.15 (dieciocho millones setecientos veintinueve mil trescientos ochenta y siete pesos 15/100 M.N.).

QUINTA.- Obligaciones y derechos de "LA ENTIDAD".

I. Son obligaciones de "LA ENTIDAD", además de las señaladas en “PEF 2016”, el "Acuerdo" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

I.A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 9 del “PEF 2016”, la normativa que en materia presupuestaria, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes de gobierno.

I.B. Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal.

I.C. Reportar a "LA SECRETARÍA" de manera trimestral, lo siguiente:

I.C.1. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.

I.C.2. Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten.

I.C.3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente, y

I.C.4. Remitir "LA SECRETARÍA", toda la información relacionada con la materia que le sea solicitada en los términos, plazos y formatos que al efecto se establezca.

SEXTA.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA".

Además de las señaladas en el "Acuerdo" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, "LA SECRETARÍA" tendrá las obligaciones siguientes:

I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, la oportuna gestión para la transferencia de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. Participar en la "Comisión Estatal".

SÉPTIMA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.

I. "LA ENTIDAD" deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del "Acuerdo".

II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las autoridades competentes de la Federación, de las entidades federativas y demarcaciones territoriales, sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación del Programa. Las entidades federativas fomentarán y facilitarán la constitución de Comités de Contraloría Social, así como la capacitación de los ciudadanos que deseen participar en dichos Comités.

III. La evaluación de los proyectos contenidos en el Anexo Único, se llevará a cabo trimestralmente por parte de "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a partir de la información proporcionada por las entidades federativas respecto del avance físico y financiero en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales otorgados, que se reflejan en la Matriz de Indicadores para Resultados.

IV. El subsidio materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá ser sujeto a evaluaciones externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

OCTAVA.- Comprobación.

I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier otro que corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable.

II. "LA ENTIDAD" se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados, en cumplimiento a lo dispuesto en la "Ley de Presupuesto"; su Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 en el marco del PRONAPRED y demás normatividad aplicable.

De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

NOVENA.- Cierre del ejercicio.

I. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a más tardar 15 días naturales después del cierre del ejercicio, la documentación a que se refiere el artículo 15 del "Acuerdo".

II. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, verificará la consistencia de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva. Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los comprobantes de reintegro correspondientes.

III. "LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior.

DÉCIMA.- Terminación y cancelación del subsidio.

I. En caso de que "LA ENTIDAD" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el "Acuerdo", en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión o su Anexo Único, se iniciará el procedimiento previsto en el Artículo 16 del "Acuerdo".

II. Una vez que "LA SECRETARÍA" determine el incumplimiento de "LA ENTIDAD", la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso de que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus rendimientos financieros sin realizar trámite posterior alguno.

DÉCIMA PRIMERA.- Transparencia.

I. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, divulgará proactivamente y conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo dispuesto por los Lineamientos, así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 9, del "PEF 2016".

II. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA", previo al inicio de las actividades contenida en el Anexo Único, los calendarios que contengan el día, la hora y el lugar (domicilio exacto) en el que serán desarrolladas dichas actividades.

III. "LA ENTIDAD" deberá actualizar oportunamente la información relativa al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Anexo Único, en los medios que para tales efectos determine la Subsecretaría.

IV. Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "LA SECRETARÍA", conforme a lo dispuesto en las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, hará públicas las acciones financiadas con los recursos ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la información que "LA ENTIDAD" entregue.

V. Asimismo, "LA ENTIDAD" se obliga a informar a "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y en el caso de estudios e investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b. El monto;

c. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado contrato o convenio, y

d. Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.

DÉCIMA SEGUNDA.- Fiscalización.

En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, "LA ENTIDAD" deberá brindar las facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que considere necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA TERCERA.- Verificación.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, "LA ENTIDAD" se compromete, cuando así lo solicite "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA CUARTA.- Caso fortuito o fuerza mayor.

"LAS PARTES" convienen que no será imputable a "LA SECRETARÍA" ni a "LA ENTIDAD", cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y se encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

DÉCIMA QUINTA.- Relación laboral.

Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte.

"LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo o judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra parte.

DÉCIMA SEXTA.- Títulos.

Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Medidas complementarias.

"LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA OCTAVA.- Difusión.

"LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial, publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción.

I. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Anexo Único, de conformidad con las leyes federales.

II. En caso de que los conflictos que se llegasen a presentar no puedan ser resueltos de mutuo acuerdo, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido en los artículos 105 de “LA CONSTITUCIÓN” y 44 de la Ley de Planeación.

VIGÉSIMA.- Vigencia.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2016.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Publicación.

El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD", de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance jurídico del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, lo firman en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, **Alberto Begné Guerra**.- Rúbrica.- El Director General de Coordinación para la Operación Territorial, **Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, **Eduardo Vázquez Rossainz**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Gobernador del Estado de Jalisco, **Jorge Aristóteles Sandoval Díaz**.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, **Roberto López Lara**.- Rúbrica.- El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, **Héctor Rafael Pérez Partida**.- Rúbrica.- La Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, **Ruth Gabriela Gallardo Vega**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de México.

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LIC. ALBERTO BEGNÉ GUERRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN TERRITORIAL, ING. JUAN CARLOS MAURICIO GARZA ZUAZUA Y EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL, DR. EDUARDO VÁZQUEZ ROSSAINZ; Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS; EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MTRO. JOSÉ SERGIO MANZUR QUIROGA; EL SECRETARIO DE FINANZAS, LIC. JOAQUÍN GUADALUPE CASTILLO TORRES; Y EL TITULAR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LIC. NOÉ MARTÍN VÁZQUEZ PÉREZ; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “LA CONSTITUCIÓN"), establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los Estados y los municipios, que comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva.

II. El artículo 134 de “LA CONSTITUCIÓN", dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación y los Estados, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

III. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad pública tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese mismo sentido, dispone que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

IV. El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia indica que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que en cumplimiento a la primera estrategia "Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia", estrategia que demuestra la importancia de llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, incrementando la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias, y que refiere al tercer objetivo "Mejorar las condiciones de seguridad pública", mismo que atiende a dos estrategias:

1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; en atención a la crisis de inseguridad, al crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas, así como en impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección de derechos humanos, contenido en la primera meta nacional "México en Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y alineados al segundo objetivo, el cual cuenta y promueve seis líneas de acción:

2.4.1. Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social,

2.4.2. Impulsar modelos para la negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos comunitario y escolar,

2.4.3. Promover programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana,

2.4.4. Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención social con la sociedad,

2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas y demandas y

2.4.6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas.

Todas ellas con contenidos preventivos para impulsar la reactivación de las comunidades, para la participación y la apropiación del espacio público, para promover la capacitación en modelos de mediación comunitaria, para impulsar cursos de capacitación en las instituciones educativas y en los centros comunitarios, para promover programas de reconciliación entre policía y sociedad que incidan en la seguridad de las comunidades, a través de capacitación, para fomentar procesos de contraloría social en las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia implementadas en las demarcaciones territoriales y para promover en mesas de trabajo, talleres y reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los que tienen derechos las personas, comunidades y pueblos indígenas; de acuerdo al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.

V. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo sucesivo, "Ley de Presupuesto"), establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

VI. Que el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (en lo sucesivo, “PEF 2016”), establece que se destinan $2,015'311,756.00 (Dos mil quince millones trescientos once mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del PRONAPRED, los cuales se conferirán a aquellas entidades federativas que cumplan los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA". Asimismo establece que la distribución de los recursos a las entidades federativas, deben considerar, entre otros criterios, los de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.

El citado artículo 9, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA", habrá de suscribir a más tardar el 31 de marzo de 2016, Convenios de Coordinación y Adhesión con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios.

VII. Con fecha 15 de febrero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito" (en lo sucesivo, "Acuerdo"), cuyo objeto es establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales en el marco del PRONAPRED.

DECLARACIONES

I. Declara "LA SECRETARÍA", a través de su representante que:

I.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90 de “LA CONSTITUCIÓN"; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB).

I.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII, XII y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; y formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; así como la de coadyuvar a la prevención del delito, proponer el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales.

I.3. El Lic. Alberto Begné Guerra, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, se encuentra plenamente facultado para representar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los artículos 1, 2, Apartado A, fracción V y 6, fracciones IV, VI, IX y XVII del RISEGOB.

I.4. El Ing. Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua, Director General de Coordinación para la Operación Territorial, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 30, fracciones III, IV, V, VI, VIII, X y XII del RISEGOB.

I.5. El Dr. Eduardo Vázquez Rossainz, Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 28, fracciones II, III, IV y VI del RISEGOB.

I.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en la calle Bucareli número 99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.

II. Declara "LA ENTIDAD", a través de su representante que:

II.1. Que con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de "LA CONSTITUCIÓN", y los artículos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es una Entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo y popular.

II.2. En términos de los artículos 65, 77, fracciones II, XXIII, XXVIII, XXXVIII y XLVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Gobernador del Estado, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II.3. El Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, acredita la personalidad con que comparece con la Constancia de Mayoría de la Elección, mediante la cual se le declara como Gobernador Constitucional del Estado.

II.4. El Mtro. José Sergio Manzur Quiroga, Secretario General de Gobierno, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 15, 19 fracción I, 20 y 21 fracciones VIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 2 y 6, fracciones XV, XXXIV y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.

II.5. El Lic. Joaquín Guadalupe Castillo Torres, Secretario de Finanzas, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México y, tiene facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 3, 15, 19 fracción III y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 6, y 7 fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

II.6. El Lic. Noé Martín Vázquez Pérez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México y, tiene facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 10 último párrafo, 59 y 61, fracción X de la Ley de Seguridad del Estado de México.

II.7. Que con fecha 4 de marzo de 2016, la Comisión Estatal a la que hace referencia el artículo 8 del "ACUERDO" aprobó los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único, mismos que junto con los polígonos en los que se pretende ejecutar el PRONAPRED, fueron sometidos a consideración de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de "LA SECRETARÍA".

II.8. Los recursos del subsidio del "PRONAPRED" no serán duplicados con otros programas o acciones locales en la materia.

II.9. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en Av. Lerdo de Tejada poniente número 300, Colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México.

III. Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes que:

III.1. De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 9 del "PEF 2016" y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD", por conducto de su Secretaría de Finanzas, de manera ágil y directa, en el marco del PRONAPRED, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos.

Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión no son regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a "LA ENTIDAD" según lo dispuesto en el artículo 4 del "Acuerdo".

TERCERA.- Monto y destino de los recursos.

I. De conformidad con el “PEF 2016” y el "Acuerdo", "LA ENTIDAD" podrá recibir hasta la cantidad de $139,416,670.64 (ciento treinta y nueve millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos setenta pesos 64/100 M.N.).

II. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, deberán ser acordes con los objetivos y estrategias siguientes, así como las líneas de acción que de ellas se deriven:

OBJETIVO	ESTRATEGIAS
1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias.	**1.1.** Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en proyectos locales de prevención social de la violencia y la delincuencia.
	1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en las OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana.
	1.3. Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la corresponsabilidad en materia de seguridad.
2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria,	**2.1.** Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres.
	2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la población migrante.
	2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia.
	2.6. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a la población interna en el sistema penitenciario.
3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.	**3.1.** Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia.
	3.2. Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana.
	3.3. Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía.
4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.	**4.1.** Promover la formación de capacidades técnicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia en los servidores públicos de municipios/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.
	4.2. Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social.

III. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, podrán aplicarse de manera particular por "LA ENTIDAD", atendiendo a la problemática específica que en ella se presenta y conforme a los términos establecidos en el Anexo Único del presente instrumento.

IV. Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en el "PEF 2016", en el "ACUERDO", así como en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único.

V. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2016 por parte de "LA ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

VI. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas de los recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Único, el cual una vez firmado por "LAS PARTES" formará parte integrante del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

CUARTA.- Transferencia de los recursos.

I. La transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, a la disponibilidad de los mismos, la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas que se desprendan del "PEF 2016", del "ACUERDO", así como del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", deberá establecer una cuenta bancaria productiva específica que permita la identificación de los recursos transferidos y de sus respectivos rendimientos financieros, hasta su total aplicación, previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el "ACUERDO":

II.A. Primera Ministración. A efecto de que sea realizada la primera ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá enviar a "LA SECRETARÍA" a partir del 1 de marzo de 2016, lo siguiente:

II.A.1. El acta de instalación de la "Comisión Estatal".

II.A.2. El acta que contenga la aprobación por parte de la "Comisión Estatal" de los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único;

II.A.3. El documento que compruebe la apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los recursos;

II.A.4. La manifestación expresa de administrar los recursos del apoyo en una cuenta bancaria productiva específica;

II.A.5. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.A.6. Registro Federal de Contribuyentes.

II.A.7. La solicitud de alta a beneficiario original, en el formato que para tal efecto se comunique por parte de "LA SECRETARÍA".

II.A.8. Copia simple del comprobante de domicilio e identificación oficial del responsable del uso y destino de los recursos.

La primera ministración corresponderá al ochenta por ciento del total asignado a "LA ENTIDAD", será entregada a partir del 1 de marzo de 2016, y asciende a la cantidad de $111,533,336.51 (ciento once millones quinientos treinta y tres mil trescientos treinta y seis pesos 51/100 M.N.).

II.B. Segunda Ministración.

A efecto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá solicitar expresamente a "LA SECRETARÍA" su transferencia, misma que deberá ser solicitada del 15 de junio al 15 de julio de 2016, y se encontrará condicionada a:

II.B.1. Que "LA ENTIDAD" acredite haber comprometido, en términos de la legislación federal aplicable, al menos, el cincuenta por ciento de los recursos correspondientes a la primera ministración.

II.B.2. Que "LA ENTIDAD" remita a "LA SECRETARÍA" los estados de cuenta a que refiere la fracción II, del artículo 10 del "Acuerdo".

II.B.3. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.B.4. Los informes trimestrales del avance físico-financiero y el reporte de contrataciones que se hayan realizado a la fecha en que se realice la solicitud de transferencia.

II.B.5. Que "LA ENTIDAD", actualice y entregue, según sea el caso, los documentos a que se refiere la presente cláusula cuyos datos hubiesen cambiado.

Previo cumplimiento de lo convenido en el presente apartado, la segunda ministración será entregada a "LA ENTIDAD", a partir del 15 de junio de 2016, y corresponderá al veinte por ciento del total asignado, por la cantidad de $27,883,334.13 (veintisiete millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos 13/100 M.N.).

QUINTA.- Obligaciones y derechos de "LA ENTIDAD".

I. Son obligaciones de "LA ENTIDAD", además de las señaladas en “PEF 2016”, el "ACUERDO" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

I.A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 9 del “PEF 2016”, la normativa que en materia presupuestaria, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes de gobierno.

I.B. Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal.

I.C. Reportar a "LA SECRETARÍA" de manera trimestral, lo siguiente:

I.C.1. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.

I.C.2. Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten.

I.C.3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente y;

I.C.4. Remitir "LA SECRETARÍA", toda la información relacionada con la materia que le sea solicitada en los términos, plazos y formatos que al efecto se establezca.

SEXTA.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA".

Además de las señaladas en el "ACUERDO" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, "LA SECRETARÍA" tendrá las obligaciones siguientes:

I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, la oportuna gestión para la transferencia de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. Participar en la "Comisión Estatal".

SÉPTIMA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.

I. "LA ENTIDAD" deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del "ACUERDO".

II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las autoridades competentes de la Federación, de las entidades federativas y demarcaciones territoriales, sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación del Programa. Las entidades federativas fomentarán y facilitarán la constitución de Comités de Contraloría Social, así como la capacitación de los ciudadanos que deseen participar en dichos Comités.

III. La evaluación de los proyectos contenidos en el Anexo Único, se llevará a cabo trimestralmente por parte de "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a partir de la información proporcionada por las entidades federativas respecto del avance físico y financiero en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales otorgados, que se reflejan en la Matriz de Indicadores para Resultados.

IV. El subsidio materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá ser sujeto a evaluaciones externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

OCTAVA.- Comprobación.

I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier otro que corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable.

II. "LA ENTIDAD" se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados, en cumplimiento a lo dispuesto en la "Ley de Presupuesto"; su Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo dispuesto en el “PEF 2016” en el marco del PRONAPRED y demás normatividad aplicable.

De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

NOVENA.- Cierre del ejercicio.

I. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a más tardar 15 días naturales después del cierre del ejercicio, la documentación a que se refiere el artículo 15 del "ACUERDO".

II. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, verificará la consistencia de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva. Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los comprobantes de reintegro correspondientes.

III. "LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior.

DÉCIMA.- Terminación y cancelación del subsidio.

I. En caso de que "LA ENTIDAD" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el "Acuerdo", en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión o su Anexo Único, se iniciará el procedimiento previsto en el Artículo 16 del "ACUERDO".

II. Una vez que "LA SECRETARÍA" determine el incumplimiento de "LA ENTIDAD", la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso de que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus rendimientos financieros sin realizar trámite posterior alguno.

DÉCIMA PRIMERA.- Transparencia.

I. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, divulgará proactivamente y conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo dispuesto por los Lineamientos, así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 9 del "PEF 2016".

II. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA", previo al inicio de las actividades contenida en el Anexo Único, los calendarios que contengan el día, la hora y el lugar (domicilio exacto) en el que serán desarrolladas dichas actividades.

III. "LA ENTIDAD" deberá actualizar oportunamente la información relativa al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Anexo Único, en los medios que para tales efectos determine la Subsecretaría.

IV. Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "LA SECRETARÍA", conforme a lo dispuesto en las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, hará públicas las acciones financiadas con los recursos ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la información que "LA ENTIDAD" entregue.

V. Asimismo, "LA ENTIDAD" se obliga a informar a "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y en el caso de estudios e investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b. El monto;

c. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado contrato o convenio, y

d. Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.

DÉCIMA SEGUNDA.- Fiscalización.

En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, "LA ENTIDAD" deberá brindar las facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que considere necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA TERCERA.- Verificación.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, "LA ENTIDAD" se compromete, cuando así lo solicite "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA CUARTA.- Caso fortuito o fuerza mayor.

"LAS PARTES" convienen que no será imputable a "LA SECRETARÍA" ni a "LA ENTIDAD", cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y se encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

DÉCIMA QUINTA.- Relación laboral.

Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte.

"LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo o judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra parte.

DÉCIMA SEXTA.- Títulos.

Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Medidas complementarias.

"LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA OCTAVA.- Difusión.

"LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial, publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción.

I. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Anexo Único, de conformidad con las leyes federales.

II. En caso de que los conflictos que se llegasen a presentar no puedan ser resueltos de mutuo acuerdo, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido en los artículos 105 de “LA CONSTITUCIÓN" y 44 de la Ley de Planeación.

VIGÉSIMA.- Vigencia.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2016.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Publicación.

El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD", de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance jurídico del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, lo firman en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, **Alberto Begné Guerra**.- Rúbrica.- El Director General de Coordinación para la Operación Territorial, **Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, **Eduardo Vázquez Rossainz**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Gobernador Constitucional del Estado de México, **Eruviel Ávila Villegas**.- El Secretario General de Gobierno, **José Sergio Manzur Quiroga**.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, **Joaquín Guadalupe Castillo Torres**.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, **Noé Martín Vázquez Pérez**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Michoacán de Ocampo.

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ALBERTO BEGNÉ GUERRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN TERRITORIAL, ING. JUAN CARLOS MAURICIO GARZA ZUAZUA, Y EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL, DR. EDUARDO VÁZQUEZ ROSSAINZ; Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ING. SILVANO AUREOLES CONEJO; EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS; EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, M. EN D. DOLORES DE LOS ÁNGELES NAZARES JERÓNIMO; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "LA CONSTITUCIÓN"), establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los Estados y los municipios, que comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva.

II. El artículo 134 de "la Constitución", dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación y los Estados, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

III. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad pública tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese mismo sentido, dispone que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

IV. El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia indica que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que en cumplimiento a la primera estrategia "Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia", estrategia que demuestra la importancia de llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, incrementando la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias, y que refiere al tercer objetivo "Mejorar las condiciones de seguridad pública", mismo que atiende a dos estrategias:

1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; en atención a la crisis de inseguridad, al crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas, así como en impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección de derechos humanos, contenido en la primera meta nacional "México en Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y alineados al segundo objetivo, el cual cuenta y promueve seis líneas de acción:

2.4.1. Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social,

2.4.2. Impulsar modelos para la negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos comunitario y escolar,

2.4.3. Promover programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana,

2.4.4. Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención social con la sociedad,

2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas y demandas, y

2.4.6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas.

Todas ellas con contenidos preventivos para impulsar la reactivación de las comunidades, para la participación y la apropiación del espacio público, para promover la capacitación en modelos de mediación comunitaria, para impulsar cursos de capacitación en las instituciones educativas y en los centros comunitarios, para promover programas de reconciliación entre policía y sociedad que incidan en la seguridad de las comunidades, a través de capacitación, para fomentar procesos de contraloría social en las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia implementadas en las demarcaciones territoriales y para promover en mesas de trabajo, talleres y reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los que tienen derechos las personas, comunidades y pueblos indígenas; de acuerdo al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.

V. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

VI. Que el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (en lo sucesivo, “PEF 2016”), establece que se destinan $2,015'311,756.00 (Dos mil quince millones trescientos once mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del PRONAPRED, los cuales se conferirán a aquellas entidades federativas que cumplan los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA". Asimismo establece que la distribución de los recursos a las entidades federativas, deben considerar, entre otros criterios, los de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.

El citado artículo 9, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA", habrá de suscribir a más tardar el 31 de marzo de 2016, Convenios de Coordinación y Adhesión con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios.

VII. Con fecha 15 de febrero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito" (en lo sucesivo, "Acuerdo"), cuyo objeto es establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales en el marco del PRONAPRED.

DECLARACIONES

I. Declara "LA SECRETARÍA", a través de su representante que:

I.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90 de “LA CONSTITUCIÓN”; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB).

I.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII, XII y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; y formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; así como la de coadyuvar a la prevención del delito, proponer el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales.

I.3. El Lic. Alberto Begné Guerra, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, se encuentra plenamente facultado para representar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los artículos 1, 2, apartado A, fracción V y 6, fracciones IV, VI, IX y XVII del RISEGOB.

I.4. El Ing. Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua, Director General de Coordinación para la Operación Territorial, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 30, fracciones III, IV, V, VI, VIII, X y XII del RISEGOB.

I.5. El Dr. Eduardo Vázquez Rossainz, Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 28, fracciones II, III, IV y VI del RISEGOB.

I.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en la calle Bucareli número 99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.

II. Declara "LA ENTIDAD", a través de su representante que:

II.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de “LA CONSTITUCIÓN”, y 11, 13 y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, es una Entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, democrático, laico, representativo y popular.

II.2. En términos de los artículos 47, 60, 62 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 3, 8, y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el Gobernador del Estado, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II.3. El Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, acredita la personalidad con que comparece con la Constancia de Mayoría de la Elección, mediante la cual se le declara como Gobernador Constitucional del Estado para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.

II.4. El Lic. Adrián López Solís, Secretario de Gobierno, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con los artículos 62 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 9, 12, fracción I, 17 fracción I y 18 fracción XLII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

II.5. El Lic. Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y, tiene facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 62 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, y , 9, 12 fracción I, 17 fracción II y 19 fracciones XXI y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

II.6. La M. en D. Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y tiene facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 26 y 28 fracciones XI, XX, XXI, XXII, XXIII, y XXXI de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo.

II.7. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Francisco I. Madero Poniente número 63, en el Centro Histórico, con Código Postal 58000, de Morelia Michoacán.

II.8. Que con fecha 17 de febrero de 2016, la Comisión Estatal a la que hace referencia el artículo 8 del "ACUERDO" aprobó los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único, mismos que junto con los polígonos en los que se pretende ejecutar el PRONAPRED, fueron sometidos a consideración de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de "LA SECRETARÍA".

II.9. Que los recursos del subsidio del "PRONAPRED" no serán duplicados con otros programas o acciones locales en la materia.

III. Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes que:

III.1. De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 9 del "PEF 2016" y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD", por conducto de su Secretaría de Finanzas y Administración, de manera ágil y directa, en el marco del PRONAPRED, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos.

Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión no son regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a "LA ENTIDAD" según lo dispuesto en el artículo 4 del "Acuerdo".

TERCERA.- Monto y destino de los recursos.

I. De conformidad con el "PEF 2016" y el "Acuerdo", "LA ENTIDAD" podrá recibir hasta la cantidad de $86,579,380.57 (ochenta y seis millones quinientos setenta y nueve mil trescientos ochenta pesos 57/100 M.N.).

II. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, deberán ser acordes con los objetivos y estrategias siguientes, así como las líneas de acción que de ellas se deriven:

OBJETIVO	ESTRATEGIAS
1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias.	**1.1.** Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en proyectos locales de prevención social de la violencia y la delincuencia.
	1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en las OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana.
	1.3. Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la corresponsabilidad en materia de seguridad.
2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria,	**2.1.** Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres.
	2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la población migrante.
	2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia.
	2.6. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a la población interna en el sistema penitenciario.
3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.	**3.1.** Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia.
	3.2. Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana.
	3.3. Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía.
4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.	**4.1.** Promover la formación de capacidades técnicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia en los servidores públicos de municipios/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.
	4.2. Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social.

III. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, podrán aplicarse de manera particular por "LA ENTIDAD", atendiendo a la problemática específica que en ella se presenta y conforme a los términos establecidos en el Anexo Único del presente instrumento.

IV. Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en el "PEF 2016", en el "Acuerdo", así como en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único.

V. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2016 por parte de "LA ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

VI. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas de los recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Único, el cual una vez firmado por "LAS PARTES" formará parte integrante del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

CUARTA.- Transferencia de los recursos.

I. La transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, a la disponibilidad de los mismos, la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas que se desprendan del "PEF 2016", del "Acuerdo", así como del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", deberá establecer una cuenta bancaria productiva específica que permita la identificación de los recursos transferidos y de sus respectivos rendimientos financieros, hasta su total aplicación, previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el "Acuerdo":

II.A. Primera Ministración. A efecto de que sea realizada la primera ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá enviar a "LA SECRETARÍA" a partir del 1 de marzo de 2016, lo siguiente:

II.A.1. El acta de instalación de la "Comisión Estatal".

II.A.2. El acta que contenga la aprobación por parte de la "Comisión Estatal" de los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único;

II.A.3. El documento que compruebe la apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los recursos;

II.A.4. La manifestación expresa de administrar los recursos del apoyo en una cuenta bancaria productiva específica;

II.A.5. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.A.6. Registro Federal de Contribuyentes.

II.A.7. La solicitud de alta a beneficiario original, en el formato que para tal efecto se comunique por parte de “LA SECRETARÍA”.

II.A.8. Copia simple del comprobante de domicilio e identificación oficial del responsable del uso y destino de los recursos.

La primera ministración corresponderá al ochenta por ciento del total asignado a "LA ENTIDAD", será entregada a partir del 1 de marzo de 2016, y asciende a la cantidad de $69,263,504.46 (sesenta y nueve millones doscientos sesenta y tres mil quinientos cuatro pesos 46/100 M.N.).

II.B. Segunda Ministración.

A efecto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá solicitar expresamente a "LA SECRETARÍA" su transferencia, misma que deberá ser solicitada del 15 de junio al 15 de julio de 2016, y se encontrará condicionada a:

II.B.1. Que "LA ENTIDAD" acredite haber comprometido, en términos de la legislación federal aplicable, al menos, el cincuenta por ciento de los recursos correspondientes a la primera ministración.

II.B.2. Que "LA ENTIDAD" remita a "LA SECRETARÍA" los estados de cuenta a que refiere la fracción II, el artículo décimo del "Acuerdo".

II.B.3. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.B.4. Los informes trimestrales del avance físico-financiero y el reporte de contrataciones que se hayan realizado a la fecha en que se realice la solicitud de transferencia.

II.B.5. Que "LA ENTIDAD", actualice y entregue, según sea el caso, los documentos a que se refiere la presente cláusula cuyos datos hubiesen cambiado.

Previo cumplimiento de lo convenido en el presente apartado, la segunda ministración será entregada a "LA ENTIDAD", a partir del 15 de junio de 2016, y corresponderá al veinte por ciento del total asignado, por la cantidad de $17,315,876.11 (diecisiete millones trescientos quince mil ochocientos setenta y seis pesos 11/100 M.N.).

QUINTA.- Obligaciones y derechos de "LA ENTIDAD".

I. Son obligaciones de "LA ENTIDAD", además de las señaladas en "PEF 2016", el "Acuerdo" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

I.A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 9 del " PEF 2016", la normativa que en materia presupuestaria, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes de gobierno.

I.B. Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal.

I.C. Reportar a "LA SECRETARÍA" de manera trimestral, lo siguiente:

I.C.1. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.

I.C.2. Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten.

I.C.3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente, y

I.C.4. Remitir "LA SECRETARÍA", toda la información relacionada con la materia que le sea solicitada en los términos, plazos y formatos que al efecto se establezca.

SEXTA.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA".

Además de las señaladas en el "Acuerdo" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, "LA SECRETARÍA" tendrá las obligaciones siguientes:

I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, la oportuna gestión para la transferencia de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. Participar en la "Comisión Estatal".

SÉPTIMA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.

I. "LA ENTIDAD" deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del "Acuerdo".

II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las autoridades competentes de la Federación, de las entidades federativas y demarcaciones territoriales, sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación del Programa. Las entidades federativas fomentarán y facilitarán la constitución de Comités de Contraloría Social, así como la capacitación de los ciudadanos que deseen participar en dichos Comités.

III. La evaluación de los proyectos contenidos en el Anexo Único, se llevará a cabo trimestralmente por parte de "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a partir de la información proporcionada por las entidades federativas respecto del avance físico y financiero en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales otorgados, que se reflejan en la Matriz de Indicadores para Resultados.

IV. El subsidio materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá ser sujeto a evaluaciones externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

OCTAVA.- Comprobación.

I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier otro que corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable.

II. "LA ENTIDAD" se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados, en cumplimiento a lo dispuesto en la "Ley de Presupuesto"; su Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 en el marco del PRONAPRED y demás normatividad aplicable.

De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

NOVENA.- Cierre del ejercicio.

I. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a más tardar 15 días naturales después del cierre del ejercicio, la documentación a que se refiere el artículo 15 del "Acuerdo".

II. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, verificará la consistencia de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva. Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los comprobantes de reintegro correspondientes.

III. "LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior.

DÉCIMA.- Terminación y cancelación del subsidio.

I. En caso de que "LA ENTIDAD" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el "Acuerdo", en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión o su Anexo Único, se iniciará el procedimiento previsto en el Artículo 16 del "Acuerdo".

II. Una vez que "LA SECRETARÍA" determine el incumplimiento de "LA ENTIDAD", la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso de que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus rendimientos financieros sin realizar trámite posterior alguno.

DÉCIMA PRIMERA.- Transparencia.

I. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, divulgará proactivamente y conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo dispuesto por los Lineamientos, así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 9 del "PEF 2016".

II. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA", previo al inicio de las actividades contenida en el Anexo Único, los calendarios que contengan el día, la hora y el lugar (domicilio exacto) en el que serán desarrolladas dichas actividades.

III. "LA ENTIDAD" deberá actualizar oportunamente la información relativa al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Anexo Único, en los medios que para tales efectos determine la Subsecretaría.

IV. Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "LA SECRETARÍA", conforme a lo dispuesto en las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, hará públicas las acciones financiadas con los recursos ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la información que "LA ENTIDAD" entregue.

V. Asimismo, "LA ENTIDAD" se obliga a informar a "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y en el caso de estudios e investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b. El monto;

c. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado contrato o convenio, y

d. Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.

DÉCIMA SEGUNDA.- Fiscalización.

En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, "LA ENTIDAD" deberá brindar las facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que considere necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA TERCERA.- Verificación.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, "LA ENTIDAD" se compromete, cuando así lo solicite "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA CUARTA.- Caso fortuito o fuerza mayor.

"LAS PARTES" convienen que no será imputable a "LA SECRETARÍA" ni a "LA ENTIDAD", cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y se encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

DÉCIMA QUINTA.- Relación laboral.

Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte.

"LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo o judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra parte.

DÉCIMA SEXTA.- Títulos.

Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Medidas complementarias.

"LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA OCTAVA.- Difusión.

"LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial, publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción.

I. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Anexo Único, de conformidad con las leyes federales.

II. En caso de que los conflictos que se llegasen a presentar no puedan ser resueltos de mutuo acuerdo, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido en los artículos 105 de la "Constitución" y 44 de la Ley de Planeación.

VIGÉSIMA.- Vigencia.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2016.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Publicación.

El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD", de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance jurídico del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, lo firman en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, **Alberto Begné Guerra**.- Rúbrica.- El Director General de Coordinación para la Operación Territorial, **Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, **Eduardo Vázquez Rossainz**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, **Silvano Aureoles Conejo**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, **Adrián López Solís**.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y Administración, **Carlos Maldonado Mendoza**.- Rúbrica.- La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, **Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Morelos.

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LIC. ALBERTO BEGNÉ GUERRA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN TERRITORIAL, ING. JUAN CARLOS MAURICIO GARZA ZUAZUA Y EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL, DR. EDUARDO VÁZQUEZ ROSSAINZ; Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU; EL SECRETARIO DE GOBIERNO, C. MATÍAS QUIROZ MEDINA; Y LA SECRETARIA DE HACIENDA, C. ADRIANA FLORES GARZA; A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "la CONSTITUCIÓN"), establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los Estados y los municipios, que comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva.

II. El artículo 134 de "la CONSTITUCIÓN", dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación y los Estados, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

III. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad pública tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese mismo sentido, dispone que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

IV. El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia indica que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los siguientes principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que en cumplimiento a la primera estrategia "Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia", estrategia que demuestra la importancia de llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, incrementando la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias, y que refiere al tercer objetivo "Mejorar las condiciones de seguridad pública", mismo que atiende a dos estrategias:

1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; en atención a la crisis de inseguridad, al crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas, así como en impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección de derechos humanos, contenido en la primera meta nacional "México en Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y alineados al segundo objetivo, el cual cuenta y promueve seis líneas de acción:

2.4.1. Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social,

2.4.2. Impulsar modelos para la negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos comunitario y escolar,

2.4.3. Promover programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana,

2.4.4. Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención social con la sociedad,

2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas y demandas, y

2.4.6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas.

Todas ellas con contenidos preventivos para impulsar la reactivación de las comunidades, para la participación y la apropiación del espacio público, para promover la capacitación en modelos de mediación comunitaria, para impulsar cursos de capacitación en las instituciones educativas y en los centros comunitarios, para promover programas de reconciliación entre policía y sociedad que incidan en la seguridad de las comunidades, a través de capacitación, para fomentar procesos de contraloría social en las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia implementadas en las demarcaciones territoriales y para promover en mesas de trabajo, talleres y reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los que tienen derechos las personas, comunidades y pueblos indígenas; de acuerdo al Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018.

V. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo sucesivo, "LEY DE PRESUPUESTO"), establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

VI. El artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (en lo sucesivo "PEF 2016"), establece que se destinan $2,015'311,756.00 (Dos mil quince millones trescientos once mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del PRONAPRED, los cuales se conferirán a aquellas entidades federativas que cumplan los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA". Asimismo establece que la distribución de los recursos a las entidades federativas, deben considerar, entre otros criterios, los de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.

El citado artículo 9, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA", habrá de suscribir a más tardar el 31 de marzo de 2016, Convenios de Coordinación y Adhesión con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios.

VII. Con fecha 15 de febrero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito" (en lo sucesivo, "ACUERDO"), cuyo objeto es establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales en el marco del PRONAPRED.

DECLARACIONES

I. Declara "LA SECRETARÍA", a través de su representante que:

I.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90 de la "CONSTITUCIÓN"; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB).

I.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII, XII y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; y formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; así como la de coadyuvar a la prevención del delito, proponer el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales.

I.3. El Lic. Alberto Begné Guerra, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, se encuentra plenamente facultado para representar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los artículos 1, 2, Apartado A, fracción V y 6, fracciones IV, VI, IX y XVII del RISEGOB.

I.4. El Ing. Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua, Director General de Coordinación para la Operación Territorial, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; y 30, fracciones III, IV, V, VI, VIII, X y XII del RISEGOB.

I.5. El Dr. Eduardo Vázquez Rossainz, Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los artículos 9, fracciones III, V y XVI; y 28, fracciones II, III, IV y VI del RISEGOB.

I.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en la calle Bucareli número 99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.

II. Declara "LA ENTIDAD", a través de su representante que:

II.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de "la CONSTITUCIÓN", y 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es una Entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo y popular.

II.2. En términos de los artículos 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 5, 9 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; el Gobernador Constitucional del Estado, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II.3. El ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, acredita la personalidad con que comparece, con la Constancia de Mayoría, mediante la cual se le declara como Gobernador del Estado para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre del 2018.

II.4. El ciudadano Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con los artículos 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 11 fracción II, 13 fracción VI y VII, 14 y 21 fracción XII y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 11 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

II.5. La ciudadana Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 11 fracción III, 13 fracción VI y VII, 14 y 22 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 9 y 10 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.

II.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su domicilio el ubicado en "Plaza de Armas" sin número, Colonia Centro en el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, C.P. 62000.

II.7. Con fecha 19 de febrero de 2016, la Comisión Estatal a la que hace referencia el artículo 8 del "ACUERDO" aprobó los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único, mismos que junto con los polígonos en los que se pretende ejecutar el PRONAPRED, fueron sometidos a consideración de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de "LA SECRETARÍA".

II.8. Los recursos del subsidio del "PRONAPRED" no serán duplicados con otros programas o acciones locales en la materia.

III. Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes que:

III.1. De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 9 del "PEF 2016" y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD", por conducto de su Secretaría de Hacienda, de manera ágil y directa, en el marco del PRONAPRED, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos.

Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión no son regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a "LA ENTIDAD" según lo dispuesto en el artículo 4 del "ACUERDO".

TERCERA.- Monto y destino de los recursos.

I. De conformidad con el "PEF 2016" y el "ACUERDO", "LA ENTIDAD" podrá recibir hasta la cantidad de $63'428,348.16 (Sesenta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 16/100 M.N.).

II. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, deberán ser acordes con los objetivos y estrategias siguientes, así como las líneas de acción que de ellas se deriven:

OBJETIVO	ESTRATEGIAS
1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias.	**1.1.** Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en proyectos locales de prevención social de la violencia y la delincuencia.
	1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en las OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana.
	1.3. Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la corresponsabilidad en materia de seguridad.
2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria,	**2.1.** Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia.
	2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres.
	2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la población migrante.
	2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia.
	2.6. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a la población interna en el sistema penitenciario.
3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.	**3.1.** Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia.
	3.2. Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana.
	3.3. Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía.
4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.	**4.1.** Promover la formación de capacidades técnicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia en los servidores públicos de municipios/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.
	4.2. Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social.

III. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, podrán aplicarse de manera particular por "LA ENTIDAD", atendiendo a la problemática específica que en ella se presenta y conforme a los términos establecidos en el Anexo Único del presente instrumento.

IV. Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en el “PEF 2016”, en el "ACUERDO", así como en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único.

V. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2016 por parte de "LA ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

VI. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas de los recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Único, el cual una vez firmado por "LAS PARTES" formará parte integrante del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

CUARTA.- Transferencia de los recursos.

I. La transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, a la disponibilidad de los mismos, la calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas que se desprendan del "PEF 2016", del "ACUERDO", así como del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", deberá establecer una cuenta bancaria productiva específica que permita la identificación de los recursos transferidos y de sus respectivos rendimientos financieros, hasta su total aplicación, previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el "ACUERDO":

II.A. Primera Ministración. A efecto de que sea realizada la primera ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá enviar a "LA SECRETARÍA" a partir del 1 de marzo de 2016, lo siguiente:

II.A.1. El acta de instalación de la "Comisión Estatal".

II.A.2. El acta que contenga la aprobación por parte de la "Comisión Estatal" de los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único;

II.A.3. El documento que compruebe la apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los recursos;

II.A.4. La manifestación expresa de administrar los recursos del apoyo en una cuenta bancaria productiva específica;

II.A.5. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.A.6. Registro Federal de Contribuyentes.

II.A.7. La solicitud de alta a beneficiario original en el formato que para tal efecto se comunique por parte de "LA SECRETARÍA".

II.A.8. Copia simple del comprobante de domicilio e identificación oficial del responsable del uso y destino de los recursos.

La primera ministración corresponderá al ochenta por ciento del total asignado a "LA ENTIDAD", será entregada a partir del 1 de marzo de 2016, y asciende a la cantidad de $50'742,678.53 (Cincuenta Millones setecientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 53/100 M.N.).

II.B. Segunda Ministración.

A efecto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá solicitar expresamente a "LA SECRETARÍA" su transferencia, misma que deberá ser solicitada del 15 de junio al 15 de julio de 2016, y se encontrará condicionada a:

II.B.1. Que "LA ENTIDAD" acredite haber comprometido, en términos de la legislación federal aplicable, al menos, el cincuenta por ciento de los recursos correspondientes a la primera ministración.

II.B.2. Que "LA ENTIDAD" remita a "LA SECRETARÍA" los estados de cuenta a que refiere la fracción II, el artículo 10 del "ACUERDO".

II.B.3 El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable.

II.B.4 Los informes trimestrales del avance físico-financiero y el reporte de contrataciones que se hayan realizado a la fecha en que se realice la solicitud de transferencia.

II.B.5. Que "LA ENTIDAD", actualice y entregue, según sea el caso, los documentos a que se refiere la presente cláusula cuyos datos hubiesen cambiado.

Previo cumplimiento de lo convenido en el presente apartado, la segunda ministración será entregada a "LA ENTIDAD", a partir del 15 de junio de 2016, y corresponderá al veinte por ciento del total asignado, por la cantidad de $12'685,669.63 (Doce millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 63/100 M.N.).

QUINTA.- Obligaciones y derechos de "LA ENTIDAD".

I. Son obligaciones de "LA ENTIDAD", además de las señaladas en “PEF 2016”, el "ACUERDO" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

I.A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 9 del “PEF 2016”, la normativa que en materia presupuestaria, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes de gobierno.

I.B. Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal.

I.C. Reportar a "LA SECRETARÍA" de manera trimestral, lo siguiente:

I.C.1. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.

I.C.2. Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten.

I.C.3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente, y

I.C.4. Remitir "LA SECRETARÍA", toda la información relacionada con la materia que le sea solicitada en los términos, plazos y formatos que al efecto se establezca.

SEXTA.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA".

Además de las señaladas en el "ACUERDO" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, "LA SECRETARÍA" tendrá las obligaciones siguientes:

I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, la oportuna gestión para la transferencia de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

II. Participar, en la "Comisión Estatal".

SÉPTIMA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.

I. "LA ENTIDAD" deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del "ACUERDO".

II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las autoridades competentes de la Federación, de las entidades federativas y demarcaciones territoriales, sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación del Programa. Las entidades federativas fomentarán y facilitarán la constitución de Comités de Contraloría Social, así como la capacitación de los ciudadanos que deseen participar en dichos Comités.

III. La evaluación de los proyectos contenidos en el Anexo Único, se llevará a cabo trimestralmente por parte de "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a partir de la información proporcionada por las entidades federativas respecto del avance físico y financiero en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales otorgados, que se reflejan en la Matriz de Indicadores para Resultados.

IV. El subsidio materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá ser sujeto a evaluaciones externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

OCTAVA.- Comprobación.

I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier otro que corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable.

II. "LA ENTIDAD" se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados, en cumplimiento a lo dispuesto en la "LEY DE PRESUPUESTO"; su Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo dispuesto en el “PEF 2016” en el marco del PRONAPRED y demás normatividad aplicable.

De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

NOVENA.- Cierre del ejercicio.

I. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a más tardar 15 días naturales después del cierre del ejercicio, la documentación a que se refiere el artículo 15 del "ACUERDO".

II. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, verificará la consistencia de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva. Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los comprobantes de reintegro correspondientes.

III. "LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior.

DÉCIMA.- Terminación y cancelación del subsidio.

I. En caso de que "LA ENTIDAD" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el "Acuerdo", en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión o su Anexo Único, se iniciará el procedimiento previsto en el Artículo 16 del "ACUERDO".

II. Una vez que "LA SECRETARÍA" determine el incumplimiento de "LA ENTIDAD", la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso de que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus rendimientos financieros sin realizar trámite posterior alguno.

DÉCIMA PRIMERA.- Transparencia.

I. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, divulgará proactivamente y conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo dispuesto por los Lineamientos, así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 9, del "PEF 2016".

II. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA", previo al inicio de las actividades contenida en el Anexo Único, los calendarios que contengan el día, la hora y el lugar (domicilio exacto) en el que serán desarrolladas dichas actividades.

III. "LA ENTIDAD" deberá actualizar oportunamente la información relativa al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Anexo Único, en los medios que para tales efectos determine la Subsecretaría.

IV. Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "LA SECRETARÍA", conforme a lo dispuesto en las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, hará públicas las acciones financiadas con los recursos ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la información que "LA ENTIDAD" entregue.

V. Asimismo, "LA ENTIDAD" se obliga a informar a "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y en el caso de estudios e investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b. El monto;

c. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado contrato o convenio, y

d. Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.

DÉCIMA SEGUNDA.- Fiscalización.

En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, "LA ENTIDAD" deberá brindar las facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que considere necesarias; atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA TERCERA.- Verificación.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, "LA ENTIDAD" se compromete, cuando así lo solicite "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA CUARTA.- Caso fortuito o fuerza mayor.

"LAS PARTES" convienen que no será imputable a "LA SECRETARÍA" ni a "LA ENTIDAD", cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y se encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

DÉCIMA QUINTA.- Relación laboral.

Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a responder de las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte.

"LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo o judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra parte.

DÉCIMA SEXTA.- Títulos.

Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Medidas complementarias.

"LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

DÉCIMA OCTAVA.- Difusión.

"LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial, publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción.

I. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Anexo Único, de conformidad con las leyes federales.

II. En caso de que los conflictos que se llegasen a presentar no puedan ser resueltos de mutuo acuerdo, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido en los artículos 105 de “la CONSTITUCIÓN" y 44 de la Ley de Planeación.

VIGÉSIMA.- Vigencia.

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2016.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Publicación.

El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD", de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance jurídico del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, lo firman en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, **Alberto Begné Guerra**.- Rúbrica.- El Director General de Coordinación para la Operación Territorial, **Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, **Eduardo Vázquez Rossainz**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, **Graco Luis Ramírez Garrido Abreu**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, **Matías Quiroz Medina**.- Rúbrica.- La Secretaria de Hacienda, **Adriana Flores Garza**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

ACUERDO por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 2, 3, 5, 6, fracción II, 11, 33, 40 y 41, fracción I, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y

CONSIDERANDO

Que es propósito del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reconocer al Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá, por su destacada contribución y particular interés en estrechar las buenas relaciones entre México y Panamá;

Que desde el inicio de su gestión, en julio de 2014, el Presidente Varela Rodríguez ha demostrado ser un aliado de México y ha participado en todos los foros regionales e internacionales auspiciados por nuestro país, lo que ha permitido avanzar en la profundización de la relación bilateral que se ha caracterizado por el diálogo permanente al más alto nivel;

Que la participación del Presidente Varela Rodríguez en la XXIV Cumbre Iberoamericana realizada en Veracruz, en diciembre de 2014, así como en la 10ª edición del Foro Económico Mundial de América Latina en la Riviera Maya, en mayo de 2015, contribuyeron a afianzar las coincidencias y estrechar los lazos de cooperación con la República de Panamá en los ámbitos político, económico, comercial, turístico y cultural;

Que bajo el liderazgo del Presidente Varela Rodríguez, Panamá se ha consolidado como un socio estratégico para México, siendo el 4° socio comercial en Centroamérica y el 2° destino de nuestras exportaciones en esa misma región. De la misma manera, ese país es el primer inversionista de Centroamérica en México, con un monto acumulado de 1,048.2 millones de dólares de 1999 a marzo de 2016;

Que el Presidente Valera Rodríguez ha impulsado de manera decisiva las relaciones de amistad y cooperación con México, a través de la actualización de su marco jurídico institucional, tal es el caso de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Panamá, el 1º de julio de 2015, que permitirá intensificar los flujos comerciales, propiciar mejores condiciones para la inversión y proteger con mayor eficacia los derechos de propiedad en ambos países; así como el establecimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad el 25 de noviembre de 2015;

Que el Gobierno del Presidente Varela Rodríguez ha promovido las relaciones comerciales y culturales entre México y Panamá, muestra fehaciente de ello fue su impulso a una misión comercial al estado de Puebla, del 21 al 23 de agosto de 2015. Además, cabe destacar que Panamá fue el primer país de Centroamérica en aceptar la invitación para participar como invitado de honor en la Feria Internacional del Libro 2016, a realizarse en Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 2016;

Que el artículo 40 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles establece que la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgará, principalmente, durante las visitas de Estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional, cuando se acuerden intercambios de condecoraciones entre los jefes de Estado, jefes de Gobierno o Primeros Ministros;

Que el Gobierno panameño manifestó su interés y buena voluntad para realizar un intercambio de condecoraciones en el marco de la visita oficial que el Presidente Varela Rodríguez realizará a nuestro país los días 13 y 14 de noviembre del presente y, en ese sentido, el artículo 40 de la citada Ley, contempla la celebración de este tipo de actos en estricto apego a la práctica diplomática y la costumbre internacional, por lo que ambas partes convinieron llevar a cabo dicho intercambio entre los Jefes de Estado;

Que de acuerdo con la Ley, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga a extranjeros, con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad, y para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos, y

Que conforme a los procedimientos establecidos en la Ley mencionada, el Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca me ha propuesto otorgar al Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá, la citada Condecoración, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Condecoración será entregada en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil dieciséis.- **Enrique Peña Nieto**.- Rúbrica.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, **Claudia Ruiz Massieu Salinas**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en los municipios que se indican, para presentar proyectos de inclusión social enfocados a la atención del Flujo Extraordinario de Migrantes (FM) en Tijuana y Mexicali, Baja California, así como en Tapachula, Chiapas; dentro del Programa de Coinversión Social.

CONVOCATORIA DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) CON DOMICILIO FISCAL EN LOS MUNICIPIOS QUE SE INDICAN, PARA PRESENTAR PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL ENFOCADOS A LA ATENCIÓN DEL FLUJO EXTRAORDINARIO DE MIGRANTES (FM) EN TIJUANA Y MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO EN TAPACHULA, CHIAPAS; DENTRO DEL PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por conducto del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y en los numerales 3.3, 3.4, 3.5.1, 3.5.2.1 y 4.2.1, de las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1o. que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece y queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Que en el artículo 11 de la Carta Magna, se establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Que en el artículo 25 de la Constitución General de la República, prevé que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad se encuentra protegida en la supremacía constitucional.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como meta nacional la de “México con Responsabilidad Global” en la consolidación de una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad, con el compromiso del respeto a la movilidad segura de las personas. Como objetivo se plantea, “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, con ello se busca, garantizar en el territorio nacional los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria, a través de diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad y adultos mayores.

Que la política migratoria nacional, parte de una perspectiva integral de Estado, de la cual el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM) es el eje articulador de las voluntades públicas y las iniciativas compartidas. Esta visión integral reconoce la función decisiva y generosa de la sociedad civil como un sector de servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad. Su intervención seguirá siendo fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de gobierno que implementan la política migratoria.

Que el Gobierno de la República asume la postura de corresponsabilidad regional hacia el interior, incluyendo la participación de la sociedad civil, el sector privado, la academia y los expertos, así como de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes. Se debe garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, seguridad personal, tránsito, y en su caso, deportación y retorno asistido de extranjeros a su territorio. La movilidad nacional e internacional de personas forma parte de los derechos humanos fundamentales; lo cual se liga a la obligación gubernamental de procurar que transcurra de manera voluntaria, ordenada, documentada y segura.

Que desde hace más de tres décadas, se le considera a México como "territorio de paso" para diversos flujos migratorios que buscan entrar de manera irregular a Estados Unidos; por la propia naturaleza de este fenómeno, es imposible contabilizar el número real de personas que atraviesan anualmente el país. No obstante, se destaca que en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha otorgado 13,606 oficios de salida a africanos y haitianos durante el presente ejercicio fiscal, para tránsito temporal por el territorio nacional durante 20 días, con el fin de que puedan acudir a solicitar asilo en las garitas (San Ysidro) que unen a E.U.A. (San Diego, California) con México (Tijuana, Baja California).

Que en las últimas semanas se ha presentado en Tijuana y Mexicali, Baja California, un flujo extraordinario de migrantes provenientes de Haití, Asia, así como del centro y sur de África, con la intención de llegar a los Estados Unidos de América (E.U.A.) a solicitar la condición de refugiado. Las razones en las que se basa el flujo extraordinario en comento, es la crisis económica que predomina en Brasil, Ecuador y Venezuela, donde residían los hoy migrantes, sin soslayar las particularidades críticas de Haití tras el sismo de 2010 y el reciente Huracán Matthew. En la frontera norte (Tijuana y Mexicali) se estima la llegada diaria 300 personas con calidad de migrantes, con independencia de un aproximado de 8 mil 500 personas que data su arribo de mayo del presente año a la fecha.

Que se espera el arribo masivo de migrantes en la frontera norte, ya que se estima que en Colombia se encuentran 50 000 (africanos, haitianos y cubanos) personas en tránsito que arribarán en los próximos meses a México; Panamá y Costa Rica registran la presencia alrededor de 6 500 individuos; y Guyana ha facilitado el ingreso de 7 000 haitianos.

Que el artículo 2 de la Ley de Migración, señala como uno de los principios en que debe sustentarse la política migratoria del Estado Mexicano, a la hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana, los tratados y el derecho internacional. Adicionalmente, el artículo 3 fracción XVII, de esta Ley, define como migrante "al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación".

Que el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean la consecución de un conjunto de metas vinculadas con la adopción de una nueva agenda de desarrollo, cimentada en la colaboración entre distintos actores sociales y políticos, aprovechar el impulso generado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y continuar con un ambicioso programa de desarrollo para después de 2015.

Que plantean, entre otros, los siguientes objetivos: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; reducir la desigualdad en y entre los países, así como promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, así como facilitar el acceso a la justicia para todos.

Que el 4 de octubre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares a la Secretaría de Desarrollo Social, derivado del flujo extraordinario de migrantes, a fin de que en coordinación con las autoridades estatales y municipales, se brinden apoyos necesarios y suficientes a albergues que atienden a africanos y haitianos arribados a Tijuana y Mexicali, Baja California; y de igual manera se habiliten lugares de alimentación, aseo y atención médica-sicológica, con focalización a este grupo poblacional.

Que la totalidad de las actividades realizadas por los Actores Sociales, a través de proyectos presentados en esta convocatoria, quedan sujetas a lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; de manera particular y en caso de presentarse alguna infracción se atenderá a lo establecido en el artículo 30 de la ley referida, así como en el artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social.

Que la Ley General de Desarrollo Social, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; así como determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; de igual manera en esta Ley se establecen los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, la cual se sujeta a los principios de justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social y respeto a la diversidad.

Que el Instituto Nacional de Desarrollo Social, conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, le corresponde fomentar la participación de las organizaciones sociales vinculadas por la naturaleza de su objeto social a los programas y tareas de desarrollo social y del bienestar común, en los programas de desarrollo social, y apoyar y consolidar su capacidad de gestión y respuesta, a través del diseño de acciones y estrategias coordinadas entre la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas; y municipios, especialmente en las regiones, zonas, municipios y comunidades del país con mayores rezagos y menor crecimiento, que requieran atención inmediata o prioritaria. En la misma tesitura tiene la atribución de promover acciones de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil con dependencias y entidades federales, con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, instituciones educativas, públicas y privadas, en materia de desarrollo social y bienestar común.

Que el objetivo general del Programa de Coinversión Social (PCS), es contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento y vinculación de los Actores Sociales, por lo que con base en las anteriores consideraciones se emite la siguiente:

CONVOCATORIA

INCLUSIÓN SOCIAL PARA ATENCIÓN DEL FLUJO EXTRAORDINARIO DE MIGRANTES (FM)

Dirigida a organizaciones de la sociedad civil (OSC), con domicilio fiscal en los municipios que se indican, para la presentación de proyectos con incidencia en Tijuana y Mexicali, Baja California; así como Tapachula, Chiapas, y podrán participar:

- Asociaciones que atento a su objeto social y en correlación a sus actividades tengan el carácter de “albergue temporal”, “casa hogar”, “centro de apoyo” y/o “refugio” cuya población objetivo sean personas migrantes nacionales y provenientes de otros países.
- Asociaciones que derivado del “flujo extraordinario de migrantes”, atiendan a personas en tránsito migratorio, o a menores, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de migración nacionales y provenientes de otros países.
- Organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social se encuadre en la fracción XVI del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; que se coordinen de manera complementaria con otras asociaciones que incidan de manera directa en acciones de asistencia humanitaria favor de personas en situación de migración nacionales y provenientes de otros países.

I. Objetivos

General

Apoyar en el desarrollo de la estrategia de asistencia humanitaria, a través de proyectos y acciones de inclusión social, con enfoque de derechos humanos, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas en tránsito migratorio, que inciden en el “flujo extraordinario de migrantes” en la frontera norte y sur del país, que se encuentran asistidas en albergues temporales, casa hogar y/o refugios con residencia en los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California, así como en Tapachula, Chiapas, a fin de mejorar la calidad de vida en los centros de apoyo en mención.

Específicos

1. Mejorar las condiciones de calidad de vida y disfrute efectivo de los derechos humanos, de las personas en tránsito migratorio, asistidos en albergues temporales, casa hogar, centros de apoyo y/o refugios, con el objeto de que se habiliten dormitorios, se brinden alimentos con calidad y se acondicionen lugares para la elaboración de los mismos, se ofrezcan servicios de higiene y sanidad, y atención humanitaria integral (médica-sicológica) a personas migrantes nacionales y provenientes de otros países.

II. Características de los proyectos

II.1. Los proyectos que se presenten deberán enmarcarse en las siguientes vertientes, descritas en el numeral 3.5.1 de las Reglas de Operación del PCS.

- Promoción del Desarrollo Humano y Social: Proyectos que contribuyan al logro de acciones que mejoren las condiciones de vida de la población en situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, marginación o discriminación y fomenten el desarrollo comunitario y el capital social.
- Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización: Proyectos dirigidos al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, habilidades y metodologías de organización y gestión de los Actores Sociales, así como el equipamiento y mejoramiento de infraestructura. Incluye la promoción de la participación ciudadana en las políticas públicas, los procesos de articulación con los tres órdenes de gobierno y la generación de sinergias para un mayor impacto social.

II.2. Los proyectos deberán orientarse a la siguiente temática en función de los objetivos propios de la convocatoria:

Temática derivada del Objetivo Específico 1. Mejorar la calidad de vida y disfrute efectivo de los derechos humanos, de las personas en tránsito migratorio nacionales y provenientes de otros países, que por sus condiciones físicas, mentales, de género, jurídicas o sociales requieren servicios de asistencia de calidad, oportuna y expedita, a efecto de satisfacer necesidades humanas de hospedaje, básicas de alimentación, de higiene y sanidad, así como atención humanitaria integral (médica-sicológica), en cumplimiento al principio de hospitalidad y solidaridad nacional e internacional.

1.1 Brindar asistencia a personas migrantes nacionales y provenientes de otros países, alojados en albergues temporales, casa hogar, centros de atención y/o refugios, mediante apoyos en especie de hospedaje, alimentación, servicios de higiene y sanidad, así como atención humanitaria integral (médica-sicológica).

1.2 Habilitar a organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social se encuadre en la fracción XVI del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; para que se coordinen de manera complementaria con asociaciones que ejecuten acciones de asistencia humanitaria, a fin de satisfacer las necesidades básicas de alojamiento, suministro de alimentos, de higiene y sanidad, así como de atención integral (médica-sicológica), a favor de personas migrantes nacionales y provenientes de otros países.

II.3. Los proyectos serán revisados con base en los siguientes criterios de selección establecidos en el numeral 3.4 de las Reglas de Operación del PCS:

- Sujetarse a los objetivos y a las temáticas de la convocatoria correspondiente; además de orientar el desarrollo del proyecto a la(s) temática(s) seleccionada(s).
- Cumplir con los montos y sus criterios, según la convocatoria en la que participen.
- Señalar si el proyecto da continuidad a uno anterior apoyado por el PCS, identificando y relacionando los antecedentes, los objetivos, los resultados obtenidos, los resultados esperados, y la duración de ambos proyectos, así como la importancia estratégica de darle continuidad.
- Indicar el o los niveles de impacto social que prevé lograr con la ejecución del proyecto.
- Describir el problema que pretende atender y la importancia de hacerlo, así como las causas que lo originaron.
- Estar dirigido a población en situación de vulnerabilidad o exclusión o bien, generar conocimientos que contribuyan a la mejora de sus condiciones de vida; privilegiando los principios de respeto a la dignidad de las personas e inclusión.
- Plantear criterios para seleccionar e identificar las necesidades de la población beneficiaria.
- Mantener coherencia entre el nivel o niveles de impacto que prevé lograr el proyecto y las líneas de acción propuestas.
- Mantener concordancia entre diagnóstico, objetivos, líneas de acción y acciones del proyecto.
- Vincular las líneas de acción con los resultados esperados del proyecto, así como definir el material probatorio que confirme el logro de los mismos.

- Vincular los conceptos presupuestales y el uso de los recursos, tanto del PCS como de la coinversión del Actor Social, con los objetivos, las metas y acciones planteados en el proyecto.
- Describir de manera detallada la capacidad técnica y experiencia del Actor Social y de sus integrantes en la ejecución del proyecto presentado**.**
- Describir mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir cuantitativa y cualitativamente las distintas etapas y los resultados de la ejecución del proyecto.
- Describir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien la participación ciudadana y la contraloría social en la utilización de los recursos y la evaluación de resultados.
- Estar articulados o coordinados en redes sociales o con otros Actores Sociales vinculados al desarrollo social y humano.
- Generación de formas de interacción, cooperación y suma de capacidades para incrementar el bienestar colectivo y que a su vez genera confianza pública y reciprocidad.
- Valoración de la trayectoria de los Actores Sociales y de sus integrantes.

La cobertura de la presente Convocatoria será en los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California, así como en Tapachula, Chiapas, exclusivamente.

III. Montos de apoyo y porcentajes de coinversión

El PCS destinará para la presente convocatoria la cantidad de $4´000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) que podrá modificarse de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

De acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación del PCS, el monto máximo de aportación por proyecto será de:

- De $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) a $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil, en proporción al número de beneficiarios y su crecimiento potencial.
- Hasta $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil, para que se coordinen de manera complementaria con asociaciones que ejecuten acciones de asistencia humanitaria, a fin de satisfacer las necesidades básicas de alojamiento, suministro de alimentos con calidad, de higiene y sanidad, así como de atención integral (médica-sicológica), a favor de personas migrantes nacionales y provenientes de otros países.

El porcentaje de coinversión de los Actores Sociales deberá ser cuando menos del 20% del costo total del Proyecto. La coinversión podrá ser en términos monetarios y no monetarios, lo cual se podrá justificar con la descripción sucinta de las acciones que ya se realizan de manera permanente a favor de la población en situación de vulnerabilidad o exclusión.

De los recursos destinados para esta convocatoria, la cantidad de $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) será para proyectos que incidan en el municipio de Tapachula, Chiapas y, la diferencia se aplicará a proyectos que tengan incidencia en los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California.

IV. Conceptos presupuestales permitidos para la convocatoria.

Los conceptos presupuestales permitidos para pagar con recursos del PCS, se encuentran especificados en el Anexo 8 de las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal 2016. Para esta convocatoria, en ningún caso podrán otorgarse recursos para becas.

Los recursos humanos y/o materiales presupuestados en cada proyecto deberán ser considerados como medio para fomentar el bienestar, la cohesión y el capital social de los beneficiarios y en ningún caso podrán tener otro destino.

Se aclara que con plena observancia del citado Anexo 8, los recursos federales que se aporten, podrán destinarse a la habilitación, adquisición de equipo, compra de insumos y pago del concepto de recursos humanos, que tengan incidencia directa con la asistencia humanitaria a favor de personas en situación de migración nacionales y provenientes de otros países; lo que se traduce en el acondicionamiento de dormitorios, que se brinden alimentos con calidad y se ejecute adecuación de los lugares para la elaboración de los mismos, adicionalmente se ofrezcan servicios de higiene y sanidad; y atención humanitaria integral (médica-sicológica).

V. Criterios y requisitos de participación de los Actores Sociales

Podrán participar los Actores Sociales que cumplan con lo establecido en el numeral 3.3 de las Reglas de Operación del PCS, que se menciona a continuación:

Criterios	**Requisitos** **(Documentos solicitados)**
a) En todos los casos se deberá cumplir con lo siguiente:	
Criterios: 1. Contar con un proyecto que cumpla con los requisitos que marcan las Reglas de Operación, así como con las bases que establezca la convocatoria en la que participa.	Requisitos (Documentos solicitados): 1. Presentar el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante el Sistema Electrónico que el Programa disponga para tal efecto, en la dirección electrónica www.indesol.gob.mx. El documento deberá ser enviado con la firma electrónica de la persona que ostente la representación legal, acreditando así su identidad, en términos de lo establecido en la Ley de Firma Electrónica Avanzada y su Reglamento.
Criterios: 2.- Cumplir con los requisitos fiscales de conformidad con la normatividad aplicable en la materia la cual deberá señalar específicamente que se trata de una “persona moral sin fines de lucro”.	Requisitos (Documentos solicitados): 2.- Adjuntar al proyecto, la Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, con una antigüedad máxima de un mes a la fecha en que se presenta el proyecto.
Criterios: 3.- Contar con los recursos necesarios para la coinversión, la cual será como mínimo del 20% del costo total del proyecto. La coinversión podrá ser en términos monetarios y no monetarios.	Requisitos (Documentos solicitados): 3.- Registrar en el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos la aportación del Actor Social. Este requisito será revisado durante la etapa de recepción.
Criterios: 4.- En caso de haber sido apoyado en el ejercicio fiscal anterior, deberá haber entregado a la Instancia Ejecutora correspondiente, el Reporte Final de Actividades completo y en los plazos señalados, de cada proyecto apoyado.	Requisitos (Documentos solicitados): 4.- Previo a la captura del proyecto la Instancia Ejecutora verificará el cumplimiento de este criterio, de no cumplirlo el Sistema bloqueará la captura.
Criterios: 5.- En las convocatorias emitidas en exclusividad por el Indesol, los Actores Sociales tienen derecho a presentar un solo proyecto en el ejercicio fiscal correspondiente. El Actor Social podrá presentar adicionalmente otro proyecto en alguna de las convocatorias que el Indesol emita en coinversión con otra instancia. En ningún caso un mismo actor social podrá presentar dos proyectos en convocatorias de coinversión. En cada convocatoria se establecerá si ésta es emitida exclusivamente por el Indesol o si se trata de una convocatoria emitida por el Indesol en coinversión con alguna otra instancia.	Requisitos (Documentos solicitados): 5.- El Sistema verificará de forma automática durante la etapa de llenado del Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos el cumplimiento del criterio.

Criterios: 6.- No tener irregularidades o incumplimientos reportados, observaciones de auditorías o cualquier otro tipo de impedimento jurídico administrativo con algún Programa de la SEDESOL, o con alguna instancia pública que lo haga del conocimiento del PCS.	Requisitos (Documentos solicitados): 6.- La Instancia Ejecutora verificará el cumplimiento de este criterio, durante la etapa de validación.
Criterios: 7.- Los Actores Sociales que reciban apoyos del PCS no podrán recibir recursos por parte de otros programas federales, para las mismas actividades señaladas en el proyecto durante el ejercicio fiscal correspondiente. Acotación: Este criterio no limita los apoyos complementarios que se reciban por otras instancias públicas, dado que estamos en presencia de acciones inherentes a una estrategia de asistencia humanitaria. No obstante, deberá ejecutarse la erogación de los recursos que en su caso se otorguen, en estricto apego al convenio de concertación y su anexo técnico.	Requisitos (Documentos solicitados): 7.- En el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos, el Actor Social deberá comprometerse a no recibir apoyos de otros programas federales para las mismas actividades señaladas en el proyecto, durante el presente ejercicio fiscal. En caso de recibir apoyos para actividades similares o complementarias, deberá informar a la Instancia Ejecutora a través del Reporte Final, el monto de los recursos recibidos y las sinergias alcanzadas para la realización del proyecto.
Criterios: 8. En caso de que el Actor Social presente más de un proyecto, las actividades propuestas en dichos proyectos deberán ser diferentes. La Instancia Ejecutora verificará que no haya proyectos con las mismas actividades propuestas, independientemente del Actor Social, permitiendo que participe el primero que se haya recibido.	Requisitos (Documentos solicitados): 8. En el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos, comprometerse a no solicitar ni recibir apoyos del PCS para proyectos iguales y/o las mismas actividades, a nivel central o delegaciones, incluso a través de otros actores sociales en el mismo ejercicio fiscal.
b) Adicionalmente a lo señalado en el inciso a), tratándose de organización de la sociedad civil, deberá cumplir con lo siguiente:	
Criterios: 1. Estar inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Requisitos (Documentos solicitados): 1. Contar con la Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), y que ésta se haya obtenido antes del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Criterios: 2. Haber entregado el Informe Anual a la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a través del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal que corresponda, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.	Requisitos (Documentos solicitados): 2. El Sistema verificará de forma automática durante la etapa de llenado del Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos el cumplimiento de este criterio.
Criterios: 3. Haber realizado las modificaciones y/o actualizaciones de su información ante el Registro Federal de las OSC, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción VI de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y 15 del Reglamento Interno del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Requisitos (Documentos Solicitados): 3. Para constatar el cumplimiento de este criterio, en la etapa de validación la Instancia Ejecutora verificará que la información proporcionada, corresponda con la contenida en el Sistema de Información del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil los aspectos de: Objeto social, vigencia del/la Representante legal y domicilio fiscal.

VI. Recepción de los proyectos

El periodo de recepción de los proyectos será a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y hasta el cierre de la misma, que será de cinco días naturales. Para la presente convocatoria el PCS recibirá electrónicamente como máximo 40 (cuarenta) proyectos en función del techo presupuestal destinado para su operación. Dicha recepción se hará mediante el Sistema Electrónico que el Programa disponga para tal efecto.

VII. Resultados

Los proyectos que cuenten con la documentación completa en el Sistema, serán validados y, en su caso, dictaminados de acuerdo al esquema señalado en los numerales 4.2.4 y 4.2.4.1 de las Reglas de Operación del PCS. El resultado de la dictaminación será definitivo y quedará asentado en el Acta de Dictaminación.

El resultado de los dictámenes, la relación de quienes participaron en el proceso de dictaminación, y las fichas curriculares, se darán a conocer en un plazo no mayor a cinco días naturales después del cierre de la presente convocatoria, a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx.

En ningún caso se publicarán los nombres de las y los dictaminadores vinculados a cada proyecto, durante el presente ejercicio fiscal, por considerarse Información clasificada con carácter de confidencial, al contenerse datos personales en términos de lo que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Conforme a lo previsto en el numeral 4.2.4.1 de las Reglas de Operación del PCS, el Consejo Estatal de Atención al Migrante de Baja California, será parte de la Comisión Dictaminadora, al designar a un servidor o servidora pública de nivel estatal, de su adscripción; ello sin perjuicio de que la Instancia Ejecutora pueda sustituir tal participación, en caso necesario. En el entendido de que la Comisión Dictaminadora quedará debidamente integrada adicionalmente, con los representantes de la sociedad civil, y del especialista en la materia o del ámbito académico, así como con el secretario/a técnico/a, cuyas facultades se prevén en las Reglas de Operación del PCS.

Una vez publicados los resultados de la dictaminación de los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de cinco días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquellos que no podrán recibir recursos.

VIII. Información

El Indesol será la Instancia Ejecutora de la presente Convocatoria.

Es obligación de los Actores Sociales, conocer y sujetarse a lo dispuesto en las Reglas de Operación del PCS que rigen la presente Convocatoria, las cuales proporcionan información sobre la normatividad, características y operación del PCS, mismas que están disponibles en la página electrónica: www.indesol.gob.mx

Para mayor información dirigirse al Indesol, a los teléfonos 01800 718-8621; 5554 0390, extensiones 68379, 68382, 68383, 68384 o por correo electrónico a juan.ruiz@indesol.gob.mx (recepción y captura de proyectos); 68136, 68350, 68351, 68415 y 68430 o por correo electrónico a convocatoriasindesol@indesol.gob.mx (dudas metodológicas sobre el propósito de la convocatoria); 68432, 68433, 68434 y 68380 o por correo a dictaminacion@indesol.gob.mx (dictaminación de proyectos).

La información presentada por los Actores Sociales estará sujeta a las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Dado en la Ciudad de México, a los tres días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.- La Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, **María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AVISO por el que se informa al público en general el nuevo domicilio del Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 5, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO

Se informa al público en general que, a partir del 15 de noviembre de 2016, el nuevo domicilio del Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ubicará en Ejército Nacional número 223 (acceso por Lago de Xochimilco), Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11320, Ciudad de México, con número telefónico 01 800 0000 247.

Lo anterior, a efecto de que toda la correspondencia, diligencias, procedimientos administrativos, y demás trámites vinculados a las Direcciones Generales de Impacto y Riesgo Ambiental; de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas; de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros y de Vida Silvestre, se envíen y realicen en el domicilio antes mencionado.

En el caso de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos el domicilio oficial donde se realizarán los trámites que competen a dicha unidad administrativa, así como la recepción de todo tipo de correspondencia continuará siendo en la calle de Progreso número 3, colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, Código Postal 04110, Ciudad de México.

Dado en la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, **Rafael Pacchiano Alamán**.- Rúbrica.

AVISO de Cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a agropecuarios.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracciones V y XI y 36 fracciones I, II y V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 51 párrafo segundo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 8 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que el 13 de mayo de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-062-ECOL-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a agropecuarios, misma que cambió su denominación a NOM-062-SEMARNAT-1994, de conformidad con el “Acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la ratificación de las mismas previa a su revisión quinquenal” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003.

Que la NOM-062-SEMARNAT-1994 establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a agropecuarios.

Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 28 fracción VII establece que se requiere previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría para el cambio de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; en tanto que la NOM-062-SEMARNAT-1994 sólo lo establece para los casos previstos en los numerales 4.7 y 4.9, lo que la hace inconsistente con la legislación vigente.

Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento fueron publicados posteriormente a la emisión de la norma y regulan el objeto de la misma a través de su Artículo 117, bajo un enfoque técnico más integral y estableciendo que sólo se podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción y con base en un estudio técnico justificativo en el que se demuestre, entre otros, que no se compromete la biodiversidad de acuerdo a la información que establece el Artículo 121 de su Reglamento. De lo anterior se desprende que las especificaciones técnicas para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad previstos en la NOM-062-SEMARNAT-1994, son insuficientes para demostrar que no se compromete la biodiversidad, por lo que no subsisten las causas que motivaron su expedición.

Que del análisis de la aplicación, efectos y observancia de la NOM-062-SEMARNAT-1994, realizado por la Secretaría se identificó que las especificaciones contenidas en su numeral 4, propician la dispersión de vegetación forestal en los predios sujetos a cambio de uso del suelo en terrenos forestales, favoreciendo la fragmentación de los ecosistemas forestales, ello debido a que sus especificaciones carecen de un enfoque integral y ecosistémico, pues establecen sólo medidas puntuales de mitigación a nivel de predio, sin considerar medidas para mitigar los efectos generados en la biodiversidad por dicha actividad a nivel de ecosistema local o microcuenca.

Que el tema de cancelación de la NOM-062-SEMARNAT-1994, fue inscrito en el Programa Nacional de Normalización del año 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de abril de 2016.

Que tomando en consideración lo establecido en los párrafos anteriores se advierte que no subsisten las causas que motivaron la expedición de la norma, por lo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 51, párrafo segundo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la cancelación de la NOM-062-SEMARNAT-1994, puede efectuarse sin seguir el procedimiento para su elaboración.

Que por lo anterior el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Aviso de Cancelación, durante la sesión celebrada el día 19 del mes de octubre del año 2016.

Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente:

AVISO DE CANCELACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-062-SEMARNAT-1994, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD QUE SE OCASIONEN POR EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DE TERRENOS FORESTALES A AGROPECUARIOS

Artículo único.- Se cancela la Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a agropecuarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1994.

TRANSITORIO

Único.- El presente aviso surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, **Cuauhtémoc Ochoa Fernández**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE ECONOMIA

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-420-1-ONNCCE-2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-C-420-1-ONNCCE-2016, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MEZCLAS ADHESIVAS PARA INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS Y PIEDRAS NATURALES-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA -PARTE 1: BASE CEMENTANTES HIDRÁULICOS" (CANCELARÁ A LA NMX-C-420-ONNCCE-2003).

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana que se enuncia a continuación, mismo que ha sido elaborado y aprobado por el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)".

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este proyecto de norma mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)" que lo propuso, ubicado en Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, código postal 03940, Ciudad de México y/o al correo electrónico: normas@mail.onncce.org.mx.

El texto completo del documento puede ser consultado en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México. SINEC 20160715104805001.

CLAVE O CÓDIGO	TÍTULO DEL PROYECTO DE LA NORMA MEXICANA
PROY-NMX-C-420-1-ONNCCE-2016	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MEZCLAS ADHESIVAS PARA INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS Y PIEDRAS NATURALES-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA-PARTE 1: BASE CEMENTANTES HIDRÁULICOS (CANCELARÁ A LA NMX-C-420-ONNCCE-2003)

Síntesis

Este Proyecto de Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba para las mezclas adhesivas formuladas a partir de cementantes hidráulicos; cuyo destino sea la fijación o instalación de recubrimientos cerámicos y de piedras naturales.

Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a las mezclas adhesivas formuladas a partir de cementantes hidráulicos, cuyo destino sea la fijación o instalación de recubrimientos cerámicos y de piedras naturales; que se fabriquen, comercialicen, distribuyan o utilicen en territorio nacional.

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, **Alberto Ulises Esteban Marina**.- Rúbrica.

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-509-ONNCCE-2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-C-509-ONNCCE-2016, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MATERIALES ASFÁLTICOS-RECUPERACIÓN ELÁSTICA EN DUCTILÓMETRO-MÉTODO DE ENSAYO".

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana que se enuncia a continuación, mismo que ha sido elaborado y aprobado por el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)".

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este proyecto de norma mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)" que lo propuso, ubicado en Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, código postal 03940, Ciudad de México y/o al correo electrónico: normas@mail.onncce.org.mx.

El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México. SINEC 20160715104815003

CLAVE O CÓDIGO	TÍTULO DEL PROYECTO DE LA NORMA MEXICANA
PROY-NMX-C-509-ONNCCE-2016	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MATERIALES ASFÁLTICOS-RECUPERACIÓN ELÁSTICA EN DUCTILÓMETRO-MÉTODO DE ENSAYO.

Síntesis

Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de ensayo para determinar la recuperación elástica en ductilómetro de los materiales asfálticos modificados.

Este Proyecto de Norma Mexicana aplica en residuos de la película delgada de cemento asfáltico modificado y de los residuos obtenidos por destilación de emulsiones asfálticas modificadas.

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, **Alberto Ulises Esteban Marina**.- Rúbrica.

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-521-ONNCCE-2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-C-521-ONNCCE-2016, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MATERIALES ASFÁLTICOS-RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR TORSIÓN-MÉTODO DE ENSAYO".

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del

Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana que se enuncia a continuación, mismo que ha sido elaborado y aprobado por el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)".

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este proyecto de norma mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)" que lo propuso, ubicado en Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, código postal 03940, Ciudad de México y/o al correo electrónico: normas@mail.onncce.org.mx.

El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México. SINEC 20160715104820004

CLAVE O CÓDIGO	TÍTULO DEL PROYECTO DE LA NORMA MEXICANA
PROY-NMX-C-521-ONNCCE-2016	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MATERIALES ASFÁLTICOS-RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR TORSIÓN-MÉTODO DE ENSAYO.
Síntesis	
Este Proyecto de Norma Mexicana específica el método de ensayo para determinar la recuperación elástica por torsión de cementos asfálticos modificados. Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a los cementos asfálticos modificados sin envejecer (antes del ensayo de la película delgada).	

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, **Alberto Ulises Esteban Marina**.- Rúbrica.

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-525-ONNCCE-2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-C-525-ONNCCE-2016, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MATERIALES ASFÁLTICOS-VISCOSIDAD ROTACIONAL DE CEMENTOS ASFÁLTICOS-MÉTODO DE ENSAYO".

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana que se enuncia a continuación, mismo que ha sido elaborado y aprobado por el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)".

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este proyecto de norma mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)" que lo propuso, ubicado en Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, código postal 03940, Ciudad de México y/o al correo electrónico: normas@mail.onncce.org.mx.

El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México. SINEC 20160715104825005

CLAVE O CÓDIGO	TÍTULO DEL PROYECTO DE LA NORMA MEXICANA
PROY-NMX-C-525-ONNCCE-2016	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-MATERIALES ASFÁLTICOS-VISCOSIDAD ROTACIONAL DE CEMENTOS ASFÁLTICOS-MÉTODO DE ENSAYO.

Síntesis

Este Proyecto de Norma Mexicana establece el método de ensayo para determinar la viscosidad rotacional de los cementos asfálticos.

Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable en cementos asfálticos.

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, **Alberto Ulises Esteban Marina**.- Rúbrica.

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-526-ONNCCE-2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-C-526-ONNCCE-2016, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN- GEOTECNIA- MATERIALES TÉRREOS- CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELOS-MÉTODO DE ENSAYO".

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana que se enuncia a continuación, mismo que ha sido elaborado y aprobado por el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)".

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este proyecto de norma mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)" que lo propuso, ubicado en Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, código postal 03940, Ciudad de México y/o al correo electrónico: normas@mail.onncce.org.mx.

El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México. SINEC 20160715104830006

CLAVE O CÓDIGO	TÍTULO DEL PROYECTO DE LA NORMA MEXICANA
PROY-NMX-C-526-ONNCCE-2016	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-GEOTECNIA-MATERIALES TÉRREOS-CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELOS-MÉTODO DE ENSAYO.

Síntesis
Este Proyecto de Norma Mexicana establece el procedimiento para clasificar los materiales para terracerías, que pueden ser fragmentos de roca o suelos, mediante pruebas índice, que permiten estimar algunas de las propiedades físicas y mecánicas del material y, con base en éstas, determinar su tipo de acuerdo con un sistema de clasificación de fragmentos de roca y suelos previamente definido. Este Proyecto de Norma Mexicana describe el procedimiento para clasificar los suelos para propósitos de ingeniería basada en la determinación en el laboratorio de las características granulométricas, límite líquido e índice plástico. Es aplicable también para la clasificación de suelos en campo (visual y manual) complementada con una clasificación descriptiva de partículas con tamaños mayores a 75 mm (rocas).

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, **Alberto Ulises Esteban Marina**.- Rúbrica.

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-528-ONNCCE-2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-C-528-ONNCCE-2016, "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-GEOTECNIA-MATERIALES TÉRREOS-DETERMINACIÓN DE LAS MASAS VOLUMÉTRICAS SUELTAS Y COEFICIENTES DE VARIACIÓN VOLUMÉTRICA-MÉTODOS DE ENSAYO".

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana que se enuncia a continuación, mismo que ha sido elaborado y aprobado por el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)".

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este proyecto de norma mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización denominado "Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)" que lo propuso, ubicado en Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, código postal 03940, Ciudad de México y/o al correo electrónico: normas@mail.onncce.org.mx.

El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México. SINEC 20160715104835007

CLAVE O CÓDIGO	TÍTULO DEL PROYECTO DE LA NORMA MEXICANA
PROY-NMX-C-528-ONNCCE-2016	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-GEOTECNIA-MATERIALES TÉRREOS-DETERMINACIÓN DE LAS MASAS VOLUMÉTRICAS SUELTAS Y COEFICIENTES DE VARIACIÓN VOLUMÉTRICA-MÉTODOS DE ENSAYO
Síntesis	
Este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a los materiales térreos y especifica el método de ensayo para determinar la masa volumétrica en estado suelto de los materiales, así como los coeficientes de variación volumétrica al pasar de un estado a otro.	

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, **Alberto Ulises Esteban Marina**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

DECLARATORIA de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la lluvia torrencial ocurrida el 6 de septiembre de 2016 en el Municipio de Angostura del Estado de Sinaloa.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

MELY ROMERO CELIS, Subsecretaria de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en los artículos 14, 16, 26 y 35, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9o., de la Ley de Planeación; 7, 8, 32, fracciones IX y X, 60, 61, 65, 89, 124 y 129, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016; 7o. fracción X del Reglamento Interior vigente; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 113 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015; 1, del Acuerdo mediante el cual se delega a favor del Subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la facultad de emitir declaratorias de desastre natural relevante para los casos de sequía, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón, terremoto, erupción volcánica, maremoto, movimiento de ladera, cuando los daños por estos desastres naturales relevantes afecten exclusivamente al sector agropecuario, acuícola y pesquero.

CONSIDERANDO

Que el artículo 113, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, establece lo relativo a la publicación de la declaratoria de desastre natural para el Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, señalando que con base en la solicitud de declaratoria de desastre natural, la Secretaría enviará a publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de Desastre Natural respectiva en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores a la recepción de la solicitud de la misma y de la información del Dictamen Técnico de Corroboración de la Ocurrencia del Desastre Natural debidamente soportado.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 109 fracción I de las citadas Reglas de Operación, con la finalidad de fortalecer y elevar la eficiencia de la operación del Componente; así como agilizar el proceso de gestión de los apoyos, el único medio de atención y ventanilla será el Sistema de Operación y Gestión Electrónica, por lo que no se atenderá ninguna solicitud por otra vía, en ese sentido se han establecido los Lineamientos Operativos y Técnicos del Sistema de Operación y Gestión Electrónica del Componente de Atención a Desastres Naturales. Así mismo, de conformidad con lo señalado en el Artículo 113 de las citadas Reglas de Operación, relativas a la Solicitud de recursos a la Secretaría, Entrega de Apoyo e Instalación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES).

Que a consecuencia de la lluvia torrencial ocurrida el 6 de septiembre de 2016, existen afectaciones en activos productivos elegibles de productores agropecuarios pesqueros y acuícolas, del medio rural de bajos ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, en el Municipio de Angostura en el Estado de Sinaloa.

Que el C. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado y el Delegado de la SAGARPA en el Estado de Sinaloa, a través del Sistema de Operación y Gestión Electrónica con fecha 7 de octubre de 2016, formularon la solicitud con número de Folio 301388 al Titular de esta Secretaría para emitir la Declaratoria por Desastre Natural en virtud a los daños ocasionados al sector agropecuario, por el fenómeno meteorológico señalado en el considerando anterior, así como los recursos del componente, manifestando su acuerdo y conformidad con las fórmulas de coparticipación de recursos establecidos en la normatividad aplicable.

Que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 113 de las Reglas de Operación, la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario, como Unidad Responsable del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, se cercioró de que la autoridad técnica competente hubiese remitido su dictamen técnico sobre la ocurrencia de este fenómeno, mismo que

mediante Oficio JAG.SIN1.1 175 en referencia en el folio 301388, con fecha de recepción del 6 de octubre de 2016, menciona la presencia de lluvia torrencial el 6 de septiembre de 2016 en el Municipio de Angostura del Estado de Sinaloa.

Que derivado de lo anterior, se determinó procedente declarar en Desastre Natural para el Sector agropecuario, acuícola y pesquero, al municipio antes mencionado del Estado de Sinaloa, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente:

DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO, A CONSECUENCIA DE LA LLUVIA TORRENCIAL OCURRIDA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL ESTADO DE SINALOA

Artículo 1o.- Se emite la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la lluvia torrencial ocurrida el 6 de septiembre de 2016 en el Municipio de Angostura, del Estado de Sinaloa y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico a los activos productivos elegibles de los productores agropecuarios, del medio rural de bajos ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario en el Estado de Sinaloa.

Artículo 2o.- La presente Declaratoria de Desastre Natural en el Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero, se expide exclusivamente para efecto de ejercer los recursos con cargo al presupuesto Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores y de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo 3o.- La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Declaratoria entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2016.- La Subsecretaria de Desarrollo Rural, **Mely Romero Celis**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ACUERDO por el que se autorizan y se modifican las distancias ortodrómicas, para el efecto de la aplicación de los artículos 289 y 291 de la Ley Federal de Derechos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

MIGUEL PELÁEZ LIRA, Director General de Aeronáutica Civil, con fundamento en los artículos 1o., párrafo segundo, 2o., fracción I, 14, párrafo primero, 26 y 36, fracciones I, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, párrafo primero y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 6, fracciones I, III, IV, XVI y último párrafo de la Ley de Aviación Civil; 289, fracción I y 291 de la Ley Federal de Derechos; 1o., 2o., fracción XVI, 10, fracciones V y XXIV, y 21, fracciones I, II, IV, XIII y XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Título 7. Derechos, regla 7.35., párrafo primero y fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO

Que en los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Federal de Derechos, así como en el Subnumeral 7.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 2015, se determina que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, publicará en el Diario Oficial de la Federación las distancias ortodrómicas y las envergaduras de las aeronaves.

Que en la aplicación del Acuerdo publicado el 10 de diciembre del 2010, se identificó el requerimiento de la modificación de las distancias ortodrómicas enlistadas en el Anexo 3 del presente Acuerdo.

Que el 15 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se autorizan las distancias ortodrómicas y las envergaduras de las aeronaves.

Que durante la aplicación del Acuerdo publicado el 15 de abril de 2015, se detectó la necesidad de incorporar las distancias ortodrómicas contenidas en los Anexos 1 y 2 del presente Acuerdo.

Por lo antes expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZAN Y SE MODIFICAN LAS DISTANCIAS ORTODRÓMICAS, PARA EL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 289 Y 291 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Para los efectos de los artículos 289 y 291 de la Ley Federal de Derechos, esta Dirección General de Aeronáutica Civil ratifica la vigencia de las distancias ortodrómicas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2015, el 10 de diciembre de 2010, el 27 de febrero de 2004 y el 15 de febrero de 2002, salvo lo indicado en el ARTÍCULO CUARTO del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de los artículos 289, fracción I, inciso b) y 291 de la Ley Federal de Derechos, esta Dirección General de Aeronáutica Civil **autoriza** la distancia ortodrómica establecida en el Anexo 1 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos de los artículos 289, fracción I, inciso c) y 291 de la Ley Federal de Derechos, esta Dirección General de Aeronáutica Civil **autoriza** la distancia ortodrómica establecida en el Anexo 2 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de los artículos 289, fracción I, inciso c) y 291 de la Ley Federal de Derechos, esta Dirección General de Aeronáutica Civil **modifica** las siguientes distancias ortodrómicas: Denver International–Alajuela/Juan Santamaría Intl. (DEN-SJO), Alajuela/Juan Santamaría Intl.–Denver International (SJO-DEN), Brownsville/South Padre Is, Intl, Tx.-Roatana Intl (BRO-RTB), Roatana Intl-Brownsville/South Padre Is, Intl, Tx.-(RTB-BRO), conforme a lo indicado en el Anexo 3 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para los efectos establecidos en los artículos 289 y 291 de la Ley Federal de Derechos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2016.- El Director General de Aeronáutica Civil, **Miguel Peláez Lira**.- Rúbrica.

ANEXO 1

ORIGEN	AEROPUERTO DE ORIGEN	DESTINO	AEROPUERTO DE DESTINO	DISTANCIA
LEZG	AEROPUERTO DE ZARAGOZA; ZARAGOZA, ESPAÑA.	MMMX	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; D.F., MÉXICO	1253

ANEXO 2

ORIGEN	AEROPUERTO DE ORIGEN	DESTINO	AEROPUERTO DE DESTINO	DISTANCIA
MHRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ; ROATANA, HONDURAS.	KMFE	MC ALLEN INTERNATIONAL AIRPORT; TX. E.U.A.	1312

ANEXO 3

ORIGEN	AEROPUERTO DE ORIGEN	DESTINO	AEROPUERTO DE DESTINO	DISTANCIA
DEN	DENVER INTERNATIONAL	SJO	ALAJUELA/JUAN SANTAMARIA INTL.	648
SJO	ALAJUELA/JUAN SANTAMARIA INTL.	DEN	DENVER INTERNATIONAL	648
BRO	BROWNSVILLE/SOUTH PADRE IS, INTL, TX.	RTB	ROATANA INTL	1242
RTB	ROATANA INTL	BRO	BROWNSVILLE/SOUTH PADRE IS, INTL,	1242

			TX.	

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

DECLARATORIA de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración de Correos, ubicado en Av. Lázaro Cárdenas s/n, colonia Centro, C.P. 34956, Municipio de Pueblo Nuevo, Estado de Durango, con superficie de 115.53 metros cuadrados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.- DSRDPF/475/2016.

DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN DE CORREOS", UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 34956, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, ESTADO DE DURANGO, CON SUPERFICIE DE 115.53 METROS CUADRADOS.

LUIS FERNANDO MORALES NÚÑEZ, Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32, 40, 42, fracción V, 43, 48 y 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y 1, 3, fracción X, 11 fracciones I, II, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, teniendo la Nación en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público;

2.- Que el artículo 2, fracción VII de la Ley General de Bienes Nacionales define como "Inmueble federal", el terreno con o sin construcciones de la Federación, así como aquéllos en que ejerza la posesión, control o administración a título de dueño;

3.- Que por su parte, el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales dispone que están sujetos al régimen de dominio público de la Federación los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;

4.- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, ha tenido la posesión, custodia, vigilancia y uso del inmueble Federal denominado "Administración de Correos", ubicado en Av. Lázaro Cárdenas S/N, Colonia Centro, C.P. 34956, Municipio Pueblo Nuevo, Estado de Durango, con superficie de 115.53 metros cuadrados, para la utilización de servicios públicos a su cargo, con las siguientes medidas y colindancias:

Orientación	Colindancia	Medida Metros
Norte	Av. Lázaro Cárdenas	8.6000
Sur	Calle Durango	8.0000
Este	Calle Sinaloa	14.0000
Oeste	Propiedad privada	13.8500

5.- Que en razón de lo anterior, dicho inmueble se tiene identificado como un inmueble Federal y se encuentra controlado en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, con el Registro Federal Inmobiliario 10-4696-1.

6.- Que acorde a las consideraciones anteriores, el inmueble objeto de la presente Declaratoria es un inmueble Federal que se ajusta al supuesto previsto en el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales; por lo que con fecha 16 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo tendiente a emitir la presente Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación en términos del artículo 29, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales; y

7.- Que con fecha 23 de agosto de 2016 venció el término legal dispuesto para oponerse al procedimiento citado en el considerando anterior, por lo que al no haberse recibido manifestación de oposición alguna; a nombre y en representación de la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Ejecutivo Federal encargada de determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; así como de declarar, cuando ello sea preciso, que un bien determinado está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, por estar comprendido en algunas de las disposiciones de esta Ley; he tenido a bien emitir la siguiente:

DECLARATORIA

PRIMERA.- Que el inmueble descrito en los considerandos 4 y 5 del presente documento, se encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación.

SEGUNDA.- Que en razón de lo anterior dicho inmueble es inalienable, imprescriptible e inembargable, razón por la cual no se encuentra sujeto a prescripción positiva o negativa, ni es objeto de acciones reivindicatorias o interdictos posesorios por parte de terceros, por su naturaleza no puede considerarse bien vacante para los efectos de los artículos 785 a 789 del Código Civil Federal.

TERCERA.- De esta forma, mientras dicho inmueble Federal continúe en uso y control por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, dicha dependencia tendrá el carácter de institución destinataria respecto de este inmueble, para los efectos de los artículos 2, fracción VI y 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, encontrándose obligada, por conducto de su responsable inmobiliario, al cumplimiento de los artículos 28, fracción I, 29, fracción XIV y 32 de la ley en cita.

CUARTA.- Que el inmueble relativo continuará sujeto al régimen de dominio público de la Federación hasta que, en su caso, sea formalizada su enajenación, previo acuerdo de desincorporación en términos de la normatividad aplicable.

QUINTA.- Publíquese esta Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, para que surta efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales.

SEXTA.- Inscríbase la presente Declaratoria como acto de certeza jurídica que acredita la naturaleza inmobiliaria federal respecto del inmueble objeto de la misma, tanto en el Registro Público de la Propiedad Federal como en el Registro Público de la Propiedad correspondiente al lugar de la ubicación del inmueble de que se trata, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 fracción V, y 48 de la Ley General de Bienes Nacionales, para efectos de publicidad y de oponibilidad ante terceros.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a los 21 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, **Luis Fernando Morales Núñez**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración de Correos, ubicado en Calle 5 de Mayo No. 9, colonia Centro, C.P. 34330, Municipio de Durango, Estado de Durango, con superficie de 400.00 metros cuadrados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.- DSRDPF/467/2016.

DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN DE CORREOS", UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO N° 9, COLONIA CENTRO, C.P. 34330, MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO, CON SUPERFICIE DE 400.00 METROS CUADRADOS.

LUIS FERNANDO MORALES NÚÑEZ, Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32, 40, 42, fracción V, 43, 48 y 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y 1, 3, fracción X, 11 fracciones I, II, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, teniendo la Nación en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público;

2.- Que el artículo 2, fracción VII de la Ley General de Bienes Nacionales define como "Inmueble federal", el terreno con o sin construcciones de la Federación, así como aquéllos en que ejerza la posesión, control o administración a título de dueño;

3.- Que por su parte, el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales dispone que están sujetos al régimen de dominio público de la Federación los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;

4.- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, ha tenido la posesión, custodia, vigilancia y uso del inmueble Federal denominado "Administración de Correos", ubicado en Calle 5 de Mayo N° 9, Colonia Centro, C.P. 34330, Municipio de Durango, Estado de Durango, con superficie de 400.00 metros cuadrados, para la utilización de servicios públicos a su cargo, con las siguientes medidas y colindancias:

Orientación	Colindancia	Medida Metros
Norte	Baldío	20.0000
Sur	Calle 5 de Mayo	20.0000
Este	Casa de Maestros	20.0000
Oeste	Baldío	20.0000

5.- Que en razón de lo anterior, dicho inmueble se tiene identificado como un inmueble Federal y se encuentra controlado en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, con el Registro Federal Inmobiliario 10-4698-0.

6.- Que acorde a las consideraciones anteriores, el inmueble objeto de la presente Declaratoria es un inmueble Federal que se ajusta al supuesto previsto en el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales; por lo que con fecha 16 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo tendiente a emitir la presente Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación en términos del artículo 29, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales; y

7.- Que con fecha 23 de agosto de 2016 venció el término legal dispuesto para oponerse al procedimiento citado en el considerando anterior, por lo que al no haberse recibido manifestación de oposición alguna; a nombre y en representación de la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Ejecutivo Federal encargada de determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; así como de declarar, cuando ello sea preciso, que un bien determinado está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, por estar comprendido en algunas de las disposiciones de esta Ley; he tenido a bien emitir la siguiente:

DECLARATORIA

PRIMERA.- Que el inmueble descrito en los considerandos 4 y 5 del presente documento, se encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación.

SEGUNDA.- Que en razón de lo anterior dicho inmueble es inalienable, imprescriptible e inembargable, razón por la cual no se encuentra sujeto a prescripción positiva o negativa, ni es objeto de acciones reivindicatorias o interdictos posesorios por parte de terceros, por su naturaleza no puede considerarse bien vacante para los efectos de los artículos 785 a 789 del Código Civil Federal.

TERCERA.- De esta forma, mientras dicho inmueble Federal continúe en uso y control por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, , dicha dependencia tendrá el carácter de institución destinataria respecto de este inmueble, para los efectos de los artículos 2, fracción VI y 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, encontrándose obligada, por conducto de su responsable inmobiliario, al cumplimiento de los artículos 28, fracción I, 29, fracción XIV y 32 de la ley en cita.

CUARTA.- Que el inmueble relativo continuará sujeto al régimen de dominio público de la Federación hasta que, en su caso, sea formalizada su enajenación, previo acuerdo de desincorporación en términos de la normatividad aplicable.

QUINTA.- Publíquese esta Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, para que surta efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales.

SEXTA.- Inscríbase la presente Declaratoria como acto de certeza jurídica que acredita la naturaleza inmobiliaria federal respecto del inmueble objeto de la misma, tanto en el Registro Público de la Propiedad Federal como en el Registro Público de la Propiedad correspondiente al lugar de la ubicación del inmueble de que se trata, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 fracción V, y 48 de la Ley General de Bienes Nacionales, para efectos de publicidad y de oponibilidad ante terceros.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a los 21 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, **Luis Fernando Morales Núñez**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración de Correos Motozintla, ubicado en Cuarta Avenida Sur No. 100, colonia Centro, C.P. 30900, Municipio de Motozintla, Estado de Chiapas, con superficie de 234.00 metros cuadrados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.- DSRDPF/487/2016.

DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN DE CORREOS MOTOZINTLA", UBICADO EN CUARTA AVENIDA SUR N° 100, COLONIA CENTRO, C.P. 30900, MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, ESTADO DE CHIAPAS, CON SUPERFICIE DE 234.00 METROS CUADRADOS.

LUIS FERNANDO MORALES NÚÑEZ, Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32, 40, 42, fracción V, 43, 48 y 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y 1, 3, fracción X, 11 fracciones I, II, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, teniendo la Nación en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público;

2.- Que el artículo 2, fracción VII de la Ley General de Bienes Nacionales define como "Inmueble federal", el terreno con o sin construcciones de la Federación, así como aquéllos en que ejerza la posesión, control o administración a título de dueño;

3.- Que por su parte, el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales dispone que están sujetos al régimen de dominio público de la Federación los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;

4.- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, ha tenido la posesión, custodia, vigilancia y uso del inmueble Federal denominado "Administración de Correos Motozintla", ubicado en Cuarta Avenida Sur N° 100, Colonia Centro, C.P. 30900, Municipio de Motozintla, Estado de Chiapas, con superficie de 234.00 metros cuadrados, para la utilización de servicios públicos a su cargo, con las siguientes medidas y colindancias:

Orientación	Colindancia	Medida Metros
Norte	Palacio Municipal	23.8000
Sur	Palacio Municipal	23.8000
Este	Calle de por medio	18.0000
Oeste	Hotel Cossio	18.0000

5.- Que en razón de lo anterior, dicho inmueble se tiene identificado como un inmueble Federal y se encuentra controlado en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, con el Registro Federal Inmobiliario 7-8436-1.

6.- Que acorde a las consideraciones anteriores, el inmueble objeto de la presente Declaratoria es un inmueble Federal que se ajusta al supuesto previsto en el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales; por lo que con fecha 18 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo tendiente a emitir la presente Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación en términos del artículo 29, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales; y

7.- Que con fecha 25 de agosto de 2016 venció el término legal dispuesto para oponerse al procedimiento citado en el considerando anterior, por lo que al no haberse recibido manifestación de oposición alguna; a nombre y en representación de la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Ejecutivo Federal encargada de determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; así como de declarar, cuando ello sea preciso, que un bien determinado está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, por estar comprendido en algunas de las disposiciones de esta Ley; he tenido a bien emitir la siguiente:

DECLARATORIA

PRIMERA.- Que el inmueble descrito en los considerandos 4 y 5 del presente documento, se encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación.

SEGUNDA.- Que en razón de lo anterior dicho inmueble es inalienable, imprescriptible e inembargable, razón por la cual no se encuentra sujeto a prescripción positiva o negativa, ni es objeto de acciones reivindicatorias o interdictos posesorios por parte de terceros, por su naturaleza no puede considerarse bien vacante para los efectos de los artículos 785 a 789 del Código Civil Federal.

TERCERA.- De esta forma, mientras dicho inmueble Federal continúe en uso y control por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, dicha dependencia tendrá el carácter de institución destinataria respecto de este inmueble, para los efectos de los artículos 2, fracción VI y 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, encontrándose obligada, por conducto de su responsable inmobiliario, al cumplimiento de los artículos 28, fracción I, 29, fracción XIV y 32 de la ley en cita.

CUARTA.- Que el inmueble relativo continuará sujeto al régimen de dominio público de la Federación hasta que, en su caso, sea formalizada su enajenación, previo acuerdo de desincorporación en términos de la normatividad aplicable.

QUINTA.- Publíquese esta Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, para que surta efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales.

SEXTA.- Inscríbase la presente Declaratoria como acto de certeza jurídica que acredita la naturaleza inmobiliaria federal respecto del inmueble objeto de la misma, tanto en el Registro Público de la Propiedad Federal como en el Registro Público de la Propiedad correspondiente al lugar de la ubicación del inmueble de que se trata, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 fracción V, y 48 de la Ley General de Bienes Nacionales, para efectos de publicidad y de oponibilidad ante terceros.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a los 21 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, **Luis Fernando Morales Núñez**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración de Correos Tapachula, ubicado en calle Domicilio Conocido No. 32, colonia Centro, C.P. 21920, Municipio de Tapachula, Estado de Chiapas, con superficie de 874.30 metros cuadrados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.- DSRDPF/489/2016.

DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN DE CORREOS TAPACHULA", UBICADO EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO N° 32, COLONIA CENTRO, C.P. 21920, MUNICIPIO DE TAPACHULA, ESTADO DE CHIAPAS, CON SUPERFICIE DE 874.30 METROS CUADRADOS.

LUIS FERNANDO MORALES NÚÑEZ, Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32, 40, 42, fracción V, 43, 48 y 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y 1, 3, fracción X, 11 fracciones I, II, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, teniendo la Nación en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público;

2.- Que el artículo 2, fracción VII de la Ley General de Bienes Nacionales define como "Inmueble federal", el terreno con o sin construcciones de la Federación, así como aquéllos en que ejerza la posesión, control o administración a título de dueño;

3.- Que por su parte, el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales dispone que están sujetos al régimen de dominio público de la Federación los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;

4.- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, ha tenido la posesión, custodia, vigilancia y uso del inmueble Federal denominado "Administración de Correos Tapachula", ubicado en Calle Domicilio Conocido N° 32, Colonia Centro, C.P. 21920, Municipio de Tapachula, Estado de Chiapas, con superficie de 874.30 metros cuadrados, para la utilización de servicios públicos a su cargo, con las siguientes medidas y colindancias:

Orientación	Colindancia	Medida Metros
Norte	Estela Barrios	22.6000
Sur	Primera Oriente	22.6000
Este	Administración de Telégrafos	28.0000
Oeste	Parque Municipal Santa Cecilia	28.0000

5.- Que en razón de lo anterior, dicho inmueble se tiene identificado como un inmueble Federal y se encuentra controlado en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, con el Registro Federal Inmobiliario 7-8441-4.

6.- Que acorde a las consideraciones anteriores, el inmueble objeto de la presente Declaratoria es un inmueble Federal que se ajusta al supuesto previsto en el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales; por lo que con fecha 18 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo tendiente a emitir la presente Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación en términos del artículo 29, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales; y

7.- Que con fecha 25 de agosto de 2016 venció el término legal dispuesto para oponerse al procedimiento citado en el considerando anterior, por lo que al no haberse recibido manifestación de oposición alguna; a nombre y en representación de la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Ejecutivo Federal encargada de determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; así como de declarar, cuando ello sea preciso, que un bien determinado está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, por estar comprendido en algunas de las disposiciones de esta Ley; he tenido a bien emitir la siguiente:

DECLARATORIA

PRIMERA.- Que el inmueble descrito en los considerandos 4 y 5 del presente documento, se encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación.

SEGUNDA.- Que en razón de lo anterior dicho inmueble es inalienable, imprescriptible e inembargable, razón por la cual no se encuentra sujeto a prescripción positiva o negativa, ni es objeto de acciones reivindicatorias o interdictos posesorios por parte de terceros, por su naturaleza no puede considerarse bien vacante para los efectos de los artículos 785 a 789 del Código Civil Federal.

TERCERA.- De esta forma, mientras dicho inmueble Federal continúe en uso y control por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, dicha dependencia tendrá el carácter de institución destinataria respecto de este inmueble, para los efectos de los artículos 2, fracción VI y 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, encontrándose obligada, por conducto de su responsable inmobiliario, al cumplimiento de los artículos 28, fracción I, 29, fracción XIV y 32 de la ley en cita.

CUARTA.- Que el inmueble relativo continuará sujeto al régimen de dominio público de la Federación hasta que, en su caso, sea formalizada su enajenación, previo acuerdo de desincorporación en términos de la normatividad aplicable.

QUINTA.- Publíquese esta Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, para que surta efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales.

SEXTA.- Inscríbase la presente Declaratoria como acto de certeza jurídica que acredita la naturaleza inmobiliaria federal respecto del inmueble objeto de la misma, tanto en el Registro Público de la Propiedad Federal como en el Registro Público de la Propiedad correspondiente al lugar de la ubicación del inmueble de que se trata, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 fracción V, y 48 de la Ley General de Bienes Nacionales, para efectos de publicidad y de oponibilidad ante terceros.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a los 21 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, **Luis Fernando Morales Núñez**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal denominado Administración Postal de Zihuatanejo Guerrero, ubicado en Av. de los Carteros número interior 6, colonia Centro, C.P. 40887, Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Estado de Guerrero, con superficie de 170.00 metros cuadrados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.- DSRDPF/494/2016.

DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN POSTAL DE ZIHUATANEJO GUERRERO", UBICADO EN AV. DE LOS CARTEROS NÚMERO INTERIOR 6, COLONIA CENTRO, C.P. 40887, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, ESTADO DE GUERRERO, CON SUPERFICIE DE 170.00 METROS CUADRADOS.

LUIS FERNANDO MORALES NÚÑEZ, Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32, 40, 42, fracción V, 43, 48 y 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y 1, 3, fracción X, 11 fracciones I, II, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, teniendo la Nación en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público;

2.- Que el artículo 2, fracción VII de la Ley General de Bienes Nacionales define como "Inmueble federal", el terreno con o sin construcciones de la Federación, así como aquéllos en que ejerza la posesión, control o administración a título de dueño;

3.- Que por su parte, el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales dispone que están sujetos al régimen de dominio público de la Federación los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;

4.- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, ha tenido la posesión, custodia, vigilancia y uso del inmueble Federal denominado "Administración Postal de Zihuatanejo Guerrero", ubicado en Av. de los Carteros número Interior 6, Colonia Centro, C.P. 40887, Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Estado de Guerrero, con superficie de 170.00 metros cuadrados, para la utilización de servicios públicos a su cargo, con las siguientes medidas y colindancias:

Orientación	Colindancia	Medida Metros
Norte	Lote Baldío	23.5000
Sur	Av. Carteros	32.7000
Este	Oficina de Telecomm	13.8000
Oeste	Estacionamiento	29.0000

5.- Que en razón de lo anterior, dicho inmueble se tiene identificado como un inmueble Federal y se encuentra controlado en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, con el Registro Federal Inmobiliario 12-13015-1.

6.- Que acorde a las consideraciones anteriores, el inmueble objeto de la presente Declaratoria es un inmueble Federal que se ajusta al supuesto previsto en el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales; por lo que con fecha 18 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo tendiente a emitir la presente Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación en términos del artículo 29, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales; y

7.- Que con fecha 25 de agosto de 2016 venció el término legal dispuesto para oponerse al procedimiento citado en el considerando anterior, por lo que al no haberse recibido manifestación de oposición alguna; a nombre y en representación de la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Ejecutivo Federal encargada de determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; así como de declarar, cuando ello sea preciso, que un bien determinado está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, por estar comprendido en algunas de las disposiciones de esta Ley; he tenido a bien emitir la siguiente:

DECLARATORIA

PRIMERA.- Que el inmueble descrito en los considerandos 4 y 5 del presente documento, se encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación.

SEGUNDA.- Que en razón de lo anterior dicho inmueble es inalienable, imprescriptible e inembargable, razón por la cual no se encuentra sujeto a prescripción positiva o negativa, ni es objeto de acciones reivindicatorias o interdictos posesorios por parte de terceros, por su naturaleza no puede considerarse bien vacante para los efectos de los artículos 785 a 789 del Código Civil Federal.

TERCERA.- De esta forma, mientras dicho inmueble Federal continúe en uso y control por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, dicha dependencia tendrá el carácter de institución destinataria respecto de este inmueble, para los efectos de los artículos 2, fracción VI y 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, encontrándose obligada, por conducto de su responsable inmobiliario, al cumplimiento de los artículos 28, fracción I, 29, fracción XIV y 32 de la ley en cita.

CUARTA.- Que el inmueble relativo continuará sujeto al régimen de dominio público de la Federación hasta que, en su caso, sea formalizada su enajenación, previo acuerdo de desincorporación en términos de la normatividad aplicable.

QUINTA.- Publíquese esta Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, para que surta efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 101 fracción III de la Ley General de Bienes Nacionales.

SEXTA.- Inscríbase la presente Declaratoria como acto de certeza jurídica que acredita la naturaleza inmobiliaria federal respecto del inmueble objeto de la misma, tanto en el Registro Público de la Propiedad Federal como en el Registro Público de la Propiedad correspondiente al lugar de la ubicación del inmueble de que se trata, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 fracción V, y 48 de la Ley General de Bienes Nacionales, para efectos de publicidad y de oponibilidad ante terceros.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a los 21 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, **Luis Fernando Morales Núñez**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-98-88 hectáreas de terrenos de agostadero de uso común, del ejido Santa Ana Tlachiahualpa, Municipio de Temascalapa, Edo. de Méx.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo de la propia Constitución; 13 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 93, fracción V, y 94 de la Ley Agraria, en relación con el artículo 5o., fracciones IV y VI, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y

RESULTANDO

PRIMERO.- Que el crecimiento desordenado de las poblaciones ubicadas en el Municipio de Temascalapa, Estado de México, ha provocado que sobre los terrenos del ejido denominado “SANTA ANA TLACHIAHUALPA”, se hayan establecido asentamientos humanos irregulares, lo que ha dado lugar a inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra para los ejidatarios y los poseedores de las construcciones asentadas en dichos predios ejidales, además de dificultar el acceso a los servicios públicos básicos para una subsistencia digna.

SEGUNDO.- Que para resolver la situación a que se refiere el resultando que antecede, mediante oficio número 1.0/265/2013 de 7 de octubre de 2013, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la expropiación de 38-15-78 hectáreas, de terrenos del ejido denominado “SANTA ANA TLACHIAHUALPA”, Municipio de Temascalapa, Estado de México, para destinarlos a su Regularización y Titulación Legal mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupan, la venta de los lotes vacantes a los terceros que le soliciten un lote, así como la donación de las áreas necesarias para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y municipales en la zona, conforme a lo establecido en los artículos 93, fracción V y 94 de la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley.

TERCERO.- Que el expediente fue registrado con el número 13635/CORETT. El núcleo agrario fue notificado de la instauración del procedimiento expropiatorio a través de los integrantes del Comisariado Ejidal, mediante cédula de notificación de 25 de noviembre de 2014, recibida el mismo día, sin que hayan manifestado inconformidad al respecto.

Iniciado el procedimiento relativo a los trabajos técnicos e informativos, se comprobó que existe una superficie real por expropiar de 37-98-88 hectáreas, de terrenos de agostadero de uso común.

CUARTO.- Que terminados los trabajos técnicos e informativos mencionados en el resultando anterior y analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de 22 de noviembre de 1928, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1929 y ejecutada el 12 de enero del mismo año, se concedió por concepto de dotación de tierras para constituir el ejido denominado “SANTA ANA TLACHIAHUALPA”, de la Municipalidad de Temascalapa, ex-Distrito de Otumba, Estado de México, una superficie de 613-52-00 hectáreas, para beneficiar a 220 campesinos capacitados en materia agraria; y por Resolución Presidencial de 8 de septiembre de 1937, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 1939, se concedió por concepto de ampliación de ejidos al núcleo agrario denominado “SANTA ANA TLACHIAHUALPA”, Municipio de Temascalapa, Estado de México, una superficie de 675-00-00 hectáreas, para beneficiar a 182 campesinos capacitados en materia agraria, ejecutándose dicha Resolución en forma parcial el 6 de noviembre de 1963, entregándose una superficie de 605-00-00 hectáreas.

QUINTO.- Que por acuerdo de Asamblea de Ejidatarios de 8 de diciembre de 1994, se determinó la delimitación, destino y asignación de las tierras del ejido denominado “SANTA ANA TLACHIAHUALPA", Municipio de Temascalapa, Estado de México.

SEXTO.- Que por acuerdo de Asamblea de Ejidatarios de 21 de julio de 2001, el núcleo agrario denominado “SANTA ANA TLACHIAHUALPA”, Municipio de Temascalapa, Estado de México, manifestó su anuencia con la presente expropiación, a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

SÉPTIMO.- Que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización, mediante avalúo con número genérico G-12168-ZNC y secuencial 03-15-1523 de 27 de noviembre de 2015, con vigencia de un año contado a partir de la fecha de su emisión, en el cual se consideró para fijar el monto de la indemnización la cantidad que se cobrará por la regularización como lo prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria y le asignó como valor unitario el de $44,066.40 (CUARENTA Y CUATRO MIL, SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) por hectárea, por lo que el monto de la indemnización a cubrir por la expropiación de una superficie de 37-98-88 hectáreas, de terrenos de agostadero es de $1'674,029.65 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.).

OCTAVO.- Que existe en las constancias la opinión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de 1 de octubre de 2013, emitida por la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, en la cual se consideró procedente la expropiación, opinión que el 26 de mayo de 2015 fue ratificada y únicamente rectificada en lo que respecta a la superficie real que se obtuvo de los trabajos técnicos e informativos referidos en el resultando tercero de este Decreto, y actualizada el 9 de agosto de 2016; así como el Dictamen de 9 de diciembre de 2015, emitido por la Dirección General de la Propiedad Rural de dicha Secretaría, relativo a la legal integración del expediente sobre la solicitud de expropiación, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en el presente caso se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 94 de la Ley Agraria, y se otorgó la garantía de audiencia previa al núcleo agrario a través de los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado "SANTA ANA TLACHIAHUALPA", ubicado en el Municipio de Temascalapa, Estado de México, como consta en la notificación que le fue formulada, sin que en el caso hayan manifestado inconformidad con el procedimiento expropiatorio materia del presente Decreto.

SEGUNDO.- Que la superficie objeto de la expropiación permitirá a los ejidatarios y posesionarios que conforman el asentamiento humano irregular dentro del centro de población agrario "SANTA ANA TLACHIAHUALPA", Municipio de Temascalapa, Estado de México, adquirir la propiedad de las tierras que poseen y, en consecuencia, contar con las condiciones jurídicas que posibiliten incorporar dichas superficies al desarrollo urbano y así tener acceso a los servicios públicos.

TERCERO.- Que de las constancias existentes en el expediente integrado con motivo de la solicitud de expropiación que obra en la Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, resulta que se cumple con las causas de utilidad pública, consistentes en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en el poblado "SANTA ANA TLACHIAHUALPA", Municipio de Temascalapa, Estado de México, así como la ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, por lo que es procedente que se decrete la expropiación solicitada, por apegarse a lo que establecen los artículos 27, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, fracción V, y 94 de la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en relación con el artículo 5o., fracciones IV y VI, de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Esta expropiación que comprende la superficie de 37-98-88 hectáreas, de terrenos de agostadero de uso común, pertenecientes al ejido "SANTA ANA TLACHIAHUALPA", Municipio de Temascalapa, Estado de México, será a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la cual las destinará a su regularización y titulación legal mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupan, la venta de los lotes vacantes a los terceros que le soliciten un lote, así como la donación de las áreas necesarias para equipamiento, infraestructura, y servicios urbanos y municipales en la zona, debiéndose cubrir por la citada Comisión la cantidad de $1'674,029.65 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.) por concepto de indemnización, sustentada en avalúo con número genérico G-12168-ZNC y secuencial 03-15-1523 de 27 de noviembre de 2015, emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la cual se pagará a favor del ejido de referencia o a quien acredite tener derecho a ésta sobre los terrenos de uso común en términos del resultando séptimo del presente Decreto.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-98-88 hectáreas (TREINTA Y SIETE HECTÁREAS, NOVENTA Y OCHO ÁREAS, OCHENTA Y OCHO CENTIÁREAS) de terrenos de agostadero de uso común, del ejido "SANTA ANA TLACHIAHUALPA", Municipio de Temascalapa, Estado de México, a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la cual los destinará a su regularización y titulación legal mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupan, la venta de los lotes vacantes a los terceros que le soliciten un lote, así como la donación de las áreas necesarias para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y municipales en la zona.

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de la Propiedad Rural.

SEGUNDO.- Queda a cargo de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra pagar por concepto de indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad de $1'674,029.65 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.), suma que pagará en términos de los artículos 94 y 96 de la Ley Agraria, y 77 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados de manera definitiva, mediante el pago que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste sobre los terrenos de uso común, o depósito que hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, establecerá garantía suficiente.

El Fideicomiso mencionado cuidará el exacto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Agraria y, en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto, o si transcurrido un plazo de cinco años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, ejercitará las acciones necesarias para reclamar la reversión parcial o total, según corresponda, de los bienes expropiados. Obtenida la reversión, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales necesarias para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94, último párrafo, de la Ley Agraria y 85 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, sólo procederá a su ejecución cuando la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra haya acreditado el pago o depósito de la indemnización señalada en el resolutivo que antecede; la inobservancia de esta disposición será motivo de sujeción a lo establecido en el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CUARTO.- La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra llevará a cabo la regularización de la tenencia de la tierra de conformidad con las disposiciones que establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, la legislación local en materia de desarrollo urbano, los avalúos que practique el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y los lineamientos que, en su caso, señale la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

QUINTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido "SANTA ANA TLACHIAHUALPA", Municipio de Temascalapa, Estado de México, en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro Público de la Propiedad estatal o municipal correspondiente; notifíquese y ejecútese.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.- **Enrique Peña Nieto**.- Rúbrica.- La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, **María del Rosario Robles Berlanga**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 28-21-21 hectáreas de terrenos de temporal de uso común, del ejido Chametla, Municipio de La Paz, B.C.S.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo, de la propia Constitución; 13, 36 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 93, fracción VII, y 94 de la Ley Agraria, y

RESULTANDO

PRIMERO.- Que por oficio número 1.2.302 18459 de 10 de diciembre de 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la expropiación de 30-12-49.20 hectáreas, de terrenos pertenecientes al ejido denominado “CHAMETLA”, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, para destinarlos a la carretera Transpeninsular Benito Juárez, tramos Entronque Aeropuerto-La Paz-Carretera al Norte y La Paz-Carretera al Sur, conforme a lo establecido en el artículo 93, fracción VII, de la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley.

SEGUNDO.- Que el expediente fue registrado con el número 13461/SCT. El núcleo agrario fue notificado de la instauración del procedimiento expropiatorio a través de los integrantes del Comisariado Ejidal mediante oficio número 1673 de 21 de junio de 2011, recibido el mismo día, sin que hayan manifestado inconformidad al respecto.

Iniciado el procedimiento relativo a los trabajos técnicos e informativos, se comprobó que existe una superficie real por expropiar de 28-21-21 hectáreas, de terrenos de temporal de uso común.

TERCERO.- Que la superficie que se expropia se encuentra ocupada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la carretera Transpeninsular Benito Juárez, tramos Entronque Aeropuerto-La Paz-Carretera al Norte y La Paz-Carretera al Sur, por tanto, la citada superficie no es susceptible de labores agrícolas, por lo que procede tramitar el presente instrumento, a fin de regularizar la situación jurídica imperante y, en consecuencia, el núcleo agrario afectado se encuentre en aptitud de recibir el pago de la indemnización correspondiente.

CUARTO.- Que terminados los trabajos técnicos e informativos mencionados en el resultando segundo y analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de 31 de enero de 1940, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril del mismo año, se concedió por concepto de dotación de tierras para constituir el ejido denominado “CHAMETLA”, Delegación de La Paz, Distrito Sur de la Baja California, una superficie de 825-00-00 hectáreas, para beneficiar a 24 campesinos capacitados en materia agraria, más la parcela escolar, ejecutándose parcialmente el 16 de octubre de 1943, entregándose una superficie de 726-00-00 hectáreas; por Resolución Presidencial de 4 de mayo de 1976, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del mismo año y ejecutada el 3 de julio de 1977, se concedió por concepto de ampliación de ejido al núcleo agrario denominado “CHAMETLA”, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, una superficie de 3,228-18-00 hectáreas, para beneficiar a 34 campesinos capacitados en materia agraria, y a la unidad agrícola industrial para la mujer; por Decreto del Ejecutivo Federal de 27 de abril de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del mismo año, se expropió al ejido denominado “CHAMETLA”, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, una superficie de 82-14-94.86 hectáreas, a favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para destinarse a la constitución de reservas territoriales, desarrollo urbano y vivienda de interés social, en los términos del plan director urbano y la declaratoria de reservas del centro de población de La Paz, Baja California Sur; por Decreto del Ejecutivo Federal de 17 de noviembre de 1989, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del mismo año, se expropió al ejido denominado “CHAMETLA”, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, una superficie de 74-83-09.16 hectáreas, a favor del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para destinarse a las instalaciones de las plantas de tratamiento de aguas negras de la Ciudad de La Paz; y por Decreto del Ejecutivo Federal de 5 de agosto de 1991, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 del mismo mes y año, se expropió al ejido denominado “CHAMETLA”, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, una superficie de 85-21-41.02 hectáreas, a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para destinarse a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Capital del Estado de Baja California Sur.

QUINTO.- Que por acuerdo de Asamblea de Ejidatarios de 10 de marzo de 1998, se determinó la delimitación, destino y asignación de las tierras del ejido denominado "CHAMETLA", Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.

SEXTO.- Que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización mediante avalúo con número genérico G-46953-B-ZNA y secuencial 01-15-564 de 25 de noviembre de 2015, con vigencia de un año contado a partir de la fecha de su emisión, en el cual se consideró el valor comercial que prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria, y le asignó como valor unitario para los terrenos de temporal con influencia urbana el de $8'045,450.47 (OCHO MILLONES, CUARENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 47/100 M.N.) por hectárea, por lo que el monto de la indemnización a cubrir por las 28-21-21 hectáreas, a expropiar es de $226'979,053.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

SÉPTIMO.- Que existe en las constancias la opinión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de 2 de julio de 2013, emitida a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, en la cual consideró procedente la expropiación, opinión que el 21 de enero de 2015, 22 de enero de 2016 y 8 de julio de 2016 fue ratificada y únicamente rectificada en lo que respecta a la superficie real que se obtuvo de los trabajos técnicos e informativos referidos en el resultando segundo de este Decreto; así como el dictamen de 21 de diciembre de 2015, emitido a través de la Dirección General de la Propiedad Rural, relativo a la legal integración del expediente sobre la solicitud de expropiación, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que no obstante que la presente expropiación fue solicitada originalmente a la Secretaría de la Reforma Agraria, con motivo de las reformas y adiciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante Decreto de 26 de diciembre de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la facultad para llevar a cabo el procedimiento expropiatorio corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la citada Ley.

SEGUNDO.- Que aun cuando la Resolución Presidencial de dotación de tierras ubicó al ejido que nos ocupa en la Delegación de La Paz, Distrito Sur de la Baja California, de conformidad con el Decreto de 7 de octubre de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 del mismo mes y año, se creó el Estado de Baja California Sur, por lo que el presente procedimiento expropiatorio deberá culminar como "CHAMETLA", Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.

TERCERO.- Que en el presente caso se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 94 de la Ley Agraria, y se otorgó la garantía de audiencia previa al ejido "CHAMETLA", Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, como consta en la notificación que fue formulada a través de los integrantes del Comisariado Ejidal, sin que en el caso hayan manifestado inconformidad con el procedimiento expropiatorio materia del presente Decreto.

CUARTO.- Que la carretera Transpeninsular Benito Juárez, tramos Entronque Aeropuerto-La Paz-Carretera al Norte y La Paz-Carretera al Sur, será una vía general de comunicación que formará parte de la red de ejes troncales con los que se comunicará al país; que contribuirá a la modernización y desarrollo integral de la región; facilitará la transportación de personas y bienes entre las ciudades de Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz, en el Estado de Baja California Sur, dentro de los mejores parámetros de seguridad, eficiencia y costo; permitirá la comunicación en forma directa hacia el norte del estado, así como al estado vecino de Baja California, o a través de esa misma vía con destino a las ciudades Constitución, Santa Rosalía, Guerrero Negro, Ensenada y Tijuana; llegará a la frontera norte del país en los límites de los Estados Unidos de Norteamérica; permitirá dar salida en forma eficiente a la producción pecuaria y comercial de los Estados de Baja California; apoyará al turismo que por vía terrestre recorre dichos estados que llega por vía aérea; disminuirá los índices de contaminación ambiental que afecta las zonas urbanas de estos poblados y reducirá los costos de operación de los vehículos de transporte de pasajeros, de turismo, de carga y particular que utilizarán dicha vía de comunicación.

QUINTO.- Que de las constancias existentes en el expediente integrado con motivo de la solicitud de expropiación que obra en la Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, resulta que se cumple con la causa de utilidad pública, consistente en la construcción de carreteras y demás obras que faciliten el transporte, por lo que es procedente que se decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo que establecen los artículos 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93, fracción VII, y 94 de la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

Esta expropiación que comprende la superficie de 28-21-21 hectáreas, de terrenos de temporal de uso común, pertenecientes al ejido denominado “CHAMETLA”, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, será a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual los destinará a la carretera Transpeninsular Benito Juárez, tramos Entronque Aeropuerto-La Paz-Carretera al Norte y La Paz-Carretera al Sur, debiéndose cubrir por la citada dependencia la cantidad de $226’979,053.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por concepto de indemnización, sustentada en avalúo con número genérico G-46953-B-ZNA y secuencial 01-15-564 de 25 de noviembre de 2015, emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la cual se pagará a favor del ejido de referencia o a las personas que acrediten tener derecho a ésta por los terrenos de uso común, en términos del resultando sexto del presente Decreto.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 28-21-21 hectáreas, (VEINTIOCHO HECTÁREAS, VEINTIUNA ÁREAS, VEINTIUNA CENTIÁREAS) de terrenos de temporal de uso común, del ejido “CHAMETLA”, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual los destinará a la carretera Transpeninsular Benito Juárez, tramos Entronque Aeropuerto-La Paz-Carretera al Norte y La Paz-Carretera al Sur.

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de la Propiedad Rural.

SEGUNDO.- Queda a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagar por concepto de indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad de $226’979,053.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), suma que pagará en términos de los artículos 94 y 96 de la Ley Agraria, y 77 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados de manera definitiva, mediante el pago que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste por los terrenos de uso común, o depósito que hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, establecerá garantía suficiente.

El Fideicomiso mencionado cuidará el exacto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Agraria y, en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto, o si transcurrido un plazo de cinco años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, ejercitará las acciones necesarias para reclamar la reversión parcial o total, según corresponda, de los bienes expropiados. Obtenida la reversión, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales necesarias para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94, último párrafo, de la Ley Agraria y 85 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, sólo procederá a su ejecución cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya acreditado el pago o depósito de la indemnización señalada en el resolutivo que antecede; la inobservancia de esta disposición será motivo de sujeción a lo establecido en el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido denominado “CHAMETLA”, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro Público de la Propiedad estatal o municipal correspondiente; notifíquese y ejecútese.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.- **Enrique Peña Nieto**.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, **Gerardo Ruiz Esparza**.- Rúbrica.- La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, **María del Rosario Robles Berlanga**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Infraestructura, Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Estado de Guanajuato.

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Infraestructura, Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y al Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional perteneciente al Estado de Guanajuato, suscrito el 4 de mayo del año dos mil dieciséis

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT (EN ADELANTE "LA VERTIENTE HÁBITAT"), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 Y AL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN LO SUCESIVO "LA SEDATU", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. OMAR CONDE CONTRERAS; DELEGADO ESTATAL DE "LA SEDATU" EN GUANAJUATO; Y POR OTRA, EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GUANAJUATO, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JUAN RENDÓN LÓPEZ, ASISTIDO POR EL LIC. FÉLIX FRÍAS ENRÍQUEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que acorde al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; señalándose en tal disposición fundamental que a través de la Ley se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

II. Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, estableciéndose en el artículo 28 de la Ley de Planeación que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los Programas que de él emanen, deberán especificar las acciones objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

III. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias, para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva, así como generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

IV. Que el artículo 33 de la Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo.

V. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en el inciso b), fracción I, del artículo 29, que en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de Infraestructura); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación; y llevar los gobiernos municipales un registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones.

VI. Que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene entre otras atribuciones la de impulsar, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que

sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; la planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.

VII. Que mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 2015, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016 (en adelante "LAS REGLAS"), el cual es instrumentado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

VIII. Que "EL PROGRAMA", cuenta:

VIII.1. A nivel central con una Unidad Responsable del Programa (en adelante la "URP"), la cual se denomina Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios.

VIII.2. Con un objetivo general, el que consiste en mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza.

VIII.3. Con un objetivo específico, el que consiste en efectuar intervenciones públicas integrales mediante la ejecución de proyectos que correspondan a una o varias de las siguientes premisas:

i. Dotar de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable.

ii. Rescatar calles y espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad y mejorar la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios.

iii. Ejecutar proyectos de Participación Social en los Centros de Desarrollo Comunitario, Espacios Públicos y Unidades Habitacionales, que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de los habitantes y atiendan la integralidad de las personas y su comunidad, el desarrollo de habilidades para el trabajo, la promoción de la equidad de género e inclusión social, la organización y la participación comunitaria.

iv. Rehabilitar áreas comunes que se encuentren en viviendas en condominio, Unidades y Desarrollos Habitacionales, mediante obras de mejoramiento físico.

v. Mejorar la disponibilidad de servicios básicos, así como la calidad y espacios de la vivienda, bajo un enfoque incluyente y sustentable, mediante obras de ampliación y/o mejoramiento; e infraestructura social comunitaria, y la conectividad, seguridad y accesibilidad en los desplazamientos de los peatones, usuarios de bicicleta y del transporte público.

vi. Incentivar la implementación de proyectos de alto impacto social que sean replicables y escalables por los municipios, y que busquen la concurrencia de recursos con otras entidades del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y la sociedad.

vii. Fortalecer las capacidades de las instancias ejecutoras en términos de formulación de proyectos, monitoreo y ejecución del programa.

viii. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la incorporación gradual de la Perspectiva de Género.

ix. Promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura y de mejoramiento y/o ampliación de la vivienda.

IX. Que el decreto por el que se establece en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal podrán apoyar a la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y con el propósito de contribuir al cumplimiento de sus objetivos, el Programa dará prioridad a las personas, familias, zonas y ciudades que para tales fines se determinen. Lo anterior, en adherencia al numeral 4.3 y 4.3.1, del Capítulo 4, de "LAS REGLAS" de "EL PROGRAMA".

X. Que “LAS PARTES”, han decidido conjuntar esfuerzos en el marco de “EL PROGRAMA” y “LA VERTIENTE HÁBITAT” para concretar proyectos que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad objeto del presente instrumento.

DECLARACIONES

I. "LA SEDATU" declara, a través de su representante:

1. Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o. fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre sus atribuciones, la de impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; y promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

3. Que de conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia por los servidores públicos que se establecen en su reglamento interior; contando con órganos administrativos desconcentrados que le están subordinados.

4. Que de conformidad con el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, “LA SEDATU” cuenta con Unidades Administrativas denominadas Delegaciones Estatales, y que se encuentran normadas en los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

5. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II y 36, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos, “LA SEDATU” cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las entidades federativas, las cuales la representan legalmente en su ámbito territorial; y tienen la atribución expresa de coordinar y ejecutar los asuntos, programas, proyectos y acciones de la misma dentro de su circunscripción.

6. Que de conformidad a la fracción XV, del artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Titular del Ramo cuenta con la facultad indelegable de autorizar la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, con los municipios y con las organizaciones de los sectores social y privado respectivamente, para la atención y solución de problemas relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo regional, el desarrollo agrario, el desarrollo urbano y metropolitano, así como con la promoción de infraestructura urbana y vivienda.

7. Que de conformidad con la fracción I, del numeral 5.2.1 de “LAS REGLAS”, la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, autorizó a todos y cada una de las Instancias Ejecutoras (incluyendo a las Delegaciones Federales de “LA SEDATU”) de los proyectos de “EL PROGRAMA”, para suscribir este tipo de instrumentos jurídicos para la ejecución de los proyectos y acciones que correspondan.

8. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción X y 35, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por oficio No. l-120-2946 de fecha 3 de mayo de 2016 el Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, autorizó a las delegaciones estatales la suscripción de los instrumentos jurídicos para la implementación de “LA VERTIENTE HÁBITAT”, en la ejecución de los proyectos y acciones que correspondan a “EL PROGRAMA”.

9. Que mediante oficio/nombramiento de fecha 3 de abril de 2014, el Lic. Omar Conde Contreras fue nombrado como Delegado Estatal de "LA SEDATU" en el Estado de Guanajuato.

10. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio de Coordinación, el ubicado en calle Nueva Letra F, entre calle sección 3 y calle sección 8, de la Colonia Noria Alta del Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato con Código Postal 36050.

II. "EL MUNICIPIO" declara, a través de su representante:

1. Que es una institución de orden público, autónomo para su gobierno interior y para la administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 107 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 2 y 76 fracción I, inciso K de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

2. Que el Lic. Juan Rendón López en su carácter de Presidente Municipal debidamente acreditado, con Constancia de Mayoría y Validez expedida por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de fecha 10 de junio de 2015, cuenta con las facultades necesarias para celebrar este convenio atento a lo dispuesto por el artículo 77 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

3. Que el Lic. Félix Frías Enríquez en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento cuenta con las facultades necesarias para celebrar este convenio en base al Art. 128, Fracc. XI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

4. Mediante sesión ordinaria del H. Ayuntamiento celebrada el 29 de Octubre de 2015, en el acta número 5, punto número 7, se autorizó al C. Presidente Municipal, a suscribir los convenios, contratos y demás actos jurídicos necesarios.

5. Que conoce y en su caso es su voluntad, que las obras y acciones objeto materia del presente Convenio de Coordinación, sean financiadas en coinversión con la aportación que les corresponde del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

6. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la cédula fiscal número MDH850101GTA.

7. Tener su domicilio en Calzada de los Héroes número 77, fraccionamiento San Cristóbal, código postal 37800, del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, mismo que señala para efectos de oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el presente instrumento jurídico.

III. "LAS PARTES" declaran, a través de sus representantes:

1. Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación de "EL PROGRAMA", mediante la realización del proyecto objeto de este Convenio de Coordinación.

2. Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, mediante "LA VERTIENTE HÁBITAT" se apoyará la construcción de obras de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable, de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura de "EL PROGRAMA".

3. Que el proyecto objeto de este Convenio de Coordinación no se duplica, ni contrapone con ningún otro apoyado por el gobierno federal, estatal o municipal.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 Apartado A, 115, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 36, 38, 39 y 44 de la Ley de Planeación; 1o., 4o., 54, 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 85 y 176 de su Reglamento; 7, 8, 9, 48, 49, 50 y 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 1, 41 y 42 de la Ley de Vivienda; 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 y 30 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 9, 13, 16, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA", publicadas en el Diario Oficial de la

Federación el 31 de diciembre de 2015; así como lo previsto por los artículos 80, 117 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, y 5, 6, 8, 12 y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 48 y 52 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 5 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y demás disposiciones aplicables, “LAS PARTES” celebran el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- "LAS PARTES" acuerdan conjuntar acciones y recursos para la operación de "EL PROGRAMA" en “LA VERTIENTE HÁBITAT”, a través de los proyectos de la misma, en lo sucesivo “LOS PROYECTOS”, de conformidad a los anexos técnicos de ejecución, que se adjuntan al presente instrumento y que desde este momento forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. PRIORIZACIÓN.- "LAS PARTES", acuerdan dar atención prioritaria a las zonas, municipios y localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre; esto es, las personas en situación de pobreza alimentaria extrema. Y que en la medida de sus posibilidades normativas, financieras y operativas; ajustarán su estrategia de cobertura para ampliar el acceso a los beneficios y la atención de las personas en pobreza alimentaria extrema, con base en la estimación de indicadores y el planteamiento de metas especialmente diseñadas para la población antes referida.

TERCERA. NORMATIVIDAD.- “LAS PARTES” se sujetarán a lo que establece la normativa federal y local aplicable, a “LAS REGLAS”, y al Anexo Técnico de Ejecución de cada proyecto en la operación de “EL PROGRAMA”.

CUARTA. SUBSIDIOS FEDERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.- “LAS PARTES” acuerdan que los subsidios federales y los recursos financieros locales aportados en el marco de “EL PROGRAMA”, se ejercerán en las zonas de actuación de “LA VERTIENTE HÁBITAT”, conforme lo determine “EL PROGRAMA” y “LAS REGLAS”.

QUINTA. INSTANCIA EJECUTORA.- “LAS PARTES” acuerdan que la instancia ejecutora de los proyectos seleccionados de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS”, será el MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL, en lo sucesivo para tales fines "EL EJECUTOR", quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para los proyectos en el marco de “EL PROGRAMA”, con estricto apego a “LAS REGLAS”, así como demás disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público federal. Los recursos federales que se comprometan en este Convenio de Coordinación, están sujetos a la disponibilidad de "EL PROGRAMA".

SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “EL EJECUTOR”.- "EL EJECUTOR" de los recursos se apegará estrictamente a lo dispuesto en "LAS REGLAS", y al presente instrumento, además, tendrá las responsabilidades siguientes:

a) Verificar que "LOS PROYECTOS" cumplan con los lineamientos normativos y las especificaciones técnicas, emitidas por la Unidad de Infraestructura.

b) Haber presentado "LOS PROYECTOS", el cual dispuesto metas, acciones, servicios, costos, número de beneficiarios, entre otros, mismo que será dictaminado en cuanto a su viabilidad técnica y disponibilidad presupuestal por "LA SEDATU".

c) Aplicar los recursos federales, estatales y/o municipales ministrados única y exclusivamente a "LOS PROYECTOS" señalado en la Cláusula Primera de este Instrumento, de conformidad con lo que establecen "LAS REGLAS", así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como sus respectivos Reglamentos, y demás ordenamientos aplicables.

e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante este Convenio de Coordinación, el avance físico de las acciones en ejecución, así como formular el acta de entrega-recepción de las obras terminadas y/o certificación de acciones.

f) Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero de "LOS PROYECTOS", de conformidad a "LAS REGLAS", y remitirlos a "LA SEDATU", durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior a la fecha del reporte.

g) Mantener un registro específico y actualizado mediante una subcuenta en el registro contable del ejercicio, para los recursos a que refieren las Cláusulas Quinta y Séptima del presente instrumento, así como presentar a "LA SEDATU", para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios.

h) Para las obras de infraestructura, elaborará un Programa de Mantenimiento y Conservación de "LOS PROYECTOS", que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades relacionadas con la operación y prevención de fallas, logrando así la reducción de las averías imprevistas y del tiempo de reparación, procurar la prolongación de la vida útil de los componentes, lograr los efectos de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento de las instalaciones, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio.

i) Permitir las labores de contraloría social que "LA SEDATU" establezca en coordinación con los beneficiarios.

j) La fecha de inicio de los trabajos de "LOS PROYECTOS" será a partir de que "LA SEDATU" entregue los recursos federales comprometidos conforme al calendario autorizado, y para su término se considera el día 31 de diciembre de 2016.

k) Conservar la documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberá estar resguardada, ordenada y disponible para su revisión o fiscalización correspondiente, al menos durante 5 años.

l) Supervisar las obras o acciones del proyecto autorizado, así como verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable.

m) Cumplir con las obligaciones cuando actúen como instancia ejecutora contempladas en el numeral 5.2.1 de "LAS REGLAS" y las demás que resulten aplicables.

SÉPTIMA. APORTACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, se prevé una inversión total de $8,953,390.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se integra de la manera siguiente:

"LA SEDATU" aportará $5,301,693.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), recursos con carácter de subsidios, que provienen del Ramo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", designados a “EL PROGRAMA”, sin perder su carácter federal, autorizados mediante oficio No. 510-V-0107 BIS 7, de fecha 21 de marzo de 2016;

"EL MUNICIPIO", aportará $3,651,697.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N., provenientes del Ramo 33 fondo 1 y Cuenta Corriente.

“LAS PARTES” aportarán los recursos correspondientes mediante transferencia electrónica considerando el calendario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en apego a lo establecido en el artículo 7.4 de “LAS REGLAS”, las cuales se realizarán a la cuenta productiva número 0107148917 con clabe interbancaria número 012225001071489176 radicada en Banco BBVA Bancomer S.A. sucursal 0714.

OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL EJECUTOR.- "EL EJECUTOR" será el único responsable de la realización de "LOS PROYECTOS" y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "LA SEDATU". Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL EJECUTOR", que podrá ser reclamada por "LA SEDATU" por la vía judicial correspondiente.

NOVENA. INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS.- La instrumentación de "LOS PROYECTOS" se actualizará y llevará a cabo mediante el Anexo Técnico de Ejecución y en su caso en el Anexo Técnico de Autorización, en el sistema que al efecto establezca “LA SEDATU” y que comunique a “EL EJECUTOR” y que firmados por “LAS PARTES” se integrarán a este Convenio de Coordinación.

DÉCIMA. ENLACE.- "LA SEDATU" designa para la ejecución de "LOS PROYECTOS" como enlace entre ella y "EL EJECUTOR" a DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA, SUBDELEGADO DE DESARROLLO URBANO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, quien será responsable de la supervisión y vigilancia, control y revisión de todo lo relacionado con "EL PROYECTO", incluyendo los reportes y actualización a que hacen referencia las Cláusulas Sexta y Novena de este Convenio de Coordinación.

DÉCIMA PRIMERA. VISITAS DE SEGUIMIENTO.- "EL EJECUTOR" se compromete a otorgar las facilidades necesarias a "LA SEDATU" para que ésta realice visitas de seguimiento a las obras y acciones realizadas con subsidios federales, así como para tener acceso a equipos, materiales, información, registros y documentos que estime pertinente conocer y que estén relacionados con la ejecución de las mismas.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" acuerdan que al basarse el presente instrumento en el principio de la buena fe, se podrá convenir la terminación anticipada del mismo. En el caso de que se actualizara la terminación anticipada, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los aportantes los recursos entregados para la realización del objeto del mismo, junto con los intereses que se hubieren generado. Este reintegro será a los 15 días de que opere la terminación anticipada del presente instrumento, por el monto total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la terminación anticipada del presente Convenio de Coordinación, según lo determine "LA SEDATU".

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUMPLIMIENTO ANTICIPADO.- El presente Convenio de Coordinación también se podrá dar por terminado de manera anticipada por alguna de las siguientes causas:

a) De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza;

b) Por fuerza mayor, entendiéndose un hecho humanamente inevitable.

c) Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio de Coordinación.

DÉCIMA CUARTA. USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS.- En el caso de que "EL EJECUTOR" incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos adquiridos en este Convenio de Coordinación, "LA SEDATU" y las demás partes están facultadas para iniciar las acciones jurídicas ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable.

DÉCIMA QUINTA. RECISIÓN DEL CONVENIO.- "LA SEDATU" en cualquier momento podrá rescindir el presente instrumento jurídico, sin que medie resolución judicial y sin responsabilidad alguna, cuando "EL EJECUTOR" incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) No cumplan en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio de Coordinación, así como en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "LAS REGLAS", el Anexo Técnico de ejecución del proyecto, o lo dispuesto en otras normas jurídicas federales y locales aplicables.

b) Cuando se detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento al Convenio de Coordinación y/o a sus respectivos Convenios Modificatorios.

c) Apliquen los subsidios federales y/o recursos financieros a fines distintos de los pactados.

d) Cuando no se reciba oportunamente la aportación de recursos de "EL MUNICIPIO".

e) Cuando se detecten condiciones inadecuadas de operación en obras apoyadas con recursos de "EL PROGRAMA" en "LA VERTIENTE HÁBITAT" en el año en curso o en ejercicios anteriores.

f) Por falta de entrega de información, reportes y demás documentación prevista en las "LAS REGLAS", Convenio de Coordinación y/o sus respectivos Convenios Modificatorios.

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES.- De considerarlo procedente, el presente Convenio de Coordinación y sus anexos se podrán modificar de común acuerdo por "LAS PARTES", conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan. Dichas modificaciones deberán constar por escrito en el Convenio modificatorio respectivo, y entrarán en vigor a partir de su suscripción. Las modificaciones serán suscritas por los servidores públicos competentes y debidamente acreditadas en la fecha en que se firmen los documentos y se entenderán incorporadas al instrumento principal del cual surgen.

DÉCIMA SÉPTIMA. EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la Cláusula Séptima del presente instrumento, corresponderá a "LA SEDATU", a la Secretaría Función Pública, al Órgano Interno de Control en “LA SEDATU” y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMA OCTAVA. REVISIÓN DEL CONTENIDO.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento “LAS PARTES” se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- “LAS PARTES”, manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, así como convienen en sujetarse para todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, que no puedan ser resueltas de común acuerdo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIGÉSIMA. CONTROL PRESUPUESTAL.- "LA SEDATU" en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el control presupuestal, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio de Coordinación, así como de los recursos que se aporten.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONTROL DE ACCIONES.- “LAS PARTES” serán responsables de que durante la ejecución de "LOS PROYECTOS" objeto de este Convenio de Coordinación se cumplan las disposiciones señaladas en el artículo 17, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; así como el numeral 12.3 y demás aplicables de “LAS REGLAS”, relativos a acciones de contraloría social, participación social, difusión y publicidad.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TRANSPARENCIA.- Para el transparente ejercicio de los Recursos federales “LAS PARTES” convienen que en todas las actividades de difusión y publicidad que lleven a cabo “EL EJECUTOR” sobre las obras y acciones materia de “EL PROGRAMA”, apoyadas parcial o totalmente con subsidios federales, deberán observar las directrices, lineamientos y normativa federal aplicable.

La publicidad, información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberá identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, los artículos 17 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, e incluir la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

VIGÉSIMA TERCERA. RECURSOS NO EJERCIDOS.- “EL EJECUTOR” se compromete a ejercer los recursos federales descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego a las Reglas de Operación del Programa vigentes y demás normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se hubieren destinado a los fines autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal; en caso de que se actualice el supuesto de Terminación anticipada, “EL EJECUTOR” deberá realizar el reintegro de recursos dentro de los siguientes 15 días naturales posteriores a la firma del Convenio respectivo. En ambos casos deberá entregar a la Delegación de “LA SEDATU”, recibo o constancia de dicha devolución, en términos de lo señalado por la Ley de Tesorería de la Federación.

VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2016.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Coordinación en 4 tantos en la ciudad de Guanajuato, a los 4 días del mes de mayo de 2016.- Por la SEDATU: el Delegado Estatal en Guanajuato, **Omar Conde Contreras**.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, **Juan Rendón López**.- Rúbrica.- El Secretario del H. Ayuntamiento de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, **Félix Frías Enríquez**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Infraestructura, Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Pénjamo, Estado de Guanajuato.

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Infraestructura, Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y al Municipio de Pénjamo perteneciente al Estado de Guanajuato, suscrito el 4 de mayo del año dos mil dieciséis

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT (EN ADELANTE "LA VERTIENTE HÁBITAT"), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 Y AL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN LO SUCESIVO "LA SEDATU", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. OMAR CONDE CONTRERAS; DELEGADO ESTATAL DE "LA SEDATU" EN GUANAJUATO; Y POR OTRA, EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GUANAJUATO, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JUAN JOSÉ GARCÍA LÓPEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR GREGORIO MENDOZA FLORES, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que acorde al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; señalándose en tal disposición fundamental que a través de la Ley se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

II. Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, estableciéndose en el artículo 28 de la Ley de Planeación que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los Programas que de él emanen, deberán especificar las acciones objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

III. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias, para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva, así como generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

IV. Que el artículo 33 de la Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo.

V. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en el inciso b), fracción I, del artículo 29, que en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de Infraestructura); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación; y llevar los gobiernos municipales un registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones.

VI. Que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene entre otras atribuciones la de impulsar, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean

propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; la planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.

VII. Que mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 2015, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016 (en adelante "LAS REGLAS"), el cual es instrumentado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

VIII. Que "EL PROGRAMA", cuenta:

VIII.1. A nivel central con una Unidad Responsable del Programa (en adelante la "URP"), la cual se denomina Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios.

VIII.2. Con un objetivo general, el que consiste en mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza.

VIII.3. Con un objetivo específico, el que consiste en efectuar intervenciones públicas integrales mediante la ejecución de proyectos que correspondan a una o varias de las siguientes premisas:

i. Dotar de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable.

ii. Rescatar calles y espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad y mejorar la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios.

iii. Ejecutar proyectos de Participación Social en los Centros de Desarrollo Comunitario, Espacios Públicos y Unidades Habitacionales, que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de los habitantes y atiendan la integralidad de las personas y su comunidad, el desarrollo de habilidades para el trabajo, la promoción de la equidad de género e inclusión social, la organización y la participación comunitaria.

iv. Rehabilitar áreas comunes que se encuentren en viviendas en condominio, Unidades y Desarrollos Habitacionales, mediante obras de mejoramiento físico.

v. Mejorar la disponibilidad de servicios básicos, así como la calidad y espacios de la vivienda, bajo un enfoque incluyente y sustentable, mediante obras de ampliación y/o mejoramiento; e infraestructura social comunitaria, y la conectividad, seguridad y accesibilidad en los desplazamientos de los peatones, usuarios de bicicleta y del transporte público.

vi. Incentivar la implementación de proyectos de alto impacto social que sean replicables y escalables por los municipios, y que busquen la concurrencia de recursos con otras entidades del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y la sociedad.

vii. Fortalecer las capacidades de las instancias ejecutoras en términos de formulación de proyectos, monitoreo y ejecución del programa.

viii. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la incorporación gradual de la Perspectiva de Género.

ix. Promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura y de mejoramiento y/o ampliación de la vivienda.

IX. Que el decreto por el que se establece en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal podrán apoyar a la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y con el propósito de contribuir al cumplimiento de sus objetivos, el Programa dará prioridad a las personas, familias, zonas y ciudades que para tales fines se determinen. Lo anterior, en adherencia al numeral 4.3 y 4.3.1, del Capítulo 4, de "LAS REGLAS" de "EL PROGRAMA".

X. Que “LAS PARTES”, han decidido conjuntar esfuerzos en el marco de “EL PROGRAMA” y “LA VERTIENTE HÁBITAT” para concretar proyectos que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad objeto del presente instrumento.

DECLARACIONES

I. "LA SEDATU" declara, a través de su representante:

1. Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o. fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre sus atribuciones, la de impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; y promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

3. Que de conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia por los servidores públicos que se establecen en su reglamento interior; contando con órganos administrativos desconcentrados que le están subordinados.

4. Que de conformidad con el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, “LA SEDATU” cuenta con Unidades Administrativas denominadas Delegaciones Estatales, y que se encuentran normadas en los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

5. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II y 36, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos, “LA SEDATU” cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las entidades federativas, las cuales la representan legalmente en su ámbito territorial; y tienen la atribución expresa de coordinar y ejecutar los asuntos, programas, proyectos y acciones de la misma dentro de su circunscripción.

6. Que de conformidad a la fracción XV, del artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Titular del Ramo cuenta con la facultad indelegable de autorizar la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, con los municipios y con las organizaciones de los sectores social y privado respectivamente, para la atención y solución de problemas relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo regional, el desarrollo agrario, el desarrollo urbano y metropolitano, así como con la promoción de infraestructura urbana y vivienda.

7. Que de conformidad con la fracción I, del numeral 5.2.1 de “LAS REGLAS”, la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, autorizó a todos y cada una de las Instancias Ejecutoras (incluyendo a las Delegaciones Federales de “LA SEDATU”) de los proyectos de “EL PROGRAMA”, para suscribir este tipo de instrumentos jurídicos para la ejecución de los proyectos y acciones que correspondan.

8. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción X y 35, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por oficio No. I-120-2946 de fecha 3 de mayo de 2016 el Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, autorizó a las delegaciones estatales la suscripción de los instrumentos jurídicos para la implementación de “LA VERTIENTE HÁBITAT”, en la ejecución de los proyectos y acciones que correspondan a “EL PROGRAMA”.

9. Que mediante oficio/nombramiento de fecha 3 de abril de 2014, el Lic. Omar Conde Contreras fue nombrado como Delegado Estatal de “LA SEDATU” en el Estado de Guanajuato.

10. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio de Coordinación, el ubicado en calle Nueva Letra F, entre calle sección 3 y calle sección 8, de la Colonia Noria Alta del Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato con Código Postal 36050.

II. "EL MUNICIPIO" declara, a través de su representante:

1. Es una institución de orden público, autónomo en su régimen interior y para la administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo previsto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículo 8 fracción III de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2. El Presidente Municipal Dr. Juan José García López, acredita la personalidad con que comparece con la certificación del acta de la sesión solemne de instalación del H. Ayuntamiento del Municipio Pénjamo, Guanajuato, de fecha 10 octubre de 2015 dos mil quince, donde consta toma de posesión de su cargo y cuenta con las facultades necesarias para la celebrar el presente instrumento jurídico de conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, y con el Acta de Ayuntamiento donde se autoriza para tales efectos.

3. Que el Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Omar Gregorio Mendoza Flores acredita su personalidad con la certificación del acuerdo del H. Ayuntamiento tomado en sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2015 y comparece a la firma del presente instrumento, con las facultades que le confiere el artículo 128 fracciones IX y XI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

4. Que conoce y en su caso es su voluntad, que las obras y acciones objeto materia del presente Convenio de Coordinación, sean financiadas en coinversión con la aportación que les corresponde del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

5. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la cédula fiscal número MPE850101V40.

6. Tener su domicilio en Juárez # 5, colonia zona centro mismo que señala para efectos de oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el presente instrumento jurídico.

III. "LAS PARTES" declaran, a través de sus representantes:

1. Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación de "EL PROGRAMA", mediante la realización del proyecto objeto de este Convenio de Coordinación.

2. Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, mediante "LA VERTIENTE HÁBITAT" se apoyará la construcción de obras de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable, de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura de "EL PROGRAMA".

3. Que el proyecto objeto de este Convenio de Coordinación no se duplica, ni contrapone con ningún otro apoyado por el gobierno federal, estatal o municipal.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 Apartado A, 115, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 36, 38, 39 y 44 de la Ley de Planeación; 1o., 4o., 54, 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 85 y 176 de su Reglamento; 7, 8, 9, 48, 49, 50 y 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 1, 41 y 42 de la Ley de Vivienda; 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 y 30 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 9, 13, 16, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015; así como lo previsto por los artículos 80, 117 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, y 5, 6, 8, 12 y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 48 y 52 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 5 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y demás disposiciones aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- "LAS PARTES" acuerdan conjuntar acciones y recursos para la operación de "EL PROGRAMA" en “LA VERTIENTE HÁBITAT”, a través de los proyectos de la misma, en lo sucesivo “LOS PROYECTOS”, de conformidad a los anexos técnicos de ejecución, que se adjuntan al presente instrumento y que desde este momento forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. PRIORIZACIÓN.- "LAS PARTES", acuerdan dar atención prioritaria a las zonas, municipios y localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre; esto es, las personas en situación de pobreza alimentaria extrema. Y que en la medida de sus posibilidades normativas, financieras y operativas; ajustarán su estrategia de cobertura para ampliar el acceso a los beneficios y la atención de las personas en pobreza alimentaria extrema, con base en la estimación de indicadores y el planteamiento de metas especialmente diseñadas para la población antes referida.

TERCERA. NORMATIVIDAD.- “LAS PARTES” se sujetarán a lo que establece la normativa federal y local aplicable, a “LAS REGLAS”, y al Anexo Técnico de Ejecución de cada proyecto en la operación de “EL PROGRAMA”.

CUARTA. SUBSIDIOS FEDERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.- “LAS PARTES” acuerdan que los subsidios federales y los recursos financieros locales aportados en el marco de “EL PROGRAMA”, se ejercerán en las zonas de actuación de “LA VERTIENTE HÁBITAT”, conforme lo determine “EL PROGRAMA” y “LAS REGLAS”.

QUINTA. INSTANCIA EJECUTORA.- “LAS PARTES” acuerdan que la instancia ejecutora de los proyectos seleccionados de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS”, será el MUNICIPIO DE PÉNJAMO en lo sucesivo para tales fines "EL EJECUTOR", quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para los proyectos en el marco de “EL PROGRAMA”, con estricto apego a “LAS REGLAS”, así como demás disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público federal. Los recursos federales que se comprometan en este Convenio de Coordinación, están sujetos a la disponibilidad de "EL PROGRAMA".

SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “EL EJECUTOR”.- "EL EJECUTOR" de los recursos se apegará estrictamente a lo dispuesto en "LAS REGLAS", y al presente instrumento, además, tendrá las responsabilidades siguientes:

a) Verificar que "LOS PROYECTOS" cumplan con los lineamientos normativos y las especificaciones técnicas, emitidas por la Unidad de Infraestructura.

b) Haber presentado "LOS PROYECTOS", el cual dispuesto metas, acciones, servicios, costos, número de beneficiarios, entre otros, mismo que será dictaminado en cuanto a su viabilidad técnica y disponibilidad presupuestal por "LA SEDATU".

c) Aplicar los recursos federales, estatales y/o municipales ministrados única y exclusivamente a "LOS PROYECTOS" señalado en la Cláusula Primera de este Instrumento, de conformidad con lo que establecen "LAS REGLAS", así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como sus respectivos Reglamentos, y demás ordenamientos aplicables.

e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante este Convenio de Coordinación, el avance físico de las acciones en ejecución, así como formular el acta de entrega-recepción de las obras terminadas y/o certificación de acciones.

f) Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero de "LOS PROYECTOS", de conformidad a "LAS REGLAS", y remitirlos a "LA SEDATU", durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior a la fecha del reporte.

g) Mantener un registro específico y actualizado mediante una subcuenta en el registro contable del ejercicio, para los recursos a que refieren las Cláusulas Quinta y Séptima del presente instrumento, así como presentar a "LA SEDATU", para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios.

h) Para las obras de infraestructura, elaborará un Programa de Mantenimiento y Conservación de "LOS PROYECTOS", que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades relacionadas con la operación y prevención de fallas, logrando así la reducción de las averías imprevistas y del tiempo de reparación, procurar la prolongación de la vida útil de los componentes, lograr los efectos de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento de las instalaciones, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio.

i) Permitir las labores de contraloría social que "LA SEDATU" establezca en coordinación con los beneficiarios.

j) La fecha de inicio de los trabajos de "LOS PROYECTOS" será a partir de que "LA SEDATU" entregue los recursos federales comprometidos conforme al calendario autorizado, y para su término se considera el día 31 de diciembre de 2016.

k) Conservar la documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberá estar resguardada, ordenada y disponible para su revisión o fiscalización correspondiente, al menos durante 5 años.

l) Supervisar las obras o acciones del proyecto autorizado, así como verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable.

m) Cumplir con las obligaciones cuando actúen como instancia ejecutora contempladas en el numeral 5.2.1 de "LAS REGLAS" y las demás que resulten aplicables.

SÉPTIMA. APORTACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, se prevé una inversión total de $4,170,151.00 (CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se integra de la manera siguiente:

"LA SEDATU" aportará $2,085,075.00 (DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), recursos con carácter de subsidios, que provienen del Ramo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", designados a “EL PROGRAMA”, sin perder su carácter federal, autorizados mediante oficio No. 510-V-0107 BIS 7, de fecha 21 de marzo de 2016;

"EL MUNICIPIO", aportará $2,085,076.00 (DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), provenientes del Ramo 33 fondo 1 y Cuenta Corriente.

“LAS PARTES” aportarán los recursos correspondientes mediante transferencia electrónica considerando el calendario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en apego a lo establecido en el artículo 7.4 de “LAS REGLAS”, las cuales se realizarán a la cuenta bancaria número 16334955-0101 con clabe interbancaria número 030222900008188296, radicada en BANCO DEL BAJÍO S.A, Sucursal 143 C. Liceaga Irapuato, Gto., a Nombre de Municipio de Pénjamo, Gto. Programa Vertiente Hábitat 2016 Federal.

OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL EJECUTOR.- "EL EJECUTOR" será el único responsable de la realización de "LOS PROYECTOS" y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "LA SEDATU". Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL EJECUTOR", que podrá ser reclamada por "LA SEDATU" por la vía judicial correspondiente.

NOVENA. INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS.- La instrumentación de "LOS PROYECTOS" se actualizará y llevará a cabo mediante el Anexo Técnico de Ejecución y en su caso en el Anexo Técnico de Autorización, en el sistema que al efecto establezca “LA SEDATU” y que comunique a “EL EJECUTOR” y que firmados por “LAS PARTES” se integrarán a este Convenio de Coordinación.

DÉCIMA. ENLACE. - "LA SEDATU" designa para la ejecución de "LOS PROYECTOS" como enlace entre ella y "EL EJECUTOR" a DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA, SUBDELEGADO DE DESARROLLO URBANO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, quien será responsable de la supervisión y vigilancia, control y revisión de todo lo relacionado con "EL PROYECTO", incluyendo los reportes y actualización a que hacen referencia las Cláusulas Sexta y Novena de este Convenio de Coordinación.

DÉCIMA PRIMERA. VISITAS DE SEGUIMIENTO.- “EL EJECUTOR” se compromete a otorgar las facilidades necesarias a “LA SEDATU” para que ésta realice visitas de seguimiento a las obras y acciones realizadas con subsidios federales, así como para tener acceso a equipos, materiales, información, registros y documentos que estime pertinente conocer y que estén relacionados con la ejecución de las mismas.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” acuerdan que al basarse el presente instrumento en el principio de la buena fe, se podrá convenir la terminación anticipada del mismo. En el caso de que se actualizara la terminación anticipada, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los aportantes los recursos entregados para la realización del objeto del mismo, junto con los intereses que se hubieren generado. Este reintegro será a los 15 días de que opere la terminación anticipada del presente instrumento, por el monto total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la terminación anticipada del presente Convenio de Coordinación, según lo determine "LA SEDATU".

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUMPLIMIENTO ANTICIPADO.- El presente Convenio de Coordinación también se podrá dar por terminado de manera anticipada por alguna de las siguientes causas:

a) De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza;

b) Por fuerza mayor, entendiéndose un hecho humanamente inevitable.

c) Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio de Coordinación.

DÉCIMA CUARTA. USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS.- En el caso de que "EL EJECUTOR" incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos adquiridos en este Convenio de Coordinación, “LA SEDATU” y las demás partes están facultadas para iniciar las acciones jurídicas ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable.

DÉCIMA QUINTA. RECISIÓN DEL CONVENIO.- “LA SEDATU” en cualquier momento podrá rescindir el presente instrumento jurídico, sin que medie resolución judicial y sin responsabilidad alguna, cuando “EL EJECUTOR” incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) No cumplan en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio de Coordinación, así como en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “LAS REGLAS”, el Anexo Técnico de ejecución del proyecto, o lo dispuesto en otras normas jurídicas federales y locales aplicables.

b) Cuando se detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento al Convenio de Coordinación y/o a sus respectivos Convenios Modificatorios.

c) Apliquen los subsidios federales y/o recursos financieros a fines distintos de los pactados.

d) Cuando no se reciba oportunamente la aportación de recursos de “EL MUNICIPIO”.

e) Cuando se detecten condiciones inadecuadas de operación en obras apoyadas con recursos de “EL PROGRAMA” en “LA VERTIENTE HÁBITAT” en el año en curso o en ejercicios anteriores.

f) Por falta de entrega de información, reportes y demás documentación prevista en las “LAS REGLAS”, Convenio de Coordinación y/o sus respectivos Convenios Modificatorios.

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES.- De considerarlo procedente, el presente Convenio de Coordinación y sus anexos se podrán modificar de común acuerdo por “LAS PARTES”, conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan. Dichas modificaciones deberán constar por escrito en el Convenio modificatorio respectivo, y entrarán en vigor a partir de su suscripción. Las modificaciones serán suscritas por los servidores públicos competentes y debidamente acreditadas en la fecha en que se firmen los documentos y se entenderán incorporadas al instrumento principal del cual surgen.

DÉCIMA SÉPTIMA. EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la Cláusula Séptima del presente instrumento, corresponderá a "LA SEDATU", a la Secretaría Función Pública, al Órgano Interno de Control en “LA SEDATU” y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMA OCTAVA. REVISIÓN DEL CONTENIDO.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento “LAS PARTES” se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- “LAS PARTES”, manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, así como convienen en sujetarse para todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, que no puedan ser resueltas de común acuerdo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIGÉSIMA. CONTROL PRESUPUESTAL.- "LA SEDATU" en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el control presupuestal, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio de Coordinación, así como de los recursos que se aporten.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONTROL DE ACCIONES.- “LAS PARTES” serán responsables de que durante la ejecución de "LOS PROYECTOS" objeto de este Convenio de Coordinación se cumplan las disposiciones señaladas en el artículo 17, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; así como el numeral 12.3 y demás aplicables de “LAS REGLAS”, relativos a acciones de contraloría social, participación social, difusión y publicidad.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TRANSPARENCIA.- Para el transparente ejercicio de los Recursos federales “LAS PARTES” convienen que en todas las actividades de difusión y publicidad que lleven a cabo “EL EJECUTOR” sobre las obras y acciones materia de “EL PROGRAMA”, apoyadas parcial o totalmente con subsidios federales, deberán observar las directrices, lineamientos y normativa federal aplicable.

La publicidad, información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberá identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, los artículos 17 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, e incluir la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

VIGÉSIMA TERCERA. RECURSOS NO EJERCIDOS.- “EL EJECUTOR” se compromete a ejercer los recursos federales descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego a las Reglas de Operación del Programa vigentes y demás normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se hubieren destinado a los fines autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal; en caso de que se actualice el supuesto de Terminación anticipada, “EL EJECUTOR” deberá realizar el reintegro de recursos dentro de los siguientes 15 días naturales posteriores a la firma del Convenio respectivo. En ambos casos deberá entregar a la Delegación de “LA SEDATU”, recibo o constancia de dicha devolución, en términos de lo señalado por la Ley de Tesorería de la Federación.

VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2016.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Coordinación en 4 tantos en la ciudad de Guanajuato, a los 4 días del mes de mayo de 2016.- Por la SEDATU: el Delegado Estatal en Guanajuato, **Omar Conde Contreras**.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal de Pénjamo, **Juan José García López**.- Rúbrica.- El Secretario del H. Ayuntamiento, **Omar Gregorio Mendoza Flores**.- Rúbrica.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACUERDO Específico A/178/16 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

ACUERDO A/178/16

ACUERDO ESPECÍFICO POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN, DETENCIÓN O APREHENSIÓN DE JAVIER DUARTE DE OCHOA, PROBABLE RESPONSABLE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS QUE RESULTEN.

RAÚL CERVANTES ANDRADE, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, fracción XI, 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3, 5 y 11, fracción IX de su Reglamento; el Acuerdo A/004/10 por el que se establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice la Procuraduría General de la República o que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos y se fijan los criterios para establecer los montos de dichas recompensas; y el Acuerdo A/167/11 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo A/004/10, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en su Meta Nacional “México en Paz”; objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”; estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad” prevé entre sus líneas de acción la referente a diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia;

Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 – 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013, en su objetivo 1. “Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia”, estrategia 1.1 “Atender prioritariamente los delitos de alto impacto”, línea de acción 1.1.1 establece la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a la investigación y persecución de los delitos de alto impacto;

Que el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás normas administrativas necesarias para regir la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados de la Procuraduría, así como de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos;

Que en términos del artículo 5, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde a la Institución ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un sólo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que mediante acuerdo determine el Procurador General de la República;

Que el artículo 11, fracción IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, otorga al Titular de la Institución la facultad, personal y no delegable, de emitir la normatividad en materia de recompensas;

Que en ejercicio de la facultad antes referida, el 3 de febrero de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/004/10, por el que se establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información útil, relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice la Procuraduría General de la República o que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos y se fijan los criterios para establecer los montos de dichas recompensas;

Que el 13 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/167/11 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo A/004/10;

Que el 07 de octubre de 2016, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, (SEIDF) de esta Procuraduría, inició una investigación por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten, en contra de Javier Duarte de Ochoa;

Que a pesar del amplio despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de aprehensión, aún no se ha logrado conocer el paradero del probable responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización;

Que en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público de la Federación, o para la identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, atentan contra la tranquilidad y la paz pública, obstaculizan la actuación normal de las instituciones públicas e impiden el desarrollo social;

Que la participación de la sociedad en el combate a la delincuencia debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley y, adicionalmente, en condiciones tales que incentiven la colaboración con la procuración y administración de justicia, con la mayor seguridad para las personas y familias de quienes presten auxilio a la autoridad;

Que la SEIDF consideró conveniente ofrecer una recompensa y presentó la propuesta ante el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, en los términos de lo dispuesto en los Acuerdos A/004/10 y A/167/11;

Que el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, previo análisis, aprobó la propuesta de la unidad administrativa solicitante y la sometió a la Titular de la Institución para su autorización, y

Que por lo expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil para la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El presente Acuerdo Específico autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles. La limitación será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

SEGUNDO. El monto de la recompensa se determinará conforme a lo siguiente:

Hasta de $15´000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.) por la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten la información conforme a los criterios siguientes:

I. De manera proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad que la información aportada haya representado para la localización de la persona mencionada en el artículo anterior;

II. Si dos o más personas proporcionan la información a que se refiere el artículo segundo de este Acuerdo, respecto de la persona por la cual se hace el ofrecimiento y su veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien la hubiere aportado primero, y

III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, respecto de la persona por la que se hace el ofrecimiento, la recompensa será entregada proporcionalmente, según la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada por cada uno.

CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes:

I. En el domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 211, Octavo Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

II. La dirección de correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx.

III. En los números telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad de México y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país.

QUINTO. La SEIDF designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quien será el encargado de mantener la comunicación permanente con la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asimismo, asignará un número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible. Debiendo en todo momento levantar acta de la comunicación y de su contenido.

SEXTO. La SEIDF deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de recompensa y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto de poder determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa.

Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público de la Federación ordenará que las instituciones de seguridad pública del orden federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido proporcionada.

Se requerirá a la autoridad que practique las diligencias ordenadas por el Ministerio Público de la Federación que levante acta en la que haga constar todas las diligencias que se efectúan con motivo de la información aportada en los términos de este Acuerdo.

SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se generen con motivo del presente Acuerdo, se clasificarán como información estrictamente reservada y confidencial, en términos de lo establecido en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 110, fracciones V, VI, VII y XII, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables.

OCTAVO. En caso de que la localización, detención o aprehensión de la persona buscada se haya logrado por virtud de la información aportada, el Titular de la SEIDF propondrá al Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, el monto a entregar a cada persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información aportada, propuesto por la unidad administrativa.

NOVENO. El Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas podrá confirmar o modificar el monto propuesto por la unidad administrativa, dentro de los diez días hábiles siguientes a que recibió la propuesta, a fin de que se solicite a la Oficialía Mayor que lleve a cabo la asignación de los recursos correspondientes para la realización del pago.

DÉCIMO. El servidor público que reciba la información establecerá comunicación con la persona a quien debe entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número confidencial de identificación.

La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer la entrega en efectivo.

Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita, sin causa justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa.

En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la recompensa.

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, en coordinación con el Director General de Comunicación Social, para que publiquen el ofrecimiento de recompensa en los términos que precisa este Acuerdo, en el Portal de Recompensas, en el sitio de Internet de la Procuraduría General de la República, así como en los diarios de mayor circulación en la República o en las entidades federativas. En el caso de que se requiera realizar la difusión del presente Acuerdo en medios de comunicación adicionales, la unidad administrativa solicitante coordinará la implementación de una estrategia de difusión acorde a las particularidades de la investigación. Los pagos de recompensa y de los gastos de difusión a que se refiere el presente Acuerdo Específico, se efectuarán de conformidad con lo señalado en los Lineamientos para el Manejo y Operación del Mandato de Administración para Recompensas de la Procuraduría General de la República.

Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el momento en que haya sido localizado, detenido o aprehendido Javier Duarte de Ochoa, o en los supuestos de prescripción, extinción o no ejercicio de la acción penal.

SEGUNDO.- Los recursos para la entrega de la recompensa, serán asignados conforme a las normas presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo.

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.- El Procurador General de la República, **Raúl Cervantes Andrade**.- Rúbrica.

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS

ACUERDO que establece la circunscripción territorial de las delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

ACUERDO CEAV/OG/2016/03/07

EL PLENO de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con fundamento en los artículos 84, 85, 87, 88 y 95 de la Ley General de Víctimas, 5 y 58, fracción VIII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 32, fracción XXII del Reglamento de la Ley General de Víctimas, 16, fracciones XVII, XXXI y XXXII, 17 y 41 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y

CONSIDERANDO

Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, tiene la facultad de organizarse de la manera más adecuada para el mejor despacho de los asuntos de su competencia;

Que el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas establece que ésta contará con las delegaciones, y demás oficinas que requiera conforme a sus necesidades;

Que de la misma manera el Estatuto Orgánico determina la denominación y sede de las delegaciones en las distintas entidades de la República Mexicana, dejando al Pleno la facultad de establecer la circunscripción territorial en la que ejercerán sus atribuciones, así como los supuestos bajo los cuales existirá concurrencia en su ámbito territorial de circunscripción;

Que con fecha 31 de agosto de 2016, durante la celebración de la Tercera Sesión del Órgano de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se aprobó la circunscripción territorial y la concurrencia de las Delegaciones de la Entidad, por lo que, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO QUE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS DELEGACIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

ARTÍCULO ÚNICO.- Las delegaciones a que se refiere el artículo 5, fracción XV y 42 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ejercerán sus atribuciones en la circunscripción territorial de los municipios que a continuación se enlistan:

I. Delegación **Baja California**, con domicilio en Boulevard Gral. Sánchez Taboada 10403, esq. O'Gorman, local 101, P.B. (Edificio Anda), Zona Río, C.P. 22320, en la ciudad de Tijuana, Baja California, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Baja California;

b. Todos los municipios del Estado de Sonora.

II. Delegación **Chiapas**, con domicilio en Palacio Federal, Calle 2da Oriente Norte No. 227, primer piso, colonia Centro, código postal 29000, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Chiapas;

b. Todos los municipios del Estado de Tabasco.

III. Delegación **Chihuahua**, con domicilio en Juan de la Barrera 661, esq. Av. Insurgentes, Fraccionamiento La Joya, C.P. 32330, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Chihuahua

IV. Delegación **Coahuila**, con domicilio en Palacio Federal, Av. Morelos esq. Calle Galeana, 1er piso, Despacho 110, Colonia Centro, C.P. 27000, en la ciudad de Torreón, Coahuila, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

V. Delegación **Distrito Federal**, con competencia en:

a. Todas las delegaciones del Distrito Federal;

b. Todos los municipios del Estado de México, y

c. Todos los municipios del Estado de Hidalgo.

VI. Delegación **Durango**, con domicilio en San Miguel de Cruces 228, Fraccionamiento La Forestal, C.P. 34217, en la ciudad de Durango, Durango, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Durango; y

b. Todos los municipios del Estado de Zacatecas

VII. Delegación **Guanajuato**, con domicilio en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km 7.5, Colonia Arroyo Verde, C.P. 36250, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Guanajuato;

b. Todos los municipios del Estado de Querétaro, y

c. Todos los municipios del Estado de San Luis Potosí.

VIII. Delegación **Guerrero**, con domicilio en Calle Almirante Fernando de Magallanes, esquina con Parque Sur, Lote 1, Manzana 28, Fraccionamiento Costa Azul, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Guerrero.

IX. Delegación **Jalisco**, con domicilio en Av. Unión 199, esquina Av. La Paz, Colonia Americana, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Aguascalientes;

b. Todos los municipios del Estado de Colima; y

c. Todos los municipios del Estado de Jalisco;

X. Delegación **Michoacán**, con domicilio en Av. Acueducto 1464, Colonia Chapultepec Norte, Sector Nueva España, C.P. 58260, en la ciudad de Morelia, Michoacán, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.

XI. Delegación **Morelos**, con domicilio en Río Amacuzac 24, esquina con Calzada de Los Estrada, Colonia Vista Hermosa, C.P. 62290, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Morelos.

XII. Delegación **Nuevo León**, con domicilio en Calle Porfirio Díaz Sur 1425, Colonia Pío X, C.P. 64710, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Nuevo León, y

b. Todos los municipios del Estado de Tamaulipas.

XIII. Delegación **Nayarit**, con domicilio en Calle Encino 11, esquina Av. Jacarandas, Colonia San Juan, C.P. 63130, en la ciudad de Tepic, Nayarit, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Nayarit.

XIV. Delegación **Puebla**, con competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Oaxaca;

b. Todos los municipios del Estado de Puebla; y

c. Todos los municipios del Estado de Tlaxcala.

XV. Delegación **Sinaloa**, con domicilio en Av. Rafael Buelna 178, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, C.P. 82110, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Baja California Sur, y

b. Todos los municipios del Estado de Sinaloa.

XVI. Delegación **Veracruz**, con domicilio en Av. Gómez Farías 2125, Colonia Ricardo Flores Magón, C.P. 91900, en la ciudad de Veracruz, Veracruz, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XVII. Delegación **Yucatán**, con domicilio en Calle 33B 185, esquina Calle 8, Colonia García Gineres, C.P. 97070, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y competencia en:

a. Todos los municipios del Estado de Campeche;

b. Todos los municipios del Estado de Quintana Roo; y

c. Todos los municipios del Estado de Yucatán.

Los titulares de las direcciones generales de la Asesoría Jurídica Federal, de Atención Inmediata y Primer Contacto y de la Coordinación General de Delegaciones, de manera conjunta o individualmente podrán, en casos plenamente justificados, en los que ello sea estrictamente necesario para la prestación del servicio, autorizar acciones concurrentes de dos o más delegaciones en entidades distintas a las establecidas en el presente Acuerdo o autorizar a alguna delegación a ejercer acciones en entidades fuera de su esfera de competencia, conforme a lo establecido en los artículos 24, fracción XXII, 35, fracción XVII, 41 y 44, fracción XX del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Para la atención adecuada de las personas en situación de víctima, las personas titulares de las delegaciones antes mencionadas podrán solicitar, por escrito, la intervención, auxilio y colaboración que sea necesaria de sus homólogas, estableciendo los asuntos y términos por los que se requiere el apoyo.

Los servidores públicos comisionados en términos del presente Acuerdo, serán competentes por territorio para ejercer las atribuciones y facultades que el desempeño de la comisión les requiera, hasta por el plazo mismo que dure la comisión.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto en los casos de las fracciones V y XIV, cuya competencia se iniciará a partir del día en que las delegaciones correspondientes inicien operaciones. Durante este periodo, la atención en los Estados contemplados en dichas fracciones se brindará por las unidades administrativas de oficinas centrales, de acuerdo con su ámbito de competencia.

SEGUNDO. Los asuntos que, al momento de entrar en vigor el presente Acuerdo, estén siendo atendidos por las delegaciones, seguirán bajo su conocimiento hasta su conclusión.

Ciudad de México, 31 de agosto de 2016.- Así lo aprobó el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Tercera Sesión Ordinaria de 2016 del Órgano de Gobierno celebrada el 31 de agosto de 2016.- El Comisionado Presidente, **Sergio Jaime Rochín del Rincón**.- Rúbrica.- La Comisionada y los Comisionados: **Adrián Franco Zevada**, **Susana Thalía Pedroza de la Llave y Julio Antonio Hernández Barros**.- Rúbricas.- La Secretaria Técnica del Pleno, **Alejandra Soto Alfonso**, quien da fe de la presentación y votación del documento por unanimidad de los presentes.- Rúbrica.

(R.- 440628)

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

LINEAMIENTOS para la solución de controversias entre particulares y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de Medios Alternativos.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Dirección Jurídica.- Unidad de Mediación.

LINEAMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE PARTICULARES Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS.

JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 220, fracción VI, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 24, fracción XIV del Estatuto Orgánico del propio Instituto, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 18 de junio de 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando la incorporación al artículo 17 de un párrafo mediante el cual se determina que *"Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial".*

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala como línea de acción (en su Meta Nacional "México en Paz", Objetivo 1.5 "Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación"), fortalecer el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de solución de controversias.

Que con fecha 18 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual establece en el artículo 57, fracción IX, que la Dirección Jurídica, unidad administrativa central del propio Instituto, establecerá y aplicará en los casos que considere conveniente para los intereses del Instituto, medios alternativos de solución de controversias; para lo cual contará con una Unidad de Mediación.

Que por instrucción del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, durante el periodo comprendido del 15 de enero al 26 de febrero de 2015, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organizó foros de consulta conformados por juristas, académicos y representantes de la sociedad civil, para la elaboración de un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia. Derivado de los resultados de estos foros, el CIDE recomendó convocar a una instancia plural de diálogo, con representantes de todos los sectores, la cual se materializó en los "Diálogos por la Justicia Cotidiana" que dieron inicio en noviembre de 2015.

Que en el marco de los referidos Diálogos, se detectó que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como las Empresas productivas del Estado, suelen agotar todas las instancias jurisdiccionales a pesar de que existan circunstancias técnicas que permitan presuponer con un alto grado de probabilidad que se obtendrá una resolución desfavorable, lo que produce en ocasiones, una innecesaria prolongación de los juicios, incrementándose los costos tanto para los ciudadanos, los órganos jurisdiccionales y la Administración Pública Federal, lo que impide cumplir adecuadamente con el objetivo principal de toda administración que es servir a la ciudadanía.

Que con fecha 29 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *"Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias que se susciten con los particulares"*.

Que en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE PARTICULARES Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular los procedimientos para la solución de controversias entre particulares y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de medios alternativos, y se sujetarán a las disposiciones que de estos últimos, establezca la normatividad aplicable.

SEGUNDO.- Los Lineamientos serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que propongan la solución de una controversia por medios alternativos.

En el ejercicio de sus responsabilidades, atribuciones y funciones, los servidores públicos de las Unidades Administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán promover, respetar y proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo criterios de legalidad, honestidad, igualdad, transparencia, no discriminación e integridad. Asimismo, deberán aplicar el principio pro persona e incorporar la centralidad del particular en sus procesos y actividades.

TERCERO.- Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

I. Arbitraje: El medio alternativo de solución de controversias, en virtud del cual las partes acuerdan mediante la celebración de un convenio arbitral, someter la solución de determinados conflictos que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, a la decisión de un laudo arbitral de uno o varios terceros;

II. Área Requerida: La Unidad Administrativa convocada para coadyuvar en la solución de la controversia o conflicto mediante la aplicación de los Medios alternativos;

III. Área Requirente: Cualquier área o unidad administrativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que proponga la resolución de una controversia a la Dirección Jurídica, a través de un Medio alternativo de solución;

IV. Conciliación: Medio a través del cual las partes gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, que permite dar por concluido un juicio o procedimiento mediante la suscripción de un convenio;

V. Convenio: El Documento que, sin importar la denominación que la legislación aplicable le otorgue, expresa el acuerdo de voluntades entre el Instituto y el particular, por el cual se pone fin a la controversia, conflicto, procedimiento administrativo, o al proceso judicial, a través de un medio alternativo de solución de controversias;

VI. Decreto: El documento mediante el cual se establecen las acciones administrativas que deberá implementar el Instituto para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias que se susciten con los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016;

VII. Dictamen presupuestario: El documento que emite la Dirección de Administración, mediante el cual se determina la existencia o no de disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias;

VIII. Dictamen técnico jurídico: El documento que elabora la Dirección Jurídica, a través de la Unidad de Mediación y/o las Unidades Jurídicas, que contiene el análisis legal relativo a un procedimiento o juicio, en el que sea parte el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se determina si es o no procedente el Medio alternativo de solución de controversias;

IX. Dirección de Administración: La Unidad Administrativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado responsable de los procesos de programación y presupuesto;

X. Dirección Jurídica: La Unidad Administrativa del Instituto, responsable de establecer y aplicar, en los casos que considere conveniente para los intereses del Instituto, medios alternativos de solución de controversias;

XI. Expertos independientes: Persona física que cuenta con experiencia calificada en diversas materias, relacionadas con la seguridad social, debidamente acreditada y registrada;

XII. Intervinientes: Las personas que participan en los medios alternativos de solución de controversias, con la calidad de particular, Área requirente o Área requerida para resolver la controversia;

XIII. Instituto: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XIV. Lineamientos: Los lineamientos para la solución de controversias entre particulares y el Instituto, a través de medios alternativos;

XV. Mediación: El mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución de controversia, con la intervención de un facilitador encargado de establecer la comunicación y acercamiento necesarios, a fin de que los Intervinientes lleguen a un Convenio;

XVI. Medios alternativos de solución de controversias: La Conciliación, Mediación, el Arbitraje y los convenios o acuerdos que estén previstos en las leyes con tal carácter;

XVII. OIC: El Órgano Interno de Control en el Instituto;

XVIII. Particular: La persona física o moral que acude ante la Unidad de Mediación o al Área requirente, con la finalidad de buscar la solución de una controversia, a través de Medios alternativos de solución de controversias;

XIX. Solicitante: El Área requirente o el Particular que, respectivamente, proponga o inste ante la Dirección Jurídica la conclusión de una controversia a través de un Medio alternativo de solución;

XX. Unidades Administrativas: Las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto;

XXI. Unidad de Mediación: El área adscrita a la Dirección Jurídica responsable de auxiliar a ésta en el cumplimiento del objetivo dirigido a establecer y aplicar, en los casos que se consideren convenientes para los intereses del Instituto, medios alternativos de solución de controversias;

XXII. Unidades Jurídicas: Las áreas responsables de la defensa jurídica de la Unidad Administrativa Desconcentrada que corresponda, encargada de aplicar en el ámbito de su competencia, medios alternativos de solución de controversias, de conformidad con los presentes Lineamientos;

CUARTO.- La interpretación de las disposiciones de estos Lineamientos corresponde a la Dirección Jurídica, en términos del artículo 57, fracción XVI del Estatuto Orgánico.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES

QUINTO.- Los Intervinientes en los Medios alternativos de solución de controversias tendrán los derechos siguientes:

I. Acudir por libre voluntad para someterse a un Medio alternativo de solución de controversias;

II. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un Medio alternativo de solución de controversias;

III. Recibir la información necesaria en relación con los asuntos materia de solución de controversias;

IV. Expresar libremente sus necesidades y pretensiones durante el proceso del Medio alternativo de solución de controversias que se trate, sin más límite que el derecho de terceros;

V. Dar por concluida su participación en el Medio alternativo de solución de controversias en cualquier momento, cuando consideren que así conviene a sus intereses, siempre y cuando no se haya suscrito el Convenio;

VI. Intervenir personalmente en todas las sesiones del Medio alternativo de solución de controversias; y

VII. De ser necesario, solicitar a la Dirección Jurídica, a través de la Unidad de Mediación, la intervención de quien considere sustancial para la solución de la controversia.

SEXTO.- Son obligaciones de los Intervinientes:

I. Acatar los principios y reglas que rigen los Medios alternativos de solución de controversias;

II. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante las sesiones del Medio alternativo de solución de controversias;

III. Cumplir con los Acuerdos y Convenios a que se lleguen como resultado del Medio alternativo de solución de controversias, y

IV. Asistir a cada una de las sesiones personalmente o por conducto de su representante.

TÍTULO TERCERO

DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN

SÉPTIMO.- La Unidad de Mediación a que se refiere el Lineamiento primero, contará con un titular, quien será designado por el Director Jurídico, cuyo nivel jerárquico no podrá ser inferior al de Jefe de Servicios. Para tales efectos la Unidad de Mediación facilitará la comunicación entre los Intervinientes, a fin de llegar a un acuerdo consensuado y satisfactorio a través del Medio alternativo de solución de controversias más conveniente.

OCTAVO.- Las funciones de la Unidad de Mediación serán las siguientes:

I. Recibir, ya sea el caso, las solicitudes o propuestas efectuadas por los Solicitantes para la aplicación del Medio alternativo de solución de controversias;

II. Revisar que las solicitudes cuenten con los requisitos de procedencia que prevé el Decreto;

III. Requerir a las Unidades Administrativas la información que estime pertinente para el análisis de la solicitud o la propuesta formulada; y en su caso, la intervención de quien se considere necesario para la solución de la controversia;

IV. Elaborar el Dictamen técnico jurídico que será remitido a la Dirección Jurídica en el plazo previsto en los Lineamientos;

V. Realizar las notificaciones que se requieran en términos del Decreto y los Lineamientos;

VI. Supervisar la aplicación de los Medios alternativos de solución de controversias;

VII. Consultar la existencia de algún juicio o procedimiento, con la finalidad de que en un plazo no mayor de cinco días, identifique y clasifique los asuntos en los que sea factible llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias, por considerar que pueda generar ahorros y evitar costas por litigio o cualquier tipo de procedimiento;

VIII. Alentar a los Intervinientes a tratar de encontrar una posición común para la suscripción del Convenio;

TÍTULO CUARTO

DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

NOVENO.- Son principios básicos de los Medios alternativos de solución de conflictos los siguientes:

I. Confidencialidad: La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los Intervinientes durante el proceso del medio alternativo de solución de controversias que se trate;

II. Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por decisión propia, libre de toda coacción;

III. Imparcialidad: Los Medios alternativos de solución de controversias deberán conducirse con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, inclinaciones, preferencias o favoritismos que concedan u otorguen ventajas a alguno de los Intervinientes;

IV. Equidad: Los Medios alternativos de solución de controversias propiciarán condiciones de equilibrio entre los Intervinientes;

V. Honestidad: Los Intervinientes y el Facilitador deberán conducir su participación durante los medios alternativos de solución de controversias con apego a la verdad;

VI. Legalidad: La celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes como medios de solución de controversias deberán apegarse a la normatividad aplicable en la materia, otorgando seguridad jurídica a los actos de referencia;

VII. Flexibilidad: Los Medios alternativos de solución de controversias carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los Intervinientes para resolver por consenso la controversia; para tal efecto, se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo, y

VIII. Economía: Los Medios alternativos de solución de controversias deberán implicar el mínimo de gastos, tiempo y desgaste personal.

DÉCIMO.- Los Medios alternativos de solución de controversias se clasifican en dos tipos:

I. Administrativos: Los que culminan con los Convenios que, en su caso, formalicen el Instituto y los particulares a través de la Unidad de Mediación, dependiente de la Dirección Jurídica, respecto de los asuntos en los que se haya presentado formalmente alguna controversia y que se encuentren pendientes de resolución al interior del propio Instituto, y

II. Jurisdiccionales: Los que finalizan con los convenios que formalice la Dirección Jurídica por conducto de la Unidad de Mediación y los particulares que son partes en un juicio y que es su voluntad libre e informada solucionar una controversia, ya sea durante el juicio o, incluso, en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, ante la instancia jurisdiccional competente.

En materia de responsabilidad patrimonial del Estado se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

CAPÍTULO II

DE LA IMPROCEDENCIA DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

DÉCIMO PRIMERO.- No procederá el Medio alternativo de solución de controversias cuando:

I. Se afecten los programas o metas del Instituto;

II. Se atente contra el orden público e interés social;

III. Las leyes de la materia no establezcan la facultad para convenir como un Medio alternativo de solución y/o terminación de controversias;

IV. Tenga por objeto llevar a cabo un acuerdo conclusivo en materia fiscal;

V. Se puedan afectar derechos de terceros;

VI. La controversia verse sobre la ejecución de una sanción impuesta por resolución que implique una responsabilidad para los servidores públicos;

VII. Se controvierta la constitucionalidad de alguna ley o, en su caso, de algún acto de autoridad por ser directamente violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de un Tratado Internacional en materia de Derechos Humanos, o

VIII. En las controversias laborales, los servidores públicos hayan tenido injerencia, influencia o cualquier otra forma de participación en este tipo de conflictos.

CAPÍTULO III

DE LAS SOLICITUDES PARA LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SU INICIO

DÉCIMO SEGUNDO.- Los Medios alternativos de solución de controversias podrán solicitarse por un particular o por el Área requirente, por escrito y adjuntando una propuesta de convenio que contenga los términos y condiciones planteados, ante la Dirección Jurídica a través de su Unidad de Mediación. Así mismo, para el caso del Área requirente, ésta deberá presentar un cálculo a valor presente de los costos-beneficios que implicaría llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias.

DÉCIMO TERCERO.- Tratándose de personas físicas la solicitud se hará personalmente y, en el caso de personas morales, por conducto de su representante o apoderado legal. En ambas circunstancias el Solicitante deberá precisar sus datos generales así como la manifestación expresa para participar voluntariamente en el Medio alternativo de solución de controversias.

La solicitud de los particulares, no afectará el procedimiento o juicio en trámite, ni será vinculante para el Instituto.

DÉCIMO CUARTO.- La Dirección Jurídica, deberá analizar si en los asuntos a su cargo es factible llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias por considerar que pueda generar ahorros y evitar costas por litigio o cualquier tipo de procedimiento.

DÉCIMO QUINTO.- Una vez que la Unidad de Mediación reciba las solicitudes, las remitirá a la Dirección Jurídica, con la finalidad de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, ésta identifique y clasifique los asuntos a su cargo en los que sea factible llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias, por considerar que pueda generar ahorros y evitar costas por litigio o cualquier tipo de procedimiento.

CAPÍTULO IV

DEL DICTAMEN TÉCNICO JURÍDICO

DÉCIMO SEXTO.- La Dirección Jurídica, recibida la solicitud y previo visto bueno de la Unidad de Mediación y de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto, emitirá el Dictamen técnico jurídico en un plazo no mayor a quince días hábiles. En los casos de las Unidades Jurídicas, el dictamen será emitido por éstas. El dictamen contendrá como mínimo lo siguiente.

I. Los antecedentes del procedimiento o juicio, señalando los hechos que motivaron el conflicto, los datos del expediente interno o de la instancia administrativa o jurisdiccional ante la que su suscitó el conflicto, así como el estado en que se encuentran las actuaciones jurídicas o instancias pendientes de desahogar hasta la emisión de la resolución o sentencia correspondiente;

II. Un análisis sobre las posibilidades y riesgos para el Instituto de obtener una resolución o sentencia condenatoria o desfavorable, en el que se podrá incluir el material probatorio que obre en el expediente;

III. Un cálculo a valor presente de los costos-beneficios que permita justificar la solución de la controversia, por Medios alternativos de solución;

IV. La opinión técnica favorable del Área requirente y en su caso, el análisis del proyecto de Convenio, propuesto por el particular, y

V. La fecha límite para iniciar el Medio alternativo de solución de controversias conforme al Decreto.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Cuando el Área requirente sea la que solicite el análisis de los asuntos, ésta deberá acreditar el interés para resolver la controversia y solicitará a la Dirección Jurídica que analice y determine la procedencia del Medio alternativo de solución de controversias, dicha solicitud deberá ir acompañada de los términos y condiciones contenidas en un proyecto de Convenio, así como una propuesta de cálculo a valor presente de los costos-beneficios que implicaría llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias, se destaca que la solicitud no será vinculante para el Instituto.

DÉCIMO OCTAVO.- Cuando el Dictamen técnico jurídico sea favorable, la Dirección Jurídica lo remitirá al Titular del OIC, acompañado del proyecto de Convenio, con el fin de que, en su esfera de competencia, éste emita su opinión en materia de responsabilidades administrativas.

DÉCIMO NOVENO.- En caso de que la Dirección Jurídica, derivado de su análisis, estime que no procede llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias propuesto por el Particular o el Área requirente, lo hará de su conocimiento, de manera fundada y motivada en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la emisión del Dictamen técnico jurídico correspondiente;

CAPÍTULO V

DE LA OPINIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

VIGÉSIMO.- Una vez que el OIC, reciba el Dictamen técnico jurídico y el proyecto de Convenio a que se refiere el capítulo anterior, así como la información que integre el Medio alternativo de solución de controversias o aquella que solicite para mejor proveer, el Titular del citado órgano deberá emitir la opinión en materia de responsabilidades administrativas, en el cual se determinará la procedencia o no para llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya recibido el Dictamen técnico jurídico, los cuales podrán ser prorrogables por cinco días más.

La emisión de dicha opinión no restringe las facultades de control, verificación y vigilancia que las leyes aplicables confieren al OIC.

VIGÉSIMO PRIMERO.- De no advertirse probables responsabilidades para los servidores públicos que intervengan en el Medio alternativo de solución de controversias, el OIC remitirá la opinión en materia de responsabilidades a la Dirección de Administración, acompañado del Dictamen técnico jurídico y el proyecto de Convenio que se mencionan en el lineamiento anterior, para efectos de que ésta emita el Dictamen presupuestario.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- En el caso de que la opinión del OIC en materia de responsabilidades no sea viable por considerar que de llevarse a cabo los Medios alternativos de solución de controversias en los términos que se proponen en el proyecto de Convenio, pudieran dar lugar a una responsabilidad administrativa o de algún otro tipo para dichos servidores públicos, o bien, riesgos o perjuicios no detectados en el Dictamen técnico jurídico, lo hará del conocimiento de la Dirección Jurídica, a través de la Unidad de Mediación, a efecto de que se abstenga de llevar a cabo dichos Medios alternativos de solución de controversias.

En este caso, la Unidad de Mediación, en un plazo no mayor de tres días, contados a partir de la recepción de la opinión del OIC en sentido negativo, la hará del conocimiento de las partes, con lo cual estaría concluyendo el trámite de la solución del conflicto.

CAPÍTULO VI

DEL DICTAMEN PRESUPUESTARIO

VIGÉSIMO TERCERO.- El Dictamen presupuestario que emita la Dirección de Administración determinará la existencia o no de la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias en términos del proyecto de Convenio, mismo que será remitido a la Unidad de Mediación y al OIC en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan recibido la opinión del OIC a que se refiere el lineamiento anterior, los cuales podrán ser prorrogables por cinco días más.

De contar con el Dictamen presupuestario favorable, la Unidad de Mediación notificará a los Intervinientes el inicio del procedimiento de Medios alternativos de solución de controversias, acompañado del proyecto de Convenio, para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación, manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga.

VIGÉSIMO CUARTO.- Si se determina la insuficiencia presupuestaria para llevar cabo los Medios alternativos de solución de controversias, la Dirección Jurídica, a través de la Subdirección de lo Contencioso o el Área requirente continuará con la sustanciación del procedimiento o juicio.

En este caso, la Unidad de Mediación, en un plazo no mayor de tres días, contados a partir de la recepción de la opinión de la Dirección de Administración en sentido negativo, la hará del conocimiento de las partes, con lo cual estaría concluyendo el trámite de la solución del conflicto.

CAPÍTULO VII

DE LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

VIGÉSIMO QUINTO.- Si el particular o el Área requirente, manifiesta a la Unidad de Mediación su consentimiento respecto del proyecto final de Convenio en los términos planteados, éste se someterá a la autorización del Director General del Instituto, o bien, del servidor público en quien delegue esta facultad, quien deberá tener el cargo inmediato inferior.

Una vez que se cuente con dicha autorización, la Dirección Jurídica, a través de su Unidad de Mediación, citará al Particular indicando el día, la hora y el lugar para que se lleve a cabo la suscripción del Convenio respectivo.

En caso de que el particular no acepte los términos del proyecto de Convenio, la Dirección Jurídica a través de la Unidad de Mediación podrá, por única ocasión, comunicar las modificaciones o contrapropuestas del particular al OIC y a la Dirección de Administración para su aprobación en los términos del Decreto, o bien, continuará con la sustanciación del procedimiento o juicio.

VIGÉSIMO SEXTO.- La Unidad de Mediación remitirá el Convenio suscrito con firmas autógrafas a la autoridad administrativa o jurisdiccional de que se trate, para efectos de que ésta provea sobre el mismo y dé por concluido el proceso, en términos de la legislación aplicable.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Toda la documentación que se genere con motivo de la tramitación de los Medios alternativos de solución de controversias se considerará como información reservada, no vinculante en tanto no se haya alcanzado un convenio o acuerdo conciliatorio que ponga fin a la controversia. La Unidad de Mediación deberá elaborar una versión pública de éstos de ser solicitado, protegiendo la información confidencial de particulares.

CAPÍTULO VIII

DE LAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO O CONFLICTO DE INTERESES

VIGÉSIMO NOVENO.- La Unidad de Mediación y las Áreas requirentes se ceñirán a las causas de impedimento o de conflicto de intereses que prevé el artículo décimo cuarto del Decreto.

CAPÍTULO IX

DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

TRIGÉSIMO.- El medio alternativo de solución de controversias se tendrá por concluido de manera anticipada en los casos siguientes:

I. Por voluntad de alguno de los Intervinientes;

II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los Intervinientes;

III. Cuando el titular de la Unidad de Mediación constate que los Intervinientes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el mecanismo y se aprecie que no se arribará a un resultado que solucione la controversia;

IV. Si alguno de los Intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo;

V. Por incumplimiento del acuerdo entre los Intervinientes, y

VI. En los demás casos en que proceda dar por concluida la Conciliación y los Medios alternativos de solución de controversias de conformidad con las Leyes aplicables en la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- La Dirección Jurídica del Instituto realizará los trámites correspondientes para que el contenido de dicho instrumento sea insertado en la dirección electrónica http://www.issste.gob.mx, en el Portal "Instituto", en el apartado de la Normateca Electrónica Institucional, dentro de los diez días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fecha de elaboración: 18 de julio de 2016.- El Director General, **José Reyes Baeza Terrazas**.- Rúbrica.- Elaboró: la Jefa de la Unidad de Mediación, **Ana Martha Escobedo Hernández**.- Rúbrica.- Revisó: el Subdirector de lo Consultivo, **Román René Valenzuela Gómez**.- Rúbrica.- Aprobó: el Director Jurídico, **Héctor Navarro Vargas**.- Rúbrica.

(R.- 440639)

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD

CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, NÚMERO DGPLADES-UMM-CECTR-COAH-01/15, SUSCRITO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2015, Y POR EL EJECUTIVO FEDERAL EL DÍA 25 DEL MES DE MARZO DE 2015, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL DR. ALBERTO JONGUITUD FALCÓN, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL ING. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO, Y EL DR. HÉCTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que el Programa Unidades Médicas Móviles, forma parte del objetivo "Asegurar el acceso a los servicios de salud" planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y tiene como misión ampliar la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades de menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención médica, mediante equipos itinerantes de salud y unidades médicas móviles que ofrecen servicios de prevención y promoción del cuidado de la salud, basado en criterios de calidad, anticipación, integralidad, inclusión y resolutividad.

II. Con fecha 14 de diciembre de 2011, “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA” celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a “LA ENTIDAD”, para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud.

III. Que en fechas 23 y 25 de marzo de 2015, “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA” respectivamente, suscribieron el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, número DGPLADES-UMM-CECTR-COAH-01/15, por un monto de $7,138,524.62 (SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 62/100 M.N.), en lo sucesivo “EL CONVENIO”, con el objeto de coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en los términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, que permita a “LA ENTIDAD” realizar gastos que se deriven de la operación de once (11) unidades médicas móviles y el aseguramiento de veintitrés (23) unidades médicas móviles del Programa Unidades Médicas Móviles en el Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con “EL CONVENIO” y sus Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos, los compromisos que sobre el particular asumen “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA”, y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

IV. Que en la Cláusula CUARTA de “EL CONVENIO” se dispuso que: Los recursos presupuestarios federales que transfiere “LA SECRETARÍA” a que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-noviembre) y de manera específica para los gastos que se deriven de la operación de once (11) unidades médicas móviles y el aseguramiento (que comprenda los

ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a veintitrés (23) unidades médicas móviles del Programa Unidades Médicas Móviles del Programa en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por parte de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

V. En la Cláusula OCTAVA correspondiente a la vigencia se estableció que "EL CONVENIO" comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015.

VI. Que en la Cláusula NOVENA de "EL CONVENIO", "LAS PARTES" acordaron que "EL CONVENIO" podría modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico de Colaboración obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD".

VII. En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.

VIII. Con la finalidad de atender las necesidades actuales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en la entidad federativa, es indispensable hacer modificaciones a "EL CONVENIO" en cuanto al incremento del monto del recurso asignado vía subsidio, la distribución del recurso por capítulo de gasto, y ampliar el plazo de ejecución de enero a diciembre de 2015, con la finalidad de cumplir con el objetivo del Programa Unidades Médicas Móviles y las metas programadas, para lo cual resulta necesario modificar las Cláusulas PRIMERA en su primer párrafo y monto citado en el cuadro del tercer párrafo, SEGUNDA en su primer párrafo y en el primer párrafo del apartado de PARÁMETROS, CUARTA en su primer párrafo, SEXTA en su fracción VIII, y los Anexos 1, 2, 3, 8, 9, y 12, así como se modifica el pie de página de los Anexos 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de "EL CONVENIO" a efecto de dar continuidad a su ejecución y alcanzar los objetivos establecidos en el mismo, buscando que éstos se lleven conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

DECLARACIONES

De "LAS PARTES":

I. Que reconocen su personalidad jurídica con la que intervienen en el presente instrumento jurídico, y ratifican todas y cada una de las declaraciones de "EL CONVENIO".

II. La transferencia de los recursos presupuestarios federales objeto del presente Convenio Modificatorio estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 3 de diciembre de 2014 y a las disposiciones que para tal efecto emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. Que es su voluntad el suscribir el presente convenio modificatorio en los términos que se planean.

Una vez expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en suscribir el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Se modifica en "EL CONVENIO" el primer párrafo de la Cláusula PRIMERA y el monto citado en el cuadro del tercer párrafo, para quedar como a continuación se describe:

> PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración y sus Anexos tienen por objeto transferir recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD" para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre), y de manera específica para realizar los gastos que se deriven de la operación de once (11) unidades médicas móviles y su aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a veintitrés (23) unidades médicas móviles del Programa Unidades Médicas Móviles en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, de conformidad con el presente instrumento jurídico y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos presupuestales que transfiere “LA SECRETARÍA”, se aplicarán al concepto y hasta por los importes que a continuación se mencionan:

CONCEPTO	IMPORTE
“PROGRAMA UNIDADES MÉDICAS MÓVILES”	$7,816,817.12 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 M.N.).

SEGUNDA.- Se modifica de “EL CONVENIO” el primer párrafo de la Cláusula SEGUNDA, así como el primer párrafo del apartado de PARÁMETROS de la citada Cláusula, para quedar como a continuación se describe:

CLÁUSULA SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico, "LA SECRETARÍA" con cargo a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $7,816,817.12 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 M.N.), de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio Específico de Colaboración.

PARÁMETROS

"LA SECRETARÍA" vigilará, por conducto de la DGPLADES, que los recursos presupuestarios federales señalados en la Cláusula SEGUNDA, sean destinados únicamente para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre) y realizar los gastos que se deriven de la operación de once (11) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a veintitrés (23) unidades médicas móviles del Programa en el Estado de Coahuila de Zaragoza, unidades médicas móviles otorgadas mediante los contratos de comodato suscritos en años anteriores entre la Secretaría de Salud y el Ejecutivo de la entidad federativa, así como los correspondientes convenios modificatorios por los que se prorroga la vigencia de éstos, de conformidad con los Anexos del presente instrumento jurídico, y por el monto a que se refiere la Cláusula PRIMERA, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances:…

TERCERA.- Se modifica de “EL CONVENIO” el primer párrafo de la Cláusula CUARTA, para quedar como a continuación se describe:

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere "LA SECRETARÍA", que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre), y de manera específica para realizar los gastos que se deriven de la operación de once (11) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a veintitrés (23) unidades médicas móviles del Programa en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por parte de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

CUARTA.- Se modifica de “EL CONVENIO” la fracción VIII de la Cláusula SEXTA, para quedar como a continuación se describe:

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a:

…

VIII. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, realizarán los trámites para la contratación del personal que se requiera para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles y/o para el cumplimiento del objeto de este

instrumento jurídico, durante el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre), conforme a los requisitos y profesiograma establecido por "LA SECRETARÍA", y de conformidad con el Anexo 9, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte integrante de su contexto.

IX. **...**

QUINTA.- Se modifican los Anexos 1, 2, 3, 8, 9 y 12 de "EL CONVENIO" relativos al monto asignado vía subsidio, la distribución del recurso por capítulo de gasto, la asignación y distribución del recurso en el capítulo 1000 servicios personales, de conformidad con los documentos anexos al presente instrumento jurídico, para todos los efectos procedentes.

SEXTA.- Se modifica el pie de página de los Anexos 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de "EL CONVENIO" para quedar en los siguientes términos:

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $7,816,817.12 (Siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

SÉPTIMA.- "LAS PARTES" convienen que salvo lo previsto en el presente instrumento jurídico no se modifican, alteran o innovan las obligaciones pactadas en "EL CONVENIO" por lo que ratifican y subsisten en su totalidad las demás Cláusulas y Anexos de "EL CONVENIO".

OCTAVA.- El presente Convenio Modificatorio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD".

Enteradas las partes del contenido y consecuencias legales del presente Convenio Modificatorio lo firman por cuadruplicado a los 9 días del mes de octubre de 2015, en la Ciudad de México, Distrito Federal.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, **Eduardo González Pier**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, **Alberto Jonguitud Falcón**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, **Ismael Eugenio Ramos Flores**.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, **Héctor Mario Zapata de la Garza**.- Rúbrica.

ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO DE GASTO	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	TOTAL 2015
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	$7,816,817.12	$0.00	$7,816,817.12
TOTAL	$7,816,817.12	$0.00	$7,816,817.12

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,816,817.12 (Siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL 2015
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 43801 "Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios.				$7,138,524.62							$678,292.50		$7,816,817.12
ACUMULADO				$7,138,524.62							$678,292.50		$7,816,817.12

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,816,817.12 (Siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

ASEGURAMIENTO DE 23 UMM CON GASTOS DE OPERACIÓN PARA 11 UMM	TOTAL 2015
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	$7,075,546.01
3700 "SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS"	$347,117.62
34501 "SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES"	$394,153.49
TOTAL	**$7,816,817.12**

El uso de los recursos económicos para la contratación de seguro de las UMM deberá apegarse a los lineamientos que se emiten por oficio y deben incluirse la totalidad de UMM que se han entregado en comodato a la Entidad:

UMM Tipo 0, además de las de supervisión y de sustitución, así como las UMM, tipo 1, 2 y 3.

En caso de que se generen rendimientos financieros y/o economías presupuestarias derivadas de los recursos federales antes señalados, éstos deberán ser devengados al 31 de diciembre de 2015 única y exclusivamente para la contratación de los servicios y/o adquisición de los bienes, señalados en el anexo 8 de este Convenio; bajo las siguientes partidas específicas de gasto: 21101, 26102, 27101, 29501, 29601, 31601, 33401, 35401, 35501 y 39202.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,816,817.12 (Siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

ANEXO 8 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA DE GASTO		ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE:
12101	HONORARIOS	Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. PERSONAL GERENCIAL Y OPERATIVOS.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida del personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios Personales.
37201*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Incluye los gastos para pasajes del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería, y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37203*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37204*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión, 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37501*	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores de campo o supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos. Excluye los gastos contemplados en las partidas 37101 y 37201.

37503*	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos. Excluye los gastos contemplados en las partidas 37103 y 37203.
37504*	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en lugares distintos a los de su adscripción, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37501, 37502, 37503, 37104 y 37204. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos.
37901*	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y entidades, por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del levantamiento de censos, encuestas, y en general trabajos en campo para el desempeño de funciones oficiales, cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir con los requisitos de otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las partidas del concepto 3700.
37101*	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Excluye los arrendamientos de vehículos aéreos, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37103*	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos aéreos comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37104*	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión, 37102 Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37103 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

*PARTIDAS DEL CONCEPTO 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS ASIGNADAS PARA COORDINADOR Y SUPERVISORES.

EN EL CASO DEL PERSONAL OPERATIVO, CUANDO ESTE SEA CONVOCADO POR “LA SECRETARÍA” (DGPLADES), SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS DE ESTE CONVENIO PARA CUBRIR SUS GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.

PARTIDAS A EJERCER EN CASO DE QUE SE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O ECONOMÍAS PRESUPUESTARIAS DERIVADAS DE LOS RECURSOS FEDERALES		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos de oficina, para el uso en las unidades médicas móviles federales, tales como: papelería, libretas, carpetas, y cualquier tipo de papel; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; entre otros.
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Asignaciones destinadas a la adquisición de gasolina para vehículos (unidades médicas móviles).
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas de vestir: ropa de tela, y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, calzado; uniformes e insignias para el personal de las unidades médicas móviles federales.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio (electrocardiógrafos, ultrasonido, piezas de mano de alta y baja velocidad dentales, esterilizadores (autoclave), equipo de rayos x dental, baumanómetro, fonodetectores de latidos fetales, estuche de diagnóstico) de las unidades médicas móviles federales.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, tapetes, limpiadores, volantes, gatos hidráulicos o mecánicos de las unidades médicas móviles federales.
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	Asignaciones destinadas al pago de servicios de radiolocalización (GPS), requerido en el desempeño de funciones oficiales de las unidades médicas móviles federales.
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan en el Programa conforme al numeral 6.9 de las Reglas de Operación 2015.
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (electrocardiógrafos, ultrasonido, piezas de mano de alta y baja velocidad dentales, esterilizadores (autoclave), equipo de rayos x dental, baumanómetro, fonodetectores de latidos fetales, estuche de diagnóstico) de las unidades médicas móviles federales.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de unidades médicas móviles federales y su planta de luz o de emergencia.
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuestos y derechos tales como: tenencias de unidades médicas móviles y cuota de peaje.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,816,817.12 (Siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

ANEXO 9 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PERSONAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

NIVEL ESTATAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
CFMA0001	COORDINADOR (DIR. ÁREA "A")	1	$47,973.69	$5,330.41	$53,304.10	Ene y 16 May-Dic	$453,084.85
CF500000	SUPERVISOR (JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A")	2	$33,531.45	$3,725.72	$37,257.17	Ene-Dic	$894,172.08
CF500000	SUPERVISOR (JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A")	1	$33,531.45	$3,725.72	$37,257.17	Feb-Dic	$409,828.87
							$1,757,085.80

UNIDAD MÓVIL TIPO 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	1	$ 15,475.99	$1,719.55	$ 17,195.54	Feb-Dic	$ 189,150.94
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	1	$ 15,475.99	$1,719.55	$ 17,195.54	16-Feb-Dic	$ 180,553.17
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	1	$ 15,475.99	$1,719.55	$ 17,195.54	16 Feb-15 Jul y Ago-Dic	$ 171,955.40
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	2	$ 12,918.11	$1,435.35	$ 14,353.46	Ene-Dic	$ 344,483.04
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	1	$ 12,918.11	$1,435.35	$ 14,353.46	Feb-Dic	$ 157,888.06
							$ 1,044,030.61

UNIDAD MÓVIL TIPO 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	4	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$825,385.92
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	4	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$688,966.08
							$1,514,352.00

UNIDAD MÓVIL TIPO 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M01007	CIRUJANO DENTISTA "A"	1	$23,854.32	$2,650.48	$26,504.80	Ene-Dic	$318,057.60
M01007	CIRUJANO DENTISTA "A"	1	$23,854.32	$2,650.48	$26,504.80	Feb-Dic	$291,552.80
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	2	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$412,692.96
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	2	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$344,483.04
							$1,366,786.40

UNIDAD MÓVIL TIPO 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M01007	CIRUJANO DENTISTA "A"	2	$23,854.32	$2,650.48	$26,504.80	Ene-Dic	$636,115.20
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	2	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$412,692.96
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	2	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$344,483.04
							$1,393,291.20

TOTAL **$7,075,546.01**

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,816,817.12 (Siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

ANEXO 12 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE COAHUILA

FECHA PROBABLE DE VISITA:
DEL MES DE: JUNIO A DICIEMBRE DE 2015

Durante la realización de las visitas especificadas en el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de los Parámetros y en la Cláusula Séptima fracción IV del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para gastos de operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila, se verificará que los recursos presupuestarios transferidos sean destinados únicamente para la realización del objeto establecido en la Cláusula Primera del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $7,816,817.12 (Siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, anteriormente señalado. Por lo que con tal finalidad, las autoridades de “LA ENTIDAD” se comprometen a proporcionar toda la documentación necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Programa Unidades Médicas Móviles.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,816,817.12 (Siete millones ochocientos dieciséis mil ochocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

Firmas de los Anexos 1, 2, 3, 8, 9, y 12 del Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales número DGPLADES-UMM-CECTR-COAH-01/15.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, **Eduardo González Pier**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, **Alberto Jonguitud Falcón**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, **Ismael Eugenio Ramos Flores**.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, **Héctor Mario Zapata de la Garza**.- Rúbrica.

CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Distrito Federal.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, NÚMERO DGPLADES-UMM-CECTR-DF-01/15, SUSCRITO POR PARTE DEL EJECUTIVO DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Y POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL EL DÍA 27 DEL MES DE FEBRERO DE 2015, QUE SUSCRIBEN EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL DR. ALBERTO JONGUITUD FALCÓN, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL DISTRITO FEDERAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL EJECUTIVO DEL DF”, REPRESENTADO POR EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL DR. JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que el Programa Unidades Médicas Móviles, forma parte del objetivo "Asegurar el acceso a los servicios de salud" planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y tiene como misión ampliar la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades de menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención médica, mediante equipos itinerantes de salud y unidades médicas móviles que ofrecen servicios de prevención y promoción del cuidado de la salud, basado en criterios de calidad, anticipación, integralidad, inclusión y resolutividad.

II. Con fecha 28 de febrero del 2013, “EL EJECUTIVO DEL DF” y “LA SECRETARÍA” celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a “EL EJECUTIVO DEL DF”, para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud.

III. Que en fechas 25 y 27 de febrero del 2015, “EL EJECUTIVO DEL DF” y “LA SECRETARÍA” respectivamente, suscribieron el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, número DGPLADES-UMM-CECTR-DF-01/15, por un monto de $4,993,245.12 (Cuatro millones novecientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos 12/100 M.N.), en lo sucesivo “EL CONVENIO”, con el objeto de coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en los términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, que permita a “EL EJECUTIVO DEL DF” realizar gastos de que se deriven de la operación de 10 (diez) unidades médicas móviles y el aseguramiento de 11 (once) unidades médicas móviles del Programa Unidades Médicas Móviles en el Distrito Federal, de conformidad con “EL CONVENIO” y sus Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos, los compromisos que sobre el particular asumen “EL EJECUTIVO DEL DF” y “LA SECRETARÍA”, y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

IV. Que en la Cláusula CUARTA de “EL CONVENIO” se dispuso que: Los recursos presupuestarios federales que transfiere “LA SECRETARÍA” a que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-agosto), y de manera específica para los gastos que se deriven de la operación de 10 (diez) unidades médicas móviles y el aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a 11 (once) unidades médicas móviles del Programa Unidades Médicas Móviles por parte de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Distrito Federal.

V. En la Cláusula OCTAVA correspondiente a la vigencia se estableció que "EL CONVENIO" comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015.

VI. Que en la Cláusula NOVENA de "EL CONVENIO", "LAS PARTES" acordaron que "EL CONVENIO" podría modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones a "EL CONVENIO" obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.

VII. Que "LA SECRETARÍA" de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 3 de diciembre de 2014, cuenta con la disponibilidad presupuestal para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente instrumento jurídico.

DECLARACIONES

De "LAS PARTES":

I. Reconocen la personalidad jurídica con la que intervienen en el presente instrumento jurídico, y ratifican todas y cada una de las declaraciones de "EL CONVENIO".

II. Que es su voluntad el suscribir el presente convenio modificatorio en los términos que se planean.

Una vez expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en suscribir el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Se modifica en "EL CONVENIO" la Cláusula PRIMERA, para quedar como a continuación se describe:

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración y sus Anexos tienen por objeto transferir recursos presupuestarios federales a "EL EJECUTIVO DEL DF" para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre), y de manera específica para realizar los gastos que se deriven de la operación de 10 (diez) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a 11 (once) unidades médicas móviles del Programa en el Distrito Federal, y coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, de conformidad con el presente instrumento jurídico y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen "EL EJECUTIVO DEL DF" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARÍA", se aplicarán al concepto y hasta por los importes que a continuación se mencionan:

CONCEPTO	IMPORTE
"PROGRAMA UNIDADES MÉDICAS MÓVILES"	$7'221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.)

SEGUNDA.- Se modifica de "EL CONVENIO" el primer párrafo de la Cláusula SEGUNDA, para quedar como a continuación se describe:

> SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones del objeto del presente instrumento jurídico, "LA SECRETARÍA" con cargo a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, transferirá a "EL EJECUTIVO DEL DF" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), de acuerdo con los plazos y calendarios que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio Específico de Colaboración.

TERCERA.- Se modifican los Anexos 1, 2, 3, 8, 9 y 12 de "EL CONVENIO" relativos al monto asignado vía subsidio, la distribución del recurso por capítulo de gasto, la asignación y distribución del recurso en el capítulo 1000 servicios personales, de conformidad con los documentos anexos al presente instrumento jurídico, para todos los efectos procedentes.

CUARTA.- Se modifica el pie de página de los Anexos 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de "EL CONVENIO" para quedar en los siguientes términos:

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), del Programa de Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

QUINTA.- "LAS PARTES" convienen que salvo lo previsto en el presente instrumento jurídico no se modifican, alteran o innovan las obligaciones pactadas en "EL CONVENIO" por lo que ratifican y subsisten en su totalidad las demás Cláusulas y Anexos de "EL CONVENIO".

SEXTA.- El presente Convenio Modificatorio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Enteradas las partes del contenido y consecuencias legales del presente Convenio Modificatorio lo firman por cuadruplicado a los 20 días del mes de agosto de 2015, en la Ciudad de México, Distrito Federal.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, **Eduardo González Pier**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, **Alberto Jonguitud Falcón**.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo del DF: el Secretario de Finanzas del Distrito Federal, **Edgar Abraham Amador Zamora**.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, **José Armando Ahued Ortega**.- Rúbrica.

ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO DE GASTO	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	TOTAL 2015
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	$7,221,603.66	$0.00	$7,221,603.66
TOTAL	$7,221,603.66	$0.00	$7,221,603.66

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), del Programa de Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL 2015
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 43801 "Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios.			$4,993,245.12						$2,228,358.54				$7,221,603.66
ACUMULADO			$4,993,245.12						$2,228,358.54				$7,221,603.66

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), del Programa de Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

ASEGURAMIENTO DE 11 UMM CON GASTOS DE OPERACIÓN PARA 10 UMM	TOTAL 2015
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	$6,892,603.66
3700 "SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS"	$64,000.00
34501 "SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES"	$265,000.00
TOTAL	**$7,221,603.66**

El uso de los recursos económicos para la contratación de seguro de las UMM deberá apegarse a los lineamientos que se emiten por oficio y deben incluirse la totalidad de UMM que se han entregado en comodato a la Entidad:

UMM Tipo 0, además de las de supervisión y de sustitución, así como las UMM, tipo 1, 2 y 3.

En caso de que se generen rendimientos financieros y/o economías presupuestarias derivadas de los recursos federales antes señalados, éstos deberán ser devengados al 31 de diciembre de 2015 única y exclusivamente para la contratación de los servicios y/o adquisición de los bienes, señalados en el anexo 8 de este Convenio; bajo las siguientes partidas específicas de gasto: 21101, 26102, 27101, 29501, 29601, 31601, 33401, 35401, 35501 y 39202.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), del Programa de Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

ANEXO 8 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA DE GASTO		ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE:
12101	HONORARIOS	Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. PERSONAL GERENCIAL Y OPERATIVOS.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida del personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios Personales.
37201*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Incluye los gastos para pasajes del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería, y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37203*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37204*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión, 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento
37501*	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores de campo o supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos. Excluye los gastos contemplados en las partidas 37101 y 37201.

37503*****	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos. Excluye los gastos contemplados en las partidas 37103 y 37203.
37504*****	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en lugares distintos a los de su adscripción, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37501, 37502, 37503, 37104 y 37204. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos.
37901*****	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y entidades, por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del levantamiento de censos, encuestas, y en general trabajos en campo para el desempeño de funciones oficiales, cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir con los requisitos de otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las partidas del concepto 3700.
37101*	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Excluye los arrendamientos de vehículos aéreos, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37103*	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos aéreos comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37104*	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión, 37102 Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37103 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

*PARTIDAS DEL CONCEPTO 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS ASIGNADAS PARA COORDINADOR Y SUPERVISORES.

EN EL CASO DEL PERSONAL OPERATIVO, CUANDO ÉSTE SEA CONVOCADO POR “LA SECRETARÍA” (DGPLADES), SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS DE ESTE CONVENIO PARA CUBRIR SUS GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.

PARTIDAS A EJERCER EN CASO DE QUE SE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O ECONOMÍAS PRESUPUESTARIAS DERIVADAS DE LOS RECURSOS FEDERALES		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos de oficina, para el uso en las unidades médicas móviles federales, tales como: papelería, libretas, carpetas, y cualquier tipo de papel; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; entre otros.
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Asignaciones destinadas a la adquisición de gasolina para vehículos (unidades médicas móviles).
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas de vestir: ropa de tela, y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, calzado; uniformes e insignias para el personal de las unidades médicas móviles federales.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio (electrocardiógrafos, ultrasonido, piezas de mano de alta y baja velocidad dentales, esterilizadores (autoclave), equipo de rayos x dental, baumanómetro, fonodetectores de latidos fetales, estuche de diagnóstico) de las unidades médicas móviles federales.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, tapetes, limpiadores, volantes, gatos hidráulicos o mecánicos de las unidades médicas móviles federales.
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	Asignaciones destinadas al pago de servicios de radiolocalización (GPS), requerido en el desempeño de funciones oficiales de las unidades médicas móviles federales.
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan en el Programa conforme al numeral 6.9 de las Reglas de Operación 2015.
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (electrocardiógrafos, ultrasonido, piezas de mano de alta y baja velocidad dentales, esterilizadores (autoclave), equipo de rayos x dental, baumanómetro, fonodetectores de latidos fetales, estuche de diagnóstico) de las unidades médicas móviles federales.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de unidades médicas móviles federales y su planta de luz o de emergencia.
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuestos y derechos tales como: tenencias de unidades médicas móviles y cuota de peaje.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), del Programa de Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

ANEXO 9 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PERSONAL EN EL DISTRITO FEDERAL

NIVEL ESTATAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
CFMA0001	COORDINADOR (DIR. ÁREA "A")	1	$47,973.69	$5,330.41	$53,304.10	Ene-Dic	$639,649.20
CF500000	SUPERVISOR (JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A")	2	$33,531.45	$3,725.72	$37,257.17	Ene-Dic	$894,172.08
CF500000	SUPERVISOR (JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A")	1	$33,531.45	$3,725.72	$37,257.17	Sep-Dic	$149,028.68
							$1,682,849.96

UNIDAD MÓVIL TIPO 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	3	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$619,039.44
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	1	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Feb-Dic	$189,150.94
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)	2	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$344,483.04
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)	2	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Ago	$229,655.36
							$1,382,328.78

UNIDAD MÓVIL TIPO 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	1	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Mzo-Dic	$171,955.40
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)	1	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$172,241.52
							$344,196.92

UNIDAD MÓVIL TIPO 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M01007	CIRUJANO DENTISTA "A"	3	$23,854.32	$2,650.48	$26,504.80	Ene-Dic	$954,172.80
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	3	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$619,039.44
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)	3	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$516,724.56
							$2,089,936.80

UNIDAD MÓVIL TIPO 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M01007	CIRUJANO DENTISTA "A"	2	$23,854.32	$2,650.48	$26,504.80	Ene-Dic	$636,115.20
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	2	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$412,692.96
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)	2	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$344,483.04
							$1,393,291.20

TOTAL **$6,892,603.66**

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), del Programa de Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

ANEXO 12 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL DISTRITO FEDERAL

FECHA PROBABLE DE VISITA:
DEL MES DE: JUNIO A DICIEMBRE DE 2015

Durante la realización de las visitas especificadas en el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de los Parámetros y en la Cláusula Séptima fracción IV del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para gastos de operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y el Ejecutivo del Distrito Federal, se verificará que los recursos presupuestarios transferidos sean destinados únicamente para la realización del objeto establecido en la Cláusula Primera del Convenio de Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), del Programa de Unidades Médicas Móviles, anteriormente señalado. Por lo que con tal finalidad, las autoridades de “LA ENTIDAD” se comprometen a proporcionar toda la documentación necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Programa Unidades Médicas Móviles.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $7,221,603.66 (Siete millones doscientos veintiún mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.), del Programa de Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

Firmas de los Anexos 1, 2, 3, 8, 9, y 12 del Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales número DGPLADES-UMM-CECTR-DF-01/15.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, **Eduardo González Pier**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, **Alberto Jonguitud Falcón**.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo del DF: el Secretario de Finanzas, **Edgar Abraham Amador Zamora**.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, **José Armando Ahued Ortega**.- Rúbrica.

CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, NÚMERO DGPLADES-UMM-CECTR-SIN-01/15, SUSCRITO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2015, Y POR EL EJECUTIVO FEDERAL DÍA 25 DEL MES DE MARZO DE 2015, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL DR. ALBERTO JONGUITUD FALCÓN, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR, DR. ERNESTO ECHEVERRÍA AISPURO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EL LIC. ARMANDO VILLARREAL IBARRA, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL LIC. GERARDO O. VARGAS LANDEROS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y EL LIC. JUAN PABLO YAMUNI ROBLES, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Y QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que el Programa Unidades Médicas Móviles, forma parte del objetivo "Asegurar el acceso a los servicios de salud" planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y tiene como misión ampliar la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades de menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención médica, mediante equipos itinerantes de salud y unidades médicas móviles que ofrecen servicios de prevención y promoción del cuidado de la salud, basado en criterios de calidad, anticipación, integralidad, inclusión y resolutividad.

II. Con fecha 10 de octubre de 2012, “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA” celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a “LA ENTIDAD”, para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud.

III. Que en fechas 23 y 25 de marzo de 2015, “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA” respectivamente, suscribieron el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles, número DGPLADES-UMM-CECTR-SIN-01/15, por un monto de $11’945,914.13 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 13/100 M.N.), en lo sucesivo “EL CONVENIO”, con el objeto de coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en los términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, que permita a “LA ENTIDAD” realizar gastos de que se deriven de la operación de veintiún (21) unidades médicas móviles y el aseguramiento de treinta y siete (37) unidades médicas móviles del Programa Unidades Médicas Móviles en el Estado de Sinaloa, de conformidad con “EL CONVENIO” y sus Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos, los compromisos que sobre el particular asumen “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA”, y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

IV. Que en la Cláusula CUARTA de “EL CONVENIO” se dispuso que: Los recursos presupuestarios federales que transfiere “LA SECRETARÍA” a que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-noviembre), y de manera específica para los gastos que se deriven de la operación de veintiún (21) unidades médicas móviles y el aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a treinta y siete (37) unidades médicas móviles del Programa en el Estado de Sinaloa, por parte de los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa.

V. En la Cláusula OCTAVA correspondiente a la vigencia se estableció que “EL CONVENIO” comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte de “LA SECRETARÍA” y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015.

VI. Que en la Cláusula NOVENA de “EL CONVENIO”, “LAS PARTES” acordaron que “EL CONVENIO” podría modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico de Colaboración obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD”.

En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico, “LAS PARTES” acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.

VII. Con la finalidad de atender las necesidades actuales para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en la entidad federativa, es indispensable hacer modificaciones a “EL CONVENIO” en cuanto al incremento del monto del recurso asignado vía subsidio, la distribución del recurso por capítulo de gasto, y ampliar el plazo de ejecución de enero a diciembre de 2015, con la finalidad de cumplir con el objetivo del Programa Unidades Médicas Móviles y las metas programadas, para lo cual resulta necesario modificar las Cláusulas PRIMERA en su primer párrafo y monto citado en el cuadro del tercer párrafo, SEGUNDA en su primer párrafo y en el primer párrafo del apartado de PARÁMETROS, CUARTA en su primer párrafo, SEXTA en la fracción VIII, y los Anexos 1, 2, 3, 8, 9, y 12, así como se modifica el pie de página de los Anexos 4, 5, 6, 7, 10, y 11 de “EL CONVENIO” a efecto de dar continuidad a su ejecución y alcanzar los objetivos establecidos en el mismo, buscando que éstos se lleven conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

VIII. Que “LA SECRETARÍA” de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 3 de diciembre de 2014, cuenta con la disponibilidad presupuestal para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente instrumento jurídico.

DECLARACIONES

De “LAS PARTES”:

I. Que reconocen su personalidad jurídica con la que intervienen en el presente instrumento jurídico, y ratifican todas y cada una de las declaraciones de “EL CONVENIO”.

II. Que es su voluntad el suscribir el presente Convenio Modificatorio en los términos que se planean.

Una vez expuesto lo anterior, “LAS PARTES” están de acuerdo en suscribir el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Se modifica en “EL CONVENIO” el primer párrafo de la Cláusula PRIMERA y el monto citado en el cuadro del tercer párrafo, para quedar como a continuación se describe:

> PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración y sus Anexos tienen por objeto transferir recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD" para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre), y de manera específica para realizar los gastos que se deriven de la operación de veintiún (21) unidades médicas móviles y su aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a treinta y siete (37) unidades médicas móviles del Programa Unidades Médicas Móviles en el Estado de Sinaloa, y coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, de conformidad con el presente instrumento jurídico y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos presupuestales que transfiere “LA SECRETARÍA”, se aplicarán al concepto y hasta por los importes que a continuación se mencionan:

CONCEPTO	IMPORTE
“PROGRAMA UNIDADES MÉDICAS MÓVILES”.	$13,735,439.55 (TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)

SEGUNDA.- Se modifica de “EL CONVENIO” el primer párrafo de la Cláusula SEGUNDA, así como el primer párrafo del apartado de PARÁMETROS de la citada Cláusula, para quedar como a continuación se describe:

CLÁUSULA SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico, "LA SECRETARÍA" con cargo a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $13,735,439.55 (TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.), de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio Específico de Colaboración.

…

PARÁMETROS

"LA SECRETARÍA" vigilará, por conducto de la DGPLADES, que los recursos presupuestarios federales señalados en la Cláusula SEGUNDA, sean destinados únicamente para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre) y realizar los gastos que se deriven de la operación de veintiún (21) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a treinta y siete (37) unidades médicas móviles del Programa en el Estado de Sinaloa, unidades médicas móviles otorgadas mediante los contratos de comodato suscritos en años anteriores entre la Secretaría de Salud y el Ejecutivo de la entidad federativa, así como los correspondientes convenios modificatorios por los que se prorroga la vigencia de éstos, de conformidad con los Anexos del presente instrumento jurídico, y por el monto a que se refiere la Cláusula PRIMERA, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances:

TERCERA.- Se modifica de “EL CONVENIO” el primer párrafo de la Cláusula CUARTA, para quedar como a continuación se describe:

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere "LA SECRETARÍA", que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles en el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre), y de manera específica para realizar los gastos que se deriven de la operación de veintiún (21) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a treinta y siete (37)unidades médicas móviles del Programa en el Estado de Sinaloa, por parte de los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa.

CUARTA.- Se modifica de “EL CONVENIO” la fracción VIII de la Cláusula SEXTA, para quedar como a continuación se describe:

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a:

I. **…**

VIII. La Secretaría de Salud del Estado y/o de los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, realizará los trámites para la contratación del personal que se requiera para la operación del Programa Unidades Médicas Móviles y/o para el cumplimiento del objeto

de este instrumento jurídico, durante el ejercicio fiscal 2015 (enero-diciembre), conforme a los requisitos y profesiograma establecido por "LA SECRETARÍA", y de conformidad con el Anexo 9, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte integrante de su contexto.

IX. **...**

QUINTA.- Se modifican los Anexos 1, 2, 3, 8, 9 y 12 de "EL CONVENIO" relativos al monto asignado vía subsidio, la distribución del recurso por capítulo de gasto, la asignación y distribución del recurso en el capítulo 1000 servicios personales, de conformidad con los documentos anexos al presente instrumento jurídico, para todos los efectos procedentes.

SEXTA.- Se modifica el pie de página de los Anexos 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de "EL CONVENIO" para quedar en los siguientes términos:

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $13,735,439.55 (Trece millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa por conducto de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

SÉPTIMA.- "LAS PARTES" convienen que salvo lo previsto en el presente instrumento jurídico no se modifican, alteran o innovan las obligaciones pactadas en "EL CONVENIO" por lo que ratifican y subsisten en su totalidad las demás Cláusulas y Anexos de "EL CONVENIO".

OCTAVA.- El presente Convenio Modificatorio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD".

Enteradas las partes del contenido y consecuencias legales del presente Convenio Modificatorio lo firman por cuadruplicado a los 2 días del mes de octubre de 2015, en la Ciudad de México, Distrito Federal.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, **Eduardo González Pier**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, **Alberto Jonguitud Falcón**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, **Ernesto Echeverría Aispuro**.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finanzas, **Armando Villarreal Ibarra**.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, **Gerardo O. Vargas Landeros**.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, **Juan Pablo Yamuni Robles**.- Rúbrica.

ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO DE GASTO	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	TOTAL 2015
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	$13,735,439.55	$0.00	$13,735,439.55
TOTAL	$13,735,439.55	$0.00	$13,735,439.55

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $13,735,439.55 (Trece millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa por conducto de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL 2015
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 43801 "Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios.				$11,945,914.13							$1,789,525.42		$13,735,439.55
ACUMULADO				$11,945,914.13							$1,789,525.42		$13,735,439.55

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $13,735,439.55 (Trece millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa por conducto de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

ASEGURAMIENTO DE 37 UMM CON GASTOS DE OPERACIÓN PARA 21 UMM	TOTAL 2015
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	$12,563,886.30
3700 "SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS"	$678,670.00
34501 "SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES"	$492,883.25
TOTAL	**$13,735,439.55**

El uso de los recursos económicos para la contratación de seguro de las UMM deberá apegarse a los lineamientos que se emiten por oficio y deben incluirse la totalidad de UMM que se han entregado en comodato a la Entidad:

UMM Tipo 0, además de las de supervisión y de sustitución, así como las UMM, tipo 1, 2 y 3.

En caso de que se generen rendimientos financieros y/o economías presupuestarias derivadas de los recursos federales antes señalados, éstos deberán ser devengados al 31 de diciembre de 2015 única y exclusivamente para la contratación de los servicios y/o adquisición de los bienes, señalados en el anexo 8 de este Convenio; bajo las siguientes partidas específicas de gasto: 21101, 26102, 27101, 29501, 29601, 31601, 33401, 35401, 35501 y 39202.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $13,735,439.55 (Trece millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa por conducto de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

ANEXO 8 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA DE GASTO		ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE:
12101	HONORARIOS	Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. PERSONAL GERENCIAL Y OPERATIVOS.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida del personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios Personales.
37201*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Incluye los gastos para pasajes del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería, y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37203*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37204*	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión, 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento
37501*	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores de campo o supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos. Excluye los gastos contemplados en las partidas 37101 y 37201.

37503*****	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos. Excluye los gastos contemplados en las partidas 37103 y 37203.
37504*****	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en lugares distintos a los de su adscripción, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37501, 37502, 37503, 37104 y 37204. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen tabuladores respectivos.
37901*****	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y entidades, por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del levantamiento de censos, encuestas, y en general trabajos en campo para el desempeño de funciones oficiales, cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir con los requisitos de otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las partidas del concepto 3700.
37101*	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Excluye los arrendamientos de vehículos aéreos, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37103*	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos aéreos comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37104*	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión, 37102 Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37103 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

*PARTIDAS DEL CONCEPTO 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS ASIGNADAS PARA COORDINADOR Y SUPERVISORES.

EN EL CASO DEL PERSONAL OPERATIVO, CUANDO ÉSTE SEA CONVOCADO POR “LA SECRETARÍA” (DGPLADES), SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS DE ESTE CONVENIO PARA CUBRIR SUS GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.

PARTIDAS A EJERCER EN CASO DE QUE SE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O ECONOMÍAS PRESUPUESTARIAS DERIVADAS DE LOS RECURSOS FEDERALES		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos de oficina, para el uso en las unidades médicas móviles federales, tales como: papelería, libretas, carpetas, y cualquier tipo de papel; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; entre otros.
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Asignaciones destinadas a la adquisición de gasolina para vehículos (unidades médicas móviles).
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas de vestir: ropa de tela, y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, calzado; uniformes e insignias para el personal de las unidades médicas móviles federales.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio (electrocardiógrafos, ultrasonido, piezas de mano de alta y baja velocidad dentales, esterilizadores (autoclave), equipo de rayos x dental, baumanómetro, fonodetectores de latidos fetales, estuche de diagnóstico) de las unidades médicas móviles federales.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, tapetes, limpiadores, volantes, gatos hidráulicos o mecánicos de las unidades médicas móviles federales.
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	Asignaciones destinadas al pago de servicios de radiolocalización (GPS), requerido en el desempeño de funciones oficiales de las unidades médicas móviles federales.
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan en el Programa conforme al numeral 6.9 de las Reglas de Operación 2015.
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (electrocardiógrafos, ultrasonido, piezas de mano de alta y baja velocidad dentales, esterilizadores (autoclave), equipo de rayos x dental, baumanómetro, fonodetectores de latidos fetales, estuche de diagnóstico) de las unidades médicas móviles federales.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de unidades médicas móviles federales y su planta de luz o de emergencia.
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuestos y derechos tales como: tenencias de unidades médicas móviles y cuota de peaje.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $13,735,439.55 (Trece millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa por conducto de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

ANEXO 9 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PERSONAL EN EL ESTADO DE SINALOA

NIVEL ESTATAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
CFMA0001	COORDINADOR (DIR. ÁREA "A")	1	$47,973.69	$5,330.41	$53,304.10	Ene-Dic	$639,649.20
CF500000	SUPERVISOR (JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A")	4	$33,531.45	$3,725.72	$37,257.17	Ene-Dic	$1,788,344.16
							$2,427,993.36

UNIDAD MÓVIL TIPO 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	11	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$2,269,811.28
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	11	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$1,894,656.72
							$4,164,468.00

UNIDAD MÓVIL TIPO 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	3	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$619,039.44
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	3	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$516,724.56
							$1,135,764.00

UNIDAD MÓVIL TIPO 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M01007	CIRUJANO DENTISTA "A"	5	$23,854.32	$2,650.48	$26,504.80	Ene-Dic	$1,590,288.00
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	5	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$1,031,732.40
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	5	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$861,207.60
							$3,483,228.00

UNIDAD MÓVIL TIPO 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No.	SUELDO BRUTO MENSUAL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	SUBTOTAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE PERCEPCIONES
M01007	CIRUJANO DENTISTA "A"	1	$23,854.32	$2,650.48	$26,504.80	Ene-Dic	$318,057.60
M01007	CIRUJANO DENTISTA "A"	1	$23,854.32	$2,650.48	$26,504.80	Ene-May y Jul-Dic	$291,552.80
M02035	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	2	$15,475.99	$1,719.55	$17,195.54	Ene-Dic	$412,692.96
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	1	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-Dic	$172,241.52
CF40004	PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO "A")	1	$12,918.11	$1,435.35	$14,353.46	Ene-May y Jul-Dic	$157,888.06
							$1,352,432.94

TOTAL **$ 12,563,886.30**

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $13,735,439.55 (Trece millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa por conducto de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

ANEXO 12 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE SINALOA

FECHA PROBABLE DE VISITA:
DEL MES DE: JUNIO A DICIEMBRE DE 2015

Durante la realización de las visitas especificadas en el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de los Parámetros y en la Cláusula Séptima fracción IV del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para gastos de operación del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, se verificará que los recursos presupuestarios transferidos sean destinados únicamente para la realización del objeto establecido en la Cláusula Primera del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $13,735,439.55 (Trece millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, anteriormente señalado. Por lo que con tal finalidad, las autoridades de “LA ENTIDAD” se comprometen a proporcionar toda la documentación necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Programa Unidades Médicas Móviles.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $13,735,439.55 (Trece millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 55/100 M.N.), del Programa Unidades Médicas Móviles, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa por conducto de la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Firmas de los Anexos 1, 2, 3, 8, 9, y 12 del Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales número DGPLADES-UMM-CECTR-SIN-01/15.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, **Eduardo González Pier**.- Rúbrica.- El Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, **Alberto Jonguitud Falcón**.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, **Ernesto Echeverría Aispuro**.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finanzas, **Armando Villarreal Ibarra**.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, **Gerardo O. Vargas Landeros**.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, **Juan Pablo Yamuni Robles**.- Rúbrica.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA

ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide los criterios y la metodología para determinar las visitas de verificación o inspección que deberán llevarse a cabo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.

ACUERDO Núm. A/037/2016

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LOS CRITERIOS Y LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicaron en el DOF, el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) es una dependencia de la Administración Pública Federal, con autonomía técnica, operativa y de gestión, con personalidad jurídica y con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, tal como lo disponen los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2, fracción II y 3 de la LORCME.

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 22, fracciones II, X, XI y XIII de la LORCME, corresponde a la Comisión, entre otras atribuciones, expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de carácter general; otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados con las materias reguladas; solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar la misma respecto de las actividades reguladas; y ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, a fin de supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, entre las que se encuentran la LH, la LIE y las normas oficiales mexicanas.

TERCERO. Que el artículo 41, fracciones I y III de la LORCME establece que la Comisión debe regular y promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, y la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica que no forman parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 42 de la LORCME, la Comisión debe fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

QUINTO. Que el artículo 41, fracciones VI y VII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía (RICRE), establece que corresponde a la Coordinación General de Ingeniería y Normalización, proponer al Órgano de Gobierno de la Comisión, el programa anual de visitas de verificación técnicas, previa consulta a las unidades administrativas correspondientes.

SEXTO. Que para el diseño y elaboración del programa anual de visitas de verificación e inspección se deben considerar, entre otros, la disponibilidad de recursos, el universo de permisionarios, el cumplimiento y observancia de obligaciones por parte de los sujetos regulados, así como las mejores prácticas internacionales en la materia.

SÉPTIMO. Que conforme a los Principios de Mejores Prácticas de Política Regulatoria sobre Inspecciones y Cumplimiento de la Regulación de la OECD (*Regulatory Enforcement and Inspections: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD 2014*), las inspecciones deben planificarse y orientarse basándose en la evidencia de datos, considerar el nivel de riesgo de las instalaciones, así como el comportamiento específico de los permisionarios.

OCTAVO. Que con base en las mejores prácticas internacionales referidas en el considerando anterior, las visitas de verificación o inspección que lleve a cabo la Comisión deben ser selectivas, equitativas y transparentes, estar basadas en un proceso claro e imparcial, contar con una visión a largo plazo y ser ejecutadas de forma coordinada y con profesionalismo.

NOVENO. Que el objetivo de los principios referidos en el considerando anterior, es que, a través de la realización de las visitas de verificación o inspección, la Comisión verifique y promueva el cumplimiento regulatorio en el desarrollo de las actividades reguladas, de forma tal que redunde en un mejor uso de los recursos al maximizar la efectividad y los resultados de dichas verificaciones e inspecciones y se evite su duplicidad.

DÉCIMO. Que el fomentar el cumplimiento adecuado de la regulación y de las disposiciones jurídicas aplicables a las actividades reguladas, contribuye al desarrollo eficiente de la industria energética, genera certidumbre y minimiza costos y cargas tanto para el regulador como para los sujetos regulados.

UNDÉCIMO. Que para determinar las visitas de verificación e inspección, los principales criterios que la Comisión considera aplicables, son:

a) La disponibilidad de los recursos humanos y financieros con los que cuenta la Comisión;

b) El grado de cumplimiento de obligaciones por parte de los permisionarios;

c) El número de denuncias y quejas que tienen los permisionarios;

d) El número de emergencias operativas y casos fortuitos o de fuerza mayor en los sistemas permisionados, y

e) Otros factores, por ejemplo, condiciones de mercado y sistémicas.

DUODÉCIMO. Que, con el objeto de aplicar una técnica adecuada de muestreo en un proceso de evaluación, se deberán satisfacer los requerimientos específicos que dicte la normatividad que se verifica mediante criterios uniformes de aceptación o rechazo.

DECIMOTERCERO. Que la Norma Mexicana NMX-Z12/1-1987, *Muestreo para la inspección por atributos* (la norma NMX-Z12), traducida de la norma ISO 2859 (19749) *Sampling Procedures for Inspection by Attributes, Second Ed., 1999,* establece criterios y procedimientos básicos de muestreo, en general, aplicables al control de calidad, procesos de ingeniería, y elaboración de normas y especificaciones, cuyo propósito es proporcionar las bases para la toma de decisiones en el campo de la inspección por muestreo; y ha sido aplicada, en lo conducente, en la formulación de la metodología para realizar verificaciones e inspecciones que es objeto del presente Acuerdo.

DECIMOCUARTO. Que para fomentar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los permisionarios, es necesario que:

a) Conozcan la regulación y las obligaciones a las que están sujetas las actividades permisionadas que llevan a cabo;

b) Conozcan cuáles son las consecuencias por incumplir con la regulación y con sus obligaciones, así como los tipos de sanciones a los que pueden hacerse acreedores, y

c) Se incentive el cumplimiento de las obligaciones por parte de los permisionarios.

DECIMOQUINTO. Que la Comisión considera necesario llevar a cabo visitas de verificación o inspección con el propósito de corroborar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los permisionarios y, a su vez, darles un seguimiento de supervisión regulatoria adecuado. Que estas visitas deben realizarse no sólo a los permisionarios que incumplen con sus obligaciones, sino también a aquellos que de manera sistémica cumplen con las mismas. Por ello, las visitas pueden ser: i) especiales, resultado del desempeño medido por un índice o, ii) rutinarias, derivadas de una muestra aleatoria.

DECIMOSEXTO. Que la norma NMX-Z12 establece diversos niveles de inspección, entre ellos el denominado nivel especial, que resulta aplicable a aquellos permisionarios que cumplen en forma sistemática con las obligaciones establecidas en sus permisos.

DECIMOSÉPTIMO. Que con objeto de implementar la verificación del cumplimiento de obligaciones de los títulos de permiso para la realización de actividades reguladas y optimizar la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales asignados para dichas actividades, la Comisión podrá auxiliarse de unidades de verificación, terceros especialistas, unidades de inspección y empresas especializadas, elegidas mediante procesos competitivos que garanticen las mejores condiciones, tanto de experiencia como de capacidad técnica y económica.

DECIMOCTAVO. Que por su parte, a fin de que las unidades administrativas de la Comisión evalúen anualmente el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios, y cuenten con un tiempo adecuado para aplicar la metodología a que hace referencia este Acuerdo, la Comisión elaborará y aprobará el programa anual de visitas de verificación en el mes de febrero del año calendario siguiente al periodo evaluado.

DECIMONOVENO. Que, en apego a las atribuciones establecidas en el RICRE, la Coordinación General de Ingeniería y Normalización (CGIN) o aquella unidad administrativa que la sustituya en sus funciones, en su caso, analizará el número de visitas de verificación propuesto por las demás unidades administrativas de la Comisión y, tomando en consideración el presupuesto destinado para el rubro correspondiente, realizará lo siguiente:

I. Determinará el número de visitas que podrán realizarse a partir del desempeño de los permisionarios en el año anterior, el número de permisos vigentes en cada unidad administrativa y las tablas relativas a los niveles de inspección que establece la norma NMX-Z12. El proceso se realizará en el orden siguiente:

A. Visitas especiales: En primera instancia, se programarán visitas a aquellos permisionarios que después de haber aplicado la metodología de este Acuerdo, tengan resultados que deriven en una visita conforme a la matriz de cumplimiento del Anexo 1.

B. Se dejará un número de visitas que deberán cubrir aquellas de carácter extraordinario. En caso que al final del año hubiese un remanente del presupuesto, y en función de la disponibilidad de recursos humanos, se podrán realizar otras visitas de verificación adicionales.

C. Una vez programadas las visitas especiales, con base en los recursos disponibles, se determinará un número de visitas de verificación a permisionarios no incluidos en el inciso A anterior con base en un muestreo aleatorio conforme a la presente metodología.

II. Una vez realizada una visita de verificación aprobada por la Comisión en el programa anual de visitas de verificación, se realizarán las acciones siguientes:

A. La CGIN elaborará un reporte relativo a la visita de verificación que incorpore los rubros más relevantes, así como recomendaciones a la unidad administrativa correspondiente.

B. Cada dos meses, la CGIN elaborará un reporte al Órgano de Gobierno mediante el cual informe las visitas de verificación realizadas en dicho periodo y los hallazgos encontrados; se hará énfasis en los incumplimientos y observaciones detectados con objeto de dar puntual seguimiento e implementar las medidas a que haya lugar. El reporte, deberá incluir para cada

visita como se procedió ante los hallazgos ya sea de manera directa por las unidades administrativas o por medio de resoluciones propuestas al Órgano de Gobierno. Indicado en cada caso el tipo de medida que se haya tomado, como pueden, ser entre otras, observaciones, aplicación de medidas inmediatas por razones de seguridad, dictámenes de inicio de procedimientos de sanción, o recomendaciones de sanciones al órgano de gobierno.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 14, 16 y 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 14, 22, fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XIII y XXVII, 25, fracciones VII, X y XI, 27, 41, fracciones I y III, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 8, 12, fracciones XL, XXXVIII y XLIII, 17, 18, 26, 28, 33, 132, párrafo tercero, y 158 de la Ley de la Industria Eléctrica; 2, 4, 13, 16, fracciones VII, IX y X, 57, fracción I y 69 H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 68, 70, 91 y 92 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 17, 37, 106 y 109, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, 2, 81, fracciones I y VI, 83, primer párrafo y 84, fracciones XIV, XV, XX y XXI de la Ley de Hidrocarburos; 53 y 54 del Reglamento de Actividades del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos y 1, 2, 3, 6, fracción I y XV, 16, primer párrafo, fracción I, 17, fracción I, 24, fracciones I y XXXII, y 59, fracciones I y V, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión:

ACUERDA

PRIMERO. Se expiden los criterios y la metodología para determinar los permisionarios que serán sujetos a una visita de verificación o inspección, mismos que se encuentran contenidos en los Anexos 1 y 2 del presente Acuerdo, y que forman parte integrante de éste como si a la letra se insertase.

SEGUNDO. Se establece el número de permisionarios que anualmente deberán ser visitados, según la actividad regulada de que se trate, conforme al contenido de las Tablas I a IV del Anexo 2 del presente Acuerdo.

TERCERO. Los criterios y metodología contenidos en los Anexos 1 y 2 a que se refiere el Acuerdo Primero, se evaluarán por lo menos una vez cada cinco años y en cualquier tiempo cuando la Comisión Reguladora de Energía lo considere conveniente de acuerdo con nuevos requerimientos o circunstancias.

CUARTO. La Comisión Reguladora de Energía, a través de la Coordinación General de Ingeniería y Normalización o de aquella unidad administrativa que la sustituya en sus funciones, en su caso, determinará anualmente los permisionarios que serán sujetos de una visita de verificación, para lo cual deberá considerar los recursos humanos y económicos disponibles de la Comisión Reguladora de Energía, así como los criterios y la metodología contenidos en los Anexos 1 y 2 del presente Acuerdo.

QUINTO. Se deja sin efecto el Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determina los criterios a considerar para elaborar el programa anual de visitas de verificación a los permisionarios de transporte y distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos así como a los permisionarios de almacenamiento de gas natural del 3 de agosto de 2006.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

OCTAVO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/037/2016, en el Registro al que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, inciso a) y 25, fracción X de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016.- El Presidente, **Guillermo Ignacio García Alcocer**.- Rúbrica.- Los Comisionados: **Marcelino Madrigal Martínez**, **Luis Guillermo Pineda Bernal**, **Jesús Serrano Landeros**, **Noé Navarrete González**, **Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez**, **Guillermo Zúñiga Martínez**.- Rúbricas.

ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR QUÉ PERMISIONARIOS SERÁN SUJETOS A UNA VISITA DE VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN

A. Índice de Verificación

En la metodología propuesta, el Índice de Verificación, IV, permitirá conocer el grado de cumplimiento del marco regulador a que están sujetos los permisionarios de las actividades reguladas de la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión).

Este índice se elabora con información sobre dos factores F_i: el primero F_1 relacionado con el cumplimiento de obligaciones y el segundo F_2 con otras circunstancias relevantes, por ejemplo, condiciones de mercado o relevancia sistémica.

$$\text{Índice de Verificación} = \frac{(\text{Cumplimiento de Obligaciones} + \text{Otros})}{\text{n}}$$

Donde: n es el número de factores F_i considerados en el numerador

Factor 1: Cumplimiento de obligaciones

El marco regulador de las actividades permisionadas establece los términos, condiciones y obligaciones que deberán observar los permisionarios en el desempeño de sus actividades. Por lo tanto, el cumplimiento de dichas obligaciones proporciona a la Comisión los elementos necesarios para evaluar el desempeño de las actividades de cada permisionario; para ello se consideran las siguientes variables:

- **Variable**$_{1,1}$ **Incumplimientos administrativos:** Los permisionarios incurren en éstos cuando no presentan, en tiempo y forma ante la Comisión, la información correspondiente.
- **Variable**$_{1,2}$ **Denuncias y quejas:** Los usuarios de los servicios que prestan los permisionarios tienen la posibilidad de presentar quejas y denuncias respecto de los servicios que reciben; en ese sentido, aquéllas asociadas con la actividad regulada pueden representar indicios sobre la mala prestación del servicio o incumplimiento de la normatividad.
- **Variable**$_{1,3}$ **Emergencias operativas y casos fortuitos o de fuerza mayor:** Suceso eventual o acción que resulte en daño a los usuarios, trabajadores o instalaciones de la actividad regulada.
- **Variable**$_{1,4}$ **Incumplimientos técnicos:** Se refiere a las observaciones de calidad y medición derivadas de los reportes técnicos que realizan las Unidades de Verificación o Unidades de Inspección.
- **Variable**$_{1,5}$ **Última Visita de Verificación o Inspección:** Se refiere a la antigüedad de la última visita de verificación realizada a las instalaciones de un permisionario.

Factor 2: Condiciones de mercado, importancia sistémica

Resume las condiciones que prevalecen en el mercado local en que actúa el permisionario, por ejemplo, el volumen manejado del producto, la cantidad de consumidores, participación de mercado y número de competidores, entre otros, así como factores relevantes propios de los sistemas de transporte, almacenamiento o distribución correspondientes.

Escala de evaluación

Con la finalidad de normalizar el rango de variación de las variables y determinar la posición relativa que corresponde a cada permisionario, sus valores se estandarizan en una escala de 0 a 10. El puntaje más alto está relacionado con uno o varios incumplimientos técnicos o administrativos, quejas, entre otros, y denota aquel permisionario al que se hará una visita de verificación. Por el contrario, el cumplimiento en apego a la regulación no conlleva la acumulación de puntos y su desempeño no detona la programación de una verificación.

B. Cálculo de los factores y del Índice de Verificación

En primer término, debe determinarse cada Factor (F_i), mediante el cálculo de la media aritmética de las "n" variables consideradas. El cálculo se expresa en la siguiente fórmula:

$$F_i = \frac{V_1 + V_2 + \cdots + V_n}{n}$$

Donde:

F_i es el valor del Factor;

V_1 es el valor que corresponde a la variable 1;

V_n es el valor que corresponde a la variable *n*, y

n es el número de variables consideradas en ese subíndice.

Para el cálculo del Índice de Verificación (IV), se suman los valores de los dos factores considerados, F_1 y F_2, y se obtiene la media aritmética. El Índice se expresa mediante la siguiente fórmula:

$$IV = \frac{F_1 + F_2}{2}$$

Donde:

IV es el Índice de Verificación;

F_1 es la suma de los valores relativos al Factor 1: Cumplimiento de Obligaciones,

F_2 es la suma de los valores relativos al Factor 2: Condiciones de Mercado u otros factores.

Una vez obtenido el Índice de Verificación, la calificación, entre 0 y 10, que corresponde a cada Permisionario, donde 0 significa que el permisionario ha cumplido sus obligaciones y, por lo tanto, no estará sujeto a una visita de verificación especial en ese periodo, mientras que 10 indica que el permisionario deberá ser verificado. Cabe mencionar que cuando algún factor tenga una relevancia preponderante, el valor asignado puede ser tal que asegure la visita de verificación al Permisionario, aunque éste haya dado cumplimiento a otras obligaciones de inferior relevancia.

La selección de permisionarios para una visita de verificación especial se basará en la siguiente matriz de cumplimiento:

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO POR ÍNDICES DE VERIFICACIÓN	
Índice	*Resultado*
0 a 2.5	D
2.6 a 5.0	C
5.1 a 7.5	B
7.6 a 10	A

A=	VISITA DE VERIFICACIÓN
B=	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
C=	MONITOREO AL PERMISIONARIO
D=	SEGUIMIENTO RUTINARIO DE OBLIGACIONES

C. Visitas de verificación ordinarias

Tratándose de permisionarios que cumplen sus obligaciones en tiempo y forma, la Comisión podrá seleccionar una muestra con un nivel de inspección especial como se define en la Norma *Mexicana NMX – Z12/1-1987, Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 Métodos de muestreo, tablas y gráficas*. En el Anexo 2, se describen en forma sucinta los niveles de inspección para diversos tamaños de lotes, siendo el especial el más reducido en la NMX-Z12. En el caso que nos ocupa, es decir, de los permisionarios que cumplen sus obligaciones en tiempo y forma, se tomará una muestra que resultará en una lista de permisionarios a quienes se llevará a cabo visitas de verificación.

ANEXO 2. DETERMINACIÓN DE LOS PERMISIONARIOS A LOS QUE SE REALIZARÁN VISITAS DE VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN

Para efectos del presente anexo se establecen las siguientes definiciones y clasificaciones:

1. **Lote:** Es el conjunto de unidades de donde se toma la muestra para su inspección para determinar la conformidad con el criterio de aceptación.
2. **Muestra:** Una o más unidades tomadas de un lote bajo ciertos criterios determinados por cada área de la Comisión para su inspección.
3. **Nivel de Inspección**: Es aquel que define la relación entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra.

Niveles de inspección:

a) Nivel I (Reducida)

b) Nivel II (Normal)

c) Nivel III (Rigurosa)

d) Niveles especiales (S-1, S-2, S-3 y S-4)

Tipos de muestreo:

a) Sencillo

b) Doble

c) Múltiple

Las categorías de inspección y muestreo están definidas en la Norma Mexicana NMX – Z12/1-1987, Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 Métodos de muestreo, tablas y gráficas. En forma sucinta, se definen como sigue:

Nivel de inspección

Es aquel que define la relación entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra. Las tablas que aparecen en la NMX-Z12 que relacionan los tamaños de lotes y muestras, están elaboradas en forma tal que cuando el tamaño del lote es grande, el tamaño de la muestra es generalmente mayor que cuando el lote es pequeño. Sin embargo, la muestra no aumenta en proporción directa, ya que para un lote grande la muestra es proporcionalmente más pequeña que para un lote de menor tamaño.

La relación del tamaño de la muestra entre los niveles reducido I, normal II y riguroso III, definidos en la NMX-Z12 es tal que, un nivel reducido proporciona un poco menos de la mitad de la muestra del nivel normal, en tanto que para el nivel riguroso el tamaño de la muestra es aproximadamente 1.5 veces mayor que el normal; no se establece ningún otro criterio que distinga entre estos niveles de inspección.

Nivel especial: Los niveles de inspección especiales están diseñados para aquellas situaciones en las cuales el tamaño de la muestra debe mantenerse pequeño. En la norma NMX-Z12 no se establece ningún criterio específico para escoger los niveles especiales de inspección.

Para la metodología propuesta, se escogerá un nivel de inspección reducido de acuerdo a los recursos humanos disponibles para las visitas de verificación.

Tipos de muestreo:

Existen tres tipos de muestreo: sencillo, doble o múltiple.

i. Sencillo: está determinado por el tamaño de la muestra, el número de aceptación y el número de rechazo. En este caso, la muestra se inspecciona y se cuenta el número de elementos defectuosos encontrados; si éste es menor que o igual al número de aceptación, se acepta el lote completo, y por el contrario, si el número de elementos defectuosos es mayor que, o igual al número de rechazo, se rechaza el lote completo;

ii. Doble: es un sistema en el cual se toma una primera muestra que es menor a la que podría ser tomada para un muestreo sencillo. Si la calidad de la primera muestra es suficientemente buena o suficientemente mala, el lote puede ser aceptado o rechazado inmediatamente. Solamente en el caso intermedio se toma una segunda muestra y se examina para decidir si se acepta o rechaza el lote, y

iii. Múltiple: en este muestreo, pueden requerirse más de dos muestras.

Para la metodología propuesta, se escogerá el muestreo sencillo de acuerdo a los recursos humanos disponibles para las visitas de verificación.

PERMISIONARIOS QUE ESTARÁN SUJETOS A UNA VISITA DE VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN

A. Permisos de petrolíferos

La información que debe reportarse a la Comisión de manera trimestral, semestral y anual, depende de la actividad permisionada e incluye información estadística, económica y documental.

La metodología responde a cuatro rubros principales:

I. El siguiente cuadro muestra la ponderación asignada a los reportes trimestrales a partir de la relevancia de la información requerida en los formularios:

Reporte trimestral	Ponderación de importancia	Calificación de cumplimiento
Primero	0.70	0 (cumple)/10 (no cumple)
Segundo	0.10	0 (cumple)/10 (no cumple)
Tercero	0.10	0 (cumple)/10 (no cumple)
Cuarto	0.10	0 (cumple)/10 (no cumple)

Cada formulario electrónico de obligaciones determinará la calificación final anual para cada permisionario de la siguiente manera:

$$CFAO = ((CCT_1) \times (PI_1) + (CCT_2) \times (PI_2) + (CCT_3) \times (PI_3) + (CCT_4) \times (PI_4))$$

Donde:

CFAO: Calificación Final Anual de Obligaciones.

CCT_1, CCT_2, CCT_3 y CCT_4: Calificación de cumplimiento para cada trimestre del año.

PI_1, PI_2, PI_3, y PI_4: Ponderación asignada a los reportes trimestrales de acuerdo a la tabla anterior.

Asimismo, se determinó la relevancia que cada permisionario tiene dentro de la actividad que realiza en la industria, de conformidad con los siguientes criterios y considerando las tablas de puntaje asignado de acuerdo a la actividad:

Criterios para determinar la relevancia del permisionario por actividad

Actividad	Criterios
Almacenamiento	Regiones
Almacenamiento en aeródromos	Capacidad
Distribución por medios distintos a ductos	Capacidad
Expendio en aeródromos	Capacidad
Expendio en estaciones de servicio	Regiones
Expendio en estaciones de servicio de autoconsumo	Regiones
Transporte por medio de buque-tanque	Capacidad
Transporte por ducto	Regiones
Transporte por otros medios distintos a ducto (auto-tanque y semirremolque)	Capacidad
Transporte por otros medios distintos a ducto (carro-tanque)	Número de carro-tanques

Tablas de calificación del criterio por actividad (CCA)

Almacenamiento, transporte por ducto y expendio en estaciones de servicio y autoconsumo

Región	Calificación
Sur-Centro-Golfo-Occidente	10
Norte	8
Guaymas-Topolobampo	6
Rosarito	4
Progreso	2

Almacenamiento y expendio en aeródromos

	Capacidad (miles litros)				Calificación
Rango 1	>	10,000			10
Rango 2	>	2,000	<=	10,000	8
Rango 3	>	800	<=	2,000	6
Rango 4	>	350	<=	800	4
Rango 5	<=	350			2

Distribución por medios distintos a ducto

	Capacidad (miles litros)				Calificación
Rango 1	>	1,500			10
Rango 2	>	950	<=	1500	8
Rango 3	>	500	<=	950	6
Rango 4	>	150	<=	500	4
Rango 5	<=	150			2

Transporte por medios distintos a ducto (semirremolque y autotanque)

	Capacidad (litros)				Calificación
Rango 1	>	2,334,000			10
Rango 2	>=	1,400,400	<	2,334,000	8
Rango 3	>=	933,600	<	1,400,400	6
Rango 4	>=	466,800	<	933,600	4
Rango 5	<	466,800			2

Transporte por medios distintos a ducto (buque-tanque)

	Capacidad (barriles)				Calificación
Rango 1	>	320,961			10
Rango 2	>=	192,576	<	320,961	8
Rango 3	>=	128,384	<	192,576	6
Rango 4	>=	64,192	<	128,384	4
Rango 5	<	64,192			2

Transporte por medios distintos a ducto (carro-tanque)

	Carro-tanques (número)				Calificación
Rango 1	>	500			10
Rango 2	>=	150	<	500	8
Rango 3	>=	100	<	150	6
Rango 4	>=	10	<	100	4
Rango 5	<	10			2

II. Se asigna una Calificación del Criterio por Actividad a cada permisionario, de conformidad con las tablas de calificación anteriores, tomando en cuenta que los permisionarios con una mayor capacidad para distribución o en las actividades de aeródromos, o bien, que pertenezca a la región de almacenamiento y transporte por ducto de mayor tamaño, tendrán una mayor relevancia y, por lo tanto, una calificación más elevada que justifique realizar una verificación.

III. Se obtiene el Índice de Verificación, IV, mediante la siguiente fórmula:

$$IV = ((CFAO) \times (0.80) + (CCA) \times (0.20))$$

Donde:

CFAO: Calificación Final Anual de Obligaciones del permisionario; a este factor se le ha dado un 80% del valor total.

CCA: Calificación del Criterio de la Actividad permisionada correspondiente; a este factor se le ha dado un 20% del valor total.

IV. Una vez identificados los permisionarios con los puntajes más altos, se escogerá una muestra que determinará el número total de permisionarios a ser visitados.

Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de Petrolíferos y Petroquímicos

VARIABLE	***CRITERIO de EVALUACIÓN***				***PONDERACIÓN***
Reportes trimestrales	1°	70%	Estadísticos: volúmenes, capacidad, procedencia del producto, (usuarios, precios fletes)	Cumplimiento No Cumplimiento	0 10
	2°	10%			
	3°	10%	Económicos: Tarifas y cargos, ingresos por tarifa		
	4°	10%			
Información semestral	1°	Dictamen cumplimiento NOM-EM-005-CRE-2015			
	2°				
Información anual	Póliza anual de seguros vigente				
	Reporte de quejas				
	Procedencia del producto				
	Dictamen de cumplimiento del Programa de Mantenimiento (emitido por una UV o Tercero Especialista)				
	Reporte de incidentes o emergencias				
	Estados financieros dictaminados, captura de inversiones, gastos y costos e ingresos				
	Pago de aprovechamientos (supervisión anual)				

Tabla I. Niveles de inspección para las actividades permisionadas en materia de Petrolíferos.

PERMISIONARIOS DE PETRÓLEO, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS	*LOTE*	*NIVELES DE INSPECCIÓN*						
		REDUCIDA	*NORMAL*	*RIGUROSA*	*ESPECIALES*			
		(I)	*(II)*	*(III)*	*S-1*	*S-2*	*S-3*	*S-4*
EXPENDIO EN ESTACIONES DE SERVICIO AL PÚBLICO Y DE AUTOCONSUMO	11,307	125	315	500	5	8	20	50
EXPENDIO EN AERÓDROMOS	65	5	13	20	3	3	5	5
TRANSPORTE POR MEDIOS DISTINTO A DUCTOS (AUTOTANQUES Y SEMIREMOLQUES)	1316	50	125	200	5	8	13	32
TRANSPORTE POR MEDIOS DISTINTO A DUCTOS (CARROTANQUES)	3	2	2	3	2	2	2	2
TRANSPORTE POR MEDIOS DISTINTO A DUCTOS (BUQUETANQUES)	45	5	8	13	2	3	3	5
TRANSPORTE POR DUCTOS	14	2	3	5	2	2	2	2
DISTRIBUCIÓN POR MEDIOS DISTINTOS A DUCTOS	232	13	32	50	3	5	8	13
ALMACENAMIENTO	88	5	13	20	3	3	5	5
ALMACENAMIENTO EN AERÓDROMOS	63	5	13	20	3	3	5	5
TOTAL	**13,133**	**212**	**524**	**831**	**28**	**37**	**63**	**119**

B. Permisos de gas natural

Para los permisos de gas natural, la metodología se basa en el cumplimiento administrativo de las obligaciones de los permisionarios que se distingue por los periodos en que debe presentarse la información:

I. Mensual. Los informes de calidad del gas son 12 y deben presentarse cada 30 días naturales; la ponderación de cada informe es de 0.833, que se sumará si no presenta la información mensual correspondiente;

II. Trimestral. Relativa a los reportes del origen/destino de la energía conducida, de los contratos y tarifas convencionales. La información se debe presentar cada tres meses, por lo que el incumplimiento a cada informe abona 2.5 puntos a la calificación en este rubro;

III. Semestral. Relativa a los permisos de distribución por medio de ductos, por ejemplo, el precio máximo de comercialización; el incumplimiento a este informe abona 5 puntos a la calificación;

IV. Anual. Integrada por diversos factores como ajuste de tarifas, pago por supervisión anual, programa de operación y mantenimiento, dictamen de cumplimiento del programa anual de operación y mantenimiento, póliza de seguros de daños vigente, informe de operaciones, estados financieros e información contable, informe de fugas y dictamen de verificación de la *NOM-001-SECRE-2010 Especificaciones del gas natural*. El incumplimiento de esta obligación sumará 10 puntos a la calificación de esta variable;

V. Quinquenal. Relativa a la revisión del plan de negocios de los pemisionarios; su incumplimiento abona 10 puntos a la calificación, y

VI. Otra. Se refiere a avisos relativos a siniestros, contingencias, medición y quejas o solicitudes de intervención; su incumplimiento equivale a 10 puntos en la calificación.

Los factores están dados por las expresiones siguientes:

- **Factor Mensual**: Si el permisionario entrega la información, su valor es cero, en caso contrario, se suma 1/12=0.833 por cada informe no presentado:

$$\Sigma \text{Factor M}_i = \frac{F_{M1} + F_{M2} \ldots + F_{M12}}{} = 10$$

- **Factor Trimestral**: Si los cuatro informes son entregados, acumulará cero puntos en la calificación, sin embargo, por cada incumplimiento en la entrega se sumarán 2.5 puntos a la calificación; la expresión para este factor es la siguiente:

$$\Sigma \text{Factor Tri}_i = \frac{F_{Tri1} + F_{Tri2} + F_{Tri3} + F_{Tri4}}{} = 10$$

- **Factor Semestral**: Análogamente al factor anterior, si los dos informes son entregados, se acumularán cero puntos a la calificación, sin embargo, por cada incumplimiento en la entrega, se sumarán 5 puntos, por lo que la expresión para este factor es la siguiente:

$$\Sigma \text{Factor Sem}_i = \frac{F_{Sem1} + F_{Sem2}}{} = 10$$

- **Factor Anual**: Si el informe se entrega, no se tendrán puntos, sin embargo, si no se entrega, el incumplimiento resultará en 10 puntos que abonarán a la calificación; la expresión para este factor es el siguiente:

$$\text{Factor An} = F_{An}$$

- **Factor Quinquenal = Factor otro**: La expresión para ambos factores es similar, y serán considerados cuando la información sea presentada; tendrá una calificación de cero puntos si se entrega y 10 puntos si no se presenta. La expresión para este factor es la siguiente:

$$\text{Factor Quin} = F_{Otro}$$

Con la información anterior, se determina el Índice de Verificación, dado por:

$$IV = \frac{\text{Factor}_1 + \text{Factor}_2 + \ldots + \text{Factor}_n}{n}$$

Donde n es el número de factores anteriores considerados.

Una vez calculado el Índice de Verificación, IV, mediante la matriz de cumplimiento, se determina a los permisionarios a quienes se realizará una visita de verificación en el periodo considerado, que resulta de incumplimientos a las obligaciones.

Como obligaciones críticas se tiene la presentación de dictámenes anuales de operación y mantenimiento, así como la información relativa a las revisiones quinquenales del plan de negocios de los permisionarios; ello significa que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, resultará en una visita de verificación inmediata aunque se hubiese dado cumplimiento a las demás obligaciones previstas en el permiso correspondiente.

Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de Gas Natural

	ADMINISTRATIVAS	VALORES	PONDERACIÓN	OBSERVACIONES
MENSUAL				
Almacenamiento, Transporte y Distribución por ducto	Informe de la calidad del gas (NOM-001-SECRE-2010)	0, 0.83, 1.66, 2.5, 3.3, 4.1, 5, 5.8, 6.6, 7.5, 8.3, 9.1, 10	El incumplimiento de cada informe mensual abona 0.83	
TRIMESTRAL				
Almacenamiento, Transporte	Reporte del Origen-destino de la energía conducida (Prospectiva)	0, 2.5, 5, 7.5, 10	El incumplimiento de cada informe trimestral abona 2.5 a la calificación	
	Contratos y Tarifas Convencionales	0, 2.5, 5, 7.5, 10	El incumplimiento de cada informe trimestral abona 2.5 a la calificación	
SEMESTRAL				
Distribución por medio de ductos	Precio Máximo de Comercialización	0, 5, 10	El incumplimiento de cada informe abona 5 a la calificación	
ANUAL				
Almacenamiento, Transporte y Distribución por ducto	Ajustes de Tarifas	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
Almacenamiento, Transporte, Distribución, Compresión, Descompresión, Licuefacción, Regasificación y Estaciones de Servicio	Pago supervisión anual	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Programa anual de OyM	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Dictamen de cumplimiento Programa anual de OyM y de ampliaciones o	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Póliza vigente de seguro de daños y daños a terceros	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Informe anual de operaciones	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Estados financieros dictaminados e información contable	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Informe anual de fugas	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Dictamen Anual (NOM-001-SECRE-2010)	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	QUINQUENAL			
	Revisión Quinquenal del Plan de Negocios	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	EN SU CASO			
	Avisos relativo a siniestros, hechos o contingencias que afecten salud, seguridad pública o suministro.	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Medición	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	
	Quejas o solicitudes de intervención, relativas a actividades ilícitas, interrupción del servicio, incumplimientos de condiciones en la	0, 10	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.	

Tabla II. Niveles de inspección para las actividades permisionadas en materia de Gas Natural.

PERMISIONARIOS DE GAS NATURAL	LOTE	NIVELES DE INSPECCIÓN						
		REDUCIDA (I)	NORMAL (II)	RIGUROSA (III)	ESPECIALES			
					S-1	S-2	S-3	S-4
Transporte								
Acceso Abierto	27	5	8	13	2	3	3	5
Usos Propios	194	13	32	50	3	5	8	13
Distribución	26	3	5	8	2	2	3	3
Almacenamiento								
Gas Natural Licuado	3	2	2	3	2	2	2	2
Subterráneo	1	1	1	1	1	1	1	1
Licuefacción	1	1	1	1	1	1	1	1
Regasificación	1	1	1	1	1	1	1	1
GAS NATURAL COMPRIMIDO								
Compresión	15	2	3	5	2	2	2	2
Descompresión	10	2	3	5	2	2	2	2
Estación de Servicio	17	3	5	8	2	2	3	3
Transporte por otros medios	10	2	3	5	2	2	2	2
Distribución por otros medios	2	2	2	3	2	2	2	2
TOTAL	**307**	**37**	**66**	**103**	**22**	**25**	**30**	**37**

C. Permisos de GLP

Para los Permisos de GLP, la metodología aplicada se basa en dos factores: Cumplimiento de Obligaciones y Condiciones de Relevancia Sistémica:

I. **Cumplimiento de obligaciones**: Está compuesto de variables relativas a incumplimientos administrativos, tales como: informes trimestrales ($V_{1,1}$), presentación del programa anual de operación y mantenimiento ($V_{1,2}$), presentación del dictamen de cumplimiento del programa anual de operación y mantenimiento del año anterior ($V_{1,3}$), presentación del comprobante de pago por supervisión anual ($V_{1,4}$), presentación de la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil ($V_{1,5}$) e informe de siniestros o contingencias ($V_{1,6}$).

A. Los informes trimestrales tienen una calificación de 2.5 puntos en caso de incumplimiento y 0 puntos en caso de cumplimiento.

B. El programa anual de operación y mantenimiento (OyM), presentación del dictamen de cumplimiento del programa de OyM, pago de supervisión anual, póliza vigente de seguro de responsabilidad civil y el informe de siniestro o contingencia, tendrán una calificación de 10 puntos en caso de incumplimiento y de cero puntos en caso de cumplimiento.

II. **Condiciones de relevancia sistémica**: En este caso, el factor resume las condiciones prevalecientes en el mercado local (por entidad federativa) a que atiende cada permisionario y está compuesto de las tres variables siguientes: el volumen manejado ($V_{2,1}$), consumidores ($V_{2,2}$) y competidores ($V_{2,3}$).

A. Variable ($V_{2,1}$) Volumen manejado: Se refiere al volumen de GLP que maneja cada permisionario en un periodo determinado; dicho volumen se ajusta a la variable disponible que mejor corresponda a cada tipo de permiso. Se parte del supuesto que una instalación con mayor volumen manejado, tiene mayor número de consumidores y, por ello, es más susceptible de una visita de verificación.

B. Variable ($V_{2,2}$) Consumidores: Para determinar el número de consumidores a que corresponde cada permiso, se emplea la variable proxy población de la entidad federativa en que se encuentran registradas las instalaciones y equipo de dicho permiso.

C. Variable ($V_{2,3}$) Competidores: Se refiere a las personas que ejercen la misma actividad con los que interactúa un permisionario en una entidad federativa determinada. Se parte del supuesto que, a menor número de competidores en el mercado, la instalación es más susceptible de una visita de verificación dado que tiene preponderancia en dicho mercado y repercute en un mayor número de usuarios.

Para ambos factores, se asigna una escala de 0 a 10 para calificarlos, donde el valor más bajo indica que no existen incumplimientos a las obligaciones, en el caso del factor I, o bien que la relevancia del permisionario en el mercado es marginal, en el caso del factor II. En tanto que el valor de 10 en el factor I

indica la máxima acumulación de incumplimientos, mientras que en el caso del factor II, indica que el permisionario tiene la participación más relevante en el mercado. El resto de los valores se sitúan entre 0 y 10 en proporción al nivel de incumplimiento a las obligaciones o a las condiciones de mercado, según corresponda.

El cálculo de los factores y el Índice de Verificación se obtienen de la media aritmética de las variables consideradas:

$$F_i = \frac{V_1 + V_2 + \cdots + V_n}{n} \qquad IV = \frac{F_1 + F_2}{2}$$

Como ya se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos establecen una prelación que se muestra en una escala de 0 a 10, donde 0 indica el cumplimiento de obligaciones y 10 representa los permisionarios a quienes debe programarse una visita de verificación en el periodo de análisis correspondiente.

Lo anterior se resume en el cuadro siguiente:

Coordinación General de Actividades Permisionadas de Gas LP

	ADMINISTRATIVAS	VALORES	PONDERACIÓN	OBSERVACIONES
Distribución mediante Planta de Distribución y Expendio al Público	Informes trimestrales: Compras, Ventas y Quejas	0, 2.5, 5, 7.5, 10	14.0	El incumplimiento de cada informe trimestral abona 2.5 a la calificación
	Programa anual de OyM	(0, 10)	14.0	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Dictamen de cumplimiento Programa anual de OyM	(0, 10)	14.0	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Comprobante pago supervisión anual	(0, 10)	14.0	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Póliza vigente de seguro de responsabilidad civil	(0, 10)	30.0	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Informe de siniestro o contingencia	(0 - 10)	14.0	El incumplimiento de esta obligación se evalúa en un rango de 0 a 10, en función del número máximo de eventos ocurridos y considerando si fueron o no reportado
	CONDICIONES DE MERCADO	**VALORES**	**PONDERACIÓN**	**OBSERVACIONES**
	Volúmen de GLP manejado	(0 - 10)	33.333	Se refiere al volumen de GLP manejado por tipo de permiso.
	Consumidores de GLP por entidad federativa	(0 - 10)	33.333	Se refiere al número de consumidores (hogares o vehículos, según corresponda) de GLP por tipo de permiso por entidad federativa.
	Número de competidores por tipo de permiso por entidad federativa	(0 - 10)	33.333	Se refiere a la inversa del número de competidores por tipo de permiso por entidad federativa.
	ADMINISTRATIVAS	**VALORES**	**PONDERACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Almacenamiento, Transporte y Distribución por ducto	Programa anual de OyM	(0, 10)	12.5	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Dictamen de cumplimiento Programa anual de OyM	(0, 10)	12.5	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Póliza vigente de seguro de responsabilidad civil	(0, 10)	12.5	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Comprobante pago supervisión anual	(0, 10)	12.5	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Informe anual de ingresos	(0, 10)	12.5	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Estados financieros dictaminados	(0, 10)	12.5	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Informe de siniestro o contingencia	(0, 10)	12.5	El incumplimiento de esta obligación equivale a 10 en la calificación de esta variable.
	Informes trimestrales: Compras, Ventas y Quejas	0, 2.5, 5, 7.5, 10	12.5	El incumplimiento de cada informe trimestral abona 2.5 a la calificación
	CONDICIONES DE MERCADO	**VALORES**	**PONDERACIÓN**	**OBSERVACIONES**
	Volúmen de GLP manejado	(0 - 10)	50	Se refiere al volumen de GLP manejado por tipo de permiso.
	Número de usuarios	(0 - 10)	50	Se refiere al número de usuarios en cada sistema

Tabla III. Niveles de inspección para las actividades permisionadas en materia de GLP.

PERMISIONARIOS DE GAS LP	*LOTE*	*NIVELES DE INSPECCIÓN*						
		REDUCIDA	*NORMAL*	*RIGUROSA*	*ESPECIALES*			
		(I)	*(II)*	*(III)*	*S-1*	*S-2*	*S-3*	*S-4*
Almacenamiento	25	3	5	8	2	2	3	3
Distribución por medio de Ductos	4	2	2	3	2	2	2	2
Mediante Establecimiento Comercial	8	2	2	3	2	2	2	2
Mediante Estación de Carburación de Gas L.P de Autoconsumo	504	32	80	125	5	5	13	20
Mediante Estación de Gas L.P. para Carburación Comercial	3113	50	125	200	5	8	13	32
Mediante Planta de Distribución	1204	50	125	200	5	8	13	32
Transporte por medio de Ductos	199	13	32	50	3	5	8	13
Transporte por medio de Ducto	5	2	2	3	2	2	2	2
TOTAL	**5,062**	**154**	**373**	**592**	**26**	**34**	**56**	**106**

D. Permisionarios sujetos a obligaciones de calidad y cantidad (medición de flujo) de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

Se debe verificar el cumplimiento de dos instrumentos regulatorios: las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición tanto de transporte como de almacenamiento (DACG de medición), y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de especificaciones de calidad de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (NOM de calidad).

Para las DACG de medición: se considera un solo factor, Obligaciones, que se desglosa como sigue*:*

Obligaciones: Está compuesto de las variables siguientes: incumplimientos técnicos, denuncias y quejas, emergencias operativas, Informe de incidentes en el sistema de medición y fecha de la última visita de verificación.

I. Incumplimientos técnicos. Está integrado por cuatro rubros: implementación del Sistema de Gestión de Mediciones, calibración de los instrumentos, elaboración de reportes y certificado de cumplimiento emitido por una Empresa Especializada – esta es una obligación anual. La emisión de dicho certificado abarca el cumplimiento de los rubros citados; el valor de ponderación de cada rubro es de 2.5 puntos:

II. A las variables Denuncias y quejas, Emergencias operativas e Incumplimientos técnicos se aplicará un valor de 0 si el permisionario no presenta este tipo de eventos y 10 si presentan el máximo porcentaje de eventualidades con respecto de los demás permisionarios.

III. Finalmente, la variable visita de verificación está en función del tiempo T (años) en que fue realizada la última verificación, que se califica como se muestra en la tabla abajo:

En el caso de las NOM de calidad: se prevé la evaluación de un solo factor, Obligaciones, que se describe como sigue:

I. Cumplimiento de avisos a los usuarios y a la CRE cuando el gas natural esté fuera de especificaciones (NOM-001 Especificaciones del gas natural) o cuando se presenten emergencias operativas o de suministro del gas natural, de algún petrolífero o petroquímico (para la NOM-001, NOM-016 Especificaciones de calidad de los petrolíferos y NOM-014 Especificaciones de calidad de los petroquímicos), y

II. Presentación del dictamen de cumplimiento emitido por una Unidad de Verificación con la NOM de calidad respectiva.

Para ambas obligaciones se tendrá un valor de 0 si se presentan los avisos y el dictamen correspondientes, y un valor de 10 si no se presentan. Para las NOM de calidad el IV se determina mediante el Factor Obligaciones F_O.

$$Fo_C = (V_{1_C} + V_{2_C}) / 2$$

Donde: Fo_C : Es el promedio de las dos variables relativas a las NOM de calidad, cuando haya avisos tanto a los usuarios como a la CRE, así como la presentación del dictamen de cumplimiento de la NOM correspondiente.

Para las DACG de medición, el IV se determina mediante el Factor Obligaciones F_O que es el promedio de las mismas, es decir:

$$Fo_{DACG} = \frac{(V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5)}{5}$$

Donde F_O: Es el promedio de las distintas variables que consideran incumplimientos técnicos (V_1), denuncias y quejas (V_2), emergencias operativas (V_3), informe de incidentes en el sistema de medición (V_4) y fecha de la última visita de verificación (V_5). La ponderación de estas variables se muestra en el cuadro abajo.

Índice de Verificación: $IV = (Fo_C + Fo_{DACG}) / 2$

Tanto para las DACG de medición como para las NOM de calidad se aplica la matriz de cumplimiento para determinar a los permisionarios a quienes se realizará una visita de verificación en el periodo de evaluación considerado.

Las obligaciones tanto para las DACG como para las NOM de calidad y los ponderadores que se aplicarán, se presentan en el cuadro siguiente:

	VARIABLE (Vn)	***CRITERIO DE EVALUACIÓN***		***PONDERACIÓN***
DACG en materia de medición	Técnicas (V_1)	Implementación del Sistema de Gestión de Mediciones	Cumplimiento NO Cumplimiento	0 2.5
		Calibración de instrumentos	Cumplimiento NO Cumplimiento	0 2.5
		Elaboración de reportes	Cumplimiento NO Cumplimiento	0 2.5
		Certificado de cumplimiento	Cumplimiento NO Cumplimiento	0 2.5
	Denuncias y quejas (V_2)	Cumplimiento NO Cumplimiento		0 10
	Avisos de emergencias operativas (V_3)	Cumplimiento NO Cumplimiento		0 10
	Informe de incidentes (V_4)	Cumplimiento NO Cumplimiento		0 10
	Última visita de verificación (V_5)	**T** ≤ 1 año		0
		1 año < **T** ≤ 2 años		5
		2 años < **T** ≤ 3 años		7.5
		T > 3 años		10
NOM de calidad	Avisos a los usuarios y a la CRE (V_{1c})	Cumplimiento		0
		NO Cumplimiento		10
	Dictamen de cumplimiento (V_{2c})	Cumplimiento		0
		NO Cumplimiento		10

E. Permisos de generación eléctrica

I. Para los permisos de generación eléctrica, la metodología se basa en dos factores:

A. Factor A (constantes) como es el caso del rango de capacidad de generación autorizada, tipo de tecnología autorizada, ubicación de la central eléctrica, tiempo transcurrido entre visitas de verificación previas y permisionarios no visitados, y

B. Factor B (variables) como los informes trimestrales (cuyas características son el cumplimiento de la presentación de la información y evaluación del contenido de los informes trimestrales respecto de la actividad autorizada) e incumplimiento del pago anual de derechos.

II. La ponderación de cada factor está dada en un rango de 1 a 10 dependiendo de la relevancia de la variable (Ver Tablas 1, 2 y 3 siguientes).

A. En la Tabla 1, la mayor ponderación se da a las plantas con mayor capacidad instalada debido a la relevancia e impacto en la red eléctrica nacional; una interrupción en estas plantas causaría en problemas en el balance de energía eléctrica del país.

B. En la Tabla 2 se da una mayor ponderación a las plantas con fuentes de energía renovables toda vez que el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 tiene como una de sus finalidades cumplir compromisos con el medio ambiente, incrementando la participación de energías limpias y renovables en la generación de energía eléctrica. Asimismo, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 establece, entre sus objetivos, promover la diversificación y optimización del parque de generación e identificar y aprovechar el potencial de energías renovables en nuestro país, para cumplir con las metas establecidas en materia de energías renovables.

C. En la Tabla 3 se da mayor ponderación a las plantas ubicadas geográficamente en la zona noreste del país, por su efecto potencial sobre la confiabilidad y eficiencia en la operación del sistema eléctrico nacional.

III. En cuanto al número de visitas (Tabla 4), criterios de evaluación de la información presentada que depende de la capacidad de generación instalada (Tablas 5 y 5A) y pago anual de derechos (Tabla 6), la información presentada por el permisionario que se apegue a la regulación tendrá un valor de 0, aquella que no se haya presentado o tenga el mayor número de desviaciones o incumplimientos tendrá un valor de 10.

Tablas de ponderación

Tabla 1.
Capacidad autorizada (FC_1)

Criterio	Puntaje asignado
Capacidad <= 3 MW	2
3 < Capacidad <= 10 MW	4
10 < Capacidad <= 50 MW	6
50 < Capacidad <= 200 MW	8
Capacidad > 200 MW	10

Tabla 2. Tipo de tecnología utilizada (FC_2)

Criterio	Puntaje asignado
Combustión interna	3
Turbina de gas, vapor, otras (incluye sistemas de cogeneración y/o ciclo combinado)	6
Fuente de energía renovable	10

Tabla 3.
Ubicación geográfica (FC_3)

Criterio	Puntaje asignado
Centro	2
Occidente	4
Noroeste	6
Sureste	8
Noreste	10

Tabla 4. Periodo desde la última visita realizada (FC_4)

Criterio	Puntaje asignado
Ninguna visita realizada o más de 10 años sin visita	10
5 a 10 años desde la última visita realizada	5
1 a 5 años desde la última visita realizada	1

Tabla 5. Criterios generales. (FV_1)

Informes entregados	Puntaje asignado
Tres o más	Ver Tabla 5A
Uno o ninguno	10

Tabla 5A*

Información considerada		Criterio	Puntaje asignado
Capacidad de generación**	Hasta 3 MW	Diferencia = 0%	0
		0 < Diferencia <= 25 %	5
		Diferencia > 25 %	10
	De 3 a 10 MW	Diferencia = 0%	0
		0 < Diferencia <= 20 %	5
		Diferencia > 20 %	10
	De 10 a 50 MW	Diferencia = 0%	0
		0 < Diferencia <= 15 %	5
		Diferencia > 15 %	10
	De 50 a 200 MW	Diferencia = 0%	0
		0 < Diferencia <= 10 %	5
		Diferencia > 10 %	10
	Más de 200 MW	Diferencia = 0%	0
		0 < Diferencia <= 5 %	5
		Diferencia > 5 %	10
Tipo de combustible utilizado		Combustible reportado igual al autorizado	0
		combustible utilizado diferente al autorizado	10
Número de inconsistencias (errores en unidades, valores de energía o eficiencia fuera de rango)		Una inconsistencia	3
		Dos inconsistencias	6
		Tres o más inconsistencias	10

*Proceso aplicado para cada uno de los cuatro trimestres, según corresponda.
**En caso de que el puntaje resultante sea 10 de acuerdo a la capacidad que corresponda, se procederá a llevar a cabo una visita de verificación inmediata, independientemente del valor total del IV obtenido.

Tabla 6.
Pago anual de derechos (FV_2)

Criterio	Puntaje asignado
Todos los pagos realizados	0
Un año pendiente	5
Dos o más ejercicios pendientes	10

Los factores están dados por las siguientes expresiones cuyos parámetros aparecen en las tablas de ponderación:

I. **Factor A**: Es el puntaje asignado a factores constantes como capacidad autorizada (FC_1), tipo de tecnología (FC_2), ubicación geográfica del permisionario (FC_3), y tiempo transcurrido desde la última visita de verificación y permisionarios no visitados (FC_4); el Factor A se determina mediante la siguiente expresión:

$$\text{Factor A} = \frac{(\text{FC}_1 + \text{FC}_2 + \text{FC}_3 + \text{FC}_4)}{4}$$

II. **Factor B**: Es el puntaje asignado a los rubros variables que se analizan y evalúan en los informes trimestrales (FV_1), así como al pago anual de derechos (FV_2): Se asignó un valor de 80% de la calificación total a los informes trimestrales y el restante 20% al pago anual de derechos, por lo que el Factor B se expresa como:

$$\text{Factor B} = (\ \text{FV}_1 \times 0.80\ ) + (\ \text{FV}_2 \times 0.20\ )$$

Finalmente, el cálculo del Índice de Verificación, IV, está dado por:

$$\text{IV} = \frac{(\text{Factor A} + \text{Factor B})}{2}$$

Una vez determinado el IV, se utiliza la matriz de cumplimiento incluida en el Anexo 1 para evaluar a los permisionarios a quienes se realizará una visita de verificación en el periodo considerado que resulta de incumplimientos a las obligaciones y desviaciones de la información presentada.

En congruencia con el resultado del IV que corresponda a cada permiso y considerando los recursos económicos y humanos de la Comisión, se define un número total de visitas a realizar en materia eléctrica, tomando en cuenta que el 90% del número total de visitas a realizar será a permisos que de acuerdo a su IV se encuentren clasificados como "visita de verificación" y el 10% restante se asignará a permisos con IV que se encuentren clasificados como "requerimiento de información" (ver matriz de cumplimiento en el Anexo 1), de tal forma que se verifiquen permisos regulares en el corto plazo a efecto de validar la veracidad de la información autorizada y reportada contra las características físicas que se encuentren en sitio.

Finalmente, para el caso concreto en que el indicador implícito en la evaluación del contenido de los informes trimestrales de operación eléctrica "Capacidad de generación" tenga un valor de 10, de acuerdo a la capacidad correspondiente, se procederá a llevar a cabo una visita de verificación inmediata, independientemente del valor total del IV obtenido, es decir, esta variable será considerada como "crítica.

Lo anterior puede resumirse en la tabla siguiente:

Coordinación General de Permisos de Generación de Electricidad

VARIABLE	CRITERIO de EVALUACIÓN				PONDERACIÓN
Capacidad autorizada (**C**)	**C** ≤ 3 MW				2
	3 MW < **C** ≤ 10 MW				4
	10 MW < **C** ≤ 50 MW				6
	50 MW < **C** ≤ 200 MW				8
	C > 200 MW				10
Tecnología utilizada	Combustión interna				2
	Turbina de vapor, otras				4
	Turbina de gas				6
	Cogeneración y/o ciclo combinado				8
	Fuente de energía renovable				10
Ubicación de la central	Centro				2
	Occidente				4
	Nororeste				6
	Sureste				8
	Noreste				10
Visitas de verificación previas (**VR**)	**VR** ≥ 2				1
	VR = 1				5
	VR = 0				10
Informes trimestrales de operación eléctrica	Tres o cuatro Informes NO entregados ≥ 3				10
	Informes entregados	Capacidad de generación reportada DIFERENTE a la autorizada	**C** ≤ 3 MW	**Diferencia** = 0 %	0
				0 % < **Diferencia** ≤ 25 %	5
				Diferencia > 25 %	10
			3 MW < **C** ≤ 10 MW	**Diferencia** = 0 %	0
				0 % < **Diferencia** ≤ 20 %	5
				Diferencia > 20 %	10
			10 MW < **C** ≤ 50 MW	**Diferencia** = 0 %	0
				0 % < **Diferencia** ≤ 15 %	5
				Diferencia > 15 %	10
			50 MW < **C** ≤ 200 MW	**Diferencia** = 0 %	0
				0 % < **Diferencia** ≤ 10 %	5
				Diferencia > 10 %	10
			C > 200 MW	**Diferencia** = 0 %	0
				0 % < **Diferencia** ≤ 5 %	5
				Diferencia > 5 %	10
		Tipo de combustible utilizado		Combustible reportado igual al autorizado	0
				Combustible reportado DIFERENTE al autorizado	10
		Número de inconsistencias (errores en unidades, valores de energía o eficiencia fuera de rango)		Ninguna inconsistencia	0
				1 inconsistencia	3
				2 inconsistencias	6
				3 o más inconsistencias	10
Pago anual de derechos	Todos los pagos realizados				0
	Un año pendiente				5
	Dos o más años pendientes				10

Tabla IV. Niveles de inspección para las actividades permisionadas de Generación Eléctrica.

PERMISIONARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	LOTE	NIVELES DE INSPECCIÓN						
		REDUCIDA	NORMAL	RIGUROSA	ESPECIALES			
		(I)	(II)	(III)	S-1	S-2	S-3	S-4
Autoabastecimiento	574	32	80	125	5	5	13	20
Pequeña Producción	278	13	32	50	3	5	8	13
Generación (LIE)	194	13	32	50	3	5	8	13
Cogeneración	134	8	20	32	3	3	5	8
Importación	47	5	8	13	2	3	3	5
Usos Propios Continuos	36	5	8	13	2	3	3	5
Producción Independiente	32	5	8	13	2	3	3	5
Exportación	7	2	2	3	2	2	2	2
TOTAL	**1,302**	**83**	**190**	**299**	**22**	**29**	**45**	**71**

ANEXO 3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

A. Cálculo del Índice de verificación para petrolíferos.

Supuesto: Permisionario de Transporte por Medios Distintos a Ducto (carro-tanque) que posee 117 carro-tanques.

Si el permisionario entregó el segundo y cuarto reportes trimestrales, la calificación obtenida es la siguiente (de las tablas del Anexo 2, sección de petrolíferos:

CFAO = (10×0.7) + (0×0.1)+(10×0.1)+(10×0.1) = 9.0

De acuerdo a la calificación obtenida por el tipo de actividad, el permiso se encuentra en el rango 3 cuya calificación correspondiente es de 6.

Finalmente, el Índice de Verificación es el siguiente:

IV = ((CFAO) x (.80) + (CCA) x (.20))

IV = ((9) x (.80) + (6) x (.20))

IV = 8.4

B. Cálculo del Índice de verificación para gas natural.

La estimación del índice de verificación (IV) fue realizada considerando un permisionario que entregó cierta información y dio cumplimiento a las obligaciones siguientes:

a) F_M: Informes mensuales de calidad de gas; de los cuales no presentó los 2 últimos, por lo tanto, $F_M = 1.66$

b) $F_{tri m}$: Reportes trimestrales del origen-destino de la energía conducida (prospectiva); de los cuales no presentó los correspondientes al tercer y cuarto trimestres, por lo que $F_{tri m} = 5$

c) F_{sem}: Reporte semestral del Precio máximo de comercialización sin presentar el del segundo semestre, por lo que $F_{sem} = 5$

d) F_{an}: Dictamen anual de la NOM-001-SECRE-2010, el cual fue entregado, por lo tanto $F_{an} = 0$

e) F_{otro}: Revisión Quinquenal del Plan de Negocios; fue presentada, por lo que $F_{otro} = 0$

Adicionalmente, para ser consistente con las obligaciones periódicas de los permisionarios, se tomaron en cuenta los rubros siguientes:

a) F_{an}: Programa anual de operación y mantenimiento, el cual no fue presentado por lo que su calificación es 10.

b) F_{an}: Dictamen del cumplimiento del programa anual de operación y mantenimiento; sí fue presentado, por lo que su calificación es 0.

Tomando en cuenta que el índice de verificación está dado por la siguiente expresión:

$$\mathrm{IV} = \frac{\mathrm{Factor}_1 + \mathrm{Factor}_2 + \ldots + \mathrm{Factor}_n}{n}$$

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación se tiene que:

$$IV = 2.99$$

C. Cálculo del Índice de verificación para GLP.

Se tiene un permisionario con título de permiso LP/ /DIST/PLA/2016

I. Se tiene un cumplimiento de obligaciones siguiente:

Obligaciones administrativas	**Rango**	**Valores**	**Ponderación (W)**	**Incumplimientos**	**Calificación (V)**
Informes Trimestrales: Compras, Ventas y Quejas	0 - 10	{0, 2.5, 5, 7.5, 10}	14.0	3	7.5
Presentación del Programa anual de operación y mantenimiento (Art. 84, fracc. XVIII, LH)	0 - 10	{0, 10}	14.0	1	10.0
Presentación del dictamen de cumplimiento del Programa Anual de Operación y Mantenimiento del año anterior (Art. 84, fracc. XVIII, LH)	0 - 10	{0, 10}	14.0	0	0.0
Presentación del comprobante de pago por Supervisión Anual	0 - 10	{0, 10}	14.0	1	10.0
Presentación de póliza vigente de Seguro de Responsabilidad Civil (Art. 52 RATTLH)	0 - 10	{0, 10}	30.0	1	10.0
Informe de siniestro o contingencia (Art. 84, fracc. XVI, LH)	0 - 10	{0 - 10}	14.0	1	10.0

Cálculo del Factor 1

$$\mathbf{Fi} = \mathbf{V1} \times \mathbf{W1} + \cdots + \mathbf{Vn} \times \mathbf{Wn}$$

$$\mathbf{F1} = (7.5 \times 0.14) + (10 \times 0.14) + (0 \times 0.14) + (10 \times 0.14) + (10 \times 0.30) + (10 \times 0.14)$$

$$\mathbf{F1} = 1.05 + 1.4 + 0.0 + 1.4 + 3.0 + 1.4$$

$$\mathbf{F1} = 8.25$$

II. Condiciones de mercado.

Condiciones de mercado	Rango	Valores	Ponderación (W)	Valor	Calificación (V)
Volumen de GLP manejado	0 - 10	{0 - 10}	33.3	352 Toneladas	2.1
Consumidores de GLP por entidad federativa	0 - 10	{0 - 10}	33.3	Hidalgo	1.9
Número de competidores por tipo de permiso por entidad federativa	0 - 10	{0 - 10}	33.3	30 empresas	0.03

Cálculo del Factor 2

$$\mathbf{Fi} = \mathbf{V1} \times \mathbf{W1} + \cdots + \mathbf{Vn} \times \mathbf{Wn}$$

$$\mathbf{F1} = (2.1 \times 0.33) + (1.9 \times 0.33) + (0.03 \times 0.33)$$

$$\mathbf{F1} = 0.69 + 0.63 + 0.01$$

$$\mathbf{F1} = 1.33$$

Cálculo del índice de verificación

$$\mathrm{IV} = \frac{\mathrm{F1} + \mathrm{F2}}{2}$$

$$\mathrm{IV} = \frac{8.25 + 1.33}{2}$$

$$\mathrm{IV} = 4.79$$

D. Cálculo del Índice de verificación para permisos eléctricos

Como resultado de la aplicación de esta metodología a los permisos de energía eléctrica a continuación, se aplica a dos permisos uno sujeto de ser visitado y otro sujeto de requerir le información de acuerdo a la matriz de obligaciones:

Ejemplo 1: Permisionario sujeto a una visita de verificación

Núm.	Concepto	Descripción
1.	Permisionario	Pemex Transformación Industrial, Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime
2.	Número de permiso	E/641/COG/2007

3.	Resolución de otorgamiento / Fecha	RES/189/2007; 14 de junio de 2007
4.	Capacidad de generación de energía eléctrica	115.2 MW
5.	Tecnología	2 turbogeneradores a vapor con capacidad de 25.60 MW, cada uno y 2 turbogeneradores a vapor con capacidad de 32.00 MW, cada uno
6.	Combustible	Gas natural
7.	Ubicación	Carretera Transísmica, km 3, Municipio de Salina Cruz, Estado de Oaxaca, C. P. 70620.

I. Factores Constantes:

1. Factor constante 1 (FC_1): Rango de capacidad autorizada.

Capacidad autorizada: 115.2 MW; a continuación se define el **criterio 1**

Capacidad <= 3MW se le asigna un 2, con 3 < Capacidad <10MW se le asigna un 4, con

10 < Capacidad <= 50 MW se le asigna un 6, con 50 < Capacidad <= 200 MW un 8, con Capacidad > 200 MW un 10. Por lo que el valor de $FC_1 = 8$.

2. Factor constante 2 (FC_2): Tipo de tecnología autorizada.

La tecnología autorizada es turbogeneradores de vapor, por lo que de acuerdo al **criterio 2:**

Combustión interna se le asigna un 3, Turbina de gas, vapor, otras (incluye sistemas de cogeneración y/o ciclo combinado) se le asigna un 6, Fuente de energía renovable se le asigna un 10. Por lo que el valor de $FC_2 = 6$.

3. Factor constante 3 (FC_3): Ubicación de la central.

Las instalaciones del permiso considerado se encuentran ubicadas en Carretera Transísmica, km 3, Municipio de Salina Cruz, Estado de Oaxaca, C. P. 70620, que corresponde a la región Sureste de la República Mexicana, por lo que siguiendo el **criterio 3:** Zona Centro se le asigna un 2, Occidente un 4, Noroeste un 6, Sureste un 8, Noreste 10. Por lo que el valor de $FC_3 = 8$.

4. Factor constante 4 (FC_4): Permisos no visitados y tiempo transcurrido entre visitas de verificación previas

Siguiendo el **criterio 4:** Ninguna visita realizada o más de 10 años sin visita se asigna un 10, 5 a 10 años desde la última visita realizada un 5 y 1 a 5 años desde la última visita realizada un 1, la Comisión no ha ordenado visita de verificación alguna a las instalaciones del permiso, por lo que siguiendo el criterio 4 definido. Por lo que el valor de $FC_4 = 10$.

II. Factores Variables:

1. Factor variable 1 (FV_1): Informes trimestrales de operación eléctrica:

a) Cumplimiento en la presentación de informes:

De acuerdo al siguiente **criterio 5**: Para tres o más informes entregados ver **proceso 1**, para Uno o ninguno un 10. Como resultado del cumplimiento de esta obligación para Pemex Transformación Industrial, Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime se tiene que durante el ejercicio 2015 no presentó tres informes trimestrales de operación eléctrica. Por lo que el valor de $FV_1 = 10$.

2. Factor variable 2 (FV_2): Incumplimiento en el pago anual de derechos:

Definiendo el siguiente **criterio 6:** Todos los pagos realizados se le asigna un 0, con un año pendiente un 5 y Dos o más ejercicios pendientes un 10. En relación con el cumplimiento de pagos de derechos de Pemex Transformación Industrial, Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, se tiene que no ha presentado los comprobantes de pago correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 a 2016. Por lo que el valor de $FV_2 = 10$

III. Obtención del Índice de Verificación (IV):

Considerando los valores obtenidos y sustituyendo:

$$A = (10 \times 80\%) + (10 \times 20\%) = 10$$

$$B = \frac{(8 + 6 + 8 + 10)}{4} = 8$$

$$IV = \frac{(10 + 8)}{2} = 9.0 \text{ (Visita de verificación)}$$

Ejemplo 2: Datos generales del permiso a ser requerido con base en la matriz de obligaciones:

Núm.	Concepto	Descripción
1.	Permisionario	Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.
2.	Número de permiso	E/84/AUT/98
3.	Resolución de otorgamiento / Fecha	RES/077/1998; 17 de abril de 1998
4.	Capacidad de generación de energía eléctrica	36.5 MW
5.	Tecnología	2 turbogeneradores a vapor, uno con capacidad de 25 MW y otro con capacidad de 11.5 MW
6.	Combustible	Combustóleo
7.	Ubicación	km 21, S/N, de la carretera Nacozari-Agua Prieta, Nacozari de García, Municipio de Nacozari de García, Sonora, C.P. 84340.

I. Factores Constantes:

1. Factor constante 1 (FC_1): Rango de capacidad autorizada.

Capacidad autorizada 36.5 MW, siguiendo el **criterio 1**, se obtiene el valor de **$FC_1 = 6$**

2. Factor constante 2 (FC_2): Tipo de tecnología autorizada.

La tecnología autorizada es turbogeneradores de vapor, por lo que siguiendo el **criterio 2** se obtiene que el valor de **$FC_2 = 6$**

3. Factor constante 3 (FC_3): Ubicación de la central.

Las instalaciones del permiso considerado se encuentran ubicadas en km 21, S/N, de la carretera Nacozari-Agua Prieta, Nacozari de García, Municipio de Nacozari de García, Sonora, C.P. 84340, que corresponde a la región Noroeste de la República Mexicana, por lo que siguiendo el **criterio 3** se obtiene que el valor de **$FC_3 = 6$**

4. Factor constante 4 (FC_4): Permisos no visitados y tiempo transcurrido entre visitas de verificación previas

La Comisión ordenó una visita de verificación a las instalaciones del permiso durante 2002 (hace 14 años), por lo que siguiendo el **criterio 4** se obtiene que el valor de **$FC_4 = 10$**

II. Factores variables:

1. Factor variable 1 (FV_1): Informes trimestrales de operación eléctrica:

a) Cumplimiento en la presentación de informes:

Como resultado del cumplimiento de esta obligación para Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., se tiene que durante el ejercicio 2015 presentó los cuatro informes trimestrales de operación eléctrica por lo que se procede a evaluar mediante la Tabla 5A, de acuerdo a la Tabla 5.

b) Evaluación del contenido de los informes trimestrales de operación eléctrica:

Tabla 5A

Información considerada		Criterio	Puntaje asignado
Capacidad autorizada: 36.5 MW			
Capacidad reportada:		Diferencia = 0%	0
Trimestre 1: 36.5 MW	De 10 a 50 MW	0 < Diferencia <= 15 %	5
Trimestre 2: 36.5 MW			
Trimestre 3: 36.5 MW		Diferencia > 15 %	10
Trimestre 4: 36.5 MW			
Tipo de combustible autorizado: Combustóleo		Combustible reportado igual al autorizado	0
Combustible reportado:			
Trimestre 1: Gas natural		combustible utilizado diferente al autorizado	10
Trimestre 2: Gas natural			
Trimestre 3: Gas natural			
Trimestre 4: Gas natural			
Número de inconsistencias (errores en unidades, valores de energía o eficiencia fuera de rango)		Una inconsistencia	3
		Dos inconsistencias	6
Trimestre 1: no reportó capacidad			
Trimestre 2: sin inconsistencias		Tres o más inconsistencias	10
Trimestre 3: sin inconsistencias			
Trimestre 4: no reportó capacidad			

En congruencia con lo anterior el valor de $FV_1 = 5.33$

2. Factor variable 2 (FV_2): Incumplimiento en el pago anual de derechos:

En relación con el cumplimiento de pagos de derechos de Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., se tiene que no ha presentado los comprobantes de pago correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, por lo que siguiendo el **criterio 6** se obtiene que el valor de **$FV_2 = 10$**

III. Cálculo del Índice de verificación:

Considerando los valores obtenidos y sustituyendo:

$$A = (5.33 \times 0.80) + (10 \times 0.20) = 6.26$$

$$B = \frac{(6 + 6 + 6 + 10)}{4} = 7$$

$$IV = \frac{(6.26 + 7)}{2} = 6.63 \text{ (Requerimiento de información)}$$

Lo anterior, de acuerdo a la matriz de obligaciones definida en el Anexo 1.

(R.- 440487)

ACUERDO que expide el Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.

ACUERDO Núm. A/041/2016

ACUERDO QUE EXPIDE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 9 de febrero del 2015, se publicó en el DOF, el Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía (el Código de Conducta), el cual tiene por objeto orientar la actuación de los servidores públicos adscritos a la misma, con el propósito de que en el ejercicio de sus funciones asuman una actitud íntegra y honesta, en apego a los valores institucionales de rectitud, honestidad, imparcialidad, respeto y transparencia, entre otros valores.

SEGUNDO. Que el 20 de agosto de 2015, la Secretaría de la Función Pública publicó en el DOF, el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública (las Reglas de Integridad), y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (los Lineamientos generales).

TERCERO. Que el 31 de agosto de 2016, las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (el Protocolo).

CUARTO. Que el 13 de septiembre de 2016, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (el Comité de Ética) de la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) aprobó el proyecto de Código de Conducta de la Comisión, mismo que somete a consideración de este Órgano de Gobierno para su aprobación y, en su caso, expedición.

QUINTO. Que el 3 de octubre de 2016, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, informó a la Comisión mediante el oficio SFP/UEEPCI/DGAP y DIEPEOPPCI/119/0297/2016 que el proyecto de Código de Conducta referido en el resultando anterior incorpora todos los elementos previstos en el numeral 6, inciso d) de los Lineamientos.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 15 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) establece que los servidores públicos de la Comisión deberán sujetar sus actividades al código de conducta que para tal efecto emita su Órgano de Gobierno a propuesta del respectivo Comité de Ética.

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 22, fracción XIX de la LORCME y 16, párrafo segundo, fracción VI del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, corresponde al Órgano de Gobierno de la Comisión expedir el código de conducta al que deberán sujetarse los servidores públicos adscritos a esta dependencia.

TERCERO. Que el numeral 6 de los Lineamientos Generales, establece que los comités de ética deben elaborar un código de conducta que tome en cuenta de los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad, que oriente y de certeza plena a sus servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que prevengan conflictos de interés, y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la dependencia o entidad a la que pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos corrupción.

CUARTO. Que por su parte, el Protocolo establece la obligación de todo servidor público de abstenerse de realizar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual descritas en las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y precisa que es necesario establecer un protocolo de atención específico y especializado, que permita a los comités de ética y de prevención de conflictos de interés, prevenir y atender dichas conductas.

QUINTO. Que toda vez que resulta necesario armonizar el anterior Código de Conducta con las Reglas de Integridad, los Lineamientos generales y el Protocolo, se requiere emitir un nuevo código de conducta.

SEXTO. Que este Órgano de Gobierno considera que el proyecto de Código de Conducta propuesto por el Comité de Ética es acorde el objetivo referido en el considerando anterior, por lo que resulta procedente su expedición.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 17 y 22, fracciones I, II, III, XIX, XXVI, inciso a) y XXVII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 16, párrafo segundo, fracción VI, 17, fracción y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, y en el numeral 6, inciso d) de los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, la Comisión Reguladora de Energía, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se expide el Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía, mismo que se anexa al presente y que forma parte integrante como si a la letra se insertare.

SEGUNDO. Se abroga el Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2015.

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo y el anexo único en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. Inscríbase el presente acuerdo bajo el número A/041/2016, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, inciso a) y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.- El Presidente, **Guillermo Ignacio García Alcocer**.- Rúbrica.- Los Comisionados: **Marcelino Madrigal Martínez**, **Luis Guillermo Pineda Bernal**, **Jesús Serrano Landeros**, **Noé Navarrete González**, **Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez**, **Guillermo Zúñiga Martínez**.- Rúbricas.

CÓDIGO DE CONDUCTA

CONTENIDO

ANTECEDENTES

INTRODUCCION

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales.

TÍTULO SEGUNDO

De los principios y valores.

TÍTULO TERCERO

De la Conducta de los Servidores Públicos de la Comisión.

TÍTULO CUARTO

De las Reglas Específicas que deben observar los Servidores Públicos de la Comisión.

CAPÍTULO I

De las Audiencias y Reuniones.

CAPÍTULO II

Del Conflicto de Interés.

TÍTULO QUINTO

Naturaleza, integración, facultades y obligaciones del Comité de Ética.

TÍTULO SEXTO

De la atención de quejas y denuncias.

TRANSITORIOS

ANTECEDENTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, los servidores públicos de esta Comisión someterán sus actividades al Código de Conducta que para tal efecto emita el Órgano de Gobierno, a propuesta del Comité de Ética. En cumplimiento a esta disposición, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) aprobó el Código de Conducta el 18 de diciembre de 2014, elaborado por el Comité de Ética de la Comisión, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de febrero de 2015.

Posteriormente, la Secretaría de la Función Pública emitió y publicó en el DOF el 20 de agosto de 2015, el "Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés".

El numeral 6 de los Lineamientos Generales, establece que los Comités de Ética deben elaborar un Código de Conducta que tome en cuenta de los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad; que oriente y dé certeza plena a sus servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que prevengan conflictos de interés, y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la dependencia o entidad a la que pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos corrupción.

Por otra parte, el considerando séptimo del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (el Protocolo) publicado en el DOF el 31 de agosto de 2016, establece que es necesario establecer un protocolo de atención específico y especializado, que permita a los comités de ética y de prevención de conflictos de interés, prevenir y atender las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual.

En consecuencia, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Comisión somete a aprobación del Órgano de Gobierno el presente Código de Conducta que sustituye al publicado el 9 de febrero de 2015.

INTRODUCCIÓN

El presente Código de Conducta de la Comisión ha sido elaborado considerando los principios y valores del Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los valores institucionales definidos a partir de la transformación que tuvo la Comisión a partir de los retos encomendados como órgano regulador coordinado en el año 2014.

Por tanto, incluye los criterios que deberán observar los servidores públicos de la Comisión para llevar a cabo audiencias con sujetos regulados; las consideraciones para que los Comisionados o cualquier otro servidor público participe en eventos académicos o de difusión, o foros y eventos públicos, que se relacionen con el objeto de la Comisión; así como los actos u omisiones que representan un conflicto de interés y las reglas y procedimientos para informar al Órgano de Gobierno, al Comisionado Presidente o al Comité de Ética sobre cualquier situación que pueda representar un conflicto de interés real o potencial, a efecto de que se valore y, en su caso, se otorguen las autorizaciones que correspondan.

El presente Código constituye también un instrumento para propiciar un ambiente de responsabilidad, compromiso y respeto a los derechos humanos laborales del personal de la Comisión.

El lenguaje empleado en el presente Código de Conducta no busca generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan ambos sexos.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto.

El presente Código tiene por objeto orientar la actuación de los Servidores Públicos de la Comisión con el propósito de que en el ejercicio de sus funciones observen apego a los principios, valores y reglas de integridad, generales e institucionales que deben distinguir el servicio público en este órgano regulador en materia energética.

Artículo 2.- Visión.

La Comisión es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética que de manera autónoma, transparente y eficiente orienta los intereses de los usuarios y sujetos regulados al desarrollo de un mercado energético competitivo y sostenible, en beneficio de la sociedad.

Artículo 3.- Misión.

La misión de la Comisión es regular de manera transparente, imparcial y eficiente las actividades de la industria energética que son de su competencia, a fin de generar certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentar una sana competencia, propiciar una adecuada cobertura y atender a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad.

Artículo 4.- Definiciones.

Además de las definiciones previstas en el "Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" y en el "Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual", se establecen las siguientes:

I. Acuerdo: El Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015;

III. Código: Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía;

IV. Código de Ética: Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015;

VI. Comisionado Presidente: La persona que ostenta el cargo a que hace referencia el artículo 5 y 23 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

XI. Ley: Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

XIII. Órgano de Gobierno: Órgano de Gobierno de la Comisión;

XIV. Presidencia del Comité: la Presidencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés;

XV. Reglas de integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, señaladas en el Acuerdo;

XVI. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva de la Comisión a que hace referencia el artículo 5 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

XVII. Secretaría Ejecutiva del Comité: La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés;

XVIII. Servidores Públicos: Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la Comisión, incluyendo a las y los Comisionados;

XIX. Sujeto regulado: Toda persona física o moral solicitante o titular de un permiso o autorización otorgado por la Comisión, así como aquellas personas que formen parte de su mismo grupo de interés económico.

No se considerará como un sujeto regulado a aquellas entidades de la administración pública y autoridades con las que la Comisión tiene obligaciones legales de coordinarse, en términos de los artículos 3, 19, 20 y 21 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 11, fracción V, y 107 al 112 de la Ley de la Industria Eléctrica, y 66 al 69 de la Ley de Hidrocarburos.

Artículo 5.- Alcance, interpretación y reformas.

El presente Código es de observancia general para todo el personal de la Comisión en el ejercicio de sus funciones.

Su interpretación corresponde al Órgano de Gobierno de la Comisión. El Órgano de Gobierno se apoyará en el Comité de Ética para el análisis, publicación y difusión de los criterios de interpretación que en su caso requiera emitir.

El proceso de reforma a este Código podrá iniciarse con un proyecto que presente algún miembro del Comité de Ética y que sea aprobado por la mayoría de sus integrantes y sometido a consideración del Órgano de Gobierno.

TÍTULO SEGUNDO

De los principios y valores

Artículo 6.- Principios rectores del servicio público y reglas de integridad.

En el ejercicio de la función pública las y los servidores públicos de la Comisión deberán conducirse conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como las Reglas de Integridad definidos en el Acuerdo.

Los Servidores Públicos de la Comisión deben contribuir a desarrollar una cultura de apego a la legalidad y de responsabilidad pública que mejore la calidad en la gestión pública, genere confianza en los sujetos regulados y en los usuarios y prevenga prácticas de corrupción y arbitrariedad.

Artículo 7.- Valores del Código de Ética.

Los valores contenidos en el Código de Ética son el interés público, el respeto a las personas en general, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, la equidad de género, el entorno cultural y ecológico, la integridad, la cooperación, el liderazgo, la transparencia y la rendición de cuentas.

El personal de la Comisión debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones estos valores contenidos en el Código de Ética.

Artículo 8.- Valores institucionales.

Los valores institucionales que en el ejercicio de sus funciones deberá observar el personal de la Comisión son:

a) Rectitud: consisten en desempeñar el empleo, cargo o comisión bajo cauces legales y morales, de forma íntegra, diligente, responsable y de buena fe;

b) Honestidad: consiste en decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Ser honesto implica comprender la verdad y actuar con sinceridad, respeto a uno mismo y respeto a los demás;

c) Imparcialidad: entendida como la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. Ser imparcial consiste en actuar con objetividad al momento de conocer, atender, diligenciar y resolver los asuntos que se tienen encomendados en razón del empleo, cargo o comisión;

d) Respeto: entendido como el reconocimiento y la aceptación que se tiene de sí mismo y de los demás. Respetar consiste en tratar con consideración a las personas, reconociendo, aceptando, apreciando y valorando sus cualidades, como base de toda convivencia positiva, y

e) Transparencia: consiste en actuar de manera responsable, clara y sin arbitrariedad. Implica garantizar la máxima publicidad y disponibilidad de la información y el derecho de toda persona de acceder a la información en posesión de la Comisión, siempre y cuando no se encuentre restringida por razones legales.

TÍTULO TERCERO

De la Conducta de los Servidores Públicos de la Comisión

Artículo 9.- Buena conducta.

Los servidores públicos de buena conducta serán aquellos que durante el ejercicio de sus funciones practiquen cabal y rigurosamente los principios y valores definidos en el Título Segundo de este Código.

Artículo 10.- Compromisos.

Los Servidores Públicos de la Comisión en el ejercicio de sus funciones deberán asumir en todo momento los compromisos siguientes:

I. Conocer, observar y respetar el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que resulten aplicables en el desempeño de su empleo, cargo o comisión;

II. Hacer uso debido del empleo, cargo o comisión, de conformidad con las leyes y normas que regulan su actuación;

III. Actuar siempre con honradez, probidad y apego al marco jurídico;

IV. Desempeñar su empleo, cargo o comisión en función de las obligaciones y atribuciones conferidas, con el comportamiento adecuado en su relación laboral con la Comisión y con compañeros de trabajo, superiores y subordinados;

V. No recibir beneficios personales de tipo económico, privilegios, favores, entre otros, o la realización de acciones tendientes a perjudicar a terceros de manera física, emocional o económica;

VI. Ofrecer un trato justo, cordial, equitativo y empático, orientado siempre por un espíritu de servicio;

VII. Practicar una actitud de apertura, acercamiento, transparencia y rendición de cuentas y promover la participación de la sociedad;

VIII. Tratar con dignidad, respeto y de manera cordial a todo el personal que labora en la Comisión sin hacer distinción de tipo alguno que atente contra la dignidad humana;

IX. Tomar decisiones en apego a la ley y a los principios establecidos en el presente Código;

X. Manejar la información a la que tengan acceso derivada de su empleo, cargo o comisión con la debida confidencialidad y reserva, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y tomar las medidas necesarias para garantizar su integridad;

XI. Ofrecer los mecanismos necesarios y adecuados para garantizar el acceso a la información en forma ordenada, libre y transparente, atendiendo al principio de máxima publicidad y disponibilidad, salvo que se trate de información reservada o confidencial;

XII. Evitar situaciones en las que el ejercicio de las atribuciones propias del empleo, cargo o comisión puedan ser influenciadas por algún interés personal, familiar o de negocios que interfiera o se contraponga con los intereses propios de la Comisión, y

XIII. Buscar de manera permanente la actualización y formación profesional propia y la de sus subordinados, a fin de mejorar el desempeño, procurar la innovación e incentivar el desarrollo laboral.

Artículo 11.- Deberes.

Los Servidores Públicos de la Comisión, alineados a los compromisos referidos en el artículo anterior, deberán:

I. Asumir con responsabilidad las obligaciones inherentes al empleo, cargo o comisión;

II. Abstenerse de desempeñar cualquier actividad que implique conflicto con los objetivos e intereses de la Comisión;

III. Abstenerse de interferir en trámites o asuntos en los que se tenga un interés personal, familiar o de negocios;

IV. Abstenerse de aplicar indebidamente las disposiciones legales y normativas en perjuicio de terceros o en beneficio de intereses privados, o realizar interpretaciones contrarias a derecho;

V. Denunciar inmediatamente cualquier irregularidad, acto u omisión contrarios a la ley, al Código de Ética o al presente Código de la que se tenga conocimiento sin importar el sujeto activo de que se trate;

VI. Abstenerse de solicitar o aceptar dádivas o cualquier beneficio por parte de personas que realicen, pretendan realizar o tengan interés en alguna actividad regulada;

VII. Devolver de inmediato cualquier bien o servicio ofrecido de manera directa o por interpósita persona por parte de los sujetos regulados o quienes tengan un interés en actividades reguladas;

VIII. Brindar a los sujetos regulados la atención, orientación e información adecuada y un trato igualitario y respetuoso, de acuerdo con los mecanismos institucionales y disposiciones legales;

IX. Tratar los asuntos bajo estricto orden de prelación, con eficiencia, igualdad e imparcialidad;

X. Abstenerse de llevar a cabo actividades ajenas al empleo, cargo o comisión en el horario laboral, salvo actividades académicas que no interfieran con el cumplimiento de sus obligaciones;

XI. Cumplir la jornada de trabajo con puntualidad y desarrollar las actividades inherentes al empleo, cargo o comisión con toda la diligencia necesaria, atendiendo en tiempo y forma los asuntos que se tengan encomendados;

XII. Procurar tener siempre una imagen personal y del área de trabajo digna y agradable a los demás;

XIII. Promover la eliminación de diferencias que puedan existir entre el personal que se tiene a cargo;

XIV. Manejar un lenguaje incluyente y propiciar un trato ecuánime y de oportunidad al personal que labora en la Comisión;

XV. Ofrecer siempre un trato basado en el respeto mutuo, en la cortesía, la igualdad de género y la no discriminación, sin importar la jerarquía;

XVI. Respetar la libre manifestación de ideas y aportaciones de cualquier persona que labore en la Comisión;

XVII. Orientar con oportunidad y buen trato al personal de nuevo ingreso y facilitar toda la información y asesoría necesaria para su buen desempeño;

XVIII. Observar una conducta honrada y respetuosa hacia las pertenencias personales de los demás, así como de los bienes de la Comisión;

XIX. Evitar toda acción que distraiga, moleste o perturbe a los compañeros de trabajo, tales como escuchar música, consumir alimentos en las oficinas, usar lenguaje ofensivo, entre otros;

XX. Abstenerse de propagar rumores o comentarios que lesionen la integridad síquica o moral, así como la honra y la dignidad de cualquier persona que labore en la Comisión;

XXI. Denunciar cualquier tipo de violencia, acoso u hostigamiento sexual o laboral que cometa algún compañero de trabajo, en términos de los protocolos o cualquier otra normatividad aplicable en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual;

XXII. Tomar decisiones bajo estricto apego a la ley, la equidad, la transparencia y la máxima publicidad;

XXIII. Actuar conforme a criterios de justicia y equidad cuando se tome una decisión, sin hacer distinción alguna por motivos personales;

XXIV. Organizar y cuidar toda la información que se tenga bajo custodia y evitar su afectación, destrucción, ocultamiento o su sustracción indebida;

XXV. Actuar de forma profesional, íntegra, pronta y confiable en la integración y preparación de la información que se tenga a cargo;

XXVI. Asistir a los cursos de capacitación que organice y promueva la Comisión, así como demostrar disposición para lograr una mejora continua en su desempeño;

XXVII. Abstenerse de interrumpir o cancelar los programas de capacitación en los que participe o intervenga el personal a su cargo;

XXVIII. Mantener una actitud positiva, comprometida con los objetivos de la Comisión, trabajando en equipo con los compañeros de trabajo, y

XXIX. Reconocer la labor desarrollada y los méritos obtenidos por el personal a cargo y los compañeros de trabajo.

XXX. Colaborar en la construcción de un clima laboral libre de violencia laboral, respeto a la equidad de género y prevención al hostigamiento sexual y acoso sexual.

TÍTULO CUARTO

De las Reglas Específicas que deben observar los Servidores Públicos de la Comisión

CAPÍTULO I

De los Audiencias y Reuniones

Artículo 12.- Audiencias con los Comisionados.

Los Comisionados podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los sujetos regulados únicamente a través de audiencia, para lo cual deberán observar el procedimiento siguiente:

I. La audiencia deberá programarse en un libro de registro que estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva;

II. La Secretaría Ejecutiva deberá convocar a la audiencia a todos los Comisionados con al menos 72 horas de anticipación.

En casos urgentes, podrá convocar a los Comisionados a la fecha y hora prevista para el desahogo de la audiencia, con dos horas de anticipación.

III. Los Comisionados deberán confirmar su asistencia a la audiencia dentro de las 24 horas siguientes, salvo que se trate de los casos urgentes mencionados en la fracción anterior en cuyo caso deberán confirmar de manera inmediata;

IV. La audiencia podrá programarse cuando al menos dos Comisionados hayan confirmado su asistencia, sin perjuicio de que otros Comisionados puedan incorporarse a la misma posteriormente;

V. La audiencia podrá llevarse a cabo, siempre y cuando:

a. Estén presentes al menos dos Comisionados, y

b. Se realice en las oficinas de la Comisión.

VI. La audiencia será presidida por la o el Comisionado Presidente, en caso de haber asistido, o en su defecto, por la o el Comisionado con mayor antigüedad que esté presente;

VII. Todas las intervenciones de las partes se realizarán oralmente, y en ningún caso las intervenciones que realicen los Comisionados comprometerán su voto o la decisión que en su momento llegue a efectuar el Órgano de Gobierno, situación que será hecha del conocimiento de los participantes de la audiencia;

VIII. La participación de los Servidores Públicos de la Comisión que asistan a la audiencia deberán limitarse a los requerimientos de los Comisionados;

IX. La audiencia será grabada y almacenada en medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, manteniéndose como información reservada y sólo podrá consultarse por los Servidores Públicos de la Comisión, y

X. Al finalizar la audiencia, se levantará una minuta que deberá ser publicada dentro de los diez días hábiles siguientes a su celebración en el portal de internet de la Comisión, y en la que se asentará:

a. Fecha;

b. Hora de inicio y conclusión;

c. Nombres completos, firmas y cargos de todas las personas que estuvieron presentes, y

d. Una descripción general del asunto tratado.

Artículo 13.- Reuniones con los servidores públicos.

Los Servidores Públicos de la Comisión, distintos a los Comisionados, podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los sujetos regulados a través de reuniones de carácter institucional, para lo cual deberán observar el procedimiento siguiente:

I. Las reuniones institucionales se programarán en un libro de registro que estará a cargo de la unidad administrativa responsable del tema;

II. La unidad administrativa responsable del tema deberá convocar con al menos 24 horas de anticipación a los Servidores Públicos de la Comisión cuya participación resulte necesaria para el correcto desarrollo de la reunión;

III. Concluida la reunión, se levantará una minuta en la que se asentará:

a. Fecha;

b. Hora de inicio y conclusión;

c. Nombres completos, firmas y cargos de todas las personas que estuvieron presentes, y

d. Una descripción general del tema tratado, y

e. Acuerdos asumidos, en su caso.

IV. Las minutas serán entregadas a la Secretaría Ejecutiva dentro de los cinco días hábiles siguientes, a fin de que se lleve un registro de las reuniones atendidas por los Servidores Públicos de la Comisión;

V. La unidad administrativa convocante deberá informar los resultados de la reunión al Órgano de Gobierno, cuando el tema tratado lo amerite;

VI. Los Servidores Públicos de la Comisión que asistan a la reunión deberán informar a su superior jerárquico los resultados de la misma, y

VII. En su caso, se deberá dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos asumidos, informando a las áreas involucradas de su puntual cumplimiento.

En casos de emergencia, la Secretaría Ejecutiva podría eximir del cumplimiento de las formalidades establecidas en este artículo. Estas situaciones y los contactos correspondientes deberán ser hechas del conocimiento del Órgano de Gobierno.

Artículo 14.- Participación de los Comisionados.

Los Comisionados que sean invitados a participar en eventos académicos o de difusión, foros, congresos o en cualquier otro evento público, o bien, pretendan realizar una visita de trabajo, deberán someter a consideración del Órgano de Gobierno su participación mediante el envío por correo electrónico institucional de una solicitud de aprobación, misma que deberá contener:

I. El evento al que pretende asistir o la visita de trabajo que desea realizar, y

II. La fecha en que se llevará a cabo el mismo.

Recibida la solicitud, los Comisionados podrán aprobarla o negarla usando el mismo medio. En todo caso, las aprobaciones deberán emitirse con antelación a la realización del foro, evento público o visita de trabajo correspondiente.

Se entenderá que el Órgano de Gobierno ha aprobado la solicitud cuando se tenga la aprobación de la mayoría de los Comisionados, en cuyo caso la Secretaría Ejecutiva dará cuenta en la siguiente sesión del Órgano de Gobierno de las aprobaciones emitidas conforme a este mecanismo.

En caso de que la solicitud no haya sido aprobada se hará la anotación correspondiente en la siguiente sesión del Órgano de Gobierno.

Para los efectos de este artículo, el sistema de correo institucional hará las veces de acuse de recibo de la solicitud.

El uso de este mecanismo es sin perjuicio de que las solicitudes de aprobación puedan ser presentadas directamente en una sesión de Órgano de Gobierno.

Artículo 15.- Participación de los servidores públicos distintos de los Comisionados.

Los Servidores Públicos de la Comisión distintos de los Comisionados, podrán participar en eventos académicos o de difusión, foros, seminarios, congresos o en cualquier otro evento público de naturaleza análoga que tenga relación con el ámbito de competencia de la Comisión, incluyendo aquellos promovidos por personas que representan los intereses de los sujetos regulados, siempre y cuando no se aborden temas en los que dichas personas tengan un interés específico.

Cada unidad administrativa llevará a cabo un registro de las participaciones de los servidores públicos que formen parte de cada una de ellas, en el cual se hará constar:

a. El nombre del servidor público;

b. La naturaleza del evento (conferencia, congreso, foro, entre otros);

c. El contenido o alcance del evento;

d. La naturaleza jurídica del organizador del evento;

e. El tipo de participación (oyente, ponente, conferencista, entre otros);

f. Institución que correrá con los costos (Inscripción, traslado, viáticos, y otros de naturaleza análoga), y

g. Beneficios obtenidos tanto para la Comisión como para el servidor público.

Artículo 16.- Obligaciones de los participantes.

Los Servidores Públicos de la Comisión que participen en los eventos públicos a que se refiere el presente Capítulo deberán observar las obligaciones siguientes:

I. Guardar la debida secrecía respecto de la información que tengan con motivo de su empleo, cargo o comisión y que no pueda ser divulgada por disposición legal;

II. Abstenerse de cualquier conducta que implique sustraerse del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

III. Abstenerse de comprometer a la Comisión o de hablar sobre temas que se encuentren en etapa deliberativa;

IV. Formular las participaciones a título personal, sin comprometer de forma alguna al Órgano de Gobierno;

V. Denunciar inmediatamente por escrito o correo electrónico ante el Órgano Interno de Control cualquier tentativa o acto de cohecho que pretenda realizar cualquier persona relacionada con los actos administrativos bajo su encomienda, y

VI. Evitar tratar con los sujetos regulados o con las personas que representen los intereses de los mismos, fuera del marco de este Reglamento y de las disposiciones legales, asuntos que por su naturaleza deban ser tratados en una audiencia pública o en una reunión oficial de trabajo.

CAPÍTULO II

Del Conflicto de interés

Artículo 17.- Conflicto de interés.

Existe conflicto de interés real o potencial cuando en el desempeño del empleo, cargo o comisión el Servidor Público se ve influenciado por algún interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para sí mismo, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Artículo 18.- Procedimiento a seguir en caso de conflicto de interés.

Cuando un Servidor Público de la Comisión considere que su intervención en un determinado asunto puede representar un conflicto de interés deberá seguir el procedimiento siguiente:

I. Informar de inmediato por escrito o correo institucional a su superior jerárquico:

a. El asunto que por razón de su empleo, cargo o comisión le compete conocer;

b. Las razones por las que su intervención puede representar un conflicto de interés;

c. En su caso, la documentación que contextualice y permita conocer los antecedentes del asunto en concreto, y

d. La solicitud para excusarse de conocer o intervenir en el asunto referido.

II. Recibido el escrito, la autoridad receptora lo valorará y resolverá en definitiva sobre la solicitud de excusación.

III. Cuando un Servidor Público no pueda abstenerse de intervenir en el asunto en el que tenga un interés real o potencial, deberá estar a lo siguiente:

a. El Servidor Público, previo a intervenir, deberá informar por escrito al superior inmediato sobre dicha situación.

b. El superior inmediato instruirá al servidor público por escrito respecto a la forma en que deberá atender, tramitar o resolver el asunto en cuestión, y

c. El superior inmediato notificará por escrito al Comité de Ética las determinaciones adoptadas.

IV. En caso de que el Servidor Público no se apegue a las fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 19.- Prohibiciones.

Queda estrictamente prohibido para los Servidores Públicos de la Comisión:

I. Participar en eventos sociales o recreativos, tales como reuniones, desayunos, comidas, cenas, o de cualquier otra naturaleza análoga, convocados por sujetos regulados o por personas que representen los intereses de los mismos, salvo que cuenten con el visto bueno del Comité de Ética en los términos previstos en este artículo;

II. Recibir directa o indirectamente dinero en efectivo, transferencias, obsequios o cualquier otro objeto de valor de parte de sujetos regulados o personas que representen los intereses de los mismos;

III. Recibir, proponer, autorizar o consentir la recepción de cualquier clase de beneficios, como son el pago de viáticos y pasajes, servicios, financiamiento o aportaciones económicas, relacionadas directas o indirectamente con el ejercicio de atribuciones o funciones, por parte de sujetos regulados o por personas que representen los intereses de los mismos;

IV. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tenga acceso o conocimiento con motivo de su cargo, y

V. Realizar o asistir a reuniones o audiencias con sujetos regulados o con personas que representen los intereses de los mismos, para tratar asuntos de su competencia, fuera del marco de este Código y la Ley.

Para efectos de la fracción I y ante la imposibilidad de sesión del Comité de Ética, los Servidores Públicos solicitarán vía correo electrónico institucional el visto bueno correspondiente a la Presidencia del Comité y los titulares integrantes temporales de los primeros cuatro niveles en orden jerárquico descendente de dicho Comité.

La Presidencia del Comité y los cuatro titulares integrantes temporales señalados en el párrafo anterior deberán otorgar o negar el visto bueno usando el mismo medio. En todo caso, las aprobaciones deberán emitirse con antelación a la realización del evento correspondiente.

Se considerará que se cuenta con el visto bueno del Comité cuando tres de los cinco integrantes a que hace referencia el párrafo anterior hayan manifestado su aprobación.

En caso de que la Presidencia del Comité o alguno de los titulares integrantes temporales señalados anteriormente requiera solicitar el visto bueno del Comité para participar en uno de los eventos referidos en los incisos a) y b), la solicitud la realizará al suplente respectivo para el caso del nivel que represente.

La prohibición relativa a la fracción I anterior no será aplicable a situaciones que no impliquen un conflicto de interés, tales como eventos o beneficios auspiciados por instituciones académicas; autoridades gubernamentales de los niveles federal, estatal o municipal; organismos internacionales o centros de investigación.

Artículo 20.- Eventos permitidos.

Los eventos que por su naturaleza no dan lugar a un conflicto de interés o a una captura regulatoria de los Servidores Públicos de la Comisión, son los siguientes:

I. La participación en foros cuya transmisión o grabación sea vía remota o mediante publicaciones posteriores y no den lugar a intercambios con terceros, tales como webinars, entrevistas televisivas, radiofónicas o periodísticas, o en otros medios de comunicación, y

II. La participación y asistencia a ceremonias y reuniones de carácter oficial, que deberán ser debidamente convocadas por autoridades gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones educativas o centros de investigación.

III. Eventos de naturaleza similar a los contemplados en las fracciones anteriores.

Artículo 21.- De la declaración de intereses.

Los Servidores Públicos de la Comisión que se encuentren obligados a presentar Declaración Patrimonial en términos de la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, deberán presentar al Comité de Ética su Declaración de Intereses, durante los sesenta días naturales posteriores a su ingreso a la Comisión, y deberán actualizarla o comunicar que no ha sufrido cambios durante el mes de mayo de cada año.

Esta declaración de intereses será independiente a la que se presenten los servidores públicos obligados, a la Secretaría de la Función Pública conforme a las disposiciones que para tal efecto emite esa Dependencia.

El Comité de Ética emitirá el formato que considere los elementos mínimos requeridos en dicha Declaración de Intereses.

TÍTULO QUINTO

Naturaleza, integración, facultades y obligaciones del Comité de Ética

Artículo 22.- Naturaleza del Comité de Ética.

El Comité de Ética es el órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior de la Comisión para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del presente Código.

Asimismo, es la instancia encargada de atender y orientar los casos de hostigamiento y acoso sexual o laboral que se presenten al interior de la Comisión, así como encauzar y dar acompañamiento a aquellos casos en materia de igualdad y no discriminación.

Artículo 23. Integración del Comité de Ética.

El Comité se integrará de acuerdo con las Bases que emita el propio Comité, en apego a las disposiciones que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 24.- Facultades y Obligaciones del Comité de Ética.

El Comité de Ética tendrá las facultades y obligaciones que a continuación se señalan:

I. Establecer mecanismos para recibir, investigar y atender quejas y denuncias contra posibles actos contrarios al Código de Ética o al presente Código, o actos específicos de hostigamiento y acoso sexual o laboral;

II. Tratar con estricta confidencialidad la información procedente de quejas y denuncias;

III. Dirigir al Órgano Interno de Control los casos que de manera fundada contravienen al Código de Ética o al presente Código;

IV. Realizar llamadas de atención a los Servidores Públicos ante situaciones contrarias a los valores institucionales, principios éticos y normas de conducta establecidos en este Código;

V. Implementar acciones para prevenir la incidencia de actos contrarios al presente Código;

VI. Presentar al Comisionado Presidente un informe anual sobre el estado que guardan la ética y conducta en la Comisión, así como las acciones implementadas para impulsar la cultura de la ética y conducta institucionales;

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones en la materia.

Artículo 25.- Facultades y obligaciones de la Presidencia del Comité.

La Presidencia del Comité tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Resolver sobre las solicitudes presentadas por los Servidores Públicos de la Comisión para asistir a eventos sociales, recreativos o de cualquier otra naturaleza análoga, en los términos que establece el artículo 19 del presente Código;

II. Fomentar el cumplimiento del Código de Ética y de este Código;

III. Determinar los grupos de trabajo específicos que sean necesarios para atender casos concretos;

IV. Ejercer el voto de calidad en los asuntos del Comité, y

V. Las demás que establezcan otras disposiciones en la materia.

Artículo 26.- Facultades y obligaciones de la Secretaría Ejecutiva del Comité.

La Secretaría Ejecutiva del Comité tendrá las facultades y obligaciones que a continuación se señalan:

I. Recibir las propuestas y solicitudes de convocatoria de los integrantes del Comité;

II. Integrar el orden del día, convocar a sesión del Comité, elaborar las actas de sesión dentro de los diez días hábiles posteriores a su celebración y enviarlas a los integrantes del Comité para su aprobación y firma;

III. Emitir las convocatorias para la elección de los integrantes temporales del Comité;

IV. Elaborar el proyecto de programa anual de trabajo del Comité y enviarlo a los integrantes del Comité;

V. Coordinar las acciones para la actualización de los indicadores de cumplimiento del presente Código;

VI. Informar al Comité de la evolución de los indicadores y solicitar su difusión a través de los medios de comunicación interna;

VII. Enviar copia del programa de trabajo y evolución de los indicadores al Órgano Interno de Control en la Comisión y demás autoridades competentes de la Secretaría de la Función Pública, dentro de los plazos que establezca esta última;

VIII. Recibir las consultas de los Servidores Públicos de la Comisión, hacerlas del conocimiento del Comité y generar un histórico de los temas atendidos;

IX. Someter a consideración del Comité, los actos que los integrantes del mismo tengan respecto a posibles actos contrarios al Código de Ética o al presente Código, o posibles actos de hostigamiento o acoso sexual o laboral por parte de Servidores Públicos de la Comisión;

X. Integrar el registro de las quejas y denuncias que se reciban, así como llevar un archivo de los documentos que se generen en el Comité; y

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones en la materia.

Artículo 27.- Facultades y obligaciones de los integrantes temporales.

Los integrantes temporales del Comité de Ética tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I. Ejercer su derecho a voz y voto;

II. En caso de considerarlo necesario, solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Comité convoque a sesión de trabajo del Comité de Ética;

III. Revisar las actas de las sesiones que les sean enviadas por la Secretaría Ejecutiva del Comité, y en caso de que existieran observaciones a las mismas, hacerlas del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción;

IV. Conocer, analizar y, en su caso, opinar sobre el proyecto de programa anual de trabajo, así como determinar los indicadores de cumplimiento del presente Código y el método que se seguirá para evaluar anualmente los resultados obtenidos;

V. Realizar propuestas para el mejor funcionamiento del Comité de Ética;

VI. Comunicar a la Presidencia del Comité o a la Secretaría Ejecutiva del Comité las conductas contrarias al Código de Ética o al presente Código, o relacionadas con hostigamiento y acoso sexual de los Servidores Públicos de la Comisión, de las que tenga conocimiento, y

VII. Capacitarse en materias relacionadas con el hostigamiento y acoso sexual y todas aquellas que faciliten la comprensión, identificación y atención de casos que pongan en riesgo la sana convivencia laboral en la Comisión; y

VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones en la materia.

Artículo 28.- Facultades y obligaciones de los invitados.

Los invitados del Comité de Ética tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I. Ejercer su derecho a voz en las sesiones del Comité de Ética;

II. Realizar propuestas para el mejor funcionamiento del Comité de Ética,

III. Observar la confidencialidad que sea requerida en asuntos específicos, y

IV. Participar en los grupos de trabajo específicos que le sean requeridos, de acuerdo con su especialidad y en su calidad de asesores del Comité.

TÍTULO SEXTO

De la atención de quejas y denuncias

Artículo 29. Quejas y denuncias.

Las quejas, denuncias o cualquier caso particular relacionados con posibles actos contrarios al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al presente Código, así como los actos de hostigamiento y acoso sexual o laboral, o bien en materia de igualdad y no discriminación que se reciban en el Comité de Ética, deberán ser analizadas y atendidas por dicho órgano, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano Interno de Control, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del Instituto Nacional de las Mujeres y demás autoridades competentes.

Cualquier persona puede hacer del conocimiento del Comité presuntos incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el presente Código, a través de la presentación de una queja o denuncia, acompañada del testimonio de un tercero.

Los Servidores Públicos de la Comisión están obligados a denunciar de manera inmediata al Comité de Ética o al Órgano Interno de Control, los presuntos incumplimientos descritos en el párrafo anterior. La omisión de la denuncia también será sujeta de sanción, en los términos establecidos en el Acuerdo, los protocolos y demás normatividad aplicable en la materia.

La presentación de quejas o denuncias se podrá realizar de manera presencial o electrónica. Sólo se admitirán quejas o denuncias anónimas cuando en su contenido se identifique al menos a una persona que le consten los hechos.

La atención de las quejas y denuncias del orden general, se apegará al protocolo que emita el Comité de Ética.

En materia de hostigamiento sexual y acoso sexual, el Comité de Ética deberá atender el protocolo que para tal efecto emita el Instituto Nacional de las Mujeres e integrará a sus programas de trabajo las acciones tendientes a prevenir estas conductas.

Ambos protocolos deberán ser difundidos a todo el personal de la Comisión, por los medios institucionales.

Artículo 30.- De las medidas preventivas.

La Presidencia del Comité podrá determinar medidas preventivas en caso de que la queja o denuncia describa conductas en las que exista presunción de hostigamiento, agresión, amenazas, acoso o intimidación a una persona, sin que ello signifique tener como ciertos los hechos.

El protocolo de atención de quejas y denuncias será elaborado y aprobado por el Comité de Ética, el cual incluirá el mecanismo para su verificación y calificación. El protocolo de prevención, atención y sanción en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual será aquél que emita el Instituto Nacional de las Mujeres, debiendo el Comité de Ética establecer las acciones necesarias para su implementación y seguimiento.

Artículo 31.- De la conciliación.

Cuando los hechos narrados en una queja o denuncia afecten únicamente a la persona que la presentó, los miembros del Comité podrán intentar una conciliación entre las partes involucradas, siempre con el interés de respetar los principios y valores contenidos en el presente Código, en el Código de Ética y en las Reglas de Integridad.

Artículo 32. De las conclusiones del Comité de Ética

En la atención de una queja o denuncia, el Comité presentará sus conclusiones y si éstas consideran un incumplimiento al presente Código, al Código de Ética o a las Reglas de Integridad, determinará sus observaciones y en su caso, recomendaciones o extrañamientos.

Si de las investigaciones de las quejas o denuncias el Comité considera que se constituyen elementos que pueden dar lugar a probables infracciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dará vista al Órgano Interno de Control de la Comisión, sin perjuicio de que los afectados ejerzan su derecho de presentar acciones directas ante las autoridades correspondientes, según sea el caso.

En la atención de casos en materia de igualdad y no discriminación, así como de hostigamiento y acoso sexual, el Comité dará el acompañamiento respectivo a los afectados, para que en su caso el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) o el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) determinen su conclusión en el ámbito de sus respectivas competencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deja sin efectos el Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía aprobado el 18 de diciembre de 2014 por el Órgano de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.- El Presidente, **Guillermo Ignacio García Alcocer**.- Rúbrica.- Los Comisionados: **Marcelino Madrigal Martínez**, **Luis Guillermo Pineda Bernal**, **Jesús Serrano Landeros**, **Noé Navarrete González**, **Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez**, **Guillermo Zúñiga Martínez**.- Rúbricas.

(R.- 440489)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica para la conceptualización, diseño y socialización de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG420/2016.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE EXPERTOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE LA "ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 2017-2023".

ANTECEDENTES

1. El 6 de abril de 2001 el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó, mediante Acuerdo CG34/2001, el Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003, cuya vigencia se extendió a 2004 en apego al Acuerdo CG81/2004 del Consejo General de fecha 30 de abril de 2004. El objetivo de este Plan fue contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía consciente de sus derechos y responsabilidades, fomentar la participación cívica e impulsar la práctica de valores de la democracia para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como en el desarrollo de las comunidades, las instituciones y el país, en el marco de un orden político democrático. Asimismo, propició la unidad y continuidad a las tareas de educación cívica, tanto en el espacio educativo formal como en el comunitario en colaboración con otras instituciones públicas, privadas y sociales.

2. El 30 de abril de 2004, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó, mediante Acuerdo CG81/2004, la extensión de la vigencia del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003 durante la anualidad de 2004.

3. El 16 de diciembre de 2004 el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG182/2004, aprobó el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 (PEEC). Dicho programa estratégico enfatizó la relevancia de adoptar un enfoque de competencias y definió como el principal objetivo de la educación cívica el de promover la participación ciudadana en el ámbito público, como vía efectiva para mejorar sus condiciones de vida y hacer válidos sus derechos. La experiencia obtenida durante este periodo constituyó un paso más en el proceso de construcción y consolidación de la política de educación cívica, generando aprendizajes que permitieron definir nuevos horizontes y profundizar cambios en el futuro, como el lograr una colaboración y acción compartida y efectiva a favor de la construcción de ciudadanía en México.

4. El 2 de febrero de 2011, mediante Acuerdo CG13/2011, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015 (ENEC). En Dicha Estrategia se planteó como el principal reto, contribuir en la modificación de las condiciones que limitan el ejercicio pleno de la ciudadanía, para ello resultaba necesaria la construcción de una política pública nacional que coadyuvara en la construcción de la ciudadanía en México, mediante el logro de tres objetivos estratégicos: 1) contribuir al diseño e implementación de prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía en México; 2) generar y socializar información relevante sobre prácticas y condiciones determinantes de la construcción de la ciudadanía a efectos de contribuir a la deliberación y acción pública y 3) desarrollar e implementar procesos y medios educativos eficaces que promuevan el aprecio por lo público y contribuyan a generar la capacidad de agencia de las y los ciudadanos.

5. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

6. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

7. El 17 de febrero de 2016, mediante el Acuerdo INE/CG73/2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó dar continuidad a la línea estratégica 3 de la ENEC, específicamente al Programa nacional de formación cívica para la participación y la convivencia política democrática, con sus respectivos proyectos. Así mismo se estableció el mes de agosto como fecha límite para la presentación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cultura Cívica 2017-2023 ante el Consejo General.

8. El 30 de marzo de 2016 se presentó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el *Balance de la Estrategia Nacional de Educación Cívica* para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015.

CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con lo que establecen los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal; el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores; la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.

2. Que el artículo 41, segundo párrafo, base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafo 2; y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que el Instituto Nacional Electoral es un Organismo Público Autónomo, autoridad en la materia electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

3. Que el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece entre los fines del Instituto Nacional Electoral: contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

4. Que el artículo 31, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en dicho ordenamiento legal.

5. Que el artículo 34, párrafo 1, incisos a) al d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral.

6. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 35, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto Nacional electoral.

7. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 42, párrafo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias en que así lo estime conveniente.

8. Que tal y como lo establece el artículo 44, párrafo 1, inciso b) y jj) de la Ley General, son atribuciones del Consejo General vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus Comisiones, las actividades de los mismos; solicitar los informes específicos que estime necesarios; y dictar los Acuerdos para hacer efectivas las atribuciones que le señala el propio ordenamiento.

9. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 48, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es atribución de la Junta General Ejecutiva, entre otras, supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica del Instituto.

10. Que con base en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los Organismos Públicos Electorales Locales que se establecerán en las entidades del país tienen, entre otras, atribuciones en materia de educación cívica, y que de una lectura sistemática y funcional de ese marco jurídico constitucional (pero también de lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales),

también se desprende que el Instituto Nacional Electoral tiene un papel relevante de colaboración en la materia con esos organismos, así como en el impulso y la promoción de la cultura político-democrática y en la construcción de ciudadanía.

11. Que los artículos 44, párrafo 1, incisos b) y jj) de la Ley General en la materia y artículo 5, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, establecen que el Consejo General, dentro del marco de sus atribuciones, vigilará la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.

12. Que por el Acuerdo del Consejo General INE/CG894/2015 del Instituto Nacional Electoral, aprobado en sesión extraordinaria con fecha de 14 de octubre de 2015, se nombró al Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños Martínez como Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y como integrantes de esta Comisión a la y los Consejeros Electorales Lic. Enrique Andrade González, Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña y Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez.

13. Que en el considerando 15 del Acuerdo INE/CG73/2016 del Consejo General se estableció que la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cultura Cívica Democrática 2017-2023 considerará mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de la misma, así como las previsiones necesarias para que se lleve a cabo la formulación de la estrategia de educación cívica que la sucederá, antes de que concluya su vigencia.

14. Que en el segundo punto del Acuerdo número INE/CG73/2016 del Consejo General indica que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentará a la Comisión respectiva, durante el mes de agosto de 2016, la propuesta de la nueva estrategia de educación cívica Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cultura Cívica Democrática 2017-2023, para su análisis y aprobación.

15. Que en el tercer punto del Acuerdo número INE/CG73/2016 del Consejo General señala que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentará a consideración del Consejo General, durante agosto de 2016, la propuesta de la nueva estrategia de educación cívica intitulada Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cultura Cívica Democrática 2017-2023.

16. Que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica al valorar, principalmente, el *Balance de la Estrategia Nacional de Educación Cívica* para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015 y el *Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México*, estima necesario que en virtud del desafío intelectual que se tiene para articular una nueva Estrategia, en la que se establezca una definición clara del problema de política pública a atender, así como las diversas acciones que se tendrían que emprender para alcanzar mejores resultados en términos de cultura cívica en el país, resulta pertinente proponer al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la creación de un Comité de Expertos en materia de Educación Cívica. El comité estará integrado por personalidades de reconocido prestigio académico, con solvencia moral y especialización científica en temas y enfoques relacionados con el desarrollo e impulso de la cultura cívica, la formación de ciudadanos, la participación política y, en general, en la difusión y generación de los valores de la democracia

17. Que habiendo evaluado diversas propuestas de candidatos para integrar el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica, se considera pertinente proponer al Consejo General la designación de los siguientes especialistas externos, de cuyos *curriculums vitae* también se adjuntan como parte del presente instrumento:

    a) Dr. Roberto Javier Gutiérrez López, Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Departamento de Sociología, Unidad Azcapotzalco.

    b) Dr. Mauricio Merino Huerta, Profesor-Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), División de Administración Pública.

    c) Dra. Lourdes Morales Canales, Profesora Asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Programa Interdisciplinario de la Red por la Rendición de Cuentas (CIDE).

    d) Dra. María Fernanda Somuano Ventura, Profesora-Investigadora en El Colegio de México (COLMEX), Centro de Estudios Internacionales.

    e) Dr. Francisco Valdés Ugalde, Profesor-Investigador y Director General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Roberto Javier Gutiérrez López es Doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Tiene también estudios de Maestría en Psicoanálisis en el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos y de licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. Es autor de los libros *Información y Democracia. Los medios de comunicación social y su influencia sobre la política, el caso de México*, coeditado por la UAM Azcapotzalco y Ediciones Pomares, Barcelona; *Identidades Políticas y Democracia* en la colección Ensayos del Instituto Federal Electoral, México; *Participación Civil y política en el Distrito Federal. Una perspectiva cultural para su análisis e interpretación*, en coautoría con Rosalía Winocur, editado por el IEDF; *Cultura Política y Discriminación*, editado por el CONAPRED, México. Autor de más de 50 artículos de investigación en revistas especializadas y libros colectivos sobre las temáticas de Cultura Política, Medios de Comunicación y Sistema Político Ha sido Jefe del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco; Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma institución; Director de la Revista Sociológica. El Dr. Gutiérrez López también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores; miembro de la Asamblea Consultiva del CONAPRED y Director de Educación Cívica y Cultura Política en el Instituto Federal Electoral. Ha obtenido diversos reconocimientos institucionales y académicos a lo largo de su trayectoria y actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco.

Mauricio Merino Huerta es Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es Profesor Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde 2003, donde además ha dirigido la División de Administración Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Fue miembro del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 1986 y 2003. Entre otros libros publicados por Dr. Merino, pueden ser citados: *La desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano*" (coord.), CIDE-CONAPRED, México 2014; *Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos*. Colección Gobierno y Políticas Públicas, CIDE México 2013; *El futuro que no tuvimos. Crónica del desencanto democrático*, Ed. Planeta, México 2012; *La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México*, Fondo de Cultura Económica, 2003; y *La participación ciudadana en la democracia*, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Política, Instituto Federal Electoral, 2ª Edición, México, 1995. Actualmente también es Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

Lourdes Morales Canales es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de La Sorbonne París III. Obtuvo su maestría en Comunicación Política en la Universidad de Paris I y la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue Directora de Alianza Cívica, de Mexicobserva y participó en el Foro Ciudadano de Oaxaca. Es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en instituciones de educación superior pública y privada. Ha coordinado investigaciones sobre participación ciudadana, Procesos Electorales en regiones indígenas con enfoque de género, transparencia y rendición de cuentas. Es coautora y autora de artículos y libros vinculados a esos temas.

María Fernanda Somuano *Ventura* es Maestra y Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Iowa. Es Profesora-investigadora en El Colegio de México desde enero del 2001 a la fecha, donde, además, ha sido Coordinadora Académica del Centro de Estudios Internacionales de mayo del 2003 a agosto de 2005 y actualmente es coordinadora de la Maestría en Ciencia Política. También ha sido Profesora visitante en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2003, Nivel II. Es autora de los siguientes libros: *Confianza y cambio político en México,* México, D.F., El Colegio de México, (en prensa; con Reynaldo Ortega); *Democracy in Mexico. Attitudes and perceptions of citizens at national and local level,* (con Salvador Martí I Puig, Reynaldo Ortega y Claire Wright [eds.]), Institute of Latin American Studies, University of London, 2014; *La democracia en México. Un análisis a 10 años de la alternancia*, (con Salvador Martí i Puig y Reynaldo Ortega Ortiz [eds.]), Barcelona, Edicions Bellaterra, 2011; *Sociedad civil organizada y democracia en México*, México, D.F. El Colegio de México, 2011; *The Role of NGOs in the Process of Democratization. The Case of Mexico.* Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2010. La Dra. Somuano fue la investigadora que coordinó los trabajos de investigación que culminaron en el *Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México,* publicado por Instituto Nacional Electoral y El Colegio de México en 2014.

Francisco Valdés Ugalde es Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es Director General y profesor de la FLACSO- México e investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido profesor o investigador visitante en las Universidades de Harvard, Brown, Connecticut, California en San Diego, Salamanca, y del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, la *International Political Science Association*, la *American Political Science Association* y la *Latin American Studies Association* (LASA). Fue colaborador semanal del diario *El Universal* en México de 1996 a 2016. De 2008 a 2015 fue integrante del Grupo de Reflexión del Secretario General de la OEA.

18. Que en relación con la fecha que había sido prevista en el segundo y tercer puntos del Acuerdo número INE/CG73/2016, por medio del cual se decidió dar continuidad a una de las líneas estratégicas establecidas en la ENEC y se estableció el mes de agosto de 2016 como fecha límite para la presentación de la nueva Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cultura Cívica 2017-2023 ante el Consejo General, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica estima que, habiendo conocido los contenidos, objetivos, calendarios y alcances de las diversas acciones que se han previsto llevar a cabo con el propósito de que el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica esté en mejores condiciones de cumplir con la labor que por la vía de este instrumento se propone conferir, es conveniente someter a la aprobación de este Consejo General que, por un lado, sea a más tardar la última semana del próximo mes de septiembre de 2016 cuando el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica presente a la Comisión de Capacitación Electoral y de Educación Cívica la propuesta de la nueva Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 y que, por el otro, sea a más tardar la segunda semana de octubre del presente año cuando, a su vez, la citada Comisión someta a la aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la "Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023".

19. Que dadas las atribuciones tanto los Organismos Públicos Locales Electorales, como el propio Instituto Nacional Electoral en materia de educación cívica y de promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía, en términos de los considerandos arriba expuestos, se estima que la labor a realizar por el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica debe incorporar el conocimiento y la experiencia acumuladas en esta materia de los citados organismos y de la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica coordinará la sistematización y entrega de la información al Comité. Conviene agregar que entre las acciones a desarrollar en la ruta hacia a la construcción de la nueva Estrategia se considerará entre otras, la realización de seminarios, talleres en donde se dé una amplia discusión e involucramiento de los Organismos Públicos Locales Electorales, las Juntas Ejecutivas del INE, así como de todos aquellos actores, personas e instituciones que resulten clave para enriquecer los diagnósticos sobre los cuales el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica pueda elaborar la propuesta final de la nueva Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.

20. Que, para lograr la participación de esos múltiples actores en tales eventos y tareas, así como para permitir que los integrantes del Comité de Expertos en materia de Educación Cívica, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, cuenten con el tiempo suficiente para llevar a cabo su labor, se ha considerado que es conveniente ampliar el plazo para el procesamiento, integración y presentación formal de la nueva Estrategia, en los términos precisados en el considerando anterior. Con ello, se estaría, por tanto, dejando sin efecto la fecha del mes de agosto del presente año prevista en los puntos Segundo y Tercero del *Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se extiende el periodo de instrumentación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015 y se establece el plazo para la presentación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cultura Cívica" a desarrollarse en el período 2017-2023* (INE/CG73/2016), para cumplir con el compromiso de presentar y agotar el proceso de aprobación formal la nueva Estrategia a cargo del máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral. Adicionalmente, con este cambio de la fecha de presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, también se estaría modificando la fecha prevista en el programa Anual de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 2016 que aprobó dicha instancia en la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 25 de enero de 2016; y que presentó a Consejo General en su sesión extraordinaria del 27 de enero de 2016.

21. **Que con el propósito de que el Comité y la Comisión estén en posibilidad de incorporar tanto la experiencia, como la información existente en la construcción de la nueva Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, podrán requerir a los especialistas que hayan integrado comités, grupos de expertos o investigadores de los temas afines a la educación cívica, la información necesaria para el desarrollo de sus actividades.**

22. Que el artículo 58, párrafo 1, inciso a), b), c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica: elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas; promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con los Organismos Públicos Locales y sugerir la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía; vigilar el cumplimiento de los programas y políticas a los que se refieren los incisos a) y b); diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía; y orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales, respectivamente; la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica mantendrá la responsabilidad en la conducción del proceso de diseño de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.

Con base en los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 41 Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30; 42, párrafos 1 y 2; 44, párrafo 1, inciso b); 48, párrafo 1, inciso f); 58; 63, párrafo 1, inciso b); 64, párrafo 1, inciso h); 73, párrafo 1, inciso a); 74, párrafo 1, inciso g); 82, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 49, párrafo 1, incisos a) al d), f), h), i), y v) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de la citada ley, el Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la creación del Comité de Expertos en materia de Educación Cívica para la conceptualización, diseño y socialización de la "Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023".

SEGUNDO. El Comité de Expertos en materia de Educación Cívica a que se refiere el punto anterior estará integrado por las y los siguientes especialistas:

1. Dr. Roberto Javier Gutiérrez López, Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Departamento de Sociología, Unidad Azcapotzalco.
2. Dr. Mauricio Merino Huerta, Profesor-Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), División de Administración Pública.
3. Dra. Lourdes Morales Canales, Profesora Asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Programa Interdisciplinario de la Red por la Rendición de Cuentas (CIDE).
4. Dra. María Fernanda Somuano Ventura, Profesora-Investigadora en El Colegio de México (COLMEX), Centro de Estudios Internacionales.
5. Dr. Francisco Valdés Ugalde, Profesor-Investigador y Director General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

TERCERO. El Comité de Expertos en materia de Educación Cívica tendrá las siguientes atribuciones:

a) Elaborar, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la propuesta de Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. **La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica conocerá en forma periódica los avances en la integración de la mencionada Estrategia, a efecto de recabar las observaciones de los Partidos Políticos y de los consejeros del Poder Legislativo;**

b) Presentar la propuesta final de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 a la Presidencia de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para su aprobación. Esta propuesta deberá incluir el diseño de los criterios e indicadores generales para la evaluación de los resultados de la propia Estrategia; y

c) Contribuir en la definición de las acciones para la socialización del contenido y alcances de la Estrategia.

CUARTO. El período de actividades del Comité de Expertos en materia de Educación Cívica **iniciará** con la **aprobación** del presente Acuerdo y concluirá con la aprobación por este Consejo General de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. El Comité de Expertos, **a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica,** presentará **a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica** el cronograma de las actividades **que desarrollará.**

QUINTO. El Comité de Expertos, en coordinación con la Dirección Ejecutiva, presentarán a la Presidencia de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la propuesta final de la "Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023". **La Presidencia de la Comisión la presentará a dicha instancia** a más tardar la última semana del mes de septiembre de 2016.

SEXTO. La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica someterá a la aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la "Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023" a más tardar la segunda semana del mes de octubre de 2016.

SÉPTIMO. Se designa al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica como Secretario Técnico del Comité, quien proveerá en todo momento el apoyo e información necesaria a sus integrantes, para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

OCTAVO. El Comité de expertos y la Comisión podrán solicitar a los especialistas integrantes de comités, grupos de expertos o investigadores que hayan participado con el Instituto en estudios o actividades afines a la educación cívica, la información necesaria para la formulación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.

NOVENO. Los integrantes el Comité recibirán una gratificación, la cual se otorgará con base en la disponibilidad presupuestal del Instituto Nacional Electoral. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica realizará periódicamente la gestión que corresponda para asegurar la oportuna provisión de esta gratificación, buscando cumplir las medidas adecuadas de comprobación del monto presupuestal que por tal razón ejerza el Instituto. La Secretaría Ejecutiva del Instituto brindará el apoyo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de este Punto de Acuerdo, así como para facilitar la labor del Comité de Expertos en materia de Educación Cívica.

DÉCIMO.- El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, deberá convocar a la brevedad a los integrantes del Comité de Expertos en materia de Educación Cívica para la sesión de instalación. Asimismo, convocará a las sesiones subsecuentes y participará en todo momento en los trabajos del Comité.

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica a que mantenga informada de manera permanente a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre los trabajos del Comité.

DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique su designación, así como el contenido del presente Acuerdo, a las y los ciudadanos que integrarán el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica, para la conceptualización, diseño y socialización de la "Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023", a efecto de que a la brevedad asuman las funciones que les han sido encomendadas.

DÉCIMO TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Consejo General. La Secretaría Ejecutiva publicará un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 25 de mayo de dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

El Consejero Presidente del Consejo General, **Lorenzo Córdova Vianello**.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, **Edmundo Jacobo Molina**.- Rúbrica.

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la Comisión Temporal de Presupuesto 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG421/2016.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN TEMPORAL DE PRESUPUESTO 2017

ANTECEDENTES

I. El 12 de mayo de 2010, en sesión extraordinaria, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG147/2010, aprobó modificar el Acuerdo CG60/2005 por el que se aprobaron los Lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.

II. El 30 de agosto de 2012, en sesión ordinaria el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG616/2012, aprobó las modificaciones a los Lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral alineado al Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

III. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los correspondientes Decretos por los que se expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

IV. El 6 de junio de 2014, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG45/2014, aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo General.

V. En la misma sesión, señalada en el numeral que antecede, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG46/2014, estableció la integración de sus comisiones permanentes y temporales, así como del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información.

VI. El 17 de junio de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG392/2015, aprobó crear la Comisión Temporal de Presupuesto; señalando en su Acuerdo Tercero que dicha comisión se extinguiría al aprobarse por el Consejo General, el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2016, establecido para el Instituto Nacional Electoral por la H. Cámara de Diputados.

VII. El 24 de junio de 2015 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG399/2015 en donde se establece la creación de la Comisión Temporal de Modernización Institucional (CTMI).

VIII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria del 28 de agosto del 2015, mediante Acuerdo INE/CG805/2015 aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016.

IX. El 27 de noviembre del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

X. El 16 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG1061/2015, por el que la Junta General Ejecutiva propuso las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, las cuales se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; en virtud de que el 13 de noviembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó en sus términos y sin modificaciones el Anteproyecto de Presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2016, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre del 2015, y que con el Acuerdo primeramente mencionado se atendió el último de los actos relacionado con la elaboración del Presupuesto, en acatamiento al Punto Tercero del Acuerdo INE/CG392/2015, se dio por extinguida la Comisión Temporal de Presupuesto.

XI. El 15 de marzo de 2016, en su Quinta sesión ordinaria, la Comisión Temporal de Modernización Institucional aprobó el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto, a fin de que este Órgano Colegiado lo revisara y en su caso aprobara para su implementación.

CONSIDERANDO

1. Que conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. En el ejercicio de estas funciones, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

2. Que el artículo 5, párrafos 1 y 2, de las Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la aplicación de las normas de dicha ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. La interpretación de las disposiciones se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

3. Que el artículo 29 de la citada ley, establece que el Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

4. Que en el artículo 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

5. Que el artículo 31, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.

6. Que el artículo 34, párrafo 1, de la citada Ley General, determina que el Instituto Nacional Electoral cuenta con órganos centrales, que son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.

7. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

8. Que en el artículo 42 de la citada Ley General, se establece que:

Artículo 42.

1. *El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero Electoral.*

2. *Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.*

3. *Para cada Proceso Electoral, se fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral; el Consejo General designará, en septiembre del año previo al de la elección, a sus integrantes y al Consejero Electoral que la presidirá.*

4. *Todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los Partidos Políticos, salvo los del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias, y Fiscalización.*

5. *El Consejo General integrará la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro Consejeros Electorales designados por mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, por un periodo de tres años y la presidencia será rotatoria en forma anual entre sus integrantes.*

6. *Las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente.*

7. *El titular de la Dirección Ejecutiva o de la unidad técnica podrá ser suplido en sus funciones de secretario técnico, por el servidor público de nivel inmediato inferior que determine.*

8. *En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un informe, Dictamen o Proyecto de Resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley o los Reglamentos y Acuerdos del Consejo General.*

9. *El Secretario Ejecutivo del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.*

10. *El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias en que así lo estime conveniente.*

9. Que el artículo 44, primer párrafo, inciso jj), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Consejo General dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones de la ley o en otra legislación aplicable.

10. Que de conformidad con el artículo 45, párrafo 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 16, párrafo 2, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, corresponde al Consejero Presidente del Consejo General: proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación.

11. Que el artículo 51, párrafo 1, inciso q) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 41, párrafo 2, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, señala como atribución del Secretario Ejecutivo: elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración del presidente del Consejo General.

12. Que de acuerdo con el artículo 59, párrafo 1, inciso c de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 50, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración: formular el anteproyecto anual del presupuesto del Instituto y presentarlo para su revisión al Secretario Ejecutivo.

13. Que el artículo 69, párrafo 1, inciso l) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral señala como atribución de la Unidad Técnica de Planeación: Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración, en el diseño e implantación de propuestas metodológicas aplicadas a la formulación del anteproyecto de presupuesto del Instituto y en la integración de la cartera institucional de proyectos.

14. Que el artículo 13, párrafo 1, incisos j) y k), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, establece como atribuciones de los Consejeros Electorales del Consejo General, presidir e integrar las comisiones que determine el Consejo y participar con derecho a voz y voto en sus sesiones.

15. Que de conformidad con los artículos 4, párrafo 1, inciso b) y 6, párrafo 1 y 2, del Reglamento de Comisiones del Consejo General, las Comisiones Temporales serán aquellas creadas por Acuerdo del Consejo para la atención de un asunto preciso y específico para el desempeño de sus atribuciones, y cuyo desahogo dará lugar a su disolución, mismas que serán presididas por un

Consejero Electoral. El Acuerdo de creación de las Comisiones Temporales deberá contener, la motivación y fundamentación de la creación de la Comisión, su integración, su objeto específico y en su caso las actividades a realizar; así como los plazos o condiciones para dar por terminado el asunto y, en consecuencia, para extinguir la Comisión, así como la obligación de su Presidente de informar al Consejo cuando se actualice este supuesto.

16. Que de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, las Comisiones Temporales tendrán las atribuciones siguientes: Discutir y aprobar los Dictámenes, Proyectos de Acuerdo, de Resolución y, en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo, así como conocer los informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia; solicitar información a otras Comisiones o a cualquier órgano del instituto que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del Secretario Técnico; solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario y las demás que deriven del Código, del Reglamento Interior, de los Acuerdos de creación de las propias comisiones, de los Acuerdos del Consejo y de las demás disposiciones aplicables.

17. Que de conformidad con el artículo 10, párrafos 4, 5 y 7 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las demás comisiones se integraran con tres o cinco Consejeros de los cuales uno será su Presidente y en las comisiones podrán participar, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como los representantes de los Partidos Políticos, salvo en la del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias y Fiscalización.

18. Que en términos de lo señalado en el artículo 11, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en todas las Comisiones, el periodo de la Presidencia durará un año, contado a partir del día de la designación.

19. En este sentido, se crea la Comisión Temporal de Presupuesto, a fin de que lleve a cabo un ejercicio de evaluación respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016, además de coordinar con la Dirección Ejecutiva de Administración, en colaboración con la Unidad Técnica de Planeación, el trabajo de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados del Instituto Nacional Electoral en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes deberán efectuar la programación y presupuestación para el año 2017, a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral.

20. Que toda vez que la existencia de la Comisión Temporal de Presupuesto debe estar sujeta a un plazo específico, se estima necesario establecer que su extinción se producirá al aprobarse por el Consejo General el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2017, establecido para el Instituto Nacional Electoral por la H. Cámara de Diputados, previo informe a éste de conformidad con el artículo 9 párrafo 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

21. Que una vez que el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto, sea aprobado por la Junta General Ejecutiva, conforme fue ordenado por la CTMI; permitirá mejorar la ejecución de los procesos administrativos que se llevan a cabo en materia de elaboración del presupuesto del INE, ya que facilitará la elaboración del anteproyecto de presupuesto en forma integral de acuerdo con la legislación vigente, permitiendo a las Unidades Responsables, homogeneizar y estandarizar los conceptos de programación y presupuesto utilizados en el proceso para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, y con ello incrementar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos que la sociedad le otorga al INE para el fortalecimiento de la democracia nacional y el mantenimiento del Estado de derecho.

En virtud de los Antecedentes y Consideraciones señalados, con fundamento en lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos 1 y 2; 29, 30, párrafo 2; 31, párrafo 4; 34, párrafo 1; 35, párrafo 1; 42; 44, párrafo 1, inciso jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 13, párrafo 1, incisos j) y k), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; 4, párrafo 1, inciso b); 6, párrafo 1; 8; 9, párrafo 2; 10, párrafos 4, 5 y 7; 11, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se crea la Comisión Temporal de Presupuesto 2017 con el objeto de revisar, analizar y discutir la propuesta de Anteproyecto del Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, para el Ejercicio Fiscal 2017, con la siguiente integración:

Nombre	**Cargo**
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez	Presidente
Dr. Benito Nacif Hernández	Integrante
Dr. Ciro Murayama Rendón	Integrante
Lic. Javier Santiago Castillo	Integrante
Director Ejecutivo de Administración	Secretario Técnico
Consejeros del Poder Legislativo:	
Partido Acción Nacional	
Partido Revolucionario Institucional	
Partido de la Revolución Democrática	
Partido Verde Ecologista de México	
Partido del Trabajo	
Movimiento Ciudadano	
Nueva Alianza	
MORENA	
Encuentro Social	
Representantes de los Partidos Políticos	
Partido Acción Nacional	
Partido Revolucionario Institucional	
Partido de la Revolución Democrática	
Partido Verde Ecologista de México	
Partido del Trabajo	
Movimiento Ciudadano	
Nueva Alianza	
MORENA	
Encuentro Social	

SEGUNDO.- Se instruye a la Junta General Ejecutiva para que apruebe el Manual General para el proceso de programación y presupuesto del anteproyecto de presupuesto.

TERCERO.- El presente Acuerdo abroga a sus similares CG616/2012 y CG147/2010 que emitió el Consejo General del Instituto con fechas 30 de agosto de 2012 y 12 de mayo de 2010 respectivamente, dejando sin efectos los Lineamientos aprobados en dichos instrumentos normativos.

CUARTO.- La Comisión Temporal de Presupuesto se extinguirá, previo informe al Consejo General, al aprobarse el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2017, establecido para el Instituto Nacional Electoral por la H. Cámara de Diputados.

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta y en la página web del Instituto Nacional Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 25 de mayo de dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

El Consejero Presidente del Consejo General, **Lorenzo Córdova Vianello**.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, **Edmundo Jacobo Molina**.- Rúbrica.

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la hora de inicio y cierre de publicación de los datos, imágenes y bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Estado de Sinaloa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, aprobado mediante Acuerdo INE/CG328/2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG462/2016.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA LA HORA DE INICIO Y CIERRE DE PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, IMÁGENES Y BASES DE DATOS DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) DEL ESTADO DE SINALOA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-2016, APROBADO MEDIANTE ACUERDO INE/CG328/2016

ANTECEDENTES

I. **Reforma constitucional.** El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se incluyen diversas disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional Electoral.

II. **Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.** El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

III. **Solicitud de asunción del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del estado de Sinaloa.** El 2 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional Electoral recibió el oficio IEES/0469/2015 de fecha 30 de noviembre de 2015, por el cual, el Instituto Electoral del estado de Sinaloa realizó la solicitud formal de asunción parcial del PREP para el Proceso Electoral local ordinario 2015-2016, en el estado de Sinaloa.

IV. **Resolución por la que se determina la asunción del PREP del estado de Sinaloa.** El 17 de febrero de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Resolución INE/CG75/2016, que recae al expediente INE/SE/ASP-01/2015, determinó procedente la solicitud de asunción para la implementación y operación del PREP para el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Sinaloa.

V. **Lineamientos del PREP.** El 16 de marzo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificó mediante Acuerdo INE/CG108/2016, los Lineamientos del PREP aprobados mediante Acuerdo INE/CG935/2015.

VI. **Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del estado de Sinaloa.** El 17 de marzo de 2016, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del estado de Sinaloa, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación y Colaboración en materia del PREP, relacionado con la elección ordinaria para la renovación de Gobernador del estado, diputados locales y Ayuntamientos, cuya Jornada Electoral será el 5 de junio de 2016, así como sus respectivos Anexos Técnico y Financiero.

VII. **Creación del Comité Técnico Asesor del PREP.** El 30 de marzo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG169/2016, dispuso la creación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Sinaloa que operará para el Proceso Electoral local ordinario 2015-2016, en lo sucesivo COTAPREP.

VIII. **Aprobación del Acuerdo INE/CG328/2016.** El 4 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG328/2016 por el que se aprueba: el proceso técnico operativo y consideraciones generales para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del estado de Sinaloa en el Proceso Electoral local ordinario 2015-2016.

IX. **Aprobación de la Comisión Temporal para el Seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2015-2016.** El 30 de mayo de 2016 la Comisión Temporal para el Seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2015-2016 aprobó por unanimidad, someter a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Acuerdo por el que se modifica la hora de inicio y cierre de publicación de los datos, imágenes y bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del estado de Sinaloa en el Proceso Electoral local ordinario 2015-2016, aprobado mediante Acuerdo INE/CG328/2016.

CONSIDERANDOS

Primero. Disposiciones normativas.

1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.
2. En términos del artículo 41, Base V, Apartados B, párrafo primero y C, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 123 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de asumir parcialmente alguna actividad propia de la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales, en lo sucesivo OPL.
3. De acuerdo con el artículo 35 de la citada Ley General, el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
4. De acuerdo con el artículo 44, numeral 1, incisos ee) y jj) de la citada Ley, el Consejo General tiene la atribución de ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como, en su caso, aprobar la suscripción de convenio respecto de Procesos Electorales Locales, conforme a las normas contenidas en la multicitada Ley; asimismo, la atribución de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley o en otra legislación aplicable.
5. De conformidad con los artículos 219, numeral 1, y 305, numeral 1 de la Ley, el PREP es el mecanismo de información encargado de proveer los resultados preliminares de carácter estrictamente informativo, lo cual se lleva a cabo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos en lo sucesivo CATD autorizados por el Instituto o los OPL.
6. En términos de lo dispuesto por el artículo 41, numeral 2, inciso p) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley le confiere, corresponde al Secretario Ejecutivo coordinar el desarrollo de las actividades del PREP.
7. De acuerdo con el artículo 66, numeral 1, inciso u) del Reglamento en mención, la Unidad Técnica de Servicios de Informática tiene diversas atribuciones en materia del PREP. Particularmente, la fracción II, del inciso u) del mencionado artículo, establece que a dicha Unidad le corresponde proponer, implementar y operar los mecanismos e infraestructura necesarios para llevar a cabo el PREP de carácter federal; así como los programas relativos en el supuesto de que el Instituto asuma o atraiga las elecciones de competencia de los OPL, o de las elecciones de los dirigentes o dirigencias de los partidos políticos.
8. De acuerdo con el numeral 3, fracción III, inciso k) de los Lineamientos del PREP, cuyas modificaciones fueron aprobadas por Acuerdo INE/CG108/2016, señala que el proceso técnico operativo, es el conjunto de actividades y procedimientos secuenciados para llevar a cabo desde el acopio de las Actas PREP hasta la publicación de los datos e imágenes.
9. En términos de los dispuesto por el numeral 12 de los Lineamientos en mención, la asunción en materia de PREP ya sea parcial o derivada de una asunción total, se realizará de conformidad con las disposiciones de la Ley, el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de las atribuciones especiales vinculadas a la función electoral en las entidades federativas y demás normas reglamentarias que en esa materia emita el Instituto.
10. De conformidad con el numeral 14, fracciones de la IV a la VII, consecutivamente, de los Lineamientos en comento, el Consejo General del Instituto, deberá acordar: IV. Fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares, V. El número de actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo deberá ser de tres por hora, VI. El número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares; el número mínimo deberá ser de tres por hora, VII. Fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
11. De acuerdo con el numeral 53, fracción II de los Lineamientos referidos, el inicio y cierre de la publicación de los resultados electorales preliminares dependerá de la elección de que se trate: en las elecciones locales, se deberá determinar la hora de inicio de su publicación entre las 18:00 y las 20:00 horas (hora local) de la entidad federativa que corresponda, quedando prohibido publicar por cualquier medio, los resultados electorales preliminares antes de la hora señalada. El cierre de

operaciones será después de un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación. El Instituto y los OPL podrán cerrar operaciones antes del plazo señalado, siempre y cuando se logre 100% del registro, captura y publicación de las Actas PREP recibidas en los CATD.

12. En términos de lo dispuesto por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 17 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria mediante Resolución INE/CG75/2016, que recae al expediente INE/SE/ASP-01/2015 en el resolutivo tercero, la instancia responsable a cargo de implementar el PREP del estado de Sinaloa, es la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por conducto de su Titular, con fundamento en el artículo 66, párrafo 1, inciso u) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

13. En términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG329/2016 de fecha 4 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó la ubicación e instalación de los CATD, así como de los CCV; y por el que se instruye al Consejo Local y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa a dar seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del PREP del estado de Sinaloa para el Proceso Electoral local ordinario 2015-2016, la ubicación e instalación de los CATD será dentro de las sedes de los veinticuatro Consejos Distritales y en nueve de los doce Consejos Municipales del Instituto Electoral del estado de Sinaloa (Choix, Angostura, Badirahuato, Navolato, Cosalá, San Ignacio, Culiacán, Concordia y Escuinapa), asimismo, los CCV se deberán ubicar dentro de las sedes distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa.

14. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43, numerales 1 y 2; 45, numeral 1, inciso o) y 46, numeral 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es conveniente que el Consejero Presidente instruya al Secretario de este Consejo General, a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Motivos para la modificación de la hora de inicio y cierre de publicación de los datos, imágenes y bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del estado de Sinaloa en el Proceso Electoral local ordinario 2015-2016.

1. Por lo anterior, mediante oficio IEES/1006/2016 de fecha 25 de mayo de 2016, la Lcda. Karla Gabriela Peraza Zazueta Consejera Presidenta del Instituto Electoral del estado de Sinaloa, remitió la solicitud hecha por los partidos políticos respecto de que se inicie la publicación del PREP a las 18:00 horas (hora local) y no a las 20:00 horas (hora local), como lo establece el Acuerdo INE/CG328/2016. En dicho oficio, solicitó someter a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la petición generalizada de los partidos políticos y del representante del candidato independiente a Gobernador, para los efectos que se consideren procedentes.

2. En ese sentido, el objetivo del PREP es el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.

3. Al no haber impedimento legal ni técnico, y toda vez que los Lineamientos del PREP en su numeral 53, fracción II, establecen que tratándose de elecciones locales el inicio de la publicación de los resultados electorales preliminares podrá ser entre las 18:00 y las 20:00 horas (hora local), se considera que con el objeto de abonar a los principios que rigen el actuar del Instituto Nacional Electoral y al PREP, es posible iniciar a las 18:00 horas (hora local) la publicación del PREP.

De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo; Apartado B, párrafo primero y Apartado C, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 35; 43, numerales 1 y 2; 44, numeral 1, incisos ee) y jj); 45, numeral 1, inciso o); 46, numeral 1 inciso k); 123; 219, numeral 1; y 305, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 41, numeral 2, inciso p); y, 66, numeral 1, inciso u) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 3, fracción III, inciso k); 12; 14, fracciones de la IV a la VII; 53, fracción II, de los Lineamientos del PREP aprobados por Acuerdo INE/CG108/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; Acuerdos INE/CG328/2016 e INE/CG329/2016, y; Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG75/2016 que recae al expediente INE/SE/ASP-01/2015, se emite el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba modificar el Acuerdo INE/CG328/2016 por el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del estado de Sinaloa en el Proceso Electoral local ordinario 2015-2016, en los Puntos de Acuerdo Quinto, Sexto y Séptimo, en los siguientes términos:

ACUERDO

[…]

Quinto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que disponga lo necesario para que el domingo 5 de junio de 2016, a partir de las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico), inicie la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de resultados electorales preliminares del estado de Sinaloa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

Sexto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que disponga lo necesario para que a más tardar el lunes 6 de junio de 2016, a las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico), se cierre la digitalización, captura y verificación de datos, quedando como última actualización de datos, imágenes y bases de datos, la de la fecha y hora señalada. Las operaciones del Programa de Resultados Electorales Preliminares, podrán cerrar antes de las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico) del lunes 6 de junio de 2016, siempre y cuando se logre el 100% de la digitalización, captura y verificación de las Actas PREP recibidas.

Séptimo.- El número de actualizaciones de los datos, imágenes y bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares, será por lo menos de tres por hora, a partir de las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico) del día 5 de junio y hasta las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico) del 6 de junio de 2016, conforme a la fecha y hora de actualización publicada.

[…]

Segundo.- Se aprueba modificar el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Sinaloa, aprobado mediante el referido Acuerdo INE/CG328/2016, en sus numerales 4, inciso e) y párrafo segundo; y 21, en los siguientes términos:

Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Sinaloa

[…]

4. El Proceso Técnico Operativo del PREP, consta de las siguientes fases:

e) Publicación de resultados. La publicación de resultados electorales preliminares debe iniciar a las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico) del domingo 5 de junio de 2016. La divulgación de los datos, imágenes y bases de datos del PREP están a cargo del Instituto.

[…]

Las fases de digitalización, captura y verificación concluyen, a más tardar, a las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico), del lunes 6 de junio de 2016. Las operaciones del PREP, podrán cerrar antes de las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico), del lunes 6 de junio de 2016, siempre y cuando se logre el 100% de la digitalización, captura y verificación de las actas.

[…]

21. Una vez verificados los datos, se publican los resultados preliminares de la elección. La publicación inicia a partir de las **18:00 horas** (Tiempo del Pacífico) del 5 de junio de 2016.

Tercero.- Hágase del conocimiento del Consejo Local y los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, así como al Instituto Electoral del estado de Sinaloa, el contenido del presente Acuerdo.

Cuarto.- Se instruye al Instituto Electoral del estado de Sinaloa para que realice las gestiones necesarias con el objeto de hacer del conocimiento de sus Consejos Distritales y Municipales, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía en general, el contenido del presente Acuerdo.

Quinto.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Instituto Nacional Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 31 de mayo de dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera.

El Consejero Presidente del Consejo General, **Lorenzo Córdova Vianello**.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, **Edmundo Jacobo Molina**.- Rúbrica.

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a cancelaciones de candidaturas a diputadas y diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG463/2016.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RELATIVO A CANCELACIONES DE CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANTECEDENTES

I. En sesión especial celebrada el día 17 de abril de 2016, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG195/2016 *"por el que se registran las candidaturas a Diputadas y Diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales".*

II. El día 27 de abril de 2016, en sesión extraordinaria, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG289/2016 *"relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a diputadas y diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales"*.

III. En fecha 11 de mayo de 2016, en sesión extraordinaria urgente, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG349/2016 *"relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a Diputadas y Diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales"*.

CONSIDERANDO

Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la misma.

Con motivo de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México, el Constituyente Permanente determinó el procedimiento para la elección de las diputaciones que integrarán la Asamblea Constituyente, con el fin de que los poderes constituidos puedan llevar a cabo sus atribuciones con base en un marco constitucional propio de la Ciudad de México.

Asimismo, determinó que serán aplicables, en todo lo que no contravenga el Decreto, las disposiciones conducentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que el Proceso Electoral se ajustará a las reglas generales que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Fundamento

2. El artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 9, numerales 13 y 14 de los Lineamientos para la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (en adelante "los Lineamientos"), establece que los partidos políticos podrán sustituir a sus candidatos libremente dentro del plazo establecido para el registro, y que vencido dicho plazo, exclusivamente podrán hacerlo por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Las sustituciones de candidaturas por causa de renuncia, sólo podrán realizarse si ésta es presentada a más tardar el 5 de mayo de 2016; a partir de esa fecha el Consejo General procederá a la cancelación del registro del candidato que renuncia.

3. De conformidad con lo establecido por el artículo 9, numeral 15 de los Lineamientos, las renuncias de candidatos deberán ser presentadas en forma personal ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de lo cual se levantará acta circunstanciada.

Renuncia y ratificación

4. Con fecha 31 de mayo de 2016, en la oficialía de partes de este Instituto, se recibió escrito signado por la C. **Verónica Martínez Sentíes,** candidata propietaria a diputada por el principio de representación proporcional a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, registrada en el número 19 de la lista presentada por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual manifiesta su renuncia a dicho partido, así como a la candidatura mencionada.

5. La renuncia aludida fue ratificada por la referida ciudadana ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el día 4 de junio de 2016, según consta en el acta levantada para el efecto y que obra en el expediente respectivo.

Comunicación al Partido Político Nacional

6. En observancia de lo dispuesto por el numeral 15 de los Lineamientos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos hizo del conocimiento del Partido Revolucionario Institucional la renuncia presentada por la C. Verónica Martínez Sentíes, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2468/2016, notificado el día 3 de junio de 2016.

Imposibilidad de sustitución

7. Como ha sido señalado, las sustituciones de candidatos por causa de renuncia sólo podrían realizarse si ésta era presentada a más tardar el 5 de mayo de 2016, por lo que al haber sido presentada la renuncia referida, el día 31 del mismo mes y año, no existe posibilidad para el partido de llevar a cabo su sustitución.

Cancelación

8. En consecuencia, lo procedente es cancelar el registro de la ciudadana **Verónica Martínez Sentíes,** candidata propietaria a diputada por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Revolucionario Institucional en el número 19 de la lista de candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, quedando subsistente el registro de la ciudadana **María de Jesús de la Parra García,** como candidata suplente, por lo que la paridad de género y la alternancia de la lista continúa cumpliendo con las disposiciones aplicables.

Publicidad de la cancelación

9. De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General solicitará la publicación en el *Diario Oficial de la Federación* de los nombres de los candidatos y las candidatas, así como de los partidos que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las sustituciones de candidatos y candidatas y/o cancelaciones de registro que, en su caso, sean presentadas.

En razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, bases I y V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 240, párrafo 1; y 241, párrafo 1, incisos a) y b); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los Lineamientos*,* el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso jj); del citado ordenamiento legal, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se cancela el registro de la ciudadana **Verónica Martínez Sentíes** como candidata propietaria, quedando subsistente el registro de la ciudadana **María de Jesús de la Parra García** como candidata suplente a Diputada por el Principio de Representación Proporcional, postulada por el Partido Revolucionario Institucional en el número 19 de la lista de candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- En el supuesto de que resultara asignada la fórmula en el número 19 de la lista de candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional, este Consejo General otorgará la constancia respectiva a la candidata suplente que se encuentre registrada ante la autoridad electoral.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 5 de junio de dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

El Consejero Presidente del Consejo General, **Lorenzo Córdova Vianello**.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, **Edmundo Jacobo Molina**.- Rúbrica.

RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/137/PEF/152/2015, iniciado con motivo de la vista ordenada en la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG381/2015, por hechos probablemente constitutivos de infracción a la norma electoral, consistentes en la presentación de una queja frívola, por parte del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG455/2016.- Exp. UT/SCG/Q/CG/137/PEF/152/2015.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/CG/137/PEF/152/2015

DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL

DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/137/PEF/152/2015, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, IDENTIFICADA CON LA CLAVE INE/CG381/2015, POR HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN A LA NORMA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA FRÍVOLA, POR PARTE DEL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Ciudad de México, 31 de mayo de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

I. VISTA[1]. El diecisiete de junio de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Resolución identificada con la clave **INE/CG381/2015** determinó desechar la queja presentada por el C. Octavio Aparicio Melchor, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (en lo sucesivo *PRI)*, en contra del Partido de la Revolución Democrática (en adelante PRD) y de su candidato a la gubernatura del estado de Michoacán para el período constitucional 2015-2021, el C. Silvano Aureoles Conejo, por presuntas infracciones en materia de origen, monto, destino y aplicación del financiamiento de los partidos políticos, tramitada bajo el número INE/Q-COF-UTF/65/2015.

Dicha denuncia fue desechada en atención a que el órgano superior de dirección de este Instituto la consideró frívola y, en consecuencia, ordenó **dar vista** a la Secretaría Ejecutiva de esta autoridad electoral, a fin de que ejerciera sus atribuciones una vez que la resolución respectiva quedara firme.

II. En cumplimiento a lo anterior, el tres de agosto de dos mil quince, se recibió en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el oficio **INE/SCG/1505/2015**, signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante el cual remitió copia del diverso **INE/UTF/DRN/19947/2015**, y documentación anexa, signado por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, así como copias certificadas de la resolución **INE/CG381/2015**, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al procedimiento identificado con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/65/2015/MICH.**

III. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.[2] Con fecha once de agosto de dos mil quince, se ordenó la radicación de la queja bajo el número **UT/SCG/Q/CG/137/PEF/152/2015**; reservar su admisión y el respectivo emplazamiento, hasta en tanto culminara la etapa de investigación; y, requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, diversa información necesaria para la debida integración de expediente que se resuelve.

IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.[3] El treinta y uno de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la denuncia y se ordenó emplazar al PRI, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán.

[1] Visible a fojas 1 a 84 del expediente

[2] Visible a fojas 178 a la 182 del expediente.

[3] Visible a fojas 216 a 218 del expediente.

Dicho acuerdo fue notificado por oficio al representante propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el treinta y uno de agosto de dos mil quince; y personalmente al C. Octavio Aparicio Melchor, representante propietario del citado instituto político ante el órgano superior de dirección del Órgano Público Electoral de la referida entidad federativa, el tres de septiembre siguiente.

V. ALEGATOS[4]. Mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, se ordenó dar vista al denunciado, a fin de que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, compareciendo el PRI por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Michoacán, por escrito recibido en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el trece de octubre de dos mil quince.

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al rubro.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el caso, se actualiza la competencia de este Consejo General para conocer del presente asunto, debido a que al resolver la queja en materia de fiscalización presentada por el PRI, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, por presuntas irregularidades del PRD y su candidato a Gobernador de Michoacán, el C. Silvano Aureoles Conejo, relacionadas con el origen y destino de sus recursos financieros, determinó que dicha inconformidad resultaba frívola, porque el quejoso no formuló alguna pretensión que pudiera ser alcanzada jurídicamente, sino que se limitó a describir hechos sucedidos en el año dos mil once.

De esta manera, al ser la promoción de quejas o denuncias frívolas un supuesto de sanción conforme a lo establecido en los artículos 440, párrafo primero, inciso a), fracciones I y II y 443, párrafo primero, inciso a), y corresponder a este Consejo General su resolución definitiva, es que se actualiza su competencia para conocer del particular.

SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA. En torno a la figura de la frivolidad en la presentación de un ocurso, es importante resaltar que si bien es cierto ha constituido tradicionalmente una causa de improcedencia que impide el establecimiento válido de la relación jurídica procesal y, en consecuencia, termina de modo anticipado el procedimiento respectivo, lo es también que no fue sino hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce—artículo Segundo Transitorio, fracción II, inciso f)—, y la posterior emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de veintitrés de mayo siguiente, que en la materia electoral se previó a nivel normativo la presentación de quejas o denuncias de tal naturaleza como una infracción sancionable.

En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales), se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula.

Así, como se indicó, en el mencionado artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional en materia político- electoral a que se ha hecho referencia párrafos arriba, se previó la obligación de que en la legislación secundaria se estableciera como conducta sancionable precisamente la presentación de quejas frívolas, indicándose en la citada reforma, el significado de dicha figura jurídica, a saber:

> "*f)… Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia;*"

En este orden de ideas es menester poner de manifiesto que en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, -artículos 440, párrafo 1, inciso e) fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d), de dicho cuerpo normativo- se estableció todo un catálogo de hipótesis respecto a lo que debe ser considerado como una denuncia frívola, entendida como tal:

---

[4] Visible a fojas 235 y 236 del expediente.

- Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del Derecho;
- Aquellas que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;
- Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral;
- Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad;
- Aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.

Incluso, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral, ya había abordado el concepto de frivolidad a través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro, ***FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE***[5], ha sostenido que "...*El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan…",* sin que pase desapercibido para esta autoridad electoral que dicho criterio fue emitido por el máximo tribunal del país, en la materia electoral, en el año 2003, es decir, durante la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990.

Según dicho criterio, la frivolidad de una promoción se actualiza cuando, **a sabiendas de que sus pretensiones son jurídicamente imposibles,** y tal circunstancia es evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el promovente acciona la maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto de hechos que no se encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan con sustento probatorio idóneo o suficiente.

Más recientemente, al resolver el Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con el número SUP-REP-201/2015, dicha Sala Superior sostuvo, en esencia, que la frivolidad implica que el medio de defensa sea totalmente inconsistente, insustancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia y que tales circunstancias resulten evidentes de la sola lectura de la queja o denuncia.

Asimismo, al resolver el diverso SUP-REP-229/2015, la misma Sala Superior consideró, en la parte que interesa al presente asunto, que los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme a la garantía de acceso a la justicia contenida en los artículos 41, segundo párrafo, Base VI, y 99, fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución federal, consiste en que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y resolver de manera pronta, completa e imparcial, las controversias que sean sometidas a su conocimiento; sin embargo, también expuso que el acceso efectivo a la justicia, como derecho humano protegido tanto por la Constitución federal como por las leyes secundarias, debe estar libre de abusos por parte del propio gobernado, pues si ello se permitiera, se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático, de manera que una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de los demás justiciables.[6]

2.2. Grado de frivolidad

Una vez delimitada la noción de frivolidad, es de trascendencia poner de relieve que no se trata de un concepto absoluto que no admita matices, pues por el contrario, atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada caso, tales como los hechos materia de la denuncia, el material probatorio en que se apoye y la claridad de los argumentos vertidos, se podrá estar ante diversos grados o niveles de gravedad.

No obstante lo anterior, la normativa electoral no contiene disposición alguna que desarrolle un método para determinar el grado de frivolidad, ni que precise los niveles o grados de gravedad en que se pueden clasificar las quejas de esta naturaleza; sin embargo, para determinar el grado de frivolidad de la queja o denuncia, se pueden tomar en consideración aspectos como:

a) Que la promoción contenga hechos, es decir, se refieran las circunstancias concretas en las que sucedió la infracción denunciada;

---

[5] Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.

[6] Localizable en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/REP/229/SUP_2015_REP_229-468529.pdf

b) Que tales hechos estén reconocidos positivamente como infracciones a la norma electoral, y en consecuencia, que ameriten la imposición de una sanción;

c) Que a la denuncia no se acompañen medios de convicción, es decir, que el denunciante se abstenga de acompañar a su escrito elementos para demostrar, al menos de manera indiciaria, la veracidad de su dicho.

d) Que dichas probanzas sean suficientes cuando menos para que la autoridad pueda ejercer su facultad investigadora;

e) Que con la promoción de la denuncia o queja frívola se ocasionen daños, ya sea a los Organismos Electorales o a sujetos distintos, como terceros ajenos al procedimiento;

f) La intensidad del daño ocasionado con la atención a la denuncia frívola.

Lo anterior es relevante puesto que a través de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 440 de la Ley general electoral, el legislador impuso a las autoridades administrativas electorales la obligación de valorar el grado de frivolidad del ocurso así como las consecuencias lesivas que implicarían el atender una queja de esta naturaleza, previo a decidir cuál es la sanción que se debe imponer, en el caso de los partidos políticos, entre las consignadas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), de la Ley comicial.

Así las cosas, la gravedad de una queja frívola será mayor, si la misma carece de hechos, dado que en tales condiciones el ocursante estará faltando a la carga de la afirmación, al no proveer a la autoridad el conocimiento de aquello que pretende sea materia de pronunciamiento; en cambio, será menor la trascendencia de la falta, si los hechos están señalados, pero no constituyen una infracción a la norma electoral.

En el mismo tenor, se debe considerar que irroga mayor perjuicio la presentación de una denuncia que no esté apoyada en lo absoluto por medio de convicción alguno, mientras que no será tan dañoso el hecho de que las pruebas acompañadas no resulten idóneas y/o suficientes para orientar la actividad investigadora de la autoridad.

Finalmente, por cuanto hace al perjuicio provocado con la presentación de una denuncia frívola, será menester tomar en consideración, por ejemplo, si a partir de la instauración del procedimiento administrativo sancionador correspondiente, y en ejercicio de su facultad investigadora, la autoridad competente instrumentó diligencias que se constituyeran en actos de molestia a los gobernados, o que implicaran requerimientos a otros órganos de autoridad.

Con todo lo anterior, si del análisis del caso particular, se advierte con certeza que la presentación de la queja frívola implicó la inútil activación del aparato administrativo en detrimento de la administración de justicia, dependiendo de la gravedad particular, el operador jurídico deberá proceder a seleccionar la sanción aplicable conforme a lo señalado el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la ley comicial federal, se insiste, para el caso de los partidos políticos.

2.3. Marco Jurídico

Ahora bien, el marco jurídico derivado de la reforma constitucional en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, contiene los parámetros a los cuales, en acatamiento al principio de legalidad al que se encuentra constreñido este Instituto Nacional Electoral, deberán sujetarse los procedimientos administrativos sancionadores derivados de la promoción de quejas frívolas. Dicho marco está contenido en los artículos 440, 443 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales, en lo que al caso atañe, son del tenor siguiente:

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

(…)

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, ***aplicables tanto en el nivel federal como local,*** *entendiéndose por tales:*

I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen ***pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente,*** *por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;*

II. Aquéllas que refieran ***hechos que resulten falsos o inexistentes*** *de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;*

*III. Aquéllas que se refieran a hechos que **no constituyan una falta** o violación electoral, y*

*IV. Aquellas que **únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso,** que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.*

*2. La sanción que se imponga, en su caso, **deberá de valorar el grado de frivolidad** de la queja y **el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los Organismos Electorales.”***

Artículo 443.

***1.** Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:*

a) a m) […]

***n)** La comisión de cualquier **otra falta** de las previstas en esta Ley.*

Artículo 456.

***1.** Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:*

a) Respecto a los partidos políticos:

I Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley, y

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Como se aprecia, el artículo 440 citado establece, en primer término, que la presentación de quejas o denuncias frívolas traerá como consecuencia la imposición de una sanción; en segundo, los criterios que servirán de base ´para determinar si una promoción particular es o no frívola —aplicables tanto a nivel federal como local—; y, en tercero, que para la imposición de la sanción atinente, el operador jurídico deberá tomar en consideración el grado de frivolidad y el daño que se podría seguir a los órganos electorales con la atención de asuntos insustanciales.

Por cuanto hace al artículo 443, párrafo 1, inciso a) invocado, ciertamente contiene un catálogo enunciativo de las infracciones concretas en las que puede incurrir un partido político —en sus inciso a) al m)—, pero también prevé que los partidos políticos podrán ser sancionados por la comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley.

Así, la interpretación gramatical y sistemática de los preceptos indicados, conduce a estimar que, si la promoción de quejas o denuncias frívolas es una falta sancionable conforme a la ley —artículo 440, párrafo primero, inciso e)—, y los partidos políticos pueden ser sancionados, además de los supuestos expresamente contenidos en los incisos a) al m) del artículo 443, por los demás que se encuentran dispersos en la Ley —inciso n) del mismo numeral—, entonces dichos entes de interés público son sancionables por la presentación de quejas o denuncias frívolas, de manera proporcional al grado de frivolidad y al daño que produzca dicho proceder ilegal.

En el mismo sentido, la interpretación funcional de los numerales transcritos conduce a estimar que con las anteriores disposiciones, se protege y garantiza que el acceso a la justicia administrativa electoral esté libre de abusos y de la presentación de escritos ligeros o insustanciales que puedan distraer u ocupar, injustificada e innecesariamente, los recursos humanos y materiales de la autoridad administrativa electoral.

Cabe precisar, que si bien, como se señaló al principio del presente considerando, el artículo 447, párrafo 1, inciso d) de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, define, además del diverso 440, del mismo cuerpo normativo, lo que debe ser entendido como una queja frívola, el cual fue citado en la presente Resolución como marco conceptual de la figura jurídica a analizar –frivolidad-, en el presente caso dicha disposición no resulta aplicable para la solución de esta controversia, ni tampoco para la imposición de la sanción atinente, dado que la misma se encuentra circunscrita al catálogo de infracciones en que pueden incurrir los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su caso, de cualquier persona física o moral, más no así a los partidos políticos, quienes son sujetos de responsabilidad al tenor de lo dispuesto en el diverso 443, de la ley en cita

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO.

3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO.

Como quedó precisado en los antecedentes del asunto, el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, emitió la Resolución INE/CG381/2015 —cuya copia certificada corre agregada en los autos[7] y cuenta con valor probatorio pleno con sustento en los artículos 462, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 27, párrafo segundo, del Reglamento de Quejas y Denuncias, por tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, además de no estar cuestionada su autenticidad o contenido— y determinó **desechar la queja** presentada por el PRI, **en razón de considerarla frívola,** en términos del artículo 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación al diverso 440, numeral 1, inciso e), fracciones I y II, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; ello bajo las consideraciones siguientes:

> *Como se colige de los hechos denunciados en el escrito de queja y los elementos probatorios aportados por el quejoso, no se desprende indicio alguno por medio del cual se pueda arribar a la verdad de los hechos presuntamente violatorios de la normativa electoral en materia de fiscalización.*
>
> *Lo anterior es así, ya que la frivolidad en los hechos denunciados constituyen un obstáculo para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles.*
>
> *Sirven como sustento de lo anterior, las siguientes tesis emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra rezan:*
>
> *RECURSO FRÍVOLO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR [se transcribe]*
>
> *FRIVOLIDAD. ACTUALIZA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. [se transcribe]*
>
> *FRIVOLIDAD. ELEMENTOS PARA CONFIGURARSE. [se transcribe]*
>
> *En otras palabras, sólo si se desprende la existencia de elementos que permitan considerar objetivamente que los hechos objeto de la queja tienen racionalmente la posibilidad de constituir una infracción respecto del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.*
>
> *En atención a lo anterior, de la narración de los hechos así como de las pruebas aportadas,* ***no hay elemento alguno que haga presuponer la existencia de alguna irregularidad en materia electoral o en fiscalización,*** *toda vez que se limita a decir que no hubo una adecuada fiscalización en el Proceso Electoral anterior, solicitando a esta autoridad electoral que se "se lleve a cabo la revisión puntual de los informes del PRD y el C. SILVANO AUREOLES CONEJO, sobre el origen y destino de sus recursos, en el entendido de que este candidato repite para contender al mismo cargo que en la elección pasada y por ello existe la presunción más que razonable de que se han cometido y se siguen cometiendo actos ilícitos, por parte de los denunciados.*

[7] Visible a fojas 4 a la 18 del expediente.

Así, de conformidad con el artículo 41, numeral 1 inciso c) del Reglamento en comento, esta autoridad mediante Acuerdo de dieciséis de abril de dos mil quince, ordenó prevenir al C. Octavio Aparicio Melchor a efecto que en el término de veinticuatro horas, una vez realizada la notificación correspondiente, para que ***subsanara las inconsistencias contenidas en su escrito de queja,*** *toda vez a que la autoridad requería allegarse de elementos que hicieran presumir que los hechos denunciados constituían alguna infracción en materia de financiamiento de los partidos, con la prevención que de no desahogar lo anterior, se desecharía de plano la queja de mérito. A continuación se transcribe la parte conducente:*

(…)

Del análisis al escrito presentado, se advierte que la queja en cuestión no cumple con el requisito de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con relación al artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que respecta a la frivolidad de los hechos denunciados, ya que de la sola lectura de los hechos, éstos resultan inexistentes, sin que se pueda acreditar su veracidad, por lo que deberá precisar: ***1.- Cuáles fueron las acciones del presente Proceso Electoral que a su juicio resultan violatorias de la normatividad electoral; 2.- Aportar los medios de prueba suficientes que acrediten la veracidad de dichos hechos …***

(…)

Así, de la lectura a los hechos denunciados y como se describe en el acuerdo referido anteriormente no se advierte que el quejoso formule alguna pretensión que se pueda alcanzar jurídicamente y se encuentre al amparo del derecho, toda vez que este se limita a la descripción de hechos sucedidos en el año dos mil once, solicitando la práctica de investigaciones sobre el manejo de los recursos y su situación contable y financiera del denunciado, sin hacer precisión de alguna pretensión con fondo o sustancia que se encuentren al amparo del derecho; por lo que se está ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar alguna infracción en materia de financiamiento de los partidos, toda vez que lo solicitado lo hace per se esta autoridad electoral.

En este sentido, se limitó a referir elementos que fueron materia de otros procedimientos, así como ***circunstancias que ocurrieron en procesos electorales anteriores,*** *sin precisar algún hecho que actualice algún supuesto jurídico violado, de la misma manera los medios de convicción aportados sólo nos permiten corroborar los sucesos acontecidos en procesos electorales anteriores, así como los hechos narrados por el quejoso,* ***sin que nos aporte algún indicio de acciones del presente Proceso Electoral que resulten violatorias de la normatividad electoral****; lo que implica la existencia de un notorio propósito de interponer una queja sin existir motivo o fundamento para ello y, que además* ***el objetivo que pretende resulta imposible de alcanzarse, careciendo de sustancia.***

Énfasis añadido.

Así, esta autoridad electoral consideró evidente que la queja presentada por el PRI a través de su representante legítimo, resultaba frívola, puesto que, por una parte, no ofreció hechos correspondientes al Proceso Electoral local para la renovación del titular del Poder Ejecutivo de Michoacán que se encontraba en curso al momento de interponer la queja; y por otra, no acompañó a su escrito medios de prueba relacionados con dicha elección que pudieran constituir al menos indicios de que se habían cometido las irregularidades alegadas, determinación que constituye una verdad jurídica al respecto, y goza en su favor de la presunción de legalidad por no haber sido cuestionada en tiempo y forma por los canales conducentes.

En esas condiciones, dada la definitividad y firmeza de la resolución que la contiene, en el presente asunto no se realizará estudio o pronunciamiento alguno en torno a la calificación de la frivolidad de la queja presentada por el PRI ante la Unidad Técnica de Fiscalización.

3.2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

En los escritos mediante los cuales compareció con el fin de contestar el emplazamiento y formular alegatos, el PRI esgrimió como defensa, sustancialmente, que las pruebas que acompañó a su escrito de queja son documentos emitidos por la autoridad administrativa electoral de Michoacán, por lo que no es ajustado a derecho considerar que tanto las pruebas como la queja en sí misma son frívolas, solicitando a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral "…*cumpla con las atribuciones conferidas por la ley y lleve a cabo el procedimiento necesario y la revisión puntual de los informes del PRD y el C. Silvano Aureoles Conejo, sobre el origen y destino de dichos recursos".*

Tales consideraciones son **inoperantes,** puesto que se encuentran orientadas a cuestionar las razones que sostuvieron el desechamiento de su queja por ser frívola, mismas que, en todo caso, debieron ser hechas valer ante la instancia correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de un recurso de apelación, como se deriva de lo establecido en los artículos 3, párrafo segundo, inciso b); 40 párrafo primero, inciso b); 45, párrafo primero, inciso a); y 47 párrafo primero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, no debe perderse de vista que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todos los gobernados el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, a través de tribunales que estarán expeditos para administrarla, y concretamente en la materia electoral, previene la creación de un Sistema de Medios de Impugnación cuya finalidad estriba justamente en que todos los actos de las autoridades electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

De esta manera, es incuestionable que si el PRI consideraba —como lo alega en su escrito de contestación al emplazamiento— que la determinación de frivolidad no era legal porque la queja contaba con los elementos indiciarios suficientes para emprender la investigación solicitada, y razonablemente podía resultar en la determinación de responsabilidad atribuida al PRD y su candidato al Gobierno de Michoacán, debió hacer valer dichos argumentos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que, a través de sus salas, cuenta con atribuciones para, en su caso, revocar o modificar la resolución del Consejo General que ahora tacha de inadecuada, puesto que el objeto del presente procedimiento sancionador consiste en determinar la sanción que se debe imponer al promovente de la queja en materia de fiscalización que fue calificada como frívola, y no en analizar si la resolución INE/CG381/2015 estaba o no ajustada a Derecho.

3.3. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

De conformidad con el contenido de la resolución INE/CG381/2015, la cual ha adquirido definitividad y firmeza por no haber sido impugnada en tiempo y forma, por lo que goza en su favor de una presunción de legalidad y constituye la verdad jurídica en torno a los hechos a que se refiere, la queja incoada por el PRI fue desechada por **constatarse su frivolidad,** infracción sancionable conforme a lo establecido en los artículos 440, párrafo primero, inciso e), fracciones I y II y 443, párrafo primero, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera que el objeto del presente asunto se constriñe a determinar el grado de responsabilidad y la sanción aplicable al Partido Revolucionario Institucional, entre las establecidas en el artículo 456, párrafo primero, inciso a) del ordenamiento en consulta, conforme a las particularidades del caso.

3.4. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

A fin de calificar adecuadamente la infracción acreditada, e imponer la sanción que resulte proporcional a la conducta desplegada por el PRI, es conveniente recordar que este Consejo General, en su resolución INE/CG381/2015, consideró que sólo si de la denuncia se desprenden elementos que permitan considerar objetivamente que los hechos denunciados podrían constituir una infracción respecto del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias, y que en su denuncia, el PRI alegó la supuesta comisión de irregularidades en materia de financiamiento por parte del PRD y su candidato a gobernador de Michoacán, pero supuestamente acontecidas en el año dos mil once, infiriendo que, al tratarse del mismo partido y candidato, las mismas estaban repitiéndose en el Proceso Electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa para el período 2015 – 2021.

En esas condiciones, el Consejo General determinó que se actualizaba la hipótesis establecida en el artículo 440, inciso e), fracciones I y II, al haberse expresado pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por no encontrarse al amparo del derecho, ni estar soportadas al menos en indicios respecto a la veracidad de los hechos a que se refieren, actualizando la hipótesis normativa contenida en el numeral 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Tomando lo anterior como punto de partida, esta autoridad procederá en primer lugar a la calificación de la falta, para establecer las condiciones particulares que concurrieron en su comisión y, enseguida, a individualizar la sanción correspondiente, con el fin de que resulte proporcional a la infracción y cumpla con los fines de disuasión y reprimenda que le corresponden, a fin de que el infractor comprenda la necesidad de conocer y respetar la ley.

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

Para **calificar** debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos:

a) Tipo de infracción

b) Bien jurídico tutelado

c) Singularidad o pluralidad de la falta

d) Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción

e) Comisión dolosa o culposa de la falta

f) Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas

g) Condiciones externas y medios de ejecución

Al respecto, en el caso concreto se presentan las siguientes circunstancias:

a) Tipo de infracción

En el particular, la conducta desplegada por el PRI, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, fue una **acción,** que consistió en iniciar una denuncia en materia de fiscalización, por la supuesta comisión de irregularidades en materia origen, monto y destino de los recursos empleados por el PRD y su candidato a la gubernatura de Michoacán, sin la mención de hechos concretos, relacionados con el Proceso Electoral local que se encontraba en curso al momento de presentarla, ni acompañar material probatorio pertinente a los hechos afirmados en su escrito inicial.

b) Bien jurídico tutelado

En la especie, y conforme a lo establecido en el párrafo 2, del artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se tiene que el bien jurídico tutelado preponderantemente, es el adecuado funcionamiento de los órganos electorales, al margen de los diversos y difusos bienes jurídicos tutelados que puedan ser impactados a través de la presentación de denuncias frívolas como podría ser la disminución o riesgo que se podría generar a los derechos de los justiciables por la demora en la atención de denuncias legítimas, el dictado de diligencias de investigación que causen actos de molestia a los gobernados, o la práctica de diligencias que requieran la intervención de autoridades que las distraigan de sus funciones para la atención de procedimientos estériles.

En ese sentido, la importancia de la infracción imputada al PRI es precisamente que perjudica la protección del derecho de acceso a la justicia administrativa, al sobrecargar las actividades de los órganos electorales con una denuncia que razonablemente no desembocará en la instauración de un procedimiento serio y responsable que pueda tener como fin la protección del orden jurídico, toda vez que, por una parte, se refería a hechos acontecidos en un Proceso Electoral concluido; y por otra, no se acompañó con material probatorio vinculado con la candidatura del PRD a la gubernatura del estado de Michoacán, para el período 2015 - 2021.

En efecto, la garantía de acceso efectivo a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional, es correlativa a la existencia de órganos administrativos que investigan y, de ser el caso, sancionan infracciones electorales, por lo que a esta instancia sólo deben llegar los asuntos en los que realmente se requiera la presencia y actuación de la autoridad para dirimir el conflicto o sancionar una falta.

Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse ante la autoridad administrativa electoral, sino sólo aquellas quejas debidamente formuladas y respaldadas con material probatorio mínimamente suficiente e idóneo respecto de los hechos alegados, a fin de no entorpecer las actividades de la autoridad administrativa.

En este tenor, la presentación de denuncias frívolas —como la que nos ocupa— afecta el estado de derecho y resulta lesiva para los intereses de otros institutos políticos, así como de aquellos que sí acuden con seriedad ante esta instancia, puesto que los casos poco serios requieren el tiempo y energía de quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención del órgano resolutor, de los asuntos de trascendencia para el interés general y la regularidad constitucional de la materia política-electoral.

c) Singularidad o pluralidad de la falta

En el presente caso, la conducta infractora del partido político señalado como responsable es singular, puesto que se configura una sola falta, es decir, la presentación de una denuncia frívola.

d) Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción

En cuanto a las circunstancias objetivas que concurren en el caso, son:

MODO. La irregularidad atribuible al PRI consiste, como se ha precisado en líneas precedentes, en la presentación de una denuncia por presuntamente haber recibido y empleado financiamiento ilegítimo por parte el PRD y su candidato a gobernador de Michoacán para el período constitucional 2015 – 2021, en la campaña respectiva, sin manifestar en su ocurso hechos concretos que pudieran ser objeto de

la investigación solicitada, ni acompañar medios de prueba relacionados con la infracción denunciada, sin pasar por alto que sí anexó pruebas documentales y técnicas a su ocurso, pero relacionadas con el Proceso Electoral local en la mencionada entidad federativa desarrollado en el año dos mil once.

TIEMPO. La infracción se cometió el veintinueve de abril de dos mil quince, al momento de la presentación del escrito de denuncia frívola, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

LUGAR. La irregularidad atribuible al partido en comento, se cometió en la Ciudad de México, al ser presentado el escrito de denuncia ya referido, ante la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto.

e) Comisión dolosa o culposa de la falta

Del cuidadoso análisis de las constancias que integran el expediente al rubro citado, no se advierte la existencia de alguna que genere convicción en esta autoridad, respecto a que, a sabiendas de la improcedencia de su pretensión, el PRI, promovió una queja con el fin exclusivo de entorpecer el funcionamiento de los Organismos Electorales.

Lo anterior es así pues, como se ha precisado con antelación, el partido sujeto al presente procedimiento, denunció hechos que, de haberse acreditado, tenían trascendencia jurídica y efectivamente constituían una infracción a la normatividad electoral, específicamente, en materia de monto, origen y destino de los recursos empleados por los partidos políticos en los procesos electorales; de ahí que su acción no era intrínsecamente intrascendente, sin embargo, incurrió en la causal de improcedencia contenida en el artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al ser imprecisa y carecer de material probatorio suficiente y adecuado para, al menos, desplegar la facultad investigadora de la autoridad electoral.

Por otra parte, los hechos que denunció el PRI no eran de naturaleza irrelevante, toda vez que se referían a presuntas irregularidades respecto del origen y destino de recursos otorgados a un partido político.

Entonces, no se aprecia que el ánimo del ahora denunciado, hubiese estado revestido de dolo, esto es, a través de la manifestación intelectual (saber) y de la voluntad (querer) de engañar a esta autoridad, a sabiendas de que sus pretensiones no alcanzarían ningún resultado material en el mundo jurídico, con base en premisas notoria y evidentemente irracionales o absurdas.

Por estos motivos, se considera que el PRI, con su actuar, no tuvo la intención de promover dicha denuncia sustentada en razonamientos ligeros, exponiendo cuestiones inútiles o sin importancia, pues como se ha señalado, presentó hechos, que, desde su lógica, eran susceptibles de ser sancionados.

De tal suerte, aun cuando dicha denuncia no se sustentó en elementos indiciarios suficientes para demostrar el supuesto jurídico específico en que se sustentó la queja, y la construcción argumentativa del ocurso no fue clara y objetiva, es inconcuso que el grado de reproche que se le puede realizar por tal conducta es menor, por lo que también lo es el grado de frivolidad.

f) Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas

No existe vulneración reiterada o sistemática de la normativa electoral, en razón de que la falta que se atribuye al partido político denunciado, se cometió en una sola ocasión.

g) Condiciones externas y medios de ejecución

La denuncia calificada como frívola sucedió en el contexto del Proceso Electoral local desarrollado en el Estado de Michoacán, para elegir al titular del Ejecutivo estatal para el período constitucional 2015 - 2021.

B. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción,** se deberán tomar en cuenta los siguientes elementos:

a) Calificación de la gravedad de la infracción

b) Reincidencia

c) Sanción a imponer

d) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

e) Condiciones socioeconómicas

f) Impacto en las actividades del infractor

Dichos aspectos, en el caso concreto, son los siguientes:

a) Calificación de la gravedad de la infracción

Atendiendo a los elementos objetivos que han quedado descritos, y considerando que la conducta desplegada por el PRI actualizó la falta contenida en el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracciones I y II, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero las pretensiones del denunciante no eran, por sí mismas, absurdas, ilógicas o irrazonables, puesto que sus planteamientos estaban relacionados con supuestos actos de financiamiento ilegal en favor del PRD y la candidatura del C. Silvano Aureoles Conejo a la Gubernatura de Michoacán, es inconcuso que la denuncia no era *per se* absurda o notoriamente desamparada por el derecho, sino que incumplió con las cargas procesales que le corresponden para el desarrollo de la facultad investigadora de esta autoridad electoral, concretamente señalar hechos específicos acontecidos en el Proceso Electoral local en curso al momento de formular la denuncia, y relacionarlos con un mínimo de pruebas que hicieran sospechar, razonablemente, que los hechos denunciados acontecieron en la realidad, por lo que el grado de frivolidad se considera menor.

Al respecto, es importante no pasar por alto que el artículo 440, párrafo primero, inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece con claridad las hipótesis en las que será considerada frívola una queja o denuncia, consistentes en que se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser evidente que no se encuentran al amparo del derecho; que se refieran a hechos que se adviertan falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito, y no estén apoyados por un acervo probatorio mínimo para acreditar su veracidad; que se refieran a hechos que no constituyan una falta; o, que únicamente se fundamenten en notas periodísticas —de opinión o noticiosas—, que generalicen una situación y no se acrediten por otro medio.

En esa medida, ciertamente el PRI promovió una queja frívola, proceder que debe ser desalentado y reprendido conforme al orden jurídico vigente; sin embargo, esta autoridad aprecia que aquél comportamiento no consistió en promover una queja basándose en hechos notoriamente falsos, intrascendentes o carentes de veracidad, ni la intención superficial o ligera de promover un procedimiento administrativo a sabiendas que su pretensión era imposible de alcanzar, de ahí que se considera que en el caso, la conducta es de gravedad leve.

b) Reincidencia

Se considera que en el presente asunto el infractor no es reincidente, pues de la búsqueda minuciosa en los archivos de esta autoridad electoral, no se advierte que haya sido sancionado por la comisión de la misma falta en una ocasión anterior, mediante Resolución que sea definitiva y firme, ello conforme al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN[8].**

c) Sanción a imponer

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere facultad al operador jurídico para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se proporcional a la conducta desplegada por el sujeto infractor, en el caso de los partidos políticos, entre las especificadas en las cinco fracciones del artículo 456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En torno a ello, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar tendente a disuadir la comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Así las cosas, toda vez que la conducta que nos ocupa se ha calificado con una frivolidad menor y gravedad leve, de entre el catálogo de sanciones aplicables la que resulta proporcional es la de **amonestación pública.**

Lo anterior es así, dado que las sanciones consistentes en multa y reducción de las ministraciones del financiamiento público resultarían excesivas y desproporcionadas, toda vez que la infracción cometida por el PRI, como se ha expuesto, no deviene en grave, de tal suerte que no es procedente la imposición de dichas sanciones.

---

[8] Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 45 y 46.

Del mismo modo, resultan inadecuadas las relativas a la interrupción de trasmisiones de propaganda o la perdida de registro como partido político, pues en el primer caso la infracción cometida no se relaciona con la difusión de propaganda política o electoral, y en el segundo la infracción no fue calificada como grave o reiterada.

d) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

Tomando en consideración que la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral, ante la frivolidad de la denuncia presentada por el PRI, desestimó realizar acciones encaminadas a investigar los hechos denunciados, se advierte que el daño generado a los órganos administrativos de este instituto al atender esta queja es menor, puesto que si bien dicha Unidad se vio sujeta al cumplimiento de sus obligaciones legales para integrar el expediente respectivo, requerir al denunciante la aclaración de su ocurso, formular un Proyecto de Resolución y llevarlo al conocimiento del Consejo General para aprobarlo en definitiva, de lo cual se sigue sí hubo daño a los órganos administrativos de este instituto, al haberse accionado de manera innecesaria la maquinaria administrativa de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto y utilizarse recursos humanos y materiales para su atención, tal perjuicio resulta mínimo, en atención a que al no aclarar el PRI sus pretensiones, la autoridad fiscalizadora procedió de inmediato al desechamiento de la queja, sin haber inferido algún acto de molestia a los particulares para investigar los hechos denunciados, formular requerimientos de información a otros órganos de autoridad para averiguar la verdad histórica, ni invertir más recursos materiales, humanos y financieros para la elaboración de una resolución de fondo.

Entonces, sin pasar por alto el hecho que estas conductas, dada su ligereza deben ser inhibidas, para no compeler a los órganos administrativos electorales a ejercer sus funciones en la atención de asuntos intrascendentes o triviales, distrayendo su atención de temas trascendentes para el sistema democrático nacional, se considera menor el daño ocasionado a la administración de justicia administrativa electoral.

e) Condiciones socioeconómicas e impacto en las actividades del infractor.

Toda vez que en el presente caso la sanción a imponer al PRI consiste en amonestación pública, resulta innecesario analizar las condiciones socioeconómicas del infractor, puesto que de modo alguno se verían afectadas sus actividades habituales con la medida decretada.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Este Consejo General determina que en el presente asunto el Partido Revolucionario Institucional es acreedor a la imposición de una sanción, consistente en **Amonestación Pública por la presentación de denuncia frívola,** en términos de lo expuesto en el Considerando **TERCERO** de la presente Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. A fin de hacer efectiva la sanción impuesta, **publíquese la presente Resolución** en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. Notifíquese, **por oficio** al Partido Revolucionario Institucional, a través de su representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; y, por **estrados,** a los demás interesados, todo con fundamento en los artículos 460 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

En su oportunidad **archívese** el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 31 de mayo de dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

El Consejero Presidente del Consejo General, **Lorenzo Córdova Vianello**.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, **Edmundo Jacobo Molina**.- Rúbrica.

RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/108/PEF/123/2015, iniciado con motivo de la vista ordenada en la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG108/PEF/2015, por hechos probablemente constitutivos de infracción a la norma electoral, consistentes en la presentación de una queja frívola, por parte del representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG459/2016.- Exp. UT/SCG/Q/CG/108/PEF/123/2015.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/CG/108/PEF/123/2015

DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/108/PEF/123/2015, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, IDENTIFICADA CON LA CLAVE INE/CG108/PEF/2015, POR HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN A LA NORMA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA FRÍVOLA, POR PARTE DEL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Ciudad de México, 31 de mayo de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

I. VISTA[1]. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Resolución identificada con la clave INE/CG108/2015 determinó desechar la queja presentada por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del Partido de la Revolución Democrática, en la que denunciaba presuntas irregularidades en el manejo de recursos, tramitada bajo el número INE/Q-COF-UTF/05/2015.

Dicha denuncia fue desechada en atención a que el órgano superior de dirección de este Instituto la consideró frívola y, en consecuencia, ordenó dar vista a la Secretaría Ejecutiva de esta autoridad electoral, a fin de que ejerciera sus atribuciones una vez que la resolución respectiva quedara firme.

II. En cumplimiento a lo anterior, el veintiuno de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el oficio **INE/SCG/0899/2015**, signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante el cual remitió copia del diverso **INE/UTF/DRN/11432/2015**, y documentación anexa, signado por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, así como copias certificadas de la resolución **INE/CG108/2015**, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al procedimiento identificado con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/05/2015.**

III. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.[2] Con fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, se ordenó la radicación de la queja bajo el número **UT/SCG/Q/CG/108/PEF/123/2015**; reservar su admisión y el respectivo emplazamiento, hasta en tanto culminara la etapa de investigación; y, requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, diversa información necesaria para la debida integración de expediente que se resuelve.

IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.[3] El uno de julio de dos mil quince, se admitió a trámite la denuncia y se ordenó emplazar al Partido Verde Ecologista de México, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Dicho acuerdo fue notificado por oficio a dicho representante, el tres de julio de dos mil quince.

V. ALEGATOS[4]. Mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil quince, se ordenó dar vista al denunciado, a fin de que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, compareciendo el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General de este Instituto, por escrito recibido en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el trece de julio de dos mil quince.

[1] Visible a fojas 1 a 84 del expediente

[2] Visible a fojas 85 y 86 del expediente.

[3] Visible a fojas 90 a 92 del expediente.

[4] Visible a fojas 112 a 113 del expediente.

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al rubro.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veintiséis de mayo de este año, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el caso, se actualiza la competencia de este Consejo General para conocer del presente asunto, debido a que al resolver la queja en materia de fiscalización presentada por el Partido Verde Ecologista de México, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por presuntas irregularidades atribuidas al Partido de la Revolución Democrática, relacionadas con el origen y destino de sus recursos financieros, determinó que dicha inconformidad resultaba frívola, porque el quejoso fundó únicamente su denuncia en notas de opinión periodística, sin que por otro medio se pudiera acreditar la veracidad de sus afirmaciones.

De esta manera, al ser la promoción de quejas o denuncias frívolas un supuesto de sanción conforme a lo establecido en los artículos 440, párrafo primero, inciso e), fracción IV y 443 párrafo primero, inciso n), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y corresponder a este Consejo General su resolución definitiva, es que se actualiza su competencia para conocer del particular.

SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA. En torno a la figura de la frivolidad en la presentación de un ocurso, es importante resaltar, que si bien es cierto ha constituido tradicionalmente una causa de improcedencia que impide el establecimiento válido de la relación jurídica procesal y, en consecuencia, termina de modo anticipado el procedimiento respectivo, lo es también que no fue sino hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce —artículo Segundo Transitorio, fracción II, inciso f)—, y la posterior emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de veintitrés de mayo siguiente, que en la materia electoral se previó a nivel normativo la presentación de quejas o denuncias de tal naturaleza como una infracción sancionable.

En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales), se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula.

Así, como se indicó, en el mencionado artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional en materia político- electoral a que se ha hecho referencia párrafos arriba, se previó la obligación de que en la legislación secundaria se estableciera como conducta sancionable precisamente la presentación de quejas frívolas, indicándose en la citada reforma, el significado de dicha figura jurídica, a saber:

> "*f)… Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia;*"

En este orden de ideas es menester poner de manifiesto que en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, -artículos 440, párrafo 1, inciso e) fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d), de dicho cuerpo normativo- se estableció todo un catálogo de hipótesis respecto a lo que debe ser considerado como una denuncia frívola, entendida como tal:

- Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del Derecho;
- Aquellas que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;
- Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral;
- Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad;
- Aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.

Incluso, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral, ya había abordado el concepto de frivolidad a través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro, *FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE*[5], en donde sostuvo que "...*El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan…",* sin que pase desapercibido para esta autoridad electoral que dicho criterio fue emitido por el máximo tribunal del país, en la materia electoral, en el año 2003, es decir, durante la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990.

Según dicho criterio, la frivolidad de una promoción se actualiza cuando, **a sabiendas de que sus pretensiones son jurídicamente imposibles**, y tal circunstancia es evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el promovente acciona la maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto de hechos que no se encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan con sustento probatorio idóneo o suficiente.

Más recientemente, al resolver el Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con el número SUP-REP-201/2015, dicha Sala Superior sostuvo, en esencia, que la frivolidad implica que el medio de defensa sea totalmente inconsistente, insustancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia y que tales circunstancias resulten evidentes de la sola lectura de la queja o denuncia.

Asimismo, al resolver el diverso SUP-REP-229/2015, la misma Sala Superior consideró, en la parte que interesa al presente asunto, que los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme a la garantía de acceso a la justicia contenida en los artículos 41, segundo párrafo, Base VI, y 99, fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución federal, consiste en que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y resolver de manera pronta, completa e imparcial, las controversias que sean sometidas a su conocimiento; sin embargo, también expuso que el acceso efectivo a la justicia, como derecho humano protegido tanto por la Constitución federal como por las leyes secundarias, debe estar libre de abusos por parte del propio gobernado, pues si ello se permitiera, se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático, de manera que una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de los demás justiciables.[6]

2.2. Grado de frivolidad

Una vez delimitada la noción de frivolidad, es necesario poner de relieve que no se trata de un concepto absoluto que no admita matices, pues por el contrario, atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada caso, tales como los hechos materia de la denuncia, el material probatorio en que se apoye y la claridad de los argumentos vertidos, se podrá estar ante diversos grados o niveles de gravedad.

No obstante, la normativa electoral no contiene disposición alguna que desarrolle un método para determinar el grado de frivolidad, ni tampoco precisa los niveles o grados de gravedad en que se pueden clasificar las quejas de esta naturaleza; sin embargo, para determinar el grado de frivolidad de la queja o denuncia, se pueden tomar en consideración aspectos como:

a) Que la promoción contenga hechos, es decir, se refieran las circunstancias concretas en las que sucedió la infracción denunciada;

b) Que tales hechos estén reconocidos positivamente como infracciones a la norma electoral, y en consecuencia, que ameriten la imposición de una sanción;

c) Que a la denuncia no se acompañen medios de convicción, es decir, que el denunciante se abstenga de acompañar a su escrito elementos para demostrar, al menos de manera indiciaria, la veracidad de su dicho.

d) Que dichas probanzas sean suficientes cuando menos para que la autoridad pueda ejercer su facultad investigadora;

e) Que con la promoción de la denuncia o queja frívola se ocasionen daños, ya sea a los Organismos Electorales o a sujetos distintos, como terceros ajenos al procedimiento;

f) La intensidad del daño ocasionado con la atención a la denuncia frívola.

---

[5] Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.

[6] Localizable en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/REP/229/SUP_2015_REP_229-468529.pdf

Lo anterior es relevante puesto que a través de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 440 de la Ley general electoral, el legislador impuso a las autoridades administrativas electorales la obligación de valorar el grado de frivolidad del ocurso así como las consecuencias lesivas que implicarían el atender una queja de esta naturaleza, previo a decidir cuál es la sanción que se debe imponer, en el caso de los partidos políticos, entre las consignadas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), de la Ley comicial.

Así las cosas, la gravedad de una queja frívola será mayor, si la misma carece de hechos, dado que en tales condiciones el ocursante estará faltando a la carga de la afirmación, al no proveer a la autoridad el conocimiento de aquello que pretende sea materia de pronunciamiento; en cambio, será menor la trascendencia de la falta, si los hechos están señalados, pero no constituyen una infracción a la norma electoral.

En el mismo tenor, se debe considerar que irroga mayor perjuicio la presentación de una denuncia que no esté apoyada en lo absoluto por medio de convicción alguno, mientras que no será tan dañoso el hecho de que las pruebas acompañadas no resulten idóneas y/o suficientes para orientar la actividad investigadora de la autoridad.

Finalmente, por cuanto hace al perjuicio provocado con la presentación de una denuncia frívola, será menester tomar en consideración, por ejemplo, si a partir de la instauración del procedimiento administrativo sancionador correspondiente, y en ejercicio de su facultad investigadora, la autoridad competente instrumentó diligencias que se constituyeran en actos de molestia a los gobernados, o que implicaran requerimientos a otros órganos de autoridad.

Con todo lo anterior, si del análisis del caso particular, se advierte con certeza que la presentación de la queja frívola implicó la inútil activación del aparato administrativo en detrimento de la administración de justicia, dependiendo de la gravedad particular, el operador jurídico deberá proceder a seleccionar la sanción aplicable conforme a lo señalado el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la ley comicial federal, se insiste, para el caso de los partidos políticos.

2.3. Marco Jurídico

Ahora bien, el marco jurídico derivado de la reforma constitucional en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, contiene los parámetros a los cuales, en acatamiento al principio de legalidad al que se encuentra constreñido este Instituto Nacional Electoral, deberán sujetarse los procedimientos administrativos sancionadores derivados de la promoción de quejas frívolas. Dicho marco está contenido en los artículos 440, 443 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales, en lo que al caso atañe, son del tenor siguiente:

> ***Artículo 440.***
>
> *1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:*
>
> *(…)*
>
> *e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas,* ***aplicables tanto en el nivel federal como local****, entendiéndose por tales:*
>
> *I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen* ***pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente****, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;*
>
> *II. Aquéllas que refieran* ***hechos que resulten falsos o inexistentes*** *de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;*
>
> *III. Aquéllas que se refieran a hechos que* ***no constituyan una falta*** *o violación electoral, y*
>
> *IV. Aquellas que* ***únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso****, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.*
>
> *2. La sanción que se imponga, en su caso,* ***deberá de valorar el grado de frivolidad*** *de la queja y* ***el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los Organismos Electorales.”***

Artículo 443.

1. *Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:*

a) a m) […]

n) *La comisión de cualquier* ***otra falta*** *de las previstas en esta Ley.*

Artículo 456.

1. *Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:*

a) Respecto a los partidos políticos:

I Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley, y

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Como se aprecia, el artículo 440 citado establece, en primer término, que la presentación de quejas o denuncias frívolas traerá como consecuencia la imposición de una sanción; en segundo, los criterios que servirán de base ´para determinar si dicha queja es o no, frívola –aplicables tanto a nivel federal como local-; y, en tercero, que para la imposición de la sanción atinente, el operador jurídico deberá tomar en consideración el grado de frivolidad y el daño que se podría seguir a los órganos electorales con la atención de asuntos insustanciales.

Por cuanto hace al artículo 443, párrafo 1, inciso a) invocado, ciertamente contiene un catálogo enunciativo de las **infracciones concretas en las que puede incurrir un partido político** -en sus inciso a) al m)-, pero también prevé que los partidos políticos podrán ser sancionados por la comisión de cualquier otra falta de las previstas en la Ley.

Así, la interpretación gramatical y sistemática de los preceptos indicados, conduce a estimar que, si la promoción de quejas o denuncias frívolas es una falta sancionable conforme a la ley –artículo 440, párrafo primero, inciso e)-, y los partidos políticos pueden ser sancionados, además de los supuestos expresamente contenidos en los incisos a) al m) del artículo 443, por los demás que se encuentran dispersos en la Ley –inciso n) del mismo numeral-, entonces dichos entes de interés público son sancionables por la presentación de quejas o denuncias frívolas, de manera proporcional al grado de frivolidad y al daño que produzca dicho proceder ilegal.

En el mismo sentido, la interpretación funcional de los numerales transcritos conduce a estimar que con las anteriores disposiciones, se protege y garantiza que el acceso a la justicia administrativa electoral esté libre de abusos y de la presentación de escritos ligeros o insustanciales que puedan distraer u ocupar, injustificada e innecesariamente, los recursos humanos y materiales de la autoridad administrativa electoral.

Cabe precisar, que si bien, como se señaló al principio del presente considerando, el artículo 447, párrafo 1, inciso d) de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, define, además del diverso 440, del mismo cuerpo normativo, lo que debe ser entendido como una queja frívola, el cual fue citado en la presente Resolución como marco conceptual de la figura jurídica a analizar –frivolidad-, en el presente caso dicha disposición no resulta aplicable para la solución de esta controversia, ni tampoco para la imposición de la sanción atinente, dado que la misma se encuentra circunscrita al catálogo de infracciones en que pueden incurrir los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su caso, de cualquier persona física o moral, más no así a los partidos políticos, quienes son sujetos de responsabilidad al tenor de lo dispuesto en el diverso 443, de la ley en cita

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO.

3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO.

Como quedó precisado en los antecedentes del caso, el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, emitió la Resolución INE/CG108/2015 —cuya copia certificada corre agregada en los autos[7] y cuenta con valor probatorio pleno con sustento en los artículos 462, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 27, párrafo segundo, del Reglamento de Quejas y Denuncias, por tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, además de no estar cuestionada su autenticidad o contenido— y determinó **desechar la queja** presentada por el Partido Verde Ecologista de México, **en razón de considerarla frívola**, en términos del artículo 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación al diverso 440, numeral 1, inciso e), fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; ello bajo las consideraciones siguientes:

> *Como se colige de los hechos denunciados en el escrito de queja y los elementos probatorios aportados por el quejoso, no se desprende indicio alguno por medio del cual se pueda arribar a la verdad de los hechos presuntamente violatorios de la normativa electoral en materia de fiscalización.*
>
> *De lo anterior es posible advertir que dichas notas periodísticas constituyen una noticia informativa –opinión periodística o de carácter noticioso–, puesto que se dan a conocer los registros oficiales de los otrora candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores del municipio de Iguala, Guerrero; así como a los candidatos a diputados locales por los Distritos 22 y 23, postulados por los diferentes partidos para el Proceso Electoral Local 2012-2013.*
>
> *En este orden de ideas, como la parte quejosa* ***solamente presenta como prueba notas periodísticas que no vinculan al denunciado ni lo relacionan con alguna otra probanza fehaciente que pudiera acreditar la violación de la normativa en materia de fiscalización, por ello, es evidente que no se acreditan tampoco las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que presuntamente se dieron los hechos materia de esta queja, en virtud de que las probanzas aportadas por el denunciante constituyen documentales privadas que concatenadas entre sí no generan elemento de convicción alguna en esta autoridad como para poder trazar una línea de investigación*** (Los resaltados son propios).
>
> *Es decir, los indicios simples presentados no son pertinentes para sustentar los hechos imputados, pues de su análisis y valoración se desprende que se está en lo previsto en el artículo 31, numeral 1, fracción II, en relación al 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, derivado de lo anterior se considera que en el expediente de mérito no existen elementos diversos a los del tipo indiciario simple, lo cual implica que no se tenga otro tipo de medio o indicio del cual se pueda investigar y, consecuentemente acreditar, la conducta denunciada.*
>
> ***Así, las notas periodísticas carecen de eficacia probatoria si no están corroboradas con algún elemento de convicción o vinculadas con otro elemento de prueba.*** *Sirven como sustento de lo anterior, las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación:* (Los resaltados son propios).
>
> ***NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE 'UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO'.*** *(se transcribe)*
>
> ***NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.*** *(se transcribe)*
>
> *En consecuencia, se desprende que para la calificación de indicios simples o indicios de mayor grado, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso; con relación a lo anterior, para el caso que nos ocupa dichas notas periodísticas no se pueden considerar como indicios de mayor grado, esto es así ya que carecen de valor probatorio pleno, pues aunque éstas no sean desmentidas por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente, por lo tanto dichas notas no constituyen valor probatorio pleno por sí solas ni son hechos públicos y notorios, pues de ninguna manera demuestran la veracidad de los hechos a que las citadas publicaciones se refieren.*

[7] Visible a fojas 49 a la 84 del expediente.

En atención a lo anterior, dichas notas periodísticas no pueden ser consideradas como plenamente ciertas, hasta ser vinculadas con algún otro elemento que haga prueba plena o sean un indicio de mayor grado convictivo*, mismo que no fue aportado por el hoy quejoso ni en el escrito de queja, ni en el desahogo de la prevención (el cual incluye una ampliación a la queja)* (Los resaltados son propios).

Dicho de otra manera, de las notas periodísticas presentadas como medio de prueba se desprende que lo único que se tiene como cierto es que el dicho de la persona que edita las notas, pues en ningún momento de la narración de la misma se establecen los presuntos hechos denunciados, dada la naturaleza de la nota, es imposible realzar una verdadera investigación con base en las facultades establecidas en la propia ley, ya que es imposible por la falta de indicios, verificar la certeza de las afirmaciones contenidas en dichas fuentes, pues los elementos aportados, en ningún modo pueden acreditar que el partido aceptó aportación o donación alguna.

Aunado a lo anterior, las notas sólo hacen referencia respecto a la probable comisión de una irregularidad en materia de fiscalización -financiamiento alterno del Partido de la Revolución Democrática- por medio de "dichos" de integrantes de dicho instituto político "de amplia solvencia moral y trayectoria partidista"; sin embargo, no da mayores datos y esta autoridad se encuentra imposibilitada para realizar mayores investigaciones con el periódico o autor de la nota.

Lo anterior es así porque ello interferiría con el ejercicio de la libertad de expresión, aún cuando constitucionalmente y de acuerdo a tratados internacionales se tiene proscrito, generando un efecto de desinhibición a la difusión de información que puede constituirse en actos de censura, máxime que ello implicaría la develación de fuentes de información, misma que se encuentra protegida por el derecho de secrecía de las fuentes.

Además, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, así como que toda persona puede hacerlo libremente sin injerencia de autoridad alguna. Así, se desprende que la libertad de expresión implica que una persona puede difundir ideas u opiniones sin ser objeto por ello de ninguna inquisición judicial o administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que dicha queja encuadra en el supuesto establecido en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que una queja es frívola cuando, sea notorio el propósito del quejoso de interponerlo sin existir motivo o fundamento alguno para ello o aquél en el cual, evidentemente, no se puede alcanzar el objetivo que se pretende; la frivolidad de un queja significa que es totalmente intrascendente o carente de sustancia.

Esto es así, pues como ha quedado expuesto, en la queja en cuestión no se puede alcanzar jurídicamente la pretensión del actor, ya que es notorio y evidente que no están bajo la tutela del Derecho *y ello implicaría, incluso, la violación a normativa internacional. Aunado a lo anterior, se encuentra con la inexistencia de indicios en grado de suficiencia, así como de la descripción de circunstancias de modo, tiempo y lugar, que sirvan para actualizar el supuesto jurídico invocado por el hoy quejoso, por lo tanto la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito de queja, el desahogo de la prevención (con su respectiva ampliación de queja) y las pruebas que se aportan. Sírvanse como sustento las siguientes tesis emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:* (Los resaltados son propios).

RECURSO FRÍVOLO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. *(se transcribe).*

FRIVOLIDAD. ACTUALIZA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. *(se transcribe).*

FRIVOLIDAD. ELEMENTOS PARA CONFIGURARSE. *(se transcribe).*

Por último, aunado a lo anterior si bien el quejoso en su escrito de desahogo de prevención y ampliación de queja indica que existió una vulneración al proceso de selección interna, así como el no cumplimiento de las normas estatutarias dentro del Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 2012-2013, específicamente en el

Ayuntamiento de Iguala, Guerrero; cabe recordar que el origen de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización radican en investigar conductas que podrían ser violatorias de la normativa electoral en cuanto al origen y destino de los recursos de los partidos políticos y no, como sucede en la especie, infractoras de disposiciones al interior de los partidos políticos. En otras palabras, tal como lo establecen los artículos 34, numeral 2 y 47, numeral 2 la Ley General de Partidos Políticos, las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos, como son los procedimientos y controversias relacionadas con la elección de los integrantes de sus órganos internos, serán resueltas por los órganos establecidos en sus Estatutos para tales efectos y una vez agotados los medios internos tendrán derecho de agotarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aunado a lo anterior, los hechos denunciados con supuestos que se encuentran encuadrados en el artículo 228, numerales 1 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que es competencia directa de cada partido político conforme a sus Estatutos, establecer al órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección de sus candidatos, así como la negación o cancelación del registro de aquellos que incurran en conductas contrarias a la ley o las normas que rijan el proceso interno, derivado de ello esta autoridad electoral no es la competente para resolver sobre dichos procesos pues como lo establece el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta Unidad Técnica es el órgano que tiene a su cargo entre otras la investigación de quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, mas no así lo que se adolece en el escrito de desahogo de prevención.

Por lo expuesto y en virtud que los hechos denunciados cumplen todos los requisitos para establecer que dicha queja sea considerada frívola, lo que implica la imposibilidad de que esta autoridad fiscalizadora logre establecer, aunque sea de forma indiciaria, alguna infracción en materia de origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, se actualiza la causal prevista en la fracción II del numeral 1 del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. En consecuencia, lo procedente es ***desechar*** *la queja interpuesta por el Licenciado Jorge Herrera Martínez, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por actos que consideran violatorios de la normatividad electoral en materia de origen y destino de recursos.*

Así, esta autoridad electoral consideró evidente que la queja presentada por el Partido Verde Ecologista de México a través de su representante legítimo, resultaba frívola, puesto que al sustentarla en notas periodísticas no podía alcanzar el objetivo que pretendido.

En esas condiciones, dada la definitividad y firmeza de la resolución que la contiene, en el presente asunto no se realizará estudio o pronunciamiento alguno en torno a la calificación de la frivolidad de la queja presentada por el PRI ante la Unidad Técnica de Fiscalización.

3.2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS [8]

En los escritos mediante los cuales compareció con el fin de contestar el emplazamiento y formular alegatos, el Partido Verde Ecologista de México esgrimió como defensa, sustancialmente lo siguiente:

- Que es un hecho público y notorio que el entonces alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, otrora presidente municipal de ese ayuntamiento, es sujeto de investigaciones en diversas instancias, sobre todo en la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito, operaciones de procedencia ilícita y su relación con organizaciones de delincuencia organizada.
- Que en enero de dos mil quince, se hallaron indicios que se difundieron en notas periodísticas, que presuntamente José Luis Abarca Velázquez había otorgado recursos de procedencia ilícita al entonces dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática.
- Por esa razón, el Partido Verde Ecologista de México, el cinco de febrero de dos mil quince, presentó una queja para solicitar la intervención de la Unidad de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral a efecto de que realizara las investigaciones de mérito, y que si bien es cierto, aportó solamente indicios consistentes en notas periodísticas, también lo es que solicitó a dicha autoridad electoral fiscalizadora que efectuara las investigaciones atinentes a efecto de allegarse de las probanzas necesarias que estaban fuera del alcance del quejoso.

[8] Respuestas a emplazamiento y alegatos, localizables en fojas 107 a 111 y 119 a 127

- En su escrito de trece de febrero del año en curso, por el que desahogó la prevención que la autoridad fiscalizadora le realizó, señaló que el propio Partido de la Revolución Democrática instaló una comisión especial para investigar los hechos que en su momento habían denunciado.
- Que no se trata de señalamientos que no puedan probarse, que no sean objeto de reproche jurídico, o bien que constituyan calumnia por parte de dicho partido, ya que han dado lugar a investigaciones serias por diversos organismos facultados para ello en distintas instancias.
- Que las funciones y atribuciones de la Unidad Técnica de Fiscalización tienen la finalidad de conocer el origen y el destino de los recursos que utilicen los institutos políticos y demás sujetos electorales. Por lo que está entre sus facultades el iniciar indagatorias respecto de temas como el que fue objeto de queja.
- Que el valor probatorio de los elementos noticiosos son una prueba indiciaria que se debió vincular con otros elementos a los que únicamente tenía acceso la autoridad.
- Que la queja no tenía como único sustento las notas periodísticas, sino que se solicitó a la autoridad electoral realizara diligencias mediante el ejercicio de sus atribuciones y que accediera a datos confidenciales, de secreto bancario y demás, que podría proporcionar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a las cuales dicho partido no tenía (ni podía tener) acceso, por ser una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral.
- Reconoce que tal como expone el acuerdo INE-CG-108/2015 de 25 de marzo de 2015, que resuelve el expediente INE/Q-COF-UTF/05/2015, las notas periodísticas únicamente constituyen pruebas indiciarias que deben ser adminiculadas con otros elementos de prueba; ya sea que se aporten por el quejoso o que se integren al expediente respectivo por las diligencias que realice la autoridad, en ejercicio de sus atribuciones.
- No se acredita la frivolidad, tal como está definida en el artículo 440, párrafo 1, inciso e), fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- No se trata de consideraciones subjetivas, pues de lo contrario ninguna otra autoridad hubiese iniciado averiguaciones.
- Después de corroborar los indicios y se compruebe o no la conducta, se debe tomar en cuenta que existía un contexto fáctico indiciario que debía ser investigado y que se encontraba dentro de las facultades de la Unidad Técnica de Fiscalización, y que incluso otros organismos nacionales, públicos y privados consideraron la cuestión con el suficiente peso como para merecer una investigación al respecto, sin perjuicio de que el resultado de dichas pesquisas fuera negativo.
- La autoridad electoral debió tomar en cuenta que durante el Proceso Electoral 2014-2015, se ha dado el trámite correspondiente a diversas quejas presentadas por distintos institutos políticos fundadas precisamente en notas periodísticas, no siendo declaradas como frívolas, sino que han sido admitidas y, por consiguiente, llevado a cabo el procedimiento sancionador respectivo, lo que a su vez implicó la realización de todas las diligencias necesarias llevadas a cabo por la propia autoridad electoral para la investigación de los hechos denunciados.
- A manera de ejemplo, cita la queja presentada por el partido político Morena, registrada con el número de expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/132/PEF/176/2015, mediante la cual denunciaron conductas atribuibles al propio Partido Verde Ecologista de México, sustentándola en tan solo una nota periodística; misma que fue admitida, se impusieron medidas cautelares, y se dio trámite al procedimiento sancionador correspondiente, radicándolo ante la Sala Regional Especializada para que emitiera la sentencia respectiva dentro del expediente SER-PSC-77/2015, mediante la imposición de la sanción respectiva.

Tales consideraciones no son idóneas ni suficientes para eximir al partido político de responsabilidad por la presentación de una queja frívola, puesto que unos razonamientos están enfocados a evidenciar la justificación del procedimiento incoado ante la Unidad Técnica de Fiscalización, y por tal motivo, cuestionan las razones que sostuvieron el desechamiento de su queja por ser frívola, en tanto que otros, en todo caso, debieron ser hechos valer ante la instancia correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de un recurso de apelación, como se deriva de lo establecido en los artículos 3, párrafo segundo, inciso b); 40 párrafo primero, inciso b); 45, párrafo primero, inciso a); y 47 párrafo primero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, no debe perderse de vista que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todos los gobernados el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, a través de tribunales que estarán expeditos para administrarla, y concretamente en la materia electoral, previene la creación de un Sistema de Medios de Impugnación cuya finalidad estriba justamente en que todos los actos de las autoridades electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

De esta manera, es incuestionable que si el Partido Verde Ecologista de México consideraba —como lo alega en su escrito de contestación al emplazamiento— no se acredita la frivolidad, tal como está definida en el artículo 440, párrafo 1, inciso e), fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, debió hacer valer dichos argumentos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que, a través de sus salas, cuenta con atribuciones para, en su caso, revocar o modificar la resolución del Consejo General que ahora tacha de inadecuada, puesto que el objeto del presente procedimiento sancionador consiste en determinar la sanción que se debe imponer al promovente de la queja en materia de fiscalización que fue calificada como frívola, y no en analizar si la Resolución INE/CG108/2015 estaba o no ajustada a Derecho.

3.3. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

De conformidad con el contenido de la Resolución INE/CG108/2015, la cual ha adquirido definitividad y firmeza por no haber sido impugnada en tiempo y forma, por lo que goza en su favor de una presunción de legalidad y constituye la verdad jurídica en torno a los hechos a que se refiere, la queja incoada por el Partido Verde Ecologista de México fue desechada por **constatarse su frivolidad**, infracción sancionable conforme a lo establecido en los artículos 440, párrafo primero, inciso e), fracción IV y 443, párrafo primero, inciso n) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera que el objeto del presente asunto se constriñe a determinar el grado de responsabilidad y la sanción aplicable al Partido Verde Ecologista de México, entre las establecidas en el artículo 456, párrafo primero, inciso a) del ordenamiento en consulta, conforme a las particularidades del caso.

3.4. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

A fin de calificar adecuadamente la infracción acreditada, e imponer la sanción que resulte proporcional a la conducta desplegada por el Partido Verde Ecologista de México, es conveniente recordar que este Consejo General, en su Resolución INE/CG108/2015, consideró que sólo si de la denuncia se desprenden elementos que permitan considerar objetivamente que los hechos denunciados podrían constituir una infracción respecto del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias, y que en su denuncia, dicho partido político alegó la supuesta comisión de irregularidades en materia de financiamiento por parte del Partido de la Revolución Democrática.

En esas condiciones, el Consejo General determinó que se actualizaba la hipótesis establecida en el artículo 440, inciso e), fracción IV, al haber fundamentado la misma en notas de opinión periodística que generalizan una situación sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad, actualizando la hipótesis normativa contenida en el numeral 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Tomando lo anterior como punto de partida, esta autoridad procederá en primer lugar a la calificación de la falta, para establecer las condiciones particulares que concurrieron en su comisión y, enseguida, a individualizar la sanción correspondiente, con el fin de que resulte proporcional a la infracción y cumpla con los fines de disuasión y reprimenda que le corresponden, a fin de que el infractor comprenda la necesidad de conocer y respetar la ley.

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

Para **calificar** debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos:

a) Tipo de infracción

b) Bien jurídico tutelado

c) Singularidad o pluralidad de la falta

d) Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción

e) Comisión dolosa o culposa de la falta

f) Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas

g) Condiciones externas y medios de ejecución

Al respecto, en el caso concreto se presentan las siguientes circunstancias:

a) Tipo de infracción

En el particular, la conducta desplegada por el Partido Verde Ecologista de México, a través de su representante propietario ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, fue una **acción**, que consistió en iniciar una denuncia en materia de fiscalización, por la supuesta comisión de irregularidades en materia origen, monto y destino de los recursos empleados por el Partido de la Revolución Democrática, fundamentada sólo en notas periodísticas.

b) Bien jurídico tutelado

En la especie, y conforme a lo establecido en el párrafo 2, del artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se tiene que el bien jurídico tutelado preponderantemente, es el adecuado funcionamiento de los órganos electorales, al margen de los diversos y difusos bienes jurídicos tutelados que puedan ser impactados a través de la presentación de denuncias frívolas como podría ser la disminución o riesgo que se podría generar a los derechos de los justiciables por la demora en la atención de denuncias legítimas, el dictado de diligencias de investigación que causen actos de molestia a los gobernados, o la práctica de diligencias que requieran la intervención de autoridades que las distraigan de sus funciones para la atención de procedimientos estériles.

En ese sentido, la importancia de la infracción imputada al Partido Verde Ecologista de México, es precisamente que perjudica la protección del derecho de acceso a la justicia administrativa, al sobrecargar las actividades de los órganos electorales con una denuncia que razonablemente no desembocará en la instauración de un procedimiento serio y responsable que pueda tener como fin la protección del orden jurídico, toda vez que sustentó su denuncia en notas periodísticas que no alcanzaban a demostrar su veracidad.

En efecto, la garantía de acceso efectivo a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional, es correlativa a la existencia de órganos administrativos que investigan y, de ser el caso, sancionan infracciones electorales, por lo que a esta instancia sólo deben llegar los asuntos en los que realmente se requiera la presencia y actuación de la autoridad para dirimir el conflicto o sancionar una falta.

Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse ante la autoridad administrativa electoral, sino sólo aquellas quejas debidamente formuladas y respaldadas con material probatorio mínimamente suficiente e idóneo respecto de los hechos alegados, a fin de no entorpecer las actividades de la autoridad administrativa.

En este tenor, la presentación de denuncias frívolas —como la que nos ocupa— afecta el estado de derecho y resulta lesiva para los intereses de otros institutos políticos, así como de aquellos que sí acuden con seriedad ante esta instancia, puesto que los casos poco serios requieren el tiempo y energía de quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención del órgano resolutor, de los asuntos de trascendencia para el interés general y la regularidad constitucional de la materia política-electoral.

c) Singularidad o pluralidad de la falta

En el presente caso, la conducta infractora del partido político señalado como responsable es singular, puesto que se configura una sola falta, es decir, la presentación de una denuncia frívola.

d) Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción

En cuanto a las circunstancias objetivas que concurren en el caso, son:

MODO. La irregularidad atribuible al Partido Verde Ecologista de México, consiste, como se ha precisado en líneas precedentes, en la presentación de una denuncia en contra del Partido de la Revolución Democrática, en la que imputó al dirigente nacional de dicho instituto político el haber recibido recursos de procedencia ilícita, lo que a su parecer, actualizaba entre otras cosas, el financiamiento ilegal a favor de dicho partido político. Dicha denuncia fue calificada como frívola por el Consejo General de este Instituto.

TIEMPO. La infracción se cometió el cinco de febrero de dos mil quince, al momento de la presentación del escrito de denuncia frívola, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

LUGAR. La irregularidad atribuible al partido en comento, se cometió en la Ciudad de México, al ser presentado el escrito de denuncia ya referido, ante la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto.

e) Comisión dolosa o culposa de la falta

Del cuidadoso análisis de las constancias que integran el expediente al rubro citado, no se advierte la existencia de alguna que genere convicción en esta autoridad, respecto a que, a sabiendas de la improcedencia de su pretensión, el Partido Verde Ecologista de México, promovió una queja con el fin exclusivo de entorpecer el funcionamiento de los Organismos Electorales.

Lo anterior es así pues, como se ha precisado con antelación, el partido sujeto al presente procedimiento, denunció hechos que, de haberse acreditado, tenían trascendencia jurídica y efectivamente constituían una infracción a la normatividad electoral, específicamente, en materia del financiamiento de los recursos empleados por los partidos políticos en los procesos electorales; de ahí que su acción no era intrínsecamente intrascendente, sin embargo, incurrió en la causal de improcedencia contenida en el artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al ser imprecisa y carecer de material probatorio suficiente y adecuado para, al menos, desplegar la facultad investigadora de la autoridad electoral.

Por otra parte, los hechos que denunció el Partido Verde Ecologista de México, no eran de naturaleza irrelevante, toda vez que se referían a presuntas irregularidades respecto del origen y destino de recursos otorgados a un partido político.

Entonces, no se aprecia que el ánimo del ahora denunciado, hubiese estado revestido de dolo, esto es, a través de la manifestación intelectual (saber) y de la voluntad (querer) de engañar a esta autoridad, a sabiendas de que sus pretensiones no alcanzarían ningún resultado material en el mundo jurídico, con base en premisas notoria y evidentemente irracionales o absurdas.

Por estos motivos, se considera que el Partido Verde Ecologista de México, con su actuar, no tuvo la intención de promover dicha denuncia sustentada en razonamientos ligeros, exponiendo cuestiones inútiles o sin importancia, pues como se ha señalado, presentó hechos que, desde su lógica, eran susceptibles de ser sancionados.

De tal suerte, aun cuando dicha denuncia no se sustentó en elementos indiciarios suficientes para demostrar el supuesto jurídico específico, y la construcción argumentativa del ocurso no fue clara y objetiva, es inconcuso que el grado de reproche que se le puede realizar por tal conducta es menor, por lo que también lo es el grado de frivolidad.

f) Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas

No existe vulneración reiterada o sistemática de la normativa electoral, en razón de que la falta que se atribuye al partido político denunciado, se cometió en una sola ocasión.

g) Condiciones externas y medios de ejecución

La denuncia calificada como frívola se derivó del supuesto financiamiento ilegal a favor del Partido de la Revolución Democrática en la elección de miembros del ayuntamiento de Iguala, Guerrero, en el Proceso Electoral ordinario dos mil doce.

B. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción,** se deberán tomar en cuenta los siguientes elementos:

a) Calificación de la gravedad de la infracción

b) Reincidencia

c) Sanción a imponer

d) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

e) Condiciones socioeconómicas

f) Impacto en las actividades del infractor

Dichos aspectos, en el caso concreto, son los siguientes:

a) Calificación de la gravedad de la infracción

Atendiendo a los elementos objetivos que han quedado descritos, y considerando que la conducta desplegada por el Partido Verde Ecologista de México, actualizó la falta contenida en el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero las pretensiones

del denunciante no eran, por sí mismas, absurdas, ilógicas o irrazonables, puesto que sus planteamientos estaban relacionados con supuestos actos de financiamiento ilegal en favor del Partido de la Revolución Democrática, es inconcuso que la denuncia no era *per se* absurda o notoriamente desamparada por el derecho, sino que incumplió con las cargas procesales que le corresponden para el desarrollo de la facultad investigadora de esta autoridad electoral, concretamente señalar hechos específicos acontecidos en el Proceso Electoral local en curso al momento de formular la denuncia, y relacionarlos con un mínimo de pruebas que hicieran sospechar, razonablemente, que los hechos denunciados acontecieron en la realidad, por lo que el grado de frivolidad se considera menor.

Al respecto, es importante no pasar por alto que el artículo 440, párrafo primero, inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece con claridad las hipótesis en las que será considerada frívola una queja o denuncia, consistentes en que se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser evidente que no se encuentran al amparo del derecho; que se refieran a hechos que se adviertan falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito, y no estén apoyados por un acervo probatorio mínimo para acreditar su veracidad; que se refieran a hechos que no constituyan una falta; o, que únicamente se fundamenten en notas periodísticas -de opinión o noticiosas-, que generalicen una situación y no se acrediten por otro medio.

En esa medida, ciertamente el Partido Verde Ecologista de México, promovió una queja frívola, proceder que debe ser desalentado y reprendido conforme al orden jurídico vigente; sin embargo, esta autoridad aprecia que aquél comportamiento no consistió promover una queja basándose en hechos notoriamente falsos, intrascendentes o carentes de veracidad, ni la intención superficial o ligera de promover un procedimiento administrativo a sabiendas que su pretensión era imposible de alcanzar, de ahí que se considera que en el caso, la conducta es de gravedad leve.

b) Reincidencia

Se considera que en el presente asunto el infractor no es reincidente, pues de la búsqueda minuciosa en los archivos de esta autoridad electoral, no se advierte que haya sido sancionado por la comisión de la misma falta en una ocasión anterior, mediante Resolución que sea definitiva y firme, ello conforme al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**[9]**.**

c) Sanción a imponer

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere facultad al operador jurídico para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se proporcional a la conducta desplegada por el sujeto infractor, en el caso de los partidos políticos, entre las especificadas en las cinco fracciones del artículo 456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En torno a ello, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar tendente a disuadir la comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Así las cosas, toda vez que la conducta que nos ocupa se ha calificado con una frivolidad menor y gravedad leve, de entre el catálogo de sanciones aplicables la que resulta proporcional es la de **amonestación pública.**

Lo anterior es así, dado que las sanciones consistentes en multa y reducción de las ministraciones del financiamiento público resultarían excesivas y desproporcionadas, toda vez que la infracción cometida por el Partido Verde Ecologista de México, como se ha expuesto, no deviene en grave, de tal suerte que no es procedente la imposición de dichas sanciones.

Del mismo modo, resultan inadecuadas las relativas a la interrupción de trasmisiones de propaganda o la perdida de registro como partido político, pues en el primer caso la infracción cometida no se relaciona con la difusión de propaganda política o electoral, y en el segundo la infracción no fue calificada como grave o reiterada.

---

[9] Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 45 y 46.

d) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

Tomando en consideración que la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral, ante la frivolidad de la denuncia presentada por el Partido Verde Ecologista de México, desestimó realizar acciones encaminadas a investigar los hechos denunciados, se advierte que el daño generado a los órganos administrativos de este instituto al atender esta queja es menor, puesto que si bien dicha Unidad se vio sujeta al cumplimiento de sus obligaciones legales para integrar el expediente respectivo, requerir al denunciante la aclaración de su ocurso, formular un Proyecto de Resolución y llevarlo al conocimiento del Consejo General para aprobarlo en definitiva, de lo cual se sigue sí hubo daño a los órganos administrativos de este instituto, al haberse accionado de manera innecesaria la maquinaria administrativa de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto y utilizarse recursos humanos y materiales para su atención, tal perjuicio resulta mínimo, en atención a que al no aclarar el Partido Verde Ecologista de México, sus pretensiones, la autoridad fiscalizadora procedió de inmediato al desechamiento de la queja, sin haber inferido algún acto de molestia a los particulares para investigar los hechos denunciados, formular requerimientos de información a otros órganos de autoridad para averiguar la verdad histórica, ni invertir más recursos materiales, humanos y financieros para la elaboración de una resolución de fondo.

Entonces, sin pasar por alto el hecho que estas conductas, dada su ligereza deben ser inhibidas, para no compeler a los órganos administrativos electorales a ejercer sus funciones en la atención de asuntos intrascendentes o triviales, distrayendo su atención de temas trascendentes para el sistema democrático nacional, se considera menor el daño ocasionado a la administración de justicia administrativa electoral.

e) Condiciones socioeconómicas e impacto en las actividades del infractor.

Toda vez que en el presente caso la sanción a imponer al Partido Verde Ecologista de México, consiste en amonestación pública, resulta innecesario analizar las condiciones socioeconómicas del infractor, puesto que de modo alguno se verían afectadas sus actividades habituales con la medida decretada.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Este Consejo General determina que en el presente asunto el Partido Verde Ecologista de México es acreedor a la imposición de una sanción, consistente en **Amonestación Pública por la presentación de denuncia frívola,** en términos de lo expuesto en el Considerando **TERCERO** de la presente Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. A fin de hacer efectiva la sanción impuesta, **publíquese la presente Resolución** en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. Notifíquese, **por oficio** al Partido Verde Ecologista de México, a través de su representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; y, por estrados, a los demás interesados, todo con fundamento en los artículos 460 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

En su oportunidad **archívese** el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 31 de mayo de dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández.

El Consejero Presidente del Consejo General, **Lorenzo Córdova Vianello**.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, **Edmundo Jacobo Molina**.- Rúbrica.

TERCERA SECCION

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 50/2016 y sus acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2016 Y SUS ACUMULADAS 51/2016, 52/2016, 53/2016 Y 54/2016
PROMOVENTES: PARTIDO POLÍTICO NACIONAL ENCUENTRO SOCIAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MORENA, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MINISTRO PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK
SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
COLABORARON: AGUSTÍN ALONSO CARRILLO SALGADO.
MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE MENDOZA.
LETICIA OSORNIO PÉREZ.
ANA CRISTINA PÉREZ MARÍN.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de agosto de dos mil dieciséis por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad promovidas por: Partido Político Nacional Encuentro Social (50/2016), Partido de la Revolución Democrática (51/2016), Partido Político MORENA (52/2016), Diversos Diputados Integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México (53/2016) y Partido Acción Nacional (54/2016), respectivamente, en contra de diversos artículos contenidos en el Decreto 85 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

I. TRÁMITE

1. **Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas.** Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:

Fecha de presentación y lugar:	Promovente y Acción
Veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	**Encuentro Social, Partido Político Nacional,** por conducto de Hugo Éric Flores Cervantes, quien se ostenta como Presidente del Comité Directivo Nacional del partido político. **Acción de inconstitucionalidad 50/2016.**
Veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	**Partido de la Revolución Democrática,** por conducto de Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, quien se ostentó como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político. **Acción de inconstitucionalidad 51/2016.**
Treinta de junio de dos mil dieciséis. Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	**Partido Político MORENA,** por conducto de Andrés Manuel López Obrador, quien se ostentó como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político. **Acción de inconstitucionalidad 52/2016.**

Treinta de junio de dos mil dieciséis. Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	**Diputados integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de México:** Aquiles Cortes López, Francisco de Paula Agundis Arias, María Pérez López, Rubén Hernández Magaña, Mario Salcedo González, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Miguel Sámano Peralta, Edgar Ignacio Beltrán García, Fernando González Mejía, Rafael Osornio Sánchez, Marisol Díaz Pérez, Lizeth Marlene Sandoval Colindres, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, Irazema González Martínez Olivares, Josefina Aide Flores Delgado, Eduardo Zarzosa Sánchez, Ivette Topete García, Laura Barrera Fortoul, Leticia Mejía García, Inocencio Chávez Reséndiz, Tanya Rellstab Carreto, María de Lourdes Montiel Paredes, Jesús Antonio Becerril Gasca, María Mercedes Colín Guadarrama, Diego Eric Moreno Valle, Francisco Javier Fernández Clamont, Perla Guadalupe Monroy Miranda, Carolina Berenice Guevara Maupome, César Reynaldo Navarro de Alba, Jorge Omar Velázquez Ruíz, Abel Neftalí Domínguez Azuz, Roberto Sánchez Campos, Manuel Anthony Domínguez Vargas, Sue Ellen Bernal Bolnik, José Isidro Moreno Arcega. **Acción de inconstitucionalidad 53/2016.**
Treinta de junio de dos mil dieciséis. Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	**Partido Acción Nacional,** por conducto de Ricardo Anaya Cortés, quien se ostentó como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político. **Acción de inconstitucionalidad 54/2015.**

2. **Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas:** Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México.

3. **Normas generales impugnadas.** En los correspondientes escritos de acción de inconstitucionalidad, se impugnaron las siguientes normas generales:

Acción de inconstitucionalidad	**Normas impugnadas**	**Publicadas en el Periódico Oficial de la entidad de fecha:**
50/2016 Partido Encuentro Social	Artículos: 16 párrafo cuarto; 19 párrafo tercero; 28 fracción IV; 76 fracciones I y II; 77 incisos b) y c); 81, párrafos segundo y tercero 118; 120, fracción II, inciso b) párrafo segundo; 185 fracciones LVIII y LIX; 187, segundo párrafo; 196, fracciones XXXV y XXXVI; 201, fracción V; 223, fracción VII, segundo párrafo; 231 fracción I;	Treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

	260 segundo párrafo; 284, fracción IX, segundo párrafo 289, último párrafo; 284, fracción IX, segundo párrafo; 347, párrafo segundo; 363; 377, fracción I; del Código Electoral del Estado de México.	
51/2016 Partido de la Revolución Democrática	Artículos: 16 párrafo cuarto; 19 párrafo tercero; 28 fracción IV; 76 fracciones I y II; 77 incisos b) y c); 81, párrafos segundo y tercero; 118; 120, fracción II, inciso b) párrafo segundo; 185 fracciones LVIII y LIX; 187, segundo párrafo; 196, fracciones XXXV y XXXVI; 201, fracción V; 223, fracción VII, segundo párrafo; 231 fracción I; 260 segundo párrafo; 284, fracción IX, segundo párrafo; 289, último párrafo; 347, párrafo segundo; 363; 377, fracción I; del Código Electoral del Estado de México.	Treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.
52/2016 Partido MORENA	Artículos: 4; 16, párrafo cuarto; 19, párrafo cuarto (sic); 28, fracción IV; 31; 76. fracción I; 77, incisos b), e) y g); 79; 81 párrafos segundo y tercero; 118 (sic); 185, fracciones LVIII y LIX;	Treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

	187, segundo párrafo; 196, fracciones XXXV y XXXVI; 201, fracción V; 223, fracción VII, segundo párrafo; 231, fracción I; 241, tercer párrafo (sic); 260, párrafo quinto; 284, fracción IX, último párrafo; 347, párrafo segundo; 358, fracción VII, segundo párrafo; 363; 377, fracción I; 423 (sic); 425 (sic) del Código Electoral del Estado de México.	
53/2016 Minoría Legislativa del Congreso del Estado México.	Artículos: 19, primer párrafo; 26, segundo párrafo; 28, fracciones III y IV; 74; 75; 118; 120, fracción II, inciso g), numeral 2; 172 (sic); 241, tercer párrafo; 254; 260, párrafos primero, segundo y quinto, 264, párrafos tercero y cuarto, 284, último párrafo (sic); 289, penúltimo y último párrafos; 332, fracción III; 333, fracción V, inciso a); 334, fracción I; 336, fracción I; 369, segundo párrafo; 377, primer párrafo, fracción I, penúltimo y ultimo (sic) párrafos; 379, penúltimo y último párrafos; 380, fracciones I, II, III, IV y último párrafo; 381, primer párrafo; 429, quinto párrafo, fracción I; 484, tercer párrafo del Código Electoral del Estado de México.	Treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

54/2016 Partido Acción Nacional.	Artículos: 76, fracciones I y II; 77, incisos b) y c); 81, párrafos segundo y tercero; 260, segundo párrafo; 289, último párrafo; 363 del Código Electoral del Estado de México.	Treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

4. **Conceptos de invalidez.** Los promoventes hicieron valer los que consideraron pertinentes y a los cuales se hará alusión al analizar la constitucionalidad de los preceptos que se impugnan.

5. **Artículos constitucionales que los promoventes señalan como violados.** Quedarán precisados en cada apartado del estudio de los conceptos de invalidez.

6. **Admisiones y trámite.** Mediante proveído de treinta de junio de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 50/2016, promovida por el Partido Político Nacional Encuentro Social, y turnar el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek. Asimismo, en autos de la misma fecha, el citado Presidente ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 51/2016, 52/2016 y 53/2016, promovidas por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y MORENA, así como por diversos Diputados Integrantes de la Legislatura del Estado de México, respectivamente, acordando su acumulación a la acción 50/2016. Finalmente en auto de primero de julio del mismo año se acordó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad 54/2016, promovida por el Partido Acción Nacional, acordando también su acumulación a los citados expedientes.

7. Por auto de seis de julio de dos mil dieciséis, el Ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las normas impugnadas, para que rindieran sus informes. También solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Procuradora General de la República sus opiniones.

8. **Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Entidad.** Los Poderes Legislativo (fojas 757 a 808) y Ejecutivo (fojas 688 a 736) del Estado de México, al sustentar la constitucionalidad de los artículos impugnados, señalaron de manera coincidente, en síntesis lo siguiente:

   a) En relación a la impugnación formulada en contra del artículo 4 del Código Electoral del Estado de México, que establece como excepción a la expedición gratuita de los documentos requeridos por las autoridades electorales, la emisión del acta de nacimiento, sostiene que no contraviene el artículo 4o. de la Constitución Federal, que señala que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

   Lo anterior, ya que la expedición de la primera copia del acta de nacimiento debe ser gratuita por corresponder a los derechos de identidad y reconocimiento de la personalidad entre otros, y en ese tenor, con tal expedición se garantiza a las personas el derecho de ser registrado y obtener su acta de nacimiento de manera gratuita.

   Empero en la expedición posterior de un acta de nacimiento, al ser un documento certificado legalmente, por el cual se da constancia del origen físico de una persona a partir del registro de sus datos básicos, tiene un costo que constituye un pago de derechos que tiene como objeto satisfacer el servicio público brindado por el Estado, de manera que le permita a éste continuar en el desempeño de tal actividad y así proporcionar el servicio a la colectividad.

   En ese tenor, considera que el pago por la expedición de una copia del acta de nacimiento, que además no es exclusivo en el periodo de elecciones, no resulta contrario a las disposiciones constitucionales, por constituir una contribución establecida en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir los servicios que presta el Estado.

   b) Sobre a la impugnación del artículo 16, cuarto párrafo, y 19, tercer párrafo, del Código Electoral del Estado de México, relativos a la reincorporación de los servidores públicos que se separaron de su cargo para contender en un proceso electoral, señala que tales dispositivos no son contrarios a lo dispuesto en los artículos 14, segundo y cuarto párrafos; 16, primer párrafo; 41, base I, segundo párrafo; 115, primer párrafo; 116, primer párrafo, fracciones II y IV, inciso b) y 133 de la

Constitución Federal, ello aun cuando se solicite el goce de una licencia temporal para desempeñar el cargo conferido a efecto de contender en un proceso electoral, en principio, ya que para que prevalezca la equidad en cualquier contienda electoral, es indispensable que durante el periodo de campaña los candidatos no ostenten cargos en la administración pública que les permitan un posicionamiento mayor o ejercer algún tipo de presión al electorado y, por ende, toda persona que preste sus servicios al Estado en cualquiera de los tres niveles de gobierno previo a su postulación como candidato deberá de separarse del mismo.

Al respecto, afirma que la licencia temporal satisface el requisito en mención pues implica una desvinculación de las funciones y del cargo desempeñado y, por tanto, de ninguna manera puede influenciar la decisión del electorado ni otorgar potestad al ciudadano triunfador.

Respecto de la reincorporación señala que si la Constitución Federal no establece una restricción para que las personas que se postulen a cargos de elección popular puedan reincorporarse al cargo que desempeñaban, es claro que deja abierta la posibilidad de que la separación sea temporal, luego, a la luz del principio pro homine debe considerarse que una vez finalizada la contienda electoral pueden volver al cargo que ostentaban. Asumir una postura en contra implicaría una transgresión al artículo 1o. constitucional conforme al cual la restricción a un derecho establecido en la Carta Magna debe estar expresamente contemplado en ésta, lo cual no acontece en el caso particular.

Además sostiene que la separación de un cargo público para contender en un proceso electoral y la reincorporación al mismo una vez que concluya, no implica que se desempeñen dos cargos públicos de manera simultánea, en tanto que de conformidad con lo previsto por los artículos 144 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los servidores públicos por nombramiento o designación al entrar en funciones deberán rendir protesta formal respecto del desempeño del empleo, cargo o comisión y nunca podrán reunirse en un solo individuo dos empleos o cargos públicos del Estado.

Asimismo, señala que de estimarse lo contrario se violentaría el principio de igualdad reconocido en los numerales 23 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales todos los ciudadanos deben gozar de los mismos derechos y oportunidades; además de que en el marco de una democracia constitucional, la igualdad implica la posibilidad de que cualquier persona alcance el poder político, y para tal efecto el poder votar y ser votado para ocupar cualquier cargo de elección popular; por lo tanto, los funcionarios públicos que se encuentren en el desempeño de su cargo al igual que cualquier ciudadano mexicano deben tener el derecho de acceso a cualquier cargo de elección popular, para lo cual, en cumplimiento a las disposiciones legales podrá separarse de su cargo para poder ser contendiente en el periodo de elecciones y en su caso ocupar el cargo respectivo con la posibilidad de reincorporación.

c) Por lo que respecta a la impugnación de los artículos 28, fracción IV y 377, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, relativo a la asignación de regidores según el principio de representación proporcional condicionada a la postulación de planillas en 50 municipios de la entidad federativa, sostiene que tales preceptos no son una limitante al derecho de los ciudadanos a ser votados para cualquier cargo de elección popular ni a la autonomía municipal, ni tampoco contraviene lo previsto en los artículos 1o.; 14, segundo y cuarto párrafos; 16 primer párrafo; 115 base I y VIII primera parte; 116, fracción IV, incisos a) y b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al efecto señala que los preceptos impugnados son constitucionales, por constituir bases generales del sistema de representación proporcional para la integración del órgano de gobierno municipal; además, ya que busca una mayor participación en la vida política del país y que los partidos políticos al formar planillas en los Municipios del Estado de México puedan otorgar a los ciudadanos una oportunidad de acceso para elegir cargos políticos en el gobierno municipal. Asimismo, que los partidos tengan participación en todos los municipios de la entidad mexiquense, aunado a que al ponerles un mínimo de municipios en los cuales deben de autorizar la formación de planillas, se pretende que éstos no pierdan sus registros como se ha suscitado.

Resalta que tales disposiciones contemplan la participación en condiciones de igualdad de hombres y mujeres al considerar que la representación municipal se integre por un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el restante con candidatos del género opuesto, en cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y paridad de género.

d) En lo relativo a la impugnación del artículo 31 del Código Electoral del Estado de México, que prevé el proceso electoral extraordinario en caso de empate, sostiene que contrario a lo expuesto por el partido impugnante resulta innecesario que el dispositivo en comento establezca un plazo para convocar a elecciones extraordinarias, en tanto que previamente deberán agotarse los medios de impugnación que se tengan al alcance, cuyo tiempo de substanciación es incierto.

Que en caso de que se requiera de la práctica de elecciones extraordinarias, la legislatura local al señalar una nueva fecha para su realización podrá emplear medios electrónicos o de comunicación como periódicos, radio o televisión, por lo que no resulta un impedimento el dar a conocer a la población una nueva fecha para las votaciones.

Además, que debe desestimarse lo manifestado por la parte impugnante en el sentido de que existen omisión legislativa en virtud de que no se satisfacen los requisitos indispensables para considerar actualizada la figura jurídica en comento.

e) Respecto de la impugnación de los artículo 76, fracciones I y II; 77, incisos b), c), e) y g); 79; 81, párrafos segundo y tercero; 260, segundo párrafo; 289, último párrafo y 363 del Código Electoral del Estado de México, que regulan las candidaturas comunes de los partidos políticos, afirma que la facultad del Congreso del Estado de Estado de México para regular la materia de candidaturas comunes encuentra sustento en el artículo 116, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Federal, en el diverso artículo 85, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos, y del artículo 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de los que se advierte la facultad de las legislaturas para que por medio de la configuración legislativa se garantice la eficacia del sistema electoral.

Al respecto destaca que esta facultad es diversa a la prevista en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, que se reserva a la federación la expedición de las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, pues la prerrogativa de las entidades federativas quedó plasmada por la federación en la Ley General de Partidos Políticos, específicamente en el citado artículo 85.

En ese tenor, no existe invasión alguna a las facultades federales, sino el cumplimiento de la obligación del Estado para garantizar el funcionamiento del sistema en materia electoral, bajo el contexto y delimitación de las atribuciones locales.

f) Respecto de la impugnación de los artículo 185, fracciones LVIII y LIX; 187, segundo párrafo; 196, fracciones XXXV y XXXVI; 201, fracción V, y 223, fracción VII, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México, relativos a las atribuciones del Consejo General, a su consideración no invaden alguna facultad conferida al Instituto Nacional Electoral, sino por el contrario, la Constitución y las leyes generales en la materia establecen explícitamente los campos del Instituto Nacional Electoral y, por su parte, el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los organismos públicos locales ejercen las facultades que al respecto les confiere, las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que establezcan las leyes locales.

Además, los artículos impugnados no contravienen lo principios rectores del proceso electoral de certeza, imparcialidad e independencia, ya que de conformidad con el artículo 41, base V, párrafos primero, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 42, numerales 2 y 3, así como del diverso 63, numeral 1, incisos a) y b), ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del numeral 26, primer párrafo, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, es necesario el establecimiento de acuerdos y la coordinación de los tres niveles de gobierno para la capacitación de las personas que formaran parte de las casillas en los días elección y para que se puedan llevar con éxito las campañas electorales respectivas.

g) Sobre la impugnación del artículo 231, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, que regula la fe pública electoral, señala que se encuentra apegado a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual los organismos públicos electorales deben contar con servidores públicos investidos de fe pública; que la función de la Oficialía Electoral es dotar a los servidores de fe pública para constatar actos y hechos en materia electoral dentro y fuera de los procesos de elección que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, asimismo, que por medio de su certificación se evite la pérdida o alteración de los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la Legislación Electoral, en general, para garantizar la certeza de determinados actos o hechos de naturaleza electoral.

En ese tenor, señala que el artículo 231 impugnado tiene como finalidad dar legalidad y equidad a la elección, en cumplimiento a los principios que rigen el proceso electoral, lo cual se traduce en transparencia y fortalecimiento a las actividades realizadas por los funcionarios electorales, con lo que se da respuesta a un clamor ciudadano y legalidad al proceso electoral.

h) Por lo que respecta a la impugnación del artículo 347, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, relativo a la apertura del lugar de resguardo de los paquetes electorales, sostiene que no le causa agravio al partido accionante pues de ninguna manera viola el principio de equidad, sino que por el contrario tutela el resguardo de la documentación electoral al colocar por lo menos una cámara de circuito cerrado que permita observar su interior de las bodegas electorales.

Respecto a la apertura de la paquetería electoral sólo en presencia de la mayoría de representantes de partidos políticos, afirma que no constituye una medida restrictiva, pues la instalación de las bodegas tiene como objeto la salvaguarda de las boletas electorales antes y después de la jornada electoral para brindar de mayor seguridad y certeza jurídica a los partido políticos, por tanto, a efecto de respetar tales principios así como los diversos de legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo correcto es que estén presentes la mayoría de éstos en el momento en que se vuelva a abrir a efecto de evitar especulaciones en torno al fraude electoral y a la desaparición de boletas; consecuentemente, el dispositivo impugnado no le causa agravio al partido accionante.

i) En torno a la impugnación del artículo 284, fracción IX, último párrafo, del Código Electoral del Estado de México, relativo al derecho a votar de los representantes de los candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones en las casillas electorales en las que fueron nombrados, señala que a efecto de poder ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deben estar registrados en la Lista Nominal de Electores, lo cual constituye un requisito indispensable no solo para los ciudadanos, sino también para los representantes de los partidos políticos que residan en el lugar en el que van a votar, esto es, que su credencial de elector tenga el domicilio de la entidad actual en la cual residen, porque de no ser así a ningún ciudadano se le permitirá votar en otra entidad.

j) Sobre la impugnación del artículo 260 del Código Electoral del Estado de México, que faculta al Instituto Electoral local para ordenar a los partidos políticos, coaliciones o candidatos comunes modificar o sustituir los contenidos de los mensajes que transmitan por radio y televisión, cuando se afecten los principios rectores de los procesos electorales locales, sostiene que no adolece de inconstitucionalidad en tanto que la intención de la norma es elevar el nivel en el debate político evitando propaganda que, por su naturaleza, no contribuye al sano desarrollo de las contiendas electorales por servir como una técnica de presión social destinada a establecer en los individuos determinadas formas de pensar o de actuar, así como obtener solidaridades con ciertos grupos y lograr adhesiones fuertes.

k) En la impugnación del artículo 358, fracción VII, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, que prevé el recuento de votos por el Consejo Distrital, sostiene que tal dispositivo no regula de manera deficiente el nuevo escrutinio y cómputo de los votos, en tanto que de manera completa prevé todas las hipótesis para que se lleve a cabo de manera adecuada y completa, y fija el proceder de los Consejos Distritales para tal efecto.

l) Por lo que respecta a la impugnación de los artículos 118 y 120, fracción II, incisos b) y g), párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, que establece los requisitos para ser candidatos independientes y, particularmente lo relativo a la separación del cargo partidista con tres años de anticipación, así como no haber sido postulado en el proceso electoral inmediato anterior, sostiene que los candidatos independientes son ciudadanos que sin ser postulado por un partido político o coalición, obtuvieron su registro por parte del órgano electoral correspondiente.

Que uno de los rasgos más importantes de los candidatos independientes es que puede contender en una elección sin el respaldo de un partido político; en ese tenor, a efecto de salvaguardar la independencia de las candidaturas independientes del sistema de partidos, se impone a los candidatos que con anterioridad militaron en algún partido político, acreditar que transcurrieron por lo menos tres de la última participación que tuvieron dentro del partido político.

m) En lo tocante a la impugnación de los artículos 19, primer párrafo; 26, segundo párrafo; 28, fracciones III y IV; 74; 75; 118; 120, fracción II, inciso g), numeral 2; 241, tercer párrafo; 254; 260, párrafos primero, segundo y quinto; 264, párrafos tercero y cuarto; 289, párrafos penúltimo y último; 332, fracción III; 333, fracción V, inciso a); 334, fracción I; 336, fracción I; 369, segundo

párrafo; 377, párrafos primero y penúltimo, y fracción I; 379, párrafos penúltimo y último; 380, fracciones I, II, III, IV y último párrafo; 381, primer párrafo; 429, quinto párrafo, fracción I y 484, tercer párrafo, todos del Código Electoral del Estado de México, que regulan las coaliciones y candidaturas comunes, señala que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40, 41, 115, 116 y 124 de la Constitución Federal, su configuración queda a cargo del legislador local conforme a sus propias situaciones y estableciendo sus propios principios para el desarrollo político electoral.

n) Sobre la impugnación del artículo 358, fracción II, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, que impone al Consejo Distrital realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando existan objeciones fundadas, señala que de ninguna manera se viola en su perjuicio los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad, en tanto que el conteo de votos no constituye un acto complejo que comprenda una pluralidad de determinaciones cohesionadas sino que se conforma con actos distintos vinculados a dar legalidad de los resultados. Luego, es una medida instrumental que facilita el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros con que cuentan los Consejos Distritales, hace más eficiente la labor del nuevo escrutinio y cómputo y con ello se disminuye considerablemente el margen de error en que se pueda incurrir. Al efecto, una de las formas para garantizar la autenticidad y la certeza en la libre expresión del sufragio, contrario a lo señalado por el accionista al realizar el consejo distrital nuevamente el escrutinio y cómputo de una casilla, cuando existan objeciones fundadas, tiene como fin no afectar el derecho al sufragio en su dimensión individual y social en favor de determinado partido, ello en estricto cumplimiento al principio de certeza conforme al cual se debe ejercer la voluntad del electorado y a los principios de autenticidad, legalidad y certeza de los resultados de la elección

9. **Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.** La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opinó, en síntesis, lo siguiente:

a. Sobre la reincorporación de servidores públicos a su cargo luego de contender en un proceso electoral. No emite opinión debido a que este tema ya que fue resuelto por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 56/2014 y su acumulada 60/2014, en la que por unanimidad de diez votos se determinó que no existe restricción constitucional alguna para que los ciudadanos que se separaron de un cargo público para contender en los procesos electorales locales puedan reincorporarse al mismo una vez concluidos los cómputos de la elección en la que participaron.

b. Sobre la asignación de regidores por el principio de representación proporcional condicionada a postular planillas en 50 municipios. La Sala considera que tampoco es materia de opinión, en virtud de que también esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió pronunciamiento sobre el tema en la acción de inconstitucionalidad 57/2012, en la que por unanimidad de once votos se declaró la invalidez de una norma que supeditaba el derecho a participar en el proceso de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, a los partidos políticos que, entre otros requisitos, hayan registrado planillas en por lo menos treinta municipios, ello por ser contrario a lo dispuesto por los artículo 35, fracción II y 115 de la Constitución Federal.

c. Sobre los requisitos para ser candidatos independientes (Separación de cargo partidista con tres años de anticipación y no haber sido postulado en el proceso electoral inmediato anterior). Sobre el particular, considera de igual forma que no es materia de opinión, ya que este Alto Tribunal ha resuelto el tema en la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y acumuladas.

d. Sobre las candidaturas comunes. Invasión del ámbito de competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones. Al respecto, la Sala considera que las disposiciones legales impugnadas que se relacionan con la temática señalada, efectivamente son inconstitucionales en tanto que regulan aspectos propios de coaliciones, lo cual es facultad del Congreso de la Unión. Opinión que a su consideración coincide con lo resuelto por este Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada 88/2014. Asimismo, hace notar que esta Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre el tema de candidaturas comunes al resolver las acciones de inconstitucionalidad 69/2015, 71/2015 y 73/2015, acumuladas.

e. Sobre la invasión de competencias del Instituto Nacional Electoral. La Sala considera que el tema no es materia de opinión dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de diez votos ha resuelto el tema en la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas, en que determinó que el artículo 41, fracción V, apartado D, de la Constitución Federal reserva al Instituto Nacional Electoral la reglamentación de la totalidad del servicio profesional electoral nacional.

f. Sobre la regulación deficiente de la fe pública electoral. Considera que no se vulnera lo preceptuado por el artículo 41, base V, apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho precepto no prohíbe a las legislaturas de los Estados regular las atribuciones de la oficialía electoral a nivel estatal con la finalidad de que los funcionarios correspondientes den fe de la realización de actos y hechos en materia electoral, por lo que de acuerdo a una interpretación conforme de la norma cuestionada se debe entender que la Constitución permite a las legislaturas estatales regular las atribuciones de la oficialía electoral de las entidades federativas. Señala asimismo que respecto a la frase contenida en la disposición impugnada: "*que pueda influir o afectar la equidad en las contiendas electorales*", no condiciona dicha atribución a que los actos únicamente estén relacionados con las contiendas electorales, sino que debe entenderse de manera genérica, es decir, para dar fe de actos o hechos en materia electoral, que puedan influir o afectar la equidad en las contiendas electorales.

g. Sobre la apertura del lugar de resguardo de los paquetes electorales. Señala que el dispositivo cuestionado no vulnera los principios constitucionales previstos en los artículos 41, fracciones II y V, así como 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establecen que todos los contendientes en un proceso electoral tienen el derecho de participar en el mismo de manera equitativa para llevar a cabo sus actividades, y para ello rigen los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad que tienen que respetar las autoridades en ejercicio de su función electoral.

h. Sobre el Derecho al voto de los representantes partidistas. Afirma que no puede considerarse inconstitucional porque el derecho al ejercicio del voto de los representantes de los candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones en las casillas electorales está plenamente garantizado en el artículo 317 del Código en cita y, si bien el accionante refiere que existe una antinomia entre el artículo 284 y 317 de la ley en comento, más que contradecirse se complementan, pues mientras el segundo contiene el derecho general para votar, el primero delimita dicho derecho respecto de las personas que pertenezcan a otra demarcación territorial, lo que debe interpretarse en el sentido de que se actualice el caso que el representante no pueda votar por pertenecer a otra demarcación territorial, que trae como consecuencia que no esté legitimado para votar en esa elección, es ahí donde encuentra su justificación el artículo impugnado. Señala también que tales preceptos van acorde con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 279 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el cual se confirma que los representantes partidarios y de candaditos independientes podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, con lo que está garantizado su derecho de voto sin que se vea restringido por la norma impugnada, pues atiende a un diverso supuesto que tendrá que ser objeto de interpretación en el momento que se actualice el caso específico.

i. Sobre la excepción del principio de gratuidad para la expedición de actas de nacimiento requeridas por las autoridades electorales. En la impugnación del artículo 4 del Código Electoral del Estado de México, señala que los planteamientos formulados por MORENA no son sujetos de pronunciamiento por rebasar el ámbito de competencia especializada en la materia electoral, al afirmar que se violó el derecho a identidad de las personas y de gratuidad para proporcionar copia de actas de nacimiento. Por tanto no es materia de opinión de ese órgano jurisdiccional especializado debido a que se trata de temas que no son exclusivos del Derecho Electoral, sino que pertenecen a otras ramas del Derecho como podrían ser la Civil o Tributaria.

j. Sobre la omisión de establecer la duración del nuevo proceso electoral y fecha de elección extraordinaria en caso de empate. En lo relativo al artículo 31 del Código Electoral del Estado de México estima que el precepto legal impugnado es constitucional, pues si bien no establece un plazo concreto en días para que la Legislatura del Estado de México emita la convocatoria para llevar a cabo la elección extraordinaria en caso de empate de los partidos con mayor votación, sí se señala el momento específico en que la Legislatura debe convocar a elecciones extraordinarias, este es cuando hayan sido resueltos los medios de impugnación correspondientes y la fecha de la elección será fijada en la propia convocatoria, de manera que no deja al arbitrio de la autoridad legislativa la convocatoria, con lo cual se garantiza la seguridad jurídica al otorgar certeza a los contendientes.

k. Sobre la facultad del Congreso General del Instituto Electoral local para ordenar a los partidos políticos, coaliciones o candidatos comunes modificar o sustituir los contenidos de los mensajes que transmitan por radio y televisión, cuando se afecten los principios en la materia. Considera que el precepto impugnado es constitucional. Manifiesta que no se vulnera el artículo 41, fracción III, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto en razón de que en dicho precepto se regula lo relativo a la asignación proporcional de tiempos en radio y televisión y el precepto del Código Electoral que se tilda de inconstitucional se refiere al contenido de los mensajes. Por tanto al exceder lo dispuesto por la Constitución se enmarca dentro de la libertad configurativa del Estado y, por tanto, se encuentra facultado para regular esta situación.

l. Sobre las condiciones adicionales para la realización del recuento total de votos en la sede administrativa electoral. Considera que el análisis debe hacerse en relación a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, incisos b) y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no conforme a los preceptos que señalan los Partidos que impugnan las normas; asimismo, señala que la porción normativa impugnada es constitucional porque la regulación de lo relativo a la realización de los recuentos totales o parciales de votación en el ámbito estatal, queda bajo el amparo de la libre configuración legislativa del Congreso local; aunado a que la normatividad impugnada no afecta los principios de certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral al amparar esa libertad configurativa la posibilidad de establecer las reglas que se estimen necesarias para realizar dichos recuentos.

10. **Opinión de la Procuradora General de la República.** En estas acciones de inconstitucionalidad esta funcionaria no emitió opinión alguna.

11. **Cierre de instrucción.** Una vez cerrada la instrucción en este asunto se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos d) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[1], toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos del Decreto 85 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. OPORTUNIDAD

13. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal[2], dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados, considerando para el cómputo todos los días como hábiles cuando se trate de materia electoral.

14. El Decreto 85 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis[3].

---

[1] "Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
[…]. II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;
[…]".
"Artículo 10.- La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
[…]".

[2] "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles".

[3] Páginas 700 a 750 del expediente principal.

15. Tomando en cuenta la fecha precisada -treinta y uno de mayo-, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el primero de junio de dos mil dieciséis, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales concluyó el treinta del mismo mes y año.

16. En el caso, los escritos de los Partidos Políticos Encuentro Social y de la Revolución Democrática, correspondientes a las acciones de inconstitucionalidad 50/2016 y 51/2016, fueron presentadas el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación[4], por lo que resulta oportuna su presentación.

17. Por su parte, las escritos del Partido Político MORENA, de los Diversos Diputados Integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México y del Partido Acción Nacional, que corresponden a las acciones de inconstitucionalidad 52/2016, 53/2016 y 54/2016, también se presentaron de manera oportuna dado que fueron recibidos el treinta de junio de este año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal[5].

18. De este modo, las demandas de acción se presentaron dentro del plazo respectivo y, por ende, las impugnaciones resultan oportunas.

IV. LEGITIMACIÓN

19. En primer lugar, por razón de método, se analizará la legitimación de los partidos políticos y con posterioridad la de la minoría legislativa promovente.

20. Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria[6], disponen que los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

a) El partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso).

c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

d) Las normas deben ser de naturaleza electoral.

21. Ahora procederemos al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los promoventes de las acciones acreditan su legitimación.

22. **Partido Encuentro Social.** El Partido Encuentro Social es un Partido Político Nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral; el Presidente de su Comité Directivo Nacional es Hugo Éric Flores Cervantes, según consta en las certificaciones expedidas por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral[7].

23. El artículo 31, fracción III de los Estatutos del citado instituto político[8] establece que el Presidente del Comité Directivo Nacional y el Secretario General, cuentan con facultades para representar legalmente al partido, las cuales, de acuerdo con el texto del propio precepto, este Alto Tribunal considera pueden ejercer de manera conjunta o separada.

24. De lo anterior se desprende que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Encuentro Social fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes. Por tanto, si la demanda

---

[4] Esto se constata de los sellos estampados al reverso de las fojas 66 y 136 del Tomo I del expediente principal.

[5] Esto se constata de los sellos que obran al reverso de las hojas 272, 336 y 438 del Tomo I del expediente principal.

[6] El primer artículo constitucional ya fue transcrito en el capítulo de la competencia en este documento.
"Artículo 62. […].
[…].
En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento".

[7] Fojas 1033 y 1034 del Tomo I del expediente principal.

[8] Los estatutos obran a fojas 610 a 640 del expediente.
Artículo 31. Las atribuciones y deberes del Comité Directivo Nacional son:
…
III. Ejercer a través de su Presidente y su Secretario General, o de las personas expresamente facultadas y que cuenten con capacidad legal, la representación jurídica de Encuentro Social ante el Instituto Nacional Electoral, y otras instancias en las que resulte necesaria dicha representación, teniendo las facultades generales que regulan el mandato, en términos de lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Civil Federal vigente y los concordantes y correlativos de las Leyes Sustantivas Civiles en todo el País. Derivado de lo anterior, el Presidente y el Secretario General gozarán de todas las facultades generales y aún de las que requieran cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, así como para suscribir títulos de crédito;

presentada en nombre del partido fue suscrita por Hugo Éric Flores Cervantes, con el carácter de Presidente del Comité Directivo Nacional, quien cuenta con facultades para representar legalmente al partido político en términos de los estatutos que lo rigen, de acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente, es de concluirse tiene legitimación para ello.

25. **Partido de la Revolución Democrática.** El Partido de la Revolución Democrática es un Partido Político Nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral; el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional al momento de la presentación de la acción de inconstitucionalidad era Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, según consta en las certificaciones expedidas por el Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral[9].

26. Los artículos 101, inciso e) y 104, inciso a) señalan que el Presidente Nacional es, a su vez, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. El artículo 104, inciso e)[10], de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática[11] establece que la Presidencia Nacional del Partido cuenta con facultades para representar legalmente al partido.

27. De lo anterior se desprende que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes. Por tanto, si la demanda presentada en nombre del partido fue suscrita por Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, en su momento Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien cuenta con facultades para representar al partido político en términos de los estatutos que lo rigen, éste tenía con legitimación para ello.

28. **Partido MORENA.** El Partido MORENA es un Partido Político Nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral; el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional es Andrés Manuel López Obrador, según consta en las certificaciones expedidas por el Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral[12].

29. El artículo 38o., numeral a., de los Estatutos del Partido MORENA[13] establece que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional será el representante legal del partido.

30. De lo que se desprende que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido MORENA fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes; la demanda presentada en su nombre fue suscrita por Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional quien cuenta con facultades para representar al partido político en términos de los estatutos que lo rigen.

31. **Partido Acción Nacional**. Es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral; el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional es Ricardo Anaya Cortés, según consta en las certificaciones expedidas por el Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.

32. El artículo 53, inciso a),[14] de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional establece que el Presidente del mencionado Comité cuenta con las facultades para representar legalmente al partido.

---

[9] Foja 137 del expediente.

[10] Artículo 101. El Comité Ejecutivo Nacional se integrará por:
a)Un titular de la Presidencia Nacional;
Artículo 104. El titular de la Presidencia Nacional tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a)Presidir el Comité Ejecutivo Nacional y conducir los trabajos de éste;
…
e) Representar legalmente al Partido y designar apoderados de tal representación.

[11] Los estatutos obran a fojas 522 A 582 del expediente.

[12] Foja 273 del expediente principal.

[13] Los Estatutos obran a fojas 583 a 609 del expediente principal.
"Artículo 38º. (…)
a. Presidente/a, deberá conducir políticamente al partido y será su representante legal en el país, responsabilidad que podrá delegar en la Secretaría General en sus ausencias; coordinará la elaboración de la convocatoria a los Congresos Distritales, Estatales y Nacional;".

[14] "Artículo 53
1. Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional:
a) Ejercer por medio de su Presidente o de la persona o personas que estime conveniente designar al efecto, la representación legal de Acción Nacional, en los términos de las disposiciones que regulan el mandato tanto en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, el Presidente gozará de todas las facultades generales y aun las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito. Las disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, así como los relativos de la legislación electoral vigente;"

33. De lo anterior se desprende que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes; la demanda presentada en su nombre fue suscrita por Ricardo Anaya Cortés, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional quien cuenta con facultades para representar al partido político en términos de los estatutos que lo rigen.

34. Corresponde ahora analizar si las normas impugnadas son de naturaleza electoral o no, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos sólo pueden promover acción de inconstitucionalidad cuando lo que pretendan impugnar sean normas de naturaleza electoral, pues en caso de no ser así, éstos carecen de legitimación para combatir leyes a través de este medio de control constitucional.

35. En la especie, los partidos políticos promoventes combaten diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, norma general evidentemente de naturaleza electoral. Por lo tanto, este Tribunal Pleno considera que los partidos políticos de la Revolución Democrática, Morena y Acción Nacional sí tienen legitimación para impugnar mediante esta vía las normas señaladas, por ser de naturaleza electoral, además, de tratarse de partidos políticos nacionales con registros acreditados ante la autoridad electoral correspondiente, y como ya fue señalado, encontrarse suscritas por las personas que cuentan con facultades para representar legalmente a dichos institutos políticos en términos de los estatutos que los rigen.

36. Procede ahora analizar la legitimación de la minoría legislativa del Congreso del Estado de México.

37. El artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que este medio de control podrá iniciarse por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de leyes expedidas por el propio órgano. De ese numeral fundamental se advierte que para tener por acreditada la legitimación de una minoría legislativa para la promoción de una acción de inconstitucionalidad deben satisfacerse los siguientes presupuestos: 1) que los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal; 2) que dichos accionantes representen cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de ese órgano, y 3) que la acción se plantee respecto de leyes expedidas por el propio órgano legislativo estatal.

38. Por su parte, el artículo 62[15] de la Ley Reglamentaria de la materia dispone que en los casos previstos, entre otros, en el inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos. Establecido lo anterior, se procede a analizar si en el caso concreto se cumplen los presupuestos antes señalados.

39. En relación con el primero de los puntos señalados, suscriben el escrito de acción de inconstitucionalidad: Aquiles Cortés López, Francisco de Paula Agundis Arias, María Pérez López, Rubén Hernández Magaña, Mario Salcedo González, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Miguel Sámano Peralta, Edgar Ignacio Beltrán García, Fernando González Mejía, Rafael Osornio Sánchez, Marisol Díaz Pérez, Lizeth Marlene Sandoval Colindres, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, Irazema González Martínez Olivares, Josefina Aide Flores Delgado, Eduardo Zarzosa Sánchez, Ivette Topete García, Laura Barrera Fortoul, Leticia Mejía García, Inocencio Chávez Reséndiz, Tanya Rellstab Carreto, María de Lourdes Montiel Paredes, Jesús Antonio Becerril Gasca, María Mercedes Colín Guadarrama, Diego Eric Moreno Valle, Francisco Javier Fernández Clamont, Perla Guadalupe Monroy Miranda, Carolina Berenice Guevara Maupome, César Reynaldo Navarro de Alba, Jorge Omar Velázquez Ruíz, Abel Neftalí Domínguez Azuz, Roberto Sánchez Campos, Manuel Anthony Domínguez Vargas, Sue Ellen Bernal Bolnik y José Isidro Moreno Arcega, quienes acreditaron ser diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de México para el periodo dos mil quince a dos mil dieciocho, con las documentales públicas consistentes en copias certificadas de las correspondientes constancias de mayoría y de asignación emitidas por el Instituto Electoral del Estado de México, de diez, once, doce y catorce de junio de dos mil quince[16].

---

[15] "Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos."

[16] Fojas 338 a 372.

40. Por cuanto al segundo presupuesto, del primer párrafo del artículo 39[17] de la Constitución Política del Estado de México se desprende que el Congreso local se integra por un total de setenta y cinco diputados: cuarenta y cinco según el principio de mayoría relativa y treinta según el principio de representación proporcional; de manera que si treinta y cinco de ellos promovieron la presente acción de inconstitucionalidad, ello equivale a contar con un cuarenta y seis punto seis por ciento (46.6%) de la totalidad de sus integrantes, porcentaje requerido para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

41. Respecto del tercer presupuesto debe precisarse que éste también se satisface si se toma en cuenta que la acción de inconstitucionalidad 53/2016 se plantea en contra del Decreto número 85 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el cual fue expedido por el órgano legislativo del que son integrantes.

42. En consecuencia, en el caso se satisfacen los requisitos previamente señalados y, por tanto, los Diputados promoventes cuentan con la legitimación necesaria para accionar este medio de control constitucional.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

43. En estas acciones de inconstitucionalidad no se hicieron valer causas de improcedencia, no obstante, este Tribunal Pleno advierte de oficio que en el caso se actualizan los siguientes supuestos:

44. Del análisis integral del escrito inicial presentado por el partido **MORENA (acción de inconstitucionalidad 52/2016)** se advierte que señala combatir los artículos **118, 241 tercer párrafo, 423 y 425** del Código Electoral del Estado de México; sin embargo, no formula concepto de invalidez alguno respecto de ellos. Por consiguiente, no será materia de estudio su impugnación al no formularse argumentos para sostener la invalidez de los mismos. Lo anterior en virtud de que la fracción V del artículo 61[18] de la Ley Reglamentaria de la materia exige que en la demanda se señalen los conceptos de invalidez y ante la ausencia de los mismos y de cualquier causa de pedir respecto de un precepto reclamado en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede, oficiosamente, buscar elementos que pudieran generar una condición de inconstitucionalidad; esto es, no puede llevar a cabo una proposición de argumentos como si los hubieran elaborado los promoventes, aun y cuando el artículo 71[19] de la misma ley obligue a este Tribunal Pleno a suplir la deficiencia en la demanda al momento de dictar sentencia.

45. Cobra aplicación al caso concreto la tesis P./J. 4/2013 de rubro: "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LÍMITES DE LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ[20]."

46. En consecuencia, **se sobresee la acción de inconstitucionalidad 52/2016 en relación con los artículos 118, 241 tercer párrafo, 423 y 425 del Código Electoral del Estado de México**.

47. Por otra parte, en la **acción de inconstitucionalidad 53/2016** iniciada por una minoría Legislativa del Congreso del Estado de México, también se advierte que señalaron como impugnadas, entre otras disposiciones del Código Electoral del Estado de México, **los numerales 172, 284, último párrafo y 377 último párrafo**, sin formular, de igual manera, ningún concepto de invalidez respecto de ellos.

---

[17] Artículo 39.- La Legislatura del Estado se integrará con 45 diputados electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación proporcional.

[18] **ARTICULO 61.** La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener:…

V. Los conceptos de invalidez.

[19] ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

[20] **Texto:** "Cuando en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral se señale de manera imprecisa como norma impugnada un decreto en su totalidad mediante el cual se hayan reformado diversos preceptos o, incluso, se haya expedido un nuevo ordenamiento legal en su integridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar y tener como preceptos impugnados los que correspondan a los argumentos formulados en los conceptos de invalidez, siempre que no advierta la posibilidad de suplirlos. Lo anterior es así, en virtud de que la suplencia de los conceptos de invalidez prevista en el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es tan amplia, como para que al no existir argumento alguno contra un precepto impugnado puedan crearse en su integridad los conceptos de invalidez. Así entonces, cuando el promovente no hubiese elaborado conceptos de invalidez contra una norma general que haya señalado como impugnada y este Alto Tribunal no advierta la posibilidad de suplirlos, debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 en relación con los diversos 20, fracción II y 65 de la Ley citada."

48. En consecuencia, bajo los mismos razonamientos previamente expresados, **en la acción de inconstitucionalidad 53/2016 se sobresee ante la ausencia de conceptos de invalidez, respecto de los artículos 172, 284, último párrafo y 377 último párrafo del Código Electoral del Estado de México**.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

49. Del análisis de los conceptos de invalidez formulados por los partidos políticos promoventes y conforme a las conclusiones arribadas en los apartados precedentes, se advierten los siguientes temas sobre los que este Pleno se pronunciará:

Temas	Normas impugnadas	Acción y partido promovente
Tema 1. Separación del cargo público como requisito de elegibilidad o impedimento para ser postulado a un cargo de elección popular; reincorporación a la conclusión del proceso electoral.	Artículos: 16, cuarto párrafo; 19, tercer párrafo	Acción 50/2016 Partido Encuentro Social Acción 51/2016 Partido de la Revolución Democrática Acción 52/2016 Partido Morena
Tema 2. Representación proporcional en Regidurías.	Artículos: 28, fracción IV; 377 fracción I	Acción 50/2015 Partido Encuentro Social Acción 51/2016 Partido de la Revolución Democrática Acción 52/2016 Partido Morena
Tema 3. Requisitos excesivos para el registro de candidatos independientes.	Artículos: 118, 120, fracción II, inciso b) y g) numeral 2	Acción 50/2015 Partido Encuentro Social Acción 51/2016 Partido de la Revolución Democrática
Tema 4. Plazo para el registro de candidaturas comunes, el plazo que fija la ley es injustificado y desproporcionado.	Artículos: 76, fracciones I y II; 77, incisos b), c) e) y g); 81, párrafos segundo y tercero; 260, segundo párrafo; 289, último párrafo y 363	Acción 50/2015 Partido Encuentro Social Acción 51/2016 Partido de la Revolución Democrática Acción 54/2016 Partido Acción Nacional
Tema 5. Violación a facultades del Instituto Nacional Electoral al establecer el régimen de colaboración con el órgano electoral local.	Artículos: 185, fracciones LVIII y LIX; 187, segundo párrafo; 196, fracciones XXXV y XXXVI; 201, fracción V; 223, fracción VII, segundo párrafo	Acción 50/2015 Partido Encuentro Social Acción 51/2016 Partido de la Revolución Democrática Acción 52/2016 Partido Morena
Tema 6. Restricción a la facultad de dar fe pública por la introducción de un elemento de valoración subjetivo contrario al principio de certeza electoral (“que puedan influir o afectar la equidad en las contiendas”)	Artículo: 231, fracción I	Acción 50/2015 Partido Encuentro Social Acción 51/2016 Partido de la Revolución Democrática Acción 52/2016 Partido Morena

Tema 7. Falta de establecimiento de medidas de vigilancia para la apertura del lugar de resguardo de la paquetería electoral.	Artículo: 347, párrafo segundo	Acción 50/2015 Partido Encuentro Social Acción 51/2016 Partido de la Revolución Democrática Acción 52/2016 Partido Morena
Tema 8. Impedimento a los representantes de partido del ejercicio del derecho al voto si se encuentra fuera de su sección electoral.	Artículo: 284, fracción IX, segundo párrafo	Acción 50/2015 Partido Encuentro Social Acción 51/2016 Partido de la Revolución Democrática Acción 52/2016 Partido Morena
Tema 9. Transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones	Artículos: 19, primer párrafo; 26, segundo párrafo; 28, fracciones III y IV; 74; 75; 118; 120, fracción II, inciso g), numeral 2.; 241, tercer párrafo; 254; 260, párrafos primero, segundo y quinto; 264, párrafos tercero y cuarto; 289, penúltimo y último párrafos; 332, fracción III; 333 fracción IV, inciso a); 334, fracción I; 336, fracción I; 369, segundo párrafo; 377, párrafos primero y penúltimo, fracción I; 379, penúltimo y último párrafos; 380, fracciones I, II, III, IV y último párrafo; 381, primer párrafo; 429, quinto párrafo, fracción I; 484, tercer párrafo	Acción 53/2016 Minoría Legislativa del Congreso del Estado de México. Acción 54/2016 Partido Acción Nacional
Tema 10. Modificación o sustitución de los contenidos de los mensajes que transmitan los partidos por radio y televisión.	Artículos: 260, quinto párrafo	Acción 53/2016 Minoría Legislativa del Congreso del Estado de México. Acción 52/2016 Partido Morena

Tema 11 Expedición gratuita de los documentos requeridos por las autoridades electorales (a excepción del acta de nacimiento).	Artículo: 4	Acción 52/2016 Partido Morena
Tema 12 Omisión de determinar una fecha cierta para la realización de la elección extraordinaria en caso de empate.	Artículo: 31	Acción 52/2016 Partido Morena
Tema 13 Condiciones adicionales para la realización del recuento total de votos en sede administrativa electoral.	Artículo: 358, fracción VII, párrafo segundo	Acción 52/2016 Partido Morena

50. **Tema 1. Separación del cargo público como requisito de elegibilidad o impedimento para ser postulado a un cargo de elección popular; reincorporación a la conclusión del proceso electoral** (artículos 16, cuarto párrafo y 19, tercer párrafo del Código Electoral del Estado de México).

51. Los artículos impugnados indican:

> "Artículo 16. Los ciudadanos que reúnan los requisitos que establece el artículo 68 de la Constitución Local son elegibles para el cargo de Gobernador del Estado de México.
>
> Los ciudadanos que reúnan los requisitos que establece el artículo 40 de la Constitución Local son elegibles para los cargos de diputados a la Legislatura del Estado.
>
> Los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 119 y que no se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 120 de la Constitución Local, son elegibles para ser miembros de los ayuntamientos.
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> Los ciudadanos que se hayan separado de un cargo público para contender en un proceso electoral, podrán reincorporase al mismo, una vez que concluya el proceso electoral.
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> Artículo 19. La elección consecutiva de los diputados a la Legislatura podrá ser hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los hubiere postulado salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
>
> Los diputados de la Legislatura que pretendan reelegirse deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, inscritos en el padrón electoral respectivo, y contar con credencial para votar vigente, tener residencia efectiva en el Estado de México, no menor a tres años anteriores al de la elección y separarse del cargo noventa días antes de la elección.
>
> Los diputados que se hayan separado del cargo público para contender en un proceso electoral, podrán reincorporarse al mismo una vez que concluya el proceso electoral.

52. Los Partidos Políticos Encuentro Social, de la Revolución Democrática y MORENA son coincidentes en señalar que los preceptos señalados son contrarios a los artículos 14, 16, 41, 115, 116, 133 y 134, de la Constitución Federal, al establecer que los ciudadanos que se hayan separado de un cargo público para contender en un determinado proceso electoral puedan reincorporarse al mismo una vez concluido dicho proceso, pues coloca a dichas personas en un supuesto de inelegibilidad ya que se deja de lado la regla consistente en que la separación debe ser definitiva para evitar inequidad en la contienda electoral.

53. MORENA aduce también que la situación generada por dichos preceptos puede llevar a un ciudadano a ostentar dos cargos públicos o a reunir en él dos o más poderes, lo cual es contrario al principio de división de poderes, por lo que propone que dichas normas se interpreten en el sentido de que la posibilidad de reincorporación del servidor público, una vez concluido el proceso electoral, sólo existe cuando no haya obtenido el triunfo en la elección que motivó su separación del encargo.

54. Previo al análisis correspondiente, debe señalarse que el partido **MORENA (acción de inconstitucionalidad 52/2016)**, al señalar las nomas cuya invalidez demanda, indicó que **combatía el artículo 19, párrafo cuarto** del Código Electoral del Estado de México; sin embargo, de la lectura de dicha norma se advierte que solamente está redactado en tres párrafos y que el contenido del último es el que fue motivo de reforma, asimismo es sobre el que dicho instituto político expresa sus conceptos de invalidez. En esta tesitura, de conformidad con el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de la materia[21], debe corregirse la cita realizada por el promovente, por lo que en este apartado será materia de estudio el artículo 19, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México.

55. Precisado lo anterior, debe señalarse que este Tribunal Pleno al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 56/2014 y su acumulada 60/2014[22], en la que también se combatió, bajo los mismos argumentos que exponen los hoy promoventes, el último párrafo del artículo 16 del Código Electoral del Estado de México[23], cuya redacción era de contenido similar al que hoy se combate[24], sostuvo que el parámetro de control del supuesto normativo que prevé dicha disposición es el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[25], en la parte que señala que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos con sujeción a las normas que el mismo precepto detalla para la organización de sus poderes.

56. En dicho precedente se señaló que en el precepto constitucional no existe otra restricción para que se reúnan en una sola persona dos o más poderes, así, los ciudadanos que se separaron de un cargo público para contender en los procesos electorales locales, pueden reincorporarse al mismo una vez concluidos los cómputos de la elección en la que participaron. De tal manera que el establecimiento de una condición de separación definitiva o no de un cargo público para que un ciudadano pueda ser elegible a participar en un proceso electoral determinado, se encuentra dentro de la libertad de la que gozan los Estados para configurar su orden jurídico dentro de los límites que la propia Constitución impone.

57. Bajo la misma línea argumentativa del precedente señalado debe tenerse en cuenta que la interpretación aislada y literal del último párrafo del artículo 16 impugnado puede llevar a plantear la hipótesis de que un ciudadano puede ostentar dos cargos públicos como lo sostienen los partidos accionantes; sin embargo, esta posibilidad se descarta al tomar en cuenta que el artículo 2 del mismo Código Electoral impone una interpretación sistemática y funcional de sus preceptos:

> "Artículo 2. La interpretación de este Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos."

58. Así, tomando en cuenta el resto de las normas del orden jurídico al que pertenece el artículo impugnado, se aprecia que el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de México prohíbe que un sólo individuo ejerza dos empleos o cargos públicos del Estado o de los municipios por los que se disfrute un sueldo, salvo que se trate de la docencia; o que desempeñe dos cargos de elección popular al mismo tiempo, como se puede constatar con su lectura:

---

[21] **Artículo 71**. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

[22] Resuelta el 2 de octubre de 2014.

[23] Publicado en el correspondiente medio oficial de la entidad el 28 de junio de 2014.

[24] [---] Los ciudadanos que se hayan separado de un cargo público para contender en un proceso electoral, podrán reincorporarse al mismo **una vez concluidos los cómputos de la elección** en la que participe."

[25] "Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:…"

> "Artículo 145.- Nunca podrán reunirse en un solo individuo dos empleos o cargos públicos del Estado o de los municipios por los que se disfrute un sueldo. Tratándose de docencia ésta podrá prestarse siempre que sea compatible con las funciones y actividades de los servidores públicos.
>
> Ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de elección popular, pero el electo podrá optar de entre ambos el que quiera desempeñar.".

59. Por ende, la única posibilidad para que un ciudadano esté en aptitud de reincorporarse al cargo público del que se separó para contender en un proceso electoral una vez concluido éste –sea para gobernador, diputado local o integrante de ayuntamiento– es que el cargo público sea docente y su ejercicio sea compatible con sus funciones y actividades, o bien, que no haya ganado en la elección y que la naturaleza del cargo lo permita; de ahí que quien haya obtenido algún cargo público en un proceso de elección popular, por esa sola condición se encuentra impedido –en términos del artículo 145 de la constitución local– para reincorporarse al empleo o cargo público que detentaba antes de contender en el proceso electoral.

60. Por estos motivos resultan infundados los argumentos de invalidez propuestos y, en consecuencia, lo procedente **es reconocer la validez de los artículos 16, párrafo cuarto y 19, tercer párrafo, del Código Electoral del Estado de México**.

61. **Tema 2. Representación proporcional en Regidurías** (artículos 28, fracción IV, y 377, fracción I, del Código Electoral del Estado de México).

62. Los artículos impugnados prevén:

> Artículo 28. Para la elección de los ayuntamientos de los municipios del Estado, se estará a las reglas siguientes:
>
> I. Se aplicarán los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
>
> II. Los ayuntamientos se integrarán conforme a los siguientes criterios poblacionales:
>
> a) En los municipios de hasta ciento cincuenta mil habitantes, el ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal, un síndico y seis regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá hasta cuatro regidores asignados según el principio de representación proporcional.
>
> b) En los municipios de más de ciento cincuenta mil y hasta quinientos mil habitantes, el Ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá hasta seis regidores asignados según el principio de representación proporcional.
>
> c) En los municipios de más de quinientos mil y hasta un millón de habitantes, el Ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal, dos síndicos y nueve regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá un síndico y hasta siete regidores asignados según el principio de representación proporcional.
>
> d) En los municipios de más de un millón de habitantes, el Ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal, dos síndicos y once regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá un síndico y hasta ocho regidores asignados por el principio de representación proporcional. III. Cada partido político deberá postular en planilla con fórmulas de propietarios y suplentes la totalidad de candidatos para los cargos a elegir, en la que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidatos del género opuesto, debiendo estar integrada de forma alternada por personas de género distinto. El candidato a Presidente Municipal ocupará el primer lugar en la lista de la planilla; el candidato o los candidatos a síndico ocupará u ocuparán, según el caso, el segundo y el tercer lugar en dicha lista, y los restantes candidatos a regidor ocuparán los siguientes lugares en la lista, hasta completar el número que corresponda de acuerdo a lo establecido en los incisos a) al d) de la fracción II de este artículo.
>
> III. Cada partido político deberá postular en planilla con fórmulas de propietarios y suplentes la totalidad de candidatos para los cargos a elegir, en la que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidatos del género opuesto, debiendo

estar integrada de forma alternada por personas de género distinto. El candidato a Presidente Municipal ocupará el primer lugar en la lista de la planilla; el candidato o los candidatos a síndico ocupará u ocuparán, según el caso, el segundo y el tercer lugar en dicha lista, y los restantes candidatos a regidor ocuparán los siguientes lugares en la lista, hasta completar el número que corresponda de acuerdo a lo establecido en los incisos a) al d) de la fracción II de este artículo.

IV. Para tener derecho a participar en la asignación de regidores según el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán acreditar la postulación de planillas completas de candidatos propios, comunes, coalición o independientes, por lo menos, cincuenta municipios del Estado, en las que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidatos del género opuesto, debiendo estar integrada de forma alternada por personas de género distinto.

V. Para los efectos de la fracción anterior se requiere adicionalmente, que los partidos políticos obtengan al menos el 3% de la votación válida emitida en el municipio de que se trate, misma disposición aplica para las planillas de candidatos independientes.

VI. Si ninguna planilla de candidatos obtiene el porcentaje de votación requerido para tener derecho a la asignación de regidores de representación proporcional, o solo hubiese una planilla registrada, no se asignarán regidores por dicho principio

VII. Si solo una planilla de candidatos, obtiene el mínimo de votación requerido para tener derecho a la asignación de regidores de representación proporcional, se asignará a dicha planilla, el total de los regidores de representación proporcional establecidos en la fracción II de este artículo.

VIII. Los regidores de representación proporcional se asignarán mediante el procedimiento establecido en este Código.

Artículo 377. Tendrán derecho a participar en la asignación de regidores y, en su caso, sindico de representación proporcional, los partidos políticos, las candidaturas comunes o coaliciones que cumplan los requisitos siguientes:

I. Haber registrado planillas propias, comunes o en coalición en por lo menos cincuenta municipios del Estado.

II. Haber obtenido en el municipio correspondiente, al menos el 3% de la votación válida emitida.

El partido, coalición, candidato común o candidatos independientes cuya planilla haya obtenido la mayoría de votos en el municipio correspondiente, no tendrá derecho a que se le acrediten miembros de Ayuntamiento de representación proporcional.

Para el caso de planillas de candidatos independientes, para participar en la asignación de regidores y, en su caso, síndico, deberán haber obtenido el porcentaje de votación a que se refiere la fracción II de este artículo.

63. Los Partidos Encuentro Social y de la Revolución Democrática consideran que se vulneran los artículos 35, fracción II, y 115 constitucionales. Señalan que en los mismos, la asignación de regidores se sujeta al registro y acreditación de la postulación de planillas completas de candidatos propios, comunes, en coalición o independientes, de por lo menos, cincuenta municipios, limitando con ello el ejercicio del derecho a ser votado y al principio de autonomía municipal.

64. Por otra parte, el Partido MORENA considera que los mismos preceptos reclamados vulneran los artículos 1o., 14 en su segundo y cuarto párrafo, 16 primer párrafo, 115, fracciones I y VIII en su primera parte, 116, fracción IV, incisos a) y b), así como 133 constitucionales; todos ellos en relación a los derechos previstos en los artículos 1, 2, 16, 23.1, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

65. Conforme a ello señala dentro de sus argumentos que se limita irracional y excesivamente el derecho de los ciudadanos para votar y estar representados en el gobierno municipal, así como el derecho de los ciudadanos electos a integrar los órganos de representación política estatal y municipal; manifiesta violación a la igualdad de sufragio, libertad de asociación de los partidos políticos y el derecho de autodeterminación y auto organización, el principio de libertad municipal y el régimen democrático, representativo y popular en la integración del Ayuntamiento de cada Municipio del Estado.

66. Este Tribunal considera que asiste la razón a los partidos políticos promoventes al considerar que los artículos 28, fracción IV, y 377, fracción I, del Código Electoral del Estado de México son contrarios a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se condiciona la asignación de regidurías de representación proporcional al registro de planillas en otros municipios, introduciendo así requisitos que exceden el ámbito de la elección en el municipio en concreto.

67. Principalmente se encuentra una vulneración de lo previsto por el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en el que, entre otras cosas, se establece el derecho de los ciudadanos a ser votados para cualquiera de los cargos de elección popular; y respecto del artículo 115 constitucional en lo relativo a la autonomía municipal y el principio de representación proporcional.

68. Los artículos impugnados, al establecer como requisito que se registren, como mínimo, planillas completas respecto de cuando menos cincuenta municipios, contraviene los artículos constitucionales señalados en razón de que limita el derecho a ser votado de los ciudadanos de forma injustificada y exige requisitos que exceden el ámbito propiamente municipal, sujetando la representación de las minorías al cumplimiento de requisitos a nivel estatal.

69. En efecto, que los partidos políticos deban registrar planillas en cuando menos cincuenta municipios constituye una limitante que rebasa el ámbito municipal correspondiente, en la que no se toma en cuenta que los votos conforme a los cuales se hará la distribución respectiva son los emitidos en un municipio en particular, lo que constituye un obstáculo que resta valor a los votos emitidos por los habitantes.

70. Por otra parte, es de señalarse que si bien este Tribunal reconoce en todo momento la amplitud de facultades de que gozan las legislaturas locales para regular lo relativo a las elecciones, debe destacarse que dicho criterio no es absoluto sino que debe atenderse al caso concreto. En el caso que se presenta, la configuración del legislador permite que lo que suceda en otros municipios dentro del proceso electoral incida en la asignación de regidores por representación proporcional en otro. No puede dejar de reconocerse que los ayuntamientos como órganos de gobierno se encuentran diferenciados entre sí.

71. Adicionalmente, es de señalarse que al resolver la acción de inconstitucionalidad 57/2012, en la que se ventilaban disposiciones correspondientes al estado de Zacatecas, este Tribunal abandonó el criterio[26] propio sustentado al resolver diversa acción de inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 16/2004.

72. De esta manera y de conformidad con lo anterior, se considera inconstitucional la limitación establecida en el Código Electoral del Estado de México conforme a la cual la asignación de regidurías de representación proporcional procede únicamente si se registraron planillas en cierto número de municipios. Lo anterior, en razón de que tal disposición redunda en perjuicio del voto pasivo de los ciudadanos y excede el ámbito municipal.

73. Consecuentemente, debe declararse la invalidez de los artículos 28, fracción IV en la porción normativa que señala: "*por lo menos, cincuenta municipios del Estado*" y 377, fracción I, del Código Electoral del Estado de México.

74. **<u>Tema 3.</u> Requisitos excesivos para el registro de candidatos independientes** (artículos 118 y 120, fracción II, incisos b) y g), numeral 2., del Código Electoral del Estado de México).

---

[26] "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN IV, Y 243, FRACCIÓN I, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL CONDICIONAR LA EVENTUAL ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR DICHO PRINCIPIO A QUE LOS PARTIDOS O COALICIONES PARTICIPEN CON CANDIDATOS A REGIDORES EN POR LO MENOS SEIS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, NO SON CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Los citados preceptos que condicionan la eventual asignación de regidurías de representación proporcional al registro de planillas completas de candidatos en por lo menos seis Municipios de la entidad, son constitucionales, por constituir bases generales del sistema de representación proporcional para la integración del órgano de gobierno municipal. Ello es así, pues como puede observarse de las bases generales que sustentan el principio de representación proporcional, contenidas en la tesis de jurisprudencia P./J. 69/98, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 189, con el rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.", trasladadas al ámbito de las elecciones municipales, el registro de candidatos a integrar los Ayuntamientos municipales está condicionado a que los partidos políticos que participen en ese tipo de elección, registren candidatos en el número de Municipios que la ley señale. Además, la exigencia de registrar candidatos en por lo menos seis Municipios, para tener derecho a participar en la asignación de regidurías de representación proporcional, no impide que se cumpla con el objetivo fundamental de introducir tal principio en la integración de los Ayuntamientos de los Municipios en cada entidad federativa, objetivo que consistió en ampliar las posibilidades de la representación nacional y establecer las condiciones para una mayor participación ciudadana en la formación y ejercicio del poder público municipal.
El criterio contenido en la presente tesis fue abandonado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 57/2012 y sus acumuladas 58/2012, 59/2012 y 60/2012, cuya sentencia aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 1, octubre de 2013, página 61.

75. Las normas impugnadas establecen:

> Artículo 118. Los dirigentes, militantes, afiliados o sus equivalentes de los partidos políticos no podrán solicitar su registro como candidatos independientes, a menos que se hayan separado de su cargo partidista con tres años de anticipación al momento de solicitar su registro, ni haber sido postulados candidatos a cualquier cargo de elección popular por partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior.
>
> Artículo 120. Los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes a un cargo de elección popular deberán:
>
> I. Presentar su solicitud por escrito.
>
> La solicitud de registro deberá contener:
>
> a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del solicitante.
>
> b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante.
>
> c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo.
>
> d) Ocupación del solicitante.
>
> e) Clave de la credencial para votar del solicitante.
>
> f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante.
>
> g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones.
>
> h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición de informes correspondientes.
>
> II. Acompañar la solicitud con la documentación siguiente:
>
> a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato independiente, a que se refiere este Código.
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, así como la constancia que acredite estar inscrito en la lista nominal de electores.
>
> c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el candidato independiente sostendrá en la campaña electoral.
>
> d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de este Código.
>
> e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano.
>
> f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, las firmas y la copia legible de la credencial para votar vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de este Código.
>
> g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:
>
> 1. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano.
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> 2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, ni haber sido postulado candidato a cualquier cargo de elección popular por partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior, conforme a lo establecido en este Código.
>
> 3. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato independiente.
>
> h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral.

76. Los partidos Encuentro Social y de la Revolución Democrática hacen valer en su tercer concepto de invalidez la inconstitucionalidad de los artículos 118 y 120 en su fracción II, inciso b) así como inciso g), párrafo segundo del mismo, del Código Electoral para el Estado de México; dichos preceptos contienen los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a participar en los procesos electorales bajo la figura de candidatos independientes.

77. De manera concreta los partidos impugnan dos de los requisitos contemplados en la norma en estudio. El primero de ellos referente a la temporalidad que la ley prevé para que los dirigentes, militantes, afiliados y otros deban separarse de su cargo partidista para efecto de poder ser candidato independiente, y el segundo de ellos relativo a la presentación de la certificación de inscripción en la lista nominal.

78. **A) Restricción temporal de los dirigentes partidistas para ser registrados como candidatos independientes.** El primer requisito que impugnan los partidos es el referente a la restricción contenida en los artículos 118 y 120, fracción II, inciso g), numeral 2, consistente en la separación del cargo que se desempeñe dentro de un partido político por parte de quienes quieran solicitar su registro como candidato independiente. De acuerdo a sus respectivos escritos, las disposiciones cuya invalidez solicitan atentan contra los artículos 35, fracción II, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior en razón de contener restricciones que resultan excesivas y desproporcionadas.

79. Los preceptos constitucionales que consideran violentados establecen lo siguiente:

> **Artículo 35. Son derechos del ciudadano:**
>
> **I. Votar en las elecciones populares;**
>
> **II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;**
>
> **(…)**
>
> **Artículo 116.**
>
> **(…)**
>
> **IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:**
>
> **(…)**
>
> **k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;**

80. Los argumentos que los partidos hacen valer para demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos transcritos son los siguientes:

- Manifiestan que si bien el derecho a registrarse como candidato independiente no es absoluto, su limitación debe ser necesaria y razonable y no debe incidir desproporcionadamente en el ejercicio del derecho a ser votado.
- Argumentan que el único referente objetivo y razonable para establecer restricciones es el proceso electoral específico, lo cual, consideran, es la única forma de garantizar la naturaleza, imparcialidad e independencia de candidaturas distintas a las de los partidos.
- Consideran que establecer una temporalidad distinta (dentro de los requisitos para la postulación de candidaturas independientes) a la del proceso electoral concreto resulta excesivo y desproporcionado.
- Señalan que la restricción de vínculo partidista se satisface bastando la separación desde la etapa previa al registro de las candidaturas, esto es, en la etapa de precampaña o en la que se recaban los apoyos ciudadanos de las candidaturas independientes.

81. Sobre el tema en particular este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado[27] en el sentido de que las disposiciones que establecen una restricción temporal para el acceso al registro de candidaturas independientes responden a la propia naturaleza de la figura. Es decir, el legislador, al establecer una medida como la que se impugna, busca garantizar que exista una separación entre el candidato independiente y el partido político en el que previamente desempeñó algún cargo. Así, lo que se persigue es la disolución del vínculo entre la persona que busca ser candidato independiente y el partido al que perteneció.

82. De los argumentos vertidos por los partidos se desprende que a su consideración la limitación que contiene el precepto no guarda proporción con la medida en sí misma; por tanto, resulta pertinente llevar a cabo un análisis de proporcionalidad de la medida para efecto de atender el argumento de los partidos.

83. **a) Idoneidad.** En esta primera etapa se pretende dilucidar si la medida que se estudia cuenta con una finalidad que pueda enmarcarse dentro de los preceptos y valores constitucionales así como si resulta adecuada para alcanzar dicha finalidad.

84. Para determinar si la finalidad perseguida es constitucional o no, es preciso acudir a las razones jurídico-primigenias de ser de las candidaturas independientes. Así, de los trabajos preparatorios de la reforma constitucional del nueve de agosto de dos mil doce, se desprende que la finalidad de incorporar la figura de candidaturas independientes en la Constitución es la de abrir nuevos cauces a la participación ciudadana sin condicionarla a la pertenencia a un partido político, así como estimular el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos comiciales, superando la limitación de opciones ante la sociedad y la ciudadanía. Asimismo, en el proceso legislativo se resaltó el deber de trascender de la democracia electoral a la democracia participativa en la que se promuevan espacios de interacción entre los ciudadanos y el Estado.

85. Del Dictamen de la reforma de referencia se extrae lo siguiente:

> "CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
>
> Como se ha expuesto antes en este dictamen, uno de los propósitos fundamentales de diversas iniciativas que son objeto de estudio es **abrir nuevos cauces a la participación ciudadana sin condicionarla a la pertenencia, sea por adscripción o por simpatía, a un partido político**. Estas comisiones unidas coinciden con ese propósito y en la misma línea de razonamiento por la que se propone incluir las figuras de la consulta popular y la iniciativa ciudadana, consideramos que ha llegado el momento de dar un paso de enorme trascendencia para el sistema político-electoral de México mediante la incorporación en nuestra Carta Magna del derecho ciudadano a competir por cargos de elección popular sin la obligada postulación por un partido político.- - - (…) Pese a los cambios legales para propiciar la democracia interna y la apertura de los partidos a la participación de la ciudadanía en sus procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular, lo cierto es que en la percepción social son los partidos y sus grupos dirigentes los que deciden en esa materia, generando un círculo de desconfianza entre ellos y los ciudadanos, que se ha ensanchado de manera creciente.- - - Con motivo de la reforma electoral de 2007 se discutió a profundidad la propuesta de admitir para México la postulación de candidatos "independientes", es decir, postulados al margen de los partidos políticos.
>
> …
>
> Sin embargo, la demanda de abrir el sistema electoral a la posibilidad de candidaturas independientes sigue presente en sectores representativos de la sociedad civil, que consideran que el derecho al voto pasivo no debe tener más restricciones que las establecidas por la ley de manera proporcional, de forma tal que sea posible que un ciudadano(a) pueda postularse y obtener registro para competir por un cargo de elección popular sin tener que obtener el respaldo de un partido político.- - - No escapa a quienes integramos las comisiones unidas que ese cambio representaría un viraje radical en la configuración que a lo largo de más de medio siglo ha tenido nuestro sistema electoral. Supone un nuevo diseño normativo y práctico que haga posible la existencia de candidatos independientes (no partidistas) sin tirar por la borda el entramado de obligaciones y derechos que nuestra Constitución y las leyes electorales disponen para los partidos políticos. En pocas palabras, la posible incorporación a

[27] Acción de Inconstitucionalidad 42/2014, y sus acumuladas 55/2014, 61/2014 y 71/2014.

> nuestro sistema electoral de la posibilidad de candidatos independientes debe hacerse en armonía con lo que hemos construido a lo largo de más de tres décadas.- - - Las candidaturas independientes deben ser una fórmula de acceso a ciudadanos sin partido para competir en procesos comiciales, no una vía para la promoción de intereses personales o de poderes fácticos que atenten contra la democracia y el propio sistema electoral y de partidos políticos. Estos últimos deben seguir siendo la columna vertebral de la participación ciudadana, los espacios naturales para el agrupamiento y cohesión de la diversidad que está presente en la sociedad, de forma tal que la diversidad encuentra en ellos un cauce democrático para **dar lugar a la pluralidad de opciones que compiten por el voto ciudadano y hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de elección popular**.- - - La solución no está, a juicio de las comisiones dictaminadoras, en mantener el estatus quo y preservar el derecho exclusivo de los partidos políticos para la postulación y registro legal de candidatos a cargos de elección popular, sino en **abrir las puertas a la participación independiente de los ciudadanos en las contiendas electorales, con los requisitos de ley que aseguren representatividad y autenticidad**, con ciertos derechos y obligaciones que sean armónicos con las existentes para los partidos políticos, que garanticen transparencia y rendición de cuentas, **de forma tal que los candidatos independientes no sean caballo de Troya por el que se introduzcan al sistema político proyectos ajenos a su base y sentido democrático**, y mucho menos para la penetración de fondos de origen ilegal en las contiendas electorales.- - - Por lo anterior, estas comisiones unidas proponen introducir en nuestra Constitución, en los artículos 35 y 116, la base normativa para la existencia y regulación, en la ley secundaria, de las candidaturas independientes, a todos los cargos de elección popular, tanto federales como locales.[28]"

86. De esta manera, es dable reconocer que ante la finalidad que persiguió la reforma constitucional que incorpora las candidaturas independientes, el legislador del Estado de México estableció una medida restrictiva para el acceso a dichas candidaturas a efecto de mantener el carácter con que fueron concebidas.

87. Es así que quien pretende ser candidato independiente debe estar desvinculado de cualquier partido político, más aun, de aquel al que perteneció y en el que ejerció algún cargo de representación o dirección; por tanto, puede sostenerse que las normas que establecen un plazo de separación de los cargos partidistas como requisito para registrar una candidatura independiente tienen una finalidad constitucionalmente válida. Finalidad que consiste precisamente en preservar el carácter de la candidatura independiente de acuerdo a su configuración y en términos del artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal.

88. Ahora, para establecer si la medida restrictiva es adecuada, en primer lugar es preciso establecer los alcances de la misma en relación a los sujetos y actividades a las que se dirige la misma.

89. Así, en cuanto a los sujetos, la medida que establece el Código Electoral del Estado de México tiene como destinatarios una clase de sujetos que se identifican plenamente, personas que además de tener la intención de contender de manera independiente en los procesos comiciales, han sido dirigentes, militantes, afiliados o sus equivalentes en algún partido político. Conforme al inciso a) del artículo 4 de la Ley General de Partidos Políticos, será afiliado o militante "*El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación*;".

90. Por otra parte, respecto del alcance de la disposición es preciso señalar que el supuesto normativo se actualiza únicamente en el caso de que alguno de los sujetos que se han definido en el párrafo precedente formule solicitud de registro para ser candidato independiente. Caso en el cual se establece una restricción temporal conforme a la que el sujeto debe haberse separado del cargo partidista con al menos tres años de antelación al momento en que formula la solicitud. Es decir, la limitación del derecho al voto en su vertiente pasiva se encuentra acotada a un plazo temporal que de acuerdo al legislador es suficiente para que el candidato no tenga vínculos partidistas, temporalidad que coincide con la duración del cargo y, por tanto, con la celebración de elecciones ordinarias, en específico para el caso de Ayuntamientos y Diputados.

---

[28] Dictamen de la Cámara de Senadores, México, D.F. miércoles 27 de abril de 2011., Gaceta No. 255

91. Es preciso señalar que, de la transcripción del Dictamen de reforma constitucional que se realizó en el inciso anterior, se desprende la intención del legislador de evitar que las candidaturas independientes se conviertan en un “caballo de Troya” por el que se introduzcan proyectos políticos ajenos a una base y sentido democrático. Ello abona a la consideración de que debe existir certeza de que el candidato contiende por sí y con una agenda propia y no por un partido con la agenda del mismo bajo un disfraz de independencia.

92. Por tanto, la medida que se estudia, a consideración de este Tribunal, se encuentra dirigida a satisfacer una finalidad constitucional y es adecuada para alcanzar la misma. En consecuencia, habiendo superado la primera etapa de estudio se procede ahora realizar el análisis de la necesidad de la medida.

93. **b) Necesidad.** En esta etapa del estudio se determinará si la medida restrictiva para el acceso a las candidaturas independientes resulta necesaria para que se cumpla la finalidad pretendida; de igual manera se establecerá si es la menos gravosa para el derecho a ser votado.

94. Sobre la necesidad de la medida, es de señalarse que, en efecto, para garantizar la independencia en la candidatura ciudadana, es indispensable que exista un mecanismo que garantice la separación real del individuo respecto del partido. Esto se logra necesariamente con la separación del cargo partidista o afiliación; sin embargo, la separación que se realiza de forma inmediata previa al inicio de los procesos comiciales, no es suficiente para romper el vínculo entre la persona y el partido, es por ello que el legislador ha considerado el establecimiento de cierto plazo con miras a alcanzar dicho objetivo. Por otra parte, es de señalarse que la medida que se impugna no sólo contribuye a alcanzar el fin, sino que está diseñada específicamente para ello.

95. Así, para determinar si la medida restrictiva que se analiza es la menos gravosa para el derecho a ser votado, se cuenta con un parámetro objetivo de tiempo, en este caso, el que transcurre entre un proceso electoral y otro, el cual está relacionado con la duración de la mayoría de los cargos de elección popular. A pesar de que no se advierten dentro del proceso de reforma las razones del legislador para fijar tal plazo, este Tribunal encuentra que el mismo guarda identidad con el lapso de tiempo que media entre cada ejercicio electoral, en específico, para el caso de Ayuntamientos y Diputados.

96. En este tenor y conforme al parámetro que se ha fijado, una restricción mayor consistiría en la prohibición absoluta para que aquellos que han formado parte de un partido político accedan a las contiendas electorales bajo la figura de candidaturas independientes. Por otra parte, una menor restricción se presentaría con una reducción del plazo legal exigido para la separación del cargo, es decir, un plazo menor a los tres años que prevé el Código Electoral del Estado de México. Sin embargo, respecto de esta última posibilidad y considerando lo dicho en el párrafo precedente, al existir una coincidencia entre los ejercicios electorales y la separación del cargo que se exige, se garantiza que quien busca ser candidato independiente no tiene vínculo alguno con el partido del que formó parte, y por tanto, con aquellos miembros del que fuera su partido que pudieron haber resultado electos.

97. Así, se observa que no se está restringiendo de forma absoluta el derecho a ser votado, de forma que no existe impedimento alguno para que cualquier persona continúe siendo parte y ejerciendo cargos dentro de un partido político así como que busque ser designado candidato por el mismo; sin embargo, si la intención es contender de manera independiente, es preciso que se verifique la desvinculación del partido político, misma que a consideración del legislador se logra mediando una temporalidad de tres años. De esta manera, se garantiza que quien figurará como candidato independiente no será sólo un instrumento adicional del mismo partido, con lo cual se contribuya a la participación ciudadana brindando más opciones para el elector que no encuentra en la agenda de ningún partido político la afinidad para entregarle su voto en ejercicio de la democracia.

98. Por lo anterior, la medida que se impugna es la que, además de ser la idónea para alcanzar el fin perseguido, restringe en menor medida el derecho a ser votado.

99. **c) Proporcionalidad en sentido estricto.** Procede ahora analizar la proporcionalidad de la medida, es decir, si la restricción que se plantea se encuentra justificada por la finalidad que se persigue.

100. Como se ha venido señalando, la medida impugnada busca salvaguardar los principios constitucionales que rigen los procesos electorales. Se ha establecido asimismo que la finalidad es constitucional y que el requisito de separación del cargo partidista resulta idóneo y es necesario para la consecución del fin. Es así que la restricción que plantea el legislador está encaminada de manera muy específica a la salvaguarda de una finalidad legítima y no restringe de forma alguna el derecho al voto al permitir que las personas accedan a postulaciones por otras vías. De forma tal que se encuentra justificada la restricción y, por tanto, se considera que dicha medida es proporcional.

101. En consecuencia, este Tribunal Pleno considera que las aludidas restricciones contenidas en la norma combatida cuentan con una finalidad constitucionalmente legítima, resulta idónea y se considera proporcional; por lo tanto, lo procedente **es reconocer la validez de los artículos 118 y 120, fracción II, inciso g), numeral 2 del Código Electoral del Estado de México.**

102. **B) Acreditación de inscripción en la lista de electores**. Los partidos solicitan la declaración de invalidez del inciso b) de la fracción II del artículo 120 del Código Electoral para el Estado de México. La invalidez que se solicita es infundada por las razones que se expresarán a continuación.

103. El requisito contenido en el inciso b) de la fracción II del artículo 120 es el de exhibir copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar, así como la constancia que acredite estar inscrito en la lista nominal de electores. A decir de los partidos que lo impugnan, el exigir la presentación de la constancia de inscripción en la lista nominal de electores resulta un excesivo e injustificado.

104. En diversas acciones de inconstitucionalidad[29] este Tribunal ha determinado que el acreditar encontrarse en la lista nominal de electores no es un requisito excesivo ni injustificado sino que, por el contrario, genera seguridad jurídica y garantiza que quien quiera ser registrado como candidato independiente, efectivamente, cuenta con la credencial de elector, esto es, con el documento idóneo que permite participar activa o pasivamente en los procesos comiciales, y que esta situación es reconocida por la propia autoridad en la materia.

105. Por otra parte, este Tribunal, reiteradamente, ha reconocido la libertad configurativa de los congresos locales en ciertas materias. En este sentido, del artículo 116[30] constitucional se desprende que las entidades federativas cuentan con la facultad de regular el régimen de postulación y registro, así como los derechos y obligaciones de los candidatos independientes. De ello deriva que los congresos locales pueden regular lo relativo a los requisitos para la postulación de los candidatos que pretendan participar en los comicios de manera independiente. Este Tribunal considera que el establecimiento de dicho requisito parte de la libertad configurativa con que cuenta la entidad y, por tanto, se reitera la validez de la disposición.

106. Sirve de apoyo a lo anterior el contenido de la jurisprudencia de rubro "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUÉLLOS[31]".

107. Por tanto, este Tribunal arriba a la conclusión de que el requisito cuya constitucionalidad se cuestiona debe entenderse como una medida de seguridad con la cual se pretende brindar certeza y de que tal medida fue adoptada por la legislatura del Estado de México haciendo uso de la libertad de configuración con la que cuenta en temas electorales.

108. Por lo anterior, **se reconoce la validez del inciso b) de la fracción II del artículo 120 del Código Electoral para el Estado de México.**

---

[29] Acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada 33/2014; acción de inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas 91/2014, 92/2014 y 93/2014.

[30] **Artículo 116.** El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;

[31] CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUÉLLOS. Los artículos 30, apartado A), 32, párrafo segundo, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituyen las bases constitucionales a las que habrán de sujetarse las Constituciones de los Estados tratándose de la elección de gobernadores, miembros de las Legislaturas Locales e integrantes de los Ayuntamientos, por virtud del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Norma Fundamental. Así, para ocupar el cargo de gobernador se establecen ciertos requisitos esenciales a los que queda constreñida la legislación local (artículo 116, fracción I), mientras que, tratándose de los miembros de las Legislaturas Locales e integrantes de los Ayuntamientos, la libertad de configuración normativa de los legisladores locales es mayor, en la medida en que la Constitución General de la República sólo establece algunos lineamientos mínimos para su elección, mas no los requisitos y calidades que deben cubrir. Por tanto, los requisitos que deben satisfacer quienes pretendan acceder a un cargo de elección popular en los Estados de la República, tales como diputados o miembros de los Ayuntamientos, constituyen un aspecto que está dentro del ámbito de la libertad de configuración de los legisladores locales y, en ese sentido, es válido que las Constituciones y leyes de los Estados establezcan requisitos variados y diferentes. Tesis 5/2013, Jurisprudencia, Pleno, 10° Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, pág. 196, Registro: 2002717.

109. **Tema 4. Plazo para el registro de candidaturas comunes, el plazo que fija la ley es injustificado y desproporcionado** (artículos 76, fracciones I y II; 77, incisos b), c), e) y g); 81, párrafos segundo y tercero; 260, segundo párrafo; 289, último párrafo y 363 del Código Electoral del Estado de México).

110. Los preceptos cuya invalidez se demanda prevén lo siguiente:

> "**Artículo 76.** Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, de acuerdo con lo siguiente:
>
> I. Deberán suscribir un convenio firmado por sus representantes y dirigentes, el cual presentarán para su registro ante el Instituto, a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se trate.
>
> II. No se podrá participar en más del 33% de los municipios o distritos, tratándose de la elección de integrantes de ayuntamientos y diputados."
>
> **Artículo 77**. El convenio de candidatura común deberá contener:
>
> a) Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate.
>
> b) Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se participa.
>
> c) La manifestación por escrito de proporcionar al Instituto, una vez concluidos sus procesos internos, el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato.
>
> d) La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada uno de los partidos postulantes del candidato común.
>
> e) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común, para efectos de la conservación del registro, para el otorgamiento del financiamiento público y en su caso, para otros aquellos que establezca este Código.
>
> f) Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios de comunicación distintos a radio y televisión, y a los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo General.
>
> g) Para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos, determinar el partido político al que pertenecen los candidatos en caso de resultar electos.
>
> **"Artículo 81**. Para los efectos de la integración de los órganos electorales, del financiamiento, asignación de tiempos de radio y televisión y de la responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos.
>
> Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el Instituto.
>
> En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los partidos.
>
> Los partidos políticos que participen en la postulación de candidaturas comunes no podrán convenir otras formas de participación con otros partidos en el mismo proceso electoral."
>
> (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> "**Artículo 260.** La propaganda impresa que utilicen los candidatos deberá contener una identificación precisa del partido político, candidatura común o coalición que registró al candidato.
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> La propaganda que sea utilizada por alguna candidatura común o coalición deberá ser identificada con el emblema y color o colores que haya registrado en el convenio correspondiente.

La propaganda en cualquier medio que realicen los partidos políticos y sus candidatos deberá referirse a la difusión de su plataforma electoral, la promoción de sus candidatos o el análisis de los temas de interés y su posición ante ellos.

Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tienen prohibido incluir en su propaganda electoral, cualquier tipo de calumnia que denigre a candidatos independientes, partidos políticos, coaliciones, instituciones o terceros.

(REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, si el Consejo General estima que pueden afectarse los principios rectores de los procesos electorales locales, podrá ordenar a los partidos políticos, coaliciones o candidatos comunes e independientes la modificación o sustitución de los contenidos de los mensajes que transmitan por radio y televisión.

Los partidos políticos, candidatos y precandidatos podrán ejercer el derecho de réplica a que se refiere el artículo 5 de la Constitución Local, respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercerá sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regula la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

El derecho a que se refiere el párrafo anterior, se ejercerá en la forma y términos que determinen las leyes que regulan a los medios de comunicación electrónicos e impresos.

Los partidos políticos podrán difundir como parte de su gasto ordinario, en todo momento salvo dentro de campañas electorales logros de gobierno de candidatos de su partido o bien de los partidos en caso de existir coaliciones.”

“Artículo 289. Las boletas electorales contendrán:

I. Distrito o Municipio, sección electoral y fecha de la elección.

II. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos.

III. El color o combinación de colores y emblema que cada partido político en el orden que le corresponda de acuerdo a la antigüedad de su registro como partido.

IV. Nombre y apellidos del candidato o los candidatos respectivos.

V. Espacio para cada uno de los candidatos independientes.

VI. En el caso de la elección de ayuntamientos, un sólo espacio para la planilla de propietarios y suplentes, postulados por cada partido político o coalición.

VII. Para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, se utilizará boleta única, que contendrá un sólo espacio para cada partido político o coalición, así como, respectivamente, la fórmula de candidatos y la lista plurinominal.

VIII. En el caso de la elección de Gobernador, un sólo espacio para cada candidato.

IX. Un espacio para asentar los nombres de los candidatos no registrados.

X. Sello y firmas impresas del Presidente y del Secretario del Consejo General del Instituto.

Las boletas estarán adheridas a un talón desprendible con folio.

(REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)

En el caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí mismos, y se agruparán tomando como referencia el lugar que le corresponda al registro del partido coaligante más antiguo, seguido de los otros partidos coaligados, de acuerdo a su antigüedad de registro. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.

(ADICIONADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)

En el caso de existir candidaturas comunes, aparecerá en la boleta el color o combinación de colores y emblema registrado en un espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen a los partidos que participan por sí mismos y ocupará el lugar que le corresponda al partido político con mayor antigüedad en su registro."

"Artículo 363. Para el caso de que los partidos políticos hayan postulado una candidatura común, se estará a lo señalado en el convenio correspondiente y se sumarán los votos conseguidos por esta vía a los que obtuvo cada partido político en lo individual para tener el total de la votación recibida a su favor."

111. Los Partidos Encuentro Social, de la Revolución Democrática, Morena y Acción Nacional fueron coincidentes en señalar que los preceptos citados desnaturalizan la candidatura común, violando el modelo de coalición electoral definido por el inciso f) de la fracción I del artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral de diez de febrero de dos mil quince, y la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 85.5 de la Ley General de Partidos Políticos.

112. Que la fracción I del artículo 76 contempla un plazo injustificado y desproporcionado para el registro de candidatos para postular candidaturas comunes, porque el convenio para su registro debe presentarse treinta días antes del inicio del periodo de precampaña, cuando sólo puede verificarse durante el plazo de registro de candidatos.

113. En este sentido, señalan que "la figura de candidatura común (…) debe ser acorde en los plazos que se establecen para la presentación de la firma de convenio; como es el caso de las coaliciones electorales, cuyo plazo es hasta la fecha en que inicien las precampañas, por lo que resulta injustificado que para la figura de candidaturas comunes se exija la presentación del convenio respectivo con treinta días de anticipación al previsto para la otra forma de participación, lo cual resulta injustificado y desproporcionado, sobre todo que en la candidatura común, a diferencia de la coalición electoral la figura central debe ser el candidato y no los partidos políticos, candidaturas que se concretan hasta el plazo de registro de candidatos".

114. También aducen que la fracción II del artículo 76 limita de manera injustificada y desproporcionada la postulación de candidaturas comunes para integrantes de ayuntamientos y diputados hasta en 33% de los municipios o distritos, siendo que la candidatura común, a diferencia de la coalición, no se encuentra sujeta a límites o parámetros como las coaliciones totales, parciales o flexibles, ya que el convenio de coalición, por su naturaleza, está sujeta a cada una de las candidaturas, ya sea de gobernador, diputados de mayoría y ayuntamiento, y no a un conjunto de candidaturas o por tipo de elección.

115. Que las demás disposiciones violan el principio de progresividad en la interpretación de los derechos humanos y tergiversan la naturaleza de la candidatura común, lo cual no se justifica bajo el argumento de la libre configuración normativa, al confundir la candidatura común con la coalición, porque se trata de la unión entre partidos políticos mediante la firma de un convenio y la fusión de sus emblemas y, por lo tanto, de intereses, más allá de la postulación de una candidatura en común, al compartir una misma votación, propio de la figura de coalición que fue expulsada del sistema electoral en la reforma constitucional en materia político electoral de diez de febrero de dos mil catorce.

116. Al efecto, solicita abandonar el criterio de la acción de inconstitucionalidad 59/2014, donde se impugnó la transferencia de votos en el convenio de candidatura común del Estado de Baja California Sur.

117. Los argumentos planteados por los partidos políticos resultan infundados, primero, porque no se puede plantear la desproporcionalidad de los plazos o los límites para la postulación de candidaturas comunes con base en la regulación de las coaliciones, en la medida que se trata de formas diferentes de promoción política que justifican el trato diferenciado en su regulación y, segundo, porque la regulación de las coaliciones no es parámetro de control constitucional de las candidaturas comunes, toda vez que las legislaturas de los Estados gozan de libertad para regular distintas formas de participación política a las coaliciones en sus constituciones y leyes electorales.

118. No es obstáculo a la conclusión anterior que en su concepto de invalidez afirme que los artículos impugnados regulan materialmente una coalición bajo la denominación de candidatura común, porque realmente lo que pretenden los partidos políticos es que este Tribunal Pleno se replantee los elementos para determinar cuándo se está en presencia de una coalición y cuando de una

candidatura común, lo que a su juicio sucede en el presente asunto porque existe un convenio entre los partidos políticos y porque participan bajo un mismo emblema, pidiendo que se abandone el criterio de la acción de inconstitucionalidad 59/2014, ya que en este precedente no se abordó el tema que propone.

119. Los argumentos planteados por los partidos políticos resultan infundados, ya que el Tribunal Pleno, al fallar la acción de inconstitucionalidad 103/2015, definió los elementos que son propios de la coalición, distinguiéndolos de los que son propios de la candidatura común.

120. En dicho precedente reiteró que la figura de las candidaturas comunes se define como la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, lista o fórmula, cumpliendo los requisitos que en cada legislación se establezcan. También reiteró que la coalición y la candidatura común coinciden en que ambas son la unión temporal de dos o más partidos políticos con el fin de concurrir unidos a la competencia electoral, presentando la misma candidatura para maximizar sus posibilidades de triunfo, con la diferencia de que tratándose de candidaturas comunes únicamente se pacta la postulación del mismo candidato; en cambio, en la coalición la reunión de los partidos políticos equivale a que participan como si fuera uno solo, lo que influye por ejemplo, en las prerrogativas que les son propias.[32]

121. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas[33], este Tribunal Pleno reconoció que si bien la candidatura común y la coalición constituyen mecanismos mediante los cuales es posible que dos o más partidos políticos puedan postular a los mismos candidatos, una y otra figura tienen importantes diferencias. En las candidaturas comunes, la oferta política al electorado de cada uno de los partidos políticos que participan no tiene que ser uniforme, mientras que en las coaliciones los partidos políticos que se coaligan, no obstante las diferencias que pueda haber entre ellos, llegan a un acuerdo con el objeto de proponer al electorado una propuesta política identificable; en cambio, en el caso de los candidatos comunes, cada partido político continúa sosteniendo su propia plataforma electoral, sin tener necesariamente que formular una de carácter común.

122. En este sentido, este Tribunal Pleno observa que la figura de asociación política denominada como "candidatura común" encuentra diferencias con la denominada "coalición" prevista en el artículo 87 párrafo segundo de la Ley General de Partidos[34]. Así, derivado de una interpretación armónica y sistemática del artículo 116 fracción IV de la Constitución Federal en conexión con el artículo 85 párrafo quinto[35] de la citada Ley General es posible advertir que los Congresos de las entidades federativas gozan de una **libre facultad de configuración legislativa para establecer en sus Constituciones Locales** otras formas de participación o asociación de los partidos políticos, en el caso: la figura de la Candidatura Común, se encuentra reconocida tanto el artículo 12 párrafo tercero de la Constitución Local[36], como en el numeral 75 del Código Electoral del Estado de México como la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, fórmulas o planillas. En el caso de la Candidatura Común[37] los partidos convergen en una asociación en torno a un mismo candidato, pero manteniendo autonomía para cuestiones como:

---

[32] Esto se razonó así, por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 17/2014 y la acción de inconstitucionalidad 36/2014 y sus acumuladas 87/2014 y 89/2014, resueltas en sesión de nueve y veintitrés de septiembre de dos mil catorce, respectivamente.

[33] Fallada en sesión de ocho de julio de dos mil ocho, bajo la Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.

[34] "Artículo 87

(…)

2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal."

[35] "Artículo 85.

(…)

5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos."

[36] "Artículo 12.-

(…)

(REFORMADO, G.G. 25 DE ABRIL DE 2016)

En los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos, formulas, planillas o listas, por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos."

[37] "Artículo 81. Para los efectos de la integración de los órganos electorales, del financiamiento, asignación de tiempos de radio y televisión y de la responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos.

Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el Instituto.

En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los partidos.

Los partidos políticos que participen en la postulación de candidaturas comunes no podrán convenir otras formas de participación con otros partidos en el mismo proceso electoral."

- Integración de órganos electorales.
- Financiamiento.
- Asignación de tiempos de radio y televisión.
- Responsabilidades diferenciadas en materia Electoral, Civil y Penal.
- Emblema conjunto.
- Distribución de porcentajes de votación sujeta al convenio de candidatura común.

123. En el caso concreto, el legislador del Estado de México ha determinado ejercer su facultad de configuración para regular de manera efectiva la figura de la "Candidatura Común", en cambio el contraste constitucional se presentaría si el legislador intentase regular la figura de las coaliciones, dado que este Tribunal Pleno ha emitido criterio en el sentido de que las entidades federativas no se encuentran facultadas para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

124. De tal forma que ninguno de sus argumentos demuestra que en el caso se den los elementos señalados anteriormente, sino sólo demuestran que existe un convenio entre los partidos políticos para postular una candidatura común y la necesidad de participar con un mismo emblema, lo cual ya fue reconocido como válido en la acción de inconstitucionalidad 103/2015, en la cual se señaló que "…el hecho de que los partidos políticos compitan por medio de una candidatura común, en cuyo convenio se acuerde que aparecerán con emblema común y el color o los colores con los que participen, pero sobre todo que en dicho convenio se establecerá la forma en que se asignarán los votos de cada uno de los partidos que postulan la candidatura común, no resulta inconstitucional, ya que se entiende que se respeta la decisión del elector, quien no vota por un partido identificado individualmente, sino por la candidatura común, y se encuentra en posibilidad de saber que su voto, en todo caso, tendrá efectos conforme a la ley y al convenio que hubiesen celebrado los partidos políticos postulantes, lo que desde luego garantiza certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral, pero sobre todo, implica respeto al voto de los ciudadanos, ya que la forma en la que los partidos en candidatura común, aparecen en la boleta, les demuestra que votan por un candidato que no sólo es postulado por un instituto político; por tanto, se respeta la decisión ciudadana".

125. Por lo anterior, sus argumentos son insuficientes para demostrar que se haya regulado una coalición con la denominación de candidatura común.

126. Finalmente, también resulta infundado el argumento planteado en relación con la falta de razonabilidad de los plazos para registrar la candidatura común, ya que este Tribunal Pleno, desde que resolvió la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada 33/2014, ha sostenido que la razonabilidad de los mismos depende de que se ajusten a la temporalidad que el propio Código prevé para el desarrollo de la etapa que los contiene, lo que acontece en el caso, como el propio partido político reconoce. Sin que sea obstáculo que en aquel asunto se haya hecho este pronunciamiento en relación con los plazos para registrar las candidaturas comunes, puesto que la razón que subyace en ambos asuntos es la misma y, por lo tanto, las consideraciones formuladas en aquél asunto se hacen extensivas al presente caso.

127. Por consiguiente, al resultar infundados los argumentos planteados por el partido político, lo procedente es **reconocer la validez de las fracciones I y II del artículo 76; incisos b), c), e) y g) del artículo 77; párrafos segundo y tercero del artículo 81; párrafo segundo del artículo 260; último párrafo del artículo 289, y el artículo 363 del Código Electoral del Estado de México.**

128. **Tema 5. Violación a facultades del Instituto Nacional Electoral al establecer el régimen de colaboración con el órgano electoral local** (artículos 185, fracciones LVIII y LIX; 187, segundo párrafo; 196, fracciones XXXV y XXXVI; 201, fracción V; 223, párrafo penúltimo, del Código Electoral del Estado de México).

129. Los artículos impugnados prevén:

> "Artículo 185. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:
>
> LVIII. Coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en los términos de los convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, para promover y verificar que en la integración de las mesas directivas de casilla se realice una adecuada capacitación de los funcionarios designados, y en su caso, implementar las medidas conducentes para fortalecer el procedimiento de capacitación e integración.

LIX. Aprobar y expedir la normatividad necesaria para cumplir con lo mandatado por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral sobre el particular.

Artículo 187. El Instituto podrá, con la aprobación de la mayoría de votos del Consejo General, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción parcial de alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde. La solicitud podrá presentarse en cualquier momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, solo tendrá efectos durante el mismo.

A más tardar en el mes de septiembre del año en que inicie el proceso electoral, el Instituto promoverá la firma de los convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para garantizar el buen desarrollo del proceso.

En la firma de dichos convenios el Instituto buscará fortalecer y coadyuvar en los procedimientos de ubicación e integración de mesas directivas de casilla, capacitación de funcionarios electorales, fiscalización, acopio y traslado de paquetes electorales y en general en aquellos que fortalezcan los fines del Instituto.

Artículo 196. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

XXXV. Celebrar convenios con instituciones académicas y de educación superior, para impartir y evaluar las actividades de capacitación para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, en términos de lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.

XXXVI. Proponer a la aprobación del Consejo General la normatividad necesaria para cumplir con lo mandatado por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, así como, los reglamentos interiores que sean necesarios para el buen funcionamiento del Instituto.

Artículo 201. La Dirección de Participación Ciudadana tiene las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer los programas de educación cívica y difusión de la cultura política democrática, con base a los lineamientos y contenidos que dicten el Instituto Nacional Electoral, debiendo someterse a la aprobación del Consejo General, a través de la Junta General.

II. Diseñar, elaborar e integrar el material didáctico y los instructivos electorales, debiendo estos someterse a la aprobación del Consejo General, a través de la Junta General.

III. Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político electorales.

IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Nacional Electoral.

V. Dar seguimiento los programas de reclutamiento, capacitación, evaluación y selección de los aspirantes a ingresar al Servicio Nacional Electoral.

Artículo 223. En las elecciones de diputados y Ayuntamientos, las Mesas Directivas de Casilla se integrarán en los términos señalados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para el caso de las elecciones de Gobernador las mesas directivas de casilla se regularan por lo dispuesto en el presente Código.

En los procesos electorales en que se celebre una o varias consultas populares, se designará un escrutador adicional quien será el responsable de realizar el escrutinio y cómputo de la votación que se emita en dichas consultas.

Los ciudadanos que integren las mesas directivas de casilla deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección.

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía.

IV. Residir en la sección electoral respectiva.

V. No ser servidor público con cargo directivo o con funciones de mando, independientemente de su denominación, en la administración pública federal, estatal o municipal.

VI. No tener parentesco en línea directa con candidatos registrados en la elección de que se trate.

VII. No ser delegado municipal o miembro directivo de los consejos de participación ciudadana.

Los consejos distritales o municipales electorales, se coordinarán con los Consejos Distritales correspondientes del Instituto Nacional Electoral, a fin de que los ciudadanos designados para integrar las mesas directivas de casilla reciban, con la anticipación debida, al día de la elección, la capacitación adecuada para el desempeño de sus funciones, la cual estará a cargo de las juntas correspondientes.

En los cursos de capacitación a los integrantes de las mesas directivas de casilla, deberá incluirse la explicación relativa a los observadores electorales, en particular sus derechos y obligaciones.

130. Los partidos Encuentro Social, de la Revolución Democrática y MORENA impugnaron coincidentemente la injerencia a la esfera de competencia del Instituto Nacional Electoral, al establecer una participación o coadyuvancia del órgano público local electoral del Estado de México para participar de manera conjunta con éste.

131. Consideran que el órgano público local carece de atribuciones para *"… promover y verificar que en la integración de las mesas directivas de casilla se realice una adecuada capacitación de los funcionarios designados, y en su caso, implementar las medidas conducentes para fortalecer el procedimiento de capacitación e integración"*.

132. Así como que el artículo 223, párrafo penúltimo, en el que se invade la esfera de atribuciones del Instituto Nacional Electoral al establecer que los consejos distritales o municipales electorales, se coordinarán con los Consejos Distritales correspondientes del Instituto, a fin de que los ciudadanos designados para integrar las mesas directivas de casilla reciban con la anticipación debida, al día de la elección, la capacitación adecuada para el desempeño de sus funciones, la cual estará a cargo de las juntas correspondientes, lo cual constituye una injerencia en las atribuciones exclusivas del instituto sin que se sujeten a la determinación de delegación por parte del órgano de dirección nacional de la citada autoridad electoral nacional como lo determinan las bases constitucionales que se estiman violadas.

133. Que es facultad exclusiva del Instituto regular y operar lo relativo al Servicio Profesional Electoral Nacional, pues específicamente el respectivo Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional dispone tal atribución a favor de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, y está de más la salvedad de la norma impugnada al sujetar tal invasión de esfera.

134. Asimismo que es facultad exclusiva del Instituto celebrar convenios con instituciones académicas y de educación superior, para impartir y evaluar las actividades de capacitación para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, siendo que específicamente el estatuto dispone tal atribución a favor de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto.

135. Que respecto de la facultad de proponer a la aprobación del Consejo General del Órgano Público Local Electoral la normatividad necesaria para cumplir con lo establecido por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, no obstante la sujeción a presuntos lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, siendo que contrario a lo establecido en dichas normas generales combatidas, en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional, no expide lineamientos generales para que los órganos públicos locales electorales regulen tal materia, sino que es el instituto la única autoridad facultada para regular de manera integral del citado servicio profesional.

136. Que en el mismo sentido se encuentra la atribución de la Dirección de Participación del Órgano Público Local Electoral de dar seguimiento a los programas de reclutamiento, capacitación, evaluación y selección de los aspirantes a ingresar al Servicio Nacional Electoral, atribuciones propias de los órganos del Instituto Nacional Electoral.

137. Que el Consejo General, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral local coadyuva con el Instituto Nacional Electoral en los términos de los convenios de colaboración para promover y verificar que en la integración de las mesas directivas de casilla se realice una adecuada capacitación de los funcionarios designados, y en su caso de implementar las medidas conducentes para fortalecer el procedimiento de capacitación e integración.

138. Que también cuenta con la atribución de aprobar y expedir la normatividad necesaria para cumplir con lo mandatado por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y los lineamientos emitidos por el instituto.

139. Precisados los argumentos de invalidez hechos valer por los promoventes, se tiene en cuenta que los preceptos impugnados, en concreto los artículos 185, fracción LIX; 196, fracciones XXXV y XXXVI, y 201, fracción V, regulan las facultades del organismo público local para aprobar y expedir la normativa necesaria para cumplir con lo dispuesto por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral; para celebrar convenios con instituciones académicas y de educación superior, así como impartir y evaluar las actividades de capacitación para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; y para el seguimiento de los programas de reclutamiento, capacitación, evaluación y selección de los aspirantes a ingresar a este servicio.

140. El artículo 41, fracción V, apartado D[38], de la Constitución General reserva al Instituto Nacional Electoral la reglamentación de la totalidad del servicio profesional electoral nacional, pues expresamente menciona que el mismo se compondrá de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos de dicho instituto y de los órganos públicos electorales de las entidades federativas; y que al referido organismo constitucional autónomo le corresponde la regulación de su organización y funcionamiento, sin darle alguna intervención a las entidades federativas ni a sus organismos públicos electorales en la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia o disciplina[39].

141. Lo anterior se corrobora en el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce en el que se manifiesta que *"una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total"*[40].

---

[38] **Artículo 41.-** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
(…)
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.

[39] "**Artículo 41.-** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
(…)
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
(…)
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.
(…)."

[40] "**SEXTO.** El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión."

142. Asimismo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se incluyen los fines[41] del Instituto Nacional Electoral así como todo un apartado relativo al servicio profesional electoral nacional, en el que se menciona que éste corresponde regularlo en única instancia al Instituto Nacional Electoral, el cual emitirá las normas estatutarias correspondientes y que, a su vez, se conformará por dos sistemas: uno para el instituto nacional y otro para los organismos públicos electorales[42].

---

[41] Artículo 30.
1. Son fines del Instituto:
…
3. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente artículo.

[42] "**Artículo 201.**
1. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se regulará, la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.
2. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución orientan la función estatal de organizar las elecciones serán los principios para la formación de los miembros del servicio.
3. La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por esta Ley y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General.
4. La Junta General Ejecutiva elaborará el proyecto de Estatuto, que será sometido al Consejo General por el Secretario Ejecutivo, para su aprobación.
5. El Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas contenidas en este Título."
"Artículo 202.
1. El Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales.
2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional.
3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de mando y de supervisión.
4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades especializadas.
5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles o rangos permitirán la promoción de los miembros titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto o en el organismo público local, según corresponda al sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto.
6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La vía de cursos y prácticas queda reservada para la incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en cargos administrativos.
7. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto.
8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a los funcionarios que cubrirán los cargos establecidos por esta Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas en los siguientes términos:
a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de Director Ejecutivo así como las plazas de otras áreas que determine el Estatuto;
b) En las juntas locales y distritales ejecutivas, los cargos de las vocalías ejecutivas y vocalías, así como las demás plazas que establezca el Estatuto;
c) En los Organismos Públicos Locales las plazas que expresamente determine el Estatuto, y
d) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto.
9. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución, conforme a lo establecido en el Libro Octavo de esta Ley."
"Artículo 203.
1. El Estatuto deberá establecer las normas para:
a) Definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o puestos a los que dan acceso;
b) Formar el catálogo general de cargos y puestos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, así como sus requisitos;
c) El reclutamiento y selección de los interesados en ingresar a una plaza del Servicio, que será primordialmente por la vía del concurso público;
d) Otorgar la titularidad en un nivel o rango, según sea el caso;
e) La formación y capacitación profesional y los métodos para la evaluación del rendimiento;
f) Los sistemas de ascenso, movimientos y rotación a los cargos o puestos, cambios de adscripción y horarios, así como para la aplicación de sanciones administrativas o remociones. Los ascensos se otorgarán sobre las bases de mérito y rendimiento;
g) Contratación de prestadores de servicios profesionales para programas específicos y la realización de actividades eventuales, y
h) Las demás necesarias para la organización y buen funcionamiento del Instituto.
2. Asimismo el Estatuto deberá contener las siguientes normas:
a) Duración de la jornada de trabajo;
b) Días de descanso;
c) Períodos vacacionales, así como el monto y modalidad de la prima vacacional;
d) Permisos y licencias;
e) Régimen contractual de los servidores electorales;
f) Ayuda para gastos de defunción;
g) Medidas disciplinarias, y
h) Causales de destitución.
3. El Secretario Ejecutivo del Instituto podrá celebrar convenios con instituciones académicas y de educación superior para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para aspirantes y miembros titulares del Servicio Profesional Electoral Nacional, y en general del personal del Instituto y de los Organismos Públicos Locales."

143. A partir de lo anterior, **los artículos 185, fracción LIX y 196, fracciones XXXV y XXXVI y artículo 201, fracción V del Código Electoral del Estado de México son inconstitucionales**, porque otorgan la facultad al organismo público local para aprobar y expedir la normativa necesaria para cumplir con lo dispuesto por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como para celebrar convenios con instituciones académicas y de educación superior, así como impartir y evaluar las actividades de capacitación para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y dar seguimiento a los programas de reclutamiento, capacitación, evaluación y selección de los aspirantes a ingresar al Servicio Nacional Electoral.

144. Como se advierte, se trata de cuestiones que –en términos de la Constitución y de la ley general– son competencia del Instituto Nacional Electoral. Aun cuando algunas de ellas únicamente reproducen las normas establecidas en la Ley General, lo cierto es que éstas no necesitan ser reproducidas por las entidades federativas, pues la citada ley es de observancia general en todo el territorio nacional[43].

145. Por tanto, se declara la invalidez de los artículos **185, fracción LIX y 196, fracciones XXXV y XXXVI y artículo 201, fracción V del Código Electoral del Estado de México.**

146. Por otra parte, respecto de la impugnación de los numerales 185, fracción LVIII, —atribución del Consejo General de aprobar y expedir la normatividad necesaria para cumplir con lo establecido por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y los lineamientos emitidos por éste—; 187, párrafo segundo —facultad del instituto local para celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para garantizar el buen desarrollo del proceso— y 223, párrafo penúltimo —coordinación entre los consejos distritales o municipales electorales con los Consejos Distritales correspondientes del Instituto Nacional Electoral para que los ciudadanos designados para integrar las mesas directivas de casilla reciban la capacitación adecuada para el desempeño de sus funciones, la cual estará a cargo de las juntas correspondientes—; atribuciones que el Congreso estatal arroga al organismo público local y que resultan inconstitucionales.

147. Estas disposiciones invaden la esfera de competencia del Instituto Nacional Electoral ya que de conformidad al artículo 41, apartado B, inciso a), numerales 1 y 4[44], de la Constitución Federal, corresponde exclusivamente a dicho Instituto, tanto en los procesos federales como locales, implementar todo lo relativo a la capacitación electoral, a la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; y para que los organismos públicos locales puedan realizar tareas de capacitación, es necesario que exista una delegación expresa del Consejo General del Instituto en cita, de conformidad con lo provisto en el artículo 41, apartado C, inciso b) de la Carta Magna[45].

"Artículo 204.
1. En el Estatuto se establecerán, además de las normas para la organización del Servicio Profesional Electoral Nacional, las relativas a los empleados administrativos y de trabajadores auxiliares del Instituto y de los Organismos Públicos Locales.
2. El Estatuto fijará las normas para su composición, ascensos, movimientos, procedimientos para la determinación de sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo."
"Artículo 205.
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de cualquier interés particular.
2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.
3. El personal perteneciente al Servicio adscrito a los órganos públicos locales podrá ser readscrito y gozar de rotación en sus funciones conforme a los requerimientos institucionales, para ello el Estatuto definirá el procedimiento correspondiente, debiendo considerar la opinión del órgano público que corresponda.
4. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, con motivo de la carga laboral que representa el año electoral, al ser todos los días y horas hábiles, tendrán derecho a recibir una compensación derivada de las labores extraordinarias que realicen, de acuerdo con el presupuesto autorizado."
"Artículo 206.
1. Todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución.
2. El personal del Instituto será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
3. Las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia.
4. Las relaciones de trabajo entre los órganos públicos locales y sus trabajadores se regirán por las leyes locales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución."

[43] Similar criterio fue adoptado por este Tribunal Pleno al resolver el tres de septiembre de dos mil quince, la acción de inconstitucionalidad 42/2015 y sus acumuladas 43/2015 y 44/2015.

[44] **Artículo 41**.
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
…
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

[45] Criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015, resuelta el 11 de febrero de 2016, bajo la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora Icaza.

148. Asimismo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[46] se establecen las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, entre las que se enumeran la capacitación electoral y la ubicación de las casillas y designación de los funcionarios de sus mesas directivas[47].

149. Por lo tanto se declara la invalidez de los artículos **185, fracción LVIII; 187, párrafo segundo, y 223, párrafo penúltimo, del Código Electoral del Estado de México.**

150. **Tema 6. Restricción a la facultad de dar fe pública por la introducción de un elemento de valoración subjetivo contrario al principio de certeza electoral ("que puedan influir o afectar la equidad en las contiendas")** (artículo 231, fracción I, del Código Electoral del Estado de México).

151. El artículo impugnado prevé:

> "Artículo 231. En el ejercicio de la función de oficialía electoral, el Secretario Ejecutivo, los vocales secretarios de las juntas distritales y municipales, así como los demás funcionarios en quien se delegue esta función tendrán las siguientes atribuciones, las cuales deberán realizarlas de manera oportuna.
>
> (REFORMADA, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> I. A petición de los partidos políticos, candidatos independientes, representantes ante los órganos desconcentrados y ciudadanos, dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales. "

152. Los partidos políticos Encuentro Social, de la Revolución Democrática y MORENA, en sus conceptos sexto y séptimo de invalidez, respectivamente, manifestaron lo siguiente:

- Consideran que son violentados los artículos 116 fracción IV, inciso c), numeral 6o. y 133 de la Constitución General de la República.
- La norma constitucional no guarda conformidad con la base constitucional señalada como violada. Se restringe el ejercicio de petición de dar fe pública y la facultad de los servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral al sujetarlos a una condición no conforme a la Constitución Federal.
- Señalan que el párrafo cuarto de la base V del artículo 41 establece a la oficina electoral investida con fé pública; por lo que tal disposición extrapolada a la legislación comicial local implica reconocer por analogía que el ejercicio del derecho de acceso a la fé pública no puede imponer como condición el que actos y hechos a certificar en materia electoral deban ser aquellos que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales.

153. A juicio de este Tribunal Constitucional, son **infundados** los conceptos de invalidez vertidos por los promoventes en atención a lo siguiente. La Constitución Federal establece en su artículo 116, párrafo cuarto lo siguiente:

> "Art. 116.-
>
> (…)
>
> IV.- De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:
>
> (…)
>
> (REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)
>
> c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

---

[46] Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
I. La capacitación electoral;
…
IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

[47] Similar criterio fue adoptado por este Tribunal Pleno al resolver el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la acción de inconstitucionalidad 51/2014 y sus acumuladas 77/2014 y 79/2014; así como la diversa 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, en sesión de dos de octubre del indicado año.

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.

4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley.

154. En este sentido, el legislador del Estado de México ejerció su libertad de configuración de conformidad con el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal para replicar en la fracción I del artículo 231 del Código comicial local la previsión contenida en el diverso numeral 98 párrafo tercero inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; lo cual se concatena con una simple confronta en el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.	**Código Electoral del Estado de México.**
Artículo 98. (…) 3. **La ley local establecerá los servidores públicos que estarán investidos de fe pública para actos o hechos de naturaleza electoral, así como su forma de delegación**, los que deberán ejercer esta función oportunamente y tendrán entre otras, las siguientes atribuciones: a) A petición de los partidos políticos, **dar fe** de la realización de **actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales locales**;	Artículo 231. En el ejercicio de la función de oficialía electoral, el Secretario Ejecutivo, los vocales secretarios de las juntas distritales y municipales, así como los demás funcionarios en quien se delegue esta función tendrán las siguientes atribuciones, las cuales deberán realizarlas de manera oportuna. (REFORMADA, G.G. 31 DE MAYO DE 2016) I. A petición de los partidos políticos, **candidatos independientes, representantes ante los órganos desconcentrados y ciudadanos**, **dar fe** de la realización **de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales**.

155. Como se observa, en el caso de la norma combatida se incorpora una adición respecto de la facultad para incoar ante los servidores públicos señalados, pues ahora se posibilita que la petición provenga de candidatos independientes, representantes ante los órganos desconcentrados y ciudadanos; y no solamente a petición de los partidos políticos.

156. Derivado de lo anterior, y en atención a la libertad de configuración delineada por parte del legislador mexiquense en el marco del artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 6o., de la Constitución Federal, en concordancia con el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la facultad de dar fe respecto de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales, por parte de las autoridades encargadas de la función de oficialía electoral – estos son: el Secretario Ejecutivo, los vocales secretarios de las juntas distritales y municipales, así como los demás funcionarios en quien se delegue esta función- prevista en la fracción I del artículo 231 del Código Electoral del Estado de México, no vulnera el texto de la Norma Suprema.

157. Finalmente conviene señalar que respecto de la frase contenida en la disposición impugnada: "*que pueda influir o afectar la equidad en las contiendas electorales*", ésta no condiciona dicha atribución a que los actos únicamente estén relacionados con las contiendas electorales, sino que debe entenderse de manera genérica.

158. En consecuencia con lo anterior, lo procedente **es reconocer la validez del artículo 231 fracción I del Código Electoral del Estado de México.**

159. **Tema 7. Falta de establecimiento de medidas de vigilancia para la apertura del lugar de resguardo de la paquetería electoral** (artículo 347, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de México).

160. La norma tildada de inconstitucional establece lo siguiente:

> "Artículo 347. El Consejo Distrital o Municipal hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los mismos.
>
> Bajo su más estricta responsabilidad los Consejeros Distritales o Municipales, deben resguardar en forma adecuada la paquetería electoral que reciben. Una vez cerrada la bodega o lugar de resguardo de la paquetería, sólo se puede volver a abrir con la presencia de la mayoría de representantes de partidos o candidatos independientes.
>
> Las bodegas en que se resguarden los paquetes electorales, podrán contar con al menos una cámara de circuito cerrado que permita observar su interior desde la sala en que se celebren las sesiones de consejo. "

161. Los partidos Encuentro Social, de la Revolución Democrática y MORENA coinciden al señalar que dicho precepto viola diversas disposiciones constitucionales, como lo son los artículos 41, fracciones II y V, y 116, fracción IV, incisos a) y b), cuyo contenido es el siguiente:

> Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
>
> …
>
> II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
>
> (…)
>
> V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución. Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

> Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
>
> (…)
>
> IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:
>
> (…)
>
> a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;
>
> b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

162. Al respecto, los promoventes hacen valer como concepto de invalidez el hecho de que el precepto de referencia no establezca condiciones de vigilancia que contemplen a todos los partidos políticos, como podría ser, la citación a todos los representantes. Los promoventes consideran que ante la falta de tal citación se deja a criterio del o los representantes de cada partido si asistirán o no. Así, el texto del precepto que se impugna se limita a autorizar la apertura del lugar del resguardo del material electoral bastando para ello la presencia de la mayoría de los representantes de los partidos.

163. Por tanto, consideran, existe una violación al principio constitucional de certeza jurídica en materia electoral, violación que se actualiza al no existir en la norma un mecanismo de notificación a todos los partidos para efecto de garantizar que se encuentren presentes al momento de la apertura de la bodega o lugar de resguardo.

164. Al respecto, este Tribunal considera que el concepto de invalidez es infundado por las siguientes razones:

165. De la lectura del precepto combatido, no se advierte que ante la ausencia de previsiones que, a juicio de los partidos promoventes, pudieran generar certidumbre al supuesto contenido en la norma combatida, deba declararse su inconstitucionalidad; por el contrario, el propio Código impugnado contiene previsiones que interpretadas de manera sistemática y conforme salvaguardan dicho principio rector.

166. En efecto, debe tenerse en cuenta que el precepto tildado de inconstitucional se ubica dentro de las previsiones que rigen la etapa de la jornada electoral, en específico, lo relativo a la clausura de las casillas una vez culminada la votación y de la remisión de los expedientes y paquetes electorales a los Consejos Distritales o Municipales según corresponda. En este último caso, el artículo 343 del Código Electoral del Estado de México[48] prevé los plazos genéricos[49] dentro de los cuales dicha documentación tiene que ser remitida por parte de los funcionarios de casilla a los citados Consejos, a saber: a) Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del Distrito. b) Hasta doce horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del Distrito. c) Hasta veinticuatro horas cuando se trate de casillas rurales.

167. De igual manera, el artículo 346[50] del propio ordenamiento, prevé la circunstancia de que la paquetería electoral pueda ser recibida fuera de esos plazos solamente cuando medie caso fortuito o causa de fuerza mayor.

---

[48] Artículo 343. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital o Municipal que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura:
De la elección de Gobernador:
a) Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito.
b) Hasta doce horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito.
c) Hasta veinticuatro horas cuando se trate de casillas rurales.
Los consejos distritales previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casillas en que se justifique.

[49] Dicho plazo si bien está previsto para la elección de Gobernador, este Tribunal Pleno estima que aplica para cualquier tipo de elección.

[50] Artículo 346. Los paquetes con los expedientes de casillas podrán ser entregados al Consejo Distrital o municipal fuera de los plazos establecidos, solamente cuando medie caso fortuito o causa de fuerza mayor.

168. Por su parte, el precepto combatido en su primer párrafo, establece la obligación de los Consejos Distritales y/o Municipales de hacer constar en acta circunstanciada, las causas que se invoquen en el retraso de la entrega de los paquetes electorales; en tanto que el segundo párrafo prevé en primera instancia, la obligación de los Consejos de resguardar en forma adecuada esa documentación y, por su parte, la porción normativa impugnada establece que una vez cerrada la bodega o lugar de resguardo de la paquetería, solamente puede abrirse dicho local con la presencia de la mayoría de representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes.

169. Como se ve, la porción normativa impugnada se ubica en un supuesto de excepción, en el cual, el local en el que se resguarde la paquetería electoral solamente debe abrirse para depositar los paquetes electorales que lleguen a dicho sitio de manera extemporánea, supuesto en el que, para brindar certeza y transparencia de dicho acto de apertura, se requiere la presencia de una mayoría de representantes de los partidos o candidatos independientes; situación que tiene como presupuesto indispensable que los correspondientes Consejos Electorales notifiquen de dicho evento a los citados actores políticos a efecto de que acudan a ese evento.

170. Efectivamente, contrario a lo aducido por los partidos promoventes, el hecho de que la norma combatida no señale de manera expresa la notificación que deba darse a los representantes partidistas y de candidatos independientes de que se reabrirá el local de resguardo de la paquetería electoral, no hace que dicho numeral sea inconstitucional, puesto que, como se señaló, del propio numeral se advierte que trae aparejada de manera implícita esa situación, en tanto que sería irrazonable que se exigiera el requisito de una presencia cuando menos mayoritaria, sin considerar de manera previa, que se debe realizar una notificación para tales efectos.

171. Partiendo de la anterior interpretación conforme al principio de certeza que rige a la materia electoral a nivel constitucional, es que los Consejos Distritales y Municipales a quienes va dirigida la obligación que se prevé en la norma combatida, deberán, en caso de presentarse el supuesto normativo regulado, actuar de conformidad con la citada interpretación, esto es, se encuentran obligados a notificar a la totalidad de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, que se reabrirá el local en que se resguardan los paquetes y expedientes de casilla, para recibir aquella documentación que se entregue fuera de los plazos legales establecidos al efecto ante una presencia mayoritaria de representantes.

172. Por lo anterior, al ser infundado el concepto de invalidez formulado por los partidos Encuentro Social y de la Revolución Democrática, **debe reconocerse la validez del párrafo segundo del artículo 347 del Código Electoral del Estado de México**, al tenor de la interpretación conforme establecida en este apartado.

173. **Tema 8. Impedimento a los representantes de partido del ejercicio del derecho al voto si se encuentra fuera de su sección electoral** (artículo 284, fracción IX, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México).

174. El artículo impugnado indica:

> "Artículo 284. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener los siguientes datos:
>
> (…)
>
> IX. Firma del representante o del dirigente del partido político que haga el nombramiento. (…)
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> Al nombramiento se anexará el texto de los artículos de este Código que correspondan a las funciones del representante. Si la credencial para votar del representante es de otra demarcación electoral se incluirá la leyenda de forma visible "no puede votar", evitando que evada los requisitos para votar en las elecciones locales.

175. Los partidos políticos Encuentro Social, de la Revolución Democrática y Movimiento Regeneración Nacional en sus octavos, y noveno conceptos de invalidez respectivamente señalaron en síntesis lo siguiente:

- Se violan los artículos 35 fracción I, 41, 116, fracción IV, incisos a) y b) de la Constitución Federal pues la porción normativa no es conforme a las garantías del sufragio activo.
- Se impide de manera categórica el ejercicio del voto al estar fuera de su sección electoral, que es la demarcación más básica.

- Consideran que el artículo 317 del Código local fija las reglas para el ejercicio del voto de los representantes ante las casillas. Asimismo la norma es incongruente con el acuerdo INE/CG1070/2015 del Instituto Nacional Electoral.

176. A juicio de este Tribunal Pleno, tal argumentación deviene en **infundada** en atención a lo siguiente:

177. Los partidos políticos promoventes sostienen que el artículo impugnado se traduce como un impedimento del sufragio activo para los representantes de los partidos, pues consideran además que la regla a la que debe acudirse es aquella contenida en el numeral 317 del Código Electoral del Estado de México.

178. En principio debe recordarse que ya esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estudiado el tema de las restricciones e impedimentos al Sufragio Activo respecto de grupos de personas a las que se ha tratado de excluir del ejercicio de sus derechos políticos, tales como personas con discapacidad, personas denominadas por el legislador ordinario como "toxicómanos", "enfermos mentales" y "ebrios consuetudinarios"; declarando la invalidez de tales restricciones entre otras razones debido a que se apoyaron en categorías discriminatorias y en atención a que:

> "…sólo el Poder Constituyente puede prever de forma taxativa las restricciones o la suspensión de los Derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en el entendido de que la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los Derechos Humanos no puede ser arbitraria y de ninguna manera se puede delegar, declinar o autorizar dicha competencia sustantiva a los Congresos de las entidades federativas.[51]"

179. En segundo lugar, es conveniente señalar que la regla introducida en el último párrafo del artículo 284 del Código Electoral del Estado de México, no se refiere a una restricción al sufragio activo por una de las categorías sospechosas contempladas en el artículo 1o. párrafo quinto de la Constitución Federal[52], sino a un ámbito de aplicación territorial o condición geográfica para ejercer el sufragio activo por parte de los representantes de los partidos políticos.

180. En este sentido, este Tribunal Pleno debe precisar el sentido de la expresión "demarcación territorial" para determinar si ésta configura o no una limitación objetiva para que los representantes de los partidos puedan o no ejercer su derecho político al sufragio activo en el contexto comicial local. Así, la propia legislación electoral estadual prevé lo siguiente en su artículo 267:

> "Artículo 267. El territorio del Estado de México se divide en secciones electorales que tendrán como máximo tres mil electores.
>
> En toda sección electoral, por cada setecientos cincuenta electores o fracción, se instalará una casilla básica para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más, se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.
>
> El Instituto Estatal, deberá solicitar al Instituto Nacional la redemarcación electoral, cuando existan elementos para actualizarla, otorgando la colaboración e información necesaria para que dicho órgano nacional la realice."

181. Así, en principio el territorio mexiquense se divide en "secciones electorales", pero para efectos de "redemarcación electoral" es el Instituto Local el que tiene la facultad de solicitar al Instituto Nacional Electoral una nueva "redemarcación". Por su parte, la Constitución Federal establece en su artículo 41 Base V, Apartado B inciso a) numeral 2 lo siguiente:

> "Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:
>
> a) Para los procesos electorales federales y locales:
>
> (…)

---

[51] Véase: Acción de Inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas, 91/2014, 92/2014 y 93/2014, sobre el tema en particular se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con salvedades, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán con salvedades y Presidente Silva Meza.

[52] "Artículo 1°

(…)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;"

182. En este caso, es evidente que el Instituto Nacional Electoral tiene la competencia constitucional de origen para determinar la geografía electoral para efectos de los procesos electorales locales, -en este escenario para el Estado de México- y en consecuencia también debe acudirse a la legislación en especie, con motivo de la reserva de ley mandatada por el propio artículo 41, Base IV, apartado B, de la Constitución Federal. Ahora bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

"Capítulo IV

De la Distritación Electoral

Artículo 214.

1. La demarcación de los distritos electorales federales y locales será realizada por el Instituto con base en el último censo general de población y los criterios generales determinados por el Consejo General.

2. El Consejo General del Instituto ordenará a la Junta General Ejecutiva los estudios conducentes y aprobará los criterios generales. La distritación deberá, en su caso, aprobarse antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse.

3. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, una vez establecida la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales, basada en el último censo general de población, el Consejo General, aprobará, en su caso, la distribución de los distritos electorales entre las entidades federativas, asegurando que la representación de un estado sea al menos de dos diputados de mayoría.

4. Para la elección de los 200 diputados elegidos por el principio de representación proporcional, el Consejo General aprobará, en su caso, previo al inicio del proceso electoral, la conformación de las cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país."

183. Como se observa, se reafirma la facultad constitucional y legal del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo las demarcaciones de los distritos electorales locales y el propio consejo General tiene la facultad para aprobar la distribución de los distritos electorales entre las entidades federativas. Por su parte y para efectos de determinar la forma o modalidad para ejercer el sufragio activo, conviene traer a cita los numerales 7 y 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, misma que dispone lo siguiente:

"TÍTULO PRIMERO

De la Participación de los Ciudadanos en las Elecciones

CAPÍTULO I

De los Derechos y Obligaciones

Artículo 7.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.

4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.

> Artículo 9.
>
> 1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:
>
> a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por esta Ley, y
>
> b) Contar con la credencial para votar.
>
> 2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por esta Ley.

184. Por lo anterior, debe precisarse que los artículos 34 y 35, fracción I, de la Constitución Federal[53], en conexión con los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[54] y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[55], reconocen el derecho al sufragio activo, mismo que debe concatenarse con las previsiones de los artículos 7 y 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales bajo los siguientes requerimientos:

    i. La Ciudadanía por mayoría de edad,

    ii. La Inscripción en el Registro Federal de Electores,

    iii. Contar con la credencial para votar y

    iv. <u>El voto se realizará en cada distrito electoral de conformidad con la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo casos de excepción señalados por la Ley.</u>

185. De igual manera debe señalarse que el numeral 23 párrafo segundo del Pacto de San José, reconoce que la ley puede reglamentar el ejercicio de los Derechos Políticos en razón de "**residencia**"; lo cual es armónico con el artículo 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en torno a la emisión del sufragio en la sección electoral que comprenda al **domicilio del ciudadano**, y con la interpretación sobre ello que ha establecido el Comité de Derechos Humanos en su Observación General 25:

> "Los Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar que todas las personas que tengan derecho a votar puedan ejercerlo. Cuando se exige que los votantes se inscriban, su inscripción debe facilitarse, y no deberán ponerse obstáculos para efectuarla. Si, para hacer la inscripción, existen requisitos relativos al lugar de residencia, éstos serán razonables y no deberán imponerse de forma que impidan a las personas que carezcan de vivienda ejercer su derecho de voto.[56]"

186. Así, el hecho de que la Constitución Federal establezca la facultad del Instituto Nacional Electoral para determinar la geografía electoral, realizar la demarcación de los distritos electorales y la ley pueda reglamentar el Derecho al sufragio activo en razón de la residencia o de conformidad con la sección electoral que abarque el domicilio del ciudadano en cuestión, no torna inconstitucional una

---

[53] **Artículo 34**.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I.- Haber cumplido 18 años, y
II.- Tener un modo honesto de vivir.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012)
Artículo 35.- Son derechos del ciudadano:
I.- Votar en las elecciones populares;

[54] "**Artículo 23**. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal."

[55] "**Artículo 25**.
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país."

[56] Naciones Unidas, CCPR, COMENTARIO GENERAL APROBADO POR EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PARRAFO 4 DEL ARTÍCULO 40 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, 27 de agosto de 1996, Párrafo: 11.

norma que establezca el referido requisito o determinación geográfica para ejercer el sufragio activo, pues incluso la legislación electoral mexicana reconoce excepciones a ello y los tratados de Derechos Humanos también se han interpretado en el sentido de que las personas que carezcan de domicilio o residencia no se vean impedidos de ejercer el sufragio activo debido a requerimientos faltos de razonabilidad o desproporcionados.

187. Por su parte, este Tribunal Pleno advierte con fundamento en el artículo 1o. última parte de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal[57] en relación con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Instituto Nacional Electoral publicó su: "***Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Catálogo de municipios y secciones que conforman el Marco Geográfico Electoral del Estado de México, como insumo para la generación de los escenarios de Distritación***", en cuyos anexos se contempla que, de conformidad con la información de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, el Estado de México se encuentra inserto como la Entidad Federativa número 15 (quince), con 45 (cuarenta y cinco) distritos locales; en consecuencia, son éstas las demarcaciones electorales a las que ha hecho referencia el Instituto Nacional Electoral, mientras que las **secciones electorales** son aquellas en donde se instalará una casilla básica para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma, tal y como se estipula en el artículo 267 del Código Electoral del Estado de México.

188. Ahora bien, debe precisarse que la norma impugnada lejos de verificarse como inválida, se encuentra complementada con los diversos numeral 317, 326 y 327 del Código Electoral local, que señalan lo siguiente:

> "Artículo 317. Los representantes de los candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados. Para la elección de Gobernador podrán votar quienes residan en el territorio del Estado.
>
> En todo caso el secretario de la mesa directiva de casilla anotará el nombre completo y la clave de la credencial para votar del representante, al final de la lista nominal."
>
> Artículo 326. En las casillas especiales se aplicarán en lo procedente las reglas generales establecidas en los artículos anteriores y sólo podrán votar en ellas, además de los funcionarios de casilla y de los representantes de los partidos o de los candidatos independientes, quienes se encuentren fuera del municipio en el que tengan su domicilio. En todo caso, el Secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de electores en tránsito, los datos de la credencial para votar de los sufragantes.
>
> Artículo 327. Una vez asentados los datos a que se refiere el artículo anterior, se observará lo siguiente:
>
> I. Si está fuera del municipio de su domicilio, pero dentro del distrito electoral que le corresponde, podrá votar para diputados.
>
> II. Si está fuera del distrito de su domicilio, podrá votar para la elección de Gobernador y para la elección de diputados por el principio de representación proporcional; en este último caso, votará con la boleta para la elección de diputados de mayoría relativa, en la que el Presidente de la mesa directiva asentará la leyenda "representación proporcional" o la abreviatura "R.P.", y su voto sólo se computará para la elección por el principio de representación proporcional.

189. De lo anterior se observa, que lejos de vedarse el Derecho al Sufragio Activo para los representantes de candidatos, partidos políticos y coaliciones, se reconoce que podrán ejercerlo en aquella casilla en la que se encuentren acreditados, e incluso para Gobernador podrán votar quienes residan en el territorio del Estado. Sin embargo, si se tratara de otro tipo de elección, -como lo sería la relativa a Diputados Locales[58] o Munícipes-, el ejercicio del Sufragio Activo de los representantes de partidos, candidatos y coaliciones se vería condicionado a la residencia de la sección y distrito al que pertenecen, pues también la Ley General prevé que el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano. De igual manera, en el caso de las casillas especiales, se permite la emisión del sufragio a los citados representantes para la elección de Diputados de Mayoría Relativa cuando están fuera del municipio de su domicilio, pero dentro de su distrito electoral, así como para la elección de Gobernador y de Diputados de Representación Proporcional.

---

[57] "(…) A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."

[58] En el Estado de México, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Local, la legislatura se integra con 45 diputados electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación proporcional.

190. En este sentido, si la norma impugnada establece una circunstancia reglamentaria para ejercer el sufragio activo, esto es: la relativa a que **si la credencial para votar del representante es de otra demarcación electoral** incluya la leyenda "**no puede votar**" para evitar que se evadan los requisitos en las elecciones locales; dicha regla debe ser leída como una condición geográfica para ejercer el voto por parte de los representantes de candidatos, partidos políticos y coaliciones en atención a la misma demarcación territorial –sección y distrito - y no como un impedimento; pues interpretar lo contrario admitiría abiertamente que un elector de otro distrito o inclusive de otra entidad federativa, pudiera votar para diputados locales o munícipes en un lugar que no es congruente con la sección en donde se encuentra la residencia o domicilio del ciudadano, desvirtuando con ello el principio de representación en el marco de las elecciones locales; debido a esto último se concatena la excepción a la que alude el artículo 9 de la Ley General al instituir que el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano; pues bien, en el caso concreto la excepción se encuentra prevista en el primer párrafo del artículo 317 del Código Electoral del Estado de México, dado que los representantes de los candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados y para la elección de Gobernador del Estado de México podrán ejercer su sufragio activo si cuentan con residencia en el territorio del Estado, esto es, se trata de una regla más laxa en cuanto al distrito o sección en donde se ubique su domicilio siempre y cuando dichos representantes cuenten con la residencia en el Estado de México.

191. En consecuencia con lo anterior, lo procedente **es reconocer la validez del artículo 284 fracción IX segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México.**

192. **Tema 9. Transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones** (artículos 19, primer párrafo; 26, segundo párrafo; 28, fracciones III y IV; 74; 75; 118; 120, fracción II, inciso g), numeral 2.; 241, tercer párrafo; 254; 260, párrafos primero, segundo y quinto; 264, párrafos tercero y cuarto; 289, penúltimo y último párrafos; 332, fracción III; 333 fracción V, inciso a); 334, fracción I; 336, fracción I; 369, segundo párrafo; 377, párrafos primero y penúltimo, fracción I; 379, penúltimo y último párrafos; 380, fracciones I, II, III, IV y último párrafo; 381, primer párrafo; 429, quinto párrafo, fracción I; 484, tercer párrafo del Código Electoral del Estado de México).

193. La minoría legislativa del Congreso del Estado de México y el Partido Acción Nacional solicitaron la invalidez de las disposiciones arriba citadas del Código Electoral del Estado de México, alegando una invasión a la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones, facultad concedida en exclusiva a dicho órgano legislativo en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el inciso f) de la fracción I del artículo transitorio segundo de la reforma constitucional en materia político electoral de diez de febrero de dos mil catorce.

194. Para sostener que las entidades federativas no se encuentran facultadas para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en la Ley General de Partidos, cita el precedente de la acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015, resuelta en sesión de once de febrero de dos mil dieciséis.

195. Ahora, a efecto de analizar si efectivamente los numerales señalados están regulando la materia de coaliciones tal y como aducen los promoventes, debe señalarse que este Tribunal Pleno, con motivo de la reforma electoral ocurrida en el año dos mil catorce ya se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre este tema.

196. Así, en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014[59], resuelta en sesión de nueve de septiembre de dos mil catorce, en la que este Tribunal Pleno analizó la constitucionalidad del régimen de coaliciones previsto en la Ley General de Partidos, concluyó que las entidades federativas no se encuentran facultadas para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ya que es una competencia del Congreso de la Unión por disposición de la fracción

[59] Fallada en sesión de 9 de septiembre de 2014, bajo la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En cuanto al tema de la incompetencia de los legisladores locales para legislar en materia de coaliciones se obtuvo una mayoría de 9 votos con salvedades de los Ministros Franco González Salas, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo; el Ministro Pérez Dayán precisó que sólo como marco referencial; y la Ministra Luna con precisiones sobre que es por suplencia de la queja y no como marco regulatorio. Cabe señalar que con posterioridad a este precedente en las subsecuentes acciones de inconstitucionalidad en las que se analizó este tema y se aplicó el aludido criterio, las votaciones si bien fueron mayoritarias —7 votos—, no se alcanzaba la votación mínima de 8 votos para declarar la invalidez por razón de incompetencia del legislador local, por lo que las acciones se desestimaban. Fue hasta que se resolvió la acción de inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada 88/2014, en sesión de 9 de junio de 2015, y ya con una nueva integración de este Tribunal Pleno dado que se incorporó el señor Ministro Eduardo Medina Mora, que al retomarse las razones de incompetencia del legislador local para legislar en materia de coaliciones, se alcanzó una votación mayoritaria de 8 votos a favor de la invalidez por incompetencia de las legislaturas locales.

XXIX-U del artículo 73 de la Constitución Federal y el inciso f) de la fracción I del artículo segundo transitorio de la reforma de diez de febrero de dos mil catorce, cuya observancia guarda la misma obligatoriedad que el propio articulado constitucional.

197. En acciones de inconstitucionalidad subsecuentes se impugnaron diversas disposiciones electorales de las entidades federativas con base en este criterio; sin embargo, se desestimaron por no obtener los ocho votos necesarios para declarar su invalidez. No fue sino hasta que el Tribunal Pleno resolvió con una nueva integración[60] la acción de inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada 88/2014, que este criterio logró obtener la votación calificada de ocho votos, en sesión de nueve de junio de dos mil quince.[61]

198. A partir de entonces, este criterio ha sido reiterado por el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 42/2015 y sus acumuladas 43/2015 y 44/2015,[62] en sesión de tres de septiembre de dos mil quince, y la acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015, en sesión de once de febrero de dos mil dieciséis.

199. En estos últimos precedentes se ha sostenido que es facultad del Congreso de la Unión expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y los Estados en lo relativo a los partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, por virtud de la fracción XXIX-U el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[63].

200. Asimismo, para el ejercicio de esta facultad, se ha sostenido que el Congreso de la Unión tenía la obligación de establecer un sistema uniforme de coaliciones para los procesos federales y locales en la ley general que expidiera para regular a los partidos políticos nacionales y locales, de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce[64].

201. Con apoyo en los preceptos constitucionales anteriores se ha concluido que las legislaturas locales, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, tienen atribución para legislar respecto de las coaliciones, pues el deber de adecuar su marco jurídico, ordenado por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la citada ley,[65] no requiere su reproducción a nivel local, ya que es de observancia general en todo el territorio nacional.

202. Por este motivo, si en la legislación electoral de los Estados se prevén, entre otros aspectos, los requisitos para formar coaliciones, la definición de coalición, los tipos de coaliciones, parte del contenido del convenio de coalición, el acceso a radio y televisión y el tope de gastos de campaña de las coaliciones, la representación de la coalición ante los consejos electorales y las mesas directivas de casilla, las reglas conforme a las cuales deberán aparecer los emblemas de las coaliciones en las boletas electorales, las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos y la obligación de cada uno de los partidos integrantes de la coalición de registrar listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, deben declararse inconstitucionales, en virtud de que las legislaturas locales no tienen facultades para legislar sobre los mismos, es decir, no existe competencia residual de los Estados en estas cuestiones[66].

---

[60] Votaron a favor los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza, Medina Mora, Sánchez Cordero y Pérez Dayán. Votaron en contra los ministros Franco González Salas, Pardo Rebolledo y Aguilar Morales.

[61] El Ministro Eduardo Medina Mora Icaza sustituyó al Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

[62] Bajo la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.

[63] "ARTÍCULO 73. El Congreso tiene facultad:…
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. (…)".

[64] "SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:
I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:
(…)
f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales;
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas;
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral;
4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos;
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse, y (…)".

[65] El texto del artículo transitorio señala: "TERCERO. El Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar el marco jurídico-electoral, a más tardar el 30 de junio de 2014.".

[66] Acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015, en sesión de once de febrero de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del señor Ministro Eduardo Medina Mora Icaza.

203. En este orden, como se señaló al inicio, a continuación se analizará si los preceptos del Código Electoral del Estado de México que se combaten en este apartado regulan de manera efectiva la figura de coaliciones o realizan reproducciones de la Ley General de Partidos, o bien, si constituyen meras referencias nominales a dicha figura asociativa, con el fin de dar coherencia y certidumbre a su propia legislación.

204. Se destaca en primera instancia, que en sesión pública celebrada el jueves dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se sometió a consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuesta de declarar la invalidez de los artículos 289 penúltimo párrafo[67] y 334, fracción I[68] del Código Electoral del Estado de México.

205. El argumento de invalidez que se propuso, señalaba en lo medular, que la Legislatura del Estado de México al regular en dichos preceptos condiciones sustantivas del régimen de coaliciones, invadía la competencia del Congreso de la Unión.

206. Sometida a votación la propuesta referida, los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán, **votaron a favor de la declaración de invalidez.** En tanto que los señores Ministros Franco González Salas, Pardo Rebolledo y Presidente Aguilar Morales **votaron en contra y por reconocer la validez de los citados preceptos.**

207. Dado el resultado de la anterior votación este Tribunal Pleno determinó **desestimar** el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los artículos 289 párrafo penúltimo, y 334, fracción I, en la porción normativa que indica*: "tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición"* del Código Electoral del Estado de México, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de la materia.

208. Por otra parte, este Tribunal Pleno estima que por el resto de los artículos impugnados en este apartado, no se está en el caso de invalidarlos, en atención a que no regulan la figura de las coaliciones, sino que la inclusión en sus textos del término "coalición" o las derivaciones del mismo (coaliciones, coaligados y/o coaligante) obedece a que este tipo de participación política también se encuentra comprendida dentro de las reglas que rigen los procesos electorales en las entidades federativas, por lo que su mención en las normas impugnadas garantiza el principio rector de certeza, pues de otro modo, se consideraría que dicha figura estaría excluida como forma de participación en dichos comicios.

209. Para corroborar el aserto anterior, a continuación se analizan el resto de los preceptos combatidos:

210. El primer párrafo del artículo 19 regula la reelección de diputados locales:

> "Artículo 19. La elección consecutiva de los diputados a la Legislatura podrá ser hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la **coalición** o candidatura común que los hubiere postulado salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato."

211. El párrafo segundo del artículo 26 y las fracciones III y IV del artículo 28[69] la paridad de género tanto en la integración de las listas de diputados por representación proporcional como en las listas de planillas para la integración de ayuntamientos:

---

[67] Artículo 289. Las boletas electorales contendrán:
(…)
En el caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí mismos, y se agruparán tomando como referencia el lugar que le corresponda al registro del partido coaligante más antiguo, seguido de los otros partidos coaligados, de acuerdo a su antigüedad de registro. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.

[68] Artículo 334. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:
I. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un sólo espacio o en el cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, candidato común o candidato independiente; tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente."

[69] Del artículo 28 también se impugnó la fracción IV; sin embargo, no se señala en este apartado ya que fue declarado inválido por condicionar la asignación de regidurías de representación proporcional con base en un criterio territorial.

> "Artículo 26. (…)
>
> Cada partido político en lo individual, independientemente de participar **coaligado** o en candidatura común, deberá registrar una lista con ocho fórmulas de candidatos, con sus propietarios y suplentes a diputados por el principio de representación proporcional, en la que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidatos del género opuesto, cuya ubicación en la lista será alternada bajo un orden numérico. En la lista podrán incluir para su registro en un mismo proceso electoral, hasta seis fórmulas de las postuladas para diputados por el principio de mayoría relativa, en las que se advierta la paridad de género."
>
> Artículo 28. Para la elección de los ayuntamientos de los municipios del Estado, se estará a las reglas siguientes:…
>
> III. Cada partido político, **coalición**, candidatura común o independiente deberá postular en planilla con fórmulas de propietarios y suplentes la totalidad de candidatos propios, comunes o en coalición para los cargos a elegir, en la que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidatos del género opuesto, debiendo estar integrada de forma alternada por personas de género distinto. El candidato a Presidente Municipal ocupará el primer lugar en la lista de la planilla; el candidato o los candidatos a síndico ocupará u ocuparán, según el caso, el segundo y el tercer lugar en dicha lista, y los restantes candidatos a regidor ocuparán los siguientes lugares en la lista, hasta completar el número que corresponda de acuerdo a lo establecido en los incisos a) al d) de la fracción II de este artículo.
>
> IV. Para tener derecho a participar en la asignación de regidores según el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán acreditar la postulación de planillas completas de candidatos propios, comunes, **coalición** o independientes,[70] en las que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidatos del género opuesto, debiendo estar integrada de forma alternada por personas de género distinto."

212. El artículo 74 establece el derecho de los partidos a postular candidatos, fórmulas o planillas en los procesos electorales. En este contexto, el uso del término "coalición" solamente da congruencia al texto, ya que sin su mención podría interpretarse que las coaliciones están excluidas de este derecho, en contradicción con el principio de certeza electoral consagrado en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 constitucional:

> "Artículo 74. En los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas o planillas por sí mismos, en **coalición** o en candidatura común con otros partidos en los términos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y este Código."

213. El artículo 75 define la figura de candidatura común por exclusión a la coalición:

> "Artículo 75. La candidatura común es la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar **coalición**, para postular al mismo candidato, fórmulas o planillas, cumpliendo los requisitos de este Código."

214. El artículo 118 establece dos impedimentos para ser registrados como candidato independiente. En este caso, el uso del término "coalición" también da congruencia al texto, ya que sin su mención podría interpretarse que sí es válido registrar como candidatos independiente a los ciudadanos que fueron postulados por una coalición en el proceso electoral inmediato anterior, lo cual no sólo sería contrario al principio de certeza electoral, sino incluso al principio de igualdad en el ejercicio del derecho al voto pasivo, puesto que los ciudadanos que participaron como candidatos propios de un partido político sí estarían obligados a observar dicha disposición y no así aquéllos que participaron mediante la coalición de dos o más partidos políticos:

---

[70] Cabe recordar que en esta fracción se declaró inválida la porción normativa que señala "por lo menos, cincuenta municipios del Estado,".

> "Artículo 118. Los dirigentes, militantes, afiliados o sus equivalentes de los partidos políticos no podrán solicitar su registro como candidatos independientes, a menos que se hayan separado de su cargo partidista con tres años de anticipación al momento de solicitar su registro, ni haber sido postulados candidatos a cualquier cargo de elección popular por partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior."

215. El subinciso 2 del inciso g) de la fracción II del artículo 120 se correlaciona directamente con el artículo 118 previamente citado, al ser éste una manifestación por escrito de no encontrarse impedido en los términos que señala aquél, en esta medida se hacen extensivas las consideraciones vertidas anteriormente:

> "Artículo 120. Los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes a un cargo de elección popular deberán:…
>
> II.- Acompañar la solicitud con la documentación siguiente:…
>
> g) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:…
>
> 2. No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, ni haber sido postulado candidato a cualquier cargo de elección popular por partido político o **coalición** en el proceso electoral inmediato anterior, conforme a lo establecido en este Código."

216. En el tercer párrafo del artículo 241,[71] el uso del término "coalición" solamente da congruencia al texto, ya que sin su mención podría interpretarse que los ciudadanos que participaron en un proceso interno de algún partido político sí pueden ser registrados como candidatos de una coalición, pero no como candidatos propio de un partido político o en candidatura común o independiente, en contravención del principio de certeza electoral y del principio de igualdad en el ejercicio del derecho al voto pasivo:

> "Artículo 241. (…)
>
> Ninguna persona podrá ser registrada como candidato tanto de partido político, **coalición**, candidatura común o independiente, cuando haya participado en algún proceso interno de algún partido político durante el mismo proceso electoral."

217. En el artículo 254, el uso del término "coalición" solamente da congruencia al texto, ya que sin su mención podría interpretarse que los candidatos de coalición están excluidos de las publicaciones ordenados por el Consejo General del órgano electoral local, en contradicción al principio de certeza electoral:

> "Artículo 254. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" de la relación de nombres de los candidatos y los partidos, candidaturas comunes o **coaliciones** que los postulan, así como los nombres de los candidatos independientes. De igual manera se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos."

218. Lo mismo ocurre con los párrafos primero, segundo del artículo 260,[72] ya que sin la mención del término "coalición" se excluiría a las coaliciones de las reglas que todos los participantes en el proceso electoral deben observar para la impresión de su propaganda:

> "Artículo 260. La propaganda impresa que utilicen los candidatos deberá contener una identificación precisa del partido político, candidatura común o coalición que registró al candidato.
>
> La propaganda que sea utilizada por alguna candidatura común o **coalición** deberá ser identificada con el emblema y color o colores que haya registrado en el convenio correspondiente."

219. Los párrafos tercero y cuarto del artículo 264 regulan los gastos de campaña, de tal forma que sin la mención del término "coaliciones" en el párrafo tercero se podría interpretar que esta forma de participación sí puede exceder el tope de gastos autorizado para estos efectos; el párrafo cuarto regula en este aspecto a las candidaturas comunes remitiendo a las reglas de las coaliciones:

---

[71] El presente artículo no se señala en el apartado relativo a las normas generales impugnadas; sin embargo, sí se incluye dentro del concepto de invalidez de la minoría legislativa.

[72] También se impugnó el último párrafo de este artículo, relativo a la facultad del Consejo General para ordenar la modificación o sustitución de los contenidos de los mensajes que transmitan por radio y televisión; sin embargo, como se declaró inválido no se señala en este apartado.

> Artículo 264. (…)
>
> Los gastos que realicen los partidos políticos, candidaturas comunes, **coaliciones** o candidatos independientes en la actividad de campaña, no podrán rebasar ese tope en cada una de las elecciones de Gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, respectivamente.
>
> Para el caso de financiamiento y topes de gasto de campaña en candidaturas comunes se seguirán las reglas aplicables para las coaliciones."

220. El último párrafo del artículo 289 regula la forma en que las candidaturas comunes deben aparecer en las boletas electorales:

> Artículo 289. Las boletas electorales contendrán:…
>
> En el caso de existir candidaturas comunes, aparecerá en la boleta el color o combinación de colores y emblema registrado en un espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen a los partidos que participan por sí mismos y ocupará el lugar que le corresponda al partido político con mayor antigüedad en su registro."

221. El párrafo primero de la fracción III del artículo 332[73] establece la obligación de los escrutadores de determinar el número de votos nulos:

> Artículo 332. Mediante el escrutinio y cómputo, los integrantes de las mesas directivas de casilla determinarán:…
>
> III. El número de votos nulos, entendiéndose por estos aquellos expresados por un elector, en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político, candidatura común o de una candidatura independiente, y aquellos en los que el elector marque dos o más cuadros sin existir **coalición** entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.
>
> Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista **coalición** entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la **coalición** y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla."

222. El inciso a) de la fracción V del artículo 333 establece la obligación de los escrutadores de determinar el número de votos emitidos a favor de todos los participantes del proceso electoral, de tal forma que sin la mención del término "coaliciones" se podría entender que sus votos estarían excluidos:

> "Artículo 333. El escrutinio y cómputo se realizará conforme a las reglas siguientes:…
>
> V. Los dos escrutadores, bajo la supervisión del Presidente, clasificarán las boletas para determinar.
>
> a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, **coaliciones**, candidatos comunes o candidatos independientes."

223. La fracción I del artículo 336 regula el contenido mínimo de las actas de escrutinio y cómputo, de tal forma que sin la mención del término "coalición" se podría entender que los votos a favor de este tipo de participación política no se computarán:

> "Artículo 336. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:
>
> El número de votos emitidos a favor de cada partido político, candidatos comunes, combinaciones de partidos políticos **coaligados** y candidatos independientes."

224. El segundo párrafo del artículo 369 definen la forma para la asignación diputados por el principio de representación proporcional, de tal forma que sin la mención del término "coaligado" se podría entender que los partidos políticos que participan bajo esa modalidad se encuentran excluidos de la asignación de diputados por ese principio:

---

[73] La minoría legislativa impugnó la fracción III sin distinguir entre párrafos; sin embargo, no se incluye el segundo párrafo de la fracción porque sólo el primer párrafo fue objeto de reforma.

> "Artículo 369. La asignación de diputados de representación proporcional que corresponda a cada partido político conforme al artículo anterior, se hará alternando, los candidatos que aparezcan en la lista presentada por los partidos políticos y los candidatos que no habiendo obtenido la mayoría relativa, hayan alcanzado la votación, en números absolutos, más alta de su partido por distrito. Esto en el orden en que se presenten ambos.
>
> Tratándose de partidos políticos que **se hayan coaligado** o postulado candidatos comunes para la elección de diputados, se integrará una lista por partido político que incluya a los candidatos postulados en lo individual, en candidatura común y en coalición, de acuerdo a los convenios respectivos, que no habiendo obtenido la mayoría relativa logren la votación en números absolutos, más alta de su partido por distrito, ordenada en forma decreciente, de acuerdo a la votación en números absolutos obtenidos. Acto seguido, se procederá a la asignación en términos del párrafo anterior."

225. Los párrafos primero y penúltimo[74] del artículo 377 definen la forma para la asignación de sindicaturas por el principio de representación proporcional, de tal forma que sin la mención del término "coalición" se podría entender que este tipo de participación política se encuentra excluida de la asignación de síndicos por este principio:

> "Artículo 377. Tendrán derecho a participar en la asignación de regidores y, en su caso, sindico de representación proporcional, los partidos políticos, las candidaturas comunes o **coaliciones** que cumplan los requisitos siguientes:
>
> I. Haber registrado planillas propias, comunes o en coalición.
>
> (…)
>
> El partido, **coalición**, candidato común o candidatos independientes cuya planilla haya obtenido la mayoría de votos en el municipio correspondiente, no tendrá derecho a que se le acrediten miembros de Ayuntamiento de representación proporcional."

226. El penúltimo y último párrafos 379 definen los elementos de la fórmula para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, de tal forma que sin la mención del término "coalición" se podría entender que este tipo de participación política se encuentra excluida de la asignación de regidores por este principio:

> "Artículo 379. Para la asignación de regidores de representación proporcional y, en su caso, síndico de representación proporcional, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad, integrada por los elementos siguientes:
>
> Cociente de unidad.
>
> Resto mayor.
>
> Cociente de unidad es el resultado de dividir la votación válida emitida en cada municipio en favor de los partidos, candidaturas comunes, **coaliciones** o candidatos independientes con derecho a participar en la distribución, entre el número de miembros del Ayuntamiento de representación proporcional a asignar en cada municipio.
>
> Resto mayor de votos es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, candidaturas comunes, **coaliciones** o candidatos independientes, una vez hecha la distribución de miembros de (sic) Ayuntamiento mediante el cociente de unidad."

227. Las fracciones I, II, III, IV y último párrafo del artículo 380 regulan la forma en que se aplicará la fórmula enunciada anteriormente, por este motivo se hacen extensivas las mismas consideraciones para este precepto:

---

[74] No se señala la porción normativa que señalaba "en por lo menos cincuenta municipios del Estado" por virtud de la declaración de invalidez decretada.

> "Artículo 380. Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá el procedimiento siguiente:
>
> I. Se determinarán los miembros que se le asignarán a cada partido político, candidatura común, **coalición** o candidatos independientes, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente de unidad.
>
> II. La asignación se hará en orden decreciente, empezando por el partido, candidatura común, coalición o candidatos independientes de mayor votación, de forma tal que, en su caso, el síndico de representación proporcional sea asignado a quien haya figurado como candidato a primer síndico en la planilla de la primera minoría.
>
> III. La asignación de regidores de representación proporcional se hará conforme al orden de la lista de candidatos registrada por cada uno de los partidos, candidaturas comunes, **coaliciones** o candidatos independientes, empezando por el primer lugar de la lista de candidatos a regidores.
>
> IV. Si después de aplicar el cociente de unidad quedaren cargos por asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos, candidaturas comunes, **coaliciones** o candidatos independientes en la asignación de los cargos del Ayuntamiento.
>
> En ningún caso y por ningún motivo, los candidatos a presidentes municipales podrán participar en la asignación a que se refiere el presente capítulo."

228. El primer párrafo del artículo 381 define el concepto de "cómputo final", de tal forma que sin la mención del término "coalición" se podría entender que este tipo de participación política se encuentra excluida del mismo:

> "Artículo 381. El cómputo final de la elección de Gobernador es la suma que realiza el Consejo General de los resultados anotados en las respectivas actas de cómputo distrital, a fin de determinar la votación obtenida en la elección por cada partido político, **coalición**, candidato común o candidato independiente."

229. El quinto párrafo, fracción I del artículo 429 regulan la forma en que serán notificadas las resoluciones del Tribunal Electoral recaídas a los juicios de inconformidad:

> Artículo 429. (…)
>
> Las resoluciones del Tribunal Electoral recaídas a los juicios de inconformidad serán notificadas:
>
> I. Al partido o **coalición** recurrente y a los terceros interesados, personalmente siempre y cuando hayan señalado domicilio en el municipio de Toluca. En caso contrario, se hará vía electrónica, en su defecto, se hará mediante cédula colocada en los estrados del Tribunal Electoral, a más tardar al día siguiente de aquel en que se dictó la resolución. La cédula se acompañará de copia simple de la resolución respectiva.

230. El tercer párrafo del artículo 484 regula la designación de un representante común:

> Artículo 484. (…)
>
> Para la comparecencia en la audiencia, los candidatos postulados por partidos políticos o **coaliciones** podrán nombrar una representación común en los procedimientos que sean citados conjuntamente.

231. Como se pudo constatar, en los preceptos analizados no se regula ningún aspecto relacionado con la figura de las coaliciones tal y como lo afirmaron los promoventes, sino que, como se señaló, la inclusión de dicho término y sus variantes es básicamente para conformar condiciones de coherencia y congruencia en la legislación electoral del Estado de México.

232. Por tanto, ante lo infundado del concepto de invalidez, lo procedente **es reconocer la validez de los artículos 19, párrafo primero; 26, párrafo segundo; 28, fracciones III y IV; 74; 75; 118; 120, fracción II, inciso g), numeral 2.; 241, párrafo tercero; 254; 260, párrafos primero, segundo y quinto; 264, párrafos tercero y cuarto; 289, párrafo último; 332, fracción III; 333 fracción V, inciso a); 336, fracción I; 369, párrafo segundo; 377, párrafos primero y penúltimo; 379, párrafos penúltimo y último; 380, fracciones I, II, III, IV y párrafo último; 381, párrafo primero; 429, párrafo quinto, fracción I; 484, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México.**

233. **Tema 10. Modificación o sustitución de los contenidos de los mensajes que transmitan los partidos por radio y televisión** (artículo 260, quinto párrafo, del Código Electoral del Estado de México).

234. El artículo impugnado prevé:

> "(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> Artículo 260. La propaganda impresa que utilicen los candidatos deberá contener una identificación precisa del partido político, candidatura común o coalición que registró al candidato.
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> La propaganda que sea utilizada por alguna candidatura común o coalición deberá ser identificada con el emblema y color o colores que haya registrado en el convenio correspondiente.
>
> La propaganda en cualquier medio que realicen los partidos políticos y sus candidatos deberá referirse a la difusión de su plataforma electoral, la promoción de sus candidatos o el análisis de los temas de interés y su posición ante ellos.
>
> Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, tienen prohibido incluir en su propaganda electoral, cualquier tipo de calumnia que denigre a candidatos independientes, partidos políticos, coaliciones, instituciones o terceros.
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, si el Consejo General estima que pueden afectarse los principios rectores de los procesos electorales locales, podrá ordenar a los partidos políticos, coaliciones o candidatos comunes e independientes la modificación o sustitución de los contenidos de los mensajes que transmitan por radio y televisión.
>
> Los partidos políticos, candidatos y precandidatos podrán ejercer el derecho de réplica a que se refiere el artículo 5 de la Constitución Local, respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercerá sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regula la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.
>
> El derecho a que se refiere el párrafo anterior, se ejercerá en la forma y términos que determinen las leyes que regulan a los medios de comunicación electrónicos e impresos.
>
> Los partidos políticos podrán difundir como parte de su gasto ordinario, en todo momento salvo dentro de campañas electorales logros de gobierno de candidatos de su partido o bien de los partidos en caso de existir coaliciones.

235. La minoría Legislativa del Congreso del Estado de México, así como el Partido MORENA, manifestaron como conceptos de invalidez respecto del numeral anterior, en síntesis lo siguiente:

- Se trata de una limitación excesiva y desproporcional de la Libertad de Expresión. Así, la atribución del Consejo General es desproporcional al fin buscado y genera actos arbitrarios.
- La norma no es clara ni precisa en cuanto a supuestos y condiciones para ordenar la modificación y sustitución de contenidos de los mensajes que los partidos políticos y candidatos transmitirán en radio y televisión. La medida limita la libertad de expresión y libre manifestación y puede vulnerar los artículos 14 y 16 de la Constitución.
- La atribución es inconstitucional pues vulnera los principios de competencia, fundamentación, motivación, legalidad y seguridad jurídica; así como el modelo de comunicación política, previstos en los artículos 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 41 segundo párrafo, base III, y 116 fracción IV inciso i) de la Constitución Federal.

- La competencia para investigar y adoptar medidas cautelares para hacer cesar o suspender en forma inmediata las transmisiones en radio y televisión recae en el Instituto Nacional Electoral, como autoridad administrativa y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Considera que los artículos 13 y 14 del Pacto de San José prohíben la censura previa. Se viola la Libertad de Expresión.
- Si el INE es el único administrador de los tiempos oficiales en radio y televisión y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México estima que por un supuesto sobre la prohibición para calumniar no podrá ordenar a los difusores la modificación o sustitución de los contenidos de los mensajes que transmitan por radio y televisión puesto que tal atribución compete sólo al Consejo General del INE.

236. Este Tribunal Pleno considera que es **fundado** el planteamiento aducido por los partidos impetrantes, en cuanto a que las atribuciones concedidas en la porción normativa impugnada al Consejo General del Instituto Electoral estatal, son inconstitucionales; lo anterior debido a que el artículo 41 de la Constitución Federal establece un régimen de exclusividad del Instituto Nacional Electoral para administrar los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión destinados a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos. Para efectos de las disposiciones comiciales locales, debe observarse el numeral 41 Base Tercera, apartados B, C y D de la Constitución Federal, mismo que estipula lo siguiente:

> (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)
>
> Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:
>
> (REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)
>
> a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;
>
> (REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)
>
> b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y
>
> (REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)
>
> c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.
>
> (REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)
>
> Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.
>
> (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)
>
> Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
>
> (REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
>
> Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)

Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley.

237. Así, el ya referido apartado B de la base Tercera del artículo 41 de la Constitución Federal reafirma que el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en tratándose de "fines electorales" para las entidades federativas; acto seguido se menciona que la asignación del tiempo se realizará de conformidad con la ley, que en esta reserva debe entenderse a la **Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**.

238. De igual manera, el Apartado D de la referida Base Tercera, establece con precisión que el Instituto Nacional Electoral cuenta con la atribución de llevar a cabo procedimientos sumarísimos para investigar las infracciones a las que esboza la propia Base señalada, esto es: integrar un expediente y hacerlo de conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También, el Instituto Nacional Electoral puede establecer una medida cautelar para **suspender o cancelar de manera inmediata las trasmisiones en radio y televisión, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**.

a) EsteTribunal Pleno advierte con claridad que el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad en el marco constitucional mexicano que cuenta con la atribución exclusiva para administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, es la autoridad facultada para que, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruya el procedimiento especial sancionador en caso de vulneración de la Base III del artículo 41 de la Constitución Federal; de igual manera el numeral 471 de la **Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**[75] mandata que la autoridad electoral administrativa local competente, presentará la denuncia ante el Instituto, lo que debe entenderse como una facultad para accionar dicho procedimiento ante el propio Instituto Nacional Electoral, pero no para arrogarse una facultad constitucional exclusiva. Lo anterior se corrobora con el segundo párrafo del artículo 471 que señala que los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.

---

[75] **Artículo 471**.
1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.
2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.
3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y
f) En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.
4. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.
5. La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, sin prevención alguna, cuando:
a) No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente artículo;
b) Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral;
c) El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o
d) La denuncia sea evidentemente frívola.
6. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará a la Sala Especializada del Tribunal Electoral, para su conocimiento.
7. Cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.
8. Si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en el artículo 467 de esta Ley. Esta decisión podrá ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

239. De igual manera, el párrafo octavo del artículo 471 dispone una facultad potestativa de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, y si considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas; en este supuesto, las medidas cautelares serán revisables por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

240. Sencillamente, debe arribarse a una interpretación sistemática en la cual, de conformidad con los apartados B, C y D de la Base Tercera del artículo 41 de la Constitución Federal, así como de los numerales 30, 40, 160, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad que administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en tratándose de "fines electorales" para las entidades federativas. Asimismo, puede dictar medidas cautelares para ordenar la suspensión o cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión al verificarse una violación al Apartado C de la Base Tercera; en caso de los comicios locales, es la autoridad electoral administrativa local quien puede presentar la denuncia respectiva ante el Instituto Nacional Electoral y este último tendrá la facultad de llevar a cabo los procedimientos expeditos en los términos de la susodicha Ley General para investigar las violaciones a lo dispuesto en la Base Tercera e integrar el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

241. En razón de lo anteriormente reproducido, si el párrafo quinto del artículo 260 del Código Electoral del Estado de México establece que en caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo cuarto —esto es: la inclusión en la propaganda electoral de cualquier tipo de calumnia que denigre a candidatos independientes, partidos políticos, coaliciones, instituciones o terceros—, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México puede ordenar a los partidos políticos, coaliciones o candidatos comunes e independientes la modificación o sustitución de los contenidos de sus mensajes trasmitidos por radio y televisión; es evidente que se ha violentado la Base Tercera, apartados C y D, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha competencia corresponde en exclusiva al Instituto Nacional Electoral y no al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, quien solamente podrá denunciar la violación a la Base Tercera del artículo 41 de la Norma Suprema.

242. En consecuencia, lo procedente es **declarar la invalidez del párrafo quinto del artículo 260 del Código Electoral del Estado de México en su totalidad**.

243. **Tema 11. Expedición gratuita de los documentos requeridos por las autoridades electorales (a excepción del acta de nacimiento)** (artículo 4 del Código Electoral del Estado de México).

244. El artículo impugnado prevé:

> ""Artículo 4. Para fines electorales, a excepción del acta de nacimiento, la expedición de los documentos requeridos por las autoridades electorales será gratuita y expedita."

245. El Partido Morena considera que exceptuar las actas de nacimiento del carácter gratuito y expedito cuando se expidan para fines electorales viola los párrafos segundo, tercero y último del artículo 1o., el párrafo séptimo del artículo 4o., el párrafo segundo y último del artículo 14, el párrafo primero del artículo 16, el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 y el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 13.1; 23 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

246. El texto de los preceptos constitucionales que se estiman violados es el siguiente:

> "**Artículo 1o**.- (…)
>
> Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
>
> Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
>
> (…)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"**Artículo 4o**.- (…)

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento."

"Artículo 14.- (…)

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

(…)

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

"Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

"**Artículo 116**.- (…)

IV.- De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:…

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;"

"**Artículo 133.-** Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas."

247. En su concepto de invalidez argumenta, esencialmente, que la norma impugnada viola los principios de certeza en materia electoral e igualdad.

248. En particular, la violación al principio de igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la plantea porque considera que no existe justificación para tal distinción, ya que la norma impugnada trata a todos los sujetos del proceso comicial como si ya hubieran recibido la primera copia del acta de nacimiento, aunque no sea así en todos los casos.

249. En el mismo sentido señala: "si la norma legal citada establece dentro de la categoría de 'documentos' 'para fines electorales' la expedición de copias de las actas de nacimiento, entonces no hay razón suficiente, ni se justifica en el dictamen de las comisiones legislativas, que lleven a determinar que unos documentos sean gratuitos y expeditos, y a la par, dejen de garantizar esas mismas condiciones, en su expedición, si, al final del día uno y otros documentos tienen igual finalidad, cual [sic] es su uso electoral ante la misma autoridad competente que lo requiere; de manera que el derecho a la identidad de las personas se exprese y constate en cada caso al posibilitar sin trabas el oportuno ejercicio de los derechos político-electorales del ciudadano".

250. La violación al párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la plantea porque, a su juicio, la gratuidad de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento debe aplicarse análogamente a la hipótesis regulada por la norma impugnada, toda vez que "el derecho a la identidad es una condición que acompaña toda la vida a las personas, inclusive a los ciudadanos, aunado a que las normas sobre derechos humanos son mandatos de optimización". En este sentido, señala que "deben regir las mismas reglas de su expedición y uso que en el caso de los demás documentos con iguales fines, pues de otra forma sería opuesto al principio analógico en que se aplique disposiciones distintas a supuestos similares".

251. Para robustecer su argumentación, afirma que una interpretación de la norma impugnada en sentido contrario llevaría al absurdo de considerar que para fines electorales la expedición de las actas de nacimiento, además de no ser gratuita, tampoco debe ser expedita, no obstante la celeridad del proceso electoral es notoria; y segundo, descalifica tal interpretación porque "nos llevaría al absurdo e incertidumbre si una autoridad de registro civil entiende la normas impugnada de esa manera, por su deficiente redacción".

252. Además, considera que la norma impugnada viola el punto 3 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en donde señala que "(t)oda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla".

253. Además, afirma que se "vacía de contenido" el derecho de acceso a la información previsto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en las condiciones requeridas por la interpretación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respaldo de la relatoría referida, al señalar que "el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión".

254. En su opinión, por tratarse de un derecho humano que guarda relación con las libertades y derechos en materia política, el artículo impugnado debe entenderse conforme al artículo 13 de la Convención y el artículo 6o. constitucional, ya que no entenderlo así vulneraría el sentido de dichos preceptos.

255. Considera también que la gratuidad de la copia del acta de nacimiento puede interpretarse de dos formas: una, según la cual sólo aplica para efectos de registro del menor; y otra, para cualquier caso en que el acta se expida ulterior o por primera vez, concluyendo que debe prevalecer la interpretación que ofrezca la mayor protección haciendo una interpretación conforme y pro persona.

256. Finalmente, reitera que aceptar que el acta de nacimiento no está incluida dentro de los documentos que se deben expedir de forma expedita, nos llevaría al absurdo de no garantizar al interesado su entrega oportuna, afectando el principio de certeza electoral, en detrimento de lo establecido en el primer párrafo del apartado A de la base V del artículo 41 y el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

257. Los argumentos planteados en el concepto de invalidez reseñado **son infundados** en atención a las siguientes consideraciones:

258. En primer lugar, es necesario desambiguar el significado del texto impugnado, ya que el partido político afirma que su redacción permite sostener cuando menos dos interpretaciones.

259. La primera interpretación que propone el partido político parte de la premisa de que el uso lingüístico de la aposición "a excepción del acta de nacimiento" tiene la función de explicar que "el acta de nacimiento" no está incluida dentro del universo de documentos requeridos por las autoridades electorales cuya expedición debe ser gratuita; y la segunda interpretación –propuesta con base en una argumentación al contrario- llevaría a concluir que todos los documentos para fines electorales se deben expedir de manera gratuita y expedita, salvo el acta de nacimiento, la cual, además de no ser gratuita, no se debe expedir de forma expedita sino dilatada.

260. Como la segunda de las interpretaciones es absurda –como el propio partido político reconoce para hacer su descalificación- ni siquiera puede tomarse en consideración para declarar la invalidez de la disposición impugnada, aunado a que la conclusión de su argumento parte de una falsa premisa, a saber, que la norma prohíbe la expedición de forma gratuita y expedita del acta de nacimiento cuando sea solicitada para fines electorales, ya que sólo les está permitido actuar de esta manera para cualesquiera otros documentos que requieran las autoridades electorales, de tal forma que la excepción al acta de nacimiento se pueda traducir como un deber de actuar en el sentido opuesto al prescrito por la norma para los demás documentos, para después descalificar esta conclusión con base en las consecuencias indeseables que dicha prohibición implicaría.

261. Sin embargo, este argumento es falso porque no existe la prohibición que plantea ni un deber de actuar en sentido contrario, ya que el texto impugnado sólo es una excepción a una obligación, es decir, aun y cuando se pudiera deducir lógicamente que las autoridades no tienen la obligación de expedir el acta de nacimiento de forma gratuita y expedita, la ausencia de esta obligación no constituye una prohibición para las autoridades de actuar de esta manera o un deber de hacer lo contrario.

262. Por consiguiente, contrario a su afirmación, no es posible sostener válidamente esta interpretación y, por lo mismo, no existe la falta de certeza alegada en cuanto a la interpretación de la disposición impugnada, de tal manera que resultan infundadas las violaciones que se le atribuyen en relación con el principio de certeza que debe regir en materia electoral contenido en el primer párrafo del apartado A de la base V del artículo 41 y el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

263. En cuanto a la otra interpretación, gramaticalmente es correcta, pero las conclusiones que de ella deriva no lo son, esto es, como si el artículo impugnado constituyera una excepción al carácter gratuito y a la inmediatez en la expedición de la primera copia del acta de nacimiento garantizada por el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e, inclusive, a la brevedad con la que todas las autoridades del Estado Mexicano tienen que responder a toda petición escrita que los ciudadanos les formulen de manera pacífica y respetuosa en materia política, por virtud del artículo 8o. constitucional[76].

264. Sin embargo, la excepción impugnada no se debe entender como una autorización para que las autoridades del Registro Civil desobedezcan el mandato constitucional que tienen por virtud del párrafo séptimo artículo 4o. constitucional; al contrario, la excepción impugnada da coherencia al orden jurídico local, ya que la misma podría interpretarse como una exención al cobro de derechos por la expedición de ulteriores copias certificadas de acta de nacimiento que se prevean en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, los cuales, en congruencia con el artículo transitorio segundo del decreto de diecisiete de junio de dos mil catorce que reformó el artículo 4o. constitucional[77], deben garantizar la gratuidad de la inscripción y la primera copia certificada del acta de nacimiento.

265. Por este motivo, resulta infundado que la norma discrimine por tratar a todos los sujetos del proceso comicial como si ya hubieran recibido la primera copia del acta de nacimiento, porque cualquier persona que se encuentre en este supuesto tiene expedito su derecho para acudir a las oficinas del Registro Civil a solicitar su inscripción y obtener gratuitamente y de forma inmediata la primer copia certificada de su acta de nacimiento.

266. En este sentido, lo que no autoriza la excepción impugnada es la expedición gratuita de copias ulteriores, incluso cuando sea para fines electorales, lo cual no es inconstitucional de acuerdo con el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque fuera de la primera copia certificada del acta de nacimiento, no existe obligación constitucional alguna de garantizar la gratuidad de las copias ulteriores, aun y cuando su fin sea el mismo que el de

---

[76] Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."

[77] "SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento."

la primera, a saber, acreditar la identidad de la persona lo mismo que la primera; y menos aún porque otros documentos con el mismo fin así lo sean. Cabe recordar que la violación al principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se da cuando se prescribe un trato discriminatorio a personas en condiciones iguales; sin embargo, el partido político lo descontextualiza para señalar que el documento debe recibir el mismo trato porque tiene el mismo fin, como si se tratase de un derecho del documento y no de la persona, lo cual no tiene sustento alguno.

267. Así, el que la disposición impugnada no haga distinciones por tratar a todos los sujetos del proceso comicial como si ya hubieran recibido la primera copia del acta de nacimiento, aunque en los hechos no sea así, contrario a sus pretensiones, demuestra que su redacción se apega precisamente a dicho principio, ya que no discrimina alguna por alguna de las categorías sospechosas enunciadas en el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni hace distinción por alguna categoría diferente a las enunciadas en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de que no existe disposición alguna en su texto que deniegue el derecho constitucional que tienen todas las personas que no han sido inscriptas en el Registro Civil para acudir al mismo para que les sea expida su primer copia certificada del acta de nacimiento de manera gratuita.

268. En esta medida, no existe obligación constitucional alguna para garantizar la gratuidad en los términos planteados por el partido político, ni siquiera en ejercicio del libre acceso a la información personal garantizado por el segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal forma que también estos argumentos resultan infundados.

269. En consecuencia, lo procedente es **reconocer la validez del artículo 4 del Código Electoral del Estado de México.**

270. **Tema 12. Omisión de determinar una fecha cierta para la realización de la elección extraordinaria en caso de empate** (artículo 31 del Código Electoral del Estado de México).

271. El precepto combatido señala:

> "(REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> Artículo 31. Cuando se declare empate entre los partidos políticos que hubiesen obtenido la más alta votación y una vez que hayan sido resueltos los medios de impugnación correspondientes, la Legislatura convocará a elecciones extraordinarias en el marco de un nuevo proceso electoral para celebrarse en la fecha que al efecto señale la convocatoria respectiva."

272. El partido político Movimiento Regeneración Nacional en su cuarto concepto de invalidez, adujo respecto del anterior numeral, en síntesis, lo siguiente:

- Sostiene que al omitirse las determinación de una fecha cierta para la celebración de una elección extraordinaria, se infringe por omisión los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; 41, base V, apartado A, primer párrafo; 116, fracción IV, inciso b), y 133, de la Constitución Federal.
- Menciona que se debe dar mayor certeza y máxima publicidad al asunto de la temporalidad para la nueva elección a efecto de que los institutos nacional y local coordinen esfuerzos con motivo de sus respectivas atribuciones, a que, conforme al artículo 41, base V, apartado C, penúltimo y últimos párrafos, el INE tiene su facultad de atracción.
- Que la omisión de determinar en el artículo 31 la posible fecha de la elección y proceso extraordinario, infringe el principio de certeza.

273. Este Tribunal Pleno considera que el argumento aducido resulta infundado. En principio de cuentas, puede apreciarse que la norma combatida se enmarca en un sistema normativo dentro del Capítulo Quinto, denominado: "De las elecciones ordinarias y extraordinarias"; en su Título Tercero: "De las elecciones de gobernador, de los integrantes de la legislatura y de los ayuntamientos del Estado de México". El precepto normativo que regula las ya referidas elecciones ordinarias comprende los numerales 29 a 33 del mencionado Código, a saber:

> "**Artículo 29.** Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir:
>
> I. Gobernador, cada seis años.
>
> II. Diputados a la Legislatura, cada tres años.
>
> III. Ayuntamientos, cada tres años.
>
> El día que deban celebrarse elecciones locales en la Entidad será considerado como no laborable en todo el territorio estatal.
>
> A cada elección precederá una convocatoria, que deberá ser aprobada durante el primer período ordinario de sesiones de la Legislatura del año previo al de la elección y publicada a más tardar el veinte de septiembre del mismo año.
>
> La convocatoria será publicada en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" y difundida en los diarios de mayor circulación.
>
> (REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)
>
> **Artículo 30**. Cuando se declare nula una elección, o los integrantes de la fórmula ganadora resultaren inelegibles, la extraordinaria que se celebre se sujetará a las disposiciones de este Código y a las que contenga la convocatoria que expida al efecto la Legislatura para una nueva elección, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la declaratoria de nulidad."
>
> "**Artículo 32**. Las convocatorias relativas a elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos que este Código reconoce a los ciudadanos y a los partidos políticos ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.
>
> **Artículo 33**. En el caso de elecciones extraordinarias, el Consejo General podrá ajustar los plazos relativos a las distintas etapas del proceso electoral establecidos en este Código, conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva para la celebración de la elección de que se trate."

274. Así, del análisis sistemático que se aprecia por parte de este Tribunal Constitucional, se estima que el concepto de invalidez planteado es infundado. Lo anterior se precisa porque los componentes normativos del artículo 31 impugnado versan sobre dos situaciones contingentes o hipótesis eventuales que se encuentran vinculadas de manera cronológica:

i) Declaratoria de empate entre partidos políticos.

ii) Resolución de los medios de impugnación.

275. Es por ello que el evento jurídico electoral de realización incierta, esto es: la elección extraordinaria de Gobernador, Diputados o Ayuntamientos, se encuentra sujeta a la verificación jurídica de dos determinaciones por parte de las autoridades electorales, por un lado la ya referida declaratoria de empate (Organismo Público Electoral) y, por el otro, la resolución de los medios de impugnación a través de los órganos jurisdiccionales electorales.

276. Es en este sentido —y debido a que ambas situaciones continentes han ocurrido—, cuando se surtirá la hipótesis de la segunda parte del artículo 31 del Código comicial local que se impugna, esto es, la Legislatura del Congreso tendrá la obligación de realizar la convocatoria para la celebración de las elecciones extraordinarias en el marco de un nuevo proceso electoral, el cual se habrá de realizar en la fecha que al efecto señale la convocatoria respectiva. En consecuencia, tal extremo hipotético no es posible determinarlo a través de una norma rígida, sino que sólo habrá de surtirse previas condiciones contingentes, de ahí que no sea posible establecer una fecha fija cuando incluso la declaratoria de empate y los medios de impugnación correspondientes se encontrarían bajo conocimiento por parte de los órganos jurisdiccionales electorales correspondientes.

277. También se observa por parte de este Tribunal Constitucional, que el numeral 30 del código comicial contiene condiciones normativas para la realización de una elección extraordinaria, a saber: si se verifica la nulidad de una elección o los integrantes de la fórmula ganadora son inelegibles, en esas circunstancias fácticas, la elección extraordinaria habrá de celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la declaratoria de nulidad.

278. En esta misma guisa, el numeral 33 de la legislación comicial establece una situación genérica en virtud de la cual, en caso de elecciones extraordinarias –sea por nulidad, inegibilidad o empate entre partidos políticos- se faculta al Consejo General para ajustar los plazos en torno a las distintas etapas del proceso electoral fijado en el Código comicial.

279. De igual manera, debe hacerse notar que el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de México establece en lo conducente:

> "Artículo 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura:
>
> (…)
>
> XII. Convocar a elecciones ordinarias o extraordinarias de Gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos;"

280. Por lo tanto, del numeral reproducido se advierte que la facultad para convocar a elecciones extraordinarias recae –tal como se ha insistido-en la legislatura del Congreso del Estado de México, en cuyo caso del artículo 31 impugnado, se habrán de celebrar de conformidad con las previsiones e hipótesis a que se refiere el Código Electoral local: a) Por nulidad de la elección, b) Por causa de empate entre dos partidos políticos que hubiesen tenido la más alta votación y una vez resueltos los medios de impugnación correspondientes.

281. Así, la consecuencia jurídica mandatada por el artículo 31 impugnado, debe ser interpretada de conformidad con el artículo 33 del ya referido Código comicial, debido a que en la eventualidad fáctica de la celebración de elecciones extraordinarias, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral tiene la facultad de ajustar los plazos relacionados con el proceso electoral[78] derivado de la convocatoria a que haya lugar en su caso, por lo que tampoco es posible determinar con precisión una fecha cierta para la celebración de la elección extraordinaria.

282. Tampoco pasa desapercibido que la etapa de resultados y declaraciones de validez de las respectivas elecciones para los cargos de Diputados, Munícipes y Gobernador del Estado de México, se inicia con la recepción de la documentación y los expedientes electorales de los consejos –Distrital, Municipal y General- y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie en última instancia el Tribunal Electoral; lo anterior de conformidad con los artículos 239 y 240 del propio Código[79]. Por lo tanto, las previsiones relacionadas con la celebración de la elección extraordinaria no pueden ser conocidas de manera anticipada, sino hasta que la Legislatura del Congreso del Estado convoque a elecciones extraordinarias en el marco de un nuevo proceso electoral, dadas las condiciones contingentes de la actualización normativa del artículo 31 que se cuestiona en la presente vía.

283. A manera de ejemplo, para la realización del cómputo final de la elección de Gobernador del Estado de México, el propio código local establece que el Consejo General tiene la facultad de expedir el Bando Solemne para dar a conocer a los habitantes del Estado de México la declaración de Gobernador electo y ordenar la publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", de las declaraciones de validez de la elección y de Gobernador electo, una vez resueltos por el Tribunal Electoral o por la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las impugnaciones que en su caso se hubieren interpuesto.

---

[78] De conformidad con el artículo del Código Electoral el Proceso Electoral comprende las siguientes etapas.
"Artículo 236. Para los efectos de este Código, el proceso electoral comprende las siguientes etapas.
I. Preparación de la elección.
II. Jornada electoral.
III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputados y ayuntamientos.
IV. Resultados y declaraciones de validez de la elección de Gobernador electo."

[79] Artículo 239. La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la recepción de la documentación y los expedientes electorales por los consejos distritales o municipales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie en última instancia el Tribunal Electoral.
Artículo 240. La etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección de Gobernador, se inicia con la recepción de la documentación y de los expedientes electorales en los consejos distritales correspondientes y concluye con el cómputo final y la declaración de validez que realice el Consejo General, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral.

284. No obstante lo anterior, este Tribunal Pleno puede inferir que los partidos políticos impetrantes no solicitaron una fecha exacta para realización de una elección extraordinaria, sino una aproximación de fechas probables de realización de la jornada electoral, con lo que, a efectos de garantizar el Principio de Certeza en materia electoral también es posible realizar una interpretación análoga con la regla establecida en el artículo 30 del Código Electoral local, esto es, en un plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la declaratoria de nulidad si la hubiese.

285. Así, la condición contingente relacionada con la previa resolución de los medios de impugnación correspondientes -por parte del Tribunal Electoral del Estado de México o de la Sala competente del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación-, no permite adscribir al artículo 31 del Código Electoral del Estado de México un sentido normativo previamente fijado para el conocimiento de la fecha exacta para la celebración de una elección extraordinaria.

286. En consecuencia con lo anteriormente señalado, lo procedente es **reconocer la validez del artículo 31 del Código Electoral del Estado de México**.

287. **Tema 13. Condiciones adicionales para la realización del recuento total de votos en sede administrativa electoral** (artículo 358, fracción VII, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México).

288. El artículo impugnado indica:

> "Artículo 358. Iniciada la sesión en ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos. El Consejo procederá a hacer el cómputo de la votación de la elección de diputados, practicando sucesivamente las siguientes operaciones:
>
> I. Examinará los paquetes electorales, separando los que tengan muestras de alteración.
>
> II. Abrirá los paquetes que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del consejo distrital, y si los resultados de ambas actas coinciden, se asentarán en las formas establecidas para ello.
>
> El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla, cuando existan objeciones fundadas.
>
> El nuevo escrutinio y cómputo se hará conforme lo siguiente:
>
> El secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 334 de este Código. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos.
>
> En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.

Se considerará objeción fundada en los siguientes casos:

a) Los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo.

1. No coincidan o sean ilegibles.

2. El total de boletas extraídas de las urnas no coincida con el número de total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron; y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla.

3. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación.

4. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición.

b) Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo.

c) Que existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.

III. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en los incisos anteriores, el presidente o el secretario del Consejo Distrital extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuenta al Consejo Distrital. Los paquetes con dicha documentación quedarán bajo resguardo del presidente del Consejo para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto.

IV. Anotará los resultados de cada una de las casillas en la forma establecida para ese fin, dejando constancia en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital, de igual manera se anotarán, respecto de cada casilla, las objeciones relativas a votos computados o a votos no computados en el escrutinio, así como aquéllas que se refieran a irregularidades e incidentes en el funcionamiento de las mismas.

V. Abrirá a continuación, los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva. Los resultados de esta operación se sumarán a los obtenidos previamente.

VI. Abrirá los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, tomará los resultados correspondientes a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y su resultado se sumará a los demás.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)

VII. Si de la sumatoria se establece que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual de la votación válida emitida en el distrito, y existe la petición expresa del representante del partido o candidato independiente que postuló al primero o al segundo de los candidatos antes señalados el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas, en todo caso se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

(REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)

Cuando al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido o candidato independiente que postuló al primero o al segundo de los candidatos antes señalados, y exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual de la votación válida emitida en el distrito, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación, ante el Consejo, de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito, apoyadas en la coincidencia de todas las actas en poder del partido con las que obran en poder del Consejo.

También deberá realizarse un nuevo recuento, cuando la solicitud provenga de alguno de los partidos políticos o candidato independiente que aún cuando no hubiese obtenido el segundo lugar en los resultados, la diferencia entre su votación y la del presunto ganador sea igual o menor a un punto porcentual de la votación válida emitida en el distrito.

Conforme a lo establecido en los tres párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea concluido antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo. Los partidos políticos o candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

Quien presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y candidato.

El presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.

(REFORMADO, G.G. 31 DE MAYO DE 2016)

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales, salvo que existan evidentes errores numéricos o que del contenido del acta circunstanciada se desprendan dudas fundadas sobre la calificación del voto.

VIII. El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa es la suma de los resultados obtenidos conforme a las fracciones anteriores y el resultado se hará constar en el acta de cómputo distrital correspondiente.

IX. El Presidente del Consejo extenderá constancia, de acuerdo con el modelo aprobado por el Consejo General, a la fórmula de candidatos a diputados, propietario y suplente, que haya obtenido mayoría de votos en la elección.

X. El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar a las cifras del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa, los votos recibidos en las casillas especiales, correspondientes a la elección de diputados por el principio de representación proporcional.

XI. De lo acontecido en la sesión, levantará acta circunstanciada de cómputo distrital, haciendo constar en ella todas las operaciones realizadas, los resultados de los cómputos y las objeciones o protestas que se hayan presentado. Copia de esta acta se entregará a cada uno de los integrantes del Consejo.

XII. Formará el correspondiente expediente electoral con la documentación de las casillas, la que resulte del cómputo distrital y los medios de impugnación presentados.

289. El partido MORENA considera que la porción normativa que se impugna es contraria a los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; 116, fracción IV, incisos b), y l), y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo señala que vulnera los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad electorales ya que por su deficiente redacción dispone de condiciones inadecuadas para la realización de recuentos en el ámbito administrativo. Finalmente estima que la "coincidencia" es una condición difícilmente operante y difícil de satisfacer y que, por tanto, se convierte en un obstáculo para el recuento total de la votación. El concepto de invalidez deviene infundado.

290. La porción normativa impugnada pertenece al artículo 358 del Código Electoral del Estado de México, artículo que se encuentra en el Capítulo I del Título Quinto el cual regula lo relativo al cómputo en los consejos distritales.

291. Para este Tribunal Pleno resulta importante señalar que por cómputo distrital se entiende la suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en los distritos electorales.

292. En el caso concreto, el Código Electoral local prevé que el Consejo procederá a hacer el cómputo de la votación de la elección de Diputados de conformidad con las siguientes reglas:

    a) Examinará los paquetes y separará los que tengan muestras de alteración.

    b) Abrirá los paquetes que aparezcan sin alteración y cotejará el resultado de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el expediente de casilla con los resultados de la misma en poder del presidente del consejo distrital. En caso de coincidencia se asentará en las formas correspondientes.

    c) Extraerá los escritos de protesta, si los hubiere, la lista nominal correspondiente, la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal así como las hojas de incidentes y demás documentación, la cual quedará bajo resguardo del presidente del Consejo.

    d) Los resultados obtenidos de los votos computados así como de las objeciones e irregularidades se anotarán en acta circunstanciada.

    e) La sesión continúa con la apertura de los paquetes con muestras de alteración, procediendo a realizar las mismas operaciones anteriormente descritas, y los resultados se sumarán a los ya obtenidos.

    f) Posteriormente abrirá los paquetes que contienen los expedientes de las casillas especiales; sus resultados se sumarán a los previamente obtenidos.

    g) La sesión finaliza con el levantamiento de acta circunstanciada en la que hará constar todas las operaciones realizadas y formará el expediente electoral.

293. Es importante resaltar que si existieran objeciones fundadas se hará un nuevo escrutinio y cómputo, las cuales se señalan en los incisos a), numerales 1 a 4, b), y c) de la fracción segunda del artículo 358.

294. Ahora bien, la fracción VII regula dos supuestos por los cuales el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas así como los requisitos para su procedencia:

295. Primer supuesto, contenido en el párrafo primero de la fracción combatida:

    a) Que de la sumatoria de los votos realizada por el Consejo Distrital, previa la práctica de las operaciones previstas por el Código Electoral, se obtenga una diferencia igual o menor a un punto porcentual de la votación entre el presunto candidato ganador y el que haya obtenido el segundo lugar,

    b) Que el representante del partido o candidato independiente formule petición expresa.

296. Segundo supuesto, contenido en el segundo párrafo de la fracción combatida:

a) Que al inicio de la sesión se formule la petición por el representante del partido o candidato independiente.

b) Que exista indicio de que la diferencia entre el presunto ganador y el segundo lugar sea igual o menor al uno por ciento de la votación válida.

c) Que el indicio se acredite con la presentación de la sumatoria de resultados por partido.

d) Que las actas de las que obtenga el partido o candidato independiente la sumatoria de la que advierte la diferencia mínima porcentual coincidan con las que obran en poder del Consejo.

297. Es importante señalar que la diferencia entre estos supuestos es el momento en que se solicita el recuento total de votos, puesto que en el primero de ellos, únicamente debe existir la petición expresa del representante del partido o candidato independiente una vez realizada la sumatoria y, en el segundo caso la petición puede formularse únicamente al inicio de la sesión debiendo acompañarse del indicio que exige el Código.

298. A juicio de este Tribunal, el establecer un requisito de procedencia para el segundo supuesto y llevar a cabo el recuento de votos en la totalidad de las casillas es válido y no configura obstáculo alguno, ya que en el caso de no existir el mismo, cualquiera de los representantes de los partidos o candidatos independientes que figuran entre los dos primeros lugares podrían con su sola manifestación poner en marcha el mecanismo de recuento de votos y procederá sistemáticamente en todos los distritos sin que el Consejo Distrital cuente con elementos objetivos que así lo justifiquen.

299. En este sentido, este segundo supuesto para la realización y repetición del recuento en todas las casillas del distrito es una norma de beneficio que complementa el principio de certeza jurídica puesto que permite rehacer el cómputo aún antes de la sumatoria.

300. Por tanto, el requerir que las actas en poder del partido que formula la petición guarden coincidencia con las que obran en poder de la autoridad, únicamente se configura como un presupuesto a partir del cual se genera la presunción de que la diferencia porcentual que requiere la ley para efectuar el recuento existe y por tanto, amerita que se realice desde un inicio.

301. Por otra parte se desestima la impugnación en la cual el partido señala que por “indicio” debe entenderse una “leve presunción” y no una “prueba plena” como lo exige la porción combatida.

302. El Diccionario de la Real Academia Española define “indicio” como el “fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”; así, debe partirse de algo que sí es percibido, lo que en el caso concreto consiste en la coincidencia de las actas que obran en poder del representante del partido o candidato independiente con las que obran en poder del Consejo.

303. Esto es así debido a que si no se cuenta al menos con este presupuesto se estaría actuando con base en posibilidades inciertas que restan certeza y objetividad al proceso electoral. Por consiguiente, al contar con este elemento se garantiza el principio de certidumbre desde la solicitud para el recuento total de votos formulada al inicio de la sesión con la posibilidad de adelantarse a la conclusión a la que el propio Consejo arribará al finalizar el cómputo. Así, se confirma que las mismas actas que computará el Consejo, ya fueron consideradas por el representante del partido o candidato independiente.

304. De esta manera, de no contar con la certidumbre de tal hecho, se estaría llevando a cabo un recuento total basándose en una presunción sin fundamento pues, es posible, que el representante del partido o candidato independiente no haya obtenido copia de la totalidad de las actas, por tanto, es evidente que en este caso el resultado que se obtendría de realizar el cómputo total de las actas por parte del Consejo sería distinto y es probable que no se actualizara el supuesto de ley para llevar a cabo el recuento.

305. Por lo anterior este Tribunal concluye que el requisito planteado por el legislador guarda racionalidad al operar como una excepción para que, en lugar de llevar a cabo el cómputo ordinario de las actas, se realice el recuento total de los votos. Es por ello que los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad no se ven vulnerados con la medida que se impugna, sino que la misma tiende precisamente a su garantía.

306. Por tanto, lo procedente es declarar infundado el concepto de invalidez planteado por el Partido Morena con el consecuente **reconocimiento de la validez, en su integridad, del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 358 del Código Electoral del Estado de México**.

VII. EFECTOS

307. De conformidad con los artículos 73 y 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal[80], la presente resolución surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de México.

Por lo expuesto y fundado

SE RESUELVE:

PRIMERO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 52/2016, promovida por el Partido Político MORENA, en relación con los artículos 118, 241, párrafo tercero, 423 y 425 del Código Electoral del Estado de México.

TERCERO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 53/2016, promovida por una minoría Legislativa del Congreso del Estado de México, en relación con los artículos 172, 284, párrafo último, y 377, párrafo último, del Código Electoral del Estado de México.

CUARTO. Se desestiman las presentes acciones de inconstitucionalidad, respecto de la impugnación de los artículos 289, párrafo penúltimo, y 334, fracción I, en la porción normativa 'tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición', del Código Electoral del Estado de México.

QUINTO. Se reconoce la validez de los artículos 4, 16, párrafo cuarto, 19, párrafos primero y tercero, 26, párrafo segundo, 28, fracciones III y IV —salvo su porción normativa 'por lo menos, cincuenta municipios del Estado'—, 31, 74, 75, 76, fracciones I y II, 77, incisos b), c), e) y g), 81, párrafos segundo y tercero, 118, 120, fracción II, incisos b) y g), numeral 2, 231, fracción I, 241, párrafo tercero, 254, 260, párrafos primero, segundo y quinto —este último con la salvedad precisada en el resolutivo sexto de esta sentencia—, 264, párrafos tercero y cuarto, 284, fracción IX, párrafo segundo, 289, párrafo último, 332, fracción III, 333 fracción V, inciso a), 336, fracción I, 347, párrafo segundo —al tenor de la interpretación conforme propuesta—, 358, fracción VII, párrafo segundo, 363, 369, párrafo segundo, 377, párrafos primero y penúltimo, 379, párrafos penúltimo y último, 380, fracciones I, II, III y IV, y párrafo último, 381, párrafo primero, 429, párrafo quinto, fracción I, y 484, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de México.

SEXTO. Se declara la invalidez de los artículos 28, fracción IV, en la porción normativa 'por lo menos, cincuenta municipios del Estado', 185, fracciones LVIII y LIX, 187, párrafo segundo, 196, fracciones XXXV y XXXVI, 201, fracción V, 223, párrafo penúltimo, 260, párrafo quinto, y 377, fracción I, del Código Electoral del Estado de México.

SÉPTIMO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de México.

OCTAVO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de México."

Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

---

[80] "Artículo 73.- Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley".
"Artículo 41.- Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
II. Los preceptos que la fundamenten;
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados;
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;
V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen;
VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación".

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los apartados I, II, III, IV y VI relativos, respectivamente, al trámite, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación —de los partidos políticos de la Revolución Democrática, MORENA y Acción Nacional, así como de los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México— y a las consideraciones y fundamentos —en su cuadro temático—.

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado IV, relativo a la legitimación, en cuanto a la del Partido Político Encuentro Social. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Medina Mora I. votaron en contra.

En relación con los puntos resolutivos segundo y tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado V, relativo a las causas de improcedencia.

En relación con el punto resolutivo cuarto:

Se expresó una mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 9, denominado “Transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones”, consistente en declarar la invalidez de los artículos 289, párrafo penúltimo, y 334, fracción I, en la porción normativa “tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición”, del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Franco González Salas, Pardo Rebolledo y Presidente Aguilar Morales votaron en contra.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los artículos 289, párrafo penúltimo, y 334, fracción I, en la porción normativa “tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición”, del Código Electoral del Estado de México, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con el punto resolutivo quinto:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos separándose de algunas consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en sus temas 11, denominado “Expedición gratuita de los documentos requeridos por las autoridades electorales (a excepción del acta de nacimiento)” y 12, denominado “Omisión de determinar una fecha cierta para la realización de la elección extraordinaria en caso de empate” consistentes, respectivamente, en reconocer la validez de los artículos 4 y 31 del Código Electoral del Estado de México. Las señoras Ministras Luna Ramos y Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en sus temas 1, denominado “Separación del cargo público como requisito de elegibilidad o impedimento para ser postulado a un cargo de elección popular; reincorporación a la conclusión del proceso electoral”, 3, denominado “Requisitos excesivos para el registro de candidatos independientes”, 4, denominado “Plazo para el registro de candidaturas comunes, el plazo que fija la ley es injustificado y desproporcionado” y 6, denominado “Restricción a la facultad de dar fe pública por la introducción de un elemento de valoración subjetivo contrario al principio de certeza electoral (‘que puedan influir o afectar la

equidad en las contiendas')" consistentes, respectivamente, en reconocer la validez de los artículos 16, párrafo cuarto, 19, párrafo tercero, 76, fracción II, 77, incisos b), c) y g), 81, párrafos segundo y tercero, 120, fracción II, inciso b), 231, fracción I, 260, párrafo segundo, 289, párrafo último, y 363 del Código Electoral del Estado de México.

Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 9, denominado "Transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones", consistente en reconocer la validez de los artículos 19, párrafo primero, 26, párrafo segundo, 28, fracciones III y IV —salvo su porción normativa "por lo menos, cincuenta municipios del Estado"—, 118, 120, fracción II, inciso g), numeral 2, 241, párrafo tercero —salvo su porción normativa "coalición"—, 254, 260, párrafos primero, segundo y quinto, 264, párrafos tercero y cuarto, 332, fracción III, párrafo primero, 333, fracción V, inciso a), 336, fracción I, 377, párrafos primero —salvo su porción normativa "o coaliciones"— y penúltimo —salvo su porción normativa "coalición"—, 379, párrafos penúltimo y último —salvo sus porciones normativas "coaliciones"—, y 380, fracciones I y II —salvo sus porciones normativas "coalición"—, y III y IV —salvo sus porciones normativas "coaliciones"—, y párrafo último, 381, párrafo primero, 429, párrafo quinto, fracción I, y 484, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 9, denominado "Transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones", consistente en reconocer la validez de los artículos 74 y 75 del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 4, denominado "Plazo para el registro de candidaturas comunes, el plazo que fija la ley es injustificado y desproporcionado", consistente en reconocer la validez del artículo 76, fracción I, del Código Electoral del Estado de México. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 4, denominado "Plazo para el registro de candidaturas comunes, el plazo que fija la ley es injustificado y desproporcionado", consistente en reconocer la validez del artículo 77, inciso e), del Código Electoral del Estado de México. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra.

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3, denominado "Requisitos excesivos para el registro de candidatos independientes", consistente en reconocer la validez de los artículos 118 y 120, fracción II, inciso g), numeral 2, del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Presidente Aguilar Morales votaron en contra. El señor Ministro Franco González Salas anunció voto aclaratorio.

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 9, denominado "Transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones", consistente en reconocer la validez de los artículos 241, párrafo tercero, en la porción normativa "coalición", 332, fracción III, párrafo segundo, 377, párrafos primero, en la porción normativa "o coaliciones", y penúltimo, en la porción normativa "coalición", 379, párrafos penúltimo y último, en las porciones normativas "coaliciones", y 380, fracciones I y II, en las porciones normativas "coalición", y III y IV, en las porciones normativas "coaliciones", del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Medina Mora I. votaron en contra.

Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales con salvedades, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 8, denominado "Impedimento a los representantes de partido del ejercicio del derecho al voto si se encuentra fuera de su sección electoral", consistente en reconocer la validez del artículo 284, fracción IX, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Pérez Dayán votaron en contra.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 9, denominado "Transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones", consistente en reconocer la validez del artículo 289, párrafo último, del Código Electoral del Estado de México. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena sin necesidad de una interpretación conforme, Cossío Díaz sin necesidad de una interpretación conforme, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo sin necesidad de una interpretación conforme, Medina Mora I., Laynez Potisek sin necesidad de una interpretación conforme, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 7, denominado "Falta de establecimiento de medidas de vigilancia para la apertura del lugar de resguardo de la paquetería electoral", consistente en reconocer la validez del artículo 347, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, al tenor de la interpretación conforme propuesta. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos separándose de algunas consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 13, denominado "Condiciones adicionales para la realización del recuento total de votos en sede administrativa electoral", consistente en reconocer la validez del artículo 358, fracción VII, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México. La señora Ministra Luna Ramos anunció voto concurrente.

Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I. con precisiones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 9, denominado "Transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones", consistente en reconocer la validez del artículo 369, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.

En relación con el punto resolutivo sexto:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 2, denominado "Representación proporcional en Regidurías", consistente en declarar la invalidez de los artículos 28, fracción IV, en la porción normativa "por lo menos, cincuenta municipios del Estado", y 377, fracción I, del Código Electoral del Estado de México.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 5, denominado "Violación a facultades del Instituto Nacional Electoral al establecer el régimen de colaboración con el órgano electoral local", consistente en declarar la invalidez de los artículos 185, fracción LVIII, 187, párrafo segundo, 196, fracción XXXV, 201, fracción V, y 223, párrafo penúltimo, del Código Electoral del Estado de México. El señor Ministro Pardo Rebolledo anunció voto aclaratorio.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 5, denominado "Violación a facultades del Instituto Nacional Electoral al establecer el régimen de colaboración con el órgano electoral local", consistente en declarar la invalidez de los artículos 185, fracción LIX, y 196, fracción XXXVI, del Código Electoral del Estado de México. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra. El señor Ministro Pardo Rebolledo anunció voto aclaratorio.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos separándose de algunas consideraciones, Franco González Salas separándose de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea con algunas consideraciones adicionales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 10, denominado "Modificación o sustitución de los contenidos de los mensajes que transmitan los partidos por radio y televisión", consistente en declarar la invalidez del artículo 260, párrafo quinto, del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Luna Ramos y Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se ausentó durante esta votación.

En relación con el punto resolutivo séptimo:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, en su parte consistente en determinar que las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de México.

En relación con el punto resolutivo octavo:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Votación que no se refleja en puntos resolutivos:

Se expresó una mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, en su parte consistente en declarar la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 260, párrafo cuarto, del Código Electoral del Estado de México. Los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. y Pérez Dayán votaron en contra.

Dado el resultado obtenido y en atención al ofrecimiento realizado por el señor Ministro ponente Laynez Potisek, el Tribunal Pleno determinó que se elimine del engrose el estudio atinente a la declaración de invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 260, párrafo cuarto, del Código Electoral del Estado de México, tanto en el apartado VI, en su tema 10, como en el VII.

La señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández no asistió a la sesión de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Firman los Ministros Presidente y Ponente, con el Secretario de Acuerdo que da fe.

El Presidente, Ministro **Luis María Aguilar Morales**.- Rúbrica.- El Ponente, Ministro **Javier Laynez Potisek**.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, **Rafael Coello Cetina**.- Rúbrica.

EL LICENCIADO **RAFAEL COELLO CETINA**, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de ochenta y un fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 50/2016 y sus acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.- Rúbrica.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona disposiciones del similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en relación con las atribuciones de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DEL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, EN RELACIÓN CON LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas;

QUINTO. El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual debe estar en operación en un plazo no mayor a tres años a partir del 18 de junio de 2016, de conformidad con el Transitorio Primero de dicho ordenamiento;

SEXTO. Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal realizar los programas para el adecuado y correcto funcionamiento y cumplir con los objetivos para la operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en coordinación con todos los operadores del Sistema Integral de Justicia.

Adicionalmente, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia de coordinación Nacional debe crear un comité para la evaluación y seguimiento de todas las acciones que se requieren para lograr la adecuada implementación de las normas de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;

SÉPTIMO. El 10 de agosto de 2016 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designó a la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para que dentro del ámbito de su competencia asuma la coordinación en la implementación de acciones relacionadas con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en lo concerniente al Consejo; y

OCTAVO. El Transitorio Primero de la Ley Nacional aludida estable que "se declara que la presente legislación incorpora el Sistema Procesal Penal Acusatorio".

En este contexto las atribuciones de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal son acordes con la implementación del sistema integral de justicia penal para adolescentes, sin embargo se estima oportuno normativizar dicho criterio.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 98, fracciones XI y XII; y se adiciona la fracción XIII al mismo precepto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para quedar como sigue:

"Artículo 98. …

I. a **X.** …

XI. Aprobar de manera conjunta con la Secretaría Ejecutiva de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los certificados de necesidad a que se refiere el artículo 296 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, cuando se trate de procedimientos de contratación necesarios para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal;

XII. Coordinar las acciones necesarias para la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y ejercer las atribuciones, según corresponda, a que se refieren las fracciones anteriores respecto de dicha implementación; y

XIII. Las demás que le confieran el Pleno y las Comisiones.**"**

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los tres días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO **GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN**, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona disposiciones del similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en relación con las atribuciones de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cinco de octubre de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.- Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.- Conste.- Rúbrica.

ACUERDO General 47/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo en el Estado de Chiapas, así como de la oficina de correspondencia común que les presta servicio.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL 47/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE RESIDENCIA Y DOMICILIO, DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS PRIMERO Y SEGUNDO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN QUE LES PRESTA SERVICIO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

TERCERO. Con fundamento en la fracción VIII, del artículo 42, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, es facultad de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, acordar las acciones tendentes a la adecuada y pronta instalación y cambio de domicilio de los órganos jurisdiccionales dentro de la misma ciudad o localidad;

CUARTO. En términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, si bien ejercen jurisdicción territorial en todo el Estado de Chiapas, su sede se ubica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; de ahí que, ante el cambio de residencia y domicilio, se haga necesaria la modificación de aquél;

QUINTO. El artículo 17 constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual hace necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto invocado; por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos en sesión de doce de septiembre de dos mil dieciséis, estimó conveniente realizar el cambio de residencia y domicilio de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, en el Estado de Chiapas, así como de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y

SEXTO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el cambio de residencia y domicilio de los órganos jurisdiccionales antes señalados, así como de la oficina de correspondencia común que les presta servicio.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. La residencia y domicilio de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, en el Estado de Chiapas, así como de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, será el ubicado en tramo carretero Tapanatepec – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas km 61+856.5, colonia Lázaro Cárdenas, Cintalapa de Figueroa, Chiapas, código postal 30410.

Artículo 2. Los órganos jurisdiccionales y la oficina de correspondencia común citada en el artículo 1 de este Acuerdo, iniciarán funciones en su nuevo domicilio el catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

Artículo 3. A partir de la fecha señalada en el artículo anterior, toda la correspondencia y trámites relacionados con los asuntos de la competencia de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, en el Estado de Chiapas, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio precisado en el artículo 1 de este Acuerdo.

Artículo 4. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; y de Administración, en su ámbito de competencia, están facultados para interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los transitorios **CUARTO** y **QUINTO** que entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el presente Acuerdo y la oficina de correspondencia común que les presta servicio, deberán colocar avisos en lugares visibles en relación a su cambio de residencia y domicilio.

CUARTO. El Instituto Federal de Defensoría Pública, en su ámbito de competencia, adoptará las medidas necesarias que se relacionen con el cumplimiento de este Acuerdo.

QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, adoptará las medidas necesarias para que los órganos jurisdiccionales y la oficina de correspondencia común a que se refiere este Acuerdo, inicien funciones en su nuevo domicilio el catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

SEXTO. Se reforma el numeral **SEGUNDO**, fracción **XX**, número **2**, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. …

I. a **XIX. …**

XX. …

1. …

2. Dos tribunales unitarios con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

3. …

XXI. a **XXXII. …".**

EL LICENCIADO **GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN**, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General 47/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los tribunales unitarios primero y segundo en el Estado de Chiapas, así como de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cinco de octubre de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.- Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.- Conste.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA

EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $20.4812 M.N. (veinte pesos con cuatro mil ochocientos doce diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Mario Ladislao Tamez López Negrete**.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, **Juan Rafael García Padilla**.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de 28 y 91 días obtenidas el día de hoy, fueron de 5.2359 y 5.5600 por ciento, respectivamente.

Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes instituciones de banca múltiple: Banco Santander S.A., HSBC México S.A., Banco Nacional de México S.A., Banca Mifel S.A., Banco Invex S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco Azteca S.A.

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Mario Ladislao Tamez López Negrete**.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, **Juan Rafael García Padilla**.- Rúbrica.

CIRCULAR 13/2016, dirigida a las Instituciones de Crédito que ofrezcan cuentas de depósito de dinero en moneda extranjera a personas morales con residencia en territorio nacional, así como a los participantes en el SPID, relativa a las Modificaciones a las Circulares 3/2016 y 4/2016 (Reformas a SPID).

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

CIRCULAR 13/2016

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE OFREZCAN CUENTAS DE DEPÓSITO DE DINERO EN MONEDA EXTRANJERA A PERSONAS MORALES CON RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO A LOS PARTICIPANTES EN EL SPID:

ASUNTO: MODIFICACIONES A LAS CIRCULARES 3/2016 Y 4/2016 (REFORMAS A SPID)

El Banco de México, con el propósito de continuar propiciando el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, ha considerado conveniente precisar algunos términos de las "Disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito que pretendan participar en los sistemas de pagos para transferencias interbancarias de fondos en dólares", así como de las "Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares", contenidas en las Circulares 3/2016 y 4/2016, respectivamente, del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2011 y sus modificaciones publicadas en dicho órgano de difusión el 3 de noviembre de 2016.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, fracción I, 24, 31 y 35 Bis, de la Ley del Banco de México, 2, fracciones I, IV y VIII, y 6, 10 y 19, de la Ley de Sistemas de Pagos, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 4, párrafo primero, 8, párrafos cuarto y séptimo, 10, párrafo primero, 17, fracción I, 20, fracción XI, y 25 Bis 1, fracción IV, del Reglamento Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir disposiciones a través de la Dirección de Disposiciones de Banca Central, Dirección de Sistemas de Pagos y Dirección de Regulación y Supervisión, respectivamente, así como Segundo, fracciones I, VIII y X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, ha resuelto lo siguiente:

PRIMERO. Las instituciones de crédito que ofrezcan cuentas de depósito de dinero en moneda extranjera a personas morales con residencia en territorio nacional quedarán obligadas a dar cumplimiento, a partir del 31 de mayo de 2017, a lo dispuesto en las fracciones XII Ter y XII Quater de la **13a.** de las "Disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito que pretendan participar en los sistemas de pagos para transferencias interbancarias de fondos en dólares", emitidas mediante la Circular 3/2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 2016 y modificadas mediante la Circular 10/2016, publicada en el mismo medio de difusión el 3 de noviembre del presente año.

SEGUNDO. Aquellas personas que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Circular 11/2016 emitida por este Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de noviembre de 2016, hayan sido designadas por los Participantes como responsables del cumplimiento normativo del SPID, en términos de la **43a**. de las "Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares", emitidas mediante la Circular 4/2016, mantendrán dicho carácter sin que, para ello, deban cumplir con el requerimiento establecido en el segundo párrafo adicionado a la Regla **43a.** citada mediante la referida Circular 11/2016.

TERCERO. Se **deroga** el segundo párrafo del artículo Primero Transitorio de la Circular 11/2016 citada en el resolutivo Segundo anterior.

TRANSITORIA

ÚNICA. La presente Circular entrará en vigor al día hábil bancario siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2016.- La Directora de Regulación y Supervisión, **Viviana Garza Salazar**.- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de Banca Central, **Mario Ladislao Tamez López Negrete**.- Rúbrica.- El Director de Sistemas de Pagos, **Miguel Ángel Díaz Díaz**.- Rúbrica.

Para cualquier consulta sobre el contenido de la presente Circular, favor de comunicarse a la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad, a los teléfonos (55) 5237-2308, (55) 5237-2317 o (55) 5237-2000 Ext. 3200.

SECCION DE AVISOS

AVISOS JUDICIALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito
con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México
EDICTO

En los autos del juicio de amparo directo **D.P. 464/2016-IV,** promovido por Jaime Romero Sierra, contra la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil diez, dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, antes Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 125/2010, en virtud de que no se ha emplazado a la tercera interesada, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, emplácese a juicio a la tercera interesada persona moral denominada Pinturas Promar, sociedad anónima de capital variable, por conducto de quien la represente, publicándose por TRES veces, de SIETE en SIETE días naturales en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana el presente edicto; haciéndole saber que deberá presentarse en el término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación, apercibida que de no comparecer en este juicio, las subsecuente notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal Colegiado de Circuito.

Atentamente
Secretaria de Acuerdos
Lic. Guadalupe Margarita Reyes Carmona
Rúbrica.

(R.- 439284)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito
Toluca, México
EDICTO.

EMPLAZAMIENTO.

Al margen sello con Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Judicial de la Federación.

C. Marcos Robles Monroy. En su carácter de tercero interesado, se hace de su conocimiento que María del Carmen Carbajal Rodríguez promueve juicio de amparo directo al que por turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, con el número de expediente 506/2016, en contra de la sentencia definitiva de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca de apelación 30/2015, por la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien deberá presentarse dentro del término de treinta días contados del siguiente al de la última publicación de los edictos; apercibido de que si pasado dicho plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio, haciéndole las posteriores notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que la copia simple de la demanda de amparo queda a su disposición en el local que ocupa este órgano jurisdiccional.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República.

Atentamente.
Toluca, Estado de México, a 26 de agosto de 2016.
El Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
Lic. Fernando Lamas Pérez.
Rúbrica.

(R.- 439415)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México
EDICTO

Emplazamiento de la moral tercera interesada: Impulsora y Promotora Pedagógica, sociedad cooperativa de responsabilidad Limitada.

En el juicio de amparo **1395/2016-VIII**, promovido por el quejoso **Eduardo Mendoza Nájera**, contra el acto de la **Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México**, consistente en la resolución de catorce de junio de dos mil catorce, en el cual resolvió el incidente de sustitución patronal, dictada en el juicio laboral **847/2005,** mediante auto de 29 de septiembre de dos mil 2016, se ordenó emplazar por medio de edictos a la moral tercera interesada, los cuales se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, se le hace saber que deberá apersonarse y señalar domicilio procesal dentro del plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente hábil al de la última publicación, apercibida que de no hacerlo, se le harán las ulteriores notificaciones por medio de lista.

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2016.
Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
Licenciado Miguel Ángel Rivas León.
Rúbrica.

(R.- 439281)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito
con residencia en Oaxaca, Oax.
EDICTO

Hago de su conocimiento que en el juicio de amparo directo **62/2015** del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, promovido por el quejoso **Tomás López Almaraz,** contra la sentencia de **veintiséis de mayo de dos mil catorce**, dictada por los **magistrados y juez integrantes de la Primera Sala Penal Oral y Especializada en Justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado**, en el toca penal **333/2010**, en esta fecha se dictó un acuerdo en el que se ordenó emplazar a juicio constitucional al tercero interesado **Herminio Ortiz Hernández o Herminio Hernández García o Herminio García Hernández**, por edictos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, haciendo de su conocimiento que queda a su disposición en la secretaría de este Tribunal Colegiado la copia simple de la demanda de amparo y que cuenta con un término de quince días, contados a partir de la última publicación de estos edictos, para que a sus intereses conviene formule alegatos o promueva amparo adhesivo.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.
El Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal
y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
Lic. Juan Martínez Trujillo.
Rúbrica.

(R.- 439389)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas,
con residencia en Tuxtla Gutiérrez
EDICTO

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas.

C. GERARDO DÍAZ SÁNCHEZ.

TERCERO INTERESADO EN EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE.

En el juicio de amparo **1617/2016,** promovido por **Sandy Viviana Vázquez Pérez y/o Sandi Viviana Vázquez Pérez,** contra actos del Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, radicado en este Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, sito en Palacio de Justicia Federal, Edificio "B", Planta Baja, Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, Colonia Las Palmas, código postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se dictó el acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó emplazarle al presente juicio, en virtud de que se le ha señalado como tercero interesado y, como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarlo por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita; haciéndoles saber que podrá presentarse dentro de los **treinta días**,

contados a partir del siguiente al de la última publicación por sí o apoderado, apercibido que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones le surtirán efectos por medio de lista en estrados de este Juzgado. Quedando a su disposición en este órgano judicial la demanda de garantías de que se trata; asimismo, se le hace de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra prevista para las **NUEVE HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**. Fíjese en la puerta de este Tribunal un ejemplar de este edicto, por el término que dure la notificación.

Atentamente.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de septiembre de 2016
Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas
Darío Alejandro Guillén Laflor
Rúbrica.

(R.- 438456)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito
con residencia en Oaxaca, Oax.
EDICTO

Hago de su conocimiento que en el juicio de amparo directo **157/2016** del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, promovido por el quejoso **ABUNDIO JIMÉNEZ LÓPEZ**, contra la sentencia de **veintiocho de septiembre de dos mil nueve**, dictada por los magistrados de la **Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado,** en el toca penal **199/2009**, en esta fecha se dictó un acuerdo en el que se ordenó emplazar a juicio constitucional a la tercera interesada **CECILIA JIMÉNEZ GARCÍA**, por edictos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, haciendo de su conocimiento que queda a su disposición en la secretaría de este Tribunal Colegiado la copia simple de la demanda de amparo y que cuenta con un término de quince días, contados a partir de la última publicación de estos edictos, para que a sus intereses conviene formule alegatos o promueva amparo adhesivo.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.
El Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
Lic. Juan Martínez Trujillo.
Rúbrica.

(R.- 439420)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal
en la Ciudad de México
EDICTO

En los autos del juicio de amparo número **551/2016-3**, promovido por **JORGE MUÑOZ ORTIZ**, contra actos del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, se ordenó emplazar por edictos a los terceros interesados Martha Adriana Burguete Suárez así como Andamios Cimbras y Casetones, sociedad anónima de capital variable, representada por Arturo Alcocer Otero, los cuales se publicarán por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y se les concede un término de treinta días contados a partir de la última publicación para que comparezcan a juicio a hacer valer sus derechos y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista.

Atentamente.
Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil dieciséis.
Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito
de Amparo en Materia Penal
en la Ciudad de México
Lic. Luis Mariano Sánchez Martínez.
Rúbrica.

(R.- 439667)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales
en el Estado de Querétaro

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

LAURA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

PRESENTE

Al ignorar su domicilio, se le notifica inicio de juicio de amparo 1055/2016-V, promovido por **Gesta Capital, S.A.P.I. de C.V.**, en su carácter de tercera interesada y emplazada para que en el término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, comparezca ante este Tribunal, apercibida que de no hacerlo así, se seguirá en rebeldía; y las subsecuentes notificaciones, aún personales, se le harán por lista. Asimismo, quedan a su disposición en la Secretaría de este órgano, las copias simples de traslado de la demanda de amparo.

Además, se hace de su conocimiento, que se fijaron las **DOCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**, está prevista la celebración de la audiencia constitucional.

Atentamente

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios

Federales en el Estado de Querétaro

Lic. Eduardo Mujica Martínez

Rúbrica.

(R.- 439959)

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito

Guanajuato

EDICTO

Terceros Interesados:

Luis Caballero Rico, Leonel Caballero Rico, Ypólito Caballero Rico, Arturo Caballero Rico y Antonio Caballero Rico.

Por este conducto, se ordena emplazar a los terceros interesados Luis Caballero Rico, Leonel Caballero Rico, Ypólito Caballero Rico, Arturo Caballero Rico y Antonio Caballero Rico, dentro del juicio de amparo directo 375/2016, promovido por Jorge Soria Rodríguez y Sixtos Celestino Hernández o Sixtos Celestino Hernández Uribe, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad, en cuya demanda de amparo se señala:

D. Acto reclamado: la sentencia de 18 de abril de 2016, dictada en el toca 11/2016 y su ejecución.

F. Preceptos constitucionales cuya violación se reclama: 1, 14, 16 y 20.

Se hace saber a los terceros interesados de mérito que deben presentarse ante este tribunal colegiado, a defender sus derechos, apercibidos que de no comparecer, se continuará el juicio sin su presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones en las listas que se fijan en los estrados de este tribunal.

Publíquese por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Guanajuato, Gto., 14 de octubre de 2016.

La Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado

en Materia Penal del Decimosexto Circuito.

Lic. Angélica María Flores Veloz.

Rúbrica. **(R.- 439975)**

Estados Unidos Mexicanos

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Ciudad Judicial Federal

Zapopan, Jalisco

EDICTOS

TERCERO INTERESADO:

FUENTE DE TRABAJO QUE SE UBICABA EN CALLE LUNA NÚMERO 2910, COLONIA JARDINES DEL BOSQUE EN GUADALAJARA, JALISCO, DEDICADA A SEGURIDAD PRIVADA Y DENOMINADA "SEGURIDAD PROFESIONAL" Y/O "SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL".

En la demanda de amparo presentada el tres de diciembre de dos mil quince, a favor de Juan Jesús Díaz Castillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra acto de la Décima Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, que consistió: *"**IV.- ACTO RECLAMADO**.- RESOLUCIÓN de fecha 13 de octubre del año 2015, (…)."*; a quien se le llama a juicio por medio del presente edicto y se le hace saber que debe presentarse por conducto de su representante legal ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto, para que si a su interés conviene se apersone en este juicio con los apercibimientos contenidos en el artículo 181 de la Ley de Amparo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que resulten de carácter personal, se

harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este Tribunal Federal. Lo anterior dentro del juicio de amparo directo número 1337/2015, del índice de este órgano judicial.

Para que se publique tres veces de siete en siete días.

Para su publicación:

- "Diario Oficial de la Federación", México, Distrito Federal.
- Periódico "Excélsior", México, Distrito Federal.

Atentamente.
Zapopan, Jalisco, 19 de septiembre de 2016.
La Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Lic. Leticia González Madrigal.
Rúbrica.

(R.- 438650)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito
Guanajuato

EDICTO

Tercero Interesada:

Estefanía Silva Jiménez o Stephania Silva Jiménez, por sí y en representación de las menores a quienes se identificaran con las siglas ACMS y BLMS.

Por este conducto, se ordena emplazar a la tercero interesada Estefanía Silva Jiménez o Stephania Silva Jiménez, por sí y en representación de las menores a quienes se identificaran con las siglas ACMS y BLMS, dentro del juicio de amparo directo 320/2016, promovido por José Luis Ustoa Patiño, contra actos del Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cuya demanda de amparo se señala:

IV. Acto reclamado: la sentencia de 8 de septiembre de 2014, dictada en el toca 175/2014.

V. Preceptos constitucionales cuya violación se reclama: 14, 16 y 20.

Se hace saber a la tercero interesada de mérito que debe presentarse ante este tribunal colegiado, a defender sus derechos, apercibido que de no comparecer, se continuará el juicio sin su presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones en las listas que se fijan en los estrados de este tribunal.

Publíquese por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.
Guanajuato, Gto., 30 de septiembre de 2016.
La Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito.
Lic. Angélica María Flores Veloz.
Rúbrica.

(R.- 439993)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche
Campeche, Camp.
Av. Patricio Trueba y de Regil, no. 245, colonia San Rafael, San Francisco de Campeche, Campeche

EDICTO

En el juicio de amparo número **662/2016,** promovido por MELCHOR ÁNGEL VERA CANTÉ, se emplaza a juicio a **1)** "ADMINISTRACIÓN SORIANA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; **2)** "AUTO DESCUENTOS SORIANA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; **3)** "GIGANTE", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; **4)** "CONTROL OPERACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; **5)** "ORGANIZACIÓN SORIANA", SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL, y **6)** QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y/O PROPIETARIO DE LA FUENTE DE TRABAJO, por conducto de quien legalmente las represente, terceros interesados en el referido procedimiento judicial, en virtud de que se desconoce su domicilio. Cuenta con el plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto para que concurran a este juzgado a hacer valer lo que a su interés conviniere. Se le apercibe que de incumplir esto último, las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por lista.

San Francisco de Campeche, Campeche, a 23 de septiembre de 2016.
El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche
Lic. Adrián Fernando Novelo Pérez
Rúbrica.

(R.- 439995)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
EDICTO.

MARÍA HERMENEGILDA REYES VALENTE.
EN CUANTO PROGENITORA DEL MENOR J.C.R.V.,

En el lugar en que se encuentre hago saber a Usted que:

En el juicio de amparo directo 535/2015, promovido por Blanca Nélida Morfín Cortés, contra actos del magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, radicado en este Tribunal Colegiado en Materia Penal, se le ha señalado como tercera interesada, y como se desconoce su domicilio actual, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, este órgano colegiado determinó emplazarla por edictos, que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, haciéndole saber que podrá presentarse en este Tribunal a defender sus derechos de considerarlo necesario, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibida que de no hacerlo en el tiempo concedido, las posteriores notificaciones aún las de carácter personal, le correrán por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del mismo, copia simple de la demanda de amparo de que se trata.

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2016.
La Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.
Lic. Ireri Amezcua Estrada
Rúbrica.

(R.- 439988)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Naucalpan de Juárez
EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

TERCERO INTERESADO: MARCO ANTONIO RIVERA LÓPEZ, PADRE DE LA VÍCTIMA EDUARDO RIVERA GÓMEZ (OCCISO).

Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

En los autos del juicio de amparo **1093/2015-IX**, promovido por **Francisco Javier Recillas Río,** por su propio derecho, contra actos del **Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México**, se hace del conocimiento al tercero interesado **Marco Antonio Rivera López**, padre de la víctima **Eduardo Rivera Gómez** (occiso), que deberá presentarse en las instalaciones de este Juzgado Federal a fin de apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos ordenados; asimismo, deberá señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista, quedando a su disposición en la actuaría de este juzgado copias simples de la demanda de garantías.

Atentamente
El Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México.
Licenciado Abel Mejía Campos.
Rúbrica.

(R.- 440121)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla
San Andrés Cholula
EDICTO

TERCERA INTERESADA.

Mirna Ivonne de los Ríos y Medina,

En cumplimiento al proveído de veintitrés de noviembre de dos mil quince (fojas 564 y 565), dictado en el juicio de amparo **321/2015-II** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por Claudia Batllori Álvarez, en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de María Guadalupe Álvarez Márquez de Batllori, contra actos del Juzgado Cuarto de lo Civil y de Hacienda de Aguascalientes y otras autoridades, de las que se les reclama todo lo actuado, se tuvo a Mirna Ivonne de los Ríos y Medina, como parte tercera interesada y en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, **se le mandó emplazar por medio de edictos,** para que si a su interés conviniere se apersone a este juicio en el local de este Juzgado ubicado en **Avenida Osa Menor número ochenta y dos, piso trece, ala sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl. código postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla**; **dentro del plazo de treinta días,** contado a partir del siguiente al de la última publicación de este edicto, si pasado ese plazo no

comparece la parte tercera interesada, las notificaciones se le harán en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para tal efecto se le hace saber que se han fijado las **diez horas con veinte minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis,** para que tenga verificativo la audiencia constitucional Queda a su disposición en la secretaría de este Juzgado copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, auto admisorio, del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil quince y del auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la Republica, se expide el presente. En San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. **Doy fe.**

Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla
Iván Armando Moreno García
Rúbrica.

(R.- 439658)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil del Tercer Circuito en el Estado de Jalisco
25
EDICTO

En el juicio de amparo 523/2016, promovido por Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, emplácese a la tercera interesada **Mónica Cecilia Lizcano Villareal**, quien deberá presentarse dentro del termino de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a hacer valer sus derechos en el presente juicio, apercibida que de no hacerlo, se seguirá el procedimiento, haciéndosele las subsecuentes notificaciones por lista, en términos de los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Quedan a su disposición en la secretaria de este juzgado, las copias de la demanda.

Atentamente
Zapopan, Jalisco, 25 de octubre de 2016
El Secretario
Héctor Hugo Ordaz Arredondo.
Rúbrica.

(R.- 440132)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Décimo de lo Civil
Puebla, Pue.
Diligenciario
EDICTO

Disposición Juez Décimo Civil, Puebla. Auto diez de abril dos mil trece, **convóquese a Remate Judicial Primera Publica Almoneda, inmueble identificado como terreno y construcción ubicado en Trece Norte Cuatro Mil Cuatrocientos Cinco "A" Colonia Santa María, esta Ciudad**, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Puebla, **Predio Mayor folio 37407**, bajo el número 354, Fojas 193 vuelta, Tomo 236, libro I, quedando su copia agregada en folios 219 al 223, Tomo 1133 Libro V del Once de Julio de Mil Novecientos Sesenta y Nueve, **Precio base avalúo. Quinientos Noventa Mil Pesos Cero Centavos Moneda Nacional**, siendo postura legal la que cubra las Dos Terceras Partes de dicho avalúo, Siendo la cantidad de **Trescientos Noventa y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional**, en consecuencia, hágasele saber a Postores que vence dicho termino a las **Doce Horas Del Décimo Día a partir De La Ultima Publicación ordenada, hora en la que se llevara acabo el remate respectivo**, se hace saber al ***Deudor que puede liberar sus bienes si paga íntegramente el monto de sus responsabilidades, antes del Fincamiento de Remate.*** **JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, expediente número 1028/2009, promovido por LEOPOLDO SALVADOR ALTAMIRANO CASTELLANOS,** Endosatario en Procuración de **LEONOR RIVERA ATRIANO,** contra **ESTEFANIA BORJAS LARA DE GOMEZ**.

Puebla, a 27 de octubre de dos mil dieciséis.
El C. Diligenciario Par.
Abogado Omar Rojas Meléndez.
Rúbrica.

(R.- 440280)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado
San Luis Potosí
EDICTO

Cristian Aguilar Alvizu.

En el Juicio de Amparo 464/2016-IV, promovido por Manuel García Castro, contra actos del Juez Primero del Ramo Penal, con sede en esta ciudad capital y otras autoridades, se dictó un auto por el que se ordena su emplazamiento a dicho juicio, para que en su carácter de tercero interesado comparezca a defender sus derechos a la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL DIOCIOCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; haciéndole saber que el acto reclamado en la referida demanda, se hace consistir en la orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia y/o presentación y su ejecución.

Deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, quedando a su disposición, en la secretaría del juzgado, copia del escrito de demanda; previniéndole para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días siguientes a que fenezcan los treinta días que se le conceden, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes comunicaciones que deban de ser personales, le serán practicadas por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado.

Atentamente
San Luis Potosí, S.L.P. 10 de octubre de 2016.
Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado
Benjamín Rocha Loredo
Rúbrica.

(R.- 440362)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo de Distrito
en Coatzacoalcos, Veracruz
EDICTO

DONACIANO GARCÍA TORRES.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 718/2016-I, del índice de este juzgado, promovido por VICENTE GARCÍA TORRES, se ordenó emplazarlo por medio de EDICTOS por desconocerse su domicilio, los cuales se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico Excélsior que se editan en la ciudad de México, Distrito Federal; así como en los ESTRADOS de este Tribunal, haciéndole saber que está a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia simple de la demanda de amparo, y que tienen expedito su derecho para comparecer a este tribunal a deducir sus derechos, si a sus intereses conviene, y que la audiencia constitucional se celebrará a las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la audiencia constitucional.

Atentamente.
Coatzacoalcos, Veracruz, 10 de octubre de 2016.
El Secretario del Juzgado Décimo de Distrito
en el Estado de Veracruz.
Lic. Horacio Malpica Hernández.
Rúbrica.

(R.- 440549)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado,
con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas
EDICTO

FELIX ALBERTO HERNÁNDEZ RAMOS.
Tercero Interesado
Domicilio ignorado.

En el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se recibió demanda de amparo, la cual se radicó con el número 315/2016, promovido por Paulo Eduardo Rodríguez García, consistente en la resolución de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 193/2013, resultando como tercero interesado Félix Alberto Hernández Ramos, y en virtud de desconocerse el domicilio actual, este órgano jurisdiccional ordenó su emplazamiento mediante edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico

El "Excélsior" y en un periódico de mayor circulación de esta ciudad, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Distrito copia cotejada de la demanda de garantías y se le hace saber además, que se han señalado las **once horas con cuarenta y un minutos del once de octubre de dos mil dieciséis**, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; en la inteligencia que deberá presentarse dentro del término de treinta días contado del siguiente al de la última publicación, apercibido de que si, pasado ese término, no comparece, se le harán las ulteriores notificaciones, por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado.

Cd. Victoria, Tam., a 28 de septiembre de 2016.
La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado.
Lic. Ma. Elizabeth Sierra Castillo.
Rúbrica.

(R.- 439732)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito,
con sede en Boca del Río, Veracruz
EDICTO

En el juicio de amparo directo 196/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, promovido por **Bartolo Guexpal Cruz,** contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad, por auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada **Josefa Palagot Toto**, por medio de edictos que deberán ser publicados por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación de la Ciudad de México, para que dentro del término de treinta días siguientes a la última publicación, **Josefa Palagot Toto** se apersone a juicio y señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos; quedando a su disposición, en la Secretaría de Acuerdos de este tribunal, copia de la demanda de amparo.

Relación sucinta: El quejoso **Bartolo Guexpal Cruz,** reclama: "Sentencia dictada por la autoridad ordenadora en fecha nueve de junio de dos mil catorce, dentro del toca 685/2014, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso Bartolo Guexpal Cruz… en la que se me hace penalmente responsable en la comisión del delito de pederastia."

Boca del Río, Veracruz, a 17 de octubre de 2016
El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
Lic. José de Jesús Arellano Valdez.
Rúbrica.

(R.- 440551)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz
sito en Boca del Río
Sección de Amparo
EDICTO

En los autos del juicio de amparo indirecto 676/2016-II, del índice de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, promovido por Tomás Francisco Bello Martínez, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Proceso y Procedimientos Penal Oral Veracruz, residente en Veracruz, y otras autoridades, el cual hizo consistir en la orden de aprehensión girada en la causa penal 52/2016, del índice del Juzgado Primero Menor en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza cometido en agravio del patrimonio de la persona moral Financiera T Agiliza, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera popular, representada por Carlos Manuel Landa Meza; el dieciocho de agosto pasado, se ordenó emplazar a juicio, por medio de edictos, al referido tercero interesado, a fin de que comparezca dentro del plazo de treinta días contados a partir del siguiente hábil al de la última publicación de los edictos, a este juzgado a deducir sus derechos, con el apercibimiento que si en el término transcurrido no comparece por sí o por conducto de su representante o de la persona que legalmente la represente, se proseguirá el juicio en todas sus etapas procesales haciéndosele las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos; además, se le informa que el juicio de amparo de referencia se tramita conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente.

Boca del Río, Veracruz, 28 de septiembre de 2016.
El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado.
Lic. Juan Manuel Cárcamo Sánchez.
Rúbrica.

(R.- 440552)

Estados Unidos Mexicanos

Estado de Guanajuato
Poder Judicial
Juzgado Quinto Civil de Partido
Celaya, Gto.
DECRETO

Publíquese una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, un extracto de la resolución de fecha 24 veinticuatro de agosto del 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Quinto Civil de Partido de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio Especial Mercantil M74/16 promovido por Nancy Fernandez Sanchez, en la cual se decreta la CANCELACION de un titulo nominativo cuyas características son las siguientes: Clase de titulo nominativo: Acciones, con numero de series 1262, mil doscientos sesenta y dos, que ampara 12 doce acciones de la 4,133 a la 4,144; Emisor: Consejo de Administración del Club Campestre de Celaya, S.A. de C.V.; Lugar de suscripción: Celaya, Guanajuato. La cancelación decretada quedara firme dentro de los 30 treinta días contados a partir de la publicación del presente. Lo anterior, con fundamento en las fracciones l Y lll del artículo 45 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Celaya, Gto., a 30 de Septiembre del 2016
La Secretaria del Juzgado Quinto Civil de Partido
Lic. Araceli Ortega Bravo
Rúbrica.

(R.- 440592)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito,
con sede en Boca del Río, Veracruz
EDICTO

En el juicio de amparo directo 159/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, promovido por Uriel Vicente Jiménez Rodríguez, contra actos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades, por autos de veintitrés de septiembre y once de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada Renato Román Ruiz Jiménez, por medio de edictos que deberán ser publicados por tres veces, de siete en siete días, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación de la república, así como en el Diario Oficial de la Federación de la Ciudad de México, para que dentro del término de treinta días siguientes a la última publicación, el nombrado Renato Román Ruiz Jiménez se apersone a juicio y señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos. Significándole que el quejoso reclamó ''La sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca penal No, 1685/2015 de su índice.'' Y queda a su disposición, en la Secretaría de Acuerdos de este tribunal, copia de la demanda de amparo.

Atentamente.
Boca del Río, Veracruz, 18 de octubre de 2016.
El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz
Lic. José de Jesús Arellano Valdez.
Rúbrica.

(R.- 440608)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero
Acapulco
EDICTO.

"Reyes Tomatzin Panchito".

"Cumplimiento auto veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, en juicio amparo 515/2016, promovido por Cristhian Fernando Camacho Torreblanca, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, se hace conocimiento resulta carácter tercero interesado, en términos artículo 5°, fracción III, inciso b) Ley Amparo abrogada y 315 Código Federal Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se mandó notificar por edicto inicio juicio, si a sus intereses convinieren se apersone, debiéndose presentar ante este juzgado federal ubicado en Boulevard de las Naciones número 640, fracción "a", fraccionamiento Granjas del Marqués, código postal 39890; Acapulco, Guerrero, deducir derechos dentro de término treinta días, a partir siguiente a última publicación del presente

edicto; apercibidos de no comparecer lapso indicado, ulteriores notificaciones personales surtirán efectos por lista que se publique en los estrados este órgano de control constitucional.

En la inteligencia de que juzgado ha señalado once horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil dieciséis, para celebración de audiencia constitucional, queda disposición en secretaría juzgado copia demanda amparo.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el diario oficial de la federación y en el periódico de mayor circulación en la república mexicana, se exhibe el presente en la ciudad de Acapulco, Guerrero, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- Doy fe.

El Secretario del Juzgado Octavo de Distrito
en el Estado de Guerrero.
Lic. Marco Antonio Cuenca Zamora.
Rúbrica.

(R.- 439791)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco
EDICTO
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO
EDICTO DIRIGIDO AL TERCERO INTERESADO:
ARMANDO SALAZAR MACHADO.

Juicio Amparo **578/2016-VIII** promueve **"VINOS E IMPORTACIONES", S.A. de C.V.,** contra actos del **JUEZ OCTAVO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO y OTRAS AUTORIDADES.**

Por acuerdo esta fecha se ordenó por ignorarse domicilio tercer interesado **Armando Salazar Machado**, sea emplazado por edictos. Se señalan las **NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**, para celebración audiencia constitucional, quedan a disposición copias Secretaría del Juzgado. Se hace saber deberá presentarse, si así es su voluntad, por apoderado o gestor que pueda representarlo, a deducir sus derechos ante este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el procedimiento mencionado dentro treinta días contado a partir última publicación, en caso de no comparecer a señalar domicilio para recibir notificaciones se practicarán por lista, aún carácter personal, artículo 27, fracción III, Ley de Amparo.

Para publicarse de tres veces de siete en siete días, tanto en el "Diario Oficial de la Federación", como en el Periódico "Reforma", de la Ciudad de México.

Atentamente.
Zapopan, Jalisco, 28 de septiembre de 2016.
La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco.
Claudia Martínez Gaxiola.
Rúbrica.

(R.- 440644)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco
Concurso Mercantil 146/2014-II
EDICTO CON EXTRACTO DE SENTENCIA DE CONCURSO EN ETAPA DE CONCILIACIÓN

En el expediente número **146/2014-II,** relativo al **concurso mercantil** promovido por **Limpieza de Altura, sociedad anónima de capital variable**, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, el veintidós de abril de dos mil quince, dictó sentencia en la que: declaró en concurso mercantil a dicha comerciante, **con efectos de retroacción al veintiséis de julio de dos mil catorce**; declaró abierta la etapa de conciliación y ordenó que durante ésta se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos del concursado, excepto los referidos en el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles; ordenó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para que designe conciliador y, a éste, que inicie el procedimiento de reconocimiento de créditos, lo que se hace del conocimiento de los acreedores de la concursada para que, aquellos que así lo deseen, le presenten su solicitud de reconocimiento de sus créditos. La publicación de este edicto surte efectos de notificación para quienes aún no hayan sido notificados en alguna forma diferente, ordenada en la propia sentencia.

Zapopan, Jalisco, a 21 de mayo de 2015.
La Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado.
Rosa Martha Gutiérrez Ramírez.
Rúbrica.

(R.- 440656)

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez
EDICTO

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.

Enrique Carrillo Velázquez, Marcelo Santiz Gómez, Miguel Ángel Díaz Estrada, Erick López López, Elio Reyes Morales, Juan Antonio Pérez Díaz, Aaron Morales Alfonso y Manuel de Jesús López Solorzano. Terceros interesados en el lugar en que se encuentren.

En el juicio de amparo **306/2016 (antes 2064/2015)** promovido por **Martin Chávez González,** contra actos del **Juez Segundo del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas**, radicado en este Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, sito en Palacio de Justicia Federal, Edificio "B", Planta Baja, Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, Colonia Las Palmas, código postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se dictó el acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó emplazarle al presente juicio, en virtud de que se le ha señalado como terceros interesados y, como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarlos por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 fracción III, inciso), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita; haciéndole saber que podrán presentarse dentro de los **TREINTA DÍAS**, contados a partir del siguiente al de la última publicación por sí o por su apoderado, apercibida que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones le surtirán efectos por medio de lista en estrados de este Juzgado. Quedando a su disposición en este órgano judicial la demanda de garantías de que se trata; asimismo, se le hace de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra prevista para las **nueve horas del trece de diciembre de dos mil dieciséis**. Fíjese en la puerta de este Tribunal un ejemplar de este edicto, por el término que dure la notificación.

Atentamente.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de octubre de 2016.
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas.
José Luis Castro Coutiño.
Rúbrica.

(R.- 439977)

Estado de México
Poder Judicial
Juzgado Civil de Primera Instancia
Zumpango, México
EDICTO

- - - En el expediente 59/2010, relativo al Juicio **EJECUTIVO MERCATIL**, tramitado en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Zumpango, Estado de México, promovido por **RUBEN RODRIGUEZ ORTIZ**, en contra de **CARLOS ALCANTARA MENDEZ**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1063,1410,1411, del de Comercio, 469, 472, 474 Y 475, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la aplicación supletoria a la Legislación Mercantil, se señalan las **DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO**, para que tenga verificativo la primera almoneda de remate del bien inmueble embargado en la diligencia de fecha nueve de marzo de dos mil diez (2010), ubicado en: **CAMINO SAN BARTOLO, SIN NUMERO, BARRIO SAN LORENZO, ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO; el cual se encuentra inscrito bajo la partida 1596, volumen 60, libro primero, sección primera, de fecha veintiocho de agosto de dos mil siete**, sirviendo como POSTURA LEGAL para el remate las **dos terceras partes** que resulten de la cantidad de $1,417,500.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de avaluó fijado en autos por el perito designado tercero en discordia, en esta índole, convóquese a postores por medio de EDICTOS que deberán ser publicados POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DIAS en el Diario Oficial de la Federación y en la tabla de avisos de este Juzgado; Dado en la Ciudad de Zumpango, México a los tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).

Validación del edicto
Acuerdo de fecha: veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
Funcionario: Licenciada Yeimi Aydee Santiago Guzmán. Secretario de Acuerdos.- Rúbrica.

(R.- 440691)

AVISO AL PÚBLICO

Se comunica que para la publicación de los estados financieros éstos deberán ser capturados en cualquier procesador de textos Word y presentados en medios impreso y electrónico.

Atentamente

Diario Oficial de la Federación
Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Juzgado 1ro. de Distrito
Guanajuato
EDICTO

TERCERO INTERESADO:
ANTONIO GUIZAR FARÍAS.

Por este conducto, se ordena emplazar al **tercero interesad: ANTONIO GUIZAR FARIAS**, dentro del juicio de amparo indirecto 116/2016-IV, promovido por **ADELINA GALLEGOS MARTÍNEZ**, contra actos del **Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad**, en cuya demanda de garantías se señala:

IV.-Acto reclamado: "LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDA EN EL TOCA 62/2016, FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, POR LA JUEZ SEGUNDO DE PARTIDO CIVIL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, EN EL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROMOVIDO POR LA QUEJOSA, POR LA CUAL DECLARA INOPERANTES LOS AGRAVIOS FORMULADOS, CONFIRMANDO LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN INCIDENTAL INTENTADA.".

IV.-Preceptos constitucionales cuya violación se reclama: 1°. 14, 16 y 17.

Se hace saber al tercero interesado de mérito que debe presentarse ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, sito en Carretera Cuatro Carriles Guanajuato-Silao, Glorieta Santa Fe, número 5, Edificio A, primer piso, Colonia Yerbabuena, dentro del término de **treinta días** contados a partir del día siguiente de la última publicación del presente, a defender sus derechos, apercibido que de no comparecer, se continuará el juicio sin su presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones en las listas que se fijan en los estrados de este tribunal.

Publíquese por tres veces, de siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación, así como en alguno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, tales como "Excélsior", "Universal" y "Reforma".

Atentamente.
Guanajuato, Gto., once de octubre de 2016.
La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guanajuato
Yéssica Tamayo Roldán
Rúbrica.

(R.- 439980)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial Federal
Juzgado Cuarto de Distrito
en el Estado de Hidalgo
EDICTO

Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la Federación. Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo. EDICTO. Para emplazar a: Brandon Vargas Martínez. En el juicio de amparo número **413/2016-III**, promovido por Jesús Sánchez Campos, contra actos del **Juez de Control de Tula de Allende, Hidalgo y otra**, se ordenó emplazar por medio de edictos como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, al tercero interesado Brandon Vargas Martínez. Queda en la Secretaría del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, copia de la demanda para que comparezca si a sus intereses conviene, y se le hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2º, deberá presentarse al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del término de **treinta días** contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto; asimismo, se le requiere para que señale domicilio en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo; en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de **lista** que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, y que si pasado ese término de treinta días no comparece, se seguirá el juicio **413/2016-III**. Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de octubre de 2016. **EL SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. JUAN EDGAR MEJÍA MARTÍNEZ.**

Atentamente
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito
en el Estado de Hidalgo.
Lic. Juan Edgar Mejía Martínez.
Rúbrica.

(R.- 439992)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla
con residencia oficial en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla
EDICTO

Emplazamiento al tercero interesado Emilio Manzano Alonso.
Presente.

En los autos del juicio de amparo número 1092/2016, promovido por María Pascuala Resurrección Manzano Méndez y/o Pascuala Manzano Viuda de Arce, contra actos del Juez Primero de lo Civil de la ciudad de Puebla y otra autoridad, consistente en la omisión de dictar sentencia dentro del juicio ordinario civil 250/1979 del índice del Juzgado responsable; en cumplimiento al auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó su emplazamiento por edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los siguientes diarios "El Sol de Puebla", "Excélsior", "El Universal" o "Reforma", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según su artículo 2º; haciendo de su conocimiento que deberá presentarse ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para hacer valer sus derechos y señalar domicilio para recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo se continuará el juicio y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista. Queda a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional copia autorizada de la demanda de garantías.

Atentamente
San Andrés Cholula, Puebla, 04 de octubre de 2016
La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Lic. Martha Cecilia Barrera Jiménez
Rúbrica.

(R.- 440360)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado
con residencia en la ciudad de Uruapan, Mich.
"EDICTO"

En el juicio de amparo número **44/2016-P**, promovido por **José Antonio Adame Lombera**, reclama del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, la resolución de siete de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca penal I-246/2015, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Violación.

Ahora, como les resulta el carácter de tercera interesada a la menor **K.D.A.M.,** por conducto de sus progenitores y representantes legales **Carlos Abarca Tadeo y Belén Viridiana Mejía Sánchez,** y por desconocerse su domicilio actual, se ha ordenado emplazarlos por medio del presente edicto, mediante tres publicaciones de siete en siete días, de conformidad con el artículo **315** del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Se le hace saber a la tercera interesada que deberá presentarse ante este Juzgado Federal, dentro del término de treinta días, contado a partir del siguiente al de la última publicación, con el apercibimiento de que fenecido dicho plazo, en caso de que no comparezca ante este Juzgado, por sí o mediante apoderado o gestor judicial que pueda representarlo, y si no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, se seguirá el juicio en todas sus etapas y las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados del Juzgado.

Queda a su disposición en la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, copia simple de la demanda de amparo, y se les hace saber, que se encuentran señaladas las **DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**, para la celebración de la audiencia constitucional.

Atentamente
Uruapan, Michoacán, 04 de octubre de 2016.
La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito
en el Estado de Michoacán.
Albina Alvarado Santos.
Rúbrica.

(R.- 440547)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil
y de Trabajo del Decimoquinto Circuito
en Tijuana, B.C.
EDICTO

Tercero interesado: Víctor Raymundo Way Garibay

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo directo laboral 120/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, promovido por **MARGARITA ROMERO DE LA ROSA Y FELIPE NERI ZECUA LIMA**, contra el laudo de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, emitido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se emplaza por este medio a **VICTOR RAYMUNDO WAY GARIBAY**, para que en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación de este edicto, se apersone al juicio de amparo, en el entendido que de no comparecer dentro de dicho plazo, las notificaciones subsecuentes se le harán por medio de lista, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal, copia simple de la demanda de amparo y anexos.

Para su publicación por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana.

Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.
Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito
José Luis Delgado Gaytán
Rúbrica.

(R.- 440615)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en Materia
de Amparo y de Juicios Federales
en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana
Tijuana, B.C.
EDICTO

Emplazamiento a Lourdes Hernández Aceves, también conocida como María de Lourdes Hernández Aceves.

En los autos del juicio de amparo 1164/2016 promovido por Ana Luisa Ontiveros López, contra actos del Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, en el cual reclama esencialmente la negativa de decretar la prescripción de la acción penal en la averiguación previa 138/10/20D/AP.

Se ordenó emplazar a la tercero interesada Lourdes Hernández Aceves, también conocida como María de Lourdes Hernández Aceves, por EDICTOS haciéndole saber que podrá presentarse dentro de treinta días contados al siguiente de la última publicación apercibido que de no hacerlo las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista en los estrados de este juzgado en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. En el entendido que se encuentran señaladas las diez horas con cuatro minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; sin que ello impida que llegada la fecha constituya un impedimento para la publicación de los edictos, ya que este órgano jurisdiccional vigilará que no se deje en estado de indefensión a la tercero interesada de referencia.

Atentamente
Tijuana, B.C., 26 de octubre de 2016.
Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito
en Materia de Amparo y de Juicios Federales
en el Estado de Baja California.
Lic. Bernadette Ballesteros Sesma.
Rúbrica.

(R.- 440619)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora,
con sede en Hermosillo, Sonora
EDICTO:

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora. En el Juicio de amparo 409/2016, por desconocerse el domicilio de la tercero interesada Edna Gloria Barrios Guevara, se ordena su emplazamiento por edictos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial de la Federación" y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, así como en la puerta de este Tribunal, requiriéndose para que dentro del término de treinta días, contados a partir de la última publicación, señale domicilio conocido en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones, apercibiéndose que, de no hacerlo, se hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III, de la Ley de Amparo y 239 a 247 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal A. Nombre de los quejosos: Francisco Manuel Tarazón Castro y Alejandrina Eduwiges Espinoza Durazo B. Tercero interesada: Edna Gloria Barrios Guevara. C. Autoridad responsable: Segundo Tribunal Regional Colegiado del Primer Circuito, con residencia en Hermosillo. D. Acto reclamado: La resolución emitida en veinte de mayo de dos mil dieciséis por la responsable en el Toca número 275/2015 que confirma la resolución interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil quince dictada por la Juez Tercera de lo Mercantil, de esta ciudad.

Para ser publicado por tres veces de siete en siete días, en el "Diario Oficial de la Federación" y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana.

Atentamente:
Hermosillo, Sonora, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.
Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito
en el Estado de Sonora.
Licenciada Margarita Garzón Munguía.
Rúbrica.

(R.- 440643)

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas,

con residencia en Tuxtla Gutiérrez

EDICTO

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.

C. **JUAN CARLOS ÁLVAREZ JIMÉNEZ**, TERCERO INTERESADO EN EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE.

En el juicio de amparo **448/2016, (antes 110/2016),** promovido por **Saúl Omar Mundo Beltrán,** contra actos de la **Magistrada de la Segunda Sala Regional en Materia Penal 01, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad**, radicado en este Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, sito en Palacio de Justicia Federal, Edificio "B", Planta Baja, Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, Colonia Las Palmas, código postal 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se dictó el acuerdo de fecha **siete de septiembre de dos mil dieciséis**, mediante el cual se ordenó emplazarle al presente juicio, en virtud de que se le ha señalado como tercero interesado y, como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarla por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley en cita; haciéndole saber que podrá presentarse dentro de los **TREINTA DIAS,** contados a partir del siguiente al de la última publicación por sí o apoderado, apercibida que de no hacerlo, las ulteriores

notificaciones les surtirán efectos por medio de lista en estrados de este Juzgado. Quedando a su disposición en este órgano judicial la demanda de garantías de que se trata; asimismo, se le hace de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra prevista para su celebración a las **NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**. Fíjese en la puerta de este Tribunal un ejemplar de este edicto, por el término que dure la notificación.

Atentamente.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 7 de septiembre de 2016.

Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.

Iván René Castro Flores.

Rúbrica.

(R.- 438452)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil
Ciudad de México
EDICTO

TERCERA INTERESADA: NORMA VALENZUELA.

EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SECCIÓN AMPAROS, MESA V, JUICIO DE AMPARO 299/2016-V, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

En los autos del juicio de amparo **299/2016-V**, promovido por Álvaro Humphrey Ferzulli, por propio derecho…**. Autoridad responsable:** Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil, actuarios adscritos a dicho juzgado, Secretario de Seguridad Publica, Director Ejecutivo de Asistencia Legal, Apoyos y Mandamientos Oficiales, de la Secretaría de Seguridad Pública, Subdirector de Ejecución de Mandamientos Judiciales y Apoyos Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Jefe de Unidad Departamental, de Mandamientos Judiciales y Apoyos Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, y Titular de la Dirección General de la Policía Metropolitana "Granaderos", de la Secretaría de Seguridad Pública, todos de la Ciudad de México. **Actos reclamados**. Todo lo actuado en la controversia de arrendamiento inmobiliario radicada en el expediente 979/1994, seguida por Celia Rascón Ornelas de Plaza en contra de Norma Valenzuela, ante el Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, así como la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en la calle Mérida, número doscientos cuarenta y cuatro, departamento uno, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, código postal cero seis mil setecientos, en esta Ciudad… **Auto de cinco de abril de dos mil dieciséis**…Se admite a trámite dicha demanda… requiérase a las autoridades responsables su informe justificado... se tiene como **terceras interesadas** a Celia Rascón Ornelas de Plaza y Norma Valenzuela… **Auto de dos de junio de dos mil dieciséis**… se difiere la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las **diez horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil dieciséis**… **Auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis…** hágase el emplazamiento a juicio de la citada tercera interesada, **por medio de edictos,** los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en un periódico de circulación nacional… haciendo del conocimiento de dicho sujeto procesal que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de treinta días, contado a partir del siguiente al de la última publicación de los edictos, ya que de no hacerlo, se le harán las subsecuentes notificaciones por medio de lista en los estrados de este juzgado.

Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil dieciséis.

El Secretario del Juzgado Segundo de Distrito
en Materia Civil en la Ciudad de México.

Lic. Miguel Angel Rodríguez Barroso.

Rúbrica.

(R.- 439663)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito
en el Estado de Quintana Roo
Cancún, Q. Roo
EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES

EN AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 135/2012, PROMOVIDO POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE FELIX ASTERIO AGUAYO RIVAS Y LINDA JEANETT AVITIA ALFARO, SE DICTÓ UN AUTO QUE, EN LO CONDUCENTE, DICE:

*Cancún, Quintana Roo, **a seis de octubre de dos mil dieciséis.***

Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por la parte actora mediante el cual exhibe el certificado de gravamen respecto del bien inmueble embargado en autos.

*Ahora bien, por lo que hace a la segunda de sus solicitudes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 474 del Código Federal de Procedimientos Civiles, **rematése en pública subasta y primer almoneda** el bien inmueble propiedad de la parte demandada y objeto de la garantía hipotecaria en el presente juicio, mismo que se encuentra ubicado en la **casa habitación marcada con el número oficial veintinueve (29), en la calle cerrada Quinta las Arboledas, manzana once (11), lote trece (13), del Fraccionamiento Real las Quintas en la Supermanzana doscientos dos (202) de esta ciudad,** inscrito bajo el folio electrónico 215032, en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta ciudad y clave catastral 601620201101300001.*

*Predio que **se fincara o adjudicara**, en su caso, al mejor postor conforme a derecho y por la cantidad de $358,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme al avaluó que obra en autos (foja 354).*

*Se señalan las **diez horas con veinticinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis**, para que tenga verificativo la audiencia pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este Juzgado.*

*Asimismo, se informa que para tomar parte en la subasta, deberán los postores interesados **exhibir previamente a la almoneda pública, numerario, cheque certificado o billete de depósito expedido por alguna institución crediticia**, en el que consignen por lo menos el diez por ciento del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no serán admitidos a la puja, tal y como lo dispone el numeral 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, **siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base para el remate.***

*En mérito de lo expuesto y de conformidad con lo preceptuado por el dispositivo 474 del invocado reglamento, **anúnciese el remate decretado en primer almoneda pública, convocando postores mediante edictos que deberán fijarse en los estrados de este Juzgado Federal, durante el tiempo en que se substancie la presente etapa de ejecución, además de los que la parte actora deberá publicar por dos veces de cinco en cinco días, en el Diario Oficial de la Federación**, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberá de ser de ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, numero de juicio y juzgado en el que se tramita, ello en aras de proveer la debida trasparencia en la presente etapa de ejecución.*

En tal sentido, quedan a disposición de los postores interesados, los planos y avalúo correspondientes, en la secretaria de este juzgado para su consulta, tal como lo establece el artículo 487 del código procedimental civil.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

*Así lo acordó y firma **Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez,** Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con la Secretaria, **Yaredh Cejudo Córdova,** quien autoriza. Doy fe.*

Lo que se manda publicar dos veces de cinco en cinco días en el Diario Oficial de la Federación, asimismo deberá fijarse el presente edicto en los estrados de este Juzgado Federal, durante el tiempo en que se substancie el presente procedimiento de ejecución, para que surta sus efectos legales en vía de notificación. Cancún, Quintana Roo, a siete de octubre de dos mil dieciséis.

Atentamente.
Cancún, Quintana Roo, 7 de octubre de 2016.
La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito
en el Estado de Quintana Roo.
Yaredh Cejudo Córdova
Rúbrica.

(R.- 440599)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa
Sección Amparo
Culiacán, Sinaloa
EDICTO

Emplazamiento a los terceros interesados Luis Alfredo Félix Sánchez, Rafael Hernández Olguín, José Francisco Castro López, Sofía Mendívil Viuda de Caro y Margarita Inzunza de Félix, al margen un sello del Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, Culiacán, Sinaloa.

Juicio de amparo **1023/2015,** promovido por **Jesús Alfonso Ibarra Salgado, apoderado legal de Héctor Rodolfo Ibarra Jumilla**, contra actos del Congreso del Estado de Sinaloa y otras autoridades, señalando como terceros interesados a **Luis Alfredo Félix Sánchez, Rafael Hernández Olguín, José Francisco Castro López, Sofía Mendívil Viuda de Caro y Margarita Inzunza de Félix**, atribuyendo a las autoridades responsables el acto reclamado consistente en:

"V.- *ACTOS RECLAMADOS.- Entendiéndose por éstos, las conductas (actos u omisiones) que se imputan a las autoridades responsables y que la parte quejosa impugna en esta vía constitucional, por considerar que son contraventores de la Constitución General de la República, en su Capítulo de Derechos Humanos, siendo en el caso concreto los que enseguida se enuncian:*

A.- Del H. Congreso del Estado de Sinaloa reclamo la aprobación y expedición, del Decreto Número 322, de fecha 30 de Agosto De 1962, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", Número 108, de 20 de Septiembre de 1962, por el que se reforma el Artículo 154 de la Constitución Política del Estado.

Cuestionando de la misma manera, de la indicada Autoridad Legislativa responsable, la aprobación y expedición del Decreto Número 126, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", Número 19 de fecha 13 de Febrero de 1937, mediante el cual se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 154 reformado de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, denominada "Ley de Expropiación".

Reclamando asimismo, del H. Congreso del Estado, la aprobación y expedición del diverso Decreto Número 42, Publicado en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 19, de fecha 13 de Febrero De 1954, mediante el cual se emiten reformas a la Ley de Expropiación en mención.

Igualmente reclamo del H. Congreso del Estado, la emisión del Decreto Número 318 de fecha 26 de Noviembre de 1968, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 147, de fecha 07 de diciembre de 1968, concerniente a la autorización otorgada al Poder Ejecutivo del Estado, para que por causa de utilidad pública y mediante el pago de Indemnización correspondiente, expropie un terreno con superficie de 84-02-31 hectáreas, afectando de esa manera, el predio propiedad de mi mandante que más adelante se precisará.

b.- Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y del C. Secretario General de Gobierno reclamo la promulgación o publicación del Decreto Número 322, de fecha 30 de Agosto de 1962, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 108, de 20 de septiembre de 1962, por el que se reforma el Artículo154 de la Constitución Política del Estado.

Señalando asimismo como acto reclamado del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y de su Secretario General de Gobierno, la promulgación o publicación del Decreto Número 126, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa", Número 19 de fecha 13 de Febrero de 1937, mediante el cual se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 154 reformado de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, denominada "Ley de Expropiación", Reclamando asimismo el diverso Decreto número 42, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 19, de fecha 13 de Febrero de 1954, mediante el cual se emiten reformas a la ley de Expropiación en mención.

Asimismo reclamo también del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa reclamo la promulgación o publicación del Decreto 318 de fecha 26 de Noviembre de 1968, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 147, de fecha 07 de diciembre de 1968, concerniente a la autorización otorgada al Poder Ejecutivo del Estado, para que por causa de utilidad pública y mediante el pago de indemnización correspondiente, expropie un terreno con superficie de 84-02-31 hectáreas, al que enseguida me referiré.

Por último, reclamo del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, y del C. Secretario General de Gobierno la emisión y publicación de la Declaratoria de Expropiación de Terrenos ubicados en el puerto de Altata, que aparece publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 148, de fecha 10 de diciembre de 1968, con el cual se afecta vía expropiación un terreno con superficie de 84-02-31 hectáreas, localizado por las medidas y linderos generales siguientes:

"FRACCIÓN de la finca rustica que según clasificación catastral obra registrada como de la propiedad del señor JAIME YUBI KOYAMA DEL CORTE y condueños, bajo el padrón número 727 cd Predios Rústicos y con valor fiscal de $348,575.00 según la cuenta 2034, expediente 5982 consistente en terreno con superficie 11-837-43.63 once mil ochocientas treinta y siete hectáreas, cuarenta y tres áreas y sesenta y tres centiáreas, en la inteligencia que el terreno cuya expropiación se autoriza, es una fracción de 84-02-31 ochenta y cuatro hectáreas doscientos treinta y un metros cuadrados que deberá tomarse de la superficie total antes citada y según el Plano levantado por el Departamento de Obras Publicas dependiente del Gobierno del estado, su localización es como sigue:

A partir del punto marcado en el plano con el número 0 que constituye uno de los vértices del lado oriente del polígono situado terrenos adentro de la carretera Culiacán-Altata, se arranca la poligonal con rumbo N45º00'E y distancia de 399.25 metros lineales hasta llegar al punto 1 que marca el vértice Nor-Oriente del mismo polígono en el cual dobla formando ángulo y escuadra tomando la línea en rumbo de N45º00'W y distancia de 1530.00 metros lineales hasta llegar al punto 2 que forma el vértice Nor-Poniente del propio polígono, para doblar nuevamente formando otra vez escuadra y rumbo de S45º'00W hasta llegar al punto 3 cubriendo una distancia de 577.25 metros; en este punto que forma el vértice Sur-Poniente del mismo polígono, continua la línea con rumo S40º00'E y distancia de 100.00 metros hasta llegar al punto 4 de donde continua de igual rumbo y distancia de 94.50 metros hasta llegar al punto 5 de donde dobla de nuevo con rumbo S57º00E y distancia de 67.00 metros lineales doblando de nuevo con rumbo S57º45'E y distancia de 100 metros lineales hasta llegar al punto 7 pasando por el punto 6 que le antecede; del punto 7 continua la línea con rumbo S44º00'F y distancia de 60.00 metros lineales hasta llegar al punto 8 y de este punto con rumbo S44º00'E y distancia de 100.00 metros hasta llegar al punto 9 para doblar con rumbo S43º45'E y distancia de 96.00 metros hasta alcanzar el punto 10 en donde sigue un rumbo de S56º30'E y distancia de 100.00 metros hasta llegar al punto 9 para doblar con rumbo S43º45?E y distancia de 96.00 metros hasta alcanzar el punto 10 en donde sigue un rumbo de S56º30 E y distancia de 89.00 metros lineales hasta alcanzar el punto 11y luego con rumbo S43º00E y distancia de 134.00 metros lineales hasta alcanzar el punto 12 en donde dobla con rumbo S46º45'E y distancia de 28.50 metros hasta llegar al punto 13, para doblar de nuevo con rumbo S47º00'E y distancia de 100.00 Mts. Lineales hasta llegar al punto 14 de donde sigue un rumbo de S47º00'E y distancia de 105.00 metros para seguir hasta el punto 15; del punto 16 continua la línea con rumbo S41º50'E y distancia de 49.00 metros hasta llegar al punto 17, para doblar nuevamente con rumbo S41 º50'E y distancia de 100.00 metros y con igual rumbo y la misma distancia hasta llegar al punto 19 pasando por el 18 y luego con rumbo S41 º30'E y distancia de 100.00 metros hasta llegar al punto 20 en donde dobla con rumbo S42º15' y distancia de 101.50 metros hasta llegar al punto 21 para doblar de aquí con rumbo S37º30'E y distancia de 70.00 metros para alcanzar el punto 22 del cual dobla con nuevo rumo con S53º30'E y distancia de 41.30 hasta alcanzar el punto 23 en el cual dobla con rumbo S66º15'E y distancia de 52.50 metros hasta llegar al punto 24 en donde dobla con rumbo N00º00W y distancia de 122.00 metros hasta llegar al punto 26 del cual finamente dobla con rumbo N32º50W y distancia de 147.50 metros hasta llegar al punto cero 0 de partida con lo cual cierra el polígono con las siguientes colindancias.

Al norte, con terrenos de propiedad Nacional y en parte con terrenos señalados en el plano como de la propiedad del señor Francisco Ritz; al Sur, con terrenos ocupados por residencias construidas en parte dentro d áreas que comprende la expropiación y el litoral del Océano Pacifico; Zona Federal de por medio perfectamente demilitada en el plano; Al oriente, con la carretera Culiacán-Altata. Terreno considerado como de propiedad Nacional de por medio; y al poniente, con propiedad conocida por el señor don Francisco Ritz.

Declaratoria ésta que tuvo como sustento la Ley de Expropiación Impugnada, entre los que se encuentra el predio propiedad de mi poderdante, ahora quejoso, según se dice, para destinarlos a la satisfacción de una necesidad pública.

Acto de expropiación que según se tiene conocimiento, fue ejecutado con apoyo en las normas que se consigan en una Ley de Expropiación claramente inconstitucional, pero además, sin haber existido o mediado procedimiento alguno en el que se involucrara a mi mandante hasta este momento, y mucho menos mediante el pago de la indemnización correspondiente, para que la actuación privativa del derecho de propiedad, pueda ser considerado como legal y constitucional, siendo por ello, que también se reclama del Gobernador Constitucional, en su caso, la abstención de cubrir el monto de indemnización correspondiente, no obstante que el acto expropiatorio fue autorizado y declarado hace más de cuarenta años.

C- Del C. Director del Periódico Oficial "El estado de Sinaloa", la publicación de los Decretos del Decreto Número 322, de fecha 30 de Agosto de 1962, número 126, publicado con fecha 13 de Febrero de 1937, Decreto Número 42, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 19, de fecha 13 de Febrero de 1954, Decreto Número 318 de fecha 26 de Noviembre de 1968, y de la Declaratoria de Expropiación de Terrenos ubicados en el puerto de Altata, que aparece publicada en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 148, de fecha 10 de diciembre de 1968, concernientes a la creación y reformas de la Ley de Expropiación, a la expropiación y declaratoria que se tildan de inconstitucionales.

D.- Reclamando finalmente del C. Director General del Instituto Catastral de Estado de Sinaloa, la corrección y asentamiento en sus sistemas administrativos y regístrales, de la superficie total que mí representado detenta en propiedad en relación con la Clave Catastral número 008-002-002-009-001-001, inmueble que en realidad cuenta con una superficie de 10,646.286 metros cuadrados, y ante dicha autoridad únicamente aparecen registrados 4,113.24 metros cuadrados".

Ahora bien, con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso b), último párrafo de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se ordena el emplazamiento por medio de EDICTOS a los terceros interesados **Luis Alfredo Félix Sánchez, Rafael Hernández Olguín, José Francisco Castro López, Sofía Mendívil Viuda de Caro y Margarita Inzunza de Félix**, en relación a la demanda de garantías promovida por **Jesús Alfonso Ibarra Salgado, apoderado legal de Héctor Rodolfo Ibarra Jumilla,** haciéndoles saber que deberán apersonarse al presente juicio de garantías, con el carácter de terceros interesados dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, debiendo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; si pasado dicho término no lo hicieren, las ulteriores notificaciones de este juicio, les surtirán efectos por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado; asimismo, se hace de su conocimiento que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, se encuentra ubicado en Carretera a Navolato, número 10321, poniente, Kilómetro 9.5, Sindicatura de Aguaruto, Código Postal 80375.

Culiacán, Sinaloa, a 17 de octubre de 2016.
El Secretario del Juzgado Segundo de Distrito
en el Estado de Sinaloa.
Lic. Luis Jorge Gutiérrez Cota.
Rúbrica.

(R.- 440688)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México
Juicio de Amparo: 938/2016-VIII
Quejoso: Banco Nacional de Comercio Exterior, s.n.c. y otra
TEXTO A PÚBLICAR

"En los autos del Juicio de Amparo número 938/2016**-VIII** promovido por BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO y PETRÓLEOS MEXICANOS contra actos del **PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y OTRA AUTORIDAD,** se ha señalado a usted **Patricio Pérez Gaytán** como tercero interesado y, como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado emplazarlo por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III inciso b) último párrafo de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, según su artículo 2º, párrafo segundo, quedando a su disposición en el local de este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, copia simple de la demanda de garantías, y se le hace saber además, que se han señalado las **ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,** para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, así como que deberá presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días a través de quien sus intereses represente, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista.

Fíjese en los estrados de este Juzgado copia íntegra del presente acuerdo, por todo el tiempo que dure el emplazamiento."

Ciudad de México, 3 de octubre de 2016.
El Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México
Lic. Jonathan Martínez Morales
Rúbrica.

(R.- 440678)

AVISOS GENERALES

Estados Unidos Mexicanos

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

EDICTO

C. Representantes del núcleo agrario Ejido Isla Mujeres ubicado en el municipio de Isla Mujeres, y demás propietarios, poseedores y titulares de otros derechos, en la región conocida como Caribe Mexicano, en el estado de Quintana Roo.

Mediante Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de abril de 2016, se puso a disposición del público el estudio elaborado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para justificar la expedición de la declaratoria por la cual se pretende establecer como área natural protegida la región conocida como “Caribe Mexicano” y del cual se desprende la información que se cita a continuación para su identificación:

Categoría: Reserva de la Biosfera.

Razones que justifican el régimen de protección: Conservar en su porción terrestre los ecosistemas de selva mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia y selvas bajas, playas arenosas, y dunas y lagunas costeras; y en el ambiente marino lechos de pastos marinos, arrecifes de coral, montes submarinos, domos salinos, dorsales oceánicas, cañones submarinos; todos ecosistemas terrestre y marinos que son hábitat esencial para especies de aves, felinos, tortugas marinas, tiburones, rayas y peces asociados a los arrecifes coralinos, entre otros, algunas catalogadas en categoría de riesgo. Provee servicios ambientales como son el mantenimiento de los procesos biológicos fundamentales para la producción primaria, las funciones ecológicas de las zonas de refugio, sitios de reproducción y crianza de especies comerciales, así como los servicios ambientales de paisaje y esparcimiento.

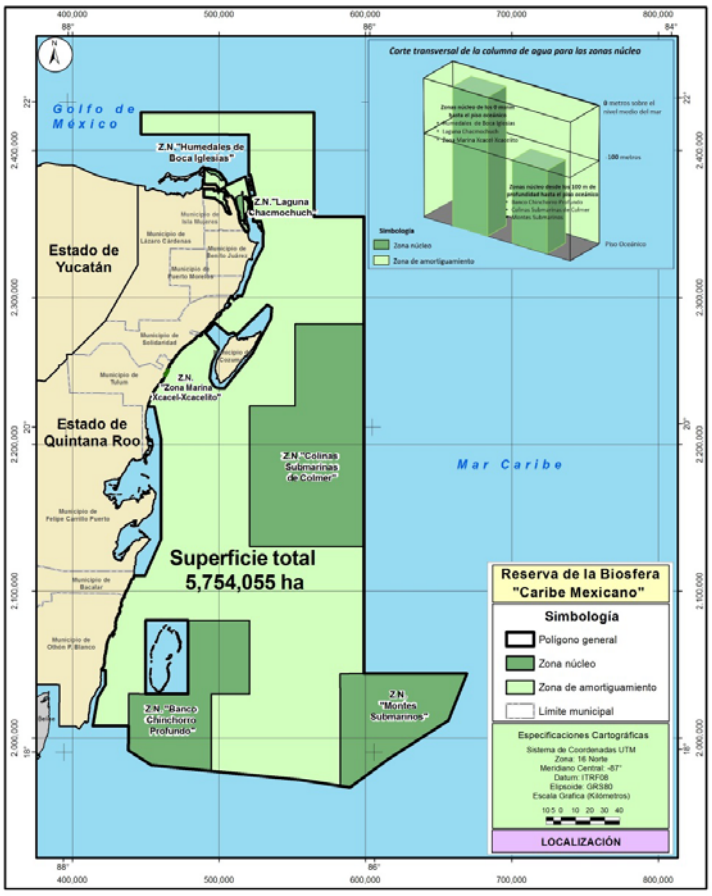
Superficie: 5,754,055 hectáreas (CINCO MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO HECTÁREAS).

Ubicación: municipio de Isla Mujeres y Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo; y una porción de la zona económica exclusiva en el mar Caribe de México, frente al estado de Quintana Roo.

Localización del Área Natural Protegida: El polígono propuesto para el área natural protegida se localiza en las siguientes coordenadas extremas:

	Longitud Oeste	Latitud Norte
máxima	87° 48' 50.6''	21° 56' 13.72''
mínima	85° 23' 50.0''	17° 47' 06.2''

El plano de ubicación del área natural protegida es el siguiente:



Por lo antes mencionado y con fundamento en lo establecido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a disposición el expediente correspondiente, por edictos que serán publicados por tres días consecutivos en el **Diario Oficial de la Federación**, y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional y en la Entidad Federativa correspondiente, en el que podrá consultarse el estudio elaborado para justificar el establecimiento del área arriba mencionada, el plano de localización y el proyecto de instrumento jurídico a través del cual se propondrá su formalización, así como las prohibiciones y modalidades a las que se sujetarán las actividades asociadas a la categoría de Reserva de la Biosfera de conformidad con el artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; con la finalidad de que dentro de un término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al que se realice la última publicación, manifiesten por escrito lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes, lo que podrán hacer en las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ubicadas en Ejército Nacional número 223, colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11320, Distrito Federal; y en la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ubicada en Calle Venado números 71 y 73, supermanzana 20, manzana 18, retorno 8, lotes 2 y 4, código postal 77500, ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mismo lugar donde pueden consultar el expediente relativo e imponerse de las subsecuentes notificaciones en horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Atentamente
Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2016.
El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Alejandro Del Mazo Maza
Rúbrica.

(R.- 440704)

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

EDICTO

PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES DE OTROS DERECHOS DE LOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA YUM BALAM.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informa a ustedes que concluyó la elaboración del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, establecida mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Por lo que con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para otorgar la garantía de audiencia, pone a su disposición el proyecto de Resumen del Programa de Manejo de dicha Área Natural Protegida, mismo que esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pondrá a consideración y, en su caso, firma del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicho documento estará disponible en las oficinas de la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano, de esta Comisión Nacional, ubicadas en Retorno Venado, supermanzana 20, manzana 18, lote 2 y lote 4, números 71 y 73, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500, con un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas, para que de un término de diez días contados a partir del día siguiente al que se realice la última publicación del presente Edicto, manifiesten por escrito lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes en el domicilio y horarios antes indicados, de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Con fundamento en los artículos 35, fracción III, y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo publíquese el presente Edicto por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en el territorio nacional, para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente
Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.
El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Alejandro Del Mazo Maza
Rúbrica.

(R.- 440703)

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
EDICTO

CC. BENIGNO CORREA MOGUEL, ALBERTO EDUARDO CORAL SANTANA, y JOSE ALFREDO GÓMEZ GASCA, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del EJIDO HOLBOX; MIGUEL VELAZQUEZ NIEVA, SANTA BARTOLO ACUÑA y CRUZ GARCÍA RAMÍREZ, Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del EJIDO ISLA HOLBOX; ALEJANDRO CANALES REYGADAS, GABRIELA TOXQUI MORALES y SUGEHIL MAYUMI RIOU SÁNCHEZ, Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente, del Comisariado Ejidal del EJIDO PENÍNSULA HOLBOX; EVERARDO GRACIDA AQUINO, EDUARDO JOSÉ CERVANTES DOMÍNGUEZ y HÉCTOR APOLINAR HUESCA DAMIAN, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del EJIDO PUNTA HOLBOX, EJIDOS TODOS ÉSTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informa a ustedes que concluyó la elaboración del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, establecida mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Por lo que con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para otorgar la garantía de audiencia a los Ejidos que representan, pone a su disposición el proyecto de Resumen del Programa de Manejo de dicha Área Natural Protegida, mismo que esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pondrá a consideración y, en su caso, firma del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicho documento estará disponible en las oficinas de la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano, de esta Comisión Nacional, ubicadas en Retorno Venado, supermanzana 20, manzana 18, lote 2 y lote 4, números 71 y 73, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500, con un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas, para que de un término de diez días contados a partir del día siguiente al que se realice la última publicación del presente Edicto, manifiesten por escrito lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes en el domicilio y horarios antes

indicados, de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Con fundamento en los artículos 35, fracción III, y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo publíquese el presente Edicto por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en el territorio nacional, para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente
Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.
El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Alejandro Del Mazo Maza
Rúbrica.

(R.- 440702)

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Gobernación
Comisionado Nacional de Seguridad
Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada
Dirección General de Seguridad Privada
PUBLICACIÓN DE SANCIÓN

El 7 de octubre de 2016, en el expediente administrativo 108/2014 que obra en los archivos de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación, se sancionó al prestador de servicios de seguridad privada SEGURIDAD PRIVADA SAGAS, S.A. DE C.V., con la siguiente sanción:

PRIMERO. Se impone a SEGUIRIDAD PRIVADA SAGAS, S.A. DE C.V., con domicilio en Norte 80, número 4303, Colonia La Malinche, Delegación Gustavo A. Madero, CP. 07899, Ciudad de México como resultado del incumplimiento a los artículos 19 de la Ley Federal de Seguridad Privada y 9, del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, la sanción prevista en el artículo 42 fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Seguridad Privada, consistente en: **suspensión de los efectos del permiso para prestar servicios de seguridad privada expedido por la Dirección General de Seguridad Privada con número de registro DGSP/108-14/2609 por el término de un mes.**

Sanción que surtirá efectos, a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo determinó y firma el Licenciado Juan Antonio Arámbula Martínez, Director General de Seguridad Privada de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación.

Atentamente
Ciudad de México, 7 de octubre de 2016
Director General de Seguridad Privada
Lic. Juan Antonio Arámbula Martínez
Rúbrica.

(R.- 440648)

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Gobernación
Comisionado Nacional de Seguridad
Dirección General de Seguridad Privada
PUBLICACIÓN DE SANCIÓN

El once de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente administrativo 155/2012, que se tramita ante la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaria de Gobernación, se sanciono al prestador de servicios de seguridad privada denominado **Seguridad Privada Lincon, S.A. de C.V.,** con la siguiente sanción:

Se impone a la persona moral **Seguridad Privada Lincon, S.A. de C.V.,** como resultado del incumplimiento del artículo 32 fracción XXVII de la Ley Federal de Seguridad Privada, la sanción prevista en el artículo 42 fracción III, inciso “a” de la Ley Federal de Seguridad Privada, consistente:

Suspensión de los efectos de la revalidación de la autorización expedida por la Dirección General de Seguridad Privada con número de registro DGSP/155-12/2070 por el término de un mes.

Sanción que surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo determinó y firma el licenciado Juan Antonio Arámbula Martínez, Director General de Seguridad Privada de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Secretaria de Gobernación.

Atentamente
Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.
Director General de Seguridad Privada.
Lic. Juan Antonio Arámbula Martínez.
Rúbrica.

(R.- 440652)

Estados Unidos Mexicanos

Procuraduría General de la República
Agencia del Ministerio Público de la Federación Investigadora
Guanajuato, Gto.
PUBLICACION POR EDICTO

SE NOTIFICA A QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO DEL VEHICULO MARCA GMC, TIPO CHEVROLET, CAMIONETA., MODELO ESTACAS (CAJA METÁLICA) DOBLE RODADA, LINEA 3 TONELADAS, CARROCERIA CABINA CONVENCIONAL DOS PUERTAS, COLOR ROJO CON BLANCO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, TRANSMISION ESTANDAR, MOTOR OCHO CILINDROS, CON NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR 3GCJC54K5WG160979, AÑO MODELO 1998, ENSAMBLADO EN SILAO, MEXICO. QUE EN LA AVERIGUACION PREVIA AP.- PGR/GTO/GTO/3364/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR EL DELITO DE POSESION ILICITA DE HIDROCARBURO, SE DECRETO EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE DICHO VEHÍCULO, RAZON POR LA QUE DEBERA ABSTENERSE DE ENAJENARLO, GRAVARLO, HIPOTECARLO Y QUE DE NO MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN UN TERMINO DE NOVENTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE NOTIFICACION ANTE LA C. LICENCIADA MARCELA CHAVEZ FLORES, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, EN APOYO A LA MESA PRIMERA DE INVESTIGACION DEL SISTEMA TRADICIONAL DE GUANAJUATO, CAUSARA ABANDONO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 40, 41 Y 193 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; 1 FRACCION I, 2 FRACCION II, 123, 181, 182, 182-A Y 182-B DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 1 FRACCION I, 3, 5, 6 Y 76 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO.

Guanajuato, Gto., junio 07 de 2016.
La C. Agente del Ministerio Público de la Federación
en apoyo a la Mesa Primera de Investigación
del Sistema Tradicional en Guanajuato, Gto.
Lic. Marcela Chávez Flores
Rúbrica.

(R.- 440466)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Agencia del Ministerio Público de la Federación Investigadora
Guanajuato, Gto.
PUBLICACION POR EDICTO

SE NOTIFICA A QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO DE UNA CAMIONETA DODGE, TIPO ESTACAS, MODELO RAM4000, DOBLE RODADA ESTACAS, CARROCERÍA CABINA CONVENCIONAL, DOS PUERTAS, COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KV-45-792 PARTICULARES DEL ESTADO DE MÉXICO, TRANSMISIÓN ESTÁNDAR, MOTOR OCHO CILINDROS, NÚMERO DE SERIE 3B6MC3656YM261157, AÑO MODELO 2000, ENSAMBLADO EN MÉXICO, D.F.; QUE EN LA AVERIGUACION PREVIA **AP/PGR/GTO/GTO/2201/2014**, INSTRUIDA EN CONTRA DE **QUIEN RESULTE RESPONSABLE,** POR EL DELITO DE **ROBO,** SE DECRETO EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE DICHO VEHÍCULO, RAZON POR LA QUE DEBERA ABSTENERSE DE ENAJENARLO, GRAVARLO, HIPOTECARLO Y QUE DE NO MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN UN TERMINO DE NOVENTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE NOTIFICACION ANTE LA C. LICENCIADA MARCELA CHAVEZ FLORES, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, EN APOYO A LA MESA PRIMERA DE INVESTIGACION DEL SISTEMA TRADICIONAL DE GUANAJUATO, CAUSARA ABANDONO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 40, 41 Y 193 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; 1 FRACCION I, 2 FRACCION II, 123, 181, 182, 182-A Y 182-B DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 1 FRACCION I, 3, 5, 6 Y 76 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO.

Guanajuato, Gto., junio 08 de 2016.
La C. Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo
a la Mesa Primera de Investigación del Sistema Tradicional
en Guanajuato, Gto.
Lic. Marcela Chávez Flores
Rúbrica.

(R.- 440468)

Estados Unidos Mexicanos

Procuraduría General de la República
Agencia del Ministerio Público
de la Federación Investigadora
Guanajuato, Gto.
PUBLICACION POR EDICTO

SE NOTIFICA A QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO DEL VEHICULO MARCA FORD, TIPO PIPA, MODELO F-350, COLOR AZUL, DOS PUERTAS, OCHO CILINDROS, SIN PLACAS DE CIRCULACION, TRANSMISION ESTANDAR, CON NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR 2FTJ35G0JCA136881, AÑO MODELO 1988, ENSAMBLADO CANADA. QUE EN LA AVERIGUACION PREVIA AP.- PGR/GTO/GTO/2185/2014, INSTRUIDA EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR EL DELITO DE VIOLACION A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, SE DECRETO EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE DICHO VEHÍCULO, RAZON POR LA QUE DEBERA ABSTENERSE DE ENAJENARLO, GRAVARLO, HIPOTECARLO Y QUE DE NO MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN UN TERMINO DE NOVENTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE NOTIFICACION ANTE LA C. LICENCIADA MARCELA CHAVEZ FLORES, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, EN APOYO A LA MESA PRIMERA DE INVESTIGACION DEL SISTEMA TRADICIONAL DE GUANAJUATO, CAUSARA ABANDONO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 40, 41 Y 193 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; 1 FRACCION I, 2 FRACCION II, 123, 181, 182, 182-A Y 182-B DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 1 FRACCION I, 3, 5, 6 Y 76 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO.

Guanajuato, Gto., junio 20 de 2016.
La C. Agente del Ministerio Público de la Federación
en apoyo a la Mesa Primera de Investigación
del Sistema Tradicional en Guanajuato, Gto.
Lic. Marcela Chávez Flores
Rúbrica.

(R.- 440470)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Agencia del Ministerio Público Federal
Segunda de Investigación de Procedimientos Penales del Sistema Tradicional
León, Guanajuato
PUBLICACIÓN POR EDICTO

- - - SE NOTIFICA **A QUIENES RESULTEN SER PROPIETARIOS DEL SIGUIENTE VEHICULO:** 1).- **UN VEHICULO MARCA FORD, TIPO CAMIÓN, MODELO F-350, CARROCERÍA ESTACAS, COLOR AMARILLO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, MOTOR OCHO CILINDROS, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR AC3JSD71361, AÑO MODELO 1976, ENSAMBLADO EN MÉXICO.** QUE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA **AP.- PGR/GTO/LEON-III/4203/2012,** INSTRUIDA EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR EL DELITO DE CONTRA LA SALUD, SE DECRETO EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DEL VEHÍCULO, RAZÓN POR LA QUE SE DEBERÁ DE ABSTENERSE DE ENAJENARLO, GRABARLO, HIPOTECARLO, Y QUE DE NO MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN UN TERMINO DE NOVENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN ANTE LA C. LIC. MA. ISABEL BERMÚDEZ PRADO, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA DE INVESTIGACION DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL SISTEMA TRADICIONAL LEON, GUANAJUATO, CON DOMICILIO EN CALLE MAQUILADORES NUMERO 200 ESQUINA CON CALLE AVIADORES DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE LEON; GUANAJUATO; CAUSARA ABANDONO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40, 41 Y 193 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 1 FRACCIÓN I, 2 FRACCIÓN II, 123, 181, 182, 182-A Y 182-B DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 1 FRACCIÓN I, 3, 5, 6 Y 76 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.

León, Guanajuato, 20 de Junio del año 2016.
La Agente del Ministerio Público de
la Federación Titular de la Agencia Segunda de Investigación
de Procedimientos Penales del Sistema Tradicional León, Guanajuato
León, Guanajuato
Lic. Ma. Isabel Bermúdez Prado.
Rúbrica.

(R.- 440471)

Estados Unidos Mexicanos

Procuraduría General de la República
Agencia del Ministerio Público Federal
Titular de la Agencia Primera Investigadora
del Sistema Tradicional
PUBLICACIÓN POR EDICTO

- - - SE NOTIFICA A QUIEN RESULTE SER EL PROPIETARIO DEL SIGUIENTE VEHICULO: MARCA NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO 720 PICK UP, CARROCERIA CAJA LARGA, COLOR CAFÉ, PLACAS DE CIRCULACIÓN GJ-83-390, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR JN6ND02S3EW007373**,** SE DECRETO SU ASEGURAMIENTO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA **AP/PGR/GTO/LEON-IV/752B/2015,** INSTRUIDA EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR EL DELITO DE SUSTRACCIÓN ILICITA DE HIDROCARBURO, RAZÓN POR LA QUE SE DEBERÁ ABSTENERSE DE ENAJENARLO, GRABARLO O HIPOTECARLO, Y QUE DE NO MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN UN TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, ANTE LA C. LICENCIADA LEYDEN PADILLA ARISTA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA DEL SISTEMA TRADICIONAL EN LEÓN, GUANAJUATO, CON DOMICILIO EN CALLE MAQUILADORES ESQUINA AVIADORES, NÚMERO DOSCIENTOS, DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO; CAUSARA ABANDONO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40, 41 Y 193 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 1 FRACCIÓN I, 2 FRACCIÓN II, 123, 181, 182, 182-A Y 182-B DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 1 FRACCIÓN I, 3, 5, 6 Y 76 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.

León, Guanajuato, 10 de junio del año 2016.
La Agente del Ministerio Público de la Federación
Titular de la Agencia Primera Investigadora
del Sistema Tradicional en León, Guanajuato.
Licenciada Leyden Padilla Arista.
Rúbrica.

(R.- 440472)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Agencia Segunda Investigadora
del Ministerio Público Federal
Unidad de Sistema Tradicional
en Irapuato, Guanajuato
PUBLICACION POR EDICTO

SE NOTIFICA A QUIEN RESULTE SER EL PROPITARIO DEL SIGUIENTE VEHÍCULO: **1.- Semirremolque marca El Mexicano, tipo tanque, color blanco, de dos ejes, con número de serie 3T9TA3020AM037989, de origen nacional, modelo año 2010.** QUE SE ASEGURÓ EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA **AP/PGR/GTO/IRPTO-I/5176/2013**, INSTRUIDA EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR EL DELITO DE SUSTRACCIÓN ILÍCITA DE HIDROCARBURO, SE DECRETÓ EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE DICHO VEHÍCULO, RAZÓN POR LA QUE SE DEBERÁ ABSTENERSE DE ENAJENARLO GRABARLO O HIPOTECARLO, Y QUE DE NO MANIFESTAR LO QUE A SU DRECHO CONVENTA EN UN TÉRMINO DE NOVENTA DIAS NATURALES, CONTANDOS A PARTIR DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, ANTE EL C. LICENCIADO JAIME MORA VALLEJO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, EN APOYO DE LA AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA DE LA UNIDAD DE SISTEMA TRADICIONAL CON DOMICILIO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, NÚMERO 97, COLONIA ALVARO OBREGÓN DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO; CAUSARA ABANDONO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40, 41 Y 193 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 1 FRACCCIÓN I, 2 FRACCIÓN II, 123, 181, 182-a y 182- 182-A ULTIMO PÁRRAFO Y 182-B FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 1 FRACCIÓN I, 2 FRACCIÓN II, 3, 5 Y 6 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.

Irapuato, Guanajuato 18 de mayo del año 2016.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
en apoyo de la Agencia Segunda Investigadora
de la Unidad de Sistema Tradicional
en Irapuato, Guanajuato.
Lic. Jaime Mora Vallejo
Rúbrica.

(R.- 440474)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas
EDICTO

La Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con fundamento en los artículos 181, 182, 182-A y 182-B fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales; por esta vía NOTIFICA a los **INTERESADO(S), y/o REPRESENTANTE LEGAL y/o QUIEN RESULTE LEGALMENTE CON DERECHO O TENGA INTERES JURIDICO, el ACUERDO de diez de mayo de dos mil quince, dictado en la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIDCS/241/2015, posteriormente quedando como triplicado abierto la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/242/2015 la cual declino competencia en razón de especialidad siendo actualmente la indagatoria PGR/SEIDO/UEITA/137/2016, a través del cual se decretó el ASEGURAMIENTO precautorio del siguiente vehículo: camioneta marca Mercedes Benz, tipo ML63, color plata, año modelo 2015, placas de circulación C-20-ABJ del Distrito Federal, con número de serie: 4JGDA7EB5FA483534,** lo anterior a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, ubicadas en Paseo de la Reforma número 75, primer piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300, Ciudad de México, México, lugar donde se ponen a su disposición las constancias conducentes al citado acuerdo de aseguramiento; apercibiéndosele que de no manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo de noventa días naturales que señala el artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales a partir de la presente notificación, el aludido bien causará abandono a favor del Gobierno Federal.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.
La Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a UEITA de la SEIDO.
Lic. Ana Elisa Escobar Ramos
Rúbrica.

(R.- 440475)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas
EDICTO

Se **NOTIFICA** a cualquier otra persona que crea tener interés jurídico, que la institución del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Procuraduría General de la República, mediante acuerdo del veinte de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa número **AP/PGR/SEIDO/UEITA/233/2015, triplicado abierto de la AP/PGR/SEIDO/UEITA/232/2015,** decretó el aseguramiento respecto de un vehículo de la marca **CHEVROLET, TIPO PICK UP, MODELO CHEYENNE, COLOR CAFÉ METÁLICO, DOS PUERTAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JF-19-022, DEL ESTADO DE JALISCO, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHÍCULAR 1GCEC34R1XZ209096, CORRESPONDE A UN VEHÍCULODE ORIGEN EXTRANJERO (E.U.A.), AÑO MODELO 1999**. Notificación que se hace de conformidad con lo previsto por el numeral 182-B, fracción I, inciso a), del Código Federal de Procedimientos Penales; y se apercibe a los interesados que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el diverso numeral 182-A, último párrafo del mismo Código Adjetivo invocado. Queda a disposición de quien se considere con derechos sobre el vehículo citado, en las instalaciones que ocupa esta Representación Social de la Federación, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300, México Distrito Federal. - **CÚMPLASE** -

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".
Ciudad de México, a 19 de octubre de 2016.
La C. Agente del Ministerio Público de la Federación.
Lic. Nancy Victoria Martínez Sánchez
Rúbrica.

(R.- 440476)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos
EDICTO

---Se notifica **A QUIEN O QUIENES TENGAN INTERÉS JURÍDICO**, el acuerdo de fecha 19 de agosto del 2016, dictado en autos de la indagatoria **PGR/SEIDO/UEIARV/051/2014**, por el cual se decretó el **ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO** de lo siguiente: **INMUEBLES: 1.** Calle prolongación 20 de noviembre, sin número en la localidad de villa alta, municipio de Tepetitlan de Lardizábal, Estado de Tlaxcala con coordenadas geográficas 19.2930233 – 98.4089197, **Actualmente el domicilio se le conoce como CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PARCELA 96 DEL EJIDO DE VILLA ALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLAN DE LARDIZABAL, ESTADO DE TLAXCALA, con coordenadas UTM 562 108.47 E, 2 133 350.56 N.**; **2.** Carretera Federal Kilómetro 32.5 sin número de la colonia los Ángeles, C.P. 55882, municipio de Acolman, Estado de México, con coordenadas geográficas 19.615704 – 98.972893, **Actualmente el domicilio correcto es el ubicado en Carretera Federal kilómetro 32.5 lote 18, manzana 4, zona 4, con una superficie de 1500.00 metros cuadrados perteneciente al poblado de San miguel Totolcingo, Municipio de Acolman, Estado de México, con coordenadas UTM 502 813.65 E, 2 168 979.78 N.**; **3.** Calle Jacarandas sin número, Colonia primera de jacarandas en el Municipio de Tepexpan, Estado de México, con coordenadas geográficas 19.618448 – 98.4089197, **actualmente el domicilio correcto es el ubicado en Calle Jacarandas Manzana 7, lote 16, zona 2, con una superficie de 304.488 metros cuadrados entre las calles de segunda cerrada de Jacarandas y primera cerrada de jacarandas, perteneciente al poblado de San Miguel Totolcingo, municipio de Acolman, con coordenadas UTM 503 143.91, 2 169 220.01 N** y **4.** Calle Miguel Alemán Valdez, sin número entre las calles Guadalupe Victoria y Adolfo Ruiz Cortines, Colonia Anáhuac, Municipio de Tepexpan, Estado de México; con coordenadas geográficas 19.615831 – 98.955481, **actualmente el domicilio correcto es el ubicado en Calle Miguel Alemán Valdez, sin número, entre las calles Guadalupe Victoria y Adolfo Ruiz Cortines, Colonia Tepexpan, Municipio de Acolman, Estado de México, con coordenadas UTM 504 685.18 E, 2 168 959.51 N. VEHÍCULOS: 1.** Vehículo marca Ford, tipo Pipa, modelo F-700, color blanco, placas de circulación **XB-01-467** del Estado de Tlaxcala, con número de identificación vehicular de la cabina 3FEXF708XWJA01277, año modelo 1998. **2.** Vehículo marca GMC, tipo Pipa, cabina en color verde y tanque en blanco con verde en la parte inferior, placas de circulación **SM-02-569** del Estado de Puebla, con número de identificación vehicular de la cabina 3GCM7H1P0TM500782, año modelo 1996. **3.** Vehículo marca Kenworth, tipo Autotanque/Pipa, color blanco, placas de circulación **LB-03-586** del Estado de México, con número de chasis 511670, no es posible establecer su origen así como su año modelo. **4.** Vehículo marca International, tipo Autotanque/Pipa, color blanco, placas de circulación **LB-37-403** del Estado de México, es un automotor armado por dos vehículos diferentes de la misma marca (International) siendo el número de identificación vehicular de la cabina 1HTMMAAN15H112209, de origen extranjero y un año modelo 2005 y el número de identificación del chasis 3HANKAAR16L284930 de origen nacional y un año modelo 2006. **5.** Vehículo tipo pipa de la marca International, color blanco, con placas de circulación **LA-97-461** del Estado de México, con número de serie 3HAMMAAR07l417054, mismo que contiene leyenda en color plata en ambas puertas “4 200 VT365” y **6.** Vehículo de la marca International, color blanco la cabina, y con el chasis pintado en color negro, con placas de circulación **LA-81-929** del Estado de México, con número de serie 3HANKAAR87L396383. **NUMERARIO** siendo este la cantidad de **$4, 840,414.00** (Cuatro millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.). Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo **182-A** del Código Federal de Procedimientos Penales.----------
----------**CÚMPLASE**----------

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Ciudad de México a 06 de Octubre de 2016
La Agente del Ministerio Público de la Federación
adscrita a la U.E.I.A.R.V. de la S.E.I.D.O
Lic. Blanca Estela Popoca Castañeda
Rúbrica.
Vo. Bo.
Fiscal de la UEIARV
Lic. Miguel Leyva Medina
Rúbrica.

(R.- 440477)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud
EDICTO

Se notifica **A QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO Y/O PROPIETARIOS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS JURÍDICO**, el acuerdo dictado en autos de la indagatoria **PGR/SEIDO/UEIDCS/395/2014**, del 19 de agosto de 2015, por medio del cual se decretó el aseguramiento precautorio de los equinos que a continuación se mencionan: **1) Macho entero de color retinto, con albo posterior izquierdo, de tres años de edad aproximadamente, con condición corporal normal en escala de HENNEKE, en la frente muestra lucero; 2) Macho entero color alazán con tresalbo anterior izquierdo, de ocho meses aproximadamente, con condición corporal normal en escala de HENNEKE, en la frente muestra un lucero, faja con bebé y derrama; 3) Macho entero color alazán, con tatuaje en el brazo izquierdo en forma de dos "v" una de ellas invertida y una "s" en medio, con microchip número 0484045200005665, con lunar en extremidad posterior izquierda, de dos años de edad aproximadamente, con condición corporal normal en escala de HENNEKE, en su frente muestra un lucerillo, faja y lunar entre ollares; 4) Macho entero color palomino, con tatuaje en el brazo izquierdo en forma de dos "v" una de ellas invertida y una "s" en medio, tatuaje en el muslo izquierdo con la forma de las letras "J" y "E", con tresalbo posterior derecho, de aproximadamente siete años de edad, con condición corporal normal en escala de HENNEKE, en su frente muestra lucero con listón; 5) Macho entero color Bayo, con cabos negros en las cuatro patas, de seis años de edad aproximadamente, con condición corporal normal en escala de HENNEKE; 6) Hembra color zaino, con tatuaje en el brazo izquierdo en forma de dos "v" una de ellas invertida y una "S" en medio, de doce años de edad aproximadamente, con condición corporal normal en escala de HENNEKE; 7) Macho entero de color alazán, con tatuaje en el brazo izquierdo en forma de dos "v" una de ellas invertida y una "s" en medio, con dosalbo lateral izquierdo, de tres años de edad aproximadamente, con condición corporal moderadamente gordo en escala de HENNEKE, en la frente muestra lucero faja, con bebé y derrama; 8) Macho entero de color alazán, con tatuaje en el brazo izquierdo en forma de dos "v" una de ellas invertida y una "s" en medio, con microchip número 0484045200005660, de dos años de edad aproximadamente, con condición corporal normal en escala de HENNEKE, en su frente se muestra lucero listón y bebé; 9) Macho entero color alazán, con tatuaje en el brazo izquierdo en forma de dos "v" una de ellas invertida y una "s" en medio, con microchip número 0484045200005661, de dos años de edad aproximadamente, con condición corporal normal en escala de HENNEKE, en su frente se muestra lucerillo, cordón y lunar entre ollares.** Razón por la cual deberán manifestar lo que a su derecho convenga, ya que de no hacerlo **en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación,** ante el agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México**, los equinos mencionados causarán ABANDONO** a favor del Gobierno Federal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182 A del Código Federal de Procedimientos Penales. Se pone a su disposición en el mismo domicilio copia del acta y se le apercibe para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, o estas se realizaran por estrados. Lo anterior con fundamento en los artículos 181 párrafos primero y segundo, 182-A, 182-B párrafo primero, fracción II en relación con el 107 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, apartado A, inciso J de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, toda vez que existen indicios de que representan el producto y/o instrumento de actividades ilícitas, contempladas en leyes federales. -**CÚMPLASE**- -

Atentamente
Ciudad de México a 25 de octubre 6 de 2016.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud.
Lic. José Daniel Ramírez González
Rúbrica.

(R.- 440480)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro
EDICTO

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O QUIEN TENGA DERECHOS O INTERÉS JURÍDICO, que en fecha **(31) TREINTA Y UNO DE AGOSTO (2005) DE DOS MIL CINCO,** se decretó el aseguramiento precautorio del siguiente **INMUEBLE Y MENAJE:**

INMUEBLE

1) INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA LEYVA, NÚMERO 126, COLONIA SONORA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.

MENAJE

1) SALA DE TRES PIEZAS EN MADERA, TAPIZADA EN TELA CON SUS RESPECTIVOS COJINES.
2) COMEDOR FABRICADO EN MADERA, CONSISTENTE EN MESA CON SIETE SILLAS, ASIENTOS TAPIZADOS EN TELA Y UNA VITRINA DE TRES COMPARTIMENTOS, CON PUERTAS CON CRISTAL, ABATIBLES, DOS ABATIBLES EN MADERA Y TRES CAJONES CON DIMENSIONES DE 160 X 36 X 205 CM.
3) BASE PARA CAMA FABRICADA EN MADERA TAMAÑO KING SIZE, CON CAJONES LATERALES Y COLCHÓN.
4) CAMA FABRICADA EN MADERA, CONSISTENTE EN BASE Y CABECERA CON COLCHÓN.

SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O QUIEN TENGA DERECHOS O INTERÉS JURÍDICO, que en fecha **(04) CUATRO DE OCTUBRE (2005) DE DOS MIL CINCO,** se decretó el aseguramiento precautorio de los siguientes **INMUEBLES Y MENAJE:**

INMUEBLES

2) INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, ESQUINA CON CALLE A SERDÁN, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.

MENAJE

1) UN VENTILADOR DE LA MARCA MITEK.
2) UNA CAMA TAMAÑO MATRIMONIAL, CON SU RESPECTIVO COLCHÓN Y CABECERA.
3) UNA CÓMODA CON ESPEJO EN MADERA COLOR CAFÉ, EN MEDIDAS 1.80 X 0.40.
4) UNA SILLA EN MADERA COLOR ROJO.
5) UN CUADRO CON LITOGRAFÍA CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN MARÍA, DE MEDIDAS 0.40 X 0.50 CM.
6) UNA VITRINA EN MADERA BARNIZADA, EN COLOR NOGAL OSCURO, EN MEDIDAS 2.00 X 0.80 CM.
7) UN VENTILADOR DE LA MARCA MITEK, TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO.
8) UNA CAMA TAMAÑO MATRIMONIAL CON CABECERA, DOS BUROES Y DOS LÁMPARAS, EN MADERA COLOR CAFÉ.
9) UN TOCADOR EN MADERA BARNIZADO, EN COLOR NOGAL OSCURO, CON LUNA.
10) DOS TELÉFONOS DE LA MARCA TELMEX, EN MATERIAL PLÁSTICO, UNO COLOR HUESO Y OTRO COLOR GRIS, SIN MODELO VISSIBLE.
11) UN APARATO DIGITAL SATELITE RECEIVER, MARCA ZETIT, MODELO DTH310-7, COLOR NEGRO.
12) UNA CAMA TAMAÑO MATRIMONIAL, CON CABECERA, DOS BUROES, Y DOS LÁMPARAS, EN MADERA COLOR CAFÉ.
13) UNA SILLA EN MADERA.
14) UNA BASE PARA TELEVISIÓN EN MADERA, COLOR GUINDA CON DOS COMPARTIMENTOS DE 0.80 X 0.40 M.
15) UNA CÓMODA CON LUNA EN MADERA COLOR MIEL, EN MEDIDAS DE 1.60 X 1.00
16) CUATRO SILLAS MECEDORAS EN METAL, DE COLOR BLANCO.
17) UNA BICICLETA DE LA MARCA ZONIC, COLOR ROJO, TIPO DE SALTO, DE RODADA 24.
18) UNA PODADORA DE LA MARCA DECK & DECKER, MODELO MM575, EN COLOR ROJO.
19) UN JUEGO DE COMEDOR EN MADERA BARNIZADO EN COLOR NOGAL, COMPUESTO DE MESA EN MEDIDAS DE 1.20 X 2.00 M. CON OCHO SILLAS, TRINCHADOR CON VITRINA EN MEDIDAS 0.50 X 2.50 X 2.20 M DE ALTURA.
20) UN CUADRO EN MADERA DE LA ÚLTIMA CENA, EN METAL REPUJADO, DE MEDIDAS 1.00 X 0.90 M, CON MARCO EN MADERA COLOR COBRE.
21) UNA COLUMNA EN PIEDRA DE 0.40 X 0.50 M. EN COLOR HUESO, CON MACETA DE BARRO PINTADA EN DIFERENTES COLORES Y PLANTAS ARTIFICIALES.
22) TRES FIGURAS DECORATIVAS EN CRISTAL SOPLADO, COLOR BLANCO EN MEDIDAS DE 50 X 12 Y 15 X 50 CM.
23) UNA SALA DE TRES PIEZAS, EN MADERA COLOR NOGAL OSCURO, TAPIZADA EN TELA COLOR HUESO.
24) UNA MESA DE CENTRO EN MADERA Y CHAPA, BARNIZADA EN COLOR NOGAL OSCURO, EN MEDIDAS DE 0.50 X 1.20 M DE DIÁMETRO.
25) UNA MESA DE ESQUINA EN MADERA BARNIZADA, EN COLOR NOGAL OSCURO, EN MEDIDAS DE 60 X 50 CM. DE DIÁMETRO.

26) UNA LÁMPARA DE PIE EN MADERA BARNIZADA EN COLOR NOGAL OSCURO DE MEDIDAS 50 X 1.50 M. DE ALTURA DE 5 FOCOS.
27) UN CUADRO CON LA FOTOGRAFÍA DE UNA CASCADA, CON MARCO DE MADERA DE MEDIDAS 0.90 X 1.20 M.
28) UN REFRIGERADOR DE LA MARCA MABE, COLOR BLANCO, DE 9 PIES CÚBICOS.
29) UN DESAYUNADOR EN MADERA Y CUATRO SILLAS, ASIENTOS TAPIZADOS EN TELA PLANA COLOR BLANCO, CUBIERTA DE CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR, EN MEDIDAS DE 1.20 M. DE DIÁMETRO.

INMUEBLES

3) INMUEBLE UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO, NÚMERO 909, ENTRE LAS CALLES DE CORREGIDORA Y CINCO DE MAYO, COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.

MENAJE

1) UN ESCRITORIO EN MADERA BARNIZADA EN COLOR NOGAL OSCURO, EN FORMA DE ESCUADRA DE MEDIDAS 1.50 X 2.00 M. Y ARCHIVERO DE TRES CAJONES.
2) UNA TELEVISIÓN A COLOR DE LA MARCA PHILLIPS, MODELO 20CR.
3) DOS SILLAS TIPO SECRETARIALES, TAPIZADAS EN TELA DE COLOR VERDE, ESTAMPADAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLOR NEGRO.
4) UN TELÉFONO ALÁMBRICO DE LA MARCA TELMEX, MODELO DIGITAL SECRET ED10, COLOR HUESO.
5) SIETE FIGURAS EN MADERA BARNIZADAS EN COLOR NOGAL OSCURO, DOS FORMA DE ÁGUILA, DOS EN FORMA DE CABEZA DE LEONES, UNA FORMA DE ELEFANTE, UNA EN FORMA DE BÚHO Y UNA EN FORMA DE YAKI.
6) UNA SALA COMPUESTA DE TRES PIEZAS, TAPIZADA EN PIEL COLOR HUESO.
7) UNA MESA DE CENTRO EN MADERA, COLOR NATURAL, DE MEDIDAS DE 1.00 X 1.00 M.
8) UN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MARCA MIRAGE, MODELO REMOTE CONTROL MMS-3020.
9) UN CUADRO EN LITOGRAFÍA, EN FORMA DE COPA DORADA, EN MEDIDAS DE 1.00 X 1.20 M. CON MARCO DE MADERA EN COLOR DORADO.
10) SEIS FIGURAS, UNA EN FORMA DE ÁGUILA, OTRA EN FORMA DE MUJER, OTRA EN FORMA DE CARNERO, DOS EN FORMA DE CEBÚ, TODAS EN MATERIAL DE POLICROMATO.
11) UN ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO, CON MADERA CON CUBIERTA DE CHAPA, EN MEDIDAS DE 1.00 X 1.70 X 0.80 DE ALTURA, CON SEIS CAJONES.
12) UNA CÓMODA EN MADERA BARNIZADA EN COLOR NOGAL OSCURO, EN MEDIDAS DE 2.00 X 0.80 M.
13) DOS LIBREROS EN MADERA BARNIZADOS EN COLOR NOGAL OSCURO, EN MEDIDAS DE 0.40 X 1.00 X 2.00 DE ALTURA CADA UNO.
14) UN TELÉFONO ALÁMBRICO DE LA MARCA TELMEX.
15) UN CUADRO CON LA LITOGRAFÍA DE CENTRO AMÉRICA, CON MARCO EN MADERA COLOR DORADO, DE MEDIDAS 0.80 X 0.80 M.
16) TRES SILLAS EN MADERA BARNIZADAS EN COLOR NOGAL OSCURO, CON ASIENTO Y RESPALDO EN PIEL COLOR VINO.
17) UN MUEBLE DE MADERA EN FORMA DE MAPAMUNDI, CON COMPARTIMIENTO INTERIOR PARA COPAS DE CRISTAL, EN MEDIDAS DE 0.80 X 0.80 M DE ANCHO BARNIZADO EN COLOR NOGAL CLARO Y OSCURO, CON LA LEYENDA DE MADE IN ITALY.
18) UNA CREDENZA EN MADERA Y CHAPA, EN MEDIDAS 0.40 X 1.50 X 0.90 M DE ALTURA.
19) UN GENERADOR ELÉCTRICO DE LA MARCA GENERAC, MODELO 4000XL, COLOR ROJO.

INMUEBLES

4) PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “CAMPO LAS TIERRITAS”, UBICADO EN EL KILÓMETRO 169, DE LA CARRETERA FEDERAL OBREGÓN – NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.

SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O QUIEN TENGA DERECHOS O INTERÉS JURÍDICO, que en fecha **(08) OCHO DE JULIO (2010) DE DOS MIL DIEZ,** se decretó el aseguramiento precautorio del siguiente **INMUEBLE:**

INMUEBLE

5) INMUEBLE UBICADO EN CALLE EMPRENDEDORES, NÚMERO 10, COLONIA CENTRO VILLA SATÉLITE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA.

MENAJE

1) UN ANTECOMEDOR TUBULAR CON PLIANA, CUATRO SILLAS Y MESA EN FORMAICA.
2) UN REFRIGERADOR DE LA MARCA KENMORE, DE SEIS PIES.
3) UN COMEDOR EN MADERA DE SEIS SILLAS TAPIZADAS EN PLIANA CON APARADOR DE TRES PUERTAS Y DOS ENTREPAÑOS CON LUZ INTERIOR.
4) UNA SALA DE DOS PIEZAS, CON SILLONES DE DOS PLAZAS TAPIZADAS EN TELA.
5) UNA MESA DE CENTRO EN MADERA BARNIZADA Y DOS MESAS LATERALES DEL MISMO MATERIAL, SIENDO LA PRIMERA DE 1.20 POR .75 METROS Y LAS SEGUNDAS DE .60 POR .60 METROS.
6) DOS PEDESTALES EN MADERA TIPO CAOBA, DE 1 METRO X .30 METROS.
7) UN LOVE SEAT EN PIEL COLOR BEIGE.
8) UNA REPRODUCCIÓN DE UNA PINTURA DE .74 X 104 CM.

9) UNA LUNA DE 1 METRO X .80 MTS.

10) RECÁMARA COMPUESTA POR UNA CAMA TIPO QUEEN SIZE, TOCADOR CON LUNA DE 1.60 MTS. POR .45 MTS. POR .80 MTS. DOS BUROES TODO EN MADERA TIPO CAOBA.

11) UN TELEVISOR DE LA MARCA SONY DE 21" A CONTROL REMOTO.

12) UNA RECÁMARA COMPUESTA POR CAMA TAMAÑO KING SIZE, TOCADOR CON LUNA, DE 2.50 M POR .80 M, TODO EN MADERA TIPO CAOBA.

13) UN SILLÓN TIPO CHESLON DE MADERA Y TELA DE 1.48 MTS. POR .45 MTS POR .65 MTS.

14) RECÁMARA COMPUESTA POR UNA CAMA TIPO KING SIZE, TOCADOR CON LUNA DE 2.50 MTS. POR .45 MTS. POR .80 TODO EN MADERA TIPO CAOBA.

15) RECÁMARA COMPUESTA POR UNA CAMA TIPO QUEEN SIZE, TOCADOR CON LUNA DE 1.80 M POR .45 POR .80 MTS, TODO EN MADERA TIPO CAOBA.

16) UNA TELEVIÓN DE LA MARCA EMERSON, A COLOR DE 19".

17) UNA LAVADORA DE LA MARCA "WESTIN HOUSE", DOS VELOCIDADES, 16 CICLOS.

18) UNA SECADORA DE LA MARCA KENMORE, TIPO ELITE.

SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O QUIEN TENGA DERECHOS O INTERÉS JURÍDICO, que en fecha **(26) VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE (2005) DE DOS MIL CINCO,** se decretó el aseguramiento precautorio de los siguientes **INMUEBLES:**

INMUEBLES

6) INMUEBLE RÚSTICO DENOMINADO "RANCHO AGUA BLANCA", UBICADO EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26°53´05" NORTE 108°37´21" W, MUNICPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA.

7) INMUEBLE RÚSTICO DENOMINADO "RANCHO LOS POTRERILLOS", UBICADO EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26°53´27" NORTE 108°54´16" W, MUNICPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA.

SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O QUIEN TENGA DERECHOS O INTERÉS JURÍDICO, que en fecha **(11) ONCE DE JUNIO (2006) DE DOS MIL SEIS,** se decretó el aseguramiento precautorio de los siguientes **INMUEBLES:**

INMUEBLES

8) INMUEBLE UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, NÚMERO 910 A, LOTE 16, MANZANA 67, COLONIA PITIC, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA.

9) INMUEBLE RÚSTICO DENOMINADO "RANCHO KILOWATT", MISMO QUE SE UBICA EN CARRETERA N. 16, RUMBO AL PUEBLO DE PUERTO LIBERTAD, MUNICPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA.

SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O QUIEN TENGA DERECHOS O INTERÉS JURÍDICO, que en fecha **(21) VEINTIUNO DE JULIO (2005) DE DOS MIL CINCO,** se decretó el aseguramiento precautorio de los siguientes **INMUEBLES:**

INMUEBLES

10) INMUEBLE RÚSTICO DENOMINADO "RANCHO EL GUAYPARÍN", UBICADO EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 27°25´ NORTE 108°59´ OESTE, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA.

11) INMUEBLE RÚSTICO DENOMINADO "RANCHO EL MEZQUITE", UBICADO EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 27°23´ NORTE 109°14´ W, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA.

SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O QUIEN TENGA DERECHOS O INTERÉS JURÍDICO, que en fecha **(31) TREINTA Y UNO DE AGOSTO (2005) DE DOS MIL CINCO,** se decretó el aseguramiento precautorio de los siguientes **INMUEBLES Y MENAJE:**

INMUEBLES

12) INMUEBLE UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGÁR, NÚMERO 911, COLONIA SONORA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.

MENAJE

1) UN COMEDOR CON COCHO SILLAS DE MADERA, CON ASIENTO TAPIZADO EN TELA.

2) VITRINA FABRICADA EN MADERA, CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON CRISTAL, DOS PUERTAS ABATIBLES EN MADERA Y TRES CAJONES CENTRALES.

3) RECÁMARA FABRICADA EN MADERA CONSISTENTE EN CAMA INDIVIDUAL CON CABECERA Y COLCHÓN, DOS BUROES CON DOS CAJONES CADA UNO, UN TOCADOR CON SIETE CAJONES Y UNA PUERTA ABATIBLE, CON LUNA DE DIMENSIONES.

4) RECÁMARA FABRICADA EN MADERA CONSISTENTE EN CAMA KING SIZE, CON CABECERA Y COLCHÓN, DOS BUROES CON DOS CAJONES CADA UNO, UN TOCADOR CON SIETE CAJONES CON LUNA Y UNA CAJONERA CON CINCO COMPARTIMENTOS.

13) INMUEBLE UBICADO EN CALLE FRANCISCO R. ALMADA, NÚMERO 513 SUR, COLONIA VILLA ITSON, C.P. 85139, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA.

SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O QUIEN TENGA DERECHOS O INTERÉS JURÍDICO, que en fecha **(10) DIEZ DE SEPTIEMBRE (2005) DE DOS MIL CINCO,** se decretó el aseguramiento precautorio de los siguientes **INMUEBLES Y MENAJE:**

INMUEBLES

14) INMUEBLE UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO, NÚMERO 914, COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.

MENAJE

1) UNA SALA COMPUESTA DE TRES PIEZAS, SOFÁ, LOVE SEAT Y SILLÓN, TAPIZADOS EN TELA ESTAMPADA, LINEAL FLOREADO, CON MOLDURAS EN MADERA.

2) UNA MESA ESQUINERA DE 60 X 60 X60 CON PATAS.

3) UNA LÁMPARA DE MESA, BASE LATÓN DE CRISTAL DE DOS FOCOS Y PANTALLA.

4) UNA MESA DE CENTRO CUADRADA, CUBIERTA EN CHAPA Y CEDRO DE MADERA.

5) UNA MESA DE SERVICIO DE BAR, EN MADERA DE 70 X 50 X 80.

6) UN CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE AUDIO, EN MADERA DE 140 X 46 X 170.

7) UN EQUIPO DE AUDIO CON AMPLIFICADOR, SINTONISADOR, DOBLE CASSETTERA, ECUALIZADOR, REPRODUCTOR DE CD, TORNAMESA Y DOS BOCINAS.

8) COMEDOR PARA OCHO COMENSALES CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, EN MADERA AL PARECER DE LAS DENOMINADAS PRECIOSAS.

9) UNA VITRINA, TRINCHADOR DE MADERA.

10) UN ESQUINERO EN MADERA Y CRISTAL.

11) UN CUADRO AL ÓLEO, NATURALEZA MUERTA, FRUTERO EN VENTANAL, FIRMADO POR “MILÁN”, CON MARCO.

12) UN HORNO DE MICROONDAS.

13) UN ANTECOMEDOR PARA SEIS PERSONAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS EN MADERA.

14) UNA MESITA ESQUINERO DE MADERA.

15) LOVE SEAT Y DOS SILLONES, EN MADERA TAPIZADOS EN TELA FLORAL.

16) UN RELOJ CU-CU EN MADERA.

17) UNA MESA ESQUINERO EN MADERA CUADRADA.

18) UN CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE T.V. EN MADERA CON TRES CAJONES.

19) UN TELEVISOR.

20) UNA MESITA PARA TELÉFONO CON BASE TIPO ARPA EN MADERA.

21) UN REFRIGERADOR.

22) UNA CAMA TAMAÑO MATRIMONIAL CON CAJÓN Y COLCHÓN HOTELEROS, DOS BUROES Y CABECERA. UN TOCADOR CON LUNA, HACIENDO JUEGO CON CAJONERA, TODO EN MADERA DE PINO DE PRIMAVERA.

23) UN TELEVISOR.

24) MESA CON RUEDAS PARA SERVICIO DE BAR.

25) UNA BASE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA TAMAÑO KING SIZE, CON COLCHÓN HOTELERO, DOS BUROES EN MADERA.

26) DOS LÁMPARAS.

27) CAJONERA EN MADERA.

28) UNA BASE MATRIMONIAL EN MADERA DE PINO DE SEGUNDA, COLCHÓN ORTOPÉDICO, DOS BUROES, CABECERA Y TOCADOR CON LUNA.

29) UN CAJÓN Y COLCHÓN TAMAÑO KING SIZE, HOTELERO, CON DOS CAJONERAS HACIÉNDOLAS BUROES, CON TOCADOR Y LUNA Y MUEBLE PARA TELEVISIÓN.

30) UN DESPACHADOR DE AGUA.

15) INMUEBLE UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, SIN NÚMERO, CASI ESQUINA CON CALLE RÍO BALSAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.

Dichos bienes son afectos a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2005 Notificación realizada de conformidad con lo previsto por el numeral 182-B, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales; con el apercibimiento que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes asegurados causarán abandono a favor del Gobierno Federal, como lo previene el diverso numeral 182-A, último párrafo del mismo Código Adjetivo invocado. Lo anterior a efecto de no enajenar o gravar los bienes asegurados en comento, y para manifestar lo que a derecho convenga, en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 75, primer piso, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06300, lugar en donde podrá imponerse las constancias conducentes al citado aseguramiento.

“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Ciudad de México a 12 de octubre de 2016
La C. Agente del Ministerio Público de la Federación
adscrita a la U.E.I.D.M.S de la S.E.I.D.O
Lic. Aurelia Urzúa Domínguez
Rúbrica.

(R.- 440479)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/D/10/2016/R/11/138

LUIS ALBERTO CASTELLANOS ÁVILA. En virtud que no fue localizado en el domicilio registrado en el expediente **DGR/D/10/2016/R/11/138**, ni en el proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la entidad fiscalizada, agotando los medios posibles para conocer su domicilio, con fundamento en los artículos 35, fracción III, 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 64 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, por acuerdo del 24 de octubre de 2016, se ordenó su citación por edictos por la conducta presuntamente irregular atribuida en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, toda vez que omitió vigilar el cumplimiento del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número MCB-FIDEM-001-2011/LS de 6 de diciembre de 2011, suscrito entre el citado Ayuntamiento y Benito Godoy Vargas, financiado con recursos del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios, toda vez que no se proporcionó la documentación comprobatoria que acreditara la amortización de la totalidad del anticipo otorgado con cargo a dicho contrato; infringiendo los artículos 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 109-A, fracción II, de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y Cláusula Quinta del citado Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. Por lo anterior, usted ocasionó presumiblemente un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de **$1´677,405.93**, cantidad que se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones, así como un perjuicio constituido por los gastos financieros que se generen en términos de lo dispuesto por el último párrafo de la Cláusula Quinta del referido contrato. En consecuencia, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009; 2°, relativo a la Dirección General de Responsabilidades y 34, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, a las **diez horas del día veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis**, y manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibido que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para hacerlo y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la Ciudad de México, de lo contrario las que se realicen posteriormente, inclusive las de carácter personal, se realizarán por rotulón que se fijará en los estrados que se encuentran visibles en la entrada de las oficinas de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016.
El Director General
Lic. Víctor José Lazcano y Beristain.
Rúbrica.

(R.- 440294)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/D/10/2016/R/11/138

ANTONIO CALZADA VÁZQUEZ. En virtud que no fue localizado en el domicilio registrado en el expediente **DGR/D/10/2016/R/11/138**, ni en el proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la entidad fiscalizada, con fundamento en los artículos 35, fracción III, 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 64 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, por acuerdo del 24 de octubre de 2016 se ordenó su citación por edictos por la conducta presuntamente irregular atribuida en su carácter de Residente de Obra del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, toda vez que omitió supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución y desarrollo de los trabajos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número MCB-FIDEM-001-2011/LS de 6 de diciembre 2011, suscrito entre ese H. Ayuntamiento y Benito Godoy Vargas, financiado con recursos del

Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios; toda vez que no se proporcionó la documentación comprobatoria que acreditara la amortización de la totalidad del anticipo otorgado con cargo a dicho contrato; infringiendo los artículos 50 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, fracciones I y VI, y 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la Cláusula Quinta del referido Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. Por lo anterior, usted ocasionó presumiblemente un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de **$1´677,405.93**, cantidad que se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones, así como un perjuicio constituido por los gastos financieros que se generen en términos de lo dispuesto por el último párrafo de la Cláusula Quinta del referido contrato. En consecuencia, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009; 2°, relativo a la Dirección General de Responsabilidades y 34, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, a las **doce horas del día veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis**, y manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibido que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para hacerlo y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la Ciudad de México, de lo contrario las que se realicen posteriormente, inclusive las de carácter personal, se realizarán por rotulón que se fijará en los estrados que se encuentran visibles en la entrada de las oficinas de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a veinticinco de octubre de 2016.
El Director General
Lic. Víctor José Lazcano y Beristain.
Rúbrica.

(R.- 440288)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/D/10/2016/R/11/138

HERMILO DAVID RODRÍGUEZ. En virtud que no fue localizado en el domicilio registrado en el expediente **DGR/D/10/2016/R/11/138**, ni en el proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la entidad fiscalizada, con fundamento en los artículos 35, fracción III, y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 64 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, por acuerdo del 24 de octubre de 2016, se ordenó su citación por edictos por la conducta presuntamente irregular atribuida en su carácter de Supervisor de Obra del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, toda vez que omitió llevar el control del avance financiero de la obra respecto de la amortización de la totalidad del anticipo otorgado con cargo al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número MCB-FIDEM-001-2011/LS de 6 de diciembre 2011, suscrito entre el citado Ayuntamiento y Benito Godoy Vargas, financiado con recursos del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios; infringiendo los artículos 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 115, fracción XII y 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y Cláusula Quinta del referido Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. Por lo anterior, usted ocasionó presumiblemente un daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de **$1´677,405.93**, cantidad que se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones, así como un perjuicio constituido por los gastos financieros que se generen en términos de lo dispuesto por el último párrafo de la Cláusula Quinta del referido contrato. En consecuencia, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009; 2°, relativo a la Dirección General de Responsabilidades y 34, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de

México, a las **trece horas con treinta minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis**, y manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibido que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para hacerlo y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la Ciudad de México, de lo contrario las que se realicen posteriormente, inclusive las de carácter personal, se realizarán por rotulón que se fijará en los estrados que se encuentran visibles en la entrada de las oficinas de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016.
El Director General
Lic. Víctor José Lazcano y Beristain.
Rúbrica.

(R.- 440291)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/D/10/2016/R/11/138

BENITO GODOY VARGAS. En virtud que no fue localizado en el domicilio registrado en el expediente **DGR/D/10/2016/R/11/138**, ni en el proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la entidad fiscalizada, con fundamento en los artículos 35, fracción III, 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 64 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, por acuerdo del 24 de octubre de 2016, se ordenó su citación por edictos por la conducta presuntamente irregular atribuida en su carácter de Contratista, toda vez que omitió amortizar la cantidad de $1´677,405.93, saldo restante del importe que por concepto de anticipo le fue otorgado al amparo del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número MCB-FIDEM-001-2011/LS de 6 de diciembre de 2011, que suscribió con el citado Ayuntamiento, financiado con recursos del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios; infringiendo los artículos 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la Cláusula Quinta del referido Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número MCB-FIDEM-001-2011/LS. Por lo anterior, usted ocasionó presumiblemente un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de **$1´677,405.93**, cantidad que se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones, así como un perjuicio constituido por los gastos financieros que se generen en términos de lo dispuesto por el último párrafo de la Cláusula Quinta del referido contrato. En consecuencia, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009; 2°, relativo a la Dirección General de Responsabilidades y 34, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, a las **dieciséis horas con treinta minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis**, y manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibido que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para hacerlo y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la Ciudad de México, de lo contrario las que se realicen posteriormente, inclusive las de carácter personal, se realizarán por rotulón que se fijará en los estrados que se encuentran visibles en la entrada de las oficinas de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016.
El Director General
Lic. Víctor José Lazcano y Beristain
Rúbrica.

(R.- 440292)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Oficio: DGR/B/B2/3823/2016
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

PEDRO CUAUHTÉMOC ROQUE MACHADO. En virtud que no fue localizado en el domicilio registrado en el expediente **DGR/B/09/2016/R/11/132**, ni en los proporcionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y por el Servicio de Administración Tributaria, agotando los medios posibles para conocer su domicilio, con fundamento en los artículos 35, fracción III, y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria conforme al artículo 64 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, por acuerdo de fecha 24 de octubre de 2016, **se ordenó notificar por edictos** al **C. PEDRO CUAUHTÉMOC ROQUE MACHADO**, mediante publicaciones por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico "La Prensa", para que comparezca personalmente ante esta Dirección General de Responsabilidades, a la audiencia a celebrarse en las oficinas sitas en Av. Coyoacán 1501, primer piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, **a las 11:00 horas del 29 de noviembre de 2016**; a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos, apercibido que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputa y por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, resolviéndose con los elementos que obren en el expediente del Procedimiento citado al rubro. En el acuerdo de inicio de 26 de septiembre de 2016, se señala que **PEDRO CUAUHTÉMOC ROQUE MACHADO**: "Omitió proporcionar asistencia técnica, así como el apoyo adecuado al grupo de trabajo denominado "El Trapichito" para la correcta comprobación de los recursos otorgados a través del Programa de la Mujer en el Sector Agrario para la ejecución del proyecto productivo número PM-CHIS-11-01624-015353 denominado "Cultivo de Gladiolo", ya que el referido grupo no acreditó haber realizado la operación comercial que se señala en la factura número 0209 de 30 de noviembre de 2011"; causando un daño por la cantidad de **$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)**. Se le pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 18:30 horas, en el domicilio citado de la Dirección General de Responsabilidades.

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2016.
El Director General de Responsabilidades
Lic. Víctor José Lazcano y Beristain
Rúbrica.

(R.- 440341)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/C/08/2016/R/11/066

PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V., en el procedimiento resarcitorio DGR/C/08/2016/R/11/066, por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó su notificación por edictos, por omisiones presuntamente irregulares atribuidas a dicha empresa, en su carácter de Contratista, consistentes en: Recibir el pago de la factura 7571, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, por la cantidad de $30'278,080.61 (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS 61/100 M.N.), por el concepto de "pago por ajuste de indirecto y financiamiento aplicado a las estimaciones generadas del contrato IIIS-EST-COP-005-10, del Convenio IIIS-EST-COP-005-10-1 y Convenio IIIS-EST-COP-005-10-2, relativos a los trabajos de construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento "Estela de Luz", a ubicarse en paseo de la Reforma a la altura de las rejas de los leones del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, Distrito Federal", por parte de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.,

no obstante que el cálculo que realizó a través del Dictamen de Conciliación del Indirecto y Financiamiento del Contrato IIIS-EST-COP-005-10, de fecha 3 de octubre de 2012, en conjunto con I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., no se apegó a las consideraciones emitidas sobre el particular por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función Pública, en el oficio número UNCP/309/TU/0418/2012, del 13 de julio de 2012, ni realizó el reintegro de la misma conforme a las disposiciones legales. Por lo anterior, ocasionó presumiblemente un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $30'278,080.61 (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS 61/100 M.N.), y que corresponde al importe de la conducta irregular descrita con antelación; por lo que conforme a los artículos 57, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009; en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2o, relativo a la Dirección General de Responsabilidades, y 34, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se le cita para que comparezca por conducto de su representante legal, a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán, número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, en la Ciudad de México, a las 9:30 horas del 24 de noviembre 2016, y manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibido que de no comparecer por medio de su representante legal sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos y se resolverá con los elementos que obran en el expediente, asimismo, se le previene a fin de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la Ciudad de México, sede de la Auditoría Superior de la Federación, de lo contrario las que sean necesarias realizar posteriormente, inclusive las de carácter personal, se llevarán a cabo a través de rotulón que se fijará en el pizarrón que se encuentra visible en la entrada de las oficinas de esta Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.
El Director General
Lic. Víctor José Lazcano y Beristain.
Rúbrica.

(R.- 440381)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/D/08/2016/R/11/088

La Paz Amable, S.C. de R.L. En el procedimiento resarcitorio **DGR/D/08/2016/R/11/088** se ordenó su notificación por edictos ya que la presunta irregularidad que se le atribuye, consiste en que omitió comprobar la aplicación del apoyo recibido con cargo al Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que recibió en virtud del convenio de concertación que suscribió con SAGARPA, a través de Financiera Rural el 30 de diciembre de 2011, ya que solo exhibió 4 facturas y 12 listas de raya que comprueban un importe total de $968,001.00, aplicado en conceptos autorizados en el Paquete Tecnológico Establecimiento y Mantenimiento Pre-productivo de Hule, elaborado por el INIFAP, por lo que subsiste un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $975,362.10, más el perjuicio constituido por los productos financieros generados, que se actualizarán para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2°, en lo relativo a la Dirección General de Responsabilidades; 34, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el D.O.F el 29 de abril de 2013, en relación con los artículos PRIMERO Y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, a las **diez horas del cinco de diciembre de dos mil dieciséis**, a fin de que manifieste por conducto de su representante legal o por quien acredite tener facultades suficientes para ello, lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibida que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos imputados y por

precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y formular alegatos y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; asimismo deberá presentar al momento de la audiencia, identificación oficial, vigente y con fotografía; y además, se le requiere para que señale domicilio ubicado en esta ciudad, sede de la Auditoría Superior de la Federación, para que se le hagan las notificaciones que deban ser personales, apercibida de que en caso de omisión, se le realizarán por rotulón que se fijará en los estrados de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

El Director General

Lic. Víctor José Lazcano y Beristain

Rúbrica.

(R.- 440250)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/D/08/2016/R/11/088

Productores de Hule de la Región El Malota, S.P.R. de R.L. En el procedimiento resarcitorio **DGR/D/08/2016/R/11/088** se ordenó su notificación por edictos ya que la presunta irregularidad que se le atribuye, consiste en que omitió comprobar la aplicación del apoyo recibido con cargo al Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que recibió en virtud del convenio de concertación que suscribió con SAGARPA, a través de Financiera Rural el 29 de diciembre de 2011, ya que el beneficiario exhibió un recibo expedido por Planta Comercializadora Látex de Tezonapa S.P.R. de R.L. de C.V.; que no reúne los requisitos fiscales, considerando que la referida empresa expide facturas, por lo que, toda vez que el beneficiario no acreditó la correcta aplicación de la totalidad de los recursos económicos federales por la cantidad de $298,379.00, se hace presumible la existencia de un daño a la Hacienda Pública Federal por este monto, más el perjuicio constituido por los productos financieros generados, que se actualizarán para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2°, en lo relativo a la Dirección General de Responsabilidades; 34, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el D.O.F el 29 de abril de 2013, en relación con los artículos PRIMERO Y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, a las **trece horas del cinco de diciembre de dos mil dieciséis**, a fin de que manifieste por conducto de su representante legal o por quien acredite tener facultades suficientes para ello, lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibida que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos imputados y por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y formular alegatos y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; asimismo deberá presentar al momento de la audiencia, identificación oficial, vigente y con fotografía; y además, se le requiere para que señale domicilio ubicado en esta ciudad, sede de la Auditoría Superior de la Federación, para que se le hagan las notificaciones que deban ser personales, apercibida de que en caso de omisión, se le realizarán por rotulón que se fijará en los estrados de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

El Director General

Lic. Víctor José Lazcano y Beristain

Rúbrica.

(R.- 440252)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/D/08/2016/R/11/088

José Rosales García. En el procedimiento resarcitorio **DGR/D/08/2016/R/11/088**, se ordenó su notificación por edictos, debido a una presunta irregularidad que se le atribuye, consistente en omitir comprobar la aplicación del apoyo recibido con cargo al Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que recibió en virtud del convenio de concertación que suscribió con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de Financiera Rural el 13 de diciembre de 2011, ya que para acreditar la aplicación de los recursos públicos federales, exhibió un recibo sin requisitos fiscales, el cual no es un documento idóneo para comprobar el correcto ejercicio del subsidio recibido, quedando subsistente un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por el monto de $256,460.00, más el perjuicio constituido por los productos financieros generados, que se actualizarán para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2°, en lo relativo a la Dirección General de Responsabilidades; 34, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el D.O.F. el 29 de abril de 2013, en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, a las **catorce horas del cinco de diciembre de dos mil dieciséis**, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibido que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos imputados y por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y formular alegatos y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; asimismo, deberá presentar al momento de la audiencia, identificación oficial, vigente y con fotografía; y además, se le requiere para que señale domicilio ubicado en esta ciudad, sede de la Auditoría Superior de la Federación, para que se le hagan las notificaciones que deban ser personales, apercibida de que en caso de omisión, se le realizarán por rotulón que se fijará en los estrados de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 15:00 y 16:30 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil dieciséis.
El Director General
Lic. Víctor José Lazcano y Beristain
Rúbrica.

(R.- 440255)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento: DGR/D/08/2016/R/11/088

Isaac Espinosa Rodela. En el procedimiento resarcitorio **DGR/D/08/2016/R/11/088**, se ordenó su notificación por edictos, ya que la presunta irregularidad que se le atribuye, consiste en que omitió comprobar la aplicación del apoyo recibido con cargo al Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que recibió en virtud del convenio de concertación que suscribió con la SAGARPA, a través de Financiera Rural el 27 de diciembre de 2011, ya que para acreditar la aplicación de los recursos públicos federales, se exhibió 1 comprobante que amparan la cantidad de $2,550,884.00; sin embargo no reúne requisitos fiscales, por lo que no es un documento idóneo para acreditar o comprobar la aplicación del recurso recibido, quedando subsistente un presunto daño a la

Hacienda Pública Federal por el monto de $604,500.80 más el perjuicio constituido por los productos financieros generados, que se actualizarán para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2°, en lo relativo a la Dirección General de Responsabilidades; 34, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el D.O.F. el 29 de abril de 2013, en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, a las **doce horas del cinco de diciembre de dos mil dieciséis**, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibido que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos imputados y por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y formular alegatos y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; asimismo, deberá presentar al momento de la audiencia, identificación oficial, vigente y con fotografía; y además, se le requiere para que señale domicilio ubicado en esta ciudad, sede de la Auditoría Superior de la Federación, para que se le hagan las notificaciones que deban ser personales, apercibida de que en caso de omisión, se le realizarán por rotulón que se fijará en los estrados de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 15:00 y 16:30 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

El Director General

Lic. Víctor José Lazcano y Beristain

Rúbrica.

(R.- 440256)

Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Responsabilidades
Procedimiento DGR/D/08/2016/R/11/088

Silvestre Pantoja Pioquinto. En el procedimiento resarcitorio **DGR/D/08/2016/R/11/088**, se ordenó su notificación por edictos, ya que la presunta irregularidad que se le atribuye, consiste en que omitió comprobar la aplicación del apoyo recibido con cargo al Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que recibió en virtud del convenio de concertación que suscribió con la SAGARPA, a través de Financiera Rural el 29 de diciembre de 2011, ya que se pretendió acreditar la correcta aplicación, con 2 comprobantes que suman un importe de $268,534.00 de los cuales uno de ellos es un recibo por la cantidad de $242,972.00.00, sin embargo carece de requisitos fiscales, por lo que no es un documento idóneo para acreditar o comprobar la aplicación del recurso recibido, el otro documento exhibido se trata de una nota de venta sin requisitos fiscales que ampara la cantidad de $25,562.00, quedando subsistente un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por el monto de $14,337.40 más el perjuicio constituido por los productos financieros generados, que se actualizarán para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 57, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2°, en lo relativo a la Dirección General de Responsabilidades; 34, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el D.O.F. el 29 de abril de 2013, en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; se le cita para que comparezca personalmente a la audiencia a celebrarse en esta Dirección General de Responsabilidades, sita en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, a las **once horas del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis**, a fin de que

manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos; apercibido que de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos imputados y por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y formular alegatos y se resolverá con los elementos que obran en el expediente; asimismo, deberá presentar al momento de la audiencia, identificación oficial, vigente y con fotografía; y además, se le requiere para que señale domicilio ubicado en esta ciudad, sede de la Auditoría Superior de la Federación, para que se le hagan las notificaciones que deban ser personales, apercibida de que en caso de omisión, se le realizarán por rotulón que se fijará en los estrados de esta Dirección General de Responsabilidades. Se pone a la vista para su consulta el expediente mencionado, en días hábiles de 9:00 a 15:00 y 16:30 a 18:30 horas.

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

El Director General

Lic. Víctor José Lazcano y Beristain

Rúbrica.

(R.- 440266)

ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES, A.C.

CAMARA NACIONAL HOTELERA®

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los estatutos que rigen a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C., se convoca a sus afiliados a la LXXV Asamblea General Ordinaria y XXI Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional Hotelera®, que tendrán lugar en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, del 30 de noviembre al 02 de diciembre del año 2016 en el Hotel Quinta Real Villahermosa, sita en Paseo Usumacinta, número 1402, Col. La Choca C.P. 86035. La Asamblea se considerará legalmente instalada, cualquiera que sea el número de socios presentes, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Jueves 01 de diciembre, 10:00 horas

1.- Lista de asistencia.

2.- Nombramiento de escrutadores.

3.- Lectura de la convocatoria a la Asamblea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

4.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

5.- Lectura y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria.

6.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la LXXIV Asamblea General Ordinaria y del acta de la XX Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional Hotelera, A. C., celebradas en la ciudad de Tepic, Nayarit, del 25 al 27 de noviembre de 2015.

7.- Informe de presidencia.

8.- Informe de tesorería.

9.- Informe de la junta de vigilancia.

10.- Elección del Comité Ejecutivo Nacional 2016-2018.

11.- Informe de comisiones.

12.- Designación de sede para la celebración de la LXXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C., y de la XXII Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional Hotelera, A.C.

13.- Nombramiento de delegado para la protocolización de las actas de las citadas LXXV y XXI, Asambleas Generales Ordinarias.

14.- Asuntos Generales.

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2016.

Presidente	Secretario
Ing. Rafael García González	**Ing. Javier Torres Hernández**
Rúbrica.	Rúbrica.

(R.- 440649)

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad
ARTURO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
VS.
HUGO FERNANDO CASTILLO DE LA TORRE
M. 1091012 LOS CAMPECHANOS DE DON TORIBIO
Exped. P.C. 2994/2015 (C-898) 27208
Folio 36619
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

HUGO FERNANDO CASTILLO DE LA TORRE.

Por escrito presentado en esta Dirección el 23 de noviembre de 2015, al cual recayó el folio de entrada **027208,** por Edgar Burciaga Sánchez, apoderado de ARTURO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario citado al rubro.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a la parte demandada, el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al día en que aparezca esta publicación, para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su contra y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no dar contestación a la misma, una vez transcurrido el término señalado, este Instituto emitirá la resolución administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para su publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Atentamente
2 de septiembre de 2016
El Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad
Fernando Soler Aguilar
Rúbrica.

(R.- 440671)

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Nulidades
ESTUDIO NOMAD MX, S.A. DE C.V.
VS.
ERIC EDILBERTO VALDEZ GÓMEZ
M. 976846 NOMADAS Y DISEÑO
Exped. P.C. 1189/2016(C-341)12064
Folio: 34398
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

ERIC EDILBERTO VALDEZ GÓMEZ.

Por escrito presentado en este Instituto el día 17 de mayo de 2016, con folio de entrada 012064, signado por OLIVER BECKER RAMÍREZ, apoderado de ESTUDIO NOMAD MX, S.A. DE C.V., solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario 976846 NOMADAS Y DISEÑO, propiedad de ERIC EDILBERTO VALDEZ GÓMEZ.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a la parte demandada ERIC EDILBERTO VALDEZ GÓMEZ; el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente en el que aparezca esta publicación, para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su contra y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida de que no dar contestación a la misma, una vez transcurrido el término señalado, este Instituto emitirá la resolución administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para su publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Atentamente
18 de agosto de 2016
El Coordinador Departamental de Nulidades
Roberto Díaz Ramírez
Rúbrica.

(R.- 440682)

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Normatividad
Dirección General de Autorizaciones Especializadas
Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento
Dirección General de Supervisión de Uniones de Crédito
Oficio Núm. 311-112400/2016
Exp. Núm. CNBV 311.311.25 (579 U-670) "2016-10-11" (9)

Asunto: Se modifican los términos de la autorización para operar como Unión de Crédito otorgada a esa sociedad.

VALORA UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.
Boulevard Venustiano Carranza No. 2665-7
Colonia República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila
At'n.: Lic. JORGE VERDUZCO ROSÁN GONZÁLEZ
Delegado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de enero de 2016

Nos referimos al escrito presentado el 18 de agosto del año en curso por esa sociedad, en cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio 311-112223/2016 de fecha 19 de julio de 2016, mediante el cual remiten a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) copia certificada de la escritura pública número 138 de fecha 1 de agosto de 2016, otorgada ante la fe del licenciado Alfonso García Rendón, Notario Público número 40 de la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza e inscrita en el Registro Público de ese Estado el 2 de agosto de 2016, a través de la que se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de esa sociedad celebrada el día 18 de enero de 2016, en la que se resolvió, entre otros: (i) el cambio de denominación de **Unión de Crédito Agropecuaria, Comercial e Industrial del Norte de Nuevo León, S.A. de C.V.,** por la de **Valora Unión de Crédito, S.A. de C.V**.; (ii) el cambio de domicilio social al municipio de Saltillo en el Estado de Coahuila de Zaragoza y (iii) el aumento del capital social autorizado.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley de Uniones de Crédito, esta Comisión modifica el punto SEGUNDO, fracciones I a III de la autorización para organizarse y operar como Unión de Crédito que le fue otorgada a esa sociedad, con oficio número 601-II-29891 de fecha 30 de junio de 1993, para quedar en los siguientes términos:

"SEGUNDO.-……

I.- La denominación de la Sociedad será "Valora Unión de Crédito" y esta denominación se usará seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable, o de sus abreviaturas, S.A. de C.V.

II.-El capital social autorizado será de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.), representado por 960,000 acciones Serie "A" correspondientes al capital fijo sin derecho a retiro y 40,000 acciones Serie "B" que integran el capital variable con derecho a retiro, todas ellas con un valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada una.

III.- El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Saltillo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza."

Asimismo, con fundamento en los artículos 14, penúltimo párrafo y 78, primer párrafo de la Ley de Uniones de Crédito y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se les requiere para que informen a esta Autoridad la fecha de la publicación que realice en el Diario Oficial de la Federación del presente oficio, en un plazo de diez días hábiles contado a partir de la fecha de la referida publicación, la cual deberá tramitarse dentro de los quince días posteriores a la fecha de recepción del presente oficio.

Lo anterior se comunica con fundamento en los preceptos legales antes invocados, así como en lo dispuesto por los artículos 12, 15, primer párrafo, 20, fracción III, 41, fracciones I y III, y 58 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 12, fracciones I, incisos 1) y 4) y II, incisos 31) y 32), y 37, fracciones I, inciso 2) y VI, inciso 26) del Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la propia Comisión.

Atentamente,
Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.

Directora General de
Autorizaciones Especializadas
Lic. Erika Cristina Alvarado Fernández
Rúbrica.

Directora General de Supervisión de
Uniones de Crédito
Lic. Cecilia Teresa Mondragón Lora
Rúbrica.

(R.- 440636)

Secretaría de Economía

Dirección General de Comercio Exterior

CONVOCATORIA

La Secretaría de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción V, 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior; 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, y 27 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional para asignar el cupo establecido en el Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2012 y sus reformas del 2 de julio y 16 de noviembre de 2012, conforme a lo siguiente:

No. de Licitación (1)	**Participantes (2)**	**Fracciones arancelarias (3)**	**Descripción del cupo (4)**	**País de Origen (5)**	**Unidad de medida (6)**	**Cantidad a licitar (7)**	**Monto máximo adjudicable por participante (8)**	**Fecha y hora de la licitación (9)**
002/2017	Personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos	0904.21.01 0904.21.99 0904.22.01 0904.22.99	Chiles Secos (páprika)	República del Perú	Kilogramo	4,900,000	490,000	02 de diciembre de 2016 15:00 horas.

Las bases de la licitación son gratuitas y estarán a disposición de los interesados el 11 de noviembre de 2016 y en los días subsecuentes, en todas las delegaciones y subdelegaciones federales de la Secretaría de Economía, de las 9:00 a las 14:00 horas, así como en la página de Internet del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior: www.siicex.gob.mx, en horario continuo.

El registro de ofertas se llevará a cabo a partir de una hora antes y hasta la hora exacta fijada para el proceso de adjudicación, los cuales se efectuarán en el día y horario señalados en el cuadro anterior, en la sala de Exportadores de la Secretaría de Economía, ubicada en Avenida Insurgentes Sur Nº 1940, Colonia Florida, Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México.

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2016.

El Director General de Comercio Exterior

Juan Díaz Mazadiego

Rúbrica.

(R.- 440597)